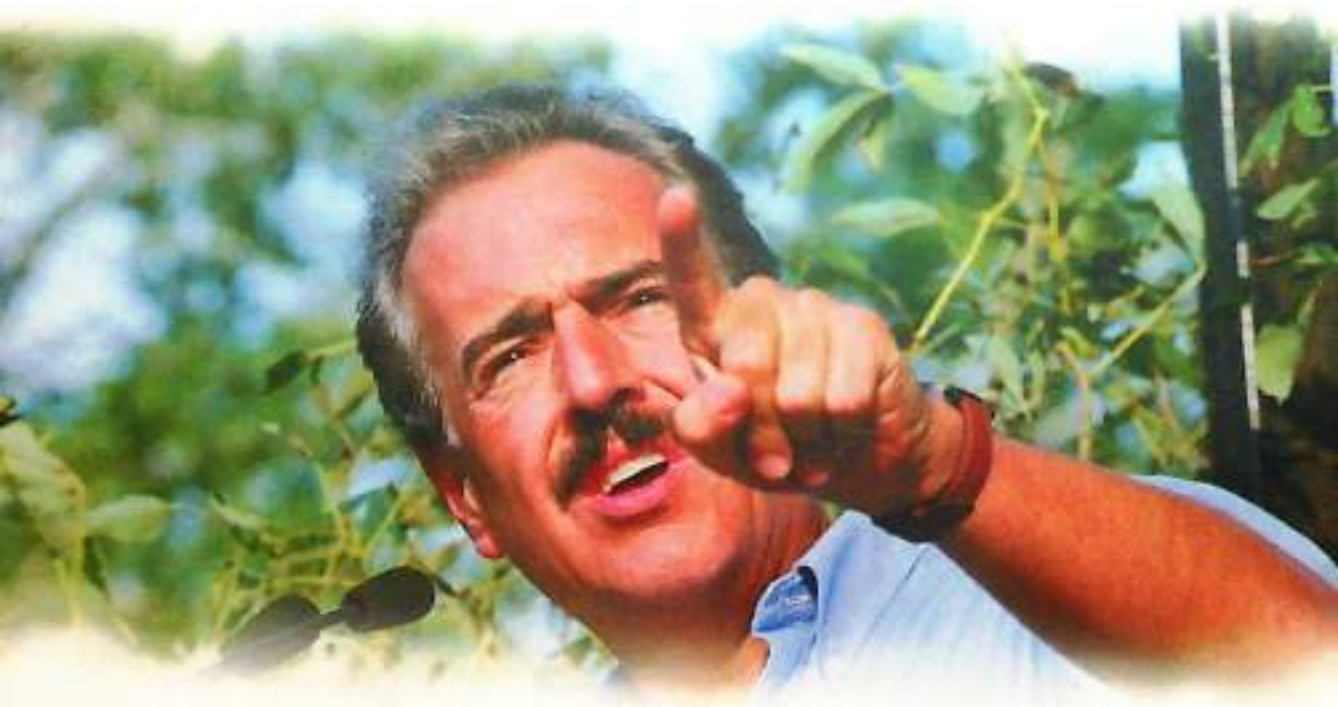


LA PALABRA BAJO FUEGO

PRÓLOGO DE BILL CLINTON



ANDRÉS PASTRANA

CON LA COLABORACIÓN DE CAMILO GÓMEZ

 Planeta

ANDRÉS PASTRANA ARANGO
ocupó la Presidencia de la República de
Colombia entre 1998 y 2002.

Se graduó como doctor en Leyes en
la Universidad del Rosario de Bogotá,
donde obtuvo maestría en Derecho Pú-
blico. Estudió en el Centro para Asun-
tos Internacionales de la Universidad
de Harvard.

Concejal y presidente del Concejo
de Bogotá. Primer alcalde de la capital
colombiana elegido por voto popular,
en junio de 1988. Senador de la Re-
pública entre 1991 y 1993. En la ac-
tualidad ocupa la Vicepresidencia de
la Internacional Demócrata de Centro
(IDC) y es miembro del Consejo Di-
rectivo de la Fundación Carolina de
España.

Ha sido distinguido en dos opor-
tunidades con el Premio Internacional
de Periodismo Rey de España (1985 y
1987), así como con los premios nacio-
nales Simón Bolívar (1987) y Círculo
de Periodistas de Bogotá (1987).

LA PALABRA BAJO FUEGO

Andrés Pastrana Arango

LA PALABRA BAJO FUEGO

Andrés Pastrana Arango

CON LA COLABORACIÓN
DE CAMILO GÓMEZ

© 2005, Andrés Pastrana Arango
© 2005, Editorial Planeta Colombiana S. A.
Calle 73 N.º 7-60, Bogotá

Fotografías de los álbumes personales del autor

Colombia: www.editorialplaneta.com.co
Venezuela: www.editorialplaneta.com.ve
Ecuador: www.editorialplaneta.com.ec

ISBN: 958-42-1319-9

Primera edición: agosto de 2005

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Todos los derechos reservados.

Impresión y encuadernación: Quebecor World Bogotá S. A.
Impreso en Colombia

Contenido

AGRADECIMIENTOS	11
PRÓLOGO.....	13
INTRODUCCIÓN.....	17
CAPÍTULO I: ATAQUE CONTRA LA CASA DE NARIÑO	21
CAPÍTULO II: EL CAMINO HACIA LA PRESIDENCIA.....	25
CAPÍTULO III: EL PAÍS QUE ENCONTRÉ.....	34
CAPÍTULO IV: EL DISCURSO DEL TEQUENDAMA	45
CAPÍTULO V: PRIMEROS CONTACTOS CON LAS FARC	53
CAPÍTULO VI: EL ÁGUILA DE LA PAZ	60
CAPÍTULO VII: "NADIE ENTRA Y NADIE SALE"	74
CAPÍTULO VIII: "SEÑOR PRESIDENTE, LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO"	83
CAPÍTULO IX: EL DÍA QUE CAMBIÓ LA GUERRA	93
CAPÍTULO X: EL BATALLÓN CAZADORES: UNA PIEDRA EN EL ZAPATO.....	98
CAPÍTULO XI: "LA GUERRILLA NOS QUEMÓ TODO... MENOS LA POBREZA" ...	105
CAPÍTULO XII: RELANZAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.....	112
CAPÍTULO XIII: UNA REUNIÓN IMPROBABLE.....	130
CAPÍTULO XIV: LA SILLA VACÍA.....	136
CAPÍTULO XV: ENCUENTROS CON FIDEL	145
CAPÍTULO XVI: TEMBLOR EN EL CORAZÓN.....	156
CAPÍTULO XVII: EL CRIMEN QUE ALEJÓ A LOS ESTADOS UNIDOS.....	162
CAPÍTULO XVIII: "¡SE SALVA EL PROCESO O SE MUERE EN MIS MANOS!".....	170
CAPÍTULO XIX: RENUNCIAS SOBRE LA MESA.....	187
CAPÍTULO XX: EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CLINTON.....	202
CAPÍTULO XXI: EL DESPERTAR DE LA FUERZA PÚBLICA	211
CAPÍTULO XXII: "VAMOS A MOSTRARLES CÓMO FUNCIONA EL MUNDO"	217

CAPÍTULO XXIII: EL CAMINO HACIA EL CESE DE FUEGOS	229
CAPÍTULO XXIV: AVANCES Y RETROCESOS	245
CAPÍTULO XXV: LA MÁS GRANDE AYUDA JAMÁS RECIBIDA	255
CAPÍTULO XXVI: HOMBRES, EQUIPOS Y LEYES.....	262
CAPÍTULO XXVII: LOS SECUESTROS MASIVOS	271
CAPÍTULO XXVIII: DRAMAS HUMANITARIOS.....	280
CAPÍTULO XXIX: UN ACTO DE SOBERANÍA	302
CAPÍTULO XXX: EL ACUERDO DE LOS POZOS	314
CAPÍTULO XXXI: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS CON EL ELN	335
CAPÍTULO XXXII: CONTACTOS DISCRETOS CON LAS AUC.....	351
CAPÍTULO XXXIII: DESARROLLOS DEL ACUERDO DE LOS POZOS.....	366
CAPÍTULO XXXIV: VIENTOS DE LIBERTAD	378
CAPÍTULO XXXV: "¡BIENVENIDOS A LA LIBERTAD, HÉROES DE COLOMBIA!"...	396
CAPÍTULO XXXVI: UN NUEVO HORIZONTE PARA LA PAZ	402
CAPÍTULO XXXVII: EL PROCESO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE	410
CAPÍTULO XXXVIII: "YO TENGO UNA HERIDA MUY HONDA QUE ME DUELE"...	422
CAPÍTULO XXXIX: EL PLAN COLOMBIA Y EL GOBIERNO BUSH	434
CAPÍTULO XL: AGONÍA DEL PROCESO	441
CAPÍTULO XLI: LA MÁS DIFÍCIL DECISIÓN.....	460
CAPÍTULO XLII: DE SUBVERSIVOS A TERRORISTAS.....	476
CAPÍTULO XLIII: Y EL ELN, ¿QUÉ?	486
CAPÍTULO XLIV: EL PAÍS QUE DEJÉ.....	501
CAPÍTULO XLV: LA JORNADA FINAL	528
ADENDA DEL CORAZÓN	537
APÉNDICE 1: ACUERDO DE CAQUETANIA (28 DE ABRIL DE 1999)	539
APÉNDICE 2: COPIA DEL ACUERDO FIRMADO POR EL PRESIDENTE PASTRANA Y MARULANDA (2 DE MAYO DE 1999)	542
APÉNDICE 3: ACUERDO DE LA HABANA (DICIEMBRE DE 2000)	544
APÉNDICE 4: ACUERDO DE LOS POZOS (9 DE FEBRERO DE 2001)	545
APÉNDICE 5: ACUERDO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS SOLDADOS Y POLICÍAS QUE ESTABAN EN PODER DE LAS FARC (2 DE JUNIO DE 2001)....	547
APÉNDICE 6: ACUERDO FIRMADO POR TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS PARA CONSOLIDAR LA POLÍTICA DE PAZ COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO.....	551

*A Nohra,
Santiago, Laura y Valentina,
cuyo amor me acompañó
en tiempos de esperanza
y me dio fortaleza
en las horas de angustia.*

*A la memoria de mi padre,
Misael Pastrana Borrero,
inspiración, consejero, ejemplo y amigo,
y a mi madre,
María Cristina Arango de Pastrana,
que me guió por caminos de respeto y de verdad.*

*A todos los que creyeron y siguen creyendo
que la paz es un derecho
al que jamás podemos renunciar.*

Agradecimientos

Muchas personas, protagonistas de los cruciales años cuyo desarrollo he narrado en este libro, me ayudaron con sus memorias y su investigación a hacer realidad este testimonio que entrego a la historia de nuestro país. A todos, a los que abajo nombro y a aquellos que tal vez se me escapen de este recuento, les agradezco de corazón su desinteresada contribución.

Principal papel cumplió en este libro Camilo Gómez, amigo y compañero de muchas luchas, con quien trabajamos conjuntamente y por varios meses gran parte de los capítulos, particularmente los referentes al tema de la búsqueda de la paz, en el cual tuvo destacada participación.

También fueron fundamentales en esa no siempre fácil tarea de reconstruir el pasado, con la mayor fidelidad, las conversaciones que sostuvimos y los recuerdos que intercambiamos y cotejamos con Víctor G. Ricardo, los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, Gustavo Bell, Guillermo Fernández de Soto, Luis Alberto Moreno, Julio Londoño, Guillermo León Escobar, Luis Fernando Ramírez, Humberto de la Calle, Juan Carlos Pastрана, Juan Esteban Orduz y Juan Carlos Echeverry, entre otros, que me ayudaron con el dato preciso y la acertada sugerencia.

Sus aportes, y los de tantos valiosos compatriotas y extranjeros que contribuyeron a buscar un mejor futuro para Colombia, están reflejados en estas páginas. Además de los arriba mencionados, quiero agradecer también a otros que colaboraron, con entusiasmo, en el difícil reto de buscar la paz con justicia social: los ministros de mi gabinete, los jefes y directores de entidades, los comandantes de la Fuerza Pública, los soldados y policías de la patria, los miembros de los equipos negociadores, los jefes de Estado y de gobierno y los embajadores de los países amigos, la Iglesia católica, todo el equipo de gobierno y tantos otros que hicieron posible este esfuerzo sin precedentes.

Asimismo, mi reconocimiento va para aquellos que, desde una distancia prudente, con una llamada a tiempo, una mano amiga o una sonrisa solidaria, me dieron respaldo y ánimo cuando las fuerzas flaqueaban.

Finalmente, debo resaltar el trabajo de Juan Carlos Torres, quien dedicó largas horas a investigar, organizar y poner en buen estilo la profusión de palabras en la que fui plasmando mis recuerdos e impresiones.

A todos les agradezco no sólo su colaboración con este libro, sino también la que prestaron al país desde los distintos campos de su actividad. Sin su aporte mi memoria hubiera sido insuficiente para recrear este tiempo definitivo para Colombia. ¡Muchas gracias!

Prólogo

En el despuntar del nuevo milenio ningún país de nuestro hemisferio se enfrentaba a mayores desafíos que Colombia.

El narcotráfico y el terrorismo amenazaban la integridad del Estado y la estabilidad de la sociedad. Las Fuerzas Militares y de Policía estaban debilitadas. La economía se precipitaba hacia una grave crisis.

Pero el pueblo colombiano rehusó rendirse ante el terror, la codicia y el caos. Por el contrario, millones de colombianos marcharon por todo el país, enarbolando banderas y pañuelos blancos, clamando por paz, justicia y desarrollo, y por una vida tranquila. En octubre de 1997 diez millones de ciudadanos votaron en referendo informal y dieron un mandato a los líderes del país para buscar la paz con la guerrilla y los grupos paramilitares.

Un hombre escuchó el mensaje y en 1998 lo eligieron presidente.

El padre de Andrés Pastrana fue presidente de Colombia una generación atrás. Desde su adolescencia, Andrés demostró su vocación de servicio caminando a lo largo y ancho del país, recaudando fondos para los pobres y los niños quemados. Luego, como periodista y como político, denunció a los carteles de la droga y promovió la justicia social. En 1988 fue secuestrado por el cartel de Medellín, y aún así no dio marcha atrás. A los dos meses de su liberación fue elegido alcalde de Bogotá. Durante su mandato fue testigo del asesinato de tres candidatos presidenciales.

A pesar del riesgo que corría su propia vida, Pastrana continuó al servicio de Colombia. Tras perder por estrecho margen las elecciones presidenciales de 1994, triunfó en 1998 con un mensaje de esperanza a una nación agobiada por un conflicto de décadas con los grupos guerrilleros.

Gabriel García Márquez, el Premio Nobel colombiano, reflexiona en su relato *El coronel no tiene quien le escriba* que "el que espera lo mucho, espera lo poco". El presidente Pastrana asumió el consejo de Gabo afrontando rápida y decididamente los más insondables problemas de Colombia.

Como presidente de los Estados Unidos tuve el privilegio no sólo de ser testigo del coraje y sacrificios del pueblo colombiano, sino también de compartir los grandes esfuerzos del presidente Pastrana por dirigir su país por el camino de la paz y la justicia social. Fue una cruzada contra las drogas y la violencia, contra la pobreza y la intolerancia, por la libertad y la seguridad, en una alianza fuertemente renovada con Estados Unidos.

Conocí a Andrés en agosto de 1998, pocos días antes de que jurase como presidente de su país. Comprendí entonces que Colombia tenía un mandatario claramente independiente de las fuerzas destructivas, comprometido con la unificación de su pueblo y orientado a la construcción de un futuro mejor para su nación. Como señal del apoyo decidido de Estados Unidos a sus políticas lo invité de nuevo a Washington en visita de Estado, tan sólo dos meses después de su posesión.

Pastrana bautizó como Plan Colombia su visionario y audaz esfuerzo para profundizar la democracia, extender la prosperidad, poner fin al prolongado conflicto interno y combatir la producción y el tráfico de drogas que, al igual que el narcoterrorismo, han segado tantas vidas y obstruido por tanto tiempo el progreso de Colombia. El Plan Colombia buscaba simultáneamente la paz mediante la lucha contra los carteles de la droga y la búsqueda de una salida negociada con los grupos guerrilleros.

Bajo el liderazgo de Dennis Hastert, presidente de la Cámara de Representantes, una gran mayoría bipartidista respaldó en el Congreso mi solicitud de 1.300 millones de dólares para cumplir con nuestra parte del apoyo al Plan Colombia. Estos fondos implicaban multiplicar por diez nuestra ayuda al desarrollo económico y social, incluyendo estímulos para cultivos legales y recursos para un fortalecimiento dramático de las fuerzas de seguridad, su entrenamiento en la protección de los derechos humanos y la extensión del acceso de los colombianos a la justicia.

Durante décadas, las guerrillas —notablemente las FARC y el ELN— se han mantenido en guerra contra el Gobierno de Colombia y secuestrando a sus ciudadanos. El presidente Pastrana demostró la profundidad de su compromiso con la paz otorgando a las FARC una zona desmilitarizada en el sur del país como gesto de buena voluntad. No obstante, los grupos rebeldes insistieron en el secuestro y el asesinato, fracasando al no capitalizar la generosa oferta del Gobierno. Ésta pasará a la historia como una inmensa oportunidad tremendamente desaprovechada.

Aún así, la estrategia del presidente Pastrana de asumir los múltiples e intrincados desafíos que enfrentaba Colombia ha dejado muchos dividendos. Estoy personalmente muy complacido de que nuestros sucesores, el presidente Álvaro Uribe y el presidente George W. Bush, hayan mantenido el impulso de esta política. Para 2005, el Plan ha fortalecido y modernizado significativamente las Fuerzas Militares y de Policía, reducido los cultivos de coca y amapola, expandido la economía ayudando a los campesinos a cultivar productos legales, mejorado el desempeño en derechos humanos y el sistema judicial e inducido a miles de combatientes ilegales a dejar sus armas y retornar a la sociedad civil. Pueden faltar muchos años más para cumplir los objetivos del Plan Colombia pero, al tiempo de publicarse este libro, se realiza un nuevo esfuerzo para alcanzar una solución definitiva.

El Plan Colombia dio esperanzas renovadas al pueblo colombiano y cimentó los lazos de Estados Unidos con la democracia más antigua de América Latina. La ayuda estadounidense a Colombia es hoy sólo inferior a la que se otorga a Israel y Egipto en cumplimiento de los Acuerdos de Camp David.

Estoy orgulloso de considerar a Andrés Pastrana como mi amigo y muy complacido de que él, una vez más, haya accedido a servir a su nación, en esta ocasión como embajador ante los Estados Unidos. Él fue un presidente sensato y valeroso que antepuso los intereses de su patria a cualquier otra consideración, incluyendo su seguridad personal y su carrera política. Supo guiar a Colombia en la dirección correcta en una coyuntura crítica de su historia y el país aún lleva la impronta de su visión. Andrés es una persona notable cuyas Memorias le dan al lector una mirada singular a un momento extraordinario en la historia de Colombia y a la vida de un hombre igualmente extraordinario que cuenta su historia con considerable perspicacia y sinceridad.

He llegado a querer a Colombia, lugar pleno de belleza y de coraje, de genio artístico y potencial inmenso, gracias, en no poca medida, a Andrés Pastrana.

BILL CLINTON

Introducción

Decía Ralph Waldo Emerson que la historia no existe, sino sólo la descripción de la vida. Todas nuestras acciones y sus resultados, los pensamientos y sentimientos que las motivan, el singular devenir de nuestra existencia, la búsqueda de un ideal que forjamos en los años primeros son los hechos que, sumados en su inevitable diversidad, conforman la historia.

Si la historia no es más que biografía, ¿por qué he considerado que vale la pena contar la mía, particularmente la que tiene que ver con los cuatro años de mi mandato presidencial, y por qué puede el lector sacar provecho de su lectura?

Sin duda, en la travesía vital de todo ser humano existen aspectos interesantes o lecciones que aprender. Sin embargo, cuando se trata de alguien que ha tenido el privilegio y la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de su nación como jefe de Estado, su vida acaba fundiéndose con la del país y su visión personal sobre los hechos que protagonizó o atestiguó se convierte en un testimonio histórico. Un testimonio que los hombres públicos estamos obligados a rendir ante nuestros contemporáneos y ante la posteridad, más aún cuando nuestra biografía se confunde con la biografía de un país en una de las coyunturas más complejas e interesantes de las últimas décadas.

Hay también un segundo motivo detrás de este libro que podría resumirse en una frase del periodista y poeta español Manuel Alcántara: *"Lo curioso no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra"*.

Los gobernantes presenciamos muchas veces, estupefactos, pasado el término de nuestro período, cómo una fuerza oscura y omnipresente —al igual que esa "Nada" difusa que iba devorando, uno tras otro, los mundos de fantasía en la *Historia interminable* de Michel Ende— va consumiendo y ocultando, tras un manto de imprecisiones y vaguedades, lo que fue una tarea ardua y consistente de varios años, algunas veces exitosa, otras no tanto, pero siempre intencionada hacia el bien de la nación.

No busco con este libro justificar mi obra de gobierno ni realizar unas memorias detalladas y exhaustivas del mismo, tal como las que cada año entregamos los presidentes al Congreso de la República. Lo que pretendo es dar mi visión personal sobre los eventos más destacados que marcaron el acontecer nacional, tal como los viví y sentí como persona y como gober-

nante, y rescatar, en lo posible, con las únicas herramientas de la sinceridad y la memoria, los hechos objetivos de mi período de gobierno que puedan estar en trance de borrarse por causa del silencio de quienes los vivieron o la desinformación de quienes no los conocieron bien.

Como un aporte, entonces, a la verdad histórica del país, de parte de alguien que dirigió su gobierno por cuatro años, entrego en este libro "mi verdad", el testimonio humano de cómo viví, sentí y actué durante los momentos más cruciales de nuestro pasado reciente, en cumplimiento de un mandato de paz que seguí con convicción hasta sus más extremas consecuencias.

UN DESAFÍO SIN PRECEDENTES

La mayor parte de esta obra la destinaré a contar, precisamente, los intrínsecos de ese histórico proceso de paz que marcó un hito en la vida nacional. Fue un proceso nacido de la voluntad popular, que se surtió con grandeza y de frente al país, cuyo camino era indispensable recorrer para reunir a los colombianos, como lo están hoy, en torno a sus instituciones y en contra de la violencia, y para aclarar nuestra verdadera situación ante una comunidad internacional que sostenía, en gran parte, una imagen idealizada de la guerrilla.

El proceso de paz fue, sin duda, la apuesta mayor de mi gobierno, una apuesta necesaria y fundamental, pero no fue mi gobierno. Junto con él, y dentro de él, entendido como un todo, se desarrolló una estrategia integral que comprendió —además de la negociación política— la Diplomacia por la Paz, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la lucha contra el narcotráfico y la más ambiciosa inversión social de todos los tiempos. Debimos también afrontar con responsabilidad una de las más críticas situaciones económicas en la historia del país para ponerlo de nuevo, después de duros esfuerzos fiscales y trascendentales iniciativas legislativas, en el camino del crecimiento económico, un camino que hoy sigue transitando.

Sólo si se contempla el panorama general puede entenderse la forma en que afrontamos desde el gobierno la difícil tarea de llevar las riendas de un país como Colombia, soportando y superando las más diversas tensiones. Muchas veces los árboles del proceso surtido en el Caguán, con la espectacularidad y novedad que implicaba una negociación directa con un grupo armado ilegal, impidieron ver el bosque de la estrategia integral que llevamos a cabo para recuperar la dignidad internacional del país, enfrentar el flagelo de las drogas ilícitas —principal fuente de financiación de los violentos—, modernizar y fortalecer nuestra Fuerza Pública y hacer llegar la presencia del Estado y su auxilio a las regiones más apartadas del país y más afectadas por el conflicto.

Sobre algunos de estos aspectos, como el diseño del Plan Colombia —con su componente militar y su inmenso componente social— y la obtención de fondos para su financiación, especialmente de parte de los Estados Unidos, así como sobre el crucial tema del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que cambió drásticamente, y a favor del Estado, la ecuación del conflicto armado en nuestro suelo, tendré oportunidad de referirme con más detalle.

Gobernar cualquier país es un reto inmensurable. Gobernar a Colombia, en la coyuntura que me correspondió, fue un desafío sin precedentes en el que la sorpresa estaba a la orden del día y las circunstancias a menudo obligaban a tomar decisiones o a aplazar otras, pensando en el interés común y sacrificando a veces las metas inicialmente planteadas.

El terremoto del Eje Cafetero, por ejemplo, significó un desembolso de cerca de 1,6 billones de pesos, que se dio en medio de un proceso que fue orgullo de Colombia y modelo a nivel mundial por su eficiencia y transparencia, pero que implicó reevaluar las metas fiscales. A este particular evento, que marcó indeleblemente mi presidencia y me acercó como nunca al empuje y el coraje del pueblo cafetero, también reservo un capítulo especial.

No intentaré ser exhaustivo ni abarcar todas las áreas donde se realizaron gestiones importantes o se vivieron especiales dificultades. Tan sólo espero, con la serenidad que da mirar hacia atrás y contemplar el camino recorrido, entregar un testimonio humano y diáfano que dé una idea aproximada sobre lo que fueron esos cuatro años para Colombia; revelar algunos detalles desconocidos o anecdóticos que ayuden a iluminar la historia y sus razones, y dejar, sobre todo, un testimonio —mi testimonio— sobre la más interesante y trascendental experiencia a que pueda aspirar colombiano alguno: la de ser presidente de este maravilloso y complejo país.

CAPÍTULO I

Ataque contra la Casa de Nariño

Corría la tarde del 7 de agosto del año 2002, el último día de mi período presidencial. Cuatro años atrás, lleno de expectativa y de ilusión, con la responsabilidad de cumplir el inequívoco mandato de paz que me habían dado los colombianos, había cruzado el patio de armas que separa al Congreso Nacional de la Casa de Nariño para instalarme en este palacio histórico levantado donde nació y creció el precursor de nuestra independencia, el mismo edificio donde viví y trabajé los años más intensos de mi vida.

Miré mi reloj por enésima vez y comprobé que acababan de pasar las 3 de la tarde. Recién había terminado un almuerzo de despedida que compartí con mis ministros y asesores más cercanos, y ellos se habían quedado, con sus acompañantes, al igual que Nohra y mis tres hijos, tomando un café y departiendo tranquilamente en un corredor frente al Salón Bolívar.

Yo tenía que terminar de recoger mis cosas y firmar unos últimos documentos, así que me había ido a trabajar solo a mi despacho, afuera del cual estaban, como siempre, mis secretarías Adela y Cecilia, atentas a cualquier necesidad.

De pronto... ¡una explosión! Tronó un fuerte estallido que hizo cimbrar toda la edificación. El sonido retumbó fuerte en mis oídos y el corazón se aceleró. ¡Estábamos bajo ataque! Me levanté de un salto del escritorio con un solo pensamiento: *¡Dios mío, pasó algo muy grave! ¡Llegaron hasta acá!*

No acababa de salir del asombro cuando un segundo impacto, mucho más fuerte y cercano, se sintió en la misma estructura del Palacio. Fue como si hubiera caído directamente sobre mi cabeza. Mis alarmas mentales se dispararon. Si habían impactado dos veces el Palacio de Nariño y su zona circundante, algo muy grave había fallado en el esquema de seguridad. Y lo que era peor: ¡podían venir más ataques!

Salí apresurado del despacho, y lo primero que encontré fue a mis dos consternadas secretarías, con gesto de pánico, dispuestas a ayudar en lo que fuera necesario. A los pocos momentos llegaron los hombres encargados de la seguridad y Juan Hernández, mi secretario privado, quien vino corriendo desde su oficina, a pocos pasos de la mía.

Quienes se habían quedado charlando frente al Salón Bolívar y cada una de las personas que a esa hora estaban laborando en la Casa de Nariño vivieron su propia historia de terror. La primera explosión había causado un gran sobresalto, que la segunda había multiplicado, pues confirmaba que se trataba de un atentado contra Palacio. Sin embargo, todos, en medio de la zozobra, guardaron la calma, alejándose prudentemente de las ventanas. Nohra abrazó a Valentina, la más pequeña de nuestros hijos, que tenía apenas 7 años; los demás se acercaron entre sí y, cuando se alejó la posibilidad de un tercer estallido, muchos llamaron a sus casas desde sus celulares, angustiados por averiguar la suerte de sus familiares y por anunciar que se encontraban bien.

Yo recibí el reporte de mis asesores, que llegaron presurosos, y me puse en contacto con los altos mandos de seguridad. El primero en llegar a informarme fue el general Jorge Enrique Mora, Comandante del Ejército, quien, con la angustia todavía reflejada en el rostro, vino presuroso desde el Congreso, donde asistía a la posesión de mi sucesor, y me dijo que ya todo estaba bajo control.

Había ocurrido lo que se temía desde días antes: un atentado de la guerrilla contra los centros de poder de la nación, aprovechando la coyuntura del cambio de gobierno.

La sorpresa fue que el ataque no provino, como se esperaba, de los cerros orientales de Bogotá, que estaban, por ello, fuertemente custodiados, sino de la parte baja de la ciudad, a más de dos kilómetros de distancia. Un avión de inteligencia de los Estados Unidos y un oficial de policía que vigilaba con binoculares desde las montañas alcanzaron a determinar su procedencia, en una vivienda en un barrio de clase media a más de 20 cuadras del Palacio Presidencial.

Se alertó a los patrulleros del sector y rápidamente llegaron a la casa desde cuyo patio se lanzaron los disparos. A corta distancia de la misma encontraron a un hombre que se alejaba de prisa, llevando un radio de transmisión en la mano. Inmediatamente lo capturaron y apagaron el aparato para que no pudiera seguir enviando señales de activación a los morteros. Al allanar la vivienda encontraron más de 90 proyectiles que no alcanzaron a ser disparados, debido a su precaria instalación y a la oportuna llegada de los miembros de la Policía, que evitó una tragedia de inmensas proporciones.

No obstante, las granadas de mortero que se alcanzaron a disparar, de 120 milímetros cada una, ya habían generado escenas de muerte y de terror. De las dos explosiones que se escucharon con fuerza en la Casa de Nariño, una ocurrió en un edificio contiguo, donde quedaban las oficinas del Plan Colombia y de la Red de Solidaridad Social, y otra dio directamente sobre una cornisa superior del Palacio, más exactamente arriba de la ventana de la que hasta entonces había sido la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez; muy cerca también de las que habían sido, hasta esa mañana, las habitaciones de mis hijos.

¡Bombas sobre los cuartos de mis hijos y sobre el despacho del comisionado en los últimos minutos de mi mandato! No dejaba de ser paradójico que las últimas detonaciones de la guerra cayeran precisamente sobre el entorno de mis seres más queridos y la oficina de quien estuvo por varios años a cargo de la difícil tarea de buscar la paz.

También los periodistas, que seguían la transmisión de la posesión desde la Sala de Prensa de Palacio ubicada debajo de la Oficina del Comisionado para la Paz, sintieron duramente el impacto de la explosión y se lanzaron al piso, mientras veían caer los trozos del techo. En los patios exteriores de Palacio cuatro hombres de seguridad resultaron heridos por las esquirlas, dos de ellos de gravedad.

VÍCTIMAS HUMILDES

Aparte de estas granadas, siete más se dispararon contra la zona del Palacio de Nariño y del cercano Congreso Nacional, donde se posesionaba el nuevo mandatario de los colombianos. Al igual que había ocurrido esa misma mañana, en otro ataque de las FARC contra la Escuela Militar de Cadetes, muchas cayeron desviadas, causando una gran cantidad de víctimas en una zona especialmente deprimida de la ciudad, conocida como "El Cartucho", en la que vivían muchos indigentes, drogadictos y recicladores de basura.

Precisamente, en una edificación ruínosa a la que llamaban "Gancho Amarillo", una especie de "hotel" de paso donde los habitantes del Cartucho pasaban la noche por mil pesos diarios, cayó una de las granadas, que ingresó por el techo y explotó en medio de unos 40 hombres, mujeres y niños que se encontraban allí. El saldo mortal fue de 17 víctimas.

Cerca de allí, una familia vivió su propia catástrofe. Una granada que entró por la marquesina y explotó en el patio de su casa terminó con la vida de una madre y de tres pequeñas de 1, 3 y 5 años de edad, que jugaban inocentemente mientras el proyectil realizaba su recorrido fatal por el cielo bogotano. Como paradoja del destino, la mujer resultó ser la esposa de un soldado del Ejército.

Pasados los impactos en la Casa de Nariño, se dispuso de inmediato el operativo previsto para una emergencia como ésta. Fue así como los encargados de seguridad de Palacio condujeron a Nohra, mis hijos, los altos funcionarios y demás invitados al teatro del mismo, ubicado en el sótano del edificio, para proteger sus vidas e integridad en caso de que los ataques se reiniciaran. Todos acudieron en orden, manteniendo siempre la más completa calma.

Por mi parte, opté por quedarme en mi despacho con mis asesores más cercanos, para permanecer al frente de la situación hasta el último momento.

A pocos metros del Palacio de Nariño, sin darse cuenta de los ataques ni del peligro que acababa de correr, el nuevo presidente de la República,

Álvaro Uribe, juraba cumplir y defender la Constitución, y se ceñía la banda presidencial, acompañado, entre otros, por cinco mandatarios latinoamericanos y un príncipe europeo. Nuestro deber era asegurarnos de que la posesión llegara hasta el final sin mayores complicaciones.

Resultaba difícil de creer. Quedaban apenas unos minutos a mi gobierno y la guerrilla de las FARC, con la que había sostenido el más grande y esperanzador proceso de paz de nuestra historia, a la que también había combatido con todas las armas de la institucionalidad, se despedía, en su torpeza legendaria, con un mensaje de destrucción, sangre y muerte, masacrando a los más desamparados y ratificando con hechos que no había entendido la inmensa oportunidad que tuvo de hacer la paz y de cambiar las armas por el debate civilizado dentro de la democracia.

El día que yo había imaginado como uno de los más felices de mi vida, cuando aspiraba a dejar la Presidencia con un proceso de paz culminado o, por lo menos, consolidado y con muy buenas perspectivas, terminó convertido en una jornada triste y amarga, como tantas otras que a los colombianos nos ha tocado vivir por la intolerancia de los violentos.

La buena noticia que habíamos celebrado esa misma mañana con el representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Zoellick, y varios empresarios y dirigentes gremiales, acerca de la reciente aprobación de la prórroga y ampliación del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas —ATPA—, que significaba un trascendental avance para los exportadores colombianos y la generación de miles de empleos, se empañaba por un acto de terrorismo contra la misma sede de gobierno, sin precedentes en el país.

Las horas finales de mi mandato —cuyos pormenores y antecedentes narraré con mayor amplitud en el último capítulo— se manchaban, absurdamente, de sangre y de dolor.

Mirando por la ventana de mi despacho, que da hacia el patio de armas y el Capitolio Nacional, observando el tapete rojo dispuesto para la llegada de mi sucesor, no pude menos que mirar hacia atrás y preguntarme:

¿Cómo llegamos a este punto?

¿Qué pasó, para bien o para mal, en estos cuatro años, marcados de principio a fin por el esfuerzo de paz de mi gobierno y la obstinación en la guerra de los grupos armados ilegales?

¿Por qué estuvo la palabra bajo fuego?

¿Cuál es la historia que nos trajo hasta acá?

A resolver estas preguntas está destinado este libro.

CAPÍTULO II

El camino hacia la Presidencia

A comienzos de 1986, en el último año de su mandato, siendo yo concejal de Bogotá, el presidente Belisario Betancur me ofreció la Alcaldía de la capital, cuando todavía este cargo era de libre designación por parte del presidente de la República. No acepté, y así se lo manifesté al mandatario, porque por esa época se estaba discutiendo la reforma constitucional que permitía la elección popular de alcaldes, y preferí esperar para someter mi nombre al escrutinio de mis conciudadanos, antes que recibir ese honor por la generosidad y confianza del presidente.

Esa fue una constante en mi actividad pública, pues nunca —desde cuando fui concejal del pequeño municipio cundinamarqués de Gachetá hasta cuando llegué a la Presidencia— fui designado a dedo para ninguna posición. En mi currículo dentro de la administración pública no aparece en ninguna parte la palabra “nombramiento”. Todos los cargos políticos que ocupé los gané a pulso en elecciones democráticas.

Tengo la satisfacción de haber trabajado todos y cada uno de mis avances en cargos de responsabilidad, primero en mi ciudad y luego en el país, sin prevalerme jamás de la importancia o trayectoria de mi padre o mis abuelos. La actividad pública no se puede ejercer sobre los méritos de los antepasados, así como los méritos o atributos políticos no se transmiten por herencia. Lo que he logrado, bueno o malo, en todos mis años de servicio al país, hasta la misma Presidencia de la República, ha sido consecuencia exclusiva de mis actos y mi trabajo, y del respaldo en las urnas de quienes creyeron en mis propuestas.

“¡VINIMOS POR EL SANTO Y SE NOS APARECIÓ LA VIRGEN!”

La primera elección popular de alcaldes fue un importante hito en la historia del país, que profundizó la descentralización e incrementó el poder decisorio de los ciudadanos sobre el destino de sus urbes y municipios. Propuse mi nombre para el cargo de alcalde mayor de Bogotá y, cuando estaba en plena campaña, un nuevo evento me puso en el centro mismo de la violencia en que se convulsionaba el país.

El 18 de enero de 1988 un grupo de hombres armados, liderados por John Jairo Velásquez, alias *Popeye*, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, entró a mi sede de campaña, en el barrio Tcusaquillo de Bogotá. Después de amenazar a todos los que allí se encontraban, ingresaron a mi oficina y me sacaron esposado, con una pistola automática apuntando a mi cabeza.

De allí fui introducido en el baúl de un carro y trasladado a algún sitio en las afueras de Bogotá, en donde pasé la primera noche aciaga de mi cautiverio. Los autores de mi secuestro operaban bajo las órdenes del temido capo del cartel de Medellín, dentro de un grupo que se hacía llamar "Los Extraditables". Yo había recibido amenazas de muerte del mismo Escobar desde 1982, por mis denuncias como periodista, lo que me hacía temer, con justa razón, un desenlace fatal.

Al día siguiente fui llevado en un helicóptero, con los ojos vendados, a una zona rural cercana a Medellín, en donde permanecí bajo condiciones inhumanas por cerca de una semana. Mis captores no me dejaban mover de la celda que habían acondicionado para mí y me vigilaban las 24 horas del día, incluso cuando entraba al baño. Siempre tuve un arma apuntándome, recordándome que no sólo mi libertad, sino también mi vida, estaban en sus manos.

Por una insólita casualidad, el 25 de enero fui liberado gracias a un operativo de la Policía Nacional en el municipio de El Retiro, Antioquia, cuando los cuerpos de rescate —que no me buscaban a mí sino al procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, secuestrado ese mismo día en Medellín por "Los Extraditables"— dieron con mi paradero. Como dijo, con gracia popular, uno de los uniformados que participaron en la operación que culminó en mi rescate: *"Vinimos por el santo y se nos apareció la Virgen"*. Sin embargo, aquel día de mi libertad terminó siendo una jornada trágica para el país porque el procurador fue vilmente ejecutado por sus captores.

El dolor de una víctima es el dolor multiplicado de toda su familia. El sufrimiento de Nohra, mi esposa, el de mis hijos pequeños, mis padres y toda mi familia fue enorme. Esos días del secuestro marcaron también sus corazones, agobiados por la angustia y la incertidumbre, las mismas que todavía corroen a miles de colombianos cuyos familiares permanecen en manos de la guerrilla, los paramilitares o la delincuencia común.

Ese mismo año, el M-19 secuestró al dirigente conservador, y también periodista, Álvaro Gómez Hurtado, por cerca de dos meses. Paradójicamente, su liberación marcaría el inicio de un proceso de paz con este grupo, bajo el gobierno de Virgilio Barco, que llevó a su desmovilización en 1990.

"¡BOGOTÁ, DEL PUTAS, BOGOTÁ!"

De retorno al escenario público después de mi secuestro, fui elegido alcalde de Bogotá, y ejercí el cargo entre junio de 1988 y junio de 1990.

Los flagelos del narcotráfico y la drogadicción siguieron a la cabeza de mis preocupaciones. En 1989 propuse realizar una reunión de alcaldes de capitales de América Latina, de Estados Unidos y de Europa para intercambiar experiencias sobre estos temas, la cual se realizó en Nueva York, con la acogida del alcalde de esta ciudad, Edward Koch. Tres meses más tarde, en la Conferencia Anual de Alcaldes de los Estados Unidos, en Charleston, pude plantear con toda claridad un tema que desde entonces ha sido recurrente en mi vida pública: la responsabilidad compartida como principio para combatir el problema mundial de las drogas.

El narcotráfico, entre tanto, daría su estoque mayor a la democracia colombiana con el asesinato, en agosto de 1989, de la más renovadora y popular figura dentro del Partido Liberal después de Jorge Eliécer Gaitán: Luis Carlos Galán, un prominente y joven político santandereano que había sido ministro de Educación en el gobierno de mi padre. Ocho meses después las fuerzas oscuras seguirían su carrera de muerte y cobrarían la vida de Carlos Pizarro, el líder del desmovilizado M-19 y su primer candidato presidencial.

Como alcalde, tuve que enfrentar una de las más difíciles situaciones de seguridad que haya vivido Bogotá en toda su historia: el magnicidio de Galán y los perversos atentados terroristas de "Los Extraditables" hicieron que dichos años pasaran a la historia como la época del "narcoterrorismo", un término que yo mismo acuñé y que, tristemente, no ha perdido su vigencia. Sucesos sangrientos y terribles que dejaron numerosas víctimas, como la bomba frente al Centro 93 o la que destruyó las instalaciones del DAS en Bogotá, nos obligaron a convocar a la ciudadanía para enfrentar unida, con colaboración y serenidad, estos duros embates contra su vida y su tranquilidad. No más en los últimos nueve meses de mi alcaldía, para dar una idea de la difícil situación, se sucedieron 130 atentados terroristas contra los bogotanos por parte de las mafias del narcotráfico.

El dolor nos congregó, pero también la esperanza y el arte. Aprovechando la enorme convocatoria de la música, tuve oportunidad de devolverles a los bogotanos un sentido de pertenencia a su ciudad que tal vez habían perdido desde los aciagos hechos del 9 de abril de 1948. Me llamaron el "alcalde rockero" porque promoví el "Concierto de Conciertos", un multitudinario espectáculo musical en el que el público abarrotó el Estadio El Campín y disfrutó de la presentación de los mejores grupos de rock en español desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.

No hubo un herido ni un hecho lamentable. Solamente miles de ciudadanos cantando, bailando, aplaudiendo y recuperando su derecho a la alegría. Todavía recuerdo el coro que escuché cuando entré al estadio, repetido por miles de gargantas de jóvenes que habían vuelto a creer en su ciudad: *"¡Bogotá, del putas, Bogotá!"*. Este lema espontáneo fue, para mí, el símbolo de la nueva era que nacía para una capital que no quería ser más desunida y

gris, sino símbolo de tolerancia y de convivencia, una ciudad que hoy sigue renovándose en esa misma dirección.

Algo similar ocurrió con la Troncal de la Caracas, que puse en marcha para ordenar el tráfico urbano y mejorar el desplazamiento de las clases populares hacia y desde sus trabajos, un experimento exitoso que fue el antecedente del actual sistema de transporte de TransMilenio. Allí, en la Troncal, nuevamente la gente respondía con civismo inusitado y cumplimiento de las reglas frente a una obra concebida en su beneficio.

En medio de la difícil situación de orden público me quedó la satisfacción de haber podido consolidar otras obras de gobierno, como la privatización de la recolección de basura, que convirtió a este servicio —antes politizado y paquidérmico— en un ejemplo de eficiencia y modernización. También se llevó agua potable a cerca de un millón de habitantes que carecían de este servicio esencial, se dio impulso a vías de la importancia de la Avenida a Suba y se construyeron más de 20 puentes que descongestionaron el tráfico vehicular, entre otras realizaciones.

Culminado mi tiempo en la Alcaldía, estuve un año estudiando en el Centro de Asuntos Internacionales de Harvard, a donde me desplazé con mi familia. Eran los tiempos del “revolcón”, para usar el término acuñado por el presidente César Gaviria. En 1991, después de un proceso iniciado por un movimiento estudiantil denominado “la séptima papeleta”, se reunió la Asamblea Nacional Constituyente que dio a luz una nueva Constitución para Colombia.

Me propusieron encabezar la lista de candidatos del Partido Conservador para dicha Asamblea, pero preferí continuar mis estudios y preparar la creación de un movimiento suprapartidista denominado “Nueva Fuerza Democrática”, desde el cual quería generar una renovación en la política.

La Asamblea Constituyente fue la mejor prueba de las bondades de la reconciliación y de las posibilidades de una exitosa inserción política de quienes alguna vez estuvieron alzados en armas. El liberalismo; un movimiento suprapartidista liderado por Álvaro Gómez Hurtado, llamado Movimiento de Salvación Nacional, y el M-19, ahora denominado Alianza Democrática M-19, obtuvieron las mayores votaciones para la Asamblea Constituyente. Fue así como Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, representante de sus antiguos captores, copresidieron la Asamblea en un gesto democrático y esperanzador. ¡Quién hubiera dicho en 1985, frente a los escombros humeantes del Palacio de Justicia, que esta coexistencia política pudiera ser una realidad!

Misael Pastrana Borrero, por el Partido Conservador, hizo parte del grupo de constituyentes, haciendo valiosos aportes en el campo del medio ambiente y de los derechos sociales, pero se retiró en un acto de protesta ante la inminencia de la aprobación de la revocatoria del Congreso, un hecho político que iba más allá del mandato que habían recibido.

Valga recordar que el mismo día en que se celebraron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el 9 de diciembre de 1990, el gobierno de César Gaviria ordenó un ataque sorpresivo sobre "Casa Verde" en el departamento del Meta, que había sido refugio del Secretariado de las FARC durante muchos años. A pesar de la contundencia del ataque, otra vez, al igual que en Marquetalia 26 años antes —cuando nacieron como grupo guerrillero—, Manuel Marulanda, alias *Tirofijo*, y sus hombres lograron escapar y se afirmaron en su sentimiento de desconfianza y rencor contra el establecimiento.

La Constituyente determinó, finalmente, la conformación de un nuevo Congreso, bajo las reglas de la recién estrenada Constitución, y allí hizo su aparición por primera vez la Nueva Fuerza Democrática, con una lista que encabezé y que obtuvo gran respaldo popular, alcanzando nueve escaños en el Senado de la República. En este escenario, como senador, tuve oportunidad, junto con mis colegas de bancada, de realizar una importante labor de depuración de las costumbres políticas, apoyando, además, importantes iniciativas legislativas como la Ley 100 de 1993, que significó la ampliación de los servicios de salud a la inmensa mayoría del pueblo colombiano.

LA PRIMERA CAMPAÑA POR LA PRESIDENCIA

Presenté, entonces, mi nombre como candidato presidencial para el período 1994-1998. Lo hice a nombre de la Nueva Fuerza Democrática, con el apoyo integral de mi Partido Conservador y de una buena cantidad de liberales independientes que creían en mi proyecto político. Me enfrentaba a Ernesto Samper Pizano, el candidato oficial del Partido Liberal, que entonces era el partido de gobierno.

En la primera vuelta electoral obtuvimos prácticamente la misma votación, con una diferencia de apenas 18.000 entre uno y otro, lo que obligó a un esfuerzo mucho mayor en ambas candidaturas frente a los comicios de segunda vuelta. Menos de una semana antes de las elecciones definitivas llegaron a mis manos unos casetes, que me fueron entregados en Cali, en los que se escuchaban comprometedoras conversaciones telefónicas que parecían probar una gigantesca infiltración de dineros del Cartel de Cali en la campaña electoral de Samper Pizano.

Preocupado ante el hallazgo, solicité de inmediato una cita al presidente de la República, César Gaviria, quien me recibió con su ministro de Defensa, Rafael Pardo, y les entregué los casetes para que ellos determinaran su autenticidad y, como Gobierno, tomaran las determinaciones que consideraran necesarias.

A los pocos días —y sin que el país aún se hubiera enterado del contenido de los que luego se conocerían como los "narcocasetes"— se llevaron a cabo las elecciones y fui derrotado por el candidato Samper. La posterior di-

vulgación de los mismos por parte de los medios de comunicación dio pie a uno de los procesos judiciales más sonados y más vergonzosos en la historia reciente del país: el "Proceso 8.000", donde se determinó, a ciencia cierta, que sí entraron dineros ilícitos a las arcas de la campaña liberal.

Fue una época particularmente compleja y difícil para mí. No sólo había sido derrotado por una campaña infiltrada por el narcotráfico, sino que un sector de la población consideró que mi conducta era la de un mal perdedor o que denigraba del buen nombre de Colombia, sin tener en cuenta que yo había entregado los casetes antes de las elecciones a las máximas autoridades, que no los usé como argumento a mi favor antes de los comicios y que quien mancha el nombre de Colombia no es quien denuncia un hecho inmoral, sino quien lo comete.

El tiempo y las investigaciones terminaron por demostrar que los hechos detrás de las vergonzosas conversaciones registradas en los "narcocasetes" eran reales y que la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña del candidato liberal no había sido una invención mía, sino una ominosa realidad para el país.

Pude haber impugnado el triunfo y haber generado una confrontación interna, pero primó el sentido de convivencia patriótica. Preferí dejar el caso en manos de las autoridades y continuar preparándome para dirigir el país con la conciencia de que cuatro años más tarde podría tener una nueva oportunidad, aunque el daño hecho al buen nombre de Colombia tardaría mucho en resanarse.

Entre tanto, tuve la oportunidad de apoyar, como asesor, la puesta en marcha de la Academia Internacional de Liderazgo de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Ammán, Jordania. Esta tarea me significó, además de la obvia satisfacción de contribuir a un proyecto de estas características, la ocasión de hacer amistad con el rey Hussein y su esposa, la reina Noor de Jordania. Gracias a ello, la reina Noor, después del fallecimiento del rey, ha seguido con interés la situación de Colombia, visitándonos en tres ocasiones durante mi gobierno, en una de las cuales llegó a entrevistarse con los líderes de las FARC en la zona de distensión.

También fue un tiempo para retomar la vida familiar, tantas veces sacrificada en aras del trabajo público. Santiago y Laura eran ya adolescentes, y la vida nos regaló a Nohra y a mí una nueva sorpresa que iluminó ese período de luces y sombras: la pequeña Valentina, que vino a convertirse en la nueva alegría del hogar.

Un momento especialmente difícil significó para mí la muerte de mi padre, el ex presidente Misael Pastrana Borrero, víctima de una penosa enfermedad, el 21 de agosto de 1997, a la edad de 73 años y después de haber liderado, durante el último curso de su vida, al Partido Conservador, en las riberas de la oposición patriótica, en los tres gobiernos liberales que se sucedieron desde 1986. Murió con la tristeza de ver a su país, al que él ayudó a

engrandecer desde los valores del entendimiento, la concordia y el diálogo, enfrentado a un entorno de desprestigio y desesperanza como pocas veces en su historia.

Él había sido mi guía, mi consejero y amigo durante toda mi vida y, en medio de la inmensa pena que me generó su partida, consagré a su memoria los nuevos pasos que habría de dar en mi renovada lucha política.

UN MANDATO Y UNA PROPUESTA

Corría el año de 1997 cuando organizaciones no gubernamentales, estudiantiles y cívicas —lideradas, entre otros, por Francisco Santos, entonces director de la Fundación País Libre y hoy vicepresidente de la República, y Luis Carlos Restrepo, actual alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe— promovieron un movimiento al que llamaron “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad”. La idea era que los que estuvieran de acuerdo con que la paz se buscara mediante el diálogo y la negociación depositaran una papeleta extra en las elecciones municipales de octubre con esa instrucción para sus gobernantes. Aunque no hubo un conteo oficial, se calcula que cerca de 10 millones de personas votaron a favor del “mandato por la paz”.

Colombia, entre tanto, vivía un período especialmente difícil: un presidente dedicado a defenderse, con la visa americana cancelada; un país desprestigiado en el exterior, descertificado y estigmatizado; una guerrilla ofensiva que asestaba golpe tras golpe a las Fuerzas Militares, secuestrando a centenares de soldados; un narcotráfico que seguía operando por fuera del esquema de los carteles y un factor de perturbación que crecía aceleradamente, que eran los grupos de autodefensa ilegales, creados sobre las bases de los ejércitos privados de los grandes narcotraficantes y dedicados a las masacres y la exterminación de toda persona a la que se le imputaran vínculos con la guerrilla.

Tristemente, la lista de magnicidios se incrementó con un nombre de peso: Álvaro Gómez Hurtado, prácticamente retirado de la actividad pública y crítico agudo del régimen oficial —como él denominaba al gobierno de turno—, fue asesinado en 1995 en extrañas circunstancias que jamás se aclararon.

En este complejo marco nacional lancé nuevamente mi candidatura a la Presidencia de la República para el período 1998-2002. Inicialmente estuve solo en esta aspiración, presentada a nombre de la Nueva Fuerza Democrática, con mínimas expectativas de triunfo de acuerdo con todas las encuestas, que me situaban en los más bajos umbrales de favorabilidad. Poco a poco, sin embargo, mi propuesta fue calando en los colombianos y obtuve el aval de mi partido —que la escogió mayoritariamente en la Convención Conservadora— y el acompañamiento de un amplio bloque de liberales e independientes, que conformaron lo que llamamos la “Gran Alianza por el Cambio”.

En esta segunda oportunidad me enfrenté al candidato del oficialismo liberal, Horacio Serpa Uribe, quien había sido ministro del Interior y principal defensor de la cuestionada administración Samper. El país tuvo que decidir, entonces, entre dos propuestas que simbolizaban dos extremos opuestos: el continuismo o el cambio.

En la primera vuelta electoral, Serpa obtuvo una leve pero insuficiente ventaja de un poco más de treinta y tres mil votos, y nos vimos abocados nuevamente —como cuatro años atrás Samper y yo— a la necesidad de una segunda vuelta donde seríamos los únicos candidatos.

Mi parábola vital, lo que aprendí de la experiencia de mis antepasados, el pensamiento que forjé en mis años de periodista, de concejal, de alcalde, de senador y de candidato, me permitieron hacerle al país una propuesta de paz clara y coherente, basada en mi profunda y arraigada convicción en el diálogo como único medio para alcanzarla. Fue entonces cuando presenté, el 8 de junio de 1998, en un trascendental discurso en el Hotel Tequendama de Bogotá, mi plataforma de trabajo por la paz y la carta de navegación del proceso que proponía liderar desde el Gobierno, discurso sobre el cual ahondaré en un capítulo posterior.

El programa de gobierno que ofrecí al país como candidato se basaba en 10 propuestas para el cambio, fruto de mi experiencia y mis reflexiones sobre la mejor forma de encarar la difícil encrucijada en que se hallaba nuestro país. Ellas fueron: promover un nuevo plan económico para crear empleo, reducir el IVA y bajar el costo de vida, apoyar y dar un soporte real a la agricultura, realizar un programa sin precedentes para construir vivienda e infraestructura, ofrecer igualdad de oportunidades para lograr un Estado más humano, garantizar una adecuada nutrición y una buena educación para los niños, hacer una gran campaña de prevención contra la droga, recuperar la seguridad ciudadana, garantizar sólo manos limpias en dineros públicos y adelantar una estrategia para la paz dirigida personalmente por el presidente. Al culminar mi mandato tuve ocasión de rendir cuentas, una por una, sobre la forma en que cumplí o intenté cumplir cada una de estas propuestas.

Vengo —como queda visto— de una tradición familiar y una formación humanista ajenas al sectarismo. Soy un convencido de las virtudes del diálogo y la tolerancia. Por eso mismo, propuse una candidatura suprapartidista y un gobierno realmente nacional, con participación destacada de todas las fuerzas políticas, independientemente de que me hubieran acompañado en mi campaña, lo cual tuve la ocasión de poner en práctica. También promoví que los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría, estuvieran en manos de personas pertenecientes a partidos o movimientos diferentes al del gobierno, como en efecto sucedió.

Con estas propuestas concretas y bajo las circunstancias ya descritas, el

pueblo colombiano me escogió el 21 de junio de 1998 como su presidente constitucional con una votación superior a los seis millones de votos, la más alta alcanzada por candidato alguno en la historia del país.

Era un mandato multitudinario que me obligaba a transitar el sendero de la paz en nombre de un país que clamaba por ella. Era también un compromiso que me llamaba a trabajar primordialmente en los temas sociales, cuyas carencias agobiaban a los colombianos aun más que el mismo conflicto, un llamado que tuve presente más que nada a lo largo de toda mi gestión.

Ese día, con el corazón encogido por la emoción, en medio de los abrazos calurosos y el entusiasmo de quienes me acompañaron en la campaña, sólo pude pensar: *"Durante cuatro años el destino del país estará entre tus manos. ¡De ti dependerá todo! ¡De ti dependerá que cumplas con lo prometido!"*.

CAPÍTULO III

El país que encontré

La historia de Colombia ha estado marcada por períodos de convulsiones políticas y sociales que han generado divisiones y polarización en la sociedad. También por diferentes momentos de confrontación violenta en los que muchos colombianos perdieron la vida, por cuenta de la intolerancia política o por las acciones que en los últimos 40 años los violentos han perpetrado en contra de una sociedad que sólo aspira a vivir tranquila y a trabajar de manera honesta. Más recientemente, en especial desde la década del ochenta, hemos padecido los devastadores efectos del narcotráfico, uno de los peores flagelos de la humanidad. Este factor ha ocasionado un agravamiento de la violencia y un enorme daño en nuestra imagen frente a la comunidad internacional.

El peso de tantos años difíciles nos ha llevado a un cansancio colectivo que nos hace anhelar soluciones rápidas y soñar con fórmulas milagrosas imposibles de alcanzar.

El reto de todo presidente es convertir en realidad esa esperanza de reconciliación, las enormes ganas de nuestra gente por vivir sin los sobresaltos de la violencia y sin los sentimientos de odio y de rencor que surcan como cicatrices el alma de muchos colombianos.

Fue precisamente ese reto el que me llevó, primero como candidato y luego como presidente, a proponer a mis compatriotas un proyecto político para cambiar el rumbo de Colombia. Mi programa de gobierno tuvo siempre como objetivo fundamental sembrar esa semilla para que el futuro de Colombia fuera mejor y resolviéramos de fondo nuestro principal problema. Pero las soluciones de fondo no son sencillas.

Sabía desde un principio que la semilla sembrada no daría sus frutos en sólo cuatro años. Después de tantos años de violencia y otros de una enorme polarización, era consciente de que los cambios necesarios no se podían alcanzar durante el término que la democracia le otorga a un gobernante, según las reglas del juego con las que fue elegido. Pero las limitantes de tiempo no podían convertirse en una excusa para posponer su inicio.

Era urgente reformar y modernizar las Fuerzas Militares, recuperar las relaciones internacionales, lanzar un plan de inversiones sociales, lu-

char contra el narcotráfico y buscar la reconciliación de los colombianos. Aunque no todos estos empeños se podrían culminar, mi obligación con el país era la de sentar los cimientos del cambio, pensando con responsabilidad en el largo plazo y en soluciones de fondo, no sólo en paliativos coyunturales, así esto significara la incompreensión de muchos y la pérdida de la popularidad.

Me correspondió liderar al país en una época de transición en la que debíamos pasar de la polarización a la unidad, de la confrontación a la reconciliación, del aislamiento a la integración, del enfrentamiento político a la concertación y de ser considerados como un problema a ser considerados como parte de la solución. El camino a seguir estaba marcado por la búsqueda de la paz, como el mayor anhelo de los colombianos.

RADIOGRAFÍA DE UN CONFLICTO ATÍPICO

Siempre he soñado en lo mucho que podríamos lograr si llegáramos a consolidar la paz en nuestro suelo. Estoy convencido de que todos los colombianos nos hemos imaginado alguna vez cómo sería nuestro país sin violencia. Lograríamos, sin duda, reducir los niveles de pobreza, consolidar las instituciones, asumir un papel más determinante en la política internacional, solucionar buena parte de nuestros problemas sociales y, más que nada, recuperar la alegría de vivir en nuestra patria, de recorrerla y de saber que será la nación de nuestros hijos y nietos una en la que podrán encontrar muchas oportunidades para vivir mejor. Es decir, tendríamos un país pujante y con un futuro cierto.

Soy un convencido de que la búsqueda de la paz es el camino por medio del cual nuestro país puede encontrar un futuro mejor. Pero nadie puede pensar que esta búsqueda implica únicamente el silencio de los fusiles y la desaparición de los grupos armados que desde hace cuatro décadas siembran de violencia los campos colombianos. Si de un momento a otro desaparecieran la guerrilla y los demás grupos armados ilegales, los problemas de Colombia se aliviarían, sin duda, pero no se solucionarían, pues van mucho más allá de la confrontación armada.

Para que haya paz verdadera es necesario librarnos del flagelo del narcotráfico, atacar la pobreza realizando inversiones sociales que beneficien a los sectores más desfavorecidos, contar con el apoyo de la comunidad internacional y, además, que nuestro pueblo conozca y enfrente la realidad de los problemas que padecemos.

La violencia que padece el país tiene su origen en diversos actores. Por una parte, está generada por la guerrilla, que desde tiempo atrás se ha empeñado en luchar contra el Estado mediante actos de fuerza. Desde sus inicios, y echando mano de ideologías que ya recibieron acta de defunción en el resto del mundo, los grupos guerrilleros se han obstinado en alcanzar el

poder a través de las armas, desconociendo por completo los anhelos de paz de los colombianos y desechando las posibilidades que pueden llegar a tener en la democracia.

No desconozco que nuestro sistema no es perfecto y que es necesario dotarlo de más legitimación y de más participación. Nadie puede negar que la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad proliferan en nuestro pueblo. Pero tampoco puede negarse que, a pesar de las enormes dificultades y del empeño destructivo de la guerrilla, Colombia ha logrado construir unas instituciones sólidas, una democracia estable y una economía respetada en el mundo.

La violencia también está impulsada por los mal llamados grupos de autodefensa o paramilitares. Estos grupos, que nacieron al amparo del narcotráfico, como parte de sus organizaciones, han crecido bajo la disculpa errada de tratar de suplantar al Estado en su lucha contra la guerrilla. Muchos pensaron que, ante la debilidad del Estado, la solución radicaba en este tipo de grupos armados ilegales; algunos creyeron que, apoyándolos, el Estado se fortalecía y la guerrilla se derrotaba, lo cual llevó, en un momento dado, a que unos pocos sectores de la sociedad los respaldaran, generando la sensación de que se trataba de organizaciones políticas.

Nada más errado que esto. Como dije muchas veces en auditorios gremiales y ante las Fuerzas Militares: *"No se puede alcanzar el cielo parándose sobre los hombros del diablo"*. Al pretender reemplazar al Estado, usurpando la facultad legítima del uso de la fuerza, estos grupos no han hecho otra cosa que convertirse en un factor de deslegitimación del propio Estado. Sus acciones bárbaras, bajo una supuesta aplicación de lo que ellos llaman el principio de la legítima defensa, le han causado un terrible daño a la sociedad en la medida en que han socavado las bases mismas del Estado de Derecho. Hoy por hoy, constituyen un problema políticamente mayor que la misma guerrilla y son, como ella, violadores de los derechos humanos y cómplices en la generación de violencia.

Hay que tener en cuenta, además, que el verdadero motor de la violencia, el que la incita y la financia, es el narcotráfico. Detrás de los grupos violentos, detrás de muchas de las acciones terroristas que ha padecido Colombia, está la mano oscura del narcotráfico. Nuestro país, de manera injusta, desde hace muchos años y frente a la comunidad internacional, ha sido tratado más como el causante que como una víctima del problema mundial de las drogas, cuando en realidad hemos tenido que soportar más que ningún otro las consecuencias de un problema que le concierne a toda la comunidad internacional.

En medio de estas circunstancias y actores debemos, sin embargo, poner las cosas en sus verdaderas proporciones. A pesar de la violencia que padecemos, el conflicto que vivimos no es, ni mucho menos, una guerra civil. Lo que sufrimos es una guerra declarada por unos cuantos intolerantes con-

tra la sociedad civil; un ataque desproporcionado en el que han recurrido, incluso, a las acciones de tipo terrorista.

En nuestro país no existe una sociedad dividida en bandos opuestos ni hay grupos ilegales armados que cuenten con el apoyo de la sociedad, ni siquiera de una parte de ella. Hoy por hoy las organizaciones guerrilleras han perdido el norte político y lo han reemplazado por el terrorismo.

Tampoco es nuestro conflicto el más grave del mundo ni significa una amenaza para la seguridad hemisférica pues, sin duda, existen otros con consecuencias más críticas a nivel global. Eso sí, tiene una importancia especial para la estabilidad de la región, por su vínculo indisoluble con el problema mundial de las drogas, que es un problema de todo el hemisferio.

El nuestro es prácticamente el conflicto más prolongado del mundo, pero no resulta uno de los más intensos, comparándolo con otros similares. Tampoco tiene fundamentos religiosos, territoriales o étnicos, pues sus orígenes y su desarrollo han sido netamente políticos, si bien mezclados con factores económicos relacionados con el negocio del narcotráfico. Todos estos elementos lo convierten en un conflicto atípico frente a los demás, lo que implica que su solución deba, también, ser diferente.

Durante largos años se ha buscado una solución, privilegiando, casi siempre, la estrategia militar. A pesar de ello, en las últimas cuatro décadas sólo se han logrado soluciones efectivas mediante procesos políticos de negociación, como los que se llevaron a cabo exitosamente con el M-19, el EPL, el grupo Quintín Lame y otros más. En estos casos, los procesos de negociación permitieron que dichas organizaciones cambiaran la actividad armada por la actividad política, abriendo los espacios democráticos que hoy les permiten ser parte importante de la vida nacional.

Los ex integrantes de esos grupos guerrilleros ocupan hoy su lugar en los diversos escenarios de la sociedad civil y la política, y han logrado, mediante acuerdos y dentro de la democracia, alcanzar cambios de importancia para el país. La misma Asamblea Constituyente de 1991, donde se gestó la actual Carta Política del país, fue producto de los acuerdos firmados con el M-19 en su momento.

Por el contrario, los grupos guerrilleros con los cuales, a pesar de algunos intentos, no ha sido posible llegar a una negociación política, han crecido y se han consolidado como grupos ilegales con accionar terrorista. El crecimiento de las FARC, por ejemplo, ha sido prácticamente constante desde su creación y los diversos intentos de acabarlas por la vía militar no han logrado parar este crecimiento. Desde 1964 han pasado de ser un pequeño puñado de hombres a convertirse en una organización armada ilegal con cerca de 20.000 integrantes. Si bien es cierto que este crecimiento se debe a una gran cantidad de factores, como la utilización de recursos financieros derivados del narcotráfico y del secuestro, resulta también cierto que la confrontación militar no ha podido frenar dicho aumento.

La conclusión de la historia es evidente: quienes se acogieron a procesos de paz y abandonaron las armas son hoy importantes agentes de cambio social; en cambio, quienes han insistido en la violencia como mecanismo para generar transformaciones sociales o políticas nada han logrado. Ninguna de sus propuestas ha sido aceptada por los colombianos y ninguna de sus tesis ha logrado prosperar. Han perdido, en el camino, toda credibilidad.

Siempre he pensado que para lograr la reconciliación la vía más adecuada es y será la de la negociación política. Incluso los grupos guerrilleros, en su infinita terquedad, saben que sólo de esta manera conseguirán alcanzar una posición de poder que justifique la lucha que por tantos años han sostenido. La negociación política y la apertura de espacios democráticos es la mejor forma de demostrarles, con hechos, que la violencia no tiene justificación alguna y que, si luchan por algunos ideales, la única vía es la democracia.

Su lucha armada, hoy concentrada en acciones de tipo terrorista, no tiene ninguna justificación y mucho menos legitimación; carece de cualquier soporte popular y se ha alejado irremediamente de los fundamentos políticos que le dieron origen. Hoy el mundo entero rechaza ese tipo de acciones y la comunidad internacional, en un tiempo en el que prima la protección de los derechos humanos y de la paz, jamás apoyará ese tipo de violencia. Los mismos guerrilleros han reconocido la utopía que hoy significa su triunfo militar. Ese sueño ni siquiera existe en sus propias mentes.

También tengo la certeza de que es muy difícil una solución netamente militar por parte del Estado. Las condiciones geográficas, las circunstancias internacionales y el tipo de conflicto que vivimos no permiten vislumbrar la posibilidad cierta de una derrota absoluta de la guerrilla por la vía armada.

Esto no significa que el Estado colombiano pueda dejar de lado la acción militar. Por el contrario —tal como lo hice durante mi gobierno con absoluta determinación—, el Estado tiene la obligación de fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad y de combatir a los grupos violentos, eso sí, dentro del mayor respeto a los derechos humanos y a la Constitución Política. Sólo con unas Fuerzas Armadas sólidas y legítimas resultará posible consolidar la seguridad de los colombianos y alcanzar y mantener la paz.

Hay que obrar por vía militar, pero hay que actuar, simultáneamente, en el terreno político. Es cierto que la guerrilla ha dejado la política de lado para dedicarse a las acciones terroristas y a actividades relacionadas con el narcotráfico, pero tampoco se puede desconocer su presencia en el escenario político nacional.

No se trata, entonces, de la negociación por la negociación sino de la búsqueda sensata de una salida política y, por eso, no es para nada incompatible el hecho de que, de la mano de las alternativas políticas, se adelante un fortalecimiento militar, como ocurrió en mi gobierno. Estos dos conceptos no son contradictorios sino complementarios, tal como lo demuestra el

ejemplo de otros países en donde después de largos años de lucha guerrillera se ha logrado llegar a acuerdos de paz.

La búsqueda de la paz en mi gobierno no fue un capricho personal ni una propuesta más de la campaña electoral. Como ya lo mencioné, diez millones de personas votaron para que se buscara una salida negociada al conflicto. Fue el mandato que recibí de los colombianos y el mandato que cualquiera que hubiese ganado en 1998 hubiera tenido que cumplir. Un gobernante no puede desconocer un hecho político de la magnitud que tuvo el llamado "Mandato Ciudadano por la Paz", que ha sido la más grande manifestación democrática en Colombia a favor de un tema determinado.

En 1998 prácticamente ningún candidato se apartaba de la propuesta de buscar una negociación con la guerrilla, a diferencia de lo que ocurriría cuatro años después, en la campaña electoral de 2002, cuando casi ningún candidato planteaba esa posibilidad. Esto no es extraño, pues en la vida democrática los ciudadanos tienen, por fortuna, la libertad de opinar y de decidir qué gobierno quieren y qué quieren que ese gobierno haga. En 1998, cuando fui elegido presidente, los colombianos querían un presidente que buscara la paz y en el año 2002 buscaron un presidente que privilegiara la opción de la guerra. El péndulo de la opinión nunca deja de oscilar.

UN PAÍS AL BORDE DEL ABISMO

Las acciones realizadas por mi gobierno no pueden analizarse hoy sin tener en cuenta el momento por el cual atravesaba el país en el año en que fui elegido.

En 1998 el país atravesaba un momento muy particular. Las circunstancias políticas, militares e internacionales hacían prever una crisis mucho más profunda de lo que la sociedad percibía. No sólo el agravamiento del conflicto interno había llevado a un clima de desesperanza sino que la coyuntura política había generado una enorme polarización de la opinión y causado, a la vez, una crisis de credibilidad en las instituciones. Así mismo, las condiciones económicas avanzaban a pasos de gigante hacia el peor escenario en muchos años.

Los problemas de fondo estaban ahí: la pobreza, el conflicto armado, la debilidad en las relaciones internacionales y el narcotráfico conformaban el núcleo de nuestras dificultades. Aunque nuestro país ha mantenido políticas económicas estables y nuestras instituciones democráticas se han conservado a lo largo de la historia, no hemos logrado superar la crisis social en amplios sectores de la población. No es posible pensar en un país que viva en convivencia si existen severos grados de miseria y hambre. No es posible pensar en un país que progrese si la violencia de los grupos armados persiste. No es posible pensar en un desarrollo económico óptimo y en el fortalecimiento de nuestras instituciones si el narcotráfico no es derrotado.

El entorno político del momento era de una complejidad sin precedentes. Colombia estaba polarizada políticamente a raíz del Proceso 8.000. El gobierno de mi antecesor había gastado sus esfuerzos y su tiempo en buscar la forma de sostenerse en el poder, a raíz de las denuncias y la investigación judicial sobre la entrada de dineros del narcotráfico en su campaña en 1994. En ese empeño, generó una profunda división entre quienes lo defendían y quienes consideraban aquel hecho lo suficientemente grave como para que el gobierno cambiara. La sociedad se polarizó y el presidente Samper se mantuvo en su puesto esgrimiendo un cínico postulado: *"Aquí estoy y aquí me quedo"*.

El país asistió a un triste espectáculo en el que el Gobierno y sus aliados en el Congreso, por defender lo indefendible, contribuyeron a debilitar la democracia y a restarle legitimidad a las instituciones que durante tantos años habíamos cuidado.

La misma guerrilla había expresado su tajante negativa a realizar acercamientos con un gobierno que calificaban como ilegítimo. Desde el rompimiento de las negociaciones de Caracas y Tlaxcala con la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, durante la administración del presidente César Gaviria, no se habían adelantado nuevos diálogos. Las FARC habían rechazado cualquier posibilidad de hacerlo con el gobierno Samper y el ELN sólo hablaba con la sociedad civil sin dejar siquiera que los representantes del Gobierno asistieran a los contactos.

Por otro lado, y aprovechando el debilitamiento del Estado, la guerrilla había logrado los mayores avances militares de toda su historia y había asesado los más duros golpes al Ejército. En la memoria de todos están aún presentes las malas noticias que llegaban de los ataques a Puerres, Las Delicias, Patascoy, El Billar, Miraflores y otros más en los que las FARC utilizaron estrategias de combate que las posicionaron militarmente como nunca antes. Más de 200 militares y policías muertos, y casi medio millar de secuestrados, fueron el saldo trágico de esas cruentas acciones. Las continuas derrotas y la falta de moral de la Fuerza Pública eran francamente preocupantes.

El ELN, por su parte, había incrementado su actividad terrorista mediante una gran cantidad de voladuras de torres de energía y de tramos del oleoducto, causando cuantiosas pérdidas a la economía. Asimismo, había convertido al secuestro en su principal actividad y fuente de ingresos.

Todo esto implicaba un drama humano sin precedentes. Las FARC tenían secuestrados alrededor de 400 soldados y policías y el ELN a cerca de 50, sin que se viera una posibilidad clara de solución para este problema. Las FARC exigían un "canje de prisioneros" y, por el envalentonamiento militar que tenían, buscaban con esto un reconocimiento internacional que les permitiera alcanzar el estatus de grupo beligerante. Mientras tanto, los familiares de los secuestrados y los propios soldados y policías que se encontraban en poder de la guerrilla padecían un infierno en vida.

En tanto que la posición militar de la guerrilla mejoraba, la de las Fuerzas Militares y de Policía retrocedía, situación y consecuencias sobre las que trataré luego con más detenimiento.

Pero si las condiciones militares resultaban desfavorables, las circunstancias internacionales no lo eran menos. El país estaba sumido en un difícil estado de aislamiento internacional, causado en buena parte por los hechos relacionados con la pérdida de legitimación ocasionada por el Proceso 8.000 y el probado ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Samper en 1994. Esta situación había generado una gran desconfianza en la comunidad internacional, en claro detrimento de la imagen del país y de su política exterior, circunstancia que fue agravada por la cancelación de la visa del presidente Samper para ingresar a los Estados Unidos y las sucesivas descertificaciones en cuanto a la lucha colombiana contra el narcotráfico. Las relaciones entre Colombia y la potencia del norte, nuestro principal socio comercial, se encontraban en el peor momento de nuestra historia reciente.

Especialmente en Europa, el país era víctima de serios cuestionamientos en materia de violaciones a los derechos humanos por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales y por entidades oficiales relacionadas con este tema. Parte de esta situación estaba fomentada por la guerrilla que, por ese entonces, no tenía inconvenientes para movilizarse en diferentes escenarios internacionales, donde era escuchada de una manera complaciente y en donde, a la vez, se observaban con desconfianza las acciones que el Estado adelantaba.

La guerrilla aprovechaba los espacios internacionales que el Gobierno perdía en razón a las dificultades políticas por las que atravesaba. Esta situación le permitió alcanzar un reconocimiento político nada despreciable, con niveles de interlocución que resultaban preocupantes. Por el contrario, nuestros militares, en razón a las acusaciones sobre derechos humanos, no eran recibidos en algunos países, ni siquiera para efectos de los cursos académicos que adelantaban. Los papeles estaban invertidos y la legitimidad internacional estaba en mora de recuperarse.

En el área social el panorama era también crítico. En diferentes puntos del territorio las marchas y protestas de campesinos alteraban de manera evidente el clima de orden público.

El país aún tenía presentes las imágenes de las protestas de los campesinos cultivadores de coca en el sur del país, en las que se habían presentado violentos enfrentamientos con la Fuerza Pública, mientras que en Barrancabermeja se dieron también grandes movilizaciones campesinas, ocasionadas por diferentes factores sociales y agravadas por cuenta de la muerte de algunos líderes campesinos.

En el campo económico las alarmas estaban prendidas y exigían una acción responsable, urgente y contundente, para evitar una catástrofe mayor.

El desempleo se había disparado entre 1994 y 1998, pasando del 7,5% a cerca del 16%, ¡más del doble!, en sólo cuatro años, generando una tendencia que costó mucho revertir.

La inflación, que es, de alguna manera, el "impuesto" más oneroso para las clases populares, se situó en 1997 en niveles cercanos al 18% en tanto la de 1998 fue apenas un poco menor del 17%, porcentajes que estábamos obligados a bajar para garantizar la sostenibilidad de la economía.

Las tasas de interés para préstamos que encontré al comenzar mi gobierno no llegaban a superar el 50% efectivo anual, lo que las volvía prácticamente confiscatorias, desestimulando de manera grave el crédito y la inversión. Con semejantes intereses, nadie se atrevía a comprar una casa o montar una empresa. Cualquier negocio era inviable y los préstamos se habían vuelto impagables.

Teníamos, además, un peso artificialmente revaluado, sujeto a una banda cambiaria que no lo dejaba fluctuar con el mercado y que lesionaba los intereses de los exportadores.

Y algo muy grave: los sectores financiero y cooperativo se encontraban a las puertas de una crisis sistémica sin precedentes, lo que nos obligaba a tomar unas medidas urgentes y costosas para evitar que cientos de miles de ahorradores y cuentahabientes perdieran sus depósitos, como ha ocurrido, tristemente, en otros países del continente. El mismo sistema de vivienda estaba haciendo crisis, poniendo en peligro el hogar de más de 800.000 familias colombianas.

Recibí un sector agrícola decreciendo y unos indicadores generales de crecimiento de la economía con tendencia negativa por primera vez en muchos años en Colombia, una tendencia que nos llevó a la crisis recesiva de 1999 y que costó ingentes esfuerzos revertir hacia una nueva reactivación. No cesamos ni un segundo de trabajar en esta tarea y creo, como se verá al final, que los resultados fueron cuando menos satisfactorios.

A estos fenómenos se sumó el mayor problema económico de Colombia en décadas: la crisis pensional. Los pagos de pensiones a cargo de las cajas, los militares y el magisterio habían agotado sus reservas y empezaban a tener que ser sufragados por el Gobierno Nacional, con base en impuestos. De esta forma, se le quitaban recursos a la inversión social, los cuales debían ir a cubrir un pasivo pensional descubierto. Varias décadas de irresponsabilidad gubernamental estallaron en mi gobierno cuando los pagos por pensiones desfinanciadas llegaron a tres puntos del PIB, una cifra escandalosa. Pero el problema se tornaba aún más preocupante hacia el futuro dado que los mismos se iban a duplicar en los siguientes diez años. Por esta razón resultaba imperioso adoptar una dolorosa reforma al sistema de pensiones.

No se debe olvidar el contexto internacional en el que se manifestaban estos fenómenos. Las llamadas "economías emergentes", a las cuales perte-

nece Colombia, habían pasado de recibir inmensos flujos de capitales en la primera mitad de los noventa, a ser objeto de corridas especulativas de capitales al final de la década. Así ocurrió en México, Rusia, Brasil, los países del sudeste asiático, y más tarde, con mucha dureza, en Argentina. Colombia no estaba exenta de algún grado de contagio de estas crisis. De hecho, la recesión que sufrimos en 1999 fue compartida por la economía latinoamericana en su conjunto. Un entorno mundial y regional tan adverso no se observaba desde quince años atrás. Tuvimos, entonces, que manejar un buque que nos entregaron haciendo agua, en medio de una mar tremendamente adversa.

En otro campo, el del problema del narcotráfico, principal motor de la violencia en Colombia, la situación también tendía a agravarse. El crecimiento de cultivos ilícitos resultaba evidente y se estaba dando en zonas diferentes a las tradicionales. De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, el cultivo de coca había pasado de 44.700 hectáreas en 1994 a 101.800 hectáreas en 1998 y la producción potencial de cocaína había pasado de 201 toneladas en 1994 a 435 en 1998. Por otra parte, los cultivos de amapola habían llegado a la cifra récord de 7.350 hectáreas. Eran tendencias que teníamos que combatir y que logramos cambiar radicalmente desde el año 2000, gracias a las políticas que implementamos, enfatizando la interdicción, continuando la aspersión aérea de las grandes áreas sembradas y fomentando la erradicación voluntaria y el desarrollo de cultivos legales alternativos en el caso de los pequeños cultivadores.

Para colmo de males, a pesar del desmedido incremento en el cultivo y la producción de drogas, el país no contaba con el respaldo internacional necesario para combatir integralmente este problema. La ayuda norteamericana se restringía a las acciones de fumigación y no teníamos ningún apoyo de los gobiernos europeos en este tema.

En medio de todo esto, se acababa de aprobar la reforma constitucional que permitía reiniciar la extradición de colombianos a los Estados Unidos, y los carteles de Medellín y Cali, después de la muerte o el encarcelamiento de sus líderes, habían desaparecido como organizaciones delictivas, dando paso a un número indeterminado de pequeños carteles con creciente sofisticación. El narcotráfico iniciaba un cambio de esquema que generaba nuevas oportunidades y, a la vez, nuevos desafíos en la lucha contra sus organizaciones delictivas.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

El 7 de agosto de 1998 llegaba en medio de una de las más graves crisis del país. No resultaría fácil enfrentar una situación tan compleja como la que acabo de describir, más aún cuando no habíamos sufrido una crisis de estas dimensiones en mucho tiempo. La esperanza que la posibilidad de paz

había despertado ayudó para que los colombianos encontráramos la fuerza y la voluntad para enfrentar tan difícil coyuntura.

Partiendo de este difícil diagnóstico, diseñamos una estrategia integral, cuyo hilo conductor sería la búsqueda de la paz mediante la negociación política, pero con ejes igualmente importantes, como la inversión social, la estabilización de las finanzas públicas, la apertura de mercados externos, la lucha contra el narcotráfico, la Diplomacia por la Paz y el fortalecimiento y modernización de la Fuerza Pública, para lo cual resultaba indispensable recuperar el apoyo internacional. Sobre el desarrollo de algunos de ellos tendré oportunidad de referirme más adelante.

Pasado ya algún tiempo desde que terminó mi gobierno sigo convencido de que, con estos elementos de la estrategia, sentamos las bases para una solución de fondo a nuestro conflicto e iniciamos un importante viraje que nos puso de cara hacia el futuro y nos alejó del abismo.

El pueblo me eligió para buscar la paz y no para hacer la guerra y, en cumplimiento de ese mandato, lideré personalmente los esfuerzos de paz y establecí el diálogo como el mecanismo adecuado para alcanzarla.

Sin embargo, resulta corta la visión de quienes pretenden insistir en que mi gobierno sólo fue un proceso de paz. Fue mucho más. Buscamos ir al fondo de los problemas y tratamos de solucionarlos desde su raíz, no simplemente de forma coyuntural.

El mío fue un gobierno de transición y de ajustes, un gobierno en el que buscamos la concertación antes que la imposición, la reconciliación antes que la confrontación. No seré yo, por supuesto —ni tampoco mis contradictores—, sino la historia misma, la que determine cuánto avanzamos y si lo hicimos en la dirección correcta.

CAPÍTULO IV

El discurso del Tequendama

Presenté mi proyecto de paz —que no era otra cosa que la ruta para llevar a la práctica el “Mandato Ciudadano” votado masivamente el año anterior— en el lapso comprendido entre la primera y la segunda vuelta para las elecciones presidenciales.

A pesar de que la paz había sido un tema muy importante en los planteamientos de todos los candidatos que llegamos a la primera vuelta, incluyendo a Noemí Sanín y a otros con menor fuerza política, no cabía duda, hasta entonces, de que Horacio Serpa, el candidato oficial del Partido Liberal, parecía acaparar la experiencia en este punto: había sido ministro de Gobierno del presidente Barco y ministro del Interior del presidente Samper, y había liderado, como consejero de paz, el equipo negociador del gobierno Gaviria en los diálogos de Tlaxcala (México) con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que entonces agrupaba a las FARC y el ELN.

Era una experiencia valiosa, sin duda, pero con altibajos. Lo cierto es que el rompimiento de las negociaciones en Tlaxcala, en 1992, significó un congelamiento del tema que todavía perduraba en 1998; el ofrecimiento del despeje de una amplia zona en la Uribe (Meta), realizado por el gobierno Samper, había fracasado ante la férrea oposición de las Fuerzas Militares, entonces comandadas por el general Harold Bedoya, y ante el propio desplante de las FARC y sus gestiones secretas en Alemania, también como ministro de Samper, para intentar aproximaciones con el ELN, habían terminado en escándalo y fiasco.

Sin embargo, es indiscutible que Horacio Serpa, por su trayectoria, era percibido como el candidato de la paz, por encima de cualquier otro de sus oponentes.

Yo, por mi parte, tenía una concepción clara del conflicto y de la necesidad de iniciar un diálogo político con las guerrillas. Sabía —como lo expliqué ampliamente en el capítulo anterior— que el primer paso de todo diálogo debía ser la construcción de un grado mínimo de confianza entre las partes y que, partiendo de allí, era indispensable generar las condiciones de un proceso amplio e incluyente que llevara, finalmente, a una paz negociada.

Había hablado de esto durante toda mi campaña. Sin embargo, pasada la primera vuelta electoral, cuando quedábamos únicamente Serpa y yo en la contienda por la Presidencia, consideré necesario resumir mis diferentes planteamientos sobre la materia en una sola propuesta que fuera, en adelante, mi carta de navegación en la búsqueda de la paz.

Comenté mi decisión en el "Comité de Reacción" de la campaña —integrado por Víctor G. Ricardo, Luis Guillermo Giraldo, Carlos Rodado, Humberto de la Calle, Alberto Calderón y Juan Gabriel Uribe—, el cual se reunía todos los días a las 7 de la mañana para tratar los diversos temas en los que debíamos enfocarnos durante el debate político. La propuesta tuvo excelente acogida y de allí salió la idea de realizar un gran acto nacional de toda la Alianza por el Cambio, en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde yo planteara, de una manera integral, mi proyecto de paz para Colombia.

La paz había sido siempre un elemento fundamental de mi campaña, no por capricho o circunstancias, sino por convicción. Desde mis tiempos como periodista —y luego como alcalde, senador y candidato— había seguido el día a día del conflicto colombiano: los esfuerzos valiosos pero fallidos de Betancur, los procesos exitosos de Barco, el rompimiento durante el gobierno de Gaviria y el período sin avances del cuatrienio Samper, y me había forjado el convencimiento de que la única forma de alcanzar una paz cierta y duradera era a través del diálogo, sin excluir, por ello, el fortalecimiento de las fuerzas armadas de la institucionalidad.

Venía trabajando con gente que sabe de paz y que ha estudiado con profundidad el conflicto colombiano. En 1997, por ejemplo, me reuní a tratar extensamente sobre estos temas con los investigadores Alfredo Molano, Myriam Jimeno e Ismael Roldán, de quienes obtuve importantes aportes en el análisis de la violencia, sus causas y soluciones¹.

Tenía, además, en la campaña, al mejor grupo asesor posible en materia de paz, constituido por algunos de los colombianos con mayor experiencia en la materia: Augusto Ramírez Ocampo, Rafael Pardo Rueda y Víctor G. Ricardo.

Ramírez Ocampo —ex alcalde de Bogotá, ex canciller y consultor internacional— había desempeñado un importante papel en los procesos de paz que culminaron exitosamente en varios países de Centroamérica. Rafael Pardo —quien fue el primer ministro de Defensa civil en mucho tiempo, durante el gobierno Gaviria— había actuado también como consejero de paz, con experiencias exitosas de desmovilización y reinserción de grupos guerrilleros. Víctor G. Ricardo, por su parte, había sido viceministro de

¹ Myriam Jimeno e Ismael Roldán acababan de publicar el libro *Las sombras arbitrarias. Violencia y autoridad en Colombia*, y Alfredo Molano era autor, entre otros, del impactante testimonio *Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras*.

Gobierno y secretario general de la Presidencia en el gobierno de Belisario Betancur, durante el cual se había realizado el más importante esfuerzo de paz con las FARC, y luego, como congresista, había actuado como delegado del Partido Conservador en los fallidos diálogos de Caracas y de Tlaxcala durante el gobierno Gaviria.

También contaba con la amistad y cercanía de Álvaro Leyva, quien había sido secretario privado de mi padre, ex ministro y constituyente, y era el hombre dentro del establecimiento que más se había preocupado por conocer a las FARC desde adentro. Leyva, además, hacía parte de un importante grupo interdisciplinario que, bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, venía reuniéndose para estudiar y plantear soluciones y alternativas al conflicto armado que vivía el país, al que también invitaron en alguna oportunidad a Víctor G. Ricardo.

En dicho grupo de análisis, encabezado por el representante de las Naciones Unidas en el país, Francesco Vincenti, participaban, además de Leyva, James Lemoyne —norteamericano, funcionario de la ONU, con gran experiencia en procesos de paz—, Juan Manuel Santos, Juan Manuel Ospina, Darío Barberena, Alfredo Molano, Mario Flores y William Ospina, y se citaba frecuentemente a diversos personajes de la sociedad, de los gremios, de las Fuerzas Militares, a ex consejeros de paz, para escuchar sus puntos de vista en un importante esfuerzo de concertación y exploración de opciones.

El suyo fue un trabajo académico y práctico de gran importancia que el país no conoció ni valoró en su justa medida, en buena parte por la discreción de sus deliberaciones, pero que yo, como candidato, y luego como presidente, consulté y tomé como guía en puntos clave del proceso de paz. Una de las conclusiones del mismo era la necesidad de establecer una zona de distensión que facilitara los diálogos y la negociación con la guerrilla, una idea que encuadraba perfectamente con la propuesta de paz que yo venía delineando en mi campaña.

Después de que fui elegido, me reuní con varios de ellos en la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, donde me presentaron el documento de conclusión de sus diferentes sesiones de trabajo. Sin embargo, el hecho de que Leyva, amigo cercano mío, formara parte de ese grupo de estudio, y de que Víctor G. hubiera participado en algunas de sus reuniones, nos permitió, desde antes de la segunda vuelta, incorporar varias de sus propuestas y conjugadas desde un principio en mi plan de paz.

UNA CARTA DE NAVEGACIÓN PARA ALCANZAR LA PAZ

Con todo este bagaje sobre el tema de la paz y una concepción clara sobre lo que iba a proponerle al país, quedaba ahora organizar el acto en el Hotel Tequendama y preparar el discurso de fondo.

Lo primero que pensamos era que tenía que ser un acto suprapartidista, con figuras muy representativas del liberalismo, del conservatismo y de los grupos independientes que me estaban acompañando. Sería, además, un discurso en el que fijaría claramente cuál iba a ser mi programa de paz si llegaba a ser elegido presidente de la República y cómo buscaría establecer contactos con el Secretariado de las FARC y continuar los esfuerzos de aproximación que desde la sociedad civil se venían haciendo con el ELN.

Le di instrucciones a Víctor G. para que, con base en los planteamientos que yo venía haciendo en la campaña y los aportes positivos que podíamos incorporar de las conclusiones del grupo de las Naciones Unidas, elaborara un borrador de discurso. Igualmente, le pedí a Augusto Ramírez, a Rafael Pardo y a Álvaro Leyva, todos cercanos a mi campaña y al tema de la paz, que contribuyeran con algunas ideas para el mismo.

Teníamos claro desde un principio que de este trabajo conjunto debía salir un discurso con tres elementos fundamentales: diálogo con la guerrilla liderado personalmente por el presidente, lucha frontal contra el paramilitarismo y convocatoria a una especie de Plan Marshall para Colombia que, bajo el concepto de la responsabilidad compartida, comprometiera a la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico y en la promoción de la inversión social en aquellos lugares donde había amplia presencia guerrillera, una idea que finalmente se plasmaría en la Diplomacia por la Paz y el Plan Colombia.

El ensamble del discurso no fue, por supuesto, una tarea fácil, pues, a pesar de que el lineamiento general estaba muy claro, cada uno de los asesores pensaba de forma distinta sobre algunos aspectos puntuales. Mientras Rafael Pardo sostenía que había que diseñar una estrategia de garrote y zanahoria, Leyva creía que lo que debía hacerse primero era recuperar la confianza que se había perdido luego del bombardeo de 1990 sobre la Uribe, y Augusto Ramírez insistía en la inversión social, a través de un fondo que habían propuesto las Naciones Unidas. Todos, a mi manera de ver, eran enfoques perfectamente válidos que cabían en una estrategia comprehensiva e integral.

El acto del Tequendama estaba previsto para el 8 de junio a las 9 de la noche, una semana después de la primera vuelta presidencial que nos había dejado a Serpa y a mí como los únicos candidatos en el partidor. Ese día llegaba yo de Cali y había reservado la suite presidencial para poder leer el discurso, intercambiar opiniones con quienes habían trabajado en su redacción final, corregirlo si era el caso y cambiarme de ropa para el evento.

Cuando llegué a mi habitación, con algún retraso, me encontré con que mis asesores todavía no se habían puesto de acuerdo sobre los últimos aspectos procedimentales. El acto era crucial y los nervios estaban a flor de piel. Rafael Pardo se enfrentó a Víctor G. Ricardo por la redacción de algunas frases y, finalmente, Augusto Ramírez y Guillermo Fernández de Soto, mi jefe de campaña, se sumaron a la discusión.

Me paré, entonces, y les dije:

—¡Un momento! No puedo creer que estemos a minutos de iniciar un acto de tanta importancia para la campaña y, por aspectos procedimentales, no tengamos el discurso completamente listo. No es posible que, teniendo claro el enfoque que queremos darle, no se puedan poner de acuerdo por un problema de celos entre ustedes.

Calmados los ánimos, revisé el texto y lo encontré adecuado en su mayor parte. A pesar de las desavenencias de última hora, correspondía a lo que siempre había planteado sobre el tema y tenía, además, la ventaja de reunir en un solo documento los aportes de las personas con mayor experiencia en el tema de la paz en el país.

Le di, entonces, instrucciones a Víctor G. para que resolviera los puntos que estaban en discusión y se encargara de encajar todo en un texto único, cuya versión final sería revisada por Guillermo Fernández de Soto. Por supuesto, como siempre pasa en estos casos, la computadora falló y terminaron cortando y pegando textos en el piso de la suite desde donde coordinábamos el evento.

El tiempo se agotaba. Bajé a presidir el acto y a escuchar las intervenciones de quienes me precedían en el uso de la palabra, con la preocupación de que no tenía todavía el discurso en mis manos y ya casi me correspondía hablar. Al final, en el límite del tiempo, me fueron llegando las primeras páginas y comencé a leer ante el auditorio, en tanto mi edecán me iba pasando las hojas adicionales en la medida en que la impresora las botaba. Hoy recuerdo esa situación como una de las más angustiantes que viví en la campaña.

Por fortuna, tenía preocupación sobre la forma pero tranquilidad sobre el fondo. En mi interior me sentía muy satisfecho con el contenido porque, a pesar de las dificultades logísticas, el texto correspondía por completo a mis convicciones más profundas y arraigadas sobre el camino que debíamos tomar para llegar a la paz. Fue un discurso coherente, con una propuesta concreta, que causó mucho impacto dentro y fuera del auditorio.

¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de esta intervención? Hice referencia a 20 puntos o propuestas que serían la base fundamental para iniciar en serio una política de paz:

1. Se requiere *"una reforma política de fondo"* que nos permita contar con *"partidos sólidos, con representatividad, con responsabilidad y garantías a las minorías"*.
2. Es necesario promover *"una real separación de poderes. El Parlamento debe ser un órgano completamente independiente del Poder Ejecutivo, para que tenga la autoridad moral y política necesaria para ser el gran fiscal del Gobierno"*.
3. *"Los órganos de control deben ser absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como de los partidos políticos"*.

4. *"La reforma se hará dentro del Estado de Derecho: cambiar la Constitución dentro de la Constitución".* Es en este punto cuando por primera vez planteé la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. Al respecto dije: *"Si al final del proceso de paz, y para concretar las reformas políticas e institucionales que se acuerden con la participación de todos los estamentos importantes de la nación, surge la conveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tal convocatoria se hará respetando los procedimientos establecidos para tal efecto por la Constitución vigente"*. Es interesante observar que muchas veces durante mi gobierno la oposición afirmó que yo tenía una especie de pacto secreto con las FARC para convocar una Asamblea Constituyente y revocar el Congreso. Se olvidaban, por supuesto, de que, antes de ser elegido presidente, ya había planteado esta propuesta de forma pública.
5. Me comprometí a *"establecer zonas de despeje, que las normas legales definan como zonas de distensión, por el tiempo que resulte necesario, para garantizar la seguridad de los negociadores designados por la guerrilla; de las autoridades civiles que queden en la zona, especialmente de los alcaldes, que continuarán ejerciendo sus funciones como autoridades de policía en los términos de la Constitución; de los voceros de la sociedad civil que deben participar en el proceso; de los delegados de los Estados y de los organismos internacionales que cooperarán en el curso de las negociaciones, y de los representantes del Congreso que invitaremos a ser partícipes de los diálogos"*.
6. Hay que *"internacionalizar la paz para terminar la guerra"*. Para ello propuse invitar a la comunidad internacional a participar *"en la totalidad de los estadios del proceso: como facilitadora de las condiciones de prenegociación, como proponente de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, como testigo de los compromisos adquiridos y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos"*.
7. Se convocará a los *"empresarios por y para la paz"*, para que *"se desplacen a las zonas de distensión y a otros sitios de nuestra geografía agobiados por la guerra"* e *"identifiquen [...] proyectos agroindustriales o de otra naturaleza que puedan ser financiados con recursos propios y con fondos provenientes de la banca multinacional"*.
8. *"Liderazgo presidencial para todo el proceso: como presidente legítimo de los colombianos y con toda la autoridad moral y política que me otorgará una investidura intachable, dirigiré personalmente las negociaciones. Yo mismo instalaré y daré comienzo a los diálogos, en los que el Gobierno jugará sin cartas marcadas [...]"*.
9. *"El Gobierno llegará a la mesa de negociaciones con una agenda abierta y sin condiciones previas. Los temas por tratar serán definidos conjuntamente"*.
10. Me comprometí a trabajar desde el día mismo de mi elección para lograr un efectivo apoyo internacional, visitando *"a los gobernantes de las*

- naciones industrializadas que han manifestado su interés en ayudarnos, especialmente los Estados Unidos, para concertar con ellos la manera como nos colaborarán para iniciar la redención económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto".
11. Propuse convocar al sector privado y a las distintas organizaciones de la sociedad civil para que elaboraran, conjuntamente con mi equipo, una propuesta para *"un Plan Nacional de Emergencia Social dentro del Plan de Desarrollo"*, que ayudará a *"eliminar la enorme diferencia entre ricos y pobres en Colombia"*.
 12. *"Para lograr la paz, el Estado debe recuperar el monopolio de las armas mediante medidas administrativas y reformas legales para evitar que la sociedad civil siga vinculada al conflicto armado"*.
 13. La búsqueda de la paz tiene efectos ecológicos. Con ella se ayudará a *"preservar un patrimonio de la humanidad: la selva húmeda tropical"*.
 14. Se trabajará en un ambicioso plan de vías y obras de infraestructura para las zonas de conflicto, en el entendido de que *"las vías traen paz"*.
 15. *"Los narcocultivos" son "un problema social cuya solución pasa por el fin del conflicto armado. [...] Los países desarrollados deben ayudarnos a ejecutar una especie de 'Plan Marshall' para Colombia, que nos permita desarrollar grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional, para ofrecerles a nuestros campesinos alternativas diferentes de los cultivos ilícitos"*.
 16. *"Defenderé el derecho a la vida de todos los colombianos, sin excepciones. Los delitos consagrados por los tratados internacionales como delitos contra la humanidad no pueden escapar a la espada de la justicia"*.
 17. *"Mano dura con los paramilitares"*: anuncié mi determinación de combatirlos, aclarando que no tenían estatus político, y planteé, además, la necesidad de *"acallar sus armas, lo que tendrá que hacerse en un escenario distinto del de la negociación de la paz con la guerrilla y como una responsabilidad exclusiva del Estado"*.
 18. Me comprometí a respaldar *"sin vacilaciones ni equívocos"* a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como las fuerzas legítimas de la Nación, y a reestructurarlas *"dentro de una doctrina de seguridad democrática que supere los viejos parámetros de la seguridad nacional"*².
 19. *"El mandato por la paz es un mandato para mi gobierno. Los diez millones de colombianos que votaron el 26 de octubre de 1997 por 'la paz, la vida y la libertad' le dieron un mandato incontrovertible al gobierno: 'no más guerra, no más atrocidades'. [...] Comparto y acepto plenamente este man-*

² No deja de ser paradójico que este concepto de "seguridad democrática", como un paso adelante de la ya anacrónica doctrina de la "seguridad nacional", que planteé en mi discurso como candidato en 1998, sea hoy el pilar fundamental de la política de seguridad del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

dato. Es así como este plan de paz se inspira en este mandato y se propone articularlo en políticas y acciones concretas".

20. Seremos inflexibles en recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Así como a los guerrilleros, e incluso a los paramilitares, *"les ofrezco diálogo, reforma política y asistencia económica para solucionar el conflicto, así mismo les advierto que cumpliré con mi deber constitucional de mantener la autoridad y el orden en todo el territorio nacional"*.

"La paz tiene que ser el gran propósito nacional, requiere el apoyo irrestricto de toda la nación al próximo gobierno, por encima de consideraciones partidistas y cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones".

De esta manera dejé planteado, como candidato, el 8 de junio de 1998, mi programa de paz en un proyecto integral que partía de una invitación al diálogo, pero que no descuidaba, por otro lado, la verdad incuestionable de que la paz requiere también de inversión social, de apoyo internacional y de una fuerza pública moderna y operante.

Sobre ese programa, que fue nuestra carta de navegación, edificamos luego, desde el Gobierno, el más completo y ambicioso proceso de paz que jamás se haya intentado en Colombia. Quienes han pretendido descalificar el proceso de paz, diciendo que fue una improvisación, se enfrentarán siempre con el hecho incuestionable de que todo lo que ejecuté como presidente lo había anunciado como candidato y que la búsqueda de la paz obedeció al seguimiento de un programa estructurado y serio que cumplí al pie de la letra.

El discurso fue muy bien recibido por la opinión pública y tuvo, incluso, efectos positivos al interior de la campaña, donde los roces y malentendidos que lo precedieron quedaron afortunadamente superados, sin fisuras ni rencores. Este programa de paz vino a marcar, finalmente, la diferencia que estábamos buscando.

CAPÍTULO V

Primeros contactos con las FARC

Álvaro Leyva Durán es uno de los colombianos que más se han interesado por analizar el conflicto colombiano y sus alternativas, una dedicación que lo llevó a acercarse a las FARC, asumiendo los riesgos que esto implica, con el objetivo fundamental de promover una solución política con esta organización. Hombre inteligente y sagaz, aspiró alguna vez, como precandidato del Partido Conservador, a llegar a la Presidencia de la República para poner en práctica sus ideas de avanzada. Mi relación con él ha sido muy próxima, pues no sólo fue secretario privado de mi padre durante su período presidencial, sino que su esposa es pariente cercana de mi madre, y su suegro, don Jaime Valenzuela, fue un muy querido amigo y consejero mío. Además, fue Leyva quien primero me invitó a participar en la política activa, cuando me ofreció postularme en la lista al Concejo de la población cundinamarquesa de Gachetá, siendo él suplente, cargo que ocupé a mediados de la década del setenta.

El país conocía de los contactos de Leyva con las FARC de tiempo atrás, desde cuando tomó la decisión de visitar Casa Verde, la simbólica sede de esta guerrilla, para entrevistarse con Jacobo Arenas, su fallecido líder, y se ganó la confianza de sus dirigentes y, muy especialmente, la de su máximo comandante, Manuel Marulanda. Él ha sido siempre un hombre obsesionado con la paz y ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa que esté a su alcance, por riesgosa que sea, para lograrla.

No me extrañó, por ello, que, en las últimas semanas de la contienda electoral, se acercara a mí para expresarme su deseo de colaborar en este tema. Si alguien podía hacerlo con conocimiento de causa era él. *"Yo tengo la llave para poder hablar con las FARC"* me dijo, e intercambiamos opiniones sobre la forma en que podíamos encarar el tema de la paz en la campaña.

Inicialmente le solicité que ventilara su propuesta más a fondo con Luis Alberto Moreno, gran amigo y hombre clave de mi campaña, con quien no estableció una buena química, específicamente porque Moreno se negó a prestarle su computador personal para enviar un e-mail a su contacto con las FARC. Entonces le pedí a Guillermo Fernández de Soto que continuara avanzando en los contactos con Leyva. Guillermo lo escuchó, pero mantuvo

serias dudas sobre la oportunidad de realizar una reunión con la guerrilla, especialmente por mis malas relaciones con el gobierno Samper, el cual no vería con buenos ojos ni facilitaría este tipo de acercamiento, más aún cuando podría ir en detrimento del candidato de su natural preferencia, que era Serpa.

Leyva, obstinado en su propósito, no se rindió ante la falta de eco con sus dos primeras aproximaciones y tomó la decisión de ir a la campaña a hablar con Víctor G. Ricardo, a quien conocía de tiempo atrás, pues ambos habían hecho política en Cundinamarca. Una vez más, reiteró su disposición para ayudar a coordinar un encuentro entre alguien de mi campaña y las FARC con el fin de restablecer confianza y romper la inercia que prevalecía frente al tema de la paz.

En su conversación, que continuó en una pizzería cercana, le comentó a Víctor G. que estaba muy dolido con el gobierno de Samper por el trato que le habían dado.

—Yo traté de hacer un puente entre ellos y las FARC, y terminaron atacándome. Me grabaron, interceptaron mis teléfonos e hicieron todo lo posible por dejarme mal parado frente a la opinión pública.

Ya concretando su propuesta, Leyva le preguntó a Víctor G.:

—¿Usted está dispuesto a reunirse con el Secretariado de las FARC? ¿Usted es capaz de ir?

A lo que Víctor G. le respondió:

—Yo estaría dispuesto a ir a dialogar con los miembros del Secretariado para explicarles personalmente cuál es la estrategia de paz del gobierno de Pastrana si es elegido presidente de Colombia.

Terminada la conversación, Víctor G. fue a mi oficina a plantearme la posibilidad de este encuentro. La analizamos largamente, con sumo cuidado. Había que sopesar los riesgos; mirar los posibles problemas jurídicos, incluso penales, de su realización; en fin, estudiar su oportunidad y conveniencia. Finalmente, aunque era consciente de los peligros que se corrían desde el punto de vista político, pues si la reunión salía mal los resultados podían ser totalmente contraproducentes, acabé concordando con él en la importancia de efectuar la reunión para abrirle al fin un camino a la paz.

Si había dicho que iba a liderar personalmente la búsqueda de la paz, era porque creía en la importancia del diálogo y del trato directo y cara a cara con las personas, más aún con los enemigos. Por eso mismo consideré que esta reunión sería una magnífica oportunidad para comenzar a aplicar estos postulados, que deberían marcar la diferencia de un nuevo proceso.

Comenté luego el tema con Guillermo Fernández de Soto y le indiqué que estaba convencido de que Víctor G., por su experiencia en los temas de paz, en los gobiernos de Betancur y de Gaviria, era el hombre indicado para realizar este primer contacto. Fue entonces cuando decidí poner en marcha el operativo, le comuniqué a Víctor G. la decisión final y le solicité

encargarse, con Leyva, de todos los detalles, eso sí, especificando que la reunión debía darse después de que expusiéramos nuestro plan de paz en el Tequendama, para que lo tuviera como documento de trabajo y propuesta básica en la reunión con la guerrilla.

Mi mensaje fundamental para Marulanda consistía en dejarle saber que considerábamos llegada la hora de la paz y que todos teníamos que hacer un esfuerzo para alcanzarla. Lo que esperábamos de ellos, por lo pronto, era obtener su confirmación sobre si estaban dispuestos a reanudar sus diálogos con el Estado en un eventual gobierno mío, más aún después de que se habían negado reiteradamente a conversar con el gobierno Samper, aduciendo que éste no tenía autoridad moral para hablar con ellos por haber sido elegido con el apoyo de dineros del narcotráfico.

Por supuesto, había una gran dosis de cinismo en esta exclusión, siendo ellos mismos un grupo ilegal que se financiaba con los dineros de las drogas, pero así funcionaba, y así funciona, la lógica "revolucionaria" de las FARC.

"ESTE RELOJ SIEMPRE VA A DAR LA HORA DE LA PAZ"

Ya con una propuesta concreta pusimos en marcha los preparativos para la reunión de Víctor G. con la guerrilla. Leyva comenzó a despachar mensajes expresando mi interés en enviar a un delegado para que personalmente les explicara cuál era mi programa y mi posición frente a la paz, y ellos finalmente accedieron a reunirse con él.

Lo que aconteció en ese primer encuentro, y los incidentes que lo rodearon, acabó convirtiéndose en una verdadera odisea para Víctor G. y Leyva.

De esta posible reunión sólo teníamos noticia en la campaña Guillermo Fernández de Soto y yo. Del resto, decidimos mantenerla en el mayor sigilo, para evitar malograrla por la intervención de factores externos. Aparte de nosotros, Víctor G. había comentado la posibilidad de este viaje al ex fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, a quien acudió con el fin de despejar las dudas de carácter penal. Rafael Pardo, que estaba de casualidad en su oficina, se mostró escéptico sobre la viabilidad de la reunión, pero manifestó que, de darse, sería un hecho realmente importante.

Víctor G., consciente del riesgo que corría, lo discutió con su esposa Alicia, y le dejó, incluso, una carta explicándole que asumía ese peligro porque consideraba que mi llegada al poder era necesaria, especialmente para romper el aislamiento internacional en que estaba sumido el país, y que debían hacerse todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz, por el bien de sus hijas y de las nuevas generaciones que, como ellas, merecían un mejor futuro.

El 14 de junio, después de evadir los escoltas, Alicia, entre disgustada y nerviosa, llevó a Víctor G. al aeropuerto, donde tomaría un avión de Aires hacia Florencia, la capital del Caquetá, en el cual estaría también Álvaro

Leyva, aunque tenían previsto no hablar ni sentarse juntos durante el vuelo para evitar cualquier filtración sobre lo que iba a pasar.

Al llegar a Florencia los estaban esperando Jairo Rojas —un político conservador muy cercano a Leyva, representante a la Cámara³— y un estudiante universitario que le servía, al igual que Rojas, de puente para enviar recados a la guerrilla. Subieron a un camión y emprendieron camino hacia San Vicente del Caguán, llegando al corregimiento de La Sombra hacia las 11 de la noche, donde pernoctaron en una especie de hotel hasta las 3 de la mañana, cuando dos hombres altos los despertaron y les anunciaron que debían levantarse y continuar la travesía, esta vez en una camioneta Toyota de doble cabina que los esperaba afuera.

Después de más de cuatro horas de camino, continuamente interrumpido por retenes de la misma guerrilla, llegaron a un campamento que estaba bajo el mando de Uriel, un guerrillero de gran importancia táctica que luego fue dado de baja por el Ejército. Después de una tensa espera de casi cinco horas, finalmente llegaron otras dos camionetas y se llevaron a Víctor G. y a Leyva, dejando a Rojas y al estudiante en el campamento, aunque más tarde enviaron por ellos.

Avanzaron durante otras tres horas, por un camino selva adentro, viendo siempre mucha guerrilla, hasta que, hacia las 7 de la noche, llegaron finalmente al lugar donde los esperaba el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC y miembro principal del Secretariado, rodeado de un numeroso grupo de guerrilleros. Una media hora después, apareció Manuel Marulanda, *Tirofijo*. Leyva hizo, entonces, una introducción sobre el propósito de la visita y presentó a Víctor G., como mi delegado, quien procedió a explicarles a los dos guerrilleros, en detalle, el plan de paz que había planteado en el discurso del Tequendama.

En un momento dado miró su reloj de pulsera, que era un reloj de la Nueva Fuerza Democrática, nuestro movimiento político, y Marulanda lo interpeló diciéndole:

—Doctor, ¿tiene mucho afán?

A lo que Víctor G. le respondió:

—No, todo lo contrario. Quería ver cuánto me había demorado haciéndole la exposición del plan.

Y entonces tuvo una idea espontánea que luego daría mucho de qué hablar:

—Pero lo que me parece es que usted debería tener este reloj —le dijo a Marulanda.

Sin más preámbulos, se lo quitó y se lo entregó al jefe guerrillero, quien se negó a recibirlo, hasta que Víctor G., en un gesto arriesgado, le tomó la mano izquierda y se lo puso, con estas palabras:

³ Jairo Rojas fue asesinado por los paramilitares en 2001.

—Mire, comandante, déjese puesto este reloj, que este reloj siempre va a dar la hora de la paz.

Desde ese momento Marulanda, que había estado hasta entonces bastante incisivo en sus preguntas y, de alguna manera, prevenido frente a su interlocutor, se mostró más abierto y distendido.

—Bueno, ¿entonces qué hay que hacer? —preguntó.

—Si usted piensa que se puede alcanzar la paz bajo este programa, basta con que manifieste expresamente que está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo a hablar de paz bajo una eventual presidencia de Andrés Pastrana —respondió Víctor G.—. Pero antes quiero hacerle tres preguntas fundamentales para saber si es posible una negociación.

Era algo que habíamos planeado en nuestras reuniones previas en la sede de la campaña, pues nos interesaba saber si podíamos partir con la guerrilla de un acuerdo sobre principios básicos.

—Primero: ¿ustedes respetarían la propiedad privada?

—Sí —respondió Marulanda—. Pero consideramos que hay que hablar de los tributos de la propiedad privada.

—Segundo: ¿ustedes respetarían la unidad nacional?

—Sí, a nosotros no nos interesa quedarnos con una porción del territorio nacional, sino hacer política para gobernar el país. Eso en política es viable.

—Tercero: ¿ustedes están de acuerdo en la democracia como sistema político?

—Sí estamos de acuerdo en la democracia —remató Marulanda—. Siempre y cuando tengamos las garantías necesarias para hacer política.

Entonces Víctor G., entendiendo que sobre esas bases mínimas era posible adelantar un diálogo, le sugirió que hicieran un pronunciamiento público sobre estos puntos y sobre su disposición de hablar conmigo en caso de que ganara la Presidencia.

—Bueno —accedió el jefe guerrillero—. Me ha gustado el plan para la paz, me parece que es viable. Además, creemos que Serpa no es el candidato de la paz. Es más, nosotros en él no confiamos. Él nos ha buscado, nos ha mandado mensajes de que quiere reunirse con nosotros, y nosotros no hemos querido reunirnos con él. Así que vamos a trabajar en un comunicado que tenga unos lineamientos generales, en el sentido de que he oído la propuesta de Pastrana y que nos parece interesante. Pero yo también tengo tres preguntas para hacerle a él, a través suyo.

Víctor G. se aprestó para el contrapunteo de Marulanda.

—Primera: necesitamos saber si él está de acuerdo en crear una zona de distensión para poder dialogar, que nos dé seguridades para el diálogo. Porque a nosotros no nos van a coger como en la Uribe, no nos van a poner en un lugar para luego bombardearnos. En esa oportunidad nos salvamos, pero cogimos experiencia. Así que necesitamos un escenario lo suficientemente seguro donde nos sintamos con garantías.

—No hay problema —respondió Víctor G.—. Ya Pastrana dejó claro en su discurso del Tequendama que está dispuesto a crear zonas de distensión para garantizar el diálogo sin interferencias y con seguridad para todas las partes.

—Muy bien —continuó Marulanda—. Lo segundo que queremos saber es si Pastrana va a combatir el paramilitarismo.

—Téngalo por seguro —enfaticó Víctor G.—. Mire que también está en su plan de paz. *"Mano dura contra el paramilitarismo"*. Nosotros entendemos que los paramilitares son una consecuencia de la degradación del conflicto que hay que erradicar, y los combatirá, como a todo aquel que obre por fuera de la ley.

—Finalmente, si Pastrana es elegido, ¿estaría dispuesto a reunirse con nosotros?

Víctor G. le respondió que era claro que yo iba a liderar personalmente el proceso, como presidente, y que ese era mi compromiso. Que él creía que yo sí estaría dispuesto a ir, pero que tendría que confirmarlo primero conmigo.

—Entonces nosotros expediremos un comunicado que diga esto que hemos hablado —concluyó Marulanda.

Ya había pasado la 1 de la mañana y Víctor G. propuso quedarse a dormir para llevarse al otro día el comunicado de la guerrilla. Marulanda, sin embargo, le recomendó que regresara de inmediato, aduciendo que al otro día iban a organizar un paro armado y que no podían responder por su seguridad, y le prometió que le haría llegar el documento a Bogotá.

Víctor G. insistió, entonces, en que, si no se llevaba la declaración firmada, por lo menos se tomaran unas fotos, para poder exhibir alguna prueba de que la reunión sí había tenido lugar. Al principio Jojoy se opuso, alegando que las fotos sólo servirían para reseñarlos, pero finalmente Marulanda accedió, y Leyva y Jairo Rojas tomaron unas fotografías, en las que Víctor G. puso sobre una mesa el periódico del día y una copia del discurso del Tequendama, para que quedara claro que la reunión había sido posterior a éste.

Marulanda, sin percatarse, dejó ver el reloj de la campaña que Víctor G. le había regalado, algo que no había estado planeado y que después fue agrandado por la prensa como una táctica publicitaria o como si quisiéramos decir que Marulanda era "pastranista" y que por eso podría pactar la paz conmigo. La verdad, fue un gesto espontáneo que no pasó de ser una anécdota simpática, aunque Jojoy le reclamara luego a Víctor G. por esta confusión, diciendo que los habían manipulado, asunto que quedó finalmente cancelado con la explicación que le dio.

Finalmente —y con dos compromisos: que ellos enviarían el comunicado y que yo respondería públicamente a sus tres interrogantes, sobre los cuales Víctor G. había anticipado mi segura aprobación— Víctor, Leyva,

Rojas y el estudiante, acompañados como siempre por un grupo de guerrilleros, emprendieron un accidentado y largo regreso a Bogotá, en medio de la oscuridad y el camino enlodado por la lluvia. El carro se les enterró en un río del que salieron prácticamente nadando, tuvieron que caminar un largo trecho, finalmente se bañaron y cambiaron en una casa cerca de la vereda de Caquetania, pasaron de nuevo por La Sombra y llegaron ya de mañana a Florencia, donde tomaron un avión que los regresó a Bogotá más de dos días después del inicio de su viaje.

Lo primero que hizo Víctor G., una vez llegó a la capital, fue llamar a la campaña, donde habló con Guillermo Fernández de Soto y le reportó que todo había salido bien. Sólo tenía la preocupación de que el rollo fotográfico se hubiera dañado dentro de la cámara por su caída al agua, por lo que pasó primero por un laboratorio y lo reveló, afortunadamente sin problemas.

Es de imaginarse la expectativa que se vivía en la sede de la campaña, donde ya se sabía sobre el encuentro de Víctor G. con el líder de las FARC. Yo estaba de gira fuera de Bogotá y no llegaba sino hasta la noche, por lo que Víctor se reunió primero con Guillermo Fernández de Soto, Luis Alberto Moreno y otros asesores, en un ambiente de exaltación por el buen resultado de su gestión.

A mi regreso —y una vez escuchado su relato— decidí que debíamos dar una rueda de prensa, por lo que convocamos de inmediato a los periodistas nacionales y extranjeros que estaban siempre pendientes de las noticias que salían de la campaña, especialmente en esos días previos a las elecciones de segunda vuelta.

Pusimos las fotos cubiertas sobre un papelógrafo y yo anuncié que tenía una noticia trascendental para Colombia y la comunidad internacional: que mi campaña había sostenido una importante reunión con la guerrilla, la cual podría ser la base para iniciar un proceso de paz, y que esto era consecuencia del plan integral que había expuesto al país en el Tequendama el pasado 8 de junio.

Le cedí entonces la palabra a Víctor G. para que narrara su experiencia y mostrara las fotos, cuyo descubrimiento formó una pequeña revolución entre los reporteros, que disparaban incesantes sus cámaras sobre ellas. Cuando Víctor G. dijo que la guerrilla había quedado de producir un comunicado confirmando los términos de la reunión, un periodista que estaba presente dijo: *"Sí, en este momento acaban de informarnos que están repartiendo el documento"*.

Así que las FARC habían cumplido y nosotros también. Sin duda, era un inicio promisorio para un eventual proceso de paz.

CAPÍTULO VI

El águila de la paz

El 21 de junio de 1998 los colombianos apoyaron masivamente mi programa de gobierno y mi propuesta de paz, eligiéndome presidente con una votación superior a los seis millones, cerca de medio millón más que mi contendiente, Horacio Serpa Uribe.

Durante la campaña me había comprometido a liderar personalmente el tema de la paz, reuniéndome con los líderes de la guerrilla si era preciso, y estaba dispuesto a cumplir mi palabra. Fue así como, una vez lograda la victoria, comenzamos de inmediato a diseñar una estrategia para llevar a cabo mi primera reunión con Manuel Marulanda.

A pesar de que algunos de los asesores más cercanos me advertían sobre el riesgo —y, para algunos, la inutilidad— de este encuentro, yo estaba decidido a realizarlo. Sabía que una reunión cara a cara era la única manera de ahuyentar el fantasma de la desconfianza que había impedido por años cualquier acercamiento de paz con la guerrilla.

Mi propuesta como candidato se había basado en mi íntima convicción en el poder del diálogo para alcanzar la paz, y ahora, como presidente electo, me correspondía ponerla en práctica. Mi intención era dar, desde muy temprano, un mensaje claro a la guerrilla sobre mi sincera voluntad de paz y no perder ni un solo día en este empeño fundamental. Con este viaje y este encuentro estaba rompiendo toda clase de paradigmas y asumiendo riesgos insospechados. No para otra cosa había buscado la Presidencia de la República.

Sin duda, resultaba no sólo inusual sino insólito que un presidente se reuniera a conversar con un líder guerrillero como yo lo iba a hacer. Era perfectamente consciente de esto. Sin embargo, mi compromiso era poner en marcha, sin demora, el "Mandato Ciudadano por la Paz" que los colombianos habían votado en octubre del año anterior y vuelto a ratificar con mi elección. Ese deber y ese respaldo fueron el combustible que alentó mi determinación.

Una vez más encargué a Álvaro Leyva y a Víctor G. Ricardo la organización de la reunión. Infortunadamente, una situación insospechada marginó a Leyva de los preparativos directos y, finalmente, del proceso de paz.

Para sorpresa de todos los que lo conocíamos y apreciábamos, la Fiscalía General de la Nación, entonces en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, inició una investigación en su contra y le dictó medida de aseguramiento por el delito de enriquecimiento ilícito, sustentada en el ingreso a sus cuentas de un cheque que provenía, presuntamente, de alguien relacionado con el mundo del narcotráfico. La noticia tomó a Leyva en México, donde realizaba contactos con Marcos Calarcá y Olga Marín, de las FARC, para coordinar el encuentro, y lo obligó a pedir asilo político en Costa Rica, por considerar que la investigación, más que un proceso judicial, era una cuenta de cobro por sus gestiones de paz.

Aunque al final se hizo justicia, y Leyva fue completamente exonerado años después, no dejó de ser una gran pérdida que una investigación sin fundamentos hubiera alejado a un hombre como él, con su compromiso y experiencia en el tema de la paz, de un proceso que se inició gracias a sus buenos oficios⁴.

A pesar de esto, Leyva en México, a través de la Internet, y Víctor G. en Bogotá, con la colaboración de Mario Flores y Darío Barberena, que habían participado en el grupo de análisis de las Naciones Unidas, y de un funcionario de esta entidad, comenzaron a preparar la reunión que habría de producirse entre el presidente electo de Colombia y el máximo líder de un grupo guerrillero.

Se determinó que el encuentro se realizaría en Caquetania, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, donde había un pequeño aeropuerto al que, varios años atrás, llegaban aviones de Satena, la línea aérea comercial de la Fuerza Aérea Colombiana.

Mi viaje tenía que cumplirse en completo secreto para evitar cualquier interferencia que lo frustrara, y así lo planeamos. Por eso mismo, era indispensable determinar, de la manera más sutil posible, si en la fecha prevista habría alguna clase de operativos militares en el área, para precaver cualquier riesgo de seguridad. Con este objetivo, Víctor G. se reunió a almorzar el día anterior, en el Club Militar, con el general jefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares, quien, en medio de una extensa conversación, y sin tener idea de mi inminente viaje, terminó por confirmarle que no había ninguna operación militar en marcha en esa zona.

También era importante escoger el medio ideal de transporte, por lo que decidimos pedirle prestada una avioneta a la Cruz Roja, pensando en que su emblema podría protegernos de un eventual ataque. Hablamos con Alberto Bejarano, director nacional de la Cruz Roja, quien no sólo nos fa-

⁴ Durante seis años, el caso de Leyva fue ventilado en un Juzgado Especializado de Cali y en el Tribunal Superior de Cali, instancias que determinaron que la suma de dinero correspondía al pago de un negocio perfectamente lícito. Su absolución fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2004.

cilitó la aeronave sino que permitió que nos acompañara, como testigo, el alemán Teddy Tornbaum, director regional de la Cruz Roja en los Llanos Orientales⁵.

Por otro lado, teníamos que diseñar una estrategia en Bogotá para que yo pudiera quitarme de encima la seguridad que en ese momento tenía como presidente electo, así como el continuo seguimiento de la prensa, que no me dejaba a sol ni a sombra desde el mismo momento de mi elección.

Por esos días, por otra parte, yo tenía presupuestado un viaje a Francia, invitado por mi buen amigo Nicolás Leoz, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, para asistir al Campeonato Mundial que se celebraba en dicho país, viaje que aprovecharía para cumplir una serie de visitas a presidentes europeos, dando los primeros avances de lo que luego sería nuestra "Diplomacia por la Paz".

Pendiente de la reunión con Marulanda, atrasé mi desplazamiento al exterior, enviando a Nohra y a mis hijos por adelantado, y me quedé en Bogotá al tanto de los preparativos. Finalmente todo estuvo listo para que la reunión se llevara a cabo el 9 de julio. Leyva había cumplido su parte en México y Víctor G. había enviado en su camioneta particular, como avanzada a Florencia y luego a Caquetania, a Mario Flores y Jairo Rojas. Las FARC, entre tanto, habían reforzado su presencia en la zona con más de 2.000 guerrilleros ubicados en sucesivos anillos de seguridad, dispuestos, según decía Marulanda, para garantizar mi protección durante el encuentro.

Con el fin de distraer la atención de la prensa y tener una excusa para perderme del panorama durante la mañana del 9 de julio, convocamos para la noche anterior un multitudinario coctel en la casa de Víctor G., al que invitamos a la gente de la campaña, los políticos amigos, parlamentarios y representantes de los gremios. La idea era aprovechar la reunión para discutir los últimos detalles del viaje con Víctor G. y con Guillermo Fernández de Soto, que era el único enterado del mismo dentro de mi círculo de confianza, y extenderla la mayor cantidad de tiempo posible para que todos pensarán que en la mañana siguiente me quedaría a descansar en mi apartamento. Nadie se excusó, pues todos querían aprovechar la oportunidad para dialogar e intercambiar opiniones con el presidente electo a pocos días de la posesión.

Salí muy tarde del coctel, alrededor de la una, y al regresar le dije a mis escoltas que no era necesario que llegaran temprano, pues iba a permanecer en casa toda la mañana. Yo estaba con el coronel Germán Jaramillo, quien había trabajado conmigo por más de diez años, desde cuando fue mi edecán de Policía durante mi período como alcalde de Bogotá, y se desempeñaba en ese momento como mi jefe de Seguridad. Lo invité a subir a mi apartamento y le conté que esa misma mañana viajaría a encontrarme con el jefe de

⁵ Teddy Tornbaum falleció en Villavicencio en octubre de 2002.

las FARC. Él quedó impactado, y me preguntó si teníamos todo coordinado. Le respondí que sí y fui muy claro al decirle que no podía pedirle que me acompañara, pues no quería ponerlo en dificultades ante sus superiores, pero que sí necesitaba su ayuda para poder sortear la seguridad de mi residencia, que entonces constaba de una patrulla a la entrada del edificio al mando de un teniente, un policía que estaba en la recepción y otro que estaba en el garaje, y cerca de 30 soldados del Batallón Guardia Presidencial. Él accedió a ayudarme para que pudiera salir sin problemas y además insistió en acompañarme a la reunión, corriendo los riesgos que fueran necesarios.

Por supuesto, su presencia me daría mayor tranquilidad, por lo que acepté su ofrecimiento. Así pues, lo cité de nuevo en la casa a las 5:30 de la mañana, le di una cámara fotográfica y quedamos en que lo iba a presentar como mi fotógrafo para proteger su identidad frente a la guerrilla.

Prácticamente no dormí en las pocas horas que quedaban antes del amanecer, pensando en la reunión que se avecinaba y en su singular trascendencia. Hablé con Nohra, en Francia. Ella, por supuesto, estaba muy nerviosa ante los peligros que implicaba mi viaje y la cita con Marulanda, pero, superando sus temores, trató de darme toda la fuerza y el apoyo posibles.

Yo, en mi vigilia, no dejaba de pensar en la importancia del encuentro y en los posibles escenarios y sus consecuencias. Por algún motivo, nunca albergué ninguna duda o temor de que me secuestraran, aunque sí consideraba el riesgo de quedar atrapado en medio de un fuego cruzado. Lo que más me preocupaba de todo era cómo sacar el máximo provecho a la reunión, para plantar la semilla de un proceso de negociación. Estaba dispuesto a jugármela toda por darle esa posibilidad a la paz, y no podía perder esta oportunidad. Para eso, precisamente, había sido elegido.

EL PRESIDENTE Y TIROFIJO

Cuando Jaramillo regresó a la madrugada, el teniente le preguntó si ocurría algo y él le respondió que estaba pasando revista. Además, le pidió a los dos policías que estaban en el edificio que salieran a verificar cuántos soldados estaban de guardia, porque él "*veía muy poquitos*". En ese momento me avisaron de la recepción que había llegado Víctor G., quien venía en la camioneta de su esposa, con vidrios polarizados, y estaba acompañado por Juan Perilla, un camarógrafo del Noticiero TV Hoy, a quien yo le había pedido que fuera muy temprano a la casa de Víctor G., bajo el pretexto de que él tenía que grabar unas declaraciones importantes.

Bajé al garaje, donde Víctor había parqueado la camioneta, me subí, y salimos rápidamente, con el coronel Jaramillo y Perilla, rumbo al aeropuerto. Nadie se dio cuenta de quiénes íbamos en el interior. En el carro se respiraba nerviosismo, especialmente por parte del camarógrafo, que era el único que no sabía para dónde iba ni por qué estábamos haciendo todo en el más ab-

soluto sigilo. Finalmente, llegamos al aeropuerto, al hangar de Talleres Ciro, donde estaba la avioneta de la Cruz Roja y nos esperaba Teddy Tornbaum. Cuando los asombrados pilotos me vieron, comprendieron, sin nosotros decirles nada, que íbamos a una misión muy importante. La avioneta ya estaba prendida y nos subimos de inmediato. El vuelo duró cerca de hora y media.

Víctor G. les había dado a los pilotos un destino oficial, cercano a Caquetania, para que lo informaran en su plan de vuelo, pero sólo a mitad del trayecto les entregó las coordenadas exactas de la pista donde debíamos aterrizar, explicándoles que no se las había dado antes por razones de seguridad. Les pidió que informaran que íbamos a aterrizar en la pista original, donde no había un controlador de vuelo que pudiera verificar si habíamos llegado o no, de forma que quedara registro de que aterrizamos y no nos reportaran como perdidos.

Las condiciones climáticas, entre tanto, eran terribles. No teníamos visibilidad para aproximarnos y, en un momento dado, el piloto nos advirtió que era muy posible que tuviéramos que regresar a Bogotá por el mal tiempo. En mi interior, me dije que sería increíble que la reunión se frustrara faltando tan poco, pero pensé también que todo estaba en las manos de Dios. No acababa de terminar esta reflexión, cuando el piloto nos informó que se había abierto un hueco en las nubes y que íbamos a bajar para aterrizar.

Víctor G. le indicó al piloto que la pista era muy pequeña y que debía tomarla desde el principio, por lo que primero dio una vuelta de reconocimiento y divisó una cantidad de uniformados esperándonos. *“¿Es allá, donde está el Ejército?”*, preguntó, y nosotros asentimos sin mayores explicaciones, para no generarle una preocupación adicional durante el descenso.

Finalmente, el aterrizaje resultó muy complicado, pues el piloto no pudo tomar la pista desde su inicio, además de que estaba bastante húmeda por la lluvia. El avión patinó ostensiblemente, en tanto el piloto utilizaba toda la fuerza de los motores y de los frenos para detenerlo. Yo veía saltar guerrilleros a lado y lado de la pista, y me di cuenta de que al final había un pequeño precipicio, al cual nos acercábamos inexorablemente. Casi en el límite del abismo, la avioneta frenó y todos quedamos aferrados a nuestros asientos, pálidos del susto. Antes de salir, Víctor G. les aclaró la situación a los pilotos:

—Voy a explicarles, ahora sí, el significado de esta visita. Esa gente que está afuera no es del ejército sino de la guerrilla, y venimos para que el presidente electo tenga una entrevista con sus líderes.

Ellos quedaron atónitos, pero no les quedaba más remedio que aceptar la situación. Entonces nos bajamos de la avioneta y fuimos recibidos por los guerrilleros, todavía azorados por el dramático aterrizaje. Lo primero que hicieron fue decirles a los sorprendidos pilotos que quedaban retenidos hasta nuestro regreso, cosa que, por supuesto, los molestó mucho, pues se

sintieron secuestrados. Los dejaron en un cuarto de lo que había sido el antiguo aeropuerto. Allí había unos cuantos campesinos, que se acercaron a saludar sin poder dar crédito a lo que veían sus ojos.

Varias camionetas, incluyendo la que Víctor G. había enviado anticipadamente con Mario Flores y Jairo Rojas, nos esperaban para llevarnos al lugar de la reunión. Yo me monté con Víctor en una que manejaba el conductor de Uriel, el comandante guerrillero que primero recibió a Víctor G. en su visita anterior, además de Jaramillo y Perilla, que iban atrás, y comenzamos un recorrido de unos 45 minutos por unas trochas en medio de la selva, pasando por varios retenes o cinturones de seguridad de la guerrilla, desde los cuales ellos iban informando de nuestro paso y nuestra posición. Todos estaban armados "hasta los dientes". Incluso, el conductor de mi carro, a quien el arma le estorbaba para manejar, me pidió que se la llevara durante el trayecto.

Mientras avanzábamos sonaba, como música de fondo, un casete de vallenatos revolucionarios a todo volumen. Le pregunté al conductor quién era el cantante y me dijo que era el compañero Julián Conrado, que había grabado varios casetes y que en la guerrilla era muy popular. A este compositor guerrillero lo vine a conocer luego, el 8 de febrero de 2001, cuando regresé al Caguán.

Mi pensamiento giraba en torno al encuentro que se hacía inminente. Muchas veces me han preguntado si sentí temor al ir a encontrarme con la guerrilla en condiciones de total indefensión y sin saber, a ciencia cierta, lo que me esperaba. La verdad, no. Siempre tuve muy claro que la única manera de encarrilar un proceso de paz era rompiendo paradigmas y construyendo confianza, y eso era lo que estaba decidido a hacer. Por supuesto, la adrenalina estaba en su máximo nivel. Estábamos en medio de la selva, sin que nadie lo supiera, a punto de encontrarnos con el líder de un grupo que había hecho un inmenso daño al país, pero que, al mismo tiempo, representaba una figura de la que había oído hablar toda mi vida. Eran momentos de tensión pero al mismo tiempo de esperanza, pues era consciente de que ese día comenzaba una real oportunidad para la paz.

Después de una curva, el carro frenó intempestivamente y comenzó a echar reversa hasta llegar a un matorral donde había un grupo grande de guerrilleros. Inmediatamente reconocí a su jefe Manuel Marulanda en compañía del Mono Jojoy y de otros miembros de su organización. Los acompañaban Iván Ríos y otros jefes de menor nivel, que luego habría de conocer mejor, pero que entonces no identificaba. Noté que entre los guerrilleros había varias mujeres, con filmadoras y grabadoras, listas para dejar testimonio de esta reunión histórica.

Pensé, entonces, que debía ser muy cuidadoso con la forma de saludar al viejo guerrillero, algo de lo que siempre me cuidé en los distintos encuentros que tuve con él. Tenía que ser lo suficientemente cálido para generar con-

fianza pero, al mismo tiempo, lo suficientemente distante para marcar diferencias e imponer el respeto y autoridad que mi investidura demandaba.

Me bajé del carro y ellos se acercaron a saludarme. El primero fue Manuel Marulanda, quien me puso las manos sobre los hombros, a la manera afectuosa de los campesinos de Colombia, y me dijo:

—Señor presidente, bienvenido. ¿Cómo le fue?

Yo sentía la importancia del momento. Era la primera vez en la historia del país en que un presidente se encontraba cara a cara con un jefe de la guerrilla, levantada en armas contra el Estado. Mi saludo correspondió a su cordialidad, pero marcó también la distancia que implicaba mi posición como representante de un pueblo que había sido golpeado por casi cuatro décadas por la violencia de las FARC. Se trataba, en todo caso, de romper el hielo después de años de silencios, incomprensiones y afrentas que no habían causado otra cosa que dolor y miseria. Por otro lado, cuando Marulanda me saludó "*señor presidente*" ya estaba haciendo un reconocimiento muy importante, de respeto y acatamiento a la dignidad de mi cargo.

Pasado este primer momento, saludé a los demás guerrilleros, comenzando por el Mono Jojoy, a quien reconocí por las recientes fotografías con Víctor G., quien me dio la mano con la reciedumbre y tosquedad propias de un jefe militar. Terminadas las presentaciones, Marulanda nos invitó a sentarnos en una mesa que habían improvisado debajo de un cambuche, bajo la sombra de unos árboles muy frondosos. La mesa y los asientos eran de plástico, y la tierra estaba recién removida, lo que mostraba que éste no era un campamento permanente sino que lo habían adecuado específicamente para la reunión.

Marulanda se ubicó junto a Jojoy y otros dos guerrilleros, uno de los cuales tomaba notas de todo lo que hablábamos. Tres guerrilleras grababan y filmaban. Conmigo se sentaron Víctor G, Mario Flores y Jairo Rojas, estos últimos un poco retirados. Teddy Tornbaum estaba parado a algunos metros de distancia y el coronel Jaramillo, a quien presenté como mi fotógrafo, se dedicó a tomar fotos durante toda la reunión. Perilla, por su parte, intentó filmar pero su cámara resultó afectada por la humedad del ambiente, por lo que las tomas que luego se conocieron de la reunión no fueron suyas sino de las guerrilleras, que al final me regalaron un casete para traer a Bogotá.

Sin duda, Marulanda y sus hombres estaban muy impresionados con mi llegada. En el fondo, jamás habían creído que les fuera a cumplir la cita y este primer acto de confianza fue fundamental para los avances que luego se dieron. Como me dijo luego el mismo Marulanda, consideraron que el hecho de que yo hubiera cumplido mi palabra y que me encontrara con ellos en medio de la selva "*era una prenda de garantía para comenzar un proceso*".

Su tratamiento hacia mí siempre estuvo marcado por el mayor respeto. Siguiendo la pauta marcada por el mismo Marulanda desde su primera frase

de bienvenida, todos los guerrilleros se dirigían a mí como "señor presidente", y esa fue su conducta reiterada, no sólo en ese primer encuentro, sino durante todo el proceso.

Iniciamos la reunión tocando temas generales, en el ánimo de comenzar a generar confianza. Las guerrilleras, entre tanto, trajeron chocolate, patacones y lomo de cerdo frito para el desayuno, que era, para ellos, la principal comida del día. Yo le pregunté a Marulanda cuántos hombres había dispuesto para la seguridad del encuentro y él me confirmó que unos dos mil en anillos de protección que llegaban hasta los 200 kilómetros. Hablamos de otros procesos de paz, del bombardeo de la Uribe en el gobierno de Gaviria y de la reciente operación "Destructor II" que había lanzado el gobierno Samper sobre esa zona, de la que las FARC habían salido bien libradas a pesar de los miles de millones de pesos que costó. Según Marulanda, el Ejército no pudo pasar del río Caguán.

—Por aquí caían las bombas, pero sólo lograron matar un par de vacas y unos marranos —refirió el guerrillero con sorna de viejo zorro.

También se hizo mención sobre cómo mi padre siempre se había comprometido con la paz y no dejó de llamarme la atención la forma respetuosa en que se refirieron a él. Llegados al tema del medio ambiente, Marulanda comentó que era una de sus preocupaciones.

—Aquí en la guerrilla, señor presidente, cuidamos el medio ambiente. Es más, nosotros tenemos épocas de veda de cacería y si sorprendemos a los campesinos cazando fuera de ellas hasta los multamos. Matar un venado, por ejemplo, tiene una multa de 500.000 pesos.

Después de este inicio, hice una breve introducción y les hablé sobre mi propuesta de paz, que era la misma que había expuesto en el discurso del Hotel Tequendama y que Víctor G. ya les había resumido en su encuentro anterior.

Terminada mi exposición, encendí un tabaco y escuché a Marulanda, que se concentró en el tema del paramilitarismo, el cual era, sin duda, central en sus preocupaciones. Él insistía en que se trataba de una política de Estado y yo le argumentaba en contra, diciéndole que, si bien podían existir en las Fuerzas Militares algunos pocos miembros vinculados con el paramilitarismo, de ninguna manera era una política de Estado. "*Es más*", le dije, "*mi obligación como presidente de la República será combatirlos, al igual que los combatiré a ustedes por fuera de la zona de distensión —si la creamos—, en tanto no exista un acuerdo de cese de fuegos y hostilidades*".

En un momento dado, Marulanda tocó el tema de Álvaro Leyva y manifestó que para ellos era muy importante que él estuviera vinculado al proceso. Yo estaba de acuerdo. Leyva había sido un defensor de la paz, así muchos no quisieran ver los esfuerzos que él había realizado en ese sentido, e incluso los hubieran malinterpretado. Le dije a Marulanda que confiaba en que él podría probar su inocencia frente a los cargos que le imputaban, pero que

no nos quedaba otro camino que esperar el fallo de la justicia, algo sobre lo cual yo no tenía la menor influencia. *"Sin embargo"* —agregué—, *"una vez liberado de sus cargos, siempre habrá un lugar para Leyva en el proceso de paz, como lo habrá para todos los colombianos que, como él, sepan de paz y quieran trabajar por ella"*.

Llegados a este punto entramos de lleno a hablar sobre la posibilidad de desmilitarizar cinco municipios, algo que ellos ya le habían planteado a Víctor G. desde la reunión del mes anterior. Los municipios serían San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, y Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, en el departamento del Meta, para una extensión total de unos 42.000 kilómetros cuadrados. Ellos hablaban de "desmilitarización" y yo hablaba de "despeje" para crear la Zona de Distensión, una opción que yo ya había esbozado en el programa de paz que resumí en el discurso del Tequendama.

Inicialmente, sin embargo, le insistí a Marulanda en que considerara la conveniencia de realizar el proceso de diálogo en el exterior, donde no tendríamos tanta presión, ni de la opinión pública ni de los medios de comunicación, que siempre están esperando que se generen noticias día tras día. Él respondió con una frase que siempre volvería a esgrimir cada vez que se consideraba esta posibilidad:

—La paz de Colombia la hacemos los colombianos en Colombia y no fuera de aquí.

Además, dijo que nadie podía garantizarle su seguridad en el extranjero, algo que era de su mayor preocupación, pues pensaba que fuera del país podría ser secuestrado por los norteamericanos y ser sometido a un juicio en el exterior.

Entonces seguimos avanzando sobre el tema de la Zona de Distensión. Yo le dije a Marulanda:

—Tiene que quedar muy claro que dentro de la zona hay que respetar la Constitución y la ley, lo que implica, en primera instancia, el hecho de que ustedes deben respetar a las autoridades políticas de la zona, elegidas democráticamente; que ustedes respetarán los derechos de los habitantes y la libre locomoción de ellos en el territorio despejado, y que el Estado hará presencia permanente en la zona.

Reafirmé una y otra vez que ésta sería una zona para dialogar y no para delinquir, y que cualquier acto que yo desarrollara para crearla y mantenerla tendría que estar enmarcado dentro de la Constitución y la ley.

Como ellos hablaban de la desmilitarización, incluyendo en ese término a la Policía Nacional, les propuse que se creara una policía cívica, dependiente de los alcaldes, para respaldarlos en el ejercicio de la facultad de jefes de policía que les otorga la ley. Marulanda estuvo de acuerdo con la creación de este cuerpo especial de seguridad y me aseguró que las autoridades municipales serían acatadas y que respetarían igualmente el derecho a la libre

movilización de los habitantes de la zona, la cual tendría, exclusivamente, propósitos de seguridad y de diálogo. Yo especifiqué, además, que los miembros de la policía cívica debían ser entrenados por la Policía Nacional, y que llevarían un uniforme diseñado por nosotros y armas cortas proporcionadas por el Estado.

Finalmente, acordamos una especie de cronograma para iniciar el proceso, al que bauticé 90-90-90 por los términos que fijamos. En los primeros 90 días a partir de mi posesión, me comprometí a establecer, utilizando las facultades que me confería la Ley 418 de 1997, promulgada por el gobierno Samper, una Zona de Distensión en los cinco municipios convenidos. A partir de entonces, tendríamos otros 90 días para verificar que se cumplieran las condiciones mismas de la Zona, vale decir, que se desmilitarizara y se creara la Policía Cívica para apoyar a las autoridades municipales. Luego correría un tercer término de 90 días durante el cual se establecería una reglamentación del diálogo y una agenda de discusión, que debería llevarnos de la etapa del diálogo a la de la negociación propiamente dicha.

Era claro que, si no se daban esas condiciones, simplemente se acababa la Zona de Distensión, pues su único propósito era facilitar el diálogo y llegar a unas negociaciones serias. Fue entonces cuando le dije a Marulanda que, si se terminaba la zona, las FARC tendrían 48 horas para salir de ella antes del reingreso de la Fuerza Pública.

La conversación fluyó sin contratiempos y yo sentí, durante el tiempo en que estuvimos sentados a la mesa, que había en ellos, especialmente en Marulanda, una buena receptividad, causada en gran parte por el hecho de que yo hubiera cumplido mi palabra y me hubiera arriesgado a viajar hasta allá para abrirle un compás de esperanza a la paz.

La reunión ya llevaba cerca de dos horas. Entonces, Víctor G. miró su reloj:

—Presidente, me muero de la pena, pero si no nos vamos ya, no van a poder justificar su ausencia después de la una de la tarde.

A lo que Marulanda replicó, en tono de queja:

—¡Ya el doctor Víctor G. nos va a acabar la reunión con el presidente!

Pero no fue más que un comentario, pues él mismo era consciente de que si no me iba pronto, era posible que comenzaran a buscarme y que llegaran aviones de rastreo hasta la zona.

—Sí, señor presidente, es mejor que se vaya. No vaya a ser que de pronto vengan por aquí aparatos a hacernos pacería.

Yo terminé la reunión con estas palabras:

—Mire, Marulanda, si vine hasta acá a hablar con usted es porque estoy dispuesto a cumplir con mi palabra. Hoy no vamos a firmar ningún documento porque de nada sirve escribir algo ahora si no tenemos, de principio, una decisión de cumplir la palabra. Lo que hemos acordado usted y yo es

lo que cuenta, y por eso no me llevo ningún papel firmado, sino su palabra, que es más importante. Vamos a confiar en la palabra.

Él estuvo de acuerdo y dejamos la reunión en ese clima de confianza. Fue por eso que el 7 de enero de 1999, cuando instalé la mesa de diálogos con las FARC, ante la notoria ausencia de Manuel Marulanda, incluí esta frase en mi discurso: *"Vengo a San Vicente del Caguán, como jefe de Estado, a cumplir mi palabra"*.

En el fondo, mi mensaje a Marulanda era que él se había comprometido a acompañarme en ese acto y que no lo había cumplido. De hecho, en las reuniones posteriores, cuando yo le mencionaba esa ausencia, Marulanda se veía muy mortificado, pues sabía que había faltado a su compromiso conmigo. En la cultura campesina la palabra empeñada vale más que cualquier documento firmado.

Yo estaba muy contento con la reunión y con sus resultados pues habíamos logrado los objetivos propuestos. Este primer diálogo estaba dando frutos y mi impresión era que ellos también se sentían satisfechos con los avances. Lo más importante era que se había roto la desconfianza de muchos años y se comenzaban a explorar fórmulas concretas para iniciar un proceso de paz.

Antes de despedirme, les pregunté por el baño, y Marulanda me dijo: *"Venga y lo llevo"*. Fue así como atravesé el cambuche, escoltado a un lado por el mismo Tirofijo y al otro por el Mono Jojoy, rumbo al precario lugar que tenían dispuesto para esos efectos. Como periodista, no podía dejar de pensar en cómo sería una foto del presidente electo de Colombia caminando entre los dos guerrilleros más reconocidos y temidos del país, acompañándolo al baño.

De camino, pasamos por el lugar donde preparaban la comida, que estaba lleno de guerrilleras, y les dije que era el colmo que las tuvieran escondidas en la cocina, en tanto los hombres se encargaban de la negociación, y que ellas tenían que exigir que les dieran un lugar más protagónico. Al volver del baño, las guerrilleras me pidieron que me tomara unas fotos con ellas, cosa que hicimos. Después el coronel Jaramillo, nuestro supuesto fotógrafo, nos tomó las fotografías en que aparecemos Víctor G. y yo con Marulanda y Jojoy. Todavía hoy me pregunto qué habrán pensado los jefes guerrilleros cuando vieron pocos días después la foto del coronel Jaramillo en el periódico, nombrado como nuevo director del Departamento Administrativo de Seguridad, es decir, como la cabeza del más importante organismo de inteligencia del Estado.

Según me dijo Teddy Tornbaum, los guerrilleros rasos estaban muy sorprendidos y emocionados por mi presencia en ese lugar. Muchos se le acercaron a confirmar si yo era el presidente electo, pues nunca se imaginaron que llegaría hasta allá.

Antes de subirme al carro, le reiteré a Marulanda mi firme propósito de iniciar un proceso de paz serio y responsable si encontraba en ellos la misma

intención y le dije que esperaba encontrarme de nuevo con él, ya como presidente de la República en propiedad, en el acto de instalación de la mesa de diálogo. Nos despedimos de forma cordial y tomamos el camino de regreso hacia el aeropuerto donde habían quedado la avioneta y los pilotos.

Fueron casi 45 minutos de trayecto, en el cual sucedió algo singular. Durante casi todo el recorrido, un águila de buen tamaño nos estuvo acompañando, volando serena al lado del vehículo. Con su imponente y simbólica presencia sentí que la vida nos enviaba una señal positiva, algo así como un guiño o un augurio del destino, y que el proceso que iniciaríamos sería muy importante para el futuro del país.

Al llegar a la pista de Caquetania, los guerrilleros liberaron a los pilotos, que no ocultaban su molestia; nos despedimos y despegamos alrededor de la 1 de la tarde. Ya en el aire, esperamos a que el teléfono celular de Víctor G. diera señal y, apenas la tuvimos, llamamos a Guillermo Fernández de Soto, quien debía estar muy preocupado porque nosotros le habíamos dicho que la reunión no se demoraría más de una hora y ya habían pasado más de tres. Yo le dije a Guillermo: *"Misión cumplida"*, y él me contestó, con voz de alivio: *"Por fortuna. ¡Nos salvamos!"*.

UNA NOTICIA PARA COLOMBIA Y EL MUNDO

Es necesario contar cuál fue el papel de Guillermo Fernández de Soto en Bogotá mientras nosotros viajábamos a la selva. Dos días antes había hecho yo el anuncio de que lo iba a designar a él, por su experiencia y capacidades, como mi ministro de Relaciones Exteriores. Aprovechando esta coyuntura, les pedí al general Rosso José Serrano, director general de la Policía, y al coronel Óscar Naranjo, jefe de Inteligencia del mismo organismo, que atendieran esa mañana a Guillermo, quien, como nuevo canciller, necesitaba estar bien enterado del tema de seguridad, de la cooperación internacional y los avances en la lucha contra el narcotráfico. La idea era que, si surgía algún problema o nos pasaba algo, Guillermo pudiera informarlo inmediatamente a las autoridades de policía para que se realizaran las operaciones que fueran pertinentes.

Durante toda la mañana, Guillermo interrogó concienzudamente al general Serrano y al coronel Naranjo, esperando, entre tanto, recibir noticias nuestras. En vista de la demora, comenzó a pedir información adicional hasta que el general Serrano, viendo la insistencia y el interés de su interlocutor, le dijo: *"Bueno, ministro, si quiere pedimos almuerzo"*, a lo que no le quedó otro remedio que acceder. Finalmente, cuando yo llamé, Guillermo pudo dar por terminada la reunión y les dijo a los altos oficiales antes de marcharse: *"Les recomiendo que sintonicen las estaciones de radio porque muy pronto se van a enterar de una noticia mundial"*. Serrano interpeló entonces a su jefe de Inteligencia y le dijo: *"Naranjo, ¿qué pasa?"*, a lo

que él le respondió: "*¿Cómo voy a saber, mi general? ¡Si nos tienen encerrados aquí desde hace cinco horas!*".

Aterrizamos en Bogotá y nos fuimos directamente a revelar las fotos. Llegando al laboratorio casi nos estrellamos con un carro, que resultó ser el de Daisy Cañón, una buena amiga y periodista, que había trabajado conmigo en TV Hoy. Ella se sorprendió mucho al ver a Víctor G. manejando, conmigo a su lado, en traje deportivo y sin ninguna clase de escolta. Con su buen olfato periodístico, nos saludó y a los pocos minutos dio un extra en la televisión, anunciando que una noticia importante venía en camino.

Mandamos revelar las fotos y seguimos hacia la sede del Noticiero TV Hoy, que era propiedad de mi familia, con el fin de editar la cinta de video que le íbamos a dar luego a los periodistas. Por supuesto, cuando llegamos al noticiero, Olga Isabel Echeverri, la gerente, y los demás empleados dedujeron también que algo pasaba, especialmente cuando me vieron vestido de manera informal y con los zapatos embarrados. Yo me encerré con el editor, Enrique del Castillo, y monté la noticia, en tanto el coronel Jaramillo llamaba a mis escoltas y los citaba en las oficinas del noticiero. De allí salimos para la sede de la campaña en la calle 72, donde convocamos de inmediato a una rueda de prensa para hacer público todo lo que había sucedido en esta primera reunión con las FARC.

Cuando llegué a la sede, lo primero que hice fue llamar a Nohra a París para contarle que, gracias a Dios, todo había salido bien. Ella, que durante todo el día no había hecho cosa distinta que recorrer iglesias y rezar por el buen éxito de mi viaje, estaba muy emocionada. Al día siguiente, le prometí, estaría viajando a reunirme con ella y con los hijos.

Me comuniqué también con el fiscal, Alfonso Gómez Méndez, para informarle de la reunión que sostuve con Marulanda, Jojoy y otros guerrilleros, pues quería que se enterara por mí y no por los medios de comunicación. Lo mismo hice con el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, quien me había estado llamando para acordar una posición conjunta frente a la posible negociación con el ELN, un tema en el que él había trabajado incansablemente.

En la sede comentamos el encuentro con todos los amigos, en un ambiente de alegría y esperanza, y salí al salón de prensa a dar las declaraciones. Estaba colmado de periodistas nacionales e internacionales. Sin duda, la reunión Pastrana-Tirofijo era la "chiva" periodística más grande de los últimos tiempos en el país, y al día siguiente la foto mía con Marulanda fue la primera página en todos los periódicos nacionales y en varias publicaciones del exterior.

Esa noche, en la soledad de mi apartamento, pensé, agradecido, que habíamos dado un gran paso en la historia de Colombia. Era la primera vez que un presidente se reunía cara a cara con el jefe del mayor y más antiguo grupo guerrillero del país. La reunión había sido positiva y yo estaba

seguro, por lo sucedido ese día, de que las FARC estaban dispuestas a iniciar un proceso serio de negociación.

Me dormí pensando que la paz de Colombia sí era posible, aunque también tenía muy claro que el camino iba ser largo y tortuoso, y que debíamos tener mucha paciencia. La imagen del águila, altiva y silenciosa, volando impávida hacia el horizonte, volvió recurrente a mi mente y fue el último recuerdo de esa jornada que habría de cambiar para siempre el rumbo del país.

CAPÍTULO VII

“Nadie entra y nadie sale”

Llegó, finalmente, el 7 de agosto de 1998, día de mi posesión como presidente de Colombia. Los preparativos para la ceremonia habían sido intensos, tanto para el acto mismo como para el inicio de las acciones del Gobierno. Ese día tuvimos una amplia participación internacional, como pocas veces se había visto en la posesión de un presidente, pues las expectativas sobre el nuevo gobierno eran muy grandes. El triunfo había sido claro y el momento del “cambio” —lema de mi campaña— había llegado. No podía ser inferior al reto que me había impuesto y que había propuesto a los colombianos.

Dentro del equipo de gobierno sabíamos que las cosas no serían nada fáciles. Si bien es cierto que los equipos designados para el empalme habían empezado a trabajar desde semanas atrás, la realidad que descubríamos era aún peor de lo que imaginábamos. La crisis económica, política, internacional y militar que recibíamos⁶ nos obligaba a actuar de manera rápida en todos los frentes. Lo que nadie podía suponer era que en los primeros seis meses tuviéramos que sortear tantas y tan difíciles situaciones.

En el primer semestre de mi gobierno se iniciaron las reformas para estabilizar la economía, incluyendo la declaratoria de una emergencia económica en la que tomamos medidas urgentes de salvación de la banca y el sector cooperativo, es decir, del ahorro y la vivienda de millones de colombianos. En el campo internacional, me reuní con más de 40 jefes de Estado o de Gobierno, y presenté mi programa de paz ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dando inicio a la reinserción del país en la comunidad internacional; se alcanzaron importantes apoyos para Colombia en la Cumbre de los Países No Alineados, en la Cumbre del Grupo de Río en Panamá y en la Cumbre Iberoamericana de Porto, y, además, nos visitó el presidente Aznar de España y realicé visitas de Estado a los Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba.

En el tema de defensa, se llevaron a cabo importantes cambios en la cúpula militar y se inició el más importante proceso de modernización y

⁶ Ver capítulo III, “El país que encontré”.

fortalecimiento de las Fuerzas Militares de los últimos tiempos; además, se venció a la guerrilla en su primer intento por tomar una capital de departamento, Mitú, cambiando con esta victoria el signo de la ecuación militar a nivel estratégico, situándola otra vez a favor del Estado. En cuanto a la búsqueda de la paz, se decretó la Zona de Distensión y se inició formalmente el proceso de diálogos con la guerrilla de las FARC, así como con el ELN, incluyendo la primera salida de guerrilleros presos a participar en un proceso de paz.

También se vivieron momentos de horror, como la tragedia de Machuca, causada por la voladura de un tramo del oleoducto por el ELN; los continuos y crueles ataques de los paramilitares, y el doloroso terremoto de Armenia y el Eje Cafetero, que sembró de angustia y destrucción esta rica y pacífica región del país, dejando más de mil víctimas mortales y más de 200.000 damnificados.

¡Todo en seis meses! Fue, sin duda, un período que habría de marcar profundamente el destino de Colombia.

En mi discurso de posesión reiteré algunos de los lineamientos que serían la guía del Gobierno. Allí hablé del liderazgo personal que asumiría en el tema de la paz, y reiteré que mi tarea prioritaria sería recuperar el estado de las relaciones internacionales, fortalecer las fuerzas militares y atacar de frente el problema del narcotráfico. También enfatiqué en la urgencia de avanzar en la reforma política y en la necesidad de estabilizar y recuperar la economía, dándole prioridad a programas sociales y al empleo. Aquel 7 de agosto, ante el país entero y los invitados internacionales, resumí mi plan de gobierno, la carta de navegación y la estrategia que iba a poner en marcha, cuyo eje principal sería la búsqueda de la paz.

HACIA LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Como primera tarea en el campo de la paz, era necesario designar a la persona que se encargaría de la negociación con la guerrilla. Víctor G. Ricardo era, sin duda, el mejor candidato para iniciar esta compleja tarea. No sólo había realizado los contactos para las primeras reuniones con las FARC y me había acompañado a mi primer encuentro con Marulanda, sino que tenía, además, una importante experiencia en el tema gracias a su participación en los acercamientos de paz durante los gobiernos de Belisario Betancur, cuando fue viceministro de Gobierno y secretario general de la Presidencia, y de César Gaviria, cuando participó como delegado del Partido Conservador en los diálogos de Caracas y Tlaxcala. Por ello, no dudé en designarlo como alto comisionado para la Paz.

A Víctor G. le correspondería, entonces, desarrollar los planteamientos que formulé como candidato en el discurso del Hotel Tequendama y dar curso al proceso que dejamos planteado en mi primera reunión, como pre-

sidente electo, con Manuel Marulanda. Teníamos 90 días para decretar y establecer la Zona de Distensión donde se desarrollarían las conversaciones, 90 días para verificar el establecimiento de la misma e iniciar la etapa de diálogos, y 90 días para definir si de esa primera etapa de diálogos se pasaba a la de la negociación.

Además del cumplimiento de este cronograma, la misión del comisionado tenía que centrarse en el establecimiento de los canales de comunicación directa con la guerrilla y en la creación de la confianza necesaria para poder avanzar. Esto resultaba fundamental, pues tanto las FARC como el ELN tenían altísimos niveles de desconfianza en las actuaciones del Estado y, a su vez, ese mismo grado de incredulidad se presentaba en la sociedad frente a la existencia de una real voluntad de paz de la guerrilla.

Las desconfianzas mutuas venían de tiempo atrás. De una parte, el Estado y la sociedad siempre han visto como inútil y absurda la lucha armada en la medida en que nuestro país no ha estado sometido a tiranías ni dictaduras que justifiquen su existencia y en que se han abierto espacios políticos para los grupos de extrema izquierda que han querido entrar en la democracia. El bajo o casi nulo apoyo de la población a la guerrilla es una prueba del rechazo general a este tipo de lucha.

Por su lado, la guerrilla recelaba de la voluntad política del Estado para realizar los cambios que le permitieran ingresar a la vida política, principalmente por el fracaso de la Unión Patriótica, movimiento político creado en desarrollo del proceso de paz de Belisario Betancur, más de 3.000 de cuyos afiliados cayeron asesinados por sicarios al servicio de narcotraficantes y grupos de extrema derecha, en un verdadero genocidio que aún avergüenza al país. Esta desconfianza llegó a los límites de la paranoia a partir del bombardeo sorpresivo de Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, en el municipio de la Uribe, durante el gobierno Gaviria, el 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente.

Así pues, teníamos un reto doble: primero, construir confianza entre las partes y, segundo, cumplir con el primer cronograma que nos habíamos planteado para lanzar el proceso de paz.

El 11 de agosto, apenas cuatro días después de mi asunción como presidente, posesioné a Víctor G. Ricardo como alto comisionado para la Paz, y di un discurso en el que reiteré los términos del camino que debíamos recorrer. Allí hice las siguientes precisiones sobre la creación de la zona, la lucha contra los paramilitares, la cooperación internacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la vocería exclusiva del presidente y el comisionado en el tema de la paz:

—*"En 90 días o antes, según los avances preliminares, despejaremos cinco municipios que se convertirán en zonas de distensión y laboratorios de paz.*

—*"Me comprometo a prevenir con todas mis facultades y con la más clara voluntad política la punible asociación que pueda darse entre algunos agentes del Estado*

y los grupos paramilitares; a investigar las denuncias, procurando eficacia en esas investigaciones y a promover la sanción de la conducta indebida.

—*"Estoy invitando a la comunidad internacional y a todos los colombianos a que contribuyamos con un Plan al estilo Plan Marshall para la paz de Colombia.*

—*"Las Fuerzas Armadas que comando pueden ser fuerzas armadas para la paz o para la guerra. En ambos escenarios tienen que ser eficientes. Paradójicamente, es éste un punto de partida de unas negociaciones serias.*

—*"Seré inflexible para asegurar una sola vocería de la paz, la cual corresponde privativamente al presidente de la República o, en su defecto, al alto comisionado para la Paz".*

LA ZONA DE DISTENSIÓN

Uno de los puntos principales para avanzar en el proceso de paz era, sin duda, el establecimiento de la Zona de Distensión. Sin ella el proceso no hubiese sido posible. Así lo entendí desde un principio y así lo planteé en la presentación de la política de paz que realicé como candidato.

Se trataba de un mecanismo previsto por una ley recientemente expedida, que el Congreso había tramitado, precisamente, por considerarlo ventajoso y necesario para adelantar negociaciones de paz.

A pesar de que una zona como ésta sería un experimento nuevo en el país, ya se había planteado el tema en otras oportunidades e incluso se había llevado a la práctica para casos puntuales. Durante el gobierno de Gaviria, en medio de los diálogos con la Coordinadora Guerrillera que se adelantaron en Caracas y Tlaxcala, se discutió la posibilidad de crear más de 100 zonas desmilitarizadas para que se ubicara la guerrilla en caso de un cese de fuegos. Se trataba de un mecanismo de "separación de fuerzas" que fue analizado y en cuyo diseño participaron, incluso, los militares. Como hecho coincidencial, el general Jorge Enrique Mora, quien luego sería comandante del Ejército durante mi mandato y el primer comandante de las Fuerzas Militares del gobierno de mi sucesor, fue el encargado de realizar el diseño hipotético de dichas zonas.

Durante el gobierno de mi antecesor, Ernesto Samper, en junio de 1997, se ordenó el despeje de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, un municipio con una extensión de 13.000 kilómetros cuadrados, por más de un mes, para facilitar la devolución de un grupo de soldados que se encontraba en poder de las FARC. También en dicho período las FARC pidieron la desmilitarización del municipio de la Uribe, como condición para iniciar conversaciones, la cual no fue finalmente posible, por la abierta oposición del entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Harold Bedoya.

Desde un principio, en el diseño del proceso de negociación con la guerrilla se pensó que lo ideal sería realizar las conversaciones por fuera del país. Eso evitaría las presiones de los medios, los efectos del día a día del conflicto

sobre los diálogos, y facilitaría una mayor concentración en la negociación misma. Las FARC nunca aceptaron esta posibilidad y es posible que no la acepten jamás, pues su aislamiento internacional les impide ver las ventajas que esto puede tener, y su experiencia en las negociaciones de Caracas y México no fue buena. A diferencia de este grupo, el ELN fue mucho más abierto a esta opción, por lo que buena parte de las conversaciones con este grupo guerrillero se dieron en el exterior, especialmente en Venezuela y Cuba.

Otra posibilidad planteada era la de buscar la negociación previo un cese de fuegos generalizado. La guerrilla, infortunadamente, jamás ha aceptado esta idea, pues considera que si renuncia al uso de la violencia pierde peso en la mesa de negociación. Por supuesto, una negociación en medio de condiciones de paz tendría muchas más posibilidades que en medio del conflicto, pero hasta el momento ha sido imposible que la guerrilla entienda y acepte esta premisa.

Existen, sin embargo, argumentos que defienden la tesis de que no siempre un cese de fuegos en un conflicto como el colombiano resulta beneficioso. Hay que tener en cuenta que, en este tipo de acuerdos, no sólo es la guerrilla la que suspende acciones bélicas. El Estado también debe suspender la actividad y eso puede resultar contraproducente desde el punto de vista de la estrategia militar de combate.

La fórmula a la que se había llegado era intermedia. No habría un cese de fuegos como condición preliminar pero se crearía una zona en la que las acciones y la presencia militar estarían suspendidas con el único fin de otorgar las garantías necesarias para adelantar las negociaciones. Éste era un mecanismo que estaba previsto en la Ley 418 de 1997, aprobada durante el gobierno Samper, y que, si bien tenía algunas dificultades, permitiría avanzar en la búsqueda de los acuerdos.

Para ser particularmente cuidadosos con los aspectos legales de la creación de la zona, convoqué un equipo jurídico de alto nivel para que analizara la forma en que daríamos aplicación a la citada ley y todas las implicaciones que pudieran presentarse. En este grupo participaron María Teresa Garcés, quien trabajaba con el comisionado para la Paz y había sido constituyente; Augusto Ibáñez, reconocido jurista, quien se encargaría de analizar los aspectos penales; el ministro de Justicia, Parmenio Cuéllar; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, y un delegado del Ministerio de Defensa.

No puedo desconocer que la Zona de Distensión fue objeto de críticas desde el mismo momento de su establecimiento, pues algunos pensaban que implicaba una especie de cesión de soberanía —lo que desmentiría luego la misma Corte Constitucional, como veremos más adelante— o que se trataba de una concesión desproporcionada que permitiría el fortalecimiento de la guerrilla, lo que tampoco resultó cierto.

Infortunadamente, ella se convirtió, con el paso de los meses, en un elemento que terminó pesando en contra del proceso mismo. De ser un instrumento adecuado para el desarrollo de las discusiones llegó a ser, en muchas ocasiones, el eje de las discrepancias, unas veces por malos entendidos, otras veces por incomprensión y otras debido a los abusos que la guerrilla cometió allí.

A pesar de las dificultades, sin embargo, hoy tengo el convencimiento de que había que establecer esta zona, como un paso necesario para la construcción de confianza y el adelanto de las negociaciones. La planteé, como candidato, desde el discurso del Tequendama, y fue un tema fundamental desde la primera reunión con las FARC, por lo que nadie podía sorprenderse de que se decretara.

Mucho se ha hablado sobre el eventual fortalecimiento militar que habrían logrado las FARC gracias a la Zona. En mi opinión, las supuestas ventajas eran también desventajas para ellos, pues cambiaron su esquema de movilidad por un sistema sedentario, se expusieron en el tema de las comunicaciones y concentraron muchos líderes y cabecillas en una única región. En la Zona los comandantes se hicieron identificables y muchos combatientes, acostumbrados al rigor de las batallas, se burocratizaron.

Éstas eran ventajas relativas que, infortunadamente, las Fuerzas Militares no supieron aprovechar tanto como hubieran podido. Por el contrario, existió una corriente al interior de las mismas —no generalizada pero sí entorpecedora— que se dedicó a generar un mal ambiente sobre la Zona y a filtrar información, a la vez que descuidaba los controles que sobre ella había ordenado desde el primer momento. *"Nadie entra y nadie sale"* fue mi clara consigna a los militares. Si bien no habría presencia militar dentro de la Zona, eso no reñía con que se controlaran sus límites para evitar cualquier movimiento de guerrilla hacia ella o saliendo de ella.

La región geográfica escogida resultaba también polémica, pero lo cierto es que obedecía a la presencia histórica que habían tenido las FARC en ella durante las últimas décadas. Desde los diálogos con el presidente Betancur, los contactos entre Gobierno y guerrilla siempre se realizaron en dicha zona. En un municipio vecino a San Vicente se había producido la liberación de los soldados durante el gobierno de Samper, y allí mismo, en Caquetania, había tenido lugar mi reunión con Marulanda en el mes de julio.

En la zona definida sólo existía una base militar de importancia, ubicada en San Vicente del Caguán: el Batallón Cazadores. Éste era un batallón muy antiguo del Ejército, encargado de las operaciones de la zona, con un contingente cercano a los 1.600 hombres, cuyo accionar, en la práctica, estaba restringido a operaciones que no se realizaban más allá de un kilómetro a la redonda y su principal misión estaba, de hecho, restringida a la protección del perímetro urbano de San Vicente. A una hora de camino, en Los Pozos, ya había presencia de la guerrilla, desde antes de iniciar el proceso. Aparte

del batallón, en los demás municipios había algunos efectivos de la Policía y eventualmente patrullaba el Ejército, sin implicar nunca un importante movimiento de tropas.

Para iniciar la implementación de la Zona, se efectuó una reunión con todos los generales en el Ministerio de Defensa, en la que ellos presentaron un estudio con observaciones sobre la posible Zona de Distensión y donde surgió el tema de la retirada de los soldados del Batallón Cazadores, que se convertiría en uno de los grandes problemas del inicio del proceso, como lo narraré mas adelante.

Después de un interesante y franco intercambio de opiniones, se llegó a la conclusión de que era posible adelantar las negociaciones en esa área siempre y cuando se tomaran algunas precauciones y medidas para minimizar los riesgos que se habían analizado desde el punto de vista militar.

Los generales recomendaron que se buscara mantener la presencia de la Policía en los cascos urbanos y que se evitara la presencia de la guerrilla armada y uniformada en ellos. Así mismo, se debía procurar que el proceso no tuviera demasiada intervención o afluencia de medios de comunicación, para facilitar su desarrollo sin interferencias. Al final, frente a estas recomendaciones, la realidad de la región y el día a día de las circunstancias ganaron la partida. La Policía no permaneció en los cascos urbanos; la guerrilla entró uniformada y armada en los municipios, en contra de lo inicialmente planteado y los medios de comunicación tuvieron pleno acceso a todo lo que allí ocurría.

Sin embargo, sí se cumplió con la creación del cuerpo de Policía Cívica y las autoridades civiles permanecieron allí durante todo el proceso, ejerciendo plenamente sus funciones, salvo los jueces que mantuvieron su jurisdicción pero, por protección y por iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, acabaron trasladando sus sedes a las capitales de departamento respectivas. De hecho, durante todo el proceso hubo juicios penales bajo el rigor de la ley y se cumplieron las condenas del caso.

A pesar de esto, muchos insistieron en que la creación de la Zona implicaba una entrega de la soberanía del Estado. Fue la Corte Constitucional la que acabó terciando en la materia a través de una sentencia en la que validó las normas que permitían la creación de este tipo de área. Según la Corte, el establecimiento de la Zona era, en lugar de una supuesta entrega de soberanía, una ratificación plena de ella, pues su existencia dependía exclusivamente de la voluntad del Gobierno y del ejercicio mismo de la soberanía del Estado.

Dicha sentencia, la C-048/01, del 24 de enero de 2001, con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre, es de tal importancia y claridad que merece ser citada textualmente, en su aparte fundamental:

"[...] la Corte no halla razones constitucionales para que el retiro de la Fuerza Pública vulnere la soberanía. Por el contrario, considera que el 'despeje'

representa un acto de soberanía, pues no sólo es una decisión unilateral de Estado que se concreta a través de la representación democrática que ostenta el presidente de la República, sino que está concebido como un objetivo de diálogo y de negociación que la institución impuso. En consecuencia, es una manifestación de la soberanía ad intra la demostración estatal de su capacidad para resolver las controversias internas pacíficamente y para señalar las reglas de ello. Dicho de otro modo, la decisión política de no finalizar el conflicto por medios violentos sino a través de la solución negociada y concertada, es un acto de soberanía del Estado, puesto que, a través de medios excepcionales, busca poner fin a una situación anómala, recuperar su capacidad de reprimir y castigar el delito en aras de vigorizar un orden social, político y económico justo que garantice y proteja verdaderamente los derechos humanos".

Ahora bien: desde el punto de vista de la actuación militar, las órdenes que di como presidente fueron muy claras. No se realizarían operaciones dentro de la Zona de Distensión, que era una región privilegiada para el diálogo y la negociación, pero por fuera de ella se debía perseguir a la guerrilla y a los paramilitares con todo el peso de nuestro aparato militar y de justicia. Nunca se ató las manos a los militares ni se les impidió actuar. En el 97% del territorio nacional, que estaba por fuera de la Zona, mis órdenes fueron expresas: ir a la ofensiva contra los grupos alzados en armas.

Debo decir que esta orden se cumplió a cabalidad. Las Fuerzas Militares fueron respetuosas de la Zona de Distensión y, por fuera de ella, realizaron importantes operaciones en contra de las FARC, del ELN y de los grupos de autodefensas, obteniendo resultados exitosos, como no se veían hacía mucho tiempo.

El 8 de octubre, en una reunión con el alto mando militar y policial, en presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, y de Defensa, Rodrigo Lloreda, y del comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, impartí claras y precisas instrucciones para el funcionamiento de la Zona, que incluían, entre otras, las siguientes medidas:

—Cesarán las operaciones militares, terrestres, fluviales y aéreas en la Zona.

—Se relocalizarán las tropas que estuviesen en su jurisdicción.

—Se controlarán las áreas de acceso a la Zona, tanto terrestre como fluvial y aéreo ("*Nadie entra y nadie sale*").

—Por fuera de la Zona continuará el desarrollo de operaciones ofensivas en todo el territorio nacional.

Todas estas órdenes, más detalladas, fueron impartidas por escrito por el comandante general de las Fuerzas Militares.

Como puede verse, desde un comienzo establecí medidas especiales para controlar el ingreso y salida de personas a la Zona de Distensión, las cuales estuvieron siempre vigentes. A pesar de ello, cuando las ratifiqué públicamente en octubre de 2001, las FARC se levantaron indignadas y adujeron que

no tenían garantías para la negociación, generando, absurdamente, una de las mayores crisis del proceso.

Los controles aéreos, terrestres y fluviales se cumplieron siempre, obviamente dentro de las limitaciones que implicaba la Zona, pues su extensión y las dificultades topográficas restringían, en la práctica, la efectividad de las Fuerzas Militares en su tarea de vigilar sus vías de acceso y de salida.

Finalmente, el 14 de octubre de 1998, dentro de los primeros 90 días que nos habíamos fijado en el cronograma con las FARC, expedí dos resoluciones fundamentales, en ejercicio de las facultades que me concedía la Ley 418 de 1997: en la primera se reconoció a Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez como representantes de las FARC para el proceso de diálogo y negociación, lo que implicaba la solicitud de suspensión de las órdenes de captura en su contra, y en la segunda declaré abierto el proceso de diálogo con las FARC, reconocí su carácter político y decreté, por un término inicial de tres meses, entre el 7 de noviembre de 1998 y el 7 de febrero de 1999, el establecimiento de una Zona de Distensión en los municipios de Mesetas, la Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán.

El primer paso estaba cumplido. Por primera vez en la historia de Colombia, tendríamos una zona dentro de nuestro territorio, plena de garantías, para el diálogo entre el Estado y la guerrilla.

CAPÍTULO VIII

“Señor presidente, la democracia está en peligro”

Entre 1996 y 1998 las Fuerzas Militares de Colombia recibieron los golpes más fuertes y humillantes en toda su historia de lucha contra los grupos guerrilleros. Los nombres de Puerres, Las Delicias, La Carpa, Patascoy, El Billar y Miraflores quedaron grabados con sangre en la memoria de los colombianos y afectaron enormemente la moral de los militares.

En sólo estas operaciones, llevadas a cabo por grupos de entre 200 y 300 guerrilleros, fueron asesinados más de 200 efectivos de la Fuerza Pública y hechos prisioneros cerca de medio millar de soldados, suboficiales y oficiales, cifras sin antecedentes en la historia del conflicto⁷.

De alguna manera, la ecuación de la guerra parecía estar entonces a favor de los grupos armados ilegales. En muchos de estos episodios fueron más los uniformados capturados que los que murieron combatiendo, un hecho que, dentro del Ejército, se consideró como un síntoma claro de la baja moral de los hombres. Lo cierto es que muchos de ellos, ante la certeza de que jamás llegaría un apoyo oportuno, prefirieron entregarse a manos del enemigo antes que sucumbir en una batalla sin esperanzas.

Como colombiano y, en su momento, como candidato a la Presidencia de la República, no podía dejar de inquietarme por esta preocupante situación. ¿Por qué los grupos irregulares tenían la capacidad de asestar golpes sorpresivos sin ser advertidos por nuestra inteligencia y sin temer una rápida y contundente contraofensiva de nuestro Ejército?

La respuesta a este interrogante vino a convertirse en el diagnóstico que sirvió de base para todo el proceso de reestructuración, modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública que adelanté durante mi gobierno.

Aquí se hace necesario realizar un breve recuento sobre cuál era la situación militar en ese entonces.

⁷ Según el documento “El repliegue de las FARC: ¿Derrota o estrategia?” de la Fundación Seguridad & Democracia, pág. 14, el ataque simultáneo del 3 de agosto de 1998 al Batallón de Infantería No. 19 y a la base de la Policía Antinarcóticos en Miraflores (Guaviare) fue ejecutado por aproximadamente 1.200 guerrilleros!

En primer lugar, las sucesivas descertificaciones en la lucha antinarcóticos por parte del gobierno estadounidense y el hecho mismo del retiro de la visa al presidente Samper habían tenido consecuencias directas en el apoyo internacional a nuestras Fuerzas Armadas. Es así como a algunos generales y altos oficiales se les negó el ingreso a los Estados Unidos, fueron suspendidos cupos a oficiales colombianos para adelantar cursos en el extranjero y disminuyó ostensiblemente el suministro de información de inteligencia hacia nuestros organismos especializados.

También los gobiernos europeos, inquietos por las efectivas campañas de la "diplomacia" de las FARC y de algunas organizaciones no gubernamentales, que denunciaban presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de nuestro Ejército, suspendieron o disminuyeron sus procesos de colaboración e integración con nuestras Fuerzas. De hecho, nos encontrábamos abocados a mantener relaciones de cooperación tecnológica y de inteligencia casi exclusivamente con los cuerpos armados de los países limítrofes al nuestro, lo cual resultaba a todas luces insuficiente.

La única ayuda internacional tenía como destino la Policía Nacional, entidad que terminó concentrando todos los recursos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, así las Fuerzas Militares también participaron en este esfuerzo. No es un secreto para nadie que el general Rosso José Serrano, director general de la Policía Nacional, con excelentes relaciones e imagen en los Estados Unidos, vino a convertirse en una especie de embajador virtual de nuestro país frente a la potencia del norte, ante el veto moral impuesto al presidente Samper. El general Serrano fue, sin duda, un funcionario ejemplar, con quien tuve el gusto de trabajar durante los dos primeros años de mi período presidencial y bajo cuyo mando la Policía tuvo un destacado comportamiento. Por eso hay que aclarar que fue el peso de las circunstancias que vivía entonces el país, y no su propia intervención, el que impuso esta situación desigual frente a las Fuerzas Militares.

En segundo lugar, la composición humana de nuestro Ejército era inadecuada. Alrededor del 30% de nuestros soldados —34.000— eran soldados bachilleres, con un período de servicio militar muy corto y sin mayor preparación para el combate, los cuales no podían ser utilizados en operaciones de alto riesgo y se circunscribían a actividades meramente administrativas. Del resto, teníamos cerca de 82.000 soldados combatientes, de los cuales apenas 22.000 eran soldados profesionales, —vale decir, soldados incorporados voluntariamente, con un alto entrenamiento y compromiso— y los demás eran soldados regulares. Con el ingrediente adicional de que los soldados más preparados, los profesionales, estaban dedicados en su gran mayoría a cuidar la infraestructura energética y vial del país de los atentados de la guerrilla, y no combatiéndola.

¡Estos 82.000 hombres en armas tenían la difícil tarea de proteger a los colombianos en un territorio de más de un 1.141.000 kilómetros cuadrados! Algo así como un soldado por cada 14 kilómetros cuadrados.

Pero hay algo más, y éste sería el tercer gran problema. Nuestras tropas —de hecho escasas— tenían ingentes dificultades de movilización y de comunicación que demoraban o hacían imposible su desplazamiento a los puntos críticos del conflicto. En lugar de un ejército móvil y rápido con una adecuada capacidad de reacción, el nuestro era un ejército de cuarteles, acantonado en las ciudades y cabeceras municipales, pero sin posibilidades de moverse al mismo ritmo de la guerrilla. Teníamos, básicamente, unas fuerzas militares territoriales y no de campaña, dispersas a lo largo del territorio nacional y sin suficientes medios de transporte. Su magro presupuesto muchas veces se gastaba en construir y proteger cuarteles, en una actitud más defensiva que ofensiva.

Adicionalmente, los sistemas de comunicación entre las diversas fuerzas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— entre sí y con la Policía Nacional dejaban mucho que desear. Sus equipos no eran compatibles y muchas veces un piloto de la FAC no tenía forma de escuchar los requerimientos de las fuerzas de tierra acosadas por un ataque guerrillero. Tampoco había suficientes helicópteros para transportar un grupo de hombres considerable y se contaba apenas con una única plataforma de inteligencia para ver o rastrear las comunicaciones de la guerrilla. ¡Cuántas veces se tenían noticias de ataques a pueblos, bases militares o estaciones de policía en que los refuerzos no llegaban sino hasta uno o varios días después del hecho, cuando sólo quedaba recoger las cenizas!

Los políticos presionaban para que se instalaran cuarteles en sus regiones y a menudo el Gobierno cedía a estas peticiones aparentemente justas que, sin embargo, resultaban contraproducentes. Poner 40 soldados en un pueblo, 30 en otro, y así sucesivamente, sólo llevaba a dispersar nuestras fuerzas y a generar condiciones de aislamiento que facilitaban su derrota por parte de la guerrilla.

En fin, resultaba claro entonces, a mediados de 1998, que las Fuerzas Militares no estaban en capacidad de montar una gran ofensiva contra los grupos ilegales porque no tenían medios ni recursos humanos y logísticos para ello. Tan simple como eso.

Su moral estaba por el suelo y la fe de los colombianos en su Ejército también había decaído, tanto así que, según una encuesta realizada a fines de 1998, las dos terceras partes de la población consideraban que la Fuerza Pública no estaba en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla, una proporción que habría de cambiar sustancialmente cuatro años después, cuando el 65% de los colombianos consideró que una victoria militar sí era posible.

Por supuesto, dicha percepción pesimista terminó incrementando la voluntad de paz y de diálogo del pueblo colombiano. Cuando en octubre de 1997 más de diez millones de ciudadanos votaron el "Mandato Ciudadano por la Paz" y ordenaron a sus dirigentes buscar una solución política y negociada al conflicto armado, no cabe duda de que en sus conciencias estaba patente el dolor y la impotencia frente a tantos descabros militares.

La situación opuesta se presentó dentro de la guerrilla que, ensobrecida por sus éxitos, creyó que el poder estaba al alcance de sus armas, una posición obviamente contraproducente para cualquier esfuerzo de paz. Tuve conocimiento de que, después de mi primera reunión con Manuel Marulanda, varios miembros del Secretariado de las FARC, los más guerrilleros por supuesto, se opusieron con vehemencia a su participación en el proceso de paz porque estaban seguros de que ya estaban dadas las condiciones para tomarse el poder por las armas y no querían ver aplazados sus planes de dominación, como en efecto habría de ocurrir. Hoy, por fortuna, no hay una sola persona, con un mínimo de sentido común, que todavía considere que las FARC o cualquier otro grupo ilegal estén en capacidad de llegar al poder por medios violentos.

Valga aquí una aclaración sobre la evolución estratégica de la guerrilla en los años anteriores a mi gobierno. Es sabido que en la teoría sobre la lucha guerrillera se han identificado tres etapas progresivas: la primera es la guerra de guerrillas, en la que éstas actúan en pequeños grupos, dando golpes específicos y rehuyendo el combate; la segunda es la guerra de movimientos, cuando se utilizan grupos de más de cien hombres que logran atacar con éxito, y sin ser detectados a tiempo, las mismas bases militares, tal como venía ocurriendo entre 1996 y 1998, y la tercera es la guerra de dominio territorial, donde la guerrilla tiene ya la capacidad para controlar zonas cruciales del territorio, específicamente ciudades o cabeceras municipales. Claramente, las FARC estaban evolucionando ya hacia este tipo de guerra, como habría de comprobarse luego en la fallida toma de Mitú en noviembre de 1998.

Ésta fue la situación militar que encontré al posesionarme el 7 de agosto. Esa tarde, en mi discurso de posesión, dediqué estas palabras a reflexionar sobre el papel de la Fuerza Pública en el empeño de paz al que me había comprometido con Colombia:

"Hemos llegado a la Presidencia de la República con la más firme decisión de lograr la paz y la reconciliación entre los colombianos. Sé que nadie quiere la paz con más ímpetu que el soldado, que ese héroe anónimo que sufre en carne propia las consecuencias terribles de la confrontación, que en las noches de peligro, soledad y angustia sueña ilusionado con el regreso al cariño y el calor de los seres que ama. Por eso tengo la más firme convicción y la fe más absoluta en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, desde sus comandantes hasta el más modesto de sus hombres, respaldarán con nobleza y lealtad a su jefe supremo en el duro camino que Colombia habrá de recorrer para alcanzar la paz."

Tuve muy claro que, para transitar este camino, necesitaba rodearme de los hombres más idóneos, de líderes que supieran acompañar desde sus posiciones jerárquicas un esfuerzo doble: por una parte, facilitar y apoyar el trabajo por la paz y, por la otra, emprender el más grande proceso de modernización y fortalecimiento jamás vivido en las Fuerzas Militares, para cambiar definitivamente esa ecuación de guerra que últimamente les había sido desfavorable.

Un verso sencillo del poeta mexicano Amado Nervo resume esta paradoja: *"Sé fuerte, para tener derecho a ser pacífico"*. Resultaba obvio que la guerrilla nunca iba a negociar en serio en tanto continuara creyendo en la posibilidad de obtener el poder por la vía armada. Si queríamos unos diálogos realmente productivos, y no ingenuos como algunos los tacharon, teníamos que avanzar simultáneamente en los dos frentes: por una parte, hablando con sinceridad y de cara al país con los grupos armados ilegales y, por otro lado, fortaleciendo la Fuerza Pública, que es y debe ser siempre la única fuerza con legitimidad para portar las armas en defensa del pueblo colombiano y de nuestro Estado de Derecho.

De hecho —y así lo expliqué siempre—, el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Militares formaba parte integral y sustancial de la estrategia de paz, entendida como un todo, mucho más allá del solo proceso del Caguán.

LOS MINISTROS DE DEFENSA

Escogí como ministro de Defensa a Rodrigo Lloreda Caicedo. Necesitaba un hombre que le diera respetabilidad internacional al sector de la defensa y que tuviera la capacidad de liderazgo que el momento exigía, y consideré que Rodrigo, un importante empresario y político conservador del Valle del Cauca, ex designado y ex candidato a la Presidencia de la República, con una gran trayectoria y un excelente reconocimiento por parte de la opinión, cumplía con estos requisitos. Tenía la virtud adicional de haber sido canciller, lo cual le permitiría trabajar con más facilidad en la recuperación de la cooperación internacional hacia nuestras Fuerzas Militares.

Lloreda convocó una comisión de altas personalidades para iniciar el análisis sobre la reestructuración de fondo que se requería dar a la Fuerza Pública y comenzó a reunir consenso en el Congreso Nacional, en la sociedad civil y entre el personal uniformado sobre la urgencia de acometer dicha tarea.

No puedo negar que su apresurada renuncia en abril de 1999, a raíz de malentendidos y diferencias en torno a la Zona de Distensión, me dejó un sabor amargo, no tanto por el incidente de la renuncia solidaria que presentaron simultáneamente algunos generales, situación que fue rápidamente entendida y conjurada —y a la que destinaré un capítulo especial—, sino por el distanciamiento que se generó con este excelente colombiano, cuyo

temprano fallecimiento por causa de una penosa enfermedad lamentó todo el país.

Durante dos años, entre mayo de 1999 y mayo de 2001, estuvo a la cabeza del Ministerio de Defensa mi buen amigo Luis Fernando Ramírez, quien me había acompañado como fórmula a la Vicepresidencia en mi primera candidatura en 1994. Hijo de un modesto agricultor santandereano, Luis Fernando, desde muy joven, había construido una brillante y meritoria carrera pública en la que se desempeñó, entre otras posiciones, como director de Impuestos, viceministro de Hacienda y ministro de Trabajo. También había sufrido, como tantos colombianos, los rigores del secuestro, cuando las FARC secuestraron a su padre. Su inteligencia, prudencia y dotes de administrador eran las cualidades que se requerían para desarrollar el proceso de modernización y fortalecimiento, y así lo demostró al dejarlo estructurado en su totalidad, con grandes avances en incremento y profesionalización de la tropa, modernización y adquisición de equipos y desarrollo legislativo.

Finalmente, el tercer y último ministro de Defensa de mi administración fue Gustavo Bell Lemus, vicepresidente de la República, hombre de la costa, intelectual, historiador y reconocido defensor de los derechos humanos. Sin que fuera mi amigo personal, ni un hombre de mi movimiento político, lo designé como fórmula vicepresidencial porque conocía de sus buenas ejecutorias, particularmente durante su paso por la Gobernación del Atlántico, donde había demostrado ser un líder eficaz y pulcro en el manejo de lo público. Gustavo, sin duda, sorprendió al país con sus conocimientos y compromiso, y, en el Ministerio de Defensa, apuntaló y perfeccionó el proceso de fortalecimiento y continuó, con éxito, el empeño de comprensión y puesta en práctica de las normas y principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública colombiana.

Mirando atrás veo la coincidencia de que los dos ministros que me acompañaron por más tiempo en este empeño fundamental de mi gobierno fueron precisamente los mismos que escogí como compañeros de fórmula para la Vicepresidencia en las dos campañas presidenciales en las que presenté mi nombre. Es decir, eran personas a quienes consideré con el talante, la probidad y la capacidad necesarios para reemplazarme en el mayor cargo del país en el evento de alguna ausencia temporal o definitiva. De ese tamaño fue la responsabilidad que les asigné y de ese calibre, también, la confianza que les tenía.

LA CÚPULA MILITAR Y POLICIAL

Al día siguiente de mi posesión, el 8 de agosto, cité en Palacio a Rodrigo Lloreda para hacer el nombramiento de la nueva cúpula militar y policial. Se trataba, sin duda, de una decisión crucial. No había lugar a equivocacio-

nes. Tenía que contar con una cúpula militar intachable que tuviera el valor de hacer los cambios que las Fuerzas Armadas requerían, pero que también entendiera todo el contexto de la estrategia diseñada para avanzar en la paz y en la recuperación de las relaciones internacionales.

La situación militar no podía ser más crítica. Nuestras Fuerzas Militares habían dejado de estar a la ofensiva y se encontraban en una posición defensiva, aunque el país no era todavía consciente de la gravedad del asunto. Así pues, los generales y almirantes que designara para comandar nuestra Fuerza Pública tendrían que liderar y acompañar con decisión y convicción el indispensable proceso de reestructuración y fortalecimiento militar.

No conocía personalmente a los generales ni habíamos tenido durante la campaña un contacto directo con ellos, luego mi decisión tuve que basarla en un estudio detallado de sus hojas de vida, de su carrera y trayectoria y de los informes que obtuve de las fuentes más confiables.

Para comandante de las Fuerzas Militares me propuse encontrar un oficial con una pulcra hoja de servicios, sin ninguna sombra de duda sobre su cumplimiento y acatamiento de los Derechos Humanos, con liderazgo e inteligencia para comprender y acompañar el camino hacia la paz. Finalmente —y después de mucho indagar y analizar— llegamos al nombre del general Fernando Tapias Stahelin, quien a la sazón se desempeñaba como segundo comandante del Ejército, y encontré en él todas las cualidades que estaba buscando. No nos conocíamos ni habíamos tenido ningún contacto previo hasta el día de mi posesión y hoy puedo decir, con satisfacción, que estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Tanto fue así que el general Tapias permaneció en su cargo durante los cuatro años de mi mandato, demostrando en todo momento su gran calidad humana y su recio sentido militar.

Fue necesario hacer un movimiento de varios generales, más de cinco, para llegar al nombre del general Fernando Tapias. Ésta podía ser una determinación que causara alguna polémica al interior de las Fuerzas Militares en la medida en que se podía dar una reacción negativa al dar de baja a varios generales, lo cual no era muy usual. Por fortuna, eso no pasó. No se presentaron problemas y el nombramiento del general Tapias fue bien recibido. Probó ser, durante todo mi mandato, un hombre conocedor del tema, con liderazgo institucional y con la suficiente visión para entender que era indispensable realizar una reestructuración importante en las Fuerzas Militares y que también era necesario adelantar un proceso de solución política negociada.

Como comandante del Ejército escogí al general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante de la V División, otra elección que probó ser acertada, dado su compromiso patriótico y su compenetración y ascendencia sobre la tropa, quien también me acompañó durante todo mi período.

En la Fuerza Aérea designé, primero, al general José Manuel Sandoval, quien renunció pocas semanas después debido al escándalo de un cargamento de cocaína que se encontró en un avión de la FAC, y fue reemplaza-

do, en noviembre de 1998, por el general Héctor Fabio Velasco, bajo cuyo mando la FAC modernizó sus equipos y procedimientos y recuperó un papel protagónico en la lucha contra los grupos armados ilegales.

En la Armada Nacional, por su parte, nombré como comandante al almirante Sergio García Torres, quien fue relevado en diciembre de 2000 por el entonces vicealmirante Mauricio Soto Gómez. Ambos le dieron un vuelco definitivo a la Armada, convirtiéndola en una fuerza clave, no sólo en la lucha contra el narcotráfico, por su cuerpo de guardacostas, sino también en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares. Bajo su dirección, la Infantería de Marina pasó de ser un componente casi irrelevante a uno definitivo en el control de los ríos y la protección de las poblaciones más apartadas en la Orinoquia y la Amazonia.

En el tema de la Policía Nacional no tuve ninguna duda y continué confiando en la excelente labor del general Serrano, quien me acompañó durante la primera mitad de mi mandato, y al que reemplazó, en junio de 2000, el general Luis Ernesto Gilibert, nada menos que el nieto del comisario francés Juan María Marcelino Gilibert, que tuvo a su cargo la tarea de organizar la Policía Nacional a finales del siglo XIX. El general Gilibert, un experto en el tema de la Seguridad Ciudadana, fue un gran promotor del concepto de la policía comunitaria y apoyó desde la Policía, con lealtad e inteligencia, los esfuerzos del Gobierno y de las Fuerzas Militares para combatir a los violentos.

Hoy adjudico gran parte del éxito alcanzado en el proceso de fortalecimiento y modernización de la Fuerza Pública a la labor conjunta de estos destacados colombianos y al hecho de que en cargos claves, como lo fueron el Comando de las Fuerzas Militares, el Comando del Ejército y el Comando de la FAC, se mantuvo la línea de mando durante los cuatro años, facilitando una labor más estratégica que táctica y el cumplimiento de metas a largo plazo, que a menudo se truncan por los constantes cambios en la cúpula.

"LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO"

Por lo dicho al comienzo de este capítulo, el desafío al que nos enfrentábamos no era en absoluto sencillo. Teníamos que recuperar la moral de las Fuerzas Militares; poner fin a los reveses operacionales y volver a generar éxitos en el campo de batalla; demostrar con hechos a las guerrillas que jamás por las armas podrían llegar al poder; recuperar la legitimidad nacional e internacional de los cuerpos armados; aumentar y profesionalizar el pie de fuerza; adquirir más armamento, equipos de transporte, comunicaciones e inteligencia; consolidar una cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y establecer una mayor y más eficiente cooperación entre las fuerzas, entre otros objetivos esenciales.

La guerrilla había alcanzado en los últimos años una superioridad táctica sobre objetivos aislados; tenía más movilidad, capacidad de concentración

y capacidad ofensiva que el mismo Ejército, y se aprestaba para pasar de la fase de guerra de movimientos a la guerra de dominio territorial. Por eso era urgente no sólo propiciar el diálogo con ella sino también convencerla de que ese era su único camino viable, para lo cual necesitábamos unas Fuerzas Armadas renovadas y fortalecidas, unas fuerzas que fueran realmente de campaña y no sólo territoriales.

Para los altos mandos militares y policiales, y al interior de las fuerzas, estaba claro el planteamiento que como candidato había hecho en torno al tema de la paz. Éste había sido público y de todos conocido. Desde un principio se sabía cuál era la política frente a la negociación y eso nunca fue un motivo de contradicción con los nuevos miembros de la cúpula.

Éramos conscientes de que no a todos los militares les gustaba la idea de un proceso de negociación con la guerrilla, pero los comandantes lo entendían y lo apoyaban. También sabían que ese proceso iría acompañado de la reestructuración interna, lo que podía preocupar a algunos. De cualquier forma, el apoyo de los comandantes lo expresó claramente el general Tapias en la primera reunión que sostuvimos con la cúpula militar: *"No serán las Fuerzas Militares las que impidan un proceso de paz en Colombia ni quienes lo interfieran"*.

Ambas estrategias —fortalecimiento militar y negociación política— eran necesarias. Además, los militares tenían conciencia de que en esos momentos no había ninguna posibilidad real de ganar en una confrontación total pues no se contaba con la estructura adecuada ni los medios para hacerlo. Teníamos, entonces, que asumir una posición ofensiva, al tiempo que adelantábamos, en medio de la guerra, una completa labor de reestructuración y profesionalización de la Fuerza Pública. Como decía Tapias, *"había que cambiar los caballos en medio de la carrera"*.

Ese era nuestro reto principal y lo asumimos sin tardanza junto con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, con quien desarrollé una excelente relación personal y de trabajo. Si algo privilegió mis relaciones con el general Tapias desde el día de su designación hasta el último minuto de mi mandato fue el respeto mutuo y la absoluta transparencia y sinceridad con que tratamos todos los temas. Él mismo fue muy claro desde el momento en que nos conocimos, cuando me dijo con su llana franqueza de soldado:

—Señor presidente, lo que puede esperar de mí es que le diga siempre la verdad. Si yo veo que vamos por buen camino estaré a su lado, pero si yo veo que hay algo que riña con aquello que creo que debo defender, se lo haré conocer y no tendré ninguna manifestación distinta de decirle: *"Señor presidente, en esto no estoy de acuerdo, y yo me voy"*.

Por fortuna, ese momento nunca llegó y fue esta relación de confianza, no sólo con el general Tapias, sino con todo el alto mando militar y policial, la que permitió superar de manera consensuada y amable cualquier diferen-

cia de criterio que hubiera podido surgir en tantos episodios que se presentaron durante los cuatro años de gobierno. Siempre supe que, si prevalecía el diálogo y la comprensión entre el presidente y su Fuerza Pública, cualquier dificultad era superable y, mejor aún, podíamos llevar a cabo con éxito la tarea titánica que nos habíamos impuesto.

Y hablo de "titánica" porque así se veía al comienzo del período, y así resultó ser. De hecho, la situación dentro de las Fuerzas Militares se apreciaba con tanto pesimismo que el mismo general Tapias me planteó directamente desde nuestro primer encuentro que tenía fundados temores por la supervivencia de nuestro sistema democrático, pues, a su entender, las FARC, envalentonadas por sus victorias recientes, estaban aprestándose para realizar una gran ofensiva para tomarse el poder.

Con palabras contundentes y francas me lo dijo:

—Señor presidente, la democracia está en peligro y nuestras Fuerzas Armadas en cuidados intensivos.

Con esa terrible certidumbre en el pensamiento, expresada desde el primer momento por un hombre sereno, prudente y con gran conocimiento sobre la situación real del conflicto, como lo era el general Tapias, emprendí la tarea de transformar y fortalecer, como nunca antes en nuestra historia, la Fuerza Pública de Colombia, como se verá en capítulos posteriores.

CAPÍTULO IX

El día que cambió la guerra

No eran infundados los temores del general Tapias ni de todos aquellos que ya presagiaban el inminente salto de la guerrilla de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones o dominio territorial. Además, la misma perspectiva de un proceso de paz podía alebrestar a la guerrilla, que históricamente siempre ha realizado actos violentos antes de iniciar cualquier acercamiento, bajo el supuesto de que así llega más fortalecida a las negociaciones.

En la madrugada del domingo 1º de noviembre de 1998, alrededor de 1.500 guerrilleros de las FARC incursionaron en Mitú, capital del departamento del Vaupés, ubicada en el extremo suroriental del país, en un sector de transición entre las llanuras secas de la Orinoquia y la selva húmeda amazónica, muy cerca de la frontera con el Brasil. Se trata de un pequeño poblado de apenas un poco más de 6.000 habitantes, pero con la importancia estratégica de ser una capital de departamento y el principal centro urbano en la zona norte de la Amazonia colombiana.

Sin duda, era una prueba de fuego para la Fuerza Pública del país, que apenas comenzaba a asimilar los primeros lineamientos del nuevo gobierno y de la recién posesionada línea de mando, pero que no estaba dispuesta a dejarse infligir otro golpe mortal de la guerrilla, mucho menos a dejarla posicionarse como un ejército de ocupación en un municipio colombiano.

Era claro que lo que había en juego era mucho más que un asunto de dignidad militar. La intención de la guerrilla no era sólo dar un golpe efectista y salir, sino quedarse definitivamente —o por lo menos algunas semanas— en esta población, reclamando de la comunidad internacional un reconocimiento de su estatus de beligerancia, algo que quizás algunos pocos países hubieran hecho, basándose en precedentes históricos y en la terminología internacional que se aplica a movimientos insurgentes que llegan a dominar una parte importante del territorio. Inclusive, llegamos a tener información de que allí pensaban lanzar una especie de gobierno autónomo sobre una porción de territorio para generar un hecho político.

Con esta arriesgada operación, las FARC pretendían someter nada menos que una capital departamental y tenerla por un largo tiempo para entrar a la

negociación con mucha fuerza, diciendo que ellos tenían control territorial del oriente del país, sobre la localidad más importante en la frontera con el Brasil.

Los guerrilleros atacaron el cuartel de Policía y sus alrededores, en un radio de tres manzanas, que quedaron prácticamente arrasadas, utilizando armas no convencionales, como cilindros de gas rellenos con gasolina, pegante inflamable y pentolita, además de granadas, que lanzaban desde las mismas viviendas de los atemorizados pobladores.

Durante tres interminables días, entre el 1º y el 3 de noviembre, las FARC saquearon e incendiaron oficinas de entidades estatales, como la Registraduría Departamental, la Fiscalía Regional, el Incora, la Caja Agraria y los juzgados, además de bancos y la sede del Vicariato Católico, y destruyeron y robaron almacenes y expendios de licor. Incluso, recorrieron la población e ingresaron a las casas buscando a personas determinadas, sobre todo a los auxiliares bachilleres, jóvenes que trabajan desarmados y prestan servicios comunitarios, a quienes arrancaron de los brazos de sus padres para llevárselos secuestrados.

El saldo mortal de esos tres días fue una muestra patente de la sevicia de la guerrilla: 16 civiles sacados de sus viviendas fueron asesinados y 12 policías también encontraron la muerte bajo el fuego indiscriminado de los cilindros repletos de explosivos. Otros 10 miembros de la Policía fueron heridos y cerca de 60 de ellos secuestrados, incluyendo a su comandante, el coronel Luis Mendieta.

Cuando la dimensión de la toma salió a la luz pública, el 2 de noviembre, yo me encontraba en Venezuela, realizando mi primera visita oficial como mandatario a la hermana nación, entonces gobernada por el presidente Rafael Caldera, con quien siempre tuve una excelente relación y con quien se presentaba la coincidencia de que había sido también el presidente de Venezuela durante el gobierno de mi padre, casi tres décadas atrás. En el momento en que salí hacia Caracas no existía información alguna que hiciera prever una escalada guerrillera como la que se presentó en los días siguientes, no sólo con la toma de Mitú sino también con otros asaltos a poblaciones en Boyacá y Putumayo. La guerrilla, que por ese entonces ya tenía claro que las limitaciones de movilidad de las Fuerzas Militares eran grandes, había optado por iniciar ataques en los extremos del país para distraer y dispersar los pocos recursos con que contábamos.

Una vez fui informado de la gravedad de la toma, minutos antes de iniciar el almuerzo oficial con el presidente Caldera, decidí cancelar los actos previstos para la tarde y regresar de inmediato para ponerme al frente de la situación, que ya estaba siendo analizada por el alto mando militar y policial.

En Mitú sólo había un grupo de cerca de 200 policías y las tropas más cercanas se encontraban en San José del Guaviare, a cientos de kilómetros,

con el agravante de que la única alternativa para llegar era la fluvial, que demoraría días, o por vía aérea, utilizando el aeropuerto de Mitú, que se encontraba tomado por la guerrilla.

Tan pronto retorné de Caracas, ese mismo día en la tarde, me dirigí al Comando General de la Policía para recibir del general Serrano, director de la Policía Nacional, y del general Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, la información completa de la situación. Para mi sorpresa, encontré que no se tenía prevista una estrategia inmediata para realizar la operación de recuperación de Mitú. De inmediato ordené que, en un término de tres horas, a las 9 de la noche, me presentaran una estrategia conjunta, acordada entre la Policía y las Fuerzas Militares para recuperar la población.

A la hora citada, los comandantes de las distintas fuerzas me presentaron en la Casa de Nariño un plan militar que resultaba un poco desesperado, pues se trataba de realizar operaciones complejas que nunca antes se habían intentado.

Descartado el aeropuerto de Mitú, la pista más cercana a esta población era la de Querari, al otro lado de la frontera con el Brasil, cruzando el río Vaupés. Por lo mismo, teníamos que pedirle a dicho país que nos autorizara aterrizar allá, lo cual podía llegar a ser considerado como tránsito de tropas extranjeras, algo que hubiera requerido de la autorización del Congreso brasileño, obviamente imposible de tramitar en las pocas horas que teníamos para reaccionar con oportunidad. Finalmente, decidimos solicitar el permiso por razones humanitarias, basados en las informaciones que teníamos respecto a que estaban siendo masacradas algunas personas, entre ellas civiles y auxiliares indígenas.

Llamé directamente al presidente Fernando Henrique Cardoso, quien entendió cabalmente la situación y —debo reconocerlo con gratitud— se la jugó por Colombia. Enterado de la petición, y cuando ya nuestro aterrizaje en Querari era un hecho, el gobierno del Brasil produjo un comunicado en el cual nos daban un plazo de *"cuarenta y ocho horas para dejar de utilizar la pista"*, un término más que suficiente para completar la operación.

Autorizada la pista, quedaba por solucionar la operatividad nocturna, pues parte del éxito de la operación radicaba en atacar a la guerrilla en la noche y no en la mañana, cuando podría estarnos esperando. La pista, aislada en medio de la selva, no tenía ningún tipo de iluminación, por lo que se decidió que se utilizarían bengalas lanzadas desde los aviones, de forma que un avión lanzara bengalas para que aterrizara otro.

En cuanto a los helicópteros, ninguno tenía autonomía de vuelo suficiente para ir y regresar, por lo que nos tocó enviar primero aviones Hércules cargados de combustible para que los abastecieran durante la noche. Los helicópteros, a su vez, transportarían las tropas desde Querari hasta Mitú pero, como teníamos sólo cuatro o cinco disponibles, reuniendo los de la Fuerza

Aérea y el Ejército, el contingente más grande que se podía trasladar por viaje era de unos 70 hombres. Una vez quedaban en tierra, los helicópteros tenían que regresar por otros 70 hombres, y así sucesivamente. Por supuesto, los primeros soldados que fueron enviados tuvieron que combatir como leones contra cerca de 1.500 guerrilleros que las FARC tenían involucrados en la operación, mientras comenzaban a llegar los refuerzos.

Para agravar la situación, nuestro primer avión Hércules que aterrizó en Brasil, cargado con combustible y soldados para la operación, dañó gravemente la pista, por su peso, lo que dificultó el aterrizaje de los otros aviones que ya estaban en vuelo.

Con todo, y a pesar de las dificultades, la maniobra, que se desarrolló en la noche del 3 de noviembre y la madrugada del día siguiente, fue un rotundo éxito. La de Mitú fue una valiente y arriesgada operación de transporte aéreo de combate, en la que nuestros avezados pilotos lograron aterrizar en una pista muy corta, sin infraestructura aeronáutica, sin iluminación, utilizando bengalas y sistemas de visores nocturnos. Gracias a ellos, y a una coordinación casi milimétrica, que convocó, además, la pericia y el heroísmo de los hombres del Ejército y de la misma Policía, se logró derrotar a los guerrilleros y devolver la calma y la seguridad a la asolada capital del Vaupés.

Aunque tuvimos cerca de 20 bajas, la guerrilla, de acuerdo con las informaciones obtenidas, sufrió cientos de pérdidas y se vio obligada a retirarse, renunciando a lo que ellos consideraban iba a ser un factor fundamental en una estrategia militar y política, para entrar a la mesa de negociaciones con mucha fuerza.

No fue cualquier triunfo para el Estado colombiano. Por un lado, fue el primero significativo después de la sucesión de derrotas de los años anteriores y, por otro, se demostró que la acción conjunta y coordinada de las fuerzas podía llegar con éxito a las regiones más alejadas de nuestra geografía, incluso en medio de la noche y con inmensas dificultades logísticas.

Todavía nos faltaba mejorar en muchos aspectos, como medios de transporte, comunicaciones, inteligencia, armamento y cantidad y calificación de la tropa, pero ya habíamos alcanzado unas primeras metas sin las cuales todo lo demás resultaba imposible: devolver la confianza y la moral a nuestros soldados y presentar al fin un parte de éxito a la nación.

La guerrilla, a su vez, comenzó a asimilar una nueva realidad, que día a día se iba a hacer incontestable para ellos: su pretendido avance a una guerra de dominio territorial se le estaba yendo de las manos.

El 5 de noviembre, cuando Mitú apenas se reponía de los estragos de la toma, fue un día especialmente difícil para mí, pues en una sola jornada viví y constaté personalmente el dolor, la destrucción y la miseria causados por los dos principales grupos guerrilleros en dos extremos del país. Estuve por segunda vez en el corregimiento de Machuca, en el municipio de Segovia, Antioquia, donde el ELN, en su afán terrorista, había incendiado, poco más

de dos semanas atrás, un tramo del oleoducto central de Antioquia, provocando la incineración de cerca de 70 colombianos —hombres, mujeres y niños— de los más humildes del país. Allí revisé el estado de las obras de reconstrucción y conversé con los conmocionados moradores de ese poblado golpeado por la barbarie.

Ese mismo día visité Mitú y constaté directamente el nivel de destrucción y pillaje al que fue sometida esta población durante los días de la toma.

Fue doloroso contemplar el escenario de desolación y muerte que había en el cuartel de Policía desde donde los agentes y oficiales defendieron a la población hasta entregar sus vidas. Las escuelas estaban destruidas, los bancos y almacenes saqueados y parte del hospital incendiado. Las calles eran escombros sembrados de cráteres que mostraban las huellas de los cilindros de gas disparados por las FARC contra la población.

También escuché las expresiones de sus pobladores, que no cesaban de agradecer la labor de la Fuerza Pública, y me emocioné al comprobar el coraje y la mística con que los soldados me contaban el operativo militar. Allí estaba, en esos jóvenes aguerridos y llenos de optimismo, la semilla esperanzadora de ese ejército fuerte y valiente que queríamos construir para Colombia.

Tan sólo habían transcurrido 90 días de gobierno y ya comenzaban a sentirse los primeros resultados de los cambios en la estrategia militar. Las fuerzas habían adquirido una importante capacidad de reacción y la operación fue considerada como un modelo para otros ejércitos en el mundo, pues se demostró cómo se podían alcanzar objetivos esenciales con mínimos recursos.

La de Mitú puede ser, sin exageración, la más importante operación militar adelantada en la lucha contra la guerrilla en la última década, no sólo por sus importantes y singulares características de dificultad logística, sino por sus implicaciones en la ecuación de combate. Además de recuperar a Mitú, la Fuerza Pública comenzó a recobrar su capacidad ofensiva y logró que las FARC dieran marcha atrás en la estrategia militar que habían estado planeando por años. Ese fue el punto de quiebre donde las FARC entendieron que su meta de tomarse el poder era imposible de cumplir.

CAPITULO X

El Batallón Cazadores: una piedra en el zapato

Más allá de los combates por fuera de la Zona de Distensión, que siguieron presentándose a lo largo de todo el proceso, pues ni la guerrilla cejó en sus intentos de alterar el orden público ni las Fuerzas Militares dejaron en ningún momento de perseguirla ni de defender las vidas y la tranquilidad de los colombianos, el primer gran escollo que vivió el entonces incipiente proceso de paz fue el episodio ocurrido en torno a la salida de los soldados del Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán.

Se trató, además, de un suceso que generó los primeros roces entre el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, y los militares.

Como es sabido, dentro de lo acordado inicialmente con la guerrilla para iniciar conversaciones, se determinó el despeje militar de los cinco municipios de la Zona, lo que implicaba, principalmente, la salida de los soldados —cerca de 1.600 hombres— del único destacamento apostado en el área: el Batallón Cazadores.

Este batallón, con una gran tradición histórica e importancia estratégica, está enclavado en medio de la selva, rodeado por un paisaje idílico aunque de clima muy malsano, y es considerado como un bastión clave de las Fuerzas Militares en un territorio que durante los últimos años ha tenido una constante presencia de las FARC.

En una reunión que tuvo Víctor G. con los generales en el Ministerio de Defensa en torno a la declaratoria de la Zona de Distensión, sin duda el punto más álgido giró en torno a dicho movimiento, al cual se negaron los altos mandos, aduciendo que no podían dejar en manos de su enemigo institucional unas instalaciones construidas y mantenidas para la defensa nacional.

Éste se convertiría en un punto de honor para los militares y en una piedra en el zapato para el inicio del proceso. La posición del comisionado en la reunión fue clara y reflejó las discusiones que habíamos tenido con Marulanda en nuestro primer encuentro. Algunos militares interpretaron equivocadamente la explicación de Víctor G. y tuvieron la sensación de que él estaba defendiendo los intereses de la guerrilla, lo cual no tenía ningún asidero real.

Fue frecuente a lo largo del proceso, por las versiones de los medios o por malas interpretaciones, que se propagara la idea de que los altos comisionados para la Paz, en la medida en que estaban en contacto permanente con la guerrilla, podían acabar defendiendo sus posiciones. Al mismo tiempo, la guerrilla solía decir que las posiciones de los comisionados eran demasiado duras y hasta los calificaban de derechistas o militaristas. Por supuesto, la labor de los comisionados no era otra que la de actuar, en nombre del Estado y la sociedad, para buscar una paz negociada. En ese objetivo procuraban establecer un puente entre las partes, sin perder jamás de vista a quién representaban. Lo cierto, sin embargo, fue que dicho antagonismo de percepciones generaba una carga adicional para la labor que adelantaban.

Para nadie es un secreto que siempre se presentan discrepancias al interior de cualquier gobierno, y en temas como el de la paz es imposible que no se enfrenten opiniones distintas. En mi caso, siempre oí las diferentes posiciones y al final tomé las determinaciones que fueron necesarias. Discrepar al interior de un gobierno no es malo. Por el contrario, un presidente debe oír las opiniones de sus colaboradores, pero al final, cuando llega el momento de las decisiones, es él quien fija la dirección a seguir y todos los funcionarios deben defender el camino trazado.

La discusión en torno a la salida de los soldados del batallón fue el inicio de una larga serie de controversias que se presentarían entre la cúpula militar y Víctor G. Ricardo, no siempre tan profundas como los medios quisieron mostrarlas, generadas en ocasiones por posiciones de honor, por falta de comunicación o incomprensión mutua.

Sin embargo, más allá de las discusiones que tuvo el comisionado con los militares, sus discrepancias más profundas se dieron con el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda. En efecto, Lloreda, en su afán por defender los puntos de vista de los militares, asumía a menudo posiciones que iban en una vía contraria a la del resto del Gobierno y llegaban a ser incluso más radicales que las de los mismos uniformados.

Durante los primeros meses de gobierno, las diferencias entre el comisionado y el ministro de Defensa se hicieron cada vez más notorias, si bien Lloreda no me planteaba en forma directa sus inquietudes, algo que nunca entendí. Por el contrario, siempre manifestó su apoyo a las determinaciones que se tomaron en el tema de la paz y las ratificó con su firma en los correspondientes decretos.

LA CRISIS DE LOS SOLDADOS

Cada día que pasaba, dentro del primer plazo de 90 días para establecer la Zona de Distensión, se hacía más urgente resolver el dilema del Batallón Cazadores, generado por la reticencia en los altos mandos militares para per-

mitir la salida de los soldados, aduciendo toda clase de razones de seguridad e incluso de moral para sus hombres.

El Comisionado analizaba diferentes opciones para sobrepasar el obstáculo. Se planteó realizar una modificación de la zona y ajustarla de acuerdo con algunos límites geográficos, opción que se llegó a discutir con las FARC sin ningún éxito. Mientras los militares insistían en que no se podía retirar la tropa, o por lo menos parte de ella, del batallón, la guerrilla se había plantado en que la salida de todos los soldados era indispensable para iniciar el proceso.

La discusión estaba centrada en la posibilidad de dejar algunos soldados en el batallón para que realizaran el mantenimiento de las instalaciones, pues éstas no podían quedar abandonadas. Inicialmente, el general Mora propuso que las armas permanecieran en el armerillo del batallón, bajo el cuidado de unos soldados bachilleres, además del personal administrativo que se dedicaría al mantenimiento de los vehículos, la granja, las viviendas y demás instalaciones. A mí la idea de dejar armas y soldados en un batallón, que iba estar en adelante rodeado por la presencia autorizada de la guerrilla, me parecía extremadamente riesgosa e innecesaria. Sin embargo, los militares insistían en que era necesario mantener allí al menos a un grupo de soldados bachilleres.

Como otra alternativa, exploramos la posibilidad de pedirle a la Cruz Roja Colombiana que se hiciera cargo del batallón, pero la misma entidad rechazó el encargo después de realizar una inspección detallada de las instalaciones y encontrar que las armas permanecían aún en los armerillos. Por su mismo carácter humanitario, consideraron que no podrían encargarse de la administración de unas instalaciones donde se guardara armamento.

Entre tanto, los mismos militares estaban preocupados por la demora en la resolución del incidente, pues tampoco querían aparecer como los culpables del rompimiento prematuro de un proceso en el que tenían puestas sus esperanzas todos los colombianos. La zona estaba decretada desde el 14 de octubre y comenzaría a operar a las cero horas del 7 de noviembre, tal como había quedado establecido en la norma de su creación.

El debate dentro del Gobierno crecía. Las posiciones se habían radicalizado y el ambiente en las Fuerzas Militares era particularmente tenso. Entre tanto las FARC, que observaban desde la barrera los problemas que teníamos para la materialización del despeje, le dijeron a Víctor G.: *"Cuando arreglen sus dificultades internas volvemos a hablar"*. Desde ese momento se perdieron del escenario y el comisionado no volvió a tener contacto con ellos por ninguna vía, lo cual contribuyó a agravar la situación.

Fue entonces cuando cité al ministro de la Defensa, Rodrigo Lloreda; al comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo; al canciller, Guillermo Fernández de Soto; al ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, y a los generales Tapias y Mora, para que asistieran a un desayuno de trabajo en la Casa de

Nariño. Teníamos que llegar a una solución que nos permitiera cumplir con la desmilitarización acordada y a la vez salvaguardar el honor militar. Un poco antes del desayuno, llamé al comisionado a mi despacho y le dije que la noche anterior había estado pensando sobre la encrucijada que teníamos con el batallón y que se me había ocurrido una fórmula que podría funcionar. Yo, como presidente, y los funcionarios del Gobierno, teníamos que contar con una sede adecuada en San Vicente para cuando fuéramos a la Zona. Así que podíamos designar al batallón como la sede del Gobierno Nacional en San Vicente del Caguán, como una determinación unilateral.

La idea era que allí quedara solamente personal administrativo y salieran todos los soldados para que el batallón sirviera exclusivamente como sitio de llegada y alojamiento para el presidente de la República y los funcionarios y negociadores del Gobierno, así como para los invitados especiales, nacionales y extranjeros, que fueran a la Zona de Distensión. Era una solución que respondía a una necesidad real que teníamos de disponer de un lugar para el alojamiento y coordinación de nuestro equipo de negociación. El personal administrativo, por otra parte, sería designado por las Fuerzas Militares, lo que les daría la confianza de que las cosas funcionarían adecuadamente.

El comisionado fue inicialmente escéptico frente a la fórmula y su aceptación por ambas partes, pero esa ya era una determinación tomada. En el desayuno expliqué la propuesta a los ministros y a los militares, la cual contó con el consenso de los presentes, si bien los generales insistieron en que se quedara en el batallón un personal de soldados bachilleres desarmados para cuidar las instalaciones, algo que todavía no me gustaba, pero que pensé que podíamos llegar a negociar.

Un par de días después, el comisionado se dirigió al Caguán para notificarle la determinación a la guerrilla pero no encontró a ninguno de sus miembros y le fue imposible establecer cualquier tipo de contacto. De regreso a Bogotá, me explicó la situación. Parecía increíble que después de encontrar la salida al problema, ahora la comunicación con la guerrilla estuviera totalmente cortada, obstaculizando la puesta en marcha del proceso.

Ante la gravedad de la situación, Víctor G. viajó a México, en donde, por medio del parlamentario mexicano Gustavo Carvajal, intentaría contactar a Olga Marín y a Marcos Calarcá, miembros de las FARC que vivían en ese país. Una vez llegado allí, se dirigió a la oficina de Carvajal quien, para su asombro, le informó que los dos guerrilleros estaban en una habitación contigua pero que no podían hablar con él pues la orden que habían recibido del Secretariado era la de no tener ningún contacto con el Gobierno. Fue así como, de manera insólita, estando a sólo metros de distancia, Víctor G. tuvo que utilizar a Carvajal como mensajero para que le comunicara a los guerrilleros la determinación del Gobierno de convertir al batallón en la sede del Gobierno, dejando allí únicamente personal administrativo. Por supuesto, no hubo respuesta inmediata y, finalmente, el comisionado salió

de la reunión sin lograr nada concreto de los delegados de las FARC, lo cual complicaba todavía más la situación. Era un mal síntoma, sin duda, pues hasta el momento las comunicaciones no se habían interrumpido por ningún motivo.

Enterado de las dificultades de su gestión, le pedí de inmediato al comisionado que viajara de México a Porto, Portugal, en donde me encontraba asistiendo a una Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Una vez analizado el tema, la conclusión a que llegamos fue clara: teníamos que lograr que la guerrilla se enterara y reaccionara frente a la determinación, por lo que le indiqué a Víctor G. que diera una declaración pública anunciando la decisión oficial del Gobierno de dejar el Batallón Cazadores como su sede en San Vicente, como único mecanismo para que la guerrilla tomara nota de la misma y reanudara los contactos.

La noche anterior al inicio del despeje, es decir, el 6 de noviembre, con la fórmula de los funcionarios administrativos en marcha, el comisionado, acompañado por el ministro del Interior, se reunió nuevamente con la cúpula militar para ultimar los detalles del inicio del despeje. Al filo de la media noche, los generales le preguntaron al comisionado si la guerrilla sabía que en el batallón permanecerían los soldados bachilleres y éste les contestó que no había podido darles esa información. La reacción de la cúpula fue muy fuerte, pues temían que la guerrilla masacrara a los soldados que estaban allí y ellos no contaban con un plan para sacarlos. Fueron momentos de altísima tensión entre el comisionado y los generales, pues a esa hora, mientras ellos discutían en las oficinas del alto mando, el despeje se iniciaba oficialmente y en el Batallón Cazadores aún permanecían algunos soldados.

Llegó así el 7 de noviembre, fecha de comienzo formal del despeje. Su importancia fue resaltada con un gran acto al que asistieron como invitados el procurador, Jaime Bernal Cuéllar; algunos parlamentarios; miembros de la Iglesia; magistrados, dirigentes gremiales y funcionarios del Gobierno, quienes, con su presencia, confirmaron la legitimidad y el respaldo nacional al proceso que se iniciaba.

En este evento, que contó con una masiva participación de la comunidad, no intervino la guerrilla, que seguía sin dar señales de vida. En cuanto al batallón, si bien ya habían salido la mayoría de los soldados, aún permanecían en sus instalaciones cerca de un centenar de hombres, soldados bachilleres al mando de un coronel, cuya misión sería la de realizar el mantenimiento logístico del batallón.

Una vez transcurrido el acto, el comisionado —que estaba con Camilo Gómez, mi secretario privado— se dirigió al batallón, en donde se serviría un almuerzo para los invitados especiales. Quienes estaban allí notaban un ambiente particularmente ominoso. Los rumores acerca de una posible actuación de la guerrilla contra las instalaciones del Batallón Cazadores, basados en que las FARC consideraban que los soldados administrativos que

se habían quedado implicaban un incumplimiento de la desmilitarización, crecían con el paso de los minutos.

La angustia se hizo aún más evidente cuando la guerrilla envió un mensaje con los miembros de la Cruz Roja Colombiana que prestaban apoyo al acto. Decía que más de 1.000 guerrilleros realizarían un asalto al batallón esa misma noche y que los civiles debían salir. La respuesta del comisionado fue inmediata. Con el mismo emisario le respondió a las FARC que de allí no se movería nadie y que esperaba que respetaran el acuerdo. El emisario no demoró más de 15 minutos en ir y volver con las razones, lo que significaba que la guerrilla estaba muy próxima. Los soldados y el coronel que estaba a cargo de ellos temían lo peor. Esa fue una de las más tensas noches en el batallón y quienes pernoctaron allí, en medio de la zozobra, recuerdan también que, paradójicamente, fue una de las más despejadas y llenas de estrellas que se hayan visto jamás en el Caguán.

La noche transcurrió en calma y finalmente no se presentó ningún hecho que lamentar. Los guerrilleros entendieron que entrar al batallón hubiera sido un acto demencial que habría acabado de un tajo con el proceso. Al día siguiente el despeje ya se iniciaba en firme y ordené a Camilo Gómez que regresara de inmediato. Esa misma noche me reuní con él y le pedí un detallado y preciso informe de lo que estaba sucediendo y de la percepción que se tenía.

Lo cierto es que, mientras permanecieran en el batallón algunos soldados bachilleres, así estuvieran desarmados y sólo cumplieran funciones administrativas, el problema continuaba, por lo que teníamos que encontrar otra solución para evitar el rompimiento del proceso, la cual debería ser compartida con los militares y con la opinión pública. El problema de fondo era de confianza. La guerrilla no confiaba en el personal administrativo que se iba a dejar, pues pertenecía a las Fuerzas Militares, y los militares no confiaban en que la guerrilla respetara el batallón y se abstuviera de ingresar a él. Teníamos que idear un punto medio que les diera tranquilidad a todos.

Desechada la Cruz Roja, por su negativa anterior, las opciones que quedaban no eran muchas, pero pensé en otra posibilidad que al final se convirtió en la solución del escollo más complejo que tuvimos para el inicio de las conversaciones. Convoqué al ministro de Defensa y al comisionado para la Paz y les planteé la idea de acudir a la Iglesia católica para que fuera ella la que se encargara del manejo del batallón.

De inmediato se vio que esta salida resultaría viable, en lo que también coincidieron el general Tapias y la cúpula militar. Le solicité, entonces, al comisionado que se reuniera con monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, para plantearle esta opción y pedirle su ayuda. Por fortuna, él asumió el reto con entusiasmo y designó a monseñor Santamaría para que se encargara del batallón. Para apoyarlo utilizaríamos personal civil, más específicamente técnicos del SENA, con experiencia en administración hotelera.

Ya con la idea en marcha, se ordenó la salida de los soldados que aún quedaban allí y, antes de Navidad, viajaron los últimos muchachos que permanecían en el batallón, quedando así solucionado el mayor de los obstáculos presentado hasta entonces. El mismo general Mora, comandante del Ejército, quien había sido uno de los más férreos opositores a la salida de los soldados, especialmente porque no quería que el honor militar fuera mancillado por la presencia guerrillera en una importante guarnición, manifestó expresamente su *"alegría y satisfacción"* de que la Iglesia recibiera las instalaciones. ¡La crisis, finalmente, estaba conjurada!

Con la salida de los últimos soldados se completó la desmilitarización y la guerrilla restableció los contactos. El incómodo episodio trajo, además, una consecuencia positiva. Las FARC, al constatar la salida del personal militar de San Vicente —y teniendo en cuenta la publicidad que había tenido este hecho—, anticiparon su aceptación de que el despeje era un hecho, lo cual significaba que podíamos seguir a la tercera etapa del cronograma inmediatamente, sin esperar a que se cumplieran los segundos 90 días. Fue así como se tomó la decisión de adelantar en un mes la fecha de instalación de los diálogos, de forma que se llevara a cabo el 7 de enero del año 2000 y no el 7 de febrero, como estaba inicialmente previsto.

El 15 de diciembre, en un discurso en la Escuela Militar, ratifiqué la buena noticia: *"Hemos pasado de lo procedimental y vamos a lo sustancial. [...] el próximo 7 de enero el presidente de la República y los líderes de las FARC daremos instalación oficial a los diálogos que permitirán trabajar de manera seria en una agenda que haga viable y acerque la paz a los colombianos"*.

También hice claridad sobre la situación en la que quedaría el ya famoso Batallón Cazadores: *"La sede del Gobierno en la Zona de Distensión será atendida por personal civil especializado que permita recibir el sinnúmero de visitas, la representación del Gobierno y la presencia de las distintas agencias del Estado. Por lo tanto, los soldados bachilleres que allí se encontraban irán a cumplir labores en otras instalaciones militares"*.

Como dije en el discurso, ya había pasado el escollo de procedimiento y ahora había llegado el tiempo de sentarnos a hablar. El episodio del Batallón Cazadores acabó convirtiéndose, más que en un pulso entre las FARC y el Gobierno, en una prueba de fuego para el consenso que debía primar dentro del mismo Estado. La prueba fue superada pero la dureza de la misma resquebrajó para siempre las relaciones entre el comisionado y los altos mandos militares. Una baja lamentable, sin duda, en la armonía de nuestro trabajo institucional.

CAPÍTULO XI

“La guerrilla nos quemó todo... menos la pobreza”

A menudo el proceso con las FARC, por la espectacularidad y audacia que suponía la creación de la Zona de Distensión, se llevó el protagonismo de los esfuerzos de paz. Sin embargo, debo dejar claro que jamás se descuidó el trabajo de acercamiento y diálogo con el ELN, la segunda guerrilla del país, el cual tenía su propio dinamismo y características que exigían un tratamiento diferente al que estaba por iniciarse con las FARC. Es más, lo cierto es que en los primeros meses de mi gobierno el proceso que más perspectivas tenía y el que iniciamos primero fue el del ELN.

Cuando llegué a la Presidencia no existía ninguna clase de contactos vigentes entre el Gobierno y esta organización. Se conoció, sin embargo, en su momento, que el gobierno Samper había buscado llegar a un acuerdo con ese grupo guerrillero en reuniones que se efectuaron en España, y que habían firmado en febrero de 1998 una declaración secreta en el palacio de Viana de Madrid, en la que acordaban realizar en junio una nueva reunión para definir la metodología, participantes y características de una eventual y futura convención nacional.

Sin duda, de haberse consolidado este acuerdo, habría posicionado a Serpa en su carrera a la Presidencia como el más seguro continuador de sus lineamientos. Eso mismo, seguramente, pensó el ELN, pues el 1º de abril, una vez filtrado a los medios de comunicación el texto del acuerdo, declaró suspendidos los términos de la Declaración de Viana, aduciendo que su desarrollo podría usarse para fines políticos. Cinco días después, el 6 de abril, dicha organización dio a conocer la muerte de su máximo comandante, el cura español Manuel Pérez, que fue reemplazado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias *Gabino*.

Descartado el acuerdo con el gobierno Samper, la sociedad civil, aglutinada en el llamado Comité Nacional de Paz, que reunía a importantes representantes del Estado —aunque no del Gobierno—, los gremios económicos, la Iglesia y los movimientos sociales, con especial liderazgo del procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y el presidente de

la Federación Nacional de Comerciantes, Sabas Pretelt de la Vega⁸, retomó el diálogo con el ELN, bajo el auspicio y la facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y de Colombia.

Fue así como se reunieron en Alemania importantes representantes de los diferentes estamentos nacionales con representantes del ELN, liderados por Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de dicha guerrilla. La primera reunión se llevó a cabo en Mainz en junio de 1998 y la segunda y definitiva en Würzburg, el 15 de julio —a menos de un mes de mi posesión como presidente—, con la presencia de unos 40 integrantes del Comité Nacional de Paz.

De este último encuentro salió el llamado “Acuerdo de Puerta del Cielo”, en el que el ELN se comprometió a dar cumplimiento a una serie de normas y principios humanitarios, algo que nunca cumplió, y se determinó propiciar la convocatoria de una convención nacional, como un espacio de diálogo y propuestas entre el Estado, la sociedad y la guerrilla.

En esas circunstancias, una vez asumí la Presidencia, entendí que mi primera tarea con el ELN tenía que ser la de rescatar un diálogo que estaba roto, en lo que al Gobierno concernía, y revisar las condiciones de los acuerdos logrados en Alemania, para determinar su viabilidad.

Por su parte, varios representantes del Comité Nacional de Paz habían continuado reuniéndose en Itagüí con Francisco Galán y Felipe Torres, líderes del ELN y voceros de dicha organización, detenidos en la penitenciaría de alta seguridad ubicada en esa población antioqueña, con miras a adelantar los preparativos y las discusiones que allanaran el camino de la Convención Nacional.

El Acuerdo de Puerta del Cielo era, sin duda, un avance fundamental, así que decidí apoyar su cumplimiento, más aún porque contaba con el concurso de los más diversos sectores de la vida nacional. Tomada esta determinación, di instrucciones al alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, para que anunciara públicamente el apoyo del Gobierno a la realización de la Convención Nacional y a los trabajos del Comité Operativo Preparatorio de la misma, conformado por los dos líderes guerrilleros detenidos e importantes miembros de la sociedad colombiana⁹.

Hasta ese momento, sin embargo, el ELN sólo aceptaba hablar con la sociedad civil. El reto, entonces, consistía en recuperar para el Gobierno una interlocución que dicho grupo se había negado a concederle desde la ruptura de los diálogos en Tlaxcala, en 1992, cuando hacía parte, junto con las

⁸ Sabas Pretelt fue nombrado en noviembre de 2003 ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe.

⁹ Del Comité Operativo formaban parte, por la sociedad civil, Jaime Bernal Cuéllar, Sabas Pretelt, Francisco Santos, Ana Teresa Bernal, Samuel Moreno Rojas, Mario Gómez Jiménez, Alejo Vargas, Alfredo Molano, Hernando Hernández Pardo, María Isabel Rueda, Augusto Ramírez Ocampo, Jaime Caicedo, Carlos Gaviria Díaz, Antonio Picón, Nelson Berrio y el padre Jorge Martínez. Por el ELN, Francisco Galán y Felipe Torres.

FARC, de la llamada Coordinadora Guerrillera. Ésta era la primera dificultad para superar, y se superó, por fortuna, en un corto tiempo.

El comisionado sería, naturalmente, quien llevaría la orientación de las discusiones, actuando como responsable por parte del Gobierno. Adicionalmente, consideré necesario, por razones operativas y por el desarrollo paralelo de las negociaciones con las FARC, contar con apoyo extra para esta negociación. Fue así como designé al politólogo Gonzalo de Francisco, quien se había desempeñado como asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno Gaviria y contaba con experiencia en diversos procesos de paz, para que se encargara de desarrollar los contactos necesarios con el ELN.

"SI NO VUELVEN, EL GOBIERNO PUEDE CAERSE"

A fines de septiembre el ELN, mediante carta firmada por Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán, de su Comando Central, y el Comité Operativo de la Convención Nacional, en otra comunicación simultánea, solicitaron al Gobierno la expedición de salvoconductos que permitieran a Francisco Galán y Felipe Torres salir temporalmente de prisión con el único objetivo de reunirse con el Comando Central del ELN, los miembros del Comité Operativo, representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana y Alemana, y observadores internacionales, en los mismos campamentos del ELN, y participar en una reunión preparatoria de la Convención.

El 7 de octubre se llevó a cabo en algún lugar de la geografía nacional una primera reunión entre el Comando Central del ELN, máximo órgano de esta guerrilla, y el alto comisionado para la Paz, a la cual asistió, como testigo, el embajador de España, Yago Pico de Coaña. El encuentro se realizó en un ambiente de cordialidad y se discutieron las posiciones que cada parte tenía sobre un eventual proceso de paz. Víctor G. reiteró allí el respaldo gubernamental a la realización de la Convención Nacional y de las reuniones preparatorias, dejando atrás los temores de miembros del ELN y de la sociedad en el sentido de que el Gobierno desconocería los esfuerzos realizados hasta el momento. A su vez, el ELN insistió en su petición para que los jefes guerrilleros presos asistieran a la primera reunión preparatoria de la Convención, tema que Víctor G. se comprometió a estudiar.

Estando en medio de la discusión, la calma se vio alterada por un incidente imprevisto, producido por el sobrevuelo de un helicóptero militar sobre el lugar de la reunión. Hubo momentos de pánico pues se pensó que se iniciaría un intercambio de disparos, estando allá el comisionado con el embajador de España. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores.

A partir de esa reunión se intensificaron los contactos de los miembros de la comisión encargada de los preparativos, cuyas reuniones se realizaban en la cárcel de Itagüí. Allí se definió que, para garantizar la llegada de los asistentes a la reunión y la seguridad para los miembros del ELN que estu-

vieran allí, se utilizaría la llamada metodología de Santa Ana, que fue la desplegada para la liberación de los veedores de la OEA y un funcionario de la Gobernación de Antioquia, secuestrados por el ELN en octubre de 1997. Se trataba, en suma, de cesar las operaciones militares en la zona, pero sin el retiro de las tropas, con el único fin de generar el espacio para la celebración de la reunión.

En cuanto al permiso para que Galán y Torres salieran de la cárcel de Itagüí y se reunieran con sus compañeros en sus propios campamentos, en plena selva, y sin más garantía de regreso que su propia palabra, se trataba, sin duda, de una decisión tremendamente arriesgada. No existían antecedentes de una autorización de esta clase y obviamente, al interior del Gobierno, el tema causaba una gran preocupación. Sólo pensar en la posibilidad de que los dos presos más importantes del ELN salieran de la cárcel para asistir a una reunión en el monte, en un campamento guerrillero, y luego regresaran a la prisión, implicaba una prueba difícil para todos. Una vez dilucidada la viabilidad jurídica de estos salvoconductos, me tocaba enfrentar la decisión política de concederlos o no, con toda la gravedad que ella suponía.

Me reuní en mi despacho con Víctor G. Ricardo, Gonzalo de Francisco y Camilo Gómez, mi secretario privado, y discutimos el tema y sus riesgos. Les dije: *"Tenemos que ser conscientes de que si ese par de guerrilleros no vuelve, el Gobierno puede caer"*. No era exageración, pues el riesgo era muy alto y requería, por eso mismo, de una determinación sin precedentes.

Finalmente, evaluadas las condiciones, autoricé la salida de los dos presos. Debo confesar que mis temores y aprehensión sólo cesaron cuando regresaron a la prisión, una vez culminada la reunión.

Ésta sería la primera de varias salidas de la cárcel que esos dos jefes guerrilleros realizarían y, sin duda, una clara muestra de la voluntad del Gobierno de avanzar y una señal inequívoca de confianza en las posibilidades de ese proceso. Lo hice creyendo en la palabra empeñada del grupo guerrillero y sin más garantías que ésta. Muchos considerarían esto como un acto de ingenuidad. Yo pienso que fue un necesario acto de confianza que el ELN nunca valoró en su verdadera dimensión.

Con base en estas consideraciones, el 9 de octubre firmé una resolución y un decreto fundamentales: por la primera, declaré abierto el proceso de diálogo con el ELN y reconocí un carácter político a dicha organización —cinco días antes de hacerlo con las FARC—, y, por el segundo, determiné la posibilidad de trasladar temporalmente a guerrilleros presos *"fuera de los centros de reclusión, bajo la supervisión y vigilancia permanente del Inpec"*. Con este último instrumento despejaba el camino jurídico para la salida de Galán y Torres.

Gracias a lo anterior, el 11 y 12 de octubre de 1998, en las montañas del oriente antioqueño, se llevó a cabo, finalmente, la reunión preparatoria de la Convención Nacional con la presencia de los dos guerrilleros detenidos,

otros miembros del ELN, del Comité Operativo de la Convención Nacional y de las Iglesias de Alemania y Colombia. Estuvieron también el embajador de España y Pierre Gassmann, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, en calidad de observadores. Por parte del Gobierno asistió Gonzalo de Francisco.

De acuerdo con el texto final de la reunión, conocido como "Declaración de Río Verde", se acordó la instalación del proceso de Convención Nacional para febrero de 1999, y se hizo entrega formal de dicha propuesta al Gobierno.

De esta forma, por primera vez se iniciaba un proceso de paz de manera directa e independiente con el ELN. Éste sería el primer paso de una larga cadena de encuentros y desencuentros, de avances y retrocesos, de hechos afortunados y muchos más lamentables, que finalmente llevaron a la suspensión de las conversaciones con este grupo. Fue un proceso caracterizado siempre por una mayor participación de diferentes grupos de la sociedad. Si bien es cierto que en un principio el ELN no aceptaba el diálogo directo con el Gobierno, rápidamente cambió su posición y los encuentros directos fueron frecuentes, productivos en ocasiones y, sobre todo, el grupo guerrillero entendió que la participación del Gobierno era indispensable para poder avanzar.

No se puede desconocer que siempre existió una discusión acerca de la conveniencia o inconveniencia de llevar adelante los procesos por separado con los dos grupos guerrilleros. Yo creo que fue un acierto el que ambos procesos se adelantaran en forma independiente. En muchas ocasiones el uno servía de emulación para el otro y los hechos que sucedían en uno tenían indudable repercusión para el otro.

Creo que es importante mencionar que en muchas ocasiones el proceso del ELN mostró aspectos más avanzados que en el caso de las FARC. Como ya dije, la resolución de apertura del proceso con el ELN fue anterior, por unos días, a la resolución de las FARC. Con aquella organización fue con la que primero logramos una activa participación internacional, al constituir el grupo de los cinco países amigos en julio de 2000 (Francia, España, Noruega, Suiza y Cuba). Así mismo, el ELN concretó, primero que las FARC, la liberación de más de 40 soldados y policías que estaban en su poder.

A pesar de las dificultades de su dirección, de las contradicciones que se presentaban entre ellos y de los cambios de posición de última hora cada vez que se llegaba a un acuerdo, este grupo mostró una mayor apertura para el diseño más ágil del proceso, aunque sus propias dificultades les impedirían después concretar en hechos esa buena disposición.

LA TRAGEDIA DE MACHUCA

Tristemente, tan sólo unos días después de la promisorio reunión de Río Verde, el ELN causó una de las más espantosas tragedias que hayan afectado

a los colombianos más pobres y humildes, y, al mismo tiempo, se propinó el más penoso autogol de su historia.

En su afán insensato por destruir la infraestructura energética del país, y sin medir las consecuencias de sus actos, un comando de esta organización dinamitó un tramo del oleoducto central en Antioquia, que pasaba cerca de una pequeña población de Machuca, en el municipio de Segovia. El resultado fue la generación de un pavoroso incendio, una enorme bola de fuego que se desplazó por el cañón en donde está ubicada la población, que causó la muerte por incineración de por lo menos unos 70 habitantes de dicho corregimiento y terribles quemaduras a otros tantos. Niños, mujeres, ancianos, todos calcinados por la imprudencia asesina del ELN.

El 18 de octubre, cuando sucedió la tragedia, me encontraba en la Cumbre Iberoamericana de Porto, en Portugal. Desde allí seguí, con el corazón angustiado, las consecuencias de este acto criminal e impartí las órdenes del caso. Era inconcebible que el mismo día en que 22 jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal y América Latina firmaban una declaración expresando el *"más firme e incondicional apoyo al proceso de construcción de la paz que ha emprendido el Gobierno de Colombia como tarea prioritaria y en desarrollo de la voluntad expresada por el pueblo colombiano"*, los guerrilleros en el país perpetraran un salvaje acto contra nuestra riqueza nacional y nuestro medio ambiente, que habría de convertirse en una terrible crisis humanitaria.

Este hecho ocasionó, como era de suponerse, un inmediato deterioro del proceso. Aunque en comunicados públicos la guerrilla intentó culpar al Estado, la tragedia era de tales magnitudes y las pruebas tan contundentes que al movimiento guerrillero no le quedó más opción que aceptar su responsabilidad y sancionar a los culpables. El mismo Gabino declaró ante un noticiero de televisión que había sido *"un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción, en cuanto que se equivocan en la apreciación de las consecuencias que podría ocasionar el derrame de crudo"*. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y ningún colombiano olvidaría tan espantoso crimen¹⁰.

Este proceso, que había arrancado con fuerza, con votos de confianza y con desarrollos concretos, encontraba el primer gran obstáculo. La responsabilidad era de la guerrilla pero todos perdíamos con el aplazamiento de esta posibilidad de paz.

Al día siguiente de mi regreso de Portugal estuve en Machuca, reunido con su adolorida población, y todavía recuerdo con horror las imágenes de muerte y el olor de tragedia, de carne calcinada, que aún se sentía en sus

¹⁰ Los guerrilleros que ocasionaron la tragedia de Machuca fueron juzgados y expulsados del ELN y formaron el llamado Ejército Revolucionario Guevarista —ERG—, una disidencia que asoló los departamentos de Chocó y Antioquia, la cual hoy está prácticamente absorbida por las FARC.

calles. Se veía bajar de la montaña hasta el pueblo un corredor negro dejado por el camino inclemente de la explosión, y el peso de una tristeza sin fondo flotaba en el ambiente.

Partía el alma ver este humilde caserío, incrustado en medio de un cañón, diezmado y arrasado por la desgracia. Los campesinos, los niños, casi no hablaban, como pasmados, intentando comprender, sin lograrlo, la dimensión y el sentido de su desgracia. Fue el más bárbaro atentado en contra de unas gentes inocentes e indefensas. Y fue una consecuencia más, de las tantas por las que tendrán que responder las guerrillas, del uso de métodos terroristas de guerra con alcances masivos.

Por lo menos marcó una pauta en el comportamiento del ELN que, desde entonces, por decisión de su Comando Central, se ha abstenido de ejecutar voladuras del tubo petrolero en áreas cercanas a poblaciones.

El más crudo resumen de esta tragedia lo realizó un niño, de unos diez años, quien, durante mi visita, tomó la palabra y pronunció, con voz temblorosa, una de las frases más impactantes y dicientes que haya escuchado jamás:

"La guerrilla nos quemó todo... menos la pobreza".

CAPÍTULO XII

Relanzamiento de las relaciones internacionales

Al tiempo que se dieron los primeros y significativos pasos en los procesos de paz con las FARC y el ELN, otro factor decisivo en la búsqueda de una solución integral para el país tuvo positivos desarrollos en esos primeros meses de mi período presidencial: las relaciones internacionales.

No es un secreto que la posición de Colombia, internacionalmente hablando, estaba especialmente deteriorada. El probado ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de mi antecesor había minado la legitimidad de su gobierno y limitado su interlocución internacional.

Frente a la principal potencia mundial y nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos, la situación era particularmente dramática. No sólo al presidente le habían cancelado la visa para ingresar a dicho país, sino que soportábamos el estigma de sucesivas descertificaciones en el tema de la lucha antinarcóticos. A algunos generales y altos oficiales se les había negado, igualmente, el ingreso a los Estados Unidos y se habían suspendido cupos a oficiales colombianos para adelantar cursos de perfeccionamiento militar.

En Europa, por otro lado, proliferaban los cuestionamientos al Estado y a las Fuerzas Militares en materia de derechos humanos, en buena parte propiciados por la efectiva "diplomacia" de las guerrillas, y se presentaba una notoria disminución en la colaboración de inteligencia con nuestras fuerzas de seguridad.

Resultaba urgente, sin duda, recuperar la imagen del país, insertarlo en la agenda de la comunidad internacional, buscar cooperación internacional y garantizar el apoyo para el proceso de negociación y para la reestructuración en el campo de la defensa.

Pensando en el mejor ejecutor posible de estas tareas esenciales e impostergables, designé a mi buen amigo Guillermo Fernández de Soto, que había sido mi jefe de campaña, como canciller de la República. Su experiencia en la materia —había sido viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Belisario Betancur, siendo ministro Rodrigo Lloreda, y tenía un destacado recorrido en trabajo con organismos internacionales—, su talante sereno y firme y su amplia cultura eran prenda de garantía para la Nación, y por eso fue uno de los pocos nombramientos que anuncié antes de posesionarme.

Sabía, desde el primer momento, que si no se recuperaba la imagen de Colombia y se vinculaba a la comunidad internacional en el proceso que se iniciaba, la estrategia resultaría incompleta. Así lo había planteado antes del inicio del Gobierno y era el momento para poner en marcha las ideas y teorías que teníamos al respecto.

Partíamos de una consideración fundamental: nadie discutía la legitimidad de la institucionalidad democrática que representábamos. Era claro para el mundo que la democracia en Colombia, con todas las imperfecciones que se le pueden anotar, era un sistema operante y que mi gobierno, respaldado por la más grande votación popular de nuestra historia, detentaba una representación inobjetable. Además, nosotros teníamos que mostrarle al mundo entero que Colombia era la víctima del conflicto, de las drogas y de la violencia y, por lo mismo, pasar de ser un "país problema" a un "país con problemas", merecedor de la más amplia cooperación internacional.

Muchas veces se critica a los jefes de Estado cuando realizan viajes en cumplimiento de la misión de representar a sus países. Sin embargo resulta claro, en el mundo diplomático de hoy, que las relaciones más eficaces y productivas se crean y se desarrollan gracias a los contactos personales, y que los viajes han perdido esa estela de glamour y fatuidad que tenían en la antigua diplomacia, para convertirse en herramientas utilísimas de trabajo por el país.

Volver a insertar a Colombia en el contexto internacional requería del esfuerzo personal y continuo del mismo presidente para exponer nuestra realidad y nuestras propuestas en los más diversos escenarios, una tarea que llevé a cabo sintiendo siempre la responsabilidad que implica representar los intereses y la dignidad del país en el exterior. No creo que hubiésemos logrado tanta cercanía con los Estados Unidos, con Cuba o con España, por citar algunos ejemplos, si ese esfuerzo no se hubiese realizado en forma directa. Esa es una característica de la diplomacia actual, y así teníamos que entenderlo.

La estrategia internacional estaba orientada, entonces, primero que todo, a recuperar la credibilidad y la posición de Colombia en la comunidad internacional, mostrando las verdaderas dimensiones de nuestros problemas y retomando el liderazgo que en muchos campos había perdido el país. Por esta vía también volveríamos a ocupar los espacios internacionales que la guerrilla, con su campaña de desinformación, había llenado durante los años anteriores.

Teníamos que lograr, también, que la comunidad internacional se vinculara a los procesos de paz. No cabe duda de que, en las relaciones internacionales, es mucho más factible conseguir apoyo para la paz que para la guerra. Era seguro que ningún país intervendría en el conflicto, pero a muchos sí les gustaría participar y ayudar en un proceso de paz.

Desde otro punto de vista también consideramos que, para la opinión pública y para la misma guerrilla, el hecho de involucrar a la comunidad inter-

nacional en la solución política daría una mayor tranquilidad en cuanto a la transparencia y seriedad del proceso. Ningún Estado se arriesgaría a participar en él si no se tratase de un proceso serio, como lo fue en la realidad. Al final del proceso con las FARC, por lo menos 27 países, incluyendo al Vaticano, estaban actuando de manera directa, en diversos grados¹¹. Son pocos los ejemplos en el mundo en los que se ha dado una participación internacional tan amplia y eso es, sin duda, una muestra clara de lo que se logró.

Así mismo, era necesario convencer al resto del mundo de que la lucha contra el problema mundial de las drogas no era un asunto exclusivo de Colombia sino que se trataba de una responsabilidad de todos. Buscar la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas mediante la aplicación del principio de la corresponsabilidad se convirtió en uno de los principios básicos de nuestra política exterior. La meta era lograr que la comunidad internacional entendiera ese principio y lo convirtiera en hechos efectivos y concretos, algo que logramos a través de un mecanismo que se convirtió en el eje esencial de la cooperación internacional y de la política social de mi gobierno: el Plan Colombia.

NACIMIENTO DEL PLAN COLOMBIA

No hay duda: si hay un tema que considero fundamental dentro de las realizaciones de mi gobierno, por su impacto social y su efecto positivo en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, ese es el Plan Colombia.

Se trata, a la vez, de un tópico que generó grandes malentendidos por la contumaz posición de algunos sectores y analistas que se empeñaron en verlo como un plan "guerrerrista" impuesto por los Estados Unidos y no como lo que era: un plan social colombiano para alcanzar y consolidar la paz, diseñado como una estrategia integral con el fin de convocar un importante respaldo internacional. Muchas veces lo expliqué, en los más disímiles escenarios de Colombia y el exterior, y, sin embargo, no faltan nunca quienes persisten —cada vez menos, por fortuna— en mantener esa imagen distorsionada e incluso "satanizada" de un plan que significó —y aún lo sigue haciendo— una verdadera revolución social en el país.

Desde mi campaña electoral venía hablando de la necesidad de implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, similar al que llevó a cabo Estados Unidos para financiar la reconstrucción de los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Guardadas proporciones, Colombia era también un país asolado por las plagas de la violencia y la pobreza, generadas e incentivadas en gran parte por el negocio mundial de

¹¹ Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, el Vaticano y Venezuela.

las drogas ilícitas, cuyos dineros sucios proporcionan el combustible para la hoguera de nuestros problemas.

Mi idea era promover una estrategia integral para luchar contra el problema de las drogas, que generara al mismo tiempo alternativas de desarrollo social en las zonas más apartadas y olvidadas del país, que facilitara el avance del proceso de paz con el que estaba dispuesto a comprometerme, y que fuera respaldada y financiada parcialmente por la comunidad internacional. De ahí nace el Plan Colombia, un concepto que planteé al interior de la campaña y que, curiosamente, coincidió con la estrategia de apoyo al país que venía estudiando la Organización de las Naciones Unidas a través del grupo de análisis de alternativas para la paz que promovió el entonces representante del PNUD en Colombia, Francesco Vincenti.

Le pedí colaboración a un excelente amigo —mío y de Colombia—, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para comenzar a diseñar los mecanismos que nos permitieran concretar esta idea. Gracias a su entusiasmo, iniciamos con buenos auspicios un Plan por la Paz de Colombia, con el objetivo de darle sostenibilidad y firmeza a la paz que todos anhelábamos. El Plan sería uno de los elementos fundamentales del proceso de paz y, a través de él, convocaríamos el interés y la financiación de la comunidad internacional. Así lo expresé durante mi campaña, en el discurso que di en el Hotel Tequendama el 8 de junio de 1998, cuando lancé mi propuesta de paz:

"Como presidente electo, visitaré a los gobernantes de las naciones industrializadas que han manifestado su interés en ayudarnos, especialmente los Estados Unidos, para concertar con ellos la manera como nos colaborarán para iniciar la redención económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto, que son precisamente aquellas secularmente abandonadas por la inversión del Estado. He dicho que con hambre no hay paz. Necesitamos llevar salud, educación, servicios públicos, vías de comunicación, y generar fuentes de trabajo en esas regiones, para consolidar la paz que se logre en la mesa de las negociaciones".

Una vez electo, terminamos de definir, con los asesores de la campaña, un plan bajo los lineamientos ya señalados, al que primero se pensó llamar Plan por la Paz de Colombia y, por último, Plan Colombia. Nos concentramos en dos aspectos fundamentales: la lucha contra el narcotráfico —como industria y fuente de financiación de los grupos al margen de la ley— y la inversión social.

Frente a la lucha contra el narcotráfico sostuve lo siguiente:

"Mi gobierno no permitirá que la paz sea narcotizada ante el mundo, porque está firmemente convencido de que la prolongación del conflicto interno en Colombia beneficia en primer lugar a los capos de la droga. De allí que sean los narcotraficantes los más interesados en extender ese conflicto e impedir por todos los medios la reconciliación".

Constataba, además, el hecho de que *"la guerrilla ha expresado su disposición programática de facilitar esa erradicación, porque tiene claro que la narcoproducción como actividad económica principal en sus zonas de influencia es un grave riesgo para su proyecto político"*.

En el área social definía el Plan Colombia así:

"El Plan Colombia es un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarán los esfuerzos compartidos de los gobiernos y de los organismos multilaterales con la sociedad colombiana. Sus indicadores de resultados serán la transformación de las zonas donde se cultiva el 80 % de la producción mundial de coca y de amapola en desarrollos agrícolas económicamente rentables para nuestros campesinos, en santuarios ecológicos donde pueda florecer el turismo que respeta la naturaleza y sean protegidos ecosistemas actualmente vulnerados por el flagelo de la narcoproducción, como son la Amazonia, la Orinoquia, parte de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas regiones que son valiosas para el mundo por su diversidad biológica, por el agua, el oxígeno, los bosques, la fauna, la flora y los animales en peligro de extinguirse, deben ser rescatadas y protegidas con un audaz proyecto de erradicación y paz".

El Plan Colombia induciría, además, a transformaciones económicas, sociales y productivas en las zonas periféricas a donde se desplazan los asalariados de la narcoproducción porque el Estado, la sociedad y el modelo económico no les ofrecen alternativas de trabajo ni movilidad social en los sitios donde se asientan sus familias, casi siempre centros demográficos densamente poblados con graves problemas de necesidades básicas insatisfechas.

Es importante anotar que el Plan no desconocía los programas de fumigación realizados por el Gobierno colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, para erradicar cultivos de amapola y coca, especialmente tratándose de cultivos de gran extensión, los cuales pertenecían claramente a los grandes capos de la droga y no a los pequeños campesinos. El Plan, sin embargo, enfatizaba en la opción de la erradicación manual, para que ésta se realizara de una manera concertada con la población a medida que se fueran perfilando nuevas alternativas social y económicamente viables para el futuro de los campesinos.

Hay que tener en cuenta que en el combate contra el narcotráfico hay mucho más que un simple capricho prohibicionista. No sólo sus dineros sucios son empleados para la compra de armas y explosivos que luego se utilizan contra la población colombiana, sino que su explotación causa un inmenso e irreparable daño ecológico. Cerca de tres millones de hectáreas de bosques tropicales colombianos han sido destruidas para cultivar coca y amapola, sin contar los tremendos perjuicios que generan en la tierra y el agua los precursores químicos utilizados para su producción. Y lo más importante: la droga es un veneno que está minando día a día a la juventud del mundo y de Colombia, comprometiendo el futuro mismo de la humanidad.

Fundamos nuestros requerimientos de ayuda internacional en la Teoría de la Corresponsabilidad o Responsabilidad Compartida, que promovimos durante todo mi gobierno, la cual postula que la lucha contra las drogas ilícitas debe ser una responsabilidad global y no sólo de Colombia, un país que se ha jugado entero contra este delito y que es, además, su primera víctima, por el inmenso sacrificio de vidas inocentes y por los efectos funestos del accionar de las mafias de narcotraficantes, interesadas más que nadie en que el conflicto colombiano continúe, porque a través de él se alimentan y sobreviven.

Teníamos claro que era el momento de exigir con toda firmeza corresponsabilidad en esta lucha. Es un hecho que los químicos y precursores necesarios para la producción de cocaína vienen de otros países, especialmente de Europa, y que los dineros ilícitos se encuentran en paraísos fiscales de Estados Unidos, el Caribe y Europa, lo que significa que no son precisamente nuestros campesinos los que amasan esas ganancias ilícitas, sino las grandes potencias. Lo principal, además, es que el grueso del consumo no se origina en Colombia sino en el exterior y es una verdad de Perogrullo que mientras haya consumo habrá producción, que mientras haya demanda habrá una oferta que la supla. Así erradiquemos la droga de Colombia, otro u otros países se encargarán de abastecer los mercados internacionales.

Por todo lo anterior, la lucha contra el narcotráfico tenía que ser un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional y debía enfocarse —esa era nuestra propuesta— a través de una estrategia más amplia e integral que la simple interdicción, que incluyera el desarrollo social como una pieza clave. De hecho, la ayuda militar ya se venía dando, aunque en pequeña escala, en el marco, no sólo de acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos, sino también de acuerdos multilaterales. Lo que implicaba el Plan Colombia era un esquema totalmente nuevo, enfocado por primera vez en el campo social.

Entendiendo que ésta no podía ser una labor en la que estuviera únicamente comprometida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz —cuyo trabajo era demasiado intenso en cuanto a tiempo y responsabilidad—, encargué de su elaboración y puesta en marcha a Rodrigo Guerrero, quien se había desempeñado como alcalde de Cali y tenía una valiosa experiencia en el campo de proyectos sociales, gracias a su vinculación con la Fundación Carvajal, pionera en esta clase de actividades en Cali y el Valle del Cauca.

Así mismo, con el apoyo de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo, y con la colaboración del ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, que poseía una excepcional trayectoria internacional en el tema de la paz y sus desafíos sociales, estudiamos la puesta en funcionamiento de lo que denominé el "Fondo de Inversiones para la Paz", FIP, que era el instrumento para consolidar el Plan Colombia como el eje de la paz y el mecanismo para captar los recursos que lo financiaran.

La idea era acompañar los diálogos con inversión social. El Fondo se nutriría económicamente de aportes del Gobierno, de la comunidad interna-

cional y de los denominados Bonos de Paz. Contaría con recursos por 4.000 millones de dólares de partidas propias y 3.500 millones que deberíamos recaudar de contribuciones internacionales, tanto préstamos en condiciones favorables como aportes no reembolsables.

El 19 de diciembre de 1998, siguiendo el principio de que hay que lograr la paz también a través del desarrollo, viajamos con Víctor G. Ricardo a Puerto Wilches (Santander) para lanzar oficialmente el Plan Colombia y enviar desde allí a los colombianos un mensaje muy claro: que la inversión se realizaría en las zonas más apartadas y azotadas por la violencia, como lo era precisamente esa región del Magdalena Medio. Allí dimos inicio, como un primer paso concreto del Plan, a un proyecto para el fomento al cultivo de palma, destinado a dar trabajo a 150 familias campesinas en 1.500 hectáreas de la zona, el cual fue germen de los exitosos laboratorios de paz que desde entonces se han desarrollado en esta región.

En esa oportunidad definí el Plan Colombia como una *"alianza [...] con los países del mundo y con el sector privado para luchar por la paz, por los derechos humanos, por los derechos sociales y la ecología"*, y como *"un conjunto de proyectos de inversiones estratégicas para la paz, que canalizará los esfuerzos compartidos a favor de quienes viven en las zonas más afectadas por la violencia"*.

Y fui más allá: invité a los mismos grupos guerrilleros con los que había iniciado procesos de paz a que se hicieran *"presentes en la preparación, conformación y ejecución de los programas y proyectos del Plan Colombia"*.

Guerrero fue posteriormente reemplazado por el hasta entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Jaime Ruiz Llano, quien desde este ente planificador de la economía había trabajado intensamente en el tema, a quien designé como alto consejero presidencial.

Jaime ha sido siempre un cercano amigo y asesor. Me acompañó como director del Instituto de Desarrollo Urbano durante mi alcaldía; fue senador de la Nueva Fuerza Democrática, y ahora, con su pensamiento lúcido y su compromiso con el país, era el hombre indicado para el diseño definitivo del Plan Colombia.

Él y Mauricio Cárdenas, a quien nombré en su lugar como director de Planeación Nacional, fueron los principales artífices de la versión final del Plan Colombia, tal como lo presentamos para obtener el apoyo de la comunidad internacional y, particularmente, de los Estados Unidos y Europa.

Una vez aprobado el Plan, para su implementación y desarrollo del componente social, conté con la valiosa colaboración de Olga Isabel Echeverri, quien fue directora del Fondo de Inversiones para la Paz y ocupó la Alta Consejería Presidencial para el Plan Colombia hasta el final de mi mandato. A ella le correspondió, al mando de un entusiasta equipo de trabajo, hacer que los recursos del Plan llegaran a los rincones más apartados del país y, sobre todo, a las familias más necesitadas.

SITUACIÓN INICIAL DE LAS RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS

Cuando se hace un recuento de las relaciones que desarrollé durante mi gobierno con los Estados Unidos hay que partir del hecho infortunado de que éstas se hallaban en el momento más crítico de su historia, tal vez desde los sucesos que rodearon la separación de Panamá.

Además de las dificultades personales que tenía el presidente Samper frente al gobierno norteamericano —como un caso excepcional en nuestra historia diplomática—, el país se encontraba descertificado en su lucha contra el narcotráfico. Por estos y otros motivos, la relación que existía se concentraba única y exclusivamente en el tema del combate al negocio de las drogas ilícitas —una relación absolutamente “narcotizada”— y era manejada, en la práctica, por un número reducido de congresistas republicanos de la Cámara, por parte de Estados Unidos, y la Policía Nacional, en cabeza de su director, el general Rosso José Serrano, por parte de Colombia.

Tal vez ésta ha sido la época en que más se fortaleció la Policía, en especial en su componente aéreo, pues toda la ayuda militar norteamericana para combatir la droga se destinaba a esta entidad, excluyendo las demás. Como es natural, esto generó una relación tensa entre la Policía y las Fuerzas Militares, que participaban también en la lucha contra el narcotráfico, protegiendo al personal de la Policía durante las operaciones de fumigación, sin recibir ninguna ayuda internacional.

Partiendo de esta situación, y buscando una manera de fortalecer nuestras Fuerzas Militares, aprovechando la nueva disposición de ayuda de los Estados Unidos, tuvimos la idea de crear batallones especializados en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? La razón era lógica. En todas las operaciones de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, y en especial las de fumigación, siempre se requería del soporte del Ejército Nacional, lo cual implicaba mover soldados que se encontraban combatiendo a la guerrilla para que acompañaran a la Policía en sus operaciones, protegiéndola de los ataques que la guerrilla realizaba contra los aviones y helicópteros desde tierra. Así pues, si las Fuerzas Militares iban a seguir acompañando a la Policía en este esfuerzo contra el delito, lo mejor era crear batallones especializados con ese objetivo, los cuales, además, serían aptos para recibir la ayuda militar de parte de los Estados Unidos. El resto del Ejército se dedicaría entre tanto, y con exclusividad, a la lucha contra la guerrilla y los grupos ilegales de autodefensa.

Por las circunstancias que encontré, debí dedicar buena parte de mi tiempo a reconstituir las golpeadas relaciones con los Estados Unidos, demostrando que el nuevo gobierno, elegido con un mandato para buscar la paz por medio de la negociación política, sería un aliado firme y confiable en la lucha contra el narcotráfico, pero llamando también la atención sobre la necesidad de ampliar la agenda bilateral a otros temas igualmente fundamentales, como el comercial y el ambiental, entre otros.

LA REUNIÓN DEL 3 DE AGOSTO DE 1998

En desarrollo de mi objetivo de recomponer definitivamente la relación de nuestro país con los Estados Unidos era indispensable contar con una persona de mi absoluta confianza que pudiera liderar esta misión desde Washington y que, a su vez, conociera la forma de actuar y de pensar de los norteamericanos. Para asumir esa trascendental tarea pensé en Luis Alberto Moreno, a quien conocía desde joven gracias a la estrecha relación entre nuestras familias, cuya capacidad y profesionalismo estaban fuera de toda duda.

Luis Alberto había trabajado conmigo en el Noticiero TV Hoy, como gerente, época en la cual consolidamos una buena amistad. Posteriormente, había colaborado, a nombre de la Nueva Fuerza Democrática, en el gobierno del presidente Gaviria, primero como gerente del Instituto de Fomento Industrial y luego como ministro de Desarrollo Económico.

Como embajador, durante los cuatro años de mi gobierno, Luis Alberto desempeñó una labor impecable que contribuyó a las excelentes relaciones que logramos con los Estados Unidos, tanto que el presidente Uribe lo ratificó en el cargo, por el mérito irrefutable de los resultados obtenidos¹².

Una vez se conoció mi decisión de nombrar a Moreno como embajador ante los Estados Unidos, antes de mi posesión, nos pusimos a trabajar con Nick Mitropoulos, un notable académico y buen amigo mío, a quien había conocido en la Universidad de Harvard, para lograr un encuentro con el presidente Clinton. Nick le planteó el tema a James Steinberg, quien era el segundo del Consejo de Seguridad Nacional, y, finalmente, se concertó una cita en la Casa Blanca el 3 de agosto de 1998, a escasos cuatro días de asumir la Presidencia.

Yo sabía que al interior del gobierno estadounidense había mucho interés en conocer los detalles de mi entrevista con Manuel Marulanda y los eventuales acuerdos que podrían salir de la misma. Por mi parte, tenía clara la necesidad de vincular a la comunidad internacional, y a Estados Unidos en particular, a la iniciativa de paz que estaba dispuesto a adelantar, con el objetivo de lograr un apoyo, tanto político como económico, que tuviera, además, un carácter bipartidista, para que la ayuda a Colombia no quedara sujeta a las veleidades de la política interna norteamericana.

Hay que mencionar que la tradición en la Casa Blanca, cuando se trata de la visita de un presidente electo, es que esta reunión no se realice en la Oficina Oval sino en una oficina anexa o en la del consejero de Seguridad Nacional, donde el presidente pasa un momento a saludar y se toma una foto. Para nuestra grata sorpresa, el presidente Clinton, excediendo el protocolo usual, me recibió de forma oficial en la Oficina Oval, lo que entendimos como una

¹² Luis Alberto Moreno se desempeñó durante siete años como embajador de Colombia ante los Estados Unidos, entre 1998 y 2005. El 27 de julio de este último año fue designado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo —BID.

clara señal del espíritu positivo que reinaba en el gobierno estadounidense frente al cambio de administración en Colombia y como un augurio de una trascendental mejoría en nuestras relaciones, como en efecto ocurrió.

Además del presidente Clinton estaban presentes en la reunión Madeleine Albright, secretaria de Estado; Janet Reno, procuradora de los Estados Unidos; Sandy Berger, consejero de Seguridad Nacional; Erskine Bowles, jefe de Gabinete, y el general Barry McCaffrey, zar antidrogas. En la delegación colombiana me acompañaban el designado canciller Guillermo Fernández de Soto; el designado ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y Luis Alberto Moreno, entre otros.

La reunión giró básicamente sobre el planteamiento que le hice al presidente Clinton respecto a la oportunidad que se abría para conseguir la paz en Colombia, la cual se potenciaría en la medida en que Estados Unidos se vinculara en el aspecto social a través de mecanismos como la promoción de la erradicación voluntaria y el desarrollo alternativo frente a los pequeños cultivos de coca y amapola. La idea era ir más allá de la erradicación por aspersión aérea y el combate policial y militar, que habían sido hasta entonces los temas exclusivos de cooperación. Hablando sobre mi reunión con Marulanda de un mes atrás, le hice mención de que estaba planteada una intención de la guerrilla de comenzar a colaborar con la erradicación de la coca.

Otro tema que tocamos, y que yo consideraba muy importante, fue la necesidad de diseñar un mecanismo que nos permitiera articular la política con Estados Unidos, asunto que Clinton le encargó a su secretaria de Estado para que lo coordinara con nosotros, en un almuerzo que compartiríamos ese mismo día, y que se concretó posteriormente en la creación de un grupo consultivo de alto nivel para hacer seguimiento a las relaciones bilaterales, encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de los trascendentales asuntos tratados, yo creo que algo más quedó de esta primera reunión, como fue la excelente "química" que establecí con el presidente Clinton, germen de una amistad que todavía me honra y que dio excelentes frutos a Colombia. Hubo una discusión muy franca y abierta, en la que él mostró en todo momento su genuino interés en ayudar al país a salir de una crisis de convivencia que ya alcanzaba los 40 años.

Como primera consecuencia de esta empatía, Clinton me sorprendió cuando, de forma improvisada, y al parecer sin previa consulta con sus asesores o el Departamento de Estado, me invitó a que regresara en octubre de ese mismo año a la Casa Blanca, ya como presidente de Colombia, en una visita de Estado.

Aquí es bueno recordar que el último mandatario colombiano que había realizado una visita de esta naturaleza —que es de un carácter superior a una visita oficial— a los Estados Unidos había sido Carlos Lleras Restrepo en

1969, en el período de Richard Nixon, casi tres décadas atrás. Como dato curioso, mi padre, en su calidad de embajador de Colombia en Washington, fue el encargado de organizarla. En ese año yo estaba estudiando en los Estados Unidos y tuve la oportunidad de estar presente en la reunión que ofreció el presidente Lleras en la residencia de la Embajada. Por mi edad —tenía apenas 15 años— no fui invitado, pero sí estuve observando detrás de las puertas, viendo la llegada de las más importantes personalidades, como el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Spiro T. Agnew.

Mi primera reunión con el presidente Clinton terminó de una forma muy cordial y todos salimos muy contentos de ella. Yo tuve oportunidad de explicarle mi idea de generar una especie de Plan Marshall para nuestro país, frente a lo cual, como lo recalcó un comunicado del secretario de Prensa de la Casa Blanca, el mandatario norteamericano *"prometió trabajar con el Congreso para asegurar un aumento de la asistencia estadounidense para proyectos antinarcóticos, desarrollo económico sostenible, protección de los derechos humanos, ayuda humanitaria, estimular la inversión privada y unirse a otros donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia"*.

Posteriormente, asistimos al almuerzo en el Departamento de Estado, ofrecido por la señora Albright, en el que volvimos a tratar el tema de la articulación de la política entre las dos naciones y hablamos de la mejor forma en que se podría replantear y ampliar la agenda de nuestras relaciones bilaterales.

La secretaria Albright aprovechó la ocasión para hacernos saber de la molestia que había en el gobierno estadounidense por la forma como la Policía Nacional, y concretamente el general Serrano, venía adelantando su relación con el congreso de su país, centrándola básicamente en los representantes a la cámara republicanos, lo que, a juicio del gobierno Clinton, hacía muy difícil elaborar una política bipartidista para la consecución de recursos de apoyo para Colombia.

Este fue un tema que nos ocupó durante los primeros años de mi gobierno y en el cual Luis Alberto Moreno jugó un papel fundamental, consolidando un respaldo de los dos partidos tradicionales dentro del congreso estadounidense frente a la problemática colombiana, lo cual facilitó el trabajo del presidente Clinton y posteriormente del presidente Bush en la coordinación con el órgano legislativo.

Para entender la complejidad de la tarea que teníamos por delante es importante llamar la atención sobre el sistema político en los Estados Unidos, que funciona sobre la base de los "pesos y contrapesos" (*checks and balances*), en el que el equilibrio de poderes es real y hace que —a pesar de tratarse de un sistema presidencial— el Congreso tenga un gran poder que obliga al ejecutivo a negociar con él una gran parte de sus políticas y sus iniciativas, especialmente si las mayorías están en manos del partido diferente al del presidente, como era el caso de Clinton.

El sistema político, además, con una Cámara de 435 miembros elegidos cada dos años y un Senado de 100 miembros elegidos para períodos de seis años, pero renovado por terceras partes cada dos, obligaba a que el manejo que se daba en uno u otro caso fuera diferente. Mientras los representantes están en permanente campaña para sus elecciones cada dos años, lo cual es un período bastante corto y los obliga a reportar a sus electores en distritos electorales más bien pequeños a través de un contacto directo permanente, los senadores tienen más tiempo para adelantar y defender políticas de largo plazo, sin consideraciones electorales tan inmediatas.

LA VISITA DE ESTADO

La situación de la Embajada de Colombia en Washington en 1998 era muy compleja. Los embajadores del gobierno anterior, a pesar de las buenas intenciones que tuvieran, no contaron con reales posibilidades de mejorar el estado de la relación, que estuvo dominada por el tema del narcotráfico y el escándalo alrededor de la financiación de la campaña del presidente Samper. Las relaciones entre los dos gobiernos eran manejadas, en esencia, por el fiscal general de la Nación y por el director de la Policía Nacional, con base en la ayuda que para la lucha antinarcóticos aprobaba el Congreso en desarrollo de programas conjuntos.

Un grupo de congresistas republicanos, y en especial sus asesores, personas serias y bien intencionadas, especialmente en la Cámara de Representantes, había resuelto pasar por encima del presidente de Colombia y de sus embajadores, y entenderse directamente con quienes estaban al frente de la lucha contra el narcotráfico, evitando de esta manera las interferencias de la compleja situación política interna de Colombia. Estos canales alternos, probablemente promovidos por el propio presidente Samper para mantener los recursos y la asistencia americana en los programas contra las drogas ilícitas, habían creado una situación en la que el embajador y su equipo eran prácticamente irrelevantes y se enteraban de los temas de fondo después del director de la Policía y el fiscal general.

Adicionalmente, se estaba incubando una malsana competencia entre la Policía y las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, por la sesgada distribución de los recursos provenientes de Estados Unidos a favor de la Policía. Por todo esto, el principal reto para el nuevo embajador era recomponer la relación del Gobierno Nacional en su conjunto con Estados Unidos a través de un solo canal en Washington: la Embajada.

En ese orden de ideas, mi primera tarea, con el canciller Fernández de Soto, fue la de organizar un equipo en la Embajada en Washington con personas de toda mi confianza, encabezado por Luis Alberto Moreno, como embajador, y Juan Esteban Orduz, como ministro plenipotenciario. Este último fue el primer miembro del equipo que llegó a Washington, en la primera mitad de

septiembre de 1998. Unos días después lo hizo Luis Alberto, cuya entrega de credenciales demoró algunas semanas por razones de agenda del presidente Clinton, motivo por el cual no podía actuar oficialmente como embajador, sino que lo hacía Juan Esteban, como encargado de negocios.

Debido a esto, cuando llegó la fecha del 26 de octubre acordada para el inicio de mi visita de Estado, quien me recibió oficialmente en la Base Aérea Andrews, en las afueras de Washington, junto al director de Protocolo de la Casa Blanca, fue el ministro plenipotenciario Juan Esteban Orduz. Mientras esto sucedía, Luis Alberto Moreno presentaba de urgencia las cartas credenciales ante el presidente Clinton.

De la Base Andrews, y después del saludo de los Marines, fui transportado en el helicóptero presidencial Marine One, junto con el resto de la comitiva que iba en inmensos helicópteros del presidente, hasta el lugar conocido como el Mall, en el centro de Washington, donde aterrizamos en medio de la curiosidad de la gente que se aglutina cada vez que un jefe de Estado llega con semejante parafernalia a pleno centro de la ciudad, entre el Capitolio y la Casa Blanca, al lado del reflecting pool, el famoso estanque de agua que se encuentra en los Jardines de la Constitución. De ahí fuimos trasladados en limosinas oficiales a la Blair House, que fue mi residencia oficial durante mi estadía en la capital estadounidense.

La agenda de los temas por tratar durante la visita de Estado era bastante amplia, incluyendo la necesidad de financiación de lo que en ese entonces era la semilla del Plan Colombia, la búsqueda de apoyo internacional para los procesos de paz que acababa de iniciar con las FARC y el ELN y la obtención del apoyo de los organismos multilaterales para empezar a superar la crisis económica, además de otros temas puntuales.

Las reuniones que se llevaron a cabo con el presidente Clinton fueron tres: dos de trabajo y una social. Las dos de trabajo se realizaron en la Casa Blanca. La primera, que tuvo lugar en la Oficina Oval, fue una reunión pequeña, en la que discutimos los temas más sensibles de la agenda. En dicho encuentro participaron, por el lado colombiano, el canciller Guillermo Fernández de Soto; el embajador Luis Alberto Moreno; el director del Departamento Nacional de Planeación, Jaime Ruiz; el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, y el ministro plenipotenciario Juan Esteban Orduz. Del lado americano, estaban el vicepresidente, Al Gore; la secretaria de Estado, Madeleine Albright; la procuradora de los Estados Unidos, Janet Reno; el zar antidrogas, general Barry McCaffrey; el consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman.

Durante la reunión se discutió el proceso de paz que estaba próximo a iniciarse y la forma como Estados Unidos podría apoyarlo, la situación en general del país y el estado de la economía que venía en picada desde la administración anterior y que condujo a que 1999 fuera el peor año para la economía colombiana en muchas décadas.

Frente a este tema económico, un objetivo de especial trascendencia era lograr la reactivación de los créditos de la banca multilateral, ya que Colombia comenzaba a tener cierto agotamiento en sus cuentas fiscales. Se requería garantizar un importante cupo de endeudamiento con estos organismos, pues la deuda que Colombia tenía con los mercados financieros era sumamente costosa y, además, hacían falta recursos frescos para realizar los ajustes económicos más urgentes, que cambiaran la tendencia decreciente de la economía.

Estábamos en la obligación de buscar fórmulas y de ser muy imaginativos para obtener recursos para un país que, como el nuestro, se encontraba en medio de un duro conflicto interno y apenas iniciaba un proceso de resolución del mismo. Pensando en esto, pedimos a nuestro anfitrión su apoyo para tratar este tópico con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, en condiciones favorables, algo a lo que él accedió gustosamente.

Gracias a ese respaldo, que el presidente Clinton ofreció y efectivamente nos dio, estas dos entidades otorgaron a Colombia una serie de créditos destinados en su mayor parte a inversión social, los cuales finalmente se concretaron en cupos de 1.700 millones de dólares con el BID y 1.400 millones con el Banco Mundial.

El otro gran tema que tocamos en la reunión fue el de la paz. Yo expliqué que existía una verdadera oportunidad de alcanzar la paz en Colombia pero que, para lograrlo, teníamos que fortalecer todos los programas que tenían que ver con la lucha contra el narcotráfico, cuyos ingentes recursos eran la mayor fuente de financiación de los grupos armados ilegales. En ese momento, las cifras oficiales de crecimiento de la producción de droga en Colombia eran del orden del 30%, mostrando que entre el año 1994 y 1998 prácticamente se había duplicado. Esto implicaba un aumento muy importante en el pie de fuerza y el armamento de las FARC, y una pérdida correlativa de la capacidad de las fuerzas del Estado frente a la insurgencia.

Partiendo de este contexto, presenté un diagnóstico detallado en el que se concluía que era necesario vincular más activamente al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, entrenando unos batallones especializados con el apoyo de la ayuda norteamericana. La idea era adelantar una política integral en la que participaran todas las Fuerzas Armadas, y no sólo la Policía, pues se requería el concurso de todas ellas para erradicar la droga y sus delitos conexos, y para entrar a zonas hasta entonces "vedadas" como lo era el Putumayo. Esto significaba iniciar una gran transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia, como efectivamente sucedió en mi cuatrienio, transformación y fortalecimiento que se convertirían en uno de los ejes del Plan Colombia.

Terminada esta reunión pasamos a lo que se denomina la "reunión ampliada", con una mecánica más formal, en la que participa la delegación completa y se discuten otros temas de la agenda bilateral con más profundidad. Nos sentamos en una mesa larga en el Salón del Gabinete (equi-

valente al Consejo de Ministros), cada delegación a un lado y cada uno de los presidentes sentados en el centro, uno al frente del otro. Estaban conmigo, además de los que ya mencioné, el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo; la ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez; el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda; el ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, y el ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr. En el lado estadounidense estaban también otros funcionarios contraparte de los nuestros, como el subsecretario del Tesoro, Larry Summers, un gran amigo de Colombia; la representante de Comercio de los Estados Unidos, Charlene Barshefski; el secretario de Defensa, William Cohen; Arturo Valenzuela, miembro del equipo a cargo de los asuntos hemisféricos, y el jefe de Gabinete, John Podesta.

Uno de los tópicos que introduje en la reunión "ampliada", y que llamó especialmente la atención del presidente Clinton, fue la preocupación por la defensa del medio ambiente en nuestro país, amenazado desde diferentes frentes, entre ellos el narcotráfico. Yo expuse el tema en líneas generales, haciendo mucho énfasis en el daño ambiental que causan los cultivos ilícitos y el procesamiento de la droga, y le di la palabra al ministro Mayr, quien explicó en detalle la situación medioambiental de Colombia, su importancia y las amenazas que enfrenta, así como los detalles de la política gubernamental de protección al medio ambiente. Clinton, quien concedía gran importancia a los temas del medio ambiente, al igual que su vicepresidente Al Gore, de reconocido liderazgo en esta área, ofreció de inmediato el apoyo de su gobierno a una "alianza ambiental" entre los dos gobiernos, la cual se concretó por conducto del Departamento del Interior y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA).

Un aspecto indispensable de aclarar dentro del tema de la paz era el de la Zona de Distensión, pues había una gran inquietud al respecto entre los miembros del gobierno estadounidense. Éste era un tema que, en principio, encontraba resistencia tanto en los republicanos como en los demócratas, al punto de que lo primero con que se encontró Luis Alberto Moreno al asumir la embajada fue con la aprobación en la Cámara de Representantes de una enmienda según la cual se retiraría la ayuda norteamericana a Colombia si se establecía una zona de distensión para el diálogo y la negociación con las FARC. Esto, obviamente, nos hubiera generado una situación muy compleja, tanto como lo habían sido las descertificaciones sucesivas durante el gobierno anterior, que estábamos en la obligación de superar.

Ya un mes antes de la visita de Estado, con ocasión de mi viaje a Nueva York para intervenir por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, había pasado por Washington para reunirme con Dennis Hastert y otros importantes congresistas. En esa época Hastert no era todavía presidente de la Cámara de Representantes o *Speaker of the House* (posición a la que llegó en 1999), pero ejercía gran influencia en la bancada

republicana. Entonces tuve una primera ocasión para comentarle ampliamente cuál era la lógica de la Zona de Distensión¹³.

Fue un debate difícil, si bien tuve la impresión de que, al final, los congresistas entendieron que el principal anhelo de los colombianos era la búsqueda de la paz mediante la negociación política, y respaldaron mi voluntad y compromiso con este objetivo nacional.

No obstante, el establecimiento de la Zona nunca dejó de preocupar al Gobierno y al Congreso norteamericanos, sobre todo a los republicanos, que lo veían como una ventaja para las FARC. A pesar de ello, siempre respetaron el proceso colombiano, lo cual exigió un gran esfuerzo diplomático de nuestra parte para que se entendiera que era indispensable dar esa oportunidad a la paz. Yo creo que las FARC nunca fueron conscientes de todo lo que se consiguió y se avanzó en este sentido.

Sabiendo la incomodidad del Gobierno norteamericano con el tema, busqué tener un encuentro más informal con el presidente Clinton para contarle personalmente de qué se trataba la Zona de Distensión. Es así como, al terminar la reunión ampliada, y rumbo de nuevo a la Oficina Oval, le dije a Clinton que quería hablar unos minutos a solas con él. Hay que entender que el presidente de Estados Unidos nunca está solo en esta clase de reuniones, pues siempre hay alguien del gobierno junto a él para asesorarlo y apuntar lo que se dice. A pesar de esta costumbre, él accedió de inmediato y me invitó a tomar algo en su oficina.

Con sendas Coca-Colas dietéticas en nuestras manos, nos dirigimos a su escritorio en la Oficina Oval y, ante mi sorpresa, Clinton sacó de uno de sus cajones un mapa de Colombia con la Zona de Distensión resaltada, algo que probaba su especial interés en el tema y la forma en que lo estudiaba.

—Andrés —me preguntó—, ¿qué es esto? Me dicen que es un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, tan grande como Suiza, que quedará en manos de la guerrilla sin ninguna presencia del Estado colombiano.

Su pregunta me dio la oportunidad de exponerle a fondo qué era y cómo íbamos a implementar la Zona de Distensión con las FARC, reiterándole que todo el proceso estaba perfectamente ajustado a la Constitución y la ley, algo que a él le llamó mucho la atención. Le dije que el mandato que me habían dado los colombianos en las urnas era el de buscar la paz por la vía de la negociación política y que mis compatriotas, al igual que él, como líder de nuestro principal aliado hemisférico, podían tener la total tranquilidad de que nunca iba a actuar por fuera de la ley y la Constitución que juré defender como presidente.

¹³ Aunque el representante Hastert haya afirmado luego, en un libro publicado en 2004, que mi gobierno no tenía un "plan B" en caso de que fallara el proceso del Caguán, lo cierto es que sí lo teníamos. El "plan B" era precisamente el proceso negociado de paz. El "plan A", al que le estábamos buscando alternativas, había sido siempre la guerra y la solución militar.

Clinton oyó muy atentamente mi exposición y me manifestó de nuevo su total respaldo. Además, afirmó que el hecho de que hubiera viajado solo y sin protección a las selvas de Colombia a entrevistarme con la guerrilla en su territorio antes de mi posesión demostraba, para él, un compromiso con la paz que merecía su admiración y su apoyo. Terminamos este encuentro privado de manera muy cordial y yo le agradecí la gran cantidad de tiempo que dedicó a nuestras reuniones.

Salimos, finalmente, de la Casa Blanca a una rueda de prensa en el Rose Garden, que comenzó poco después de las tres de la tarde, donde Clinton tuvo palabras de especial aprecio hacia el país y los esfuerzos de paz que iniciábamos. *"Éste es, de verdad, un nuevo comienzo para Colombia y una nueva oportunidad para nuestras naciones de renovar nuestros lazos. Yo creo que hemos tenido un gran comienzo"*, fueron sus primeras frases frente a los periodistas.

También enfatizó lo siguiente: *"Nosotros sabemos que la paz puede alcanzarse, aun bajo las más difíciles circunstancias, si la voluntad y el coraje para hacerlo son fuertes. El presidente Pastrana tiene la voluntad, el coraje y el apoyo de su pueblo para construir la paz. Doy la bienvenida a sus esfuerzos para establecer diálogos con los grupos insurgentes. Nosotros estamos listos para ayudar"*.

Debo decir que la actitud del presidente Clinton fue especialmente deferente conmigo y con toda la delegación colombiana. A pesar de que ese día había recibido alguna mala noticia sobre el asunto de Mónica Lewinsky, lo cual hubiera podido alterar su ánimo, siempre estuvo atento y concentrado en los problemas de Colombia.

Por supuesto, resultó inevitable que los periodistas de su país aprovecharan la ocasión para cuestionarlo sobre el incómodo tema, más aún porque hacía 20 días la Cámara de Representantes había autorizado el inicio de la investigación para establecer las bases de una acusación formal (*impeachment*). Le preguntaron si estimaba que este proceso tendría efecto en las elecciones parlamentarias que se aproximaban, si consideraba justo que los republicanos abordaran su vida personal como un tema de campaña y, algo muy íntimo, qué le decía a su hija acerca de su relación con la señorita Lewinsky. En todas las ocasiones, el presidente contestó con la claridad e inteligencia que lo caracterizan, sin perder el control de la situación.

De ahí regresamos a la Oficina Oval de nuevo. En el fondo, yo sabía que Clinton había quedado angustiado y molesto por las preguntas sobre su vida privada. En un tono más personal, él mismo me preguntó cómo me parecía que había estado en sus respuestas al respecto. Yo le confirmé que lo había hecho muy bien; le dije que él era un luchador y que tenía que seguir adelante basado en sus convicciones. Fue un momento de proximidad que aprecié en su justo valor y que me demostraba la confianza que primaba, y seguiría primando desde entonces, en nuestra relación.

Además de los productivos encuentros de trabajo con el presidente Clinton, el embajador Moreno había conseguido una importante cita con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus. En la reunión, a la que asistí acompañado por cuatro personas, el director me ofreció lo que se llama un *facility* (un crédito contingente), al que un año más tarde el Gobierno podía acudir, como una oportunidad para regresar al Fondo, y nos indicó que había cerca de 2.700 millones de dólares listos para ese propósito. Sobre este primer promisorio contacto se preparó el camino para la firma de un acuerdo de ajuste fiscal a fines de 1999, con la aprobación del mencionado cupo crediticio, que dio gran tranquilidad a los mercados internacionales sobre la estabilidad de la economía colombiana.

La reunión social de la visita de Estado, finalmente, fue una elegante cena de gala ofrecida en la Casa Blanca en honor del jefe de Estado visitante y su comitiva. Es, sin duda, uno de los eventos más llamativos y formales dentro del protocolo de los Estados Unidos, al cual fueron invitadas alrededor de 100 personas.

Entre las personalidades que me acompañaron esa noche se encontraban Gabriel García Márquez; el maestro Fernando Botero y su esposa Sofia Vari, y Shakira, que ya comenzaba a figurar en las listas americanas en desarrollo de su fulgurante carrera musical. Clinton es un gran admirador y amigo de varios de ellos. Esa noche, durante la cena, cantó la soprano española Ainoa Arteta, acompañada del pianista Alejandro Zabala, y la fiesta terminó con sabor tropical gracias a la estupenda presentación del cantante Marc Anthony. Esa fue la primera vez en la historia de la Casa Blanca que la música salsa se hizo presente en una Cena de Estado.

Debo decir que en todo el transcurso de esta visita, rodeada del más estricto protocolo y los mayores honores que se brindan a un mandatario extranjero en suelo estadounidense, sentí, más que un orgullo y una satisfacción personal, la inmensa alegría de estar representando el retorno del pueblo colombiano a los altos escenarios de la política internacional después de un duro período de proscripción.

Muchos colombianos que siguieron los eventos especiales de la visita por televisión, que escucharon nuestro himno resonando solemne en los jardines de la Casa Blanca y vieron ondear nuestro tricolor en el centro de Washington, sintieron, al igual que yo, renacer en sus corazones una dignidad que se creía perdida.

CAPÍTULO XIII

Una reunión improbable

A pesar de que Estados Unidos no había jugado nunca un rol fundamental en los diversos procesos o aproximaciones de paz que se habían intentado en Colombia, siempre tuve muy claro, desde antes de asumir la Presidencia, que dicho país, por su papel protagónico en el hemisferio y en el mundo entero, y por los estrechos vínculos comerciales y económicos que nos unen a él, podía y debía vincularse, positivamente, a cualquier proceso de paz que adelantáramos en nuestra nación.

Su importancia era realzada por nuestra alianza de décadas para luchar contra el problema mundial de las drogas ilícitas, cada día más imbricado con el fenómeno de la violencia guerrillera y paramilitar. Mi objetivo era desarrollar un esquema diferente en las relaciones con Estados Unidos, en el cual se entendiera, primero, que una política eficaz contra las drogas no sólo significaba ayuda policial o militar, sino también respaldo social, y, segundo, que combatir el narcotráfico supone también combatir a los interesados en prolongar y extender nuestro conflicto.

Bajo este planteamiento, que era el sustrato del Plan Colombia, comencé a trabajar, junto con el comisionado, Víctor G. Ricardo; el canciller, Guillermo Fernández de Soto, y el embajador ante los Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, para abrir las puertas a un encuentro entre delegados del gobierno estadounidense y representantes de las FARC, con presencia de un representante del Gobierno colombiano, con el objetivo de que los norteamericanos conocieran de primera mano las complejidades del proceso de paz y contemplaran su eventual participación en éste, apoyando programas de sustitución de cultivos que ofrecieran una alternativa lícita y digna a tantos campesinos que siembran coca, más por falta de oportunidades que por intención de delinquir.

Teníamos que comprometer a Estados Unidos en una nueva tarea conjunta: la de la inversión social para contribuir a la reubicación de familias desplazadas y dedicadas a los cultivos de hoja de coca y amapola, y para crear mecanismos de recuperación de las zonas destruidas por dichos cultivos. Esto, sin duda, requería una decisión política, que esperábamos lograr, aprovechando el renovado impulso de nuestra relación bilateral.

Partiendo de estas premisas, Víctor G. Ricardo se reunió con Raúl Reyes, quien ya había sido nombrado vocero de las FARC en el proceso de paz, para determinar si, a pesar de las diferencias históricas de su grupo con los Estados Unidos, accederían a tener un encuentro con delegados del gobierno de dicho país. Reyes, quien además era el encargado del área internacional en su organización, se comprometió a consultar la propuesta con el Secretariado de las FARC. Días después le anunció la respuesta: sí estaban dispuestos a una reunión con los Estados Unidos.

Así las cosas, aunada la voluntad del Gobierno con la aquiescencia de las FARC, traté el tema en Washington, en desarrollo de mi visita de Estado al país del norte en octubre de 1998, e insistí ante el presidente Clinton y sus altos funcionarios sobre la conveniencia de una participación de los Estados Unidos en el proceso de paz, apoyando programas de sustitución de cultivos en las zonas de conflicto.

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Peter Romero, ya había estado involucrado en procesos de reconciliación, especialmente los adelantados en Centroamérica, lo que lo convertía en un interlocutor ideal para nosotros. Sin embargo, debíamos hacerle entender que el conflicto colombiano era muy diferente al de El Salvador, que él conocía de cerca, porque el nuestro tenía características especiales: la extracción campesina de la guerrilla, su antigüedad en Latinoamérica y, sobre todo, la perversa influencia del narcotráfico.

Con este objetivo, una vez regresamos de la visita de Estado, volví a enviar a Víctor G. a Washington para que tuviera una reunión más prolongada con Romero y el director de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, Philip Chicola.

En esta oportunidad, los dos funcionarios dejaron claro el interés de Estados Unidos sobre el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, gran parte de los cuales se encontraban en áreas de influencia guerrillera, y expresaron la preocupación que tenía el gobierno norteamericano sobre la posibilidad de que se intensificaran las actividades del narcotráfico y los cultivos ilícitos en la Zona de Distensión, cosa que nunca sucedió. En medio de estas conversaciones, se comenzó a considerar la posibilidad de tener un encuentro directo con representantes de las FARC, precisamente para dilucidar estas inquietudes y determinar el posible papel que podría cumplir su país en el proceso de paz con este grupo guerrillero. Además, una reunión personal les daría la ocasión de comprobar, de primera mano, su posición y compromiso al respecto.

En la tarea de convencer a los norteamericanos de la importancia de dicho encuentro contamos, además, con la colaboración del también estadounidense James Lemoyne, quien era asesor de las Naciones Unidas y amigo personal de Romero. Lemoyne, que había hecho parte del grupo interdisciplinario que estudió y presentó fórmulas para alcanzar la paz, aus-

piciado por el PNUD, cuyas conclusiones habían servido como fundamento a nuestra propuesta de paz, ya había visitado a Romero a comienzos del año, junto con Álvaro Leyva, para proponerle una participación más activa de los Estados Unidos en un eventual proceso de paz.

Así que el camino estaba allanado para que dicha participación se diera. Y vino a ayudarnos una coyuntura adicional. Como resultado de la reunión con el presidente Clinton, habíamos creado un Grupo Consultor Conjunto de Alto Nivel, presidido por la secretaria de Estado y el canciller colombiano, que se reuniría periódicamente, y se determinó, en desarrollo de este acuerdo, que el subsecretario Romero viniera a Bogotá a comienzos de noviembre *"para acordar un programa de trabajo para el Grupo y realizar consultas sobre el proceso"*. Se trataba, sin duda, de una oportunidad de oro para concretar con él la reunión con la guerrilla, una jugada audaz pero necesaria para involucrar más activamente a su gobierno con nuestros esfuerzos de paz.

Según lo acordado, el 8 de noviembre de 1998, Peter Romero llegó a Colombia para hablar, no sólo sobre la situación del proceso de paz —que en ese momento enfrentaba un momento difícil por el incidente del Batallón Cazadores—, el plan de sustitución de cultivos ilícitos y los programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, sino también sobre el posible encuentro con las FARC.

En la mañana del 9 de noviembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el subsecretario Romero, el canciller Fernández de Soto y Víctor G. Ricardo sostuvieron una larga y productiva reunión. Ese día Estados Unidos accedió al encuentro, aunque Romero advirtió que debía ser una reunión absolutamente privada. Se convino en que el mejor lugar para efectuarla podría ser Costa Rica o México. Y la fecha: cualquiera de diciembre.

En los días siguientes Víctor G. tuvo una reunión con las FARC para hablar sobre el problema del Batallón Cazadores, que ya estaba comenzando a solucionarse, y también para coordinar lo referente a la reunión con los representantes de Estados Unidos, que inicialmente se planteó para el 16 de diciembre y finalmente se llevó a cabo el 13. Estarían Chicola, otro funcionario estadounidense, los representantes de las FARC y Víctor G., en nombre del Gobierno colombiano. El grupo guerrillero designó como voceros a Raúl Reyes y a Olga Marín, los dos encargados del área internacional de las FARC. Por su parte, el ex ministro Álvaro Leyva, quien ya vivía en San José de Costa Rica, estaba enterado y muy pendiente del tema, no sólo por parte del grupo guerrillero, sino también a través de Lemoyne, de quien era buen amigo y con quien había planteado originalmente las bondades de esta reunión a los Estados Unidos.

Una vez definido el encuentro USA-FARC, seguimos trabajando en los demás asuntos del proceso de paz. Ya estaba definida la administración del Batallón Cazadores por parte de la Iglesia católica, pero faltaba sacar a los

últimos soldados y coordinar con la guerrilla, una vez verificado el despeje, las fechas y el procedimiento para pasar a la siguiente etapa de instalación de los diálogos. Precisamente, para resolver esos puntos, Víctor G. acordó varios encuentros con las FARC en la semana del 14 al 18 de diciembre.

Dada esta situación, resultaba imposible para él asistir a la reunión en San José, más aún porque su ausencia de la zona en unas fechas tan cruciales para el proceso hubiera generado muchas sospechas en los medios de comunicación, que seguían cada uno de sus pasos, las cuales podrían dar al traste con la confidencialidad del encuentro.

Así pues, en reemplazo de Víctor G. designé al secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, como representante y testigo del Gobierno en la reunión. Sabíamos, por otra parte, que las FARC ya habían contactado a Leyva y que él estaría presente en la histórica cita, que sería la realización de uno de sus sueños más caros: la participación de los Estados Unidos como actor positivo y determinante del proceso de paz. Por lo mismo, le solicité a Juan que hablara con él para comprometerlo a guardar silencio sobre la reunión, cosa que hizo de inmediato. Llamó a Leyva a San José y le enfatizó sobre la importancia de que el encuentro se realizara con la mayor reserva. Leyva le propuso, entonces, que la reunión se realizara en su residencia y quedaron de hablarse tan pronto Hernández llegara a su hotel para definir los detalles del caso.

Fue así como el domingo 13 de diciembre y el lunes 14, teniendo como escenarios el apartamento de Leyva y un hotel de San José, se llevó a cabo la primera y hasta ahora única reunión entre representantes del gobierno de los Estados Unidos y representantes de las FARC, una reunión en la que intercambiaron ideas sobre el pasado, el presente y el futuro del proceso de paz, y hablaron de frente y sin tapujos.

Philip Chicola, representante de los Estados Unidos, enfatizó tres puntos básicos. El primero, las razones del gobierno de Estados Unidos para reunirse con las FARC; el segundo fue una pregunta concreta: si existía o no un vínculo de esa organización guerrillera con el narcotráfico, y el tercer punto fue una indagación sobre la suerte de tres estadounidenses, Dave Mankins, Mark Rich y Rick Tenenoff, miembros de la Misión Nuevas Tribus, que habían sido secuestrados por las FARC desde enero de 1993. Si bien Chicola suponía que los misioneros estaban muertos, les pidió que, aun en ese evento, informaran dónde se encontraban enterrados, para certeza de sus familias y tranquilidad de la opinión pública norteamericana.

Chicola también criticó los actos violentos que perpetraban las FARC, y trató otros temas, como la necesidad de que se diera un compromiso eficaz sobre la sustitución de cultivos ilícitos, la preocupación de que aumentaran las actividades del narcotráfico en la zona y, además, la urgencia de que se produjeran más hechos de paz para que las diferentes fuerzas de la opinión norteamericana creyeran en el futuro de las conversaciones.

Según me contó después Juan Hernández, el momento más álgido y tensionante se vivió cuando Chicola les preguntó a Reyes y Marín si las FARC eran narcotraficantes o tenían algo que ver con la industria de la cocaína.

Reyes respondió que ellos estaban precisamente interesados en hablar con los representantes del gobierno de los Estados Unidos para poder explicarles cuál era la relación de la guerrilla con la droga. Admitió que en las regiones donde operaban había sembrados de coca, pues los campesinos eran muy pobres y no tenían otra actividad productiva, y dijo que no iban a impedir dicha siembra en tanto la economía legal no proporcionara alternativas rentables. Afirmó que ellos no eran narcotraficantes y que estaban seguros de que así lo entendía el Gobierno colombiano que se había sentado a dialogar con ellos y que no hablaba con narcotraficantes.

Sobre la situación de los misioneros se acordó que, a su regreso a Colombia, los guerrilleros hablarían con el comisionado para la Paz a fin de coordinar la creación de una comisión que se encargara de aclarar este asunto. La comisión fue creada, en efecto, con la participación de Consuelo Cañón de Garavito y Augusto Ibáñez, ambos asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como representantes del Gobierno, y de Joaquín Gómez, por parte de las FARC. Sin embargo, fue completamente infructuosa. Aunque Víctor G. insistió en muchas de las reuniones posteriores sobre el desarrollo de las labores de esa comisión, nunca se pudo lograr que la guerrilla cumpliera con el compromiso que había asumido, revelando la suerte corrida por los tres misioneros en su poder¹⁴.

Finalmente, las FARC, en la cita de Costa Rica, manifestaron las razones de su lucha, resumieron los cambios políticos, económicos y sociales que demandaban para el país y expresaron su voluntad de contribuir en programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Con esta reunión, sin duda, se dio un paso definitivo para que Estados Unidos participara plenamente en el proceso de paz y, por primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales, aportara recursos para programas sociales, lo cual se concretó luego en el componente social del Plan Colombia.

Según acordaron los participantes, no se dejó nada escrito en un documento. Se asumió el compromiso de que la reunión permaneciera en la máxima reserva e, incluso, se dejó abierta la posibilidad para una próxima cita.

¹⁴ "Desde diciembre de 1993 las FARC han declinado repetidamente dar cualquier información sobre los tres misioneros, a pesar de los llamados directos hechos por esposas e hijos pidiendo información, por el presidente Pastrana y altos funcionarios colombianos, por un funcionario del Departamento de Estado en diciembre de 1998, y por miembros del Congreso y otras personas interesadas. La falta de voluntad de las FARC de dar cuenta de sus actos, ha provocado angustia inhumana a las familias de los misioneros". (Declaración de Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 31 de enero de 2002).

Cuando Hernández regresó y me dio su reporte sobre lo sucedido en San José, tuve mucha confianza en que este evento singular, que hace unos años y bajo otras circunstancias habría sido totalmente improbable, generaría una nueva y positiva dinámica para el proceso de paz. Sin embargo, ocurrió lo que temíamos: la filtración sobre la realización del encuentro y su consiguiente divulgación. El 3 de enero de 1999, en la edición dominical de *El Tiempo*, en un amplio titular se anunció: "*Cumbre secreta EU-FARC*". Aunque la noticia contenía imprecisiones, lo fundamental ya había sido contado.

La inesperada divulgación puso en serios aprietos políticos al gobierno de Estados Unidos y, más específicamente, al subsecretario Peter Romero, a quien le costó su ratificación en el cargo, la cual fue bloqueada por los congresistas republicanos que cuestionaron duramente el visto bueno que había dado a la reunión de Costa Rica. Por supuesto, se trataba de una reunión aprobada no sólo por él, sino por las más altas esferas de poder en su país.

Ahora bien, a pesar de la revelación de la noticia, ninguno de los participantes en el encuentro amplió su versión, en ningún sentido, ni para confirmarla ni para negarla. El pacto había sido de total silencio, y así se cumplió.

El primer resultado de la reunión y de las nuevas relaciones de los dos gobiernos fue la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, en los actos de instalación de la Mesa de Diálogo del proceso de paz, el 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán. Fue la primera vez, y la última, que un delegado del gobierno de Estados Unidos participó en actos de este tipo realizados en la Zona de Distensión.

Dos meses después de esta fecha las FARC, con su obstinación en la violencia, asesinaron a tres indigenistas estadounidenses y echaron por la borda la participación del país del norte en nuestro proceso de paz, asestando un duro golpe a su viabilidad. Pero esa es otra historia.

CAPITULO XIV

La silla vacía

Culminado el incidente del Batallón Cazadores, a mediados de diciembre, las FARC reconocieron que el despeje se había cumplido en su totalidad, en virtud de lo cual se determinó realizar el acto de instalación de la Mesa de Negociación el 7 de enero de 1999 y no el 7 de febrero, como estaba previsto en el cronograma de trabajo. De alguna manera el escollo del batallón había servido, por lo menos, para adelantar un mes nuestro propósito de paz.

Fue así como el 15 de diciembre, luego de una reunión entre el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, y la cúpula de las FARC en Caquetania, aquel anunció públicamente la celebración de este acto con la presencia prevista del presidente de la República y Manuel Marulanda, de acuerdo con el compromiso que ambos habíamos hecho en nuestra reunión del 9 de julio. Se dijo, además, que el objetivo de la fase de diálogo sería el *"de fijar la agenda, sitios, fechas y demás aspectos y mecanismos que se emplearán para poder llevar a cabo el diálogo de fondo en el que se buscará una salida pacífica a un conflicto"*.

Desde entonces, Víctor G. se dedicó de lleno a trabajar en el acto, que era fundamental para el proceso. Con el evento de instalación íbamos a poder mostrar a la opinión pública el primer avance concreto en el mismo, generando confianza y esperanza, dos elementos indispensables para soportar cualquier esfuerzo de paz. Además, se trataba del primer acercamiento formal después del rompimiento de los diálogos de Caracas y Tlaxcala en 1992. Si la mesa de diálogo funcionaba, en 90 días más comenzaríamos el proceso de negociación, una palabra que la guerrilla nunca había querido aceptar hasta ese momento. Nuestra meta, por lo mismo, más allá de una mesa de diálogo, era llegar a una negociación de fondo, de la cual pendía una posibilidad cierta de paz para Colombia.

Quedaba poco tiempo para organizar el evento, más si teníamos en cuenta que estábamos en pleno fin de año, una época nada propicia para realizar todos los arreglos necesarios. Víctor G. mantenía contacto permanente con el alcalde de San Vicente para coordinar los detalles de la instalación al igual que con la guerrilla. Sin embargo, un nuevo problema no tardaría en presentarse.

"VAYA O NO VAYA MARULANDA, YO CUMPLIRÉ MI PALABRA"

Faltando unos pocos días para el acto, Joaquín Gómez, uno de los voceros de las FARC, se reunió con Víctor G. para comentarle un hecho que los tenía muy preocupados y que consideraban podía poner en peligro la instalación. Le dijo que las FARC habían detectado en la Zona de Distensión a tres individuos sospechosos, y que había capturado a dos de ellos, que confesaron haber sido adiestrados por los paramilitares en una vereda del vecino municipio de Puerto Rico, con el objetivo específico de cometer un atentado contra Manuel Marulanda. Conjeturó, además, que la misma seguridad del comisionado podía estar en peligro, pues habían tenido conocimiento de que estos mismos hombres habían ingresado una noche en taxi al Batallón Cazadores, y habían revisado el lugar donde dormía y donde tenía su oficina de trabajo.

Por supuesto, Víctor G. le solicitó a Gómez que entregara a los dos hombres capturados a las autoridades competentes para hacer la investigación del caso, pero éste se negó aduciendo que todavía el tercero andaba suelto y que ellos preferían continuar sus propias averiguaciones para salvaguardar la vida de su líder. Sin duda, se trataba de una denuncia importante, pero era imposible saber si las FARC decían la verdad o si se trataba de una disculpa fabricada para preparar la ausencia de Marulanda en el acto de instalación.

Víctor G. me llamó a Palacio y me contó sobre su conversación con Gómez, mencionándome, por primera vez, que Marulanda estaba indeciso respecto a su presencia en la instalación. Mi respuesta fue inmediata:

—El pacto que hice con Marulanda fue que los dos instalábamos la mesa de diálogo, y yo voy a ir. Vaya él o no vaya, cumpliré mi palabra.

En los días previos a la instalación de la mesa tuvimos varias reuniones en Palacio, en las que Víctor G. nos actualizaba sobre los adelantos en la preparación de la agenda. En una ocasión manifestó que una de las exigencias que planteaba la guerrilla era que debía izarse la bandera de las FARC al lado del pabellón nacional, y que se debía tocar su propio himno junto con el himno nacional.

Más tardó Víctor G. en mencionar esta posibilidad que yo en descartarla de plano, sin la menor vacilación. Permitir que las banderas y los himnos coexistieran en el acto en una relación de pretendida igualdad constituiría una afrenta a la soberanía y a los símbolos patrios que no podía aceptarse de ninguna manera. Le di instrucciones expresas a Víctor G. para que le comunicara mi posición a la guerrilla, aclarándole que en este punto no podía ceder ni un solo milímetro. Si ellos no aceptaban, sería preferible cancelar el acto antes que darle semejante reconocimiento sin precedentes a un grupo armado ilegal, poniéndolo a la misma altura del Estado colombiano.

Los símbolos patrios son mucho más que formalidades. En ellos va representado el orgullo nacional y la dignidad del pueblo que representan.

No por nada Atanasio Girardot pasó a la historia de nuestra independencia por morir envuelto en la bandera republicana, que honró y defendió con su vida. Curiosamente, alguna vez hablando con Fidel Castro sobre este problema, el presidente cubano me comentó que le costaba entender la posición de las FARC. *"Uno puede hacer una revolución"* —me dijo—, *"pero lo que no puede cambiar nunca son los símbolos patrios. La bandera de Cuba y el himno de Cuba siguen siendo los mismos de antes de la revolución, porque los símbolos patrios son demasiado importantes para cambiarlos"*.

Uno de los que reaccionaron más fuertemente frente a la propuesta de las FARC fue el general Mora, quien le reclamó al comisionado por *"haber incorporado esa propuesta al orden del día"*, a lo que Víctor G. le respondió:

—Mire, general, yo no vengo a decirle cuál es mi posición. Yo sólo estoy transmitiendo cuál es la exigencia de la guerrilla que, por supuesto, yo no admito ni avalo. Pero mi deber es ser transparente y comentarles cuál es la posición de ellos.

Lo del himno y la bandera de las FARC fue un tópico de discusión por varios días, hasta que finalmente se acordó que su bandera no estaría izada junto al pabellón nacional y que su himno no sonaría junto al himno de Colombia, en la instalación del acto, sino como una música introductoria a la intervención de su vocero.

Entre tanto, continuamos organizando el evento. Yo, desde un comienzo, sugerí que el acto fuera sencillo, pues siempre tuve el temor de que, si hacíamos algo muy vistoso, Marulanda no iba a asistir, lo cual tenía, para mí, una clara justificación. Siendo como es un líder entre sus hombres, Marulanda es también un hombre sencillo, de origen campesino, pragmático y dotado de esa malicia indígena que caracteriza a nuestro pueblo, por lo que podría no querer enfrentarse a un auditorio desconocido para él, leyendo un discurso ante la presencia de invitados nacionales e internacionales y más de un centenar de periodistas de medios colombianos y extranjeros. Si yo mismo, acostumbrado a hablar en público, sentía la tensión normal de enfrentar este escenario, me imaginaba lo que podría sentir Marulanda al tener que intervenir bajo tales circunstancias.

Pensando en esto, le dije a Víctor G. que organizara un acto mucho más simple y con pocos invitados, en el que Marulanda y yo participáramos únicamente como testigos de la firma de la iniciación de los diálogos por parte de los voceros del Gobierno y de la guerrilla, sin discursos ni parafernalia especial. Después podríamos reunirnos con él en la casa cural, a puerta cerrada, con las personas que determináramos de común acuerdo. Además, consideraba que no era todavía el tiempo para invitar a la comunidad internacional, pues no correspondía darle tanta visibilidad a las FARC, sin que ellos hubieran dado señales claras de estar realmente comprometidos con el proceso.

Sin embargo, a pesar de esta intención inicial, el evento tuvo que ser mucho mayor de lo queríamos. Nos enteramos, a través de la Cancillería,

de que las FARC estaban transmitiendo invitaciones a amigos y simpatizantes suyos en Suecia, Noruega, México y Cuba, incluyendo algunos parlamentarios italianos, lo que nos hizo pensar que, si no dábamos nosotros un paso oficial de invitación a las representaciones diplomáticas extranjeras, corríamos el riesgo de permitir un montaje de las FARC y sus amigos, sin presencia institucional del Gobierno y el Estado colombiano ni de los representantes legítimos de las naciones extranjeras.

Así las cosas, tomé la decisión de realizar el acto de cara al mundo, y acabamos teniendo cerca de 1.500 invitados a la instalación, entre ellos todos los embajadores acreditados en el país; los representantes de los poderes públicos y de los organismos de control —de los cuales sólo se excusó el fiscal Alfonso Gómez, aduciendo que su presencia lo podría inhabilitar frente a los procesos que adelantaba contra los cabecillas de las FARC—; los dirigentes de los partidos, incluyendo a los candidatos que habían participado conmigo en las elecciones, Horacio Serpa y Noemí Sanín; monseñor Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá; nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, siempre tan comprometido con la paz de Colombia; los ex presidentes del país; dirigentes gremiales y sindicales, y muchos otros colombianos de significación. Todos acudieron entusiastas a esta cita con la paz, sabiendo que no se trataba de asistir a un espectáculo mediático sin contenido, sino que su presencia legitimaba un proceso que era de todos los colombianos.

Hechos ya todos los arreglos, después de una primera semana del año con una inusitada tensión y actividad, en la que todos los altos funcionarios pusieron de su parte para la preparación del evento, mi preocupación seguía siendo si Marulanda cumpliría o no su palabra de asistir al acto.

A pesar de que algunos asesores me indicaron que, si él no iba, sería mejor que yo me marginara del acto para evitar la sensación de un desplante, insistí en mi determinación de ir y de cumplir con mi palabra, independientemente de la decisión del jefe guerrillero. Eso sí, llevé preparados dos discursos: uno para el evento de que Marulanda fuera y otro por si no.

El día anterior a la instalación llamé a San Vicente a preguntarle a Víctor G. si le habían confirmado la asistencia de Marulanda, a lo que me respondió:

—Hasta este momento no me han garantizado si viene, pero veo que hay mucha presencia de la guerrilla en todo el casco urbano, lo que me hace pensar que sí.

Por otro lado, Víctor G. tenía informaciones acerca de que Marulanda se estaba desplazando hacia una finca muy próxima a San Vicente.

Lo más insólito de todo era que Tirofijo, el legendario sobreviviente de tantas batallas, adujera razones de seguridad para no asistir al acto, cuando la responsabilidad de la zona estaba a cargo de la misma guerrilla. Mientras ellos desplegaron cientos de hombres y mujeres armados por toda el área, yo fui apenas con 20 hombres de mi anillo personal de protección, dirigidos

por mi jefe de Seguridad, el mayor Royne Chaves, un grupo que, obviamente, más que representar una seguridad para mí, era apenas un símbolo de soberanía.

Toda la seguridad, desde la mía y la de mi hijo Santiago —a quien llevé al acto como una prueba de confianza y de fe en el proceso— hasta la del último invitado, estaba en manos de las FARC, dependía de ellos y no de nosotros. Por eso la excusa de la seguridad de Marulanda no era una excusa válida para mí. Es más, si fuera cierto que se preparaba un atentado por parte de los paramilitares, por qué no me había advertido del peligro a mí, que iba a correr el mismo riesgo, sentándome a su lado en la tarima.

El 6 de enero, durante toda la noche, Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, por las FARC, y Víctor G. y el mayor Chaves, por el Gobierno, estuvieron recorriendo San Vicente, ubicando guardias en distintos lugares estratégicos para la seguridad del evento y de los invitados.

Esa misma noche, en Palacio, hicimos una reunión preparatoria a la que asistieron el canciller Guillermo Fernández de Soto; el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez; el director de Planeación, Jaime Ruiz; el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández; el secretario privado, Camilo Gómez, y Darío Vargas, asesor de comunicaciones. Aparte del asunto del himno de las FARC, que finalmente se solucionó con su inclusión durante la intervención de su vocero, estaba también el problema de que ellos pretendían que sus hombres me hicieran los honores militares a mi arribo a San Vicente, como si estuviera visitando un Estado extranjero. Por supuesto, me negué y quedó claro que los honores militares me los harían únicamente los hombres de mi escolta que estaban ya apostados en San Vicente, como en efecto ocurrió.

Durante la reunión, que se prolongó hasta las 11 de la noche, discutimos los diversos escenarios, con o sin la presencia de Marulanda, y revisamos las dos opciones de discurso que llevaba para la instalación. Con anticipación decidí que, si Marulanda no iba, yo me iba a sentar solo al lado de su silla vacía, para que quedara claro ante el país y ante el mundo que el presidente de la República, y el Estado colombiano a través de él, estaba cumpliendo su palabra y que si había una silla vacía también había otra ocupada: la de un gobierno comprometido con la paz.

"UNA CITA CON LA HISTORIA"

Finalmente llegó la esperada mañana del 7 de enero. Los medios de comunicación habían generado toda una campaña de expectativa que tenía al país en vilo, y no sin razón. Con el acto de instalación se daría inicio público, ante el país y el mundo, a un esperanzador proceso de paz con una guerrilla que había asolado al país por casi cuatro décadas. Además, sería la

primera oportunidad en que los medios y la población en general podrían ver reunidos en una misma mesa a un presidente de la República en ejercicio con un líder guerrillero, enemigo declarado del Estado.

Salimos de Bogotá a las 8 de la mañana, con una mezcla de sentimientos: por un lado, la ilusión de iniciar un proceso trascendental para el país y, por el otro, la preocupación de que todo saliera bien. Llegamos al aeropuerto de San Vicente a las 9, donde recibí los honores militares por parte de los miembros de la Policía Nacional que hacían parte de mi escolta. Durante los mismos me acompañaron el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda; el jefe de la Casa Militar, coronel Gustavo Matamoros, y mi jefe de Seguridad, mayor Chaves. De ahí nos desplazamos al Batallón Cazadores, donde estaban los invitados nacionales e internacionales, desde donde salí para la casa cural, que era el lugar previsto para que nos encontráramos con Marulanda mientras se disponían todos los invitados frente a la tarima, en la plaza principal de San Vicente.

El evento estaba programado para las 10 de la mañana, con transmisión en directo por televisión. Diez minutos antes de la hora prevista le pregunté por enésima vez al comisionado:

—Bueno, Víctor, ¿Marulanda va a venir o no?

Él salió a preguntarle a los voceros de la guerrilla que estaban afuera, supuestamente esperando a su jefe, y ellos le confirmaron, más bien azorados, que acababan de recibir una comunicación de su jefe en el sentido de que no iba a asistir porque temía por su seguridad. Daba la impresión de que en algún momento hubieran pensado que él sí asistiría, porque estaban más bien desilusionados.

Los delegados de la embajada cubana, preocupados por la ausencia de Marulanda, le propusieron a Víctor G. que les diéramos unos minutos para ir hasta el lugar donde se encontraba, una finca llamada Villa Nora, a cinco minutos de distancia, para tratar de convencerlo. Sin embargo, ya estábamos retrasados para el acto, los invitados estaban todos dispuestos en la plaza, aguantando los rigores del sol, y yo no podía correr el riesgo, por mi investidura, de someterme a la expectativa de que pasara media hora, luego una hora, con la televisión al aire y todos los medios pendientes, esperando la llegada improbable del guerrillero.

Eran cerca de las 11 de la mañana y di la orden de iniciar el acto. Me senté junto a la ominosa silla vacía y leí el discurso previsto para el caso de que Marulanda no fuera que iniciaba con la frase: *"Hoy venimos a cumplir una cita con la historia"*.

Dije, también, que iba *"a San Vicente del Caguán, como jefe de Estado, a cumplir mi palabra"*. Y agregué: *"La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa de diálogo para acordar una agenda de conversaciones que debe conducir a la paz"*.

No puedo negar que fue un momento incómodo, en el que sentía una gran desilusión por la falta de compromiso del jefe guerrillero que, a pesar de estar a unos cuantos minutos del lugar, le había hecho un desplante, no a mí, sino al país entero que contaba con su asistencia como prueba de voluntad.

Lo preocupante de la ausencia de Marulanda, así no fuera importante en el fondo, era que afectaba la impresión y el ánimo de los colombianos sobre el proceso que nacía, generando una sensación de fracaso que no correspondía a la realidad.

Lo que estábamos haciendo ese día, así fuera sin la presencia del líder de las FARC, era algo de extraordinaria importancia para el país. No estaba Marulanda, pero el mecanismo acordado con él en Caquetania estaba funcionando de la forma y bajo los plazos previstos. Eso era lo primordial.

El país y el mundo registraron el hecho de la "silla vacía" como el primer desplante de las FARC a un país que cifraba sus esperanzas en el incipiente proceso, pero también constataron la dignidad y la firmeza de un gobierno dispuesto a todo por la paz.

Una silla había quedado vacía, pero la silla del presidente, la silla del Estado, la silla de aquel que representaba la voluntad de paz de 40 millones de colombianos, estaba ocupada, y eso también quedó patente. Sin duda, la ausencia de Marulanda en ese acto marcó el inicio de una serie de errores políticos que las FARC cometerían a lo largo de todo el proceso.

Después de mi discurso, Joaquín Gómez leyó las palabras que debió haber pronunciado Marulanda. Fue un texto reivindicatorio y no propiamente conciliador. La gente se asombró de que la guerrilla reclamara por unas vacas, unos marranos y unas gallinas que se perdieron durante el primer ataque que sufrieron en Marquetalia, en 1964, que dio origen a las FARC, y luego en el ataque a Casa Verde, en 1990. No obstante, más allá de la reivindicación de daños y perjuicios, allí había un mensaje de alto valor histórico. La mención de los animales era un símbolo y una denuncia de lo que para ellos representaban esos dos ataques, que reafirmaron su desconfianza hacia el Estado. Aparte de eso, sus planteamientos contenían propuestas de fondo que resultaban valiosas para el proceso.

Las FARC plantearon en su discurso la convocatoria *"de una asamblea nacional constituyente, con la representación directa de los distintos estamentos de la sociedad colombiana, para que sea ella la que apruebe o desaprobe los acuerdos de Estado e insurgencia, para que la paz alcanzada sea duradera"*. Y añadieron: *"Somos optimistas del nuevo proceso que hoy comienza donde analizaremos a profundidad la situación política, económica, social, cultural, ecológica y de soberanía, hasta encontrar las soluciones de fondo"*.

Estos temas resultaban coincidentes con algunos de los planteamientos que yo había presentado con anterioridad, específicamente en mi discurso del Hotel Tequendama, y sobre los cuales diferentes sectores de la sociedad también se mostraban de acuerdo. Allí había ya un primer punto de con-

senso sobre cómo llegar al fin del proceso, a través de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que refrendara los acuerdos, tal como había ocurrido con los procesos exitosos del M-19 y el EPL. Esta propuesta habría de ser recogida, más de dos años y medio después, por las recomendaciones de la Comisión de Notables.

Terminada esta parte del acto y firmado el primer comunicado conjunto por parte de los voceros de las FARC y el comisionado, dando inicio formal a esta nueva etapa, me retiré de la plaza con el sinsabor de la ausencia de Marulanda pero con la satisfacción de haber iniciado el proceso de paz con este grupo que más avanzaría en la historia de Colombia. El tiempo demostraría que los esfuerzos no fueron en vano.

De allí me dirigí de nuevo a la casa cural, ubicada detrás del escenario, y, después de un breve receso en el que comentamos lo sucedido, salí hacia el aeropuerto acompañado del ministro de Defensa, de Gabriel García Márquez, el ex presidente Betancur y otros de los invitados especiales que habían llegado conmigo.

Precisamente el ex presidente Betancur había asistido con un especial deseo de encontrarse personalmente con Marulanda, una cita que estaba pendiente desde la época de su gobierno y que no se pudo realizar tampoco en esta oportunidad. Al fin y al cabo, ambos habían sido protagonistas del mayor esfuerzo de paz intentado hasta el momento con ese grupo guerrillero, habían logrado la tregua más larga y promovido un proceso político que dio origen a la Unión Patriótica. Unos meses después, esta vieja cita tantas veces postergada tuvo lugar, finalmente, en una vieja casa cerca de San Vicente del Caguán, a donde llegó el ex presidente con la misión humanitaria de ejercer sus buenos oficios para buscar la liberación de uno de sus entrañables amigos, el periodista y maestro de periodistas Guillermo Angulo Peláez, secuestrado por la guerrilla.

De regreso al palacio presidencial me reuní con Guillermo Fernández de Soto, quien se había quedado en Bogotá monitoreando el acto por televisión. La silla vacía nos había dejado un sabor amargo y una mezcla de sensaciones, pero también una conclusión que no nos sorprendía en absoluto: este proceso no iba a ser nada fácil.

El fin de semana siguiente recibí en Cartagena a Brian Mulroney, ex primer ministro de Canadá. Recuerdo que, cuando llegó a la Casa de Huéspedes, lo primero que hizo fue mostrarme la foto del *New York Times* donde yo aparecía solo en el acto de instalación y me dijo:

—Usted no se preocupe por la silla vacía. El que queda mal en estos casos es quien deja la silla y no quien está sentado cumpliendo la cita.

La verdad es que, a pesar de todas las dificultades, los comentarios y las informaciones que tenía, siempre pensé, hasta el último momento, que Marulanda iba a asistir. Siempre tuve la convicción de que iba, porque había creído en su palabra. Él le dijo después a Daniel Ortega, ex presidente de

Nicaragua, y a los delegados cubanos, que fueron a visitarlo a Villa Nora, que estaba totalmente convencido de que habría un atentado contra su vida y nunca desistió de esta versión. De todas maneras, aun sin su presencia, el acto de instalación marcó un hito en la historia colombiana y dio comienzo a la tercera etapa de nuestro cronograma inicial.

Correspondía ahora avanzar hacia la construcción de la agenda de una eventual negociación. Ya estaban definidos los representantes de la guerrilla en la Mesa de Diálogo —Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez— y yo, por mi parte, había nombrado una semana atrás a los cuatro voceros que representarían al Gobierno, buscando la más amplia participación posible. Designé a María Emma Mejía, ex canciller, liberal, quien había sido además la fórmula vicepresidencial de mi principal contendor en las elecciones, Horacio Serpa; a Fabio Valencia Cossio, conservador, líder político de Antioquia, senador y presidente del Congreso; a Nicanor Restrepo, importante industrial, cabeza visible del llamado Sindicato Antioqueño, un grupo empresarial muy admirado en el país, y a Rodolfo Espinosa, gobernador del departamento del Atlántico, como representante de las regiones.

Con esta designación, quedaron sentados en la Mesa de Diálogo, en representación del Estado colombiano las dos más importantes fuerzas políticas del país —tanto la que me apoyaba, en cabeza de Fabio Valencia, como la que estaba en la oposición, en cabeza de María Emma Mejía—; el sector privado, a través de Nicanor Restrepo, y las regiones, con sus diversas dinámicas y necesidades, a través de un caracterizado vocero, como lo era Rodolfo Espinosa. Este grupo diverso y representativo tuvo a su cargo la definición, con las FARC, de la agenda temática que marcaría el fondo de la negociación.

El proceso estaba en marcha, con su propia dinámica y nunca libre de obstáculos, muchos de los cuales tuvieron que ver con acciones violentas de las FARC o congelamientos unilaterales de su parte.

El primero de ellos no tardó en llegar, y ocurrió tan sólo 12 días después de iniciado el diálogo, el 19 de enero. Ese día Raúl Reyes leyó un comunicado en el que anunciaba la decisión de suspender el diálogo en tanto el Gobierno no presentara resultados en la lucha contra el paramilitarismo.

A pesar de esta congelación, los contactos continuaron de manera informal y prorrogué la vigencia de la zona, que terminaba el 7 de febrero, por 90 días más, convencido de que se superarían los obstáculos y se seguiría adelante, y consciente de que no podía matar las esperanzas del país ante la primera dificultad. Ésta fue la primera de una sucesión de prórrogas, unas más difíciles que otras, que sostuvieron el área de distensión hasta el 20 de febrero de 2002.

CAPÍTULO XV

Encuentros con Fidel

Si existe alguna figura pública en América Latina que haya tenido incidencia primordial en la historia del continente y del mundo entero durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, no cabe duda de que esa es la de Fidel Castro, el comandante y gestor de la revolución cubana, que ha mantenido y dirigido, contra viento y marea, un régimen socialista en la isla desde 1959 hasta nuestros días.

Es difícil, si no imposible, obtener una opinión desapasionada sobre alguien que, como él, tuvo un papel fundamental en el equilibrio de poderes de la Guerra Fría, a quien se acusa de haber apoyado y fomentado movimientos insurgentes en otros países latinoamericanos y quien ha soportado, pese a todo pronóstico, después de la caída del Muro de Berlín y la disgregación de la potencia soviética, los duros efectos del bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos. Héroe y mito revolucionario para algunos, dictador y tirano para otros, lo que nadie discute es su relevancia histórica y la influencia que jugó, directa o indirectamente, sobre los fenómenos de lucha armada en países como Colombia, donde organizaciones como el ELN siempre declararon su afiliación pro-castrista.

ROMPIENDO EL HIELO

Antes de terminar mi primer mes de gobierno, en los primeros días de septiembre de 1998, me correspondió entregar la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados, que ocupaba Colombia desde 1995, en Durban, Sudáfrica, país que asumiría desde entonces dicha dignidad. En dicha organización se agrupan más de 110 Estados de todos los continentes, por lo que la considerábamos un foro de especial importancia para Colombia. De hecho, fue allá donde logramos una de las primeras declaraciones de apoyo internacional al proceso de paz, aprobada por la plenaria de sus miembros.

Para mí, como recién estrenado presidente, esta cumbre fue una oportunidad excepcional, pues en sólo tres días me reuní con 28 jefes de Estado del mundo entero y con delegaciones de alrededor de 40 países, incluyendo personajes tan significativos como el presidente de Sudáfrica y símbolo

de la lucha contra la segregación, Nelson Mandela; el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan; el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el presidente cubano, Fidel Castro

Prácticamente, con todos ellos hablamos del tema de la paz en Colombia y de los esfuerzos que se iniciaban en ese sentido. Sin embargo, los temas eran siempre muy variados y hasta sorprendivos. Por fortuna contaba con la compañía del canciller Fernández de Soto y del ex canciller y entonces embajador ante las Naciones Unidas, Julio Londoño, cuyos conocimientos y habilidad para entablar conversación sobre el tema preciso con cada una de las múltiples delegaciones me dejó francamente sorprendido.

Recuerdo, por su originalidad, un encuentro particular que sostuve con el entonces presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, quien fue uno de los más interesados en el tema de la paz. Antes de empezar la reunión, habíamos planeado, junto con el embajador Londoño, los tópicos posibles de conversación y me habían presentado la información necesaria sobre el país. Sin embargo, al iniciar el encuentro, el presidente no tocó los temas previstos sino que me manifestó que quería entregarme la fórmula indefectible para conseguir la paz. Él sabía que nuestro país tenía un serio problema de violencia y creía tener una solución que podía funcionar. Con genuina curiosidad, esperé su revelación. Entonces Chissano me preguntó si yo practicaba meditación, y yo le contesté que en algunas ocasiones sí lo hacía. Entusiasmado por mi respuesta, me proporcionó la tan esperada fórmula de paz: teníamos que generar energías positivas sobre el país y todos sus habitantes mediante ejercicios de meditación que él se encargaría de transmitirnos y enseñarnos. Entre divertido y perplejo, le agradecí su amable y bienintencionado consejo.

En medio de las diversas reuniones estaba previsto un encuentro con Arafat y a continuación otro con Fidel Castro. Se trataba de reuniones protocolarias de media hora cada una en donde los temas a tratar estaban previamente fijados y no había tiempo para salirse del esquema.

La reunión con Castro tenía un cariz particular pues, aunque no nos conocíamos personalmente, estábamos prevenidos el uno contra el otro.

No era un secreto para nadie que en mis dos campañas presidenciales yo había tenido palabras fuertes y duras exigencias hacia el gobierno cubano. Siempre sostuve que no era concebible que Cuba financiara o apoyara la revolución en Colombia y dije que un país no podía tener buenas relaciones con otro que apoyara a grupos que pretendían desestabilizar sus instituciones. Por eso, había recalcado que Castro, si quería tener relaciones transparentes con Colombia, debía primero condenar la lucha armada.

A su vez, Fidel mantenía la creencia de que mi campaña había recibido aportes financieros de los cubano-americanos opositores a su régimen, tal vez porque se enteró de que yo había tenido un encuentro, años atrás, con Jorge Mas Canosa, el reconocido líder del anticastrismo en Miami, quien

me fue presentado por José María Aznar en un congreso del Partido Popular en Madrid. Lo cierto es que dicha financiación nunca existió, pero la presunción de la misma indisponía a Fidel en contra mía.

Así las cosas, los antecedentes no presagiaban un encuentro particularmente amable, por las prevenciones mutuas. A pesar de ello, en esa primera reunión oficial, que tuvo lugar en la habitación de Castro, las cosas transcurrieron normalmente y dentro de lo previsto, aunque siempre imperó un clima de relativa tensión, que no podíamos soslayar. Si bien finalmente se rompió el hielo, la verdad es que no se avanzó en ningún tema específico y el encuentro se quedó en lo meramente protocolario.

Las cosas hubieran terminado así, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, después de dos días de prácticamente no ver la luz del sol, encerrados en el hotel donde tenía lugar la cumbre, les dije al canciller, al embajador Londoño y a mi secretario privado, Camilo Gómez, que almorzáramos afuera para respirar aire fresco y estirar las piernas, y para cambiar un poco de ambiente antes de las varias reuniones con delegaciones que me esperaban en la tarde.

Al salir del ascensor, rumbo a la salida, me encontré de frente con Fidel, quien me preguntó hacia dónde iba. Le dije que salíamos a buscar un restaurante fuera del hotel y, de forma totalmente espontánea, lo invité a que nos acompañara para charlar más informalmente. No tenía ni idea de que él, en esta clase de cumbres internacionales, no sale del hotel bajo ninguna circunstancia y siempre se queda en su habitación, por razones de seguridad. Fue así como, en lugar de aceptar mi invitación, me propuso que subiera a su cuarto, con dos de mis "muchachos", y que almorzáramos allá. Aceptamos la oferta, junto con el canciller y el embajador Londoño, y allí, en la habitación de Fidel, comenzamos a construir una sólida y fructífera relación con Cuba y con el comandante mismo.

El almuerzo resultó tan agradable y rico en anécdotas y análisis sobre la situación de nuestros países que duró casi toda la tarde, de tal manera que tuvimos que aplazar o cancelar buena parte de los compromisos que estaban agendados. Hablamos de los incipientes procesos de paz, y le comenté al presidente Castro que Julio Londoño sería el nuevo embajador de Colombia en Cuba, lo que lo alegró mucho por la admiración y el respeto que le profesaba. Mi sensación en ese momento fue muy clara. Fidel podría convertirse en un muy buen aliado para la paz de Colombia, por su especial ascendencia sobre la guerrilla, específicamente el ELN, como en efecto lo fue.

Fue entonces cuando me dijo, ya entrados en confianza:

—Presidente, le voy a dar tres consejos muy importantes para que tenga éxito en el proceso de paz.

—¿Cuáles son? —pregunté intrigado.

—Muy fácil —dijo él—. Paciencia, paciencia y... cuando se le agote ésta, ¡más paciencia!

Sé que parece una recomendación obvia, pero esas palabras volvieron en muchas ocasiones a mi memoria cuando tantas veces el proceso y sus continuas dificultades me invitaban a "tirar la toalla" y abandonar los esfuerzos realizados. Hubo tantas decepciones en el camino que tuve varias oportunidades de recordar y poner en práctica esa palabra clave, que ha sido la partera de todos los procesos de paz exitosos en el mundo: PACIENCIA.

También me dijo en esa oportunidad que otra cosa que me recomendaba es que no pretendiera pedirle las armas a la guerrilla al comienzo del proceso, pues sólo lograría dinamitar los primeros cimientos de acercamiento.

—La entrega de armas tiene que ser al final —me dijo—. No vaya a caer en la tentación de pedir las al comienzo, porque no se las van a dar.

A partir de este encuentro en Durban, Cuba y el propio Castro se convirtieron en unos de los más fuertes impulsores de la paz en Colombia. Al final del gobierno la posición de Cuba llegaría a definiciones que nadie había imaginado, invitando a la guerrilla, con vehemencia, a abandonar la lucha armada en procura de una lucha democrática. El Estado caribeño se convirtió en nuestro aliado para lograr la paz y, por primera vez en la historia de ese país y de la revolución, participó activamente en un proceso externo de esta naturaleza. De hecho, sirvió de sede en más de una ocasión para que se llevaran a cabo importantes negociaciones entre el Gobierno y los voceros del ELN.

"¡ESTO HAY QUE GRABARLO!"

Después de esa primera reunión, el presidente Castro me cursó una invitación formal para realizar una visita de Estado a su país, a la que accedí gustoso, la cual se concretó entre el 14 y el 17 de enero de 1999, recién instalada la Mesa de Diálogos con las FARC, y sin cumplir todavía mis primeros seis meses de gobierno.

Se trataba de la primera visita oficial de un jefe de Estado colombiano a Cuba. Además, tenía dos implicaciones significativas: por una parte, se llevaba a cabo a escasos dos meses de mi visita de Estado a Washington, en una clara demostración de autonomía en nuestras relaciones internacionales, y, por otro lado, tenía lugar al comienzo de mi período presidencial. Fidel siempre se quejaba de que los presidentes latinoamericanos que visitaban Cuba lo hacían siempre en los últimos meses de sus gobiernos, cuando ya no tenían nada que perder, y reconocía el valor de mi visita en los albores de mi período, considerándolo como un gesto amable hacia el pueblo cubano.

La primera noche, tuvimos una cena protocolaria, pero Castro me advirtió discretamente:

—No comas mucho en la cena oficial. Yo te preparo luego una langosta a la piedra con *ketchup*, y llevas a algunos de los de tu gente.

Así fue. Esa noche tuvimos en el palacio presidencial una entretenida tertulia que duró hasta el amanecer y probamos las delicias de la comida de Fidel. Allí fuimos con el Nobel Gabriel García Márquez, que nos acompañaba en esa visita; el canciller Guillermo Fernández de Soto; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez; el ministro de Educación, Germán Bula, y el ministro de Cultura, Alberto Casas. Con Castro estaban el vicepresidente Carlos Laje, el canciller Roberto Robaina y su secretario privado y uno de sus más cercanos asesores, Felipe Pérez.

Esa noche, el ministro Casas y Fidel acabaron cantando a dúo el himno de la Compañía de Jesús. Gabo, que estaba dormido, cuando escuchó cantar a Castro, dijo: *"Esto hay que grabarlo"*. Luego, en medio de la sucesión de anécdotas históricas y ocurrencias del ministro de Cultura, también sentenció:

—¡Casas es el único tipo que conozco que no deja hablar al comandante!

Al día siguiente, dicté una conferencia en la Universidad de La Habana, a la cual asistió el presidente Castro, que me acompañó en el estrado. Fue un discurso de fondo, en el que defendí y profundicé sobre los temas de la democracia y de la economía social de mercado.

Nuevamente Fidel me invitó a comer esa noche con él, esta vez solo. Fue otra provechosa velada en la que hablamos hasta las dos de la mañana sobre la búsqueda de la paz en Colombia, la historia de nuestros países, el embargo económico a la isla, y muchos otros temas que hicieron que se volaran los minutos. Al concluir la larga sobremesa Fidel mismo me acompañó en su Mercedes hasta mi alojamiento. Me llamó la atención ver que en la mitad del carro había un fusil de fabricación rusa AK-47.

—Tiene balas trazadoras —me explicó, cuando me interesé por el arma, refiriéndose a las balas de orientación que se disparan en la noche para iluminar los objetivos.

Curiosamente, fue en esa visita cuando conocí por primera vez al coronel Hugo Chávez, quien era entonces presidente electo de Venezuela, y estaba a pocos días de su posesión. Castro me preguntó si me importaba almorzar el último día de mi visita con Chávez, que iba a llegar a la isla para reunirse con él. Por supuesto, acepté, pues me pareció una excelente oportunidad para trabar una relación más cercana con quien iba a ser el mandatario de un país tan importante para Colombia como lo es Venezuela.

La reunión se surtió en medio de la conversación, bromas y referencias históricas de estos dos hombres caribes, que ya tenían una cálida relación. Estuvo también presente Raúl Castro, el hermano de Fidel —en un hecho inusual, pues casi nunca se ven juntos—, quien me sorprendió por su simpatía, locuacidad y buen humor.

Recuerdo, además, que yo llevé en esa oportunidad una vieja publicación del discurso de Fidel, *La historia me absolverá*, que había comprado

en La Habana en 1979, cuando cubrí como periodista la VI Cumbre del Movimiento de los No Alineados (sin soñar que 19 años después estaría en Sudáfrica, como jefe de Estado, entregando la presidencia del mismo movimiento), y, una vez subimos a su despacho, le pedí a Castro que me lo autografiara. Fidel se sentó en su escritorio, mientras yo seguía hablando con Chávez, y escribió una emotiva dedicatoria sobre el viejo ejemplar. Lo interesante es que demoró casi media hora escribiendo el pequeño texto, lo cual interpreté como una oportunidad que quería brindarnos a Chávez y a mí para conocernos mejor, entendiendo la importancia de que construyéramos una buena relación personal en beneficio de nuestras naciones.

CONVERSACIONES E INTERMEDIACIONES

Desde entonces, en cada cumbre o reunión internacional en que coincidí con el presidente Castro, siempre buscamos un tiempo para almorzar o cenar juntos, y nunca dejó de interesarse por los avances de los diálogos y negociaciones. Las anécdotas son muchas y las revelaciones bien importantes.

En abril de 1999, por ejemplo, asistimos ambos a la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe —AEC—, en Santo Domingo, República Dominicana. Allí tuvimos una reunión larguísima que se prolongó hasta las cuatro de la mañana, como es usual siempre que se habla con Fidel, que es una persona nocturna como pocas. Después de horas de conversación, con la presencia del canciller Fernández de Soto, del embajador Londoño, de mi secretario privado Camilo Gómez y del canciller cubano Roberto Robaina, del entonces secretario privado de Castro, Felipe Pérez, y de José Arbesú, jefe del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, Fidel les pidió que nos dejaran solos porque tenía un asunto delicado que conversar conmigo.

Se fueron los acompañantes a dormir a una habitación al lado y entonces el presidente Castro me contó, en tono de confidencia, que Nicolás García, *Gabino*, el líder máximo del ELN, estaba en La Habana en ese momento y que se encontraba muy enfermo. Según me dijo, le estaban practicando una delicada operación y no se tenía certeza de si salía o no con vida de la misma.

—Yo creo que es bueno que tú lo sepas —me dijo—, por las implicaciones que pueda tener.

La noticia, por supuesto, era una bomba: nada menos que el comandante del ELN estaba en Cuba, en peligro de muerte. Sin embargo, nunca utilicé esta información para presionar a la guerrilla, ni la divulgué. Sólo una vez, en una de tantas ocasiones en que el ELN se quejaba de que no teníamos confianza en ellos, yo le mandé un mensaje a Gabino, más o menos en estos términos: *“Usted sabe lo que yo sé y yo sé que usted lo sabe”*. Así quedó claro para él que yo estaba al tanto de que había estado gravemente enfermo, que

hubiera podido utilizar esa información y generar una situación muy complicada en el interior del ELN, pero no lo hice.

En todo caso, no terminaron los días de Gabino en Cuba. El que sí fue a morir allá, según Fidel, fue el anterior comandante del ELN, el cura Manuel Pérez, máximo líder de esta guerrilla hasta su deceso en el primer semestre de 1998. Según me reveló en otra de nuestras múltiples conversaciones, Pérez había ido a Cuba muy enfermo y había muerto allá. También me dijo que el cadáver de Pérez fue traído luego a Colombia, donde fue enterrado, y que su familia —creo que mujer e hija— se había quedado a vivir en La Habana.

Algo que Castro nunca entendió ni justificó en la guerrilla colombiana fue su sevicia contra la población civil, especialmente el secuestro y el uso de minas antipersonal. Él mismo me decía que en su proceso revolucionario jamás habían usado el secuestro como arma de extorsión o financiamiento, y que sólo pusieron bombas contra los tanques, nunca contra personas inermes e indeterminadas, como es el caso de las minas antipersonal.

Un hecho que le impactó fuertemente fue el caso del niño Andrés Felipe Pérez, un pequeño de nueve años, hijo de un cabo de la Policía secuestrado por las FARC, que estaba enfermo de cáncer y ya desahuciado y cuyo último deseo era el de volver a ver y a abrazar a su papá antes de morir. El país entero y la comunidad internacional clamaron a la guerrilla para que liberara a este hombre, abocado ya a la tragedia de perder a su hijo, y le cumpliera la última voluntad al pequeño Andrés Felipe, pero aquella, dura de corazón, jamás cedió ante los ruegos que le llegaban de todos los confines.

Yo le conté la situación a Castro el 11 de diciembre de 2001, cuando estábamos reunidos en la Isla Margarita, Venezuela, en la III Cumbre de la AEC, y él me escuchó consternado, resistiéndose a creer que la guerrilla colombiana pudiera llegar a tales excesos de crueldad. Entonces me dijo:

—Le voy a escribir una carta de mi puño y letra a las FARC. Yo a ellos nunca les he pedido nada, pero les voy a pedir que liberen al padre de Andrés Felipe, como un gesto de elemental humanidad.

Así lo hizo. Escribió la nota y se la entregó a su canciller Felipe Pérez, que ya había reemplazado a Robaina, para que éste la hiciera llegar a la guerrilla a través del embajador cubano en Bogotá.

Las FARC, sin embargo, no hicieron ningún caso, lo cual a Fidel le dolió en el corazón. Andrés Felipe falleció a los pocos días del envío de la carta sin haber visto a su padre y éste, enloquecido por el dolor, intentó fugarse de su cautiverio y fue asesinado por la guerrilla, rematando así la dolorosa tragedia de esa familia.

La respuesta de las FARC a Castro fue completamente contradictoria. Le decían que él debía entender que ellos estaban luchando por la igualdad, por la justicia, por la equidad, y que en Colombia morían niños todos los días de hambre y por la pobreza, y que esa era la causa de su lucha. Sin em-

bargo, los supuestos adalides de la "justicia social" se negaban a liberar al padre de Andrés Felipe. Castro montó en cólera, preguntándose: *"¿A mí me van a hablar de revolución? ¿Al comandante Castro le van a enseñar a hacer la revolución?"*.

Otra vez con el ELN, en marzo de 2002, cuando se avanzaba en la discusión de una tregua, ocurrió una anécdota que prueba el especial interés que le concedía Castro a la situación de Colombia. Nos encontramos con él en Monterrey, México, con ocasión de la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo convocada por las Naciones Unidas, un evento que contó con un polémico ingrediente adicional, pues Castro denunció que el presidente Fox lo "invitó" a dejar su país con mayor premura que la normal para evitar que estuviera presente en el momento en que arribara el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, lo cual terminó por generar una crisis en las relaciones cubano-mexicanas.

Cuando me reuní con Fidel, él me comentó su desagrado por la situación pero no tardó en preguntarme, como siempre, si había algo en lo que me pudiera ayudar para impulsar el proceso de paz. Le conté entonces que delegados del ELN y el comisionado para la Paz, que para la fecha era Camilo Gómez, estaban reunidos en La Habana y que nos convendría mucho un "empujón" de su parte para desempantanar las discusiones.

En medio de su delicada situación con el gobierno de México, a pesar de tener toda la prensa internacional pendiente de sus actos y sus reacciones después del incidente de Monterrey, lo primero que hizo Castro al regresar a La Habana, alrededor de la medianoche, fue llamar al embajador Londoño y a Camilo Gómez para contarles que había estado reunido conmigo, y luego despertó a los delegados del ELN, hacia las tres de la mañana, y los hizo ir a su residencia para insistirles en la necesidad de avanzar en el proceso.

Otra noche, el 31 de enero de 2002, en una cena con Camilo Gómez, el embajador Londoño y altos funcionarios cubanos, en la que participaban Francisco Galán y Felipe Torres, los dos líderes del ELN que estaban presos en la cárcel de Itagüí, Castro estuvo particularmente divertido a costa de sus invitados. Sin parar de reírse les decía que ahora entendía por qué la paz de Colombia estaba tan complicada. *"¿Si es que está en manos de dos presos y un muchachito!"*, exclamaba, refiriéndose a los dos guerrilleros y a Camilo. Durante toda la comida, por otro lado, no hizo otra cosa que tomarles el pelo a Galán y Torres, llamándolos "presos con celdas cinco estrellas", pues le parecía completamente exótico —como en efecto lo era— que mi gobierno tuviera gestos tales como el permitir los viajes de los dos guerrilleros para negociar.

De hecho, Galán y Torres no sólo estuvieron dos veces en los propios campamentos del ELN en las montañas colombianas, sino que también viajaron, con un salvoconducto especial, a Cuba, Suiza y Costa Rica, siempre acompañados por guardias del Inpec. Fueron riesgos asumidos a conciencia

para buscar la paz, actos de confianza que el ELN no dimensionó ni aprovechó debidamente.

Fidel siempre sostuvo que las FARC y el ELN tenían una gran oportunidad de firmar la paz con mi gobierno. Cada vez que podía les insistía en que era una oportunidad histórica. *"Firmen con Pastrana"*, les decía. *"Firmen con un conservador. No van a tener después otra oportunidad como ésta para hacerlo"*. El mismo Castro conoció, porque nosotros se lo mostramos, el acuerdo de paz que tuvimos listo para proponerle al ELN, y les recomendó expresamente que lo firmaran, pero este grupo siempre sucumbió ante sus propias contradicciones. Lamentablemente, los guerrilleros que tanto admiraron su revolución y sus ideas, tuvieron oídos sordos para su entusiasta invitación a la paz.

LA SOLUCIÓN UTÓPICA

También estuvo Castro dispuesto a colaborar y mediar en el proceso con las FARC, cosa que infortunadamente nunca se logró concretar. Después de la instalación de la Mesa de Diálogos el 7 de enero de 1999 y el conocido episodio de la silla vacía, los delegados cubanos que asistieron al acto le contaron a su presidente lo sucedido y lo que habían conversado luego con Marulanda en la casa denominada Villa Nora, a pocos minutos del casco urbano de San Vicente. También le llevaron los textos de mi discurso y del discurso de las FARC, que leyó con particular interés.

Fidel, impactado por la narración y con deseos de aportar a la búsqueda de una salida pacífica al conflicto, decidió enviarle una comunicación a Manuel Marulanda, a la que él mismo denominó "La solución utópica", en la que le planteaba varias interesantes reflexiones sobre una salida negociada al conflicto colombiano. El 18 de febrero le dictó el texto a su secretario privado, Felipe Pérez, con la instrucción de que fuera entregado personalmente, por emisarios suyos, al líder guerrillero, siempre y cuando yo lo leyera antes, porque quería obrar con total transparencia conmigo.

Así fue. El jefe del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Arbesú Fraga, y Antonio Tony López Rodríguez, como delegados del presidente cubano, entregaron el 22 de febrero el documento que contenía las impresiones y comentarios de Castro a Manuel Marulanda y Raúl Reyes, en la Zona de Distensión. Antes habían pasado por el Palacio de Nariño, donde me lo habían dado a conocer.

Básicamente, en dicho texto, Castro les decía a las FARC que consideraba que mi gobierno estaba conversando con seriedad y comprensión acerca de lo complejo que era el proceso de paz, y las instaba a continuar buscando una solución política negociada, entendiendo que era lo que más convenía a Colombia, a la luz de la situación internacional y las difíciles circunstancias económicas.

Según el presidente cubano, era imposible alcanzar la paz si no se buscaban soluciones absolutamente diferentes a las intentadas antes, que permitieran superar la desconfianza de tantos años. Por lo mismo, opinaba que no era posible llegar a un acuerdo de paz sin un profundo y trascendente programa social para Colombia que llegara a las zonas más afectadas por el conflicto.

En cuanto a las fórmulas sui generis para lograr la paz, decía que, si bien ellas eran teóricamente posibles, eran tan difíciles de aplicar que no dudaba en calificarlas como una especie de "utopía". Sin embargo, en la búsqueda de esa utopía debíamos perseverar con paciencia y más paciencia.

Finalmente, Fidel alertaba a la guerrilla de que, si fracasaban las negociaciones de paz, podría desatarse, en su opinión, una guerra intensa con el apoyo logístico de Estados Unidos, con el peligro de que este país se dejase llevar por la tentación de usar sus propias tropas en Colombia. Eso sí, aclaraba que no creía que yo promoviera o deseara una guerra o una intervención como ésta, y que estaba seguro de que no me interesaría la Presidencia de la República a semejante precio.

Sin duda, el documento de "La solución utópica" era de tremenda importancia política. Más allá de los temores —infundados, pienso yo— de una intervención militar norteamericana, lo trascendental era su insistencia ante las FARC acerca de la conveniencia de una solución política negociada, sobre la base de programas sociales concretos que beneficiaran a la población afectada por la violencia.

Más de dos años después, cuando, hacia el final de mi gobierno, la situación con este grupo comenzó a hacerse insostenible el mismo Fidel me dijo:

"Si usted cree que la presencia mía es importante para avanzar con las FARC, estoy dispuesto a ir a San Vicente del Caguán, a la Zona de Distensión, a hablar con ellos. Pero no voy a ir a hablar con Manuel Marulanda solamente. Le pediría a él que reuniera a sus hombres y yo, en una conversación con ellos, les explicaría por qué deben hacer la paz. Si usted autoriza a que mi avión aterrice en San Vicente, yo iría sin ningún problema con ese único objetivo".

De ese tamaño era su compromiso con el tema de la paz en Colombia.

Es más, Castro le mandó razón a Marulanda con el alto comisionado —que ya era Camilo Gómez— de que, si él aceptaba, le enviaba un avión cubano a San Vicente, con todas las garantías, para que tuvieran una reunión en la isla. Como sabía del terror de Tirofijo a salir del país y ser interceptado o capturado por los norteamericanos, decía que incluso podría viajar "esposado" con el comisionado, dándole a entender que correrían ambos con la misma suerte y que nada le iba a pasar. Por lo menos tres veces le mandó esta razón, pero Marulanda, con su proverbial desconfianza, jamás aceptó.

Debo reconocer que un factor fundamental en el buen mantenimiento de las relaciones cubano-colombianas fue la intervención constante, siempre

silenciosa y discreta, de Gabriel García Márquez, cuya cercanía personal con Castro es bien conocida. Siempre que pudo, Gabo nos ayudó a ambientar los procesos de paz y a obtener la ayuda de Cuba y de Castro, cuando fue necesario.

Algunos me preguntan cómo fue posible que durante mi gobierno tuviera tan buenas relaciones con Cuba y al mismo tiempo con los Estados Unidos. Lo cierto es que con los norteamericanos mis relaciones siempre fueron de transparencia, y esa sinceridad es algo que ellos aprecian más que nada. En las reuniones que sostuve con Clinton y luego con Bush les comentaba lo que estábamos haciendo con los cubanos y ellos preguntaban: *"¿Usted cree que le ayuda Fidel? ¿Cree que es honesto en su colaboración? ¿Cree que puede influir en la guerrilla?"*, a lo que yo les respondía afirmativamente. Ellos entendían esto y sólo me pedían que les contara los avances, respetando, por supuesto, la autonomía colombiana en el manejo de las relaciones internacionales y en la búsqueda de nuestros propios caminos para la paz. Jamás se opusieron frontalmente a la intervención de Cuba en el proceso.

Sin duda, Castro es un líder controvertido como pocos. Yo mismo discrepé —y sigo discrepando— de muchas de sus políticas. Sin embargo, en lo que respecta a mi experiencia personal y de gobierno, tengo que reconocer que siempre obró con transparencia, sinceridad, lealtad y amistad hacia Colombia y que jugó un papel fundamental y generoso en los esfuerzos de paz que adelantamos. Al César lo que es del César.

CAPÍTULO XVI

Temblor en el corazón

A la 1 y 19 de la tarde del 25 de enero de 1999, el destino y la naturaleza mostraron a Colombia su rostro insondable, cambiando mi vida y la de miles de compatriotas.

En ese momento yo estaba reunido en mi despacho con el canciller Guillermo Fernández de Soto, repasando la estrategia que seguiríamos en el Foro Económico Mundial que se realiza cada año en Davos, Suiza, un escenario propicio para presentar la estrategia de paz y lucha contra el narcotráfico, para conseguir nuevos recursos para el país y para continuar con la tarea de recuperar su imagen internacional. En las oficinas del Palacio de Nariño varios funcionarios trabajaban contra el reloj, preparando el viaje que comenzaría hacia las 5 de la tarde.

Fue entonces, a la 1 y 19, cuando sentimos un fuerte remezón y vimos que las lámparas se movían. *"Esto es un temblor muy fuerte"*, le dije a Guillermo. De inmediato marqué a la oficina del secretario privado, Camilo Gómez, y le pedí que averiguara la magnitud y el epicentro del sismo.

Aunque no se consiguió información precisa, pues se había perdido la comunicación con la zona afectada, todo indicaba que el problema estaba en Pereira o sus alrededores, una ciudad que había sufrido unos años atrás las consecuencias de otro sismo importante.

Con esos primeros datos ordené movilizar todos los instrumentos de socorro que fueran posibles y le di instrucciones a Camilo para que cancelara el viaje a Suiza. También pedí que se organizara mi desplazamiento inmediato a la zona del terremoto y acordé con Nohra que ella se quedara en Bogotá, atenta a la coordinación de cualquier ayuda humanitaria que se requiriera.

Algunos de mis asesores me manifestaron que sería mejor no salir todavía hacia la zona, por consideraciones de seguridad o porque pensaban que era mejor esperar a tener una información más detallada. Sin embargo, no dudé ni un segundo que había que estar allá para enfrentar la situación a la máxima brevedad. Caminando hacia el helipuerto me topé con Manuel Santiago Mejía, un destacado empresario antioqueño y viejo amigo, que casualmente estaba ese día en Palacio, y le pedí que me acompañara. No tenía equipaje, así que le presté una camisa y un pantalón, que habrían de servirle en los

días siguientes. A partir de entonces él se convertiría en una pieza clave en la atención de la emergencia y luego en la reconstrucción de la zona.

Junto con los altos mandos militares y de Policía, y otros funcionarios del Gobierno, salimos hacia Pereira, pues se pensaba que allí la tragedia había sido mayor. Llegamos hacia las 4 y 30 de la tarde, apenas tres horas después del terremoto, y constatamos aliviados que los daños en esa ciudad no habían sido tan grandes. En cambio, las informaciones que llegaban del Quindío y de su capital, Armenia, indicaban que los mayores destrozos habían ocurrido en ese departamento vecino.

Me encontré con Luis Carlos Villegas, un pereirano entusiasta que lleva años al frente de la Asociación Nacional de Industriales —ANDI—, y le pedí que me acompañara y que gerenciara el proceso de la reconstrucción. Él, lleno de compromiso y amor por su región, aceptó de inmediato y terminó convirtiéndose en el primer director del Forec —el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero—, realizando una labor que sería considerada como un ejemplo para el mundo entero.

Luis Carlos me comentó que su hija, Juliana —la misma joven que meses después sería secuestrada por la guerrilla en un acto que mereció el repudio nacional—, estaba ya preparando algunos mercados para ayudar a los damnificados. Fue entonces cuando nació la idea de pedir a los supermercados en todo el país que prepararan paquetes de alimentos básicos por 10.000, 20.000 o 30.000 pesos para que los colombianos los adicionaran a sus mercados con destino a las víctimas del terremoto. Muchos alimentos se recaudaron luego, a través de este sencillo método, gracias a la solidaridad de miles de compatriotas.

Nos dirigimos a Armenia, donde la sorpresa nos encogió el corazón. El panorama que contemplamos desde el helicóptero fue sobrecogedor. Lo que estábamos viendo era una ciudad destruida casi por completo. Por mi cabeza pasaban las imágenes del terremoto de Popayán de 1983, cuyos efectos devastadores registré como periodista, pero lo que ocurría en Armenia era mucho peor. No pude pronunciar ni una palabra. El dolor enorme apretaba hasta el alma.

Durante la aproximación al helipuerto de la Brigada sucedió algo aterrador. Una de las réplicas acababa de estremecer la tierra y, ante nuestros ojos incrédulos, se derrumbó el Edificio de la Asamblea del Quindío, en tanto salían de todas partes de la ciudad enormes columnas de humo y de polvo. Esa réplica había ocasionado más daños que el temblor inicial. Era una escena impresionante. ¡Qué momento tan angustioso! ¡Qué impotencia sentíamos desde el aire viendo cómo la naturaleza se ensañaba con la ciudad sin que pudiéramos hacer nada!

Tan pronto aterrizamos, vimos cómo los soldados corrían despavoridos. Otra réplica del temblor había derribado un muro enorme. Sin más demoras salimos en tres carros hacia la ciudad, aunque era casi imposible transitar

en los vehículos. Las calles estaban llenas de escombros. Lo más aterrador eran los rostros de desolación y de angustia que tenían las personas afectadas, deambulando sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin conocer la suerte de sus familiares.

Una de las primeras imágenes que vimos fue la del cuartel de bomberos, destruido por completo. Allí estaban unos pocos bomberos haciendo esfuerzos sobrehumanos para buscar a sus compañeros que habían quedado sepultados. Tan sólo era posible ver, en medio de las ruinas, pedazos de las maquinas inútiles. Era una dura paradoja: los bomberos no podían rescatar ni a sus propios muertos... Nada podían hacer y a nadie podían socorrer.

Ya empezaba a oscurecer y la ciudad estaba sin luz y sin agua. Nos dirigimos hacia la Cruz Roja, a donde comenzaban a llegar los heridos. Allí, luego de recibir algunos informes, intenté vanamente comunicarme con Bogotá, pero todos los sistemas de comunicación estaban inservibles. Había que tomar medidas urgentes. En compañía de los generales y de los demás miembros del grupo que me acompañaba, al cual se habían sumado el alcalde y el gobernador, instalamos un comité de emergencia en plena calle para evaluar la situación de orden público, pues la falta de luz y la angustia de la gente podían empeorar la situación.

A esas horas ya teníamos mayor información sobre la dimensión de la tragedia y los datos horrorizaban. El número de muertos superaba el millar y el de damnificados pasaba de los 200.000. Los primeros informes daban cuenta del desespero de los damnificados por la escasez de alimentos y de bandas de saqueadores que estaban haciendo de las suyas. Recuerdo que cuando nos enteramos de esto le dije a los generales Fernando Tapias y Rosso José Serrano que me acompañaban en la reunión:

—Están saqueando la ciudad y dos generales están aquí sentados. Necesito que se dediquen inmediatamente a esto, que traigan todos los soldados y agentes que sean necesarios para garantizar la seguridad.

Para entonces ya estaban operando los mecanismos para atención de desastres, y el equipo encabezado por Mónica Yamhure, directora de la Oficina de Atención de Desastres, y por Fernando Medellín, director de la Red de Solidaridad, en colaboración con los demás organismos de socorro, hacía esfuerzos sobrehumanos para que esa primera noche los damnificados tuvieran algún alivio. Junto con ellos, Manuel Santiago Mejía permaneció en Armenia organizando el envío de alimentos, pues calculábamos que se tenían que movilizar varias toneladas por día. El simple destino lo había llevado allí y allí se quedó por varios días, dedicado a ayudar en la atención de la tragedia.

Simultáneamente, desde Bogotá, Nohra había iniciado la recolección de ayudas para los damnificados y estaba organizando en Corferias las tareas de recepción, clasificación y envío de las múltiples donaciones que comenzaban a llegar con destino a los damnificados. En Palacio, varios ministros,

junto con otros de mis asesores, crearon una sala de crisis y coordinaban todo lo necesario, en tanto Guillermo Fernández de Soto, desde la Cancillería, movilizaba a nuestras embajadas en todo el mundo para lograr la más pronta y efectiva ayuda internacional.

Pasada la medianoche, decidimos ir a descansar, con el objetivo de levantarnos temprano en la mañana para recorrer los demás municipios de la zona. Yo me quedé en la casafinca del líder quindiano Iván Botero Gómez, a la salida de Armenia. Mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de recordar los rostros desconcertados de quienes acababan de perder su ciudad, sus casas y sus familiares. Era imposible dormir. Cerraba los ojos y veía los gestos desesperanzados de los damnificados, veía las ruinas de Armenia, veía ese panorama desolador que el terremoto había dejado. La sensación de tristeza me invadía por completo, pero también la indignación por los saqueos era incontenible. ¡Cuánta rabia sentía al saber que muchos intentaban aprovecharse de la desgracia de los demás!

Muy temprano, con las primeras luces del día, iniciamos el recorrido por otros municipios afectados y volvimos a Armenia para revisar los avances de la ayuda y la situación de orden público. Desde entonces, y por casi cinco días, me quedé a trabajar en esa ciudad, donde prácticamente desplazé mi despacho y el gabinete. Organizamos una sala de crisis en la sede de la Corporación Autónoma del Quindío, donde sesionó el Consejo de Ministros y se decidió la declaratoria de la emergencia económica y social. Además, coordinamos la llegada de las primeras ayudas, definimos los mecanismos para transportar los alimentos que se necesitaban cada día, así como la ubicación de los primeros refugios para los damnificados. En suma, se empezó a diseñar la reconstrucción del Eje Cafetero.

Cada día y cada noche, a nuestro paso por las calles de los municipios afectados, las escenas que presencié fueron desgarradoras e inolvidables. Tanta gente con sus colchones, sus pocas pertenencias, sentada sobre las ruinas de los que fueron sus hogares, con la mirada perdida. Tantos ancianos, madres y niños que me abrazaban llorando, como si fuera la única solución de sus desgracias. Caminando en las noches por esas cuadras oscuras, apenas alumbradas por las hogueras prendidas por los damnificados, no podía dejar de pensar en esas imágenes de espanto que tienen las ciudades después de la guerra. En esos momentos sentí el peso tremendo de lo que significa ser gobernante.

Fueron, sin duda, los días más duros y tristes que viví como presidente, junto con aquellos en que acompañé a las víctimas de grandes masacres perpetradas por los grupos guerrilleros, como fue el caso de Machuca, la población antioqueña incinerada por el ELN en octubre de 1998, y Bojayá, el pequeño poblado chocoano, en cuya iglesia murieron 119 civiles indefensos, la mitad de ellos niños, bombardeados por los cilindros-bomba de las FARC el 2 de mayo de 2002.

UN MODELO PARA EL MUNDO

Durante los meses siguientes, la reconstrucción del Eje Cafetero —de Armenia, Pereira y las demás poblaciones afectadas en Quindío, Risaralda, Caldas, Valle y Tolima— se convirtió en una prioridad de mi gobierno. Visité incontables veces la zona para constatar los avances de la reconstrucción y estuve en permanente contacto con sus autoridades y comunidades, hasta que el 25 de enero de 2002, tres años después del terremoto, en la reconstruida plaza de Armenia, pude dar el parte emocionado y entonces inimaginable de “misión cumplida”, después de una inversión de 1,6 billones de pesos y de haber liderado un proceso que fue reconocido nacional e internacionalmente por su transparencia y su eficiencia.

La fórmula utilizada fue la de una gestión basada en una visión de largo plazo, la participación de las comunidades, la impecabilidad en el manejo de los recursos y la celeridad para resolver los problemas más inmediatos.

El Forec construyó un esquema integral que comprendió la reparación, reconstrucción y construcción de viviendas, el restablecimiento de las instituciones públicas, la infraestructura del transporte, la educación, la cultura y la recreación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, las instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, la recuperación ambiental y el fortalecimiento del tejido social.

Además, para brindar las garantías necesarias de una gestión transparente y eficaz por parte del Forec y sus aliados, se llevó a cabo un monitoreo permanente al proceso de reconstrucción por parte de la Red de Universidades.

No más en el tema de la vivienda se otorgaron más de 126.000 subsidios, con una inversión superior a los 700.000 millones de pesos. En total fueron cerca de 100.000 viviendas reparadas y reconstruidas, y más de 26.000 viviendas nuevas.

Un hecho sin precedentes es que cerca de 16.000 familias que no eran propietarias ni poseedoras de una vivienda, sino apenas arrendatarios, accedieron al sueño de tener una casa propia gracias a los subsidios del Forec, a los subsidios donados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a los entregados a través de las cajas de compensación del país.

Igualmente, más de 17.000 familias que eran poseedoras, pero no dueñas, de sus inmuebles recibieron el título que las hizo propietarias de sus viviendas.

Esto, unido a los 517 proyectos de infraestructura pública y a los 857 proyectos de infraestructura social que se construyeron o repararon, generó para los habitantes de la región cafetera de Colombia un nuevo amanecer, con mayores posibilidades de progreso y mejor calidad de vida, incluso, que la que tenían antes de la tragedia.

Hoy, con satisfacción, podemos decir que la Zona Cafetera se ha convertido en un símbolo de pujanza y alegría, y que sus fértiles tierras y maravillosos paisajes constituyen el segundo destino turístico de Colombia, después de la costa caribe. Miles de familias colombianas y del exterior se maravillan, día tras día, con sus modernas ciudades, sus pueblos pintorescos y bien conservados, sus escenarios de ensueño, y con atracciones de talla internacional, como el bellísimo Parque Nacional del Café, que rinde homenaje a nuestro producto insignia, cuya segunda etapa tuve oportunidad de inaugurar a fines de 1999.

Dos símbolos quedaron en mi corazón como recuerdo de este empeño vital. El primero es una pulsera con la bandera de Colombia que me regaló un grupo de familias damnificadas de Pereira el día en que les entregamos las llaves y los títulos de sus nuevas viviendas, que todavía conservo. El segundo fue un cartel que agitaban al viento en la Plaza de los Arrieros, el día en que se cumplieron los tres años del terremoto, cuyo lema me llegó al corazón: *"Armenia tuvo terremoto, pero también tuvo presidente"*.

CAPÍTULO XVII

El crimen que alejó a los Estados Unidos

El 4 de marzo de 1999 fue una fecha especialmente crítica para el proceso de paz. Ese día aparecieron asesinados por las FARC tres ciudadanos norteamericanos —dos mujeres y un hombre—, activistas indigenistas que habían venido a trabajar en diversos temas ambientales y sociales con la comunidad indígena Uwa, ubicada en el oriente del país, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Ingrid Washinawatok, una nativa americana de Wisconsin; Terence Freitas, una ambientalista de Los Ángeles, y Laheena Gay, de Hawai, habían sido secuestrados una semana atrás, el 25 de febrero, cuando viajaban en una camioneta, acompañados por indígenas Uwa, hacia Saravena (Arauca), población desde donde esperaban tomar un avión que los llevaría a Bogotá, con el objetivo de regresar esa misma noche a los Estados Unidos.

Desde cuando se tuvo conocimiento de su secuestro, los organismos de seguridad venían adelantando las investigaciones del caso para determinar qué grupo se los había llevado —ya que se encontraban en una zona con influencia tanto de las FARC como del ELN— y para dar con su paradero. Yo mismo seguía de cerca la delicada situación pues era consciente de las repercusiones negativas que representaba el secuestro de sus ciudadanos en el ánimo de cooperación de los Estados Unidos.

Lo que jamás imaginamos fue que la guerrilla, además de secuestrarlos, terminara por asesinarlos como lo hizo, en una absurda demostración de crueldad y salvajismo. Los cuerpos de los tres indigenistas fueron hallados por gentes de la región, botados a la orilla del río Arauca, en la orilla venezolana del mismo, con las manos atadas y visibles signos de tortura. Se trataba de un acto brutal de ajusticiamiento contra tres extranjeros indefensos, cuyo único "pecado" había sido venir a acompañar y a asesorar a una comunidad indígena colombiana.

Aunque los indicios apuntaban a la autoría de las FARC, no teníamos aún elementos en el Gobierno para aseverar este hecho. La verdad, nos costaba creer que una guerrilla en pleno proceso de paz pudiera cometer semejante estupidez. Resultaba claro, por otra parte, que si —como lo temíamos— el asesinato era obra de dicha organización, este acto sería un golpe de gracia

contra el trabajo minucioso que habíamos desarrollado para lograr un respaldo y acompañamiento efectivo de los Estados Unidos en el proceso. Ya la revelación de la reunión secreta de Costa Rica había minado el camino, pero un crimen como este acabaría con cualquier esperanza de vinculación directa.

Habíamos logrado que el embajador estadounidense participara como invitado en la instalación de la Mesa de Diálogo en San Vicente del Caguán y contábamos, incluso, con declaraciones del mismo presidente Clinton y del Departamento de Estado apoyando el proceso. Sin embargo, de nada valdría todo lo avanzado si se confirmaba que eran las FARC las que habían asesinado a sangre fría a tres ciudadanos norteamericanos.

El problema, además, no era sólo con Estados Unidos sino con toda la comunidad internacional, que observaba alarmada la sevicia de este crimen. Se trataba de tres extranjeros que no habían muerto en medio de un combate sino cumpliendo labores humanitarias a favor de una comunidad indígena. Un acto inexplicable, de simple y absoluta barbarie.

Teniendo en cuenta que los cadáveres habían aparecido en el lado venezolano del río Arauca, me comuniqué, tan pronto me enteré, con el presidente Hugo Chávez para ampliar la información sobre la muerte de los estadounidenses y coordinar el trabajo entre nuestros respectivos cuerpos de seguridad y organismos de investigación con el fin de aclarar lo sucedido.

Resultaba urgente que la guerrilla se pronunciara y contara la verdad, cualquiera que fuera. Para ello, le pedí al comisionado, Víctor G. Ricardo, que se comunicara con las FARC y les exigiera una respuesta clara. Esto era posible porque, si bien el diálogo estaba congelado por ellos desde el 19 de enero, bajo el pretexto de la falta de resultados contra el paramilitarismo, la comunicación seguía dándose de una manera informal.

Víctor G. contactó a las FARC a las 6 de la tarde del 5 de marzo, una hora frecuente para esta clase de comunicaciones por radioteléfono, y acordó reunirse con sus voceros en San Vicente para discutir la nueva crisis que posiblemente habían generado. Fue así como se reunió con ellos el 6 y el 7 de marzo, en largas sesiones de debate, en las cuales, además de tratar otros temas del proceso de paz, les manifestó la gravedad del crimen contra los norteamericanos y les hizo énfasis sobre la necesidad de que se pronunciaran al respecto y, si era el caso, aceptaran la responsabilidad por la muerte de los indigenistas, con todas las consecuencias que esto trajera.

Raúl Reyes se comprometió a que la agrupación aclararía la situación y le dijo a Víctor G. que las FARC ya había enviado una comisión a la frontera colombo-venezolana para generar un informe sobre lo ocurrido, el cual estaría listo entre 30 y 60 días. Le expresó, además, que, si se llegaba a comprobar que ellos eran los autores del crimen, los responsables serían castigados según el reglamento interno de su organización.

Por supuesto, el comisionado no podía aceptar un plazo tan largo para esclarecer un hecho tan delicado, y así se lo dijo al vocero de las FARC. No sólo el Gobierno colombiano, sino los Estados Unidos y la comunidad internacional, necesitábamos una respuesta contundente y cierta en términos de horas, no de semanas. Tampoco podía mostrarse de acuerdo en que el mismo grupo guerrillero juzgara a los eventuales responsables, pues éstos debían ser entregados a las autoridades legítimamente constituidas para ser juzgados dentro del marco del Estado de Derecho. Reyes accedió a producir una declaración en un término de 72 horas, pero se mostró inamovible en el tema del juzgamiento de sus hombres por la misma guerrilla.

De alguna forma, así respondían las FARC al gobierno de Clinton que el mismo 5 de marzo había producido un duro comunicado sindicándolas del triple asesinato y sugiriendo la posibilidad de pedir en extradición a los responsables del crimen. Éstas fueron las palabras del comunicado leído por Lee McClenny, vocero del Departamento de Estado:

"Condenamos a las FARC en los términos más fuertes posibles por este bárbaro acto terrorista. [...] También demandamos que las FARC acepten su responsabilidad por este asesinato a sangre fría y entregue a aquellos de sus miembros que perpetraron este crimen para que sean juzgados por las cortes".

En la tarde del 7 de marzo, una vez de regreso a Bogotá, Víctor G. me informó de la respuesta de las FARC, que el país no conocía, porque hasta ese momento el grupo guerrillero había guardado total silencio. Horas más tarde, Raúl Reyes anunció públicamente que iniciarían una investigación interna, en tanto nosotros expedimos un comunicado exigiendo el pleno esclarecimiento de los hechos, sin mencionar todavía a las FARC en forma expresa, a pesar de que diferentes sectores de la opinión, comenzando por los mismos Estados Unidos, ya los culpaban.

A pesar de las fundadas sospechas, nuestra obligación era ser cautelosos, en tanto esperábamos que Raúl Reyes cumpliera su palabra de investigar e informar la verdad sobre lo que había pasado. Ésta sería una prueba para determinar la seriedad con que ellos estaban tomando el asunto y el mismo proceso de paz.

"ES UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA"

En los días siguientes, Víctor G. trató de comunicarse por radioteléfono con Reyes pero las interferencias eran constantes. Finalmente, el 10 de marzo, cuando se cumplía el plazo de las 72 horas, pudo establecer contacto en una precaria comunicación, con mucho ruido, por lo que no entendió prácticamente nada de las cruciales palabras que Reyes le decía:

—Bueno, le digo que lo primero es ofrecer nuestras disculpas al señor presidente de la República, al alto comisionado y a todas las personas que han tenido mucha altura para pedir y esperar nuestro pronunciamiento.

Hecha esta introducción, que Víctor G. no entendió, Reyes le leyó un comunicado del Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, que estaba firmado por Jorge Briceño, alias *Mono Jojoy*, en el que éstas reconocían que los tres indigenistas habían sido capturados y ajusticiados por un grupo de guerrilleros del Frente 10, bajo la dirección del Comandante Gildardo, alias *El Marrano*, *"sin consultar a los organismos superiores de dirección"*.

Decía, además, el texto que no entregarían a sus combatientes a ningún Estado, en clara alusión a la petición de los Estados Unidos. *"Al Comandante Gildardo lo juzgamos y sancionamos de acuerdo a las leyes de las FARC-EP, consagradas en el reglamento de régimen disciplinario de la organización guerrillera"*.

Se trataba, sin duda, de un comunicado trascendental, pero el comisionado no pudo entender casi nada, debido a la pésima comunicación. Entonces le dijo a Reyes:

—Oiga, hágame un favor. ¿Por qué no me resume un poco? Es que definitivamente no se oye bien.

Reyes volvió a leer el comunicado, sin que Víctor G. entendiera mayor cosa. Pocos minutos después del infructuoso intento, y sin conocer todavía nada sobre el mismo, yo recibí en mi despacho una llamada urgente del general Serrano, director general de la Policía, quien me informó que la inteligencia de esa entidad había interceptado una charla entre Raúl Reyes y un "periodista", en la que las FARC reconocían la autoría del crimen de los indigenistas e informaban que el culpable sería juzgado y sancionado según las normas de la organización guerrillera. El general me hizo llegar la transcripción completa de la conversación, al final de la cual se leía la siguiente nota: *"Repiten el comunicado y se pierden. El NN2, que es un periodista, no escucha"*.

Cuando le mostré a Víctor G. el texto completo de la conversación descubrió, para su sorpresa, que el supuesto periodista del que hablaban los cuerpos de inteligencia era él mismo. Sólo entonces, leyendo la transcripción enviada por Serrano, pudo enterarse de la magnitud de las palabras que Reyes le había leído por radio-teléfono.

La situación planteada por el crimen cometido por las FARC resultaba de una absoluta gravedad para el proceso. Si bien era importante que la guerrilla hubiera reconocido su autoría, dicha confesión produjo una reacción inmediata de rechazo por parte de los diferentes sectores colombianos, de Estados Unidos y de la comunidad internacional, pues nadie entendía cómo un grupo guerrillero que estaba en conversaciones de paz con el Gobierno hubiera asesinado a tres indefensos indigenistas que nada tenían que ver con el conflicto.

Cuando el 25 de marzo, dos semanas después del comunicado de las FARC, el embajador estadounidense Curtis Kamman habló a los medios, comprendimos que no habría manera alguna de que Estados Unidos parti-

cupara en el proceso de paz en la forma directa en que lo hubiéramos querido. Sostuvo, con toda contundencia, que no habría nuevos contactos con las FARC —refiriéndose a las conversaciones en Costa Rica— hasta que no se hiciera justicia sobre los autores del crimen.

Dicho objetivo jamás se logró, pues las FARC se mantuvieron en su negativa de entregar a los supuestos responsables, con el agravante de que los indicios de inteligencia indicaban que, más allá de la responsabilidad material de Gildardo y sus hombres, la orden de ejecución había provenido de alias Grannobles, nada menos que el hermano del Mono Jojoy.

Eso sí, Raúl Reyes salió a los medios de comunicación y ofreció *"disculpas a todos los pueblos del mundo"*. Que yo recuerde, es la única vez en que las FARC han aceptado públicamente la autoría de un delito atroz y ofrecido disculpas por ello, un gesto que demostraba la importancia que le concedían a la participación de Estados Unidos en el proceso. Sin embargo, era un paso insuficiente frente al tamaño del crimen cometido.

En Washington el ambiente en torno al proceso de paz en Colombia se enrareció y se revivieron los debates en el Congreso norteamericano sobre las conversaciones de Costa Rica. Varios congresistas volvieron a condenar el hecho de que un miembro del Departamento de Estado, con la aquiescencia de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, se hubiese reunido con quienes *"mataban a ciudadanos estadounidenses"*.

Por su parte, la Casa Blanca, a través de su vocero, expidió una dura declaración:

"La manipulación cínica de las FARC al proceso de paz debe terminar inmediatamente. La culpa de la falla en las conversaciones de paz cae sobre sus líderes Manuel Marulanda y Jorge Briceño. Ellos son los responsables de este paso atrás [...]. Esta es una organización que es responsable del secuestro y asesinato de ciudadanos americanos. Es una organización terrorista [...]".

Los términos no podían ser más claros. El caso de los indigenistas fue el "florero de Llorente" que rompió toda posibilidad de participación directa de los Estados Unidos en el proceso. Lo que lograron las FARC con este crimen fue marginar a un crucial actor internacional y obtener, por primera vez, el tratamiento de terroristas por parte de su gobierno. Desde entonces, Estados Unidos se limitó a respaldar de manera general los esfuerzos en la búsqueda de la paz, condicionando cualquier nuevo involucramiento a que las FARC entregaran a los culpables, posición que aún sigue manteniendo.

Un ejemplo de lo que fue, a partir de ese momento, la actitud constante de los Estados Unidos lo encontramos en la declaración que produjo el 20 de mayo de 1999 a raíz del inicio de la etapa de negociaciones con la guerrilla. En ella se mantenía un respaldo nominal al proceso, diciendo que *"las negociaciones exitosas de paz son la mejor manera de avanzar en nuestras metas comunes"*, pero luego se volvía al reclamo de siempre:

"Así como apoyamos estos esfuerzos por la paz, mantenemos la determinación de que los ciudadanos americanos que han sido retenidos en Colombia sean liberados, y de que aquellos responsables por el asesinato de los americanos sean puestos a la orden de la justicia, incluyendo a los integrantes de las FARC responsables por los asesinatos, el primero [sic] de marzo, de Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheena Gay.

"Reiteramos nuestro llamado a las FARC para que continúen respondiendo por la desaparición de los misioneros de las Nuevas Tribus, Dave Mankins, Mark Rich y Rick Tenenoff, quienes fueron secuestrados hace más de seis años".

Así pues, todo apoyo al proceso de paz, en adelante, se limitó a declaraciones como éstas, siempre seguidas por las mismas justas peticiones. Hoy, con el paso del tiempo, estoy convencido de que si no se hubiese filtrado la reunión de Costa Rica y si las FARC no hubieran asesinado a los indigenistas, la participación de los Estados Unidos en el proceso hubiera sido distinta y completamente positiva.

¿EL MÁXIMO REPRESENTANTE DEL CAPITALISMO EN MEDIO DE LA GUERRILLA?

La decisión del gobierno de Estados Unidos de marginarse de las negociaciones de paz en Colombia, por demás entendible, fue una baja significativa en nuestro objetivo de lograr el mayor apoyo internacional al proceso. Sin embargo, nuestra estrategia incluía también al Congreso de ese país y a sus líderes empresariales, y seguimos trabajando con ellos, invitándolos a conocer, en forma directa, la realidad de nuestro país y, especialmente, el proceso de paz. Se trataba de generar, en el caso de los congresistas, una política bipartidista frente a la paz de Colombia, y de lograr que los dirigentes políticos y económicos entendieran la complejidad del conflicto y respaldaran proyectos de inversión que llegaran a la aprobación del Congreso. Estas actividades mantendrían, simultáneamente, el "momento" político en Estados Unidos para facilitar un retorno activo de su gobierno al proceso, una vez se volvieran a dar las condiciones.

Siguiendo esta idea, invitamos, a través de nuestro embajador en Washington, a un grupo de parlamentarios norteamericanos para que visitaran la Zona de Distensión, viaje que se concretó el 4 de junio de 1999. Ese día arribó a San Vicente del Caguán una delegación de ocho congresistas, tanto demócratas como republicanos, encabezada por el representante demócrata William Deleahunt, además del embajador Robert White, presidente del Centro para la Política Internacional, y se reunieron con los voceros de las FARC, Raúl Reyes y Joaquín Gómez. En una conversación abierta, abordaron temas sensibles como el narcotráfico, los programas de sustitución de cultivos y el proceso de paz, y reclamaron enérgicamente, como era de suponerse, que se hiciera justicia frente al crimen de los indige-

nistas. En este punto, las FARC les aseguraron que ya habían comisionado a un consejo de guerra para adelantar la investigación interna por este hecho, anuncio que los congresistas recibieron con escepticismo.

Pero no fueron sólo políticos. En reuniones que sostuve en Washington y Nueva York, en mayo de 1999, con el *staff* de la Bolsa de Nueva York y algunos de los empresarios más importantes de Estados Unidos, posibles inversionistas en el país, a las que me acompañaron el canciller Fernández de Soto, el embajador Moreno y el alto comisionado Víctor G. Ricardo, los invité a Colombia, para que visitaran la Zona de Distensión y tuvieran una percepción directa del proceso de paz que se adelantaba en ella. Incluso, hice esta invitación al presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, para que nos ayudara a explicarles a las FARC *"cómo funciona el mundo"*.

"¿El representante del capitalismo en medio de los guerrilleros de las FARC?", exclamaron algunos, como si se tratara de una fantasía irrealizable. Yo mismo entendía que se trataba de una propuesta insólita, pero también sabía que era una oportunidad única para que el símbolo del capitalismo mundial dialogara con la guerrilla más antigua de América Latina, que se había quedado anclada en ideologías ya superadas a nivel global, sobre su visión del proceso de paz, la importancia de alcanzar este objetivo nacional y la incidencia que podría tener esto en el desarrollo de Colombia y de toda la región andina.

Al regresar al país, di instrucciones al embajador Moreno de que le siguiera la pista a ese posible viaje de Grasso, porque estaba seguro de que, dada la trascendencia del personaje en la economía mundial, sería un importante espaldarazo para el país y el proceso. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando recibimos unos días después su respuesta afirmativa!

Fue así como el 26 de junio de 1999 la delegación de la Bolsa de Nueva York, que incluía no sólo a su presidente sino también a los vicepresidentes de Relaciones Internacionales y de Seguridad y Protección, Alain Yves Morvan y James Esposito, llegó a La Machaca, jurisdicción de San Vicente del Caguán, acompañada por el entonces ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, y el comisionado para la Paz. En medio de la selva del Caguán, los experimentados financistas norteamericanos y los líderes guerrilleros, encabezados por Manuel Marulanda, hablaron franca y extensamente acerca de la necesidad de conocer los diferentes modelos de economías exitosas del mundo y su posibilidad de aplicación en países del tercer mundo, teniendo en cuenta las circunstancias y características de cada nación. Se trataba de abrir un poco las mentes de los guerrilleros, encerrados en sus doctrinas económicas y políticas de décadas atrás, a las nuevas corrientes de la economía mundial que no tienen por qué reñir con los objetivos del desarrollo sostenible y la justicia social. Incluso Grasso llegó a invitar a Marulanda para que visitara la Bolsa una vez se firmara la paz en Colombia.

Otra reunión muy importante entre personajes norteamericanos y líderes de las FARC fue la que tuvo lugar, en marzo de 2000, con Jim Kimsey, fundador y presidente emérito de una de las empresas más importantes del mundo, pionera en el campo de los negocios por Internet, *America Online* —AOL—, y Joe Robert, fundador y presidente del imperio de bienes raíces *J. E. Robert Companies*.

“¿Qué podemos hacer por ti?”, me habían dicho al término de una reunión en Washington, y no dudé en invitarlos al Caguán para que comprobaran que la paz la estábamos tomando muy en serio y que necesitábamos más inversión extranjera y el respaldo de empresas con reconocimiento internacional como las que representaban. Ellos aceptaron de inmediato, pensando que era “una magnífica oportunidad para apoyar la paz en Colombia”.

Los dos empresarios hablaron por largas horas con Marulanda y con Raúl Reyes, en compañía de Víctor G. Al finalizar el encuentro, Kimsey manifestó que encontró sinceros los descos del jefe guerrillero por alcanzar la paz y que, a su parecer, él entendía que la inversión extranjera era indispensable para la prosperidad y estaba dispuesto a negociar y discutir posibles soluciones que llevaran a Colombia, finalmente, a las dinámicas del siglo XXI. Incluso terminaron intercambiando gorras: mientras Marulanda le dio a Kimsey una gorra camuflada, éste le dio una de su compañía con el logo de AOL. La fotografía del millonario y exitoso Jim Kimsey dándose la mano con Tirofijo, el símbolo de la guerrilla colombiana, cada uno con la gorra del otro, dio la vuelta al mundo.

Al finalizar el encuentro, Kimsey le propuso a Raúl Reyes que intercambiaran sus direcciones electrónicas para cualquier comunicación posterior. Como dato curioso, el famoso empresario de la tecnología en Internet abrió su computador portátil y quiso mostrarle al guerrillero como acceder a su página, pero —paradojas del Caguán— ¡no pudo ni siquiera abrir su propio e-mail!

Los dos empresarios comentaron luego a la prensa que el pesado viaje por una carretera polvorienta y sin pavimentar ciertamente había valido la pena.

Todos estos encuentros generaron una dinámica diferente en el proceso de paz que, sabíamos, debíamos aprovechar. Por eso, seguimos trabajando no sólo para que se realizaran más diálogos de líderes internacionales con las FARC en la Zona de Distensión, sino también para que la comunidad internacional nos apoyara con hechos concretos que representaran desarrollo social en las zonas más afectadas por el conflicto, hechos que ya tenían un nombre propio: el Plan Colombia.

CAPÍTULO XVIII

“¡Se salva el proceso o se muere en mis manos!”

El crimen de los indigenistas y el marginamiento consiguiente de los Estados Unidos del proceso de paz no hicieron sino ahondar una crisis que ya se vivía por causa del congelamiento decretado unilateralmente por las FARC el 19 de enero. Habían pasado más de tres meses desde entonces y, aunque el alto comisionado, Víctor G. Ricardo, y los voceros del Gobierno y de la guerrilla habían continuado avanzando con reuniones informales en la elaboración de la posible agenda de negociación, lo cierto es que la opinión pública, ante la falta de resultados concretos, se mostraba cada vez más incrédula sobre su desarrollo.

Las FARC insistían en denunciar la falta de resultados del Estado en la lucha contra el paramilitarismo, algo que refutábamos con cifras y datos contundentes que daban fe de la forma en que se estaba combatiendo a los grupos de autodefensa, al igual que combatíamos a la guerrilla fuera de la Zona de Distensión.

Lo más grave de esto es que se acercaba la fecha límite del 7 de mayo, cuando vencería la vigencia de la Zona. Era una fecha que marcaba, además, el fin del plazo acordado en el cronograma 90-90-90 para determinar si el diálogo había dado frutos y se podía comenzar en firme la etapa de negociación, una instancia a la cual jamás habían llegado las FARC y el Estado colombiano en un proceso de paz.

Con los diálogos oficialmente congelados, la confrontación armada en el nivel de siempre y sin ningún avance concreto que mostrar al país, resultaba urgente dar pasos audaces para destrabar el proceso, que prácticamente se encontraba en un punto muerto.

LA PAZ: UNA POLÍTICA DE ESTADO

Entendiendo la necesidad de convocar a la sociedad alrededor del proceso de paz, convirtiéndolo en una política de Estado y no sólo de gobierno, que trascendiera las fronteras partidistas e ideológicas, me había reunido el

18 de febrero, en el Palacio de Nariño —acompañado por el comisionado, el canciller Guillermo Fernández de Soto y el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez—, con los excandidatos a la Presidencia, Horacio Serpa y Noemí Sanín, los representantes de los principales partidos y movimientos políticos, los representantes de los gremios económicos y de las centrales de trabajadores, y los presidentes y vicepresidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

En dicha oportunidad les hice entrega a los asistentes de un documento al que denominé "Acuerdo Nacional por la Paz y contra la Violencia", en el que plasmaba los principales componentes de la política de paz que les invitaba a rodear, incluyendo temas como el mismo proceso de diálogo y negociación, la inversión social en las zonas de conflicto, los derechos humanos, la humanización del conflicto armado, la lucha contra el problema mundial de las drogas y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Como resultado de esta reunión, los representantes de cada una de las fuerzas y organizaciones asistentes expidieron declaraciones en las que señalaron que había un consenso sobre la construcción de un proceso de reconciliación sobre principios tales como la búsqueda de la paz a través del diálogo y la negociación, la importancia del apoyo de la comunidad internacional y la necesidad de adelántarlo con estricta sujeción a los mandatos del Estado de Derecho.

Una semana después, el 24 de marzo, celebré una reunión con el Consejo Nacional de Paz, un órgano asesor de origen legal con una amplia participación de la sociedad civil, incluidos representantes del sector privado, de los trabajadores, de las regiones, de las iglesias y de las minorías, entre otros, completando así el consenso social que el proceso requería para fortalecerse y seguir adelante.

Posteriormente, el 16 de abril —y aún en medio del congelamiento—, se llevó a cabo en la Zona de Distensión una de las reuniones más significativas dentro del proceso, como lo fue el encuentro de los gremios económicos del país con la Mesa de Diálogo, incluido Manuel Marulanda. Allí estuvieron, exponiendo sus puntos de vista y escuchando los de la guerrilla, los representantes de los más importantes gremios industriales y empresariales, como la ANDI, Fedemetal, Fenalco, Fedegán y Confecámaras, entre otros varios.

Todos estos encuentros y consensos sirvieron de precedente para que invitáramos también al Caguán a los líderes de las diversas fuerzas políticas del país para que dialogaran abiertamente con los jefes de las FARC y ratificaran su apoyo al proceso, como un verdadero propósito nacional.

La convocatoria fue ampliamente respaldada y el 28 de abril de 1999 se reunieron en el corregimiento de Caquetania el comisionado, Víctor G. Ricardo; Manuel Marulanda y los tres voceros de la guerrilla, Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, con los principales dirigentes políticos del país, a saber, el ex candidato Horacio Serpa, por el Partido Liberal; el

senador Ómar Yepes, presidente del Partido Conservador; la ex candidata Noemí Sanín, por el Movimiento Sí Colombia; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista; Fabio Valencia Cossio, presidente del Senado de la República, y Emilio Martínez, presidente de la Cámara de Representantes.

Como resultado de esta reunión, todos los participantes firmaron el llamado "Acuerdo Político de Caquetania", por medio del cual convinieron *"respaldar y comprometerse en la política de Estado para la paz fundamentada en la política social y basada en la solución política del conflicto; respaldar la política de Estado en su lucha frontal contra el paramilitarismo; buscar mecanismos que permitan respuestas inmediatas y concretas a las necesidades que sufre el pueblo colombiano [...], y trabajar para buscar mecanismos que permitieran crear una pedagogía que tenga como finalidad el compromiso de todos los colombianos en el objetivo supremo de la paz"*.

Esta reunión y el documento resultante de la misma tuvieron una especial trascendencia porque significaron el respaldo unánime de las fuerzas políticas de todas las tendencias —incluyendo aquellas personas, partidos y movimientos que me confrontaron durante la campaña— al proceso. Fueron, además, el antecedente del Frente Común por la Paz y contra la Violencia, que se constituiría casi año y medio después, en noviembre de 2000.

Actos como éstos demostraban que Colombia entera, y no sólo el Gobierno, estaba comprometida con la búsqueda de la paz. Dicho en otras palabras: el proceso se consolidaba como una política de Estado.

LA RESURRECCIÓN DE UN PROCESO MORIBUNDO

A pesar de este avance, la guerrilla siguió insistiendo en el tema de los paramilitares y se negaba a descongelar oficialmente los diálogos. Estando a poquísimos días de la fecha límite, lo que yo veía era que, si no hacíamos algo contundente, no tendría argumentos para prorrogar la Zona y, por consiguiente, el proceso moriría apenas en sus inicios.

Pensando en esto llamé a Víctor G. y le notifiqué mi decisión de reunirme nuevamente con Marulanda para destrabar el proceso o para terminarlo.

—Mire, Víctor —le dije—, la cosa es muy sencilla: si Andrés Pastrana y Manuel Marulanda iniciamos este proceso, somos nosotros mismos quienes tenemos que hacerlo continuar o acabarlo de una vez por todas. Hable con Reyes y dígame que quiero ir a ver a Marulanda.

—Puede ser una buena idea, presidente —repuso Víctor G.—, pero lo veo difícil. Si bien hemos avanzado en la definición de la agenda, estos tipos están cerrados en cuanto al tema paramilitar.

—No me importa —insistí—. Eso lo hablamos allá y lo decidimos allá, pero yo tengo muy claro cuál es mi responsabilidad. ¡O se salva el proceso o se muere en mis manos!

Víctor G. estuvo de acuerdo en que era lo único que quedaba por hacer, así que nos fuimos a su oficina para que intentara hablar por radioteléfono con Raúl Reyes. Al final logró comunicarse, utilizando una serie de claves y contraseñas que tenían acordadas con la guerrilla para evitar filtraciones, y le hizo la propuesta a Reyes, quien quedó de consultarla con su jefe.

Las FARC aceptaron la reunión para el 2 de mayo y, al igual que sucedió con la anterior, insistieron en que necesitaban tiempo para prepararla bien y, sobre todo, según instruí Marulanda, *"para recibir como corresponde al presidente de la República"*, poniendo en marcha una estrategia de seguridad para mi "protección". Es importante recalcar que ésta sería mi primera reunión con el jefe guerrillero en mi calidad de presidente de la República en ejercicio, habida cuenta su incumplimiento de la cita pública del 7 de enero. Yo sólo me había reunido con él una vez, cuando ya estaba electo, pero sin haberme posesionado.

No faltó quién dijera luego que el hecho de que un presidente se reuniera con el máximo líder de la guerrilla resultaba inconveniente pues podría equivaler al reconocimiento de un estatus de beligerancia para la organización ilegal. Nada más lejos de la realidad. Primero, porque dicho estatus, de acuerdo con la normatividad internacional, implica el cumplimiento de muchos más requisitos que una simple reunión y, segundo, porque un encuentro de esta naturaleza no era otra cosa que una manera de afrontar directa y personalmente los riesgos de la paz, o, como dice el refrán popular, de "tomar el toro por los cuernos". Hablar con el enemigo no es legitimarlo, ni conferirle un estatus especial. Es, simplemente, un gesto necesario, una audacia calculada, para buscar la paz.

Decidimos, como la vez pasada, realizar los preparativos y el viaje con el mayor sigilo posible, para evitar filtraciones e interferencias de los medios de comunicación. En un principio, sólo tuvimos conocimiento del tema Víctor G., el canciller Guillermo Fernández de Soto y yo.

El 1º. de mayo, Día Internacional del Trabajo, como es ya una tradición, había manifestaciones sindicales en todo el país, incluyendo la Plaza de Bolívar, y yo permanecí en la Casa de Nariño, atento a lo que pudiera suceder y a los reportes de orden público. En las horas de la noche me reuní en la casa privada del palacio presidencial con el comisionado, el canciller y Camilo Gómez, mi secretario privado, y, como siempre, preparamos con mucho cuidado la reunión, previendo distintos escenarios y argumentos, y determinando claramente cuáles eran las metas por lograr.

Llegamos al convencimiento de que había que destrabar el proceso pero que también había que insistir en la necesidad de abrirlo a la comunidad internacional, como garante y facilitadora del mismo. No era un tema nuevo, pues yo siempre había planteado la conveniencia de contar con la participación y veeduría de miembros de la comunidad internacional, a lo que las FARC siempre se habían negado, argumentando que la presencia internacio-

nal era necesaria para la verificación de los acuerdos pero no todavía en la etapa de diálogo o negociación.

Sin embargo, nosotros considerábamos urgente la vinculación del mundo en estas primeras etapas, particularmente por las sombras y rumores que venían extendiéndose sobre el mal uso que podría darle la guerrilla a la Zona de Distensión. Sólo una comisión internacional estaría en capacidad de dotar de transparencia este proceso y aclarar las dudas sobre la Zona. Fue así como decidí plantearle esta exigencia a Marulanda, como en efecto lo hice, con el siguiente argumento irrefutable: *"Mire, Manuel, yo no sé si usted y yo vamos a lograr hacer la paz, pero la mejor garantía que usted tiene de que, si nosotros no la alcanzamos, el que me suceda continúe con estos esfuerzos, es la presencia de la comunidad internacional"*.

Este tema habría de ser una discusión larga con la guerrilla, que en la fase final del proceso terminó aceptando plenamente el involucramiento de la comunidad internacional. Un proceso de diálogo y negociación implica un avance paulatino sobre los asuntos polémicos, en una mezcla de persistencia y argumentación. Fue así como, en ésta y otras materias, logramos, en el curso de meses o de años, que la guerrilla modificara posiciones en las que al principio se mostraba completamente intransigente.

Otro aspecto sobre el que siempre me preocupé era el de la legalidad de todo lo que hiciéramos en la búsqueda de la paz. Por eso mismo, había dado instrucciones para revisar todos los aspectos legales de mi viaje, pues una cosa era viajar como presidente electo y otra muy distinta hacerlo como presidente en ejercicio.

Como resultado de este análisis, se expidió una nueva resolución, la No. 27 del 1º. de mayo de 1999, que complementaba la Resolución 85 de 1998, dejando claro que los efectos de suspensión de órdenes de captura, que ya se aplicaban a los voceros de las FARC para las negociaciones, se extendían *"a todos los miembros de las FARC-EP que participen en la reunión de trabajo que se llevará a cabo con funcionarios del Gobierno el día 2 de mayo, dentro de la denominada Zona de Distensión"*.

La reunión preparatoria terminó hacia la 1 de la madrugada, hora en que nos fuimos a descansar, quedando todos citados para encontrarnos de nuevo en Palacio a las 6 y 30 de la mañana para desayunar y salir hacia la Zona. Le pedí al mayor Royne Chaves, mi jefe de Seguridad, que nos acompañara y que dispusiera lo que fuera necesario para que nuestro viaje pasara inadvertido. También decidí que se nos uniera Camilo Gómez, a quien no le confirmé que viajaría con nosotros sino hasta la misma mañana del viaje. Como dato curioso, ésta iba a ser la primera oportunidad en que Camilo se encontraría con miembros del grupo guerrillero, sin sospechar entonces cuántas incontables veces tendría que volver a hacerlo en los meses y años posteriores, primero como negociador y luego como alto comisionado para la Paz.

Le pedí al canciller que se quedara en Palacio, atento a cualquier situación que se pudiera presentar y le dije a Camilo que llevara su teléfono satelital para así poder estar en comunicación permanente con Bogotá en caso de que algo se presentara. Desde el día anterior había citado muy temprano al ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y al ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, para informarles sobre el viaje. Después del desayuno, bajé a mi despacho en compañía de Guillermo Fernández de Soto y les conté lo que iba a hacer durante el día. Como es natural, los ministros se sorprendieron e incluso expresaron su preocupación, pero respetaron mi decisión. Les pedí absoluta reserva y les solicité que estuvieran muy atentos durante todo el día por si ocurría algo delicado.

Víctor G. había organizado las cosas de tal forma que en una avioneta viajara el equipo de prensa de la Presidencia, la cual debía llegar al lugar de la reunión antes que nosotros, y en otra viajáramos los dos con Camilo Gómez y el mayor Chaves.

A las 7 y 30 de la mañana salimos de Palacio. Toda la caravana presidencial se dirigió hacia el Aeropuerto Eldorado y en un momento dado mi vehículo se desvió hacia los hangares de la empresa Río Sur, donde nos esperaba nuestra aeronave con los motores encendidos. Despegamos de inmediato, sin avisar a la torre de control que yo iba en el avión, e informamos inicialmente que nuestro destino era la cabecera municipal de San Vicente del Caguán. Sin embargo, en mitad del vuelo cambiamos el rumbo y le notificamos a la torre de control que íbamos a continuar hacia una pista un poco más adelante de San Vicente, que no era otra que la de Caquetania, la misma donde habíamos aterrizado en aquella primera cita histórica del 9 de julio de 1998.

La pista estaba en muy malas condiciones porque había llovido torrencialmente la noche anterior, por lo que el aterrizaje resultó otra vez tortuoso, tanto que al final se enterraron las llantas de la avioneta en el lodo y nos tocó bajarnos a todos, en compañía del copiloto, a empujarla y desenterrarla, tarea de la que quedó un oportuno registro fotográfico.

Cuando nos bajamos, nos vimos completamente rodeados por un buen número de guerrilleros vestidos de uniforme camuflado. Otra vez, pensé, estábamos en sus manos, revestidos únicamente del poder de la confianza y de la convicción de que teníamos que hacer todos los esfuerzos necesarios por la paz. En la cabecera nos estaban esperando Manuel Marulanda, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Iván Ríos y otros guerrilleros que los acompañaban y que eran los encargados de filmar y de grabar la reunión.

Tirofijo fue otra vez afectuoso en su recepción y yo le correspondí, sin descuidar nunca la distancia que debía mantener como presidente de la República. Eran cerca de las 9 y 30 de la mañana. A eso de las 10, nos sentamos en una mesa al lado de la pista bajo una pequeña carpa. La mesa, como

era usual, era de plástico al igual que los asientos. Nos ofrecieron café y gaseosa y, como la guerrilla desayuna muy temprano, comenzaron a disponer todo para el almuerzo.

Una simpática anécdota le sucedió a Camilo cuando se sentó a la mesa y encontró frente a su silla una libreta que pensó que le habían dejado para tomar apuntes. Para su sorpresa, cuando la abrió, encontró que estaba escrita y escuchó una voz enfadada detrás de él:

—Oiga, ¿qué hace con mis papeles?

El que lo interpelaba era nada menos que el Mono Jojoy, el temido jefe militar de las FARC, a quien Camilo veía por primera vez. Por supuesto, le entregó su libreta sin chistar palabra.

Al comienzo de la conversación, como siempre para romper el hielo, hablamos sobre algunos temas intrascendentes hasta que yo le propuse a Marulanda que le diéramos la palabra a Víctor G. y a Raúl Reyes, como cabezas de los dos equipos participantes en el diálogo, para que nos hicieran un resumen sobre el estado en que se encontraba el proceso y los avances que se habían logrado en las reuniones informales.

El primero en hablar fue Víctor G., quien dijo que la definición de la agenda estaba avanzada en cerca de un 90% y que sobre el 10% restante se podía llegar a un acuerdo en los próximos cinco días, antes del vencimiento de la Zona, sin ningún problema. Afirmó, además, que el proceso, a pesar de su congelamiento, estaba muy adelantado y que estaban dadas las condiciones para descongelarlo. Raúl Reyes, por su parte, también hizo una evaluación del proceso y coincidió con Víctor G. en que se había adelantado mucho en la agenda y que quedaban pocas cosas por discutir, pero no estuvo de acuerdo en que se pudiera evacuar lo que faltaba en un término de días. Según él, se necesitaría un tiempo adicional, más allá del 7 de mayo, para poder llegar a concretar una agenda de negociación. Por supuesto, la guerrilla siempre quiere comprar tiempo y dilatar los procesos, y ésta no era la excepción.

Terminadas las exposiciones, tomé la palabra y le dije directamente a Manuel Marulanda que los dos teníamos una responsabilidad muy importante en el proceso y que por eso había querido venir hasta las selvas del Caguán para dialogar con él; que él y yo habíamos comenzado este proceso y que sólo de nosotros dependía que continuara o se terminara. Le insistí respecto al hecho de que estábamos tan sólo a unos días del vencimiento de la Zona de Distensión y que el país no entendería que yo firmara una nueva prórroga si el proceso continuaba congelado por parte de ellos.

Mientras yo hablaba, algunos guerrilleros, como siempre, filmaban y grababan hasta el más ínfimo detalle, lo cual, por supuesto, restringía la espontaneidad que debe primar en una reunión como ésta. Le dije a Víctor G. que les pidiera que dejaran de grabar, lo cual acabaron haciendo a regañadientes, por indicación del mismo Marulanda.

Retomando el tema, me referí a las noticias que se publicaban en algunos medios de comunicación sobre las presuntas violaciones que se venían dando al interior de la Zona de Distensión, como la presencia de guerrilleros uniformados en los cascos urbanos o la posible utilización del área desmilitarizada para mantener a personas secuestradas. Le dije que en el país había una gran desconfianza por lo que estaba pasando allí; le reiteré que la Zona de Distensión había sido creada para garantizar el diálogo y para nada más, y propuse, por lo tanto, que creáramos una comisión que se encargara de tratar los temas relacionados con los inconvenientes que se presentaran sobre la Zona y el cumplimiento de lo pactado. Marulanda repuso que para eso estaba la mesa de diálogo y que cualquier inconveniente que se presentara se debía tratar ahí y no por fuera. Sin embargo le dije: *"No, eso crea problemas en la mesa. Hay que crear una comisión por fuera de ella para resolverlos y así no paralizarla con otros asuntos"*.

En este punto de la discusión, poco antes del mediodía, ellos nos invitaron a almorzar. Como anécdota, antes de hacerlo le pregunté a Manuel Marulanda dónde podía ir al baño y él me respondió: *"Presidente, la selva es toda suya"*. Entonces me fui a buscar un matorral y camino a él me encontré con un guerrillero joven que venía cargando dos baldes de agua. Nos encontramos cara a cara, me miró muy sorprendido y me dijo:

—Presidente, Dios quiera que ustedes dos puedan hacer la paz para el bien de todos los colombianos.

Él siguió su camino y yo me quedé reflexionando en sus palabras. Ese guerrillerito, como cualquier otro joven del país, quería también tener un futuro y compartía con sus compatriotas una ilusión común: la de poder vivir en paz.

Ese día almorzamos dos veces: una, el almuerzo preparado por la guerrilla, que fue gallina, y como a las dos horas un *rodizzio* de carne que preparó nuestro piloto brasileño, Luis Stein, quien era experto en este plato, con una carne que nosotros mismos habíamos llevado. Cuando trajeron el *rodizzio*, Marulanda lo miró con provocación pero se abstuvo de probarlo. Yo le pregunté el motivo y él me respondió que su médico le tenía prohibida la carne. Sin embargo, siempre me quedó la duda acerca de si la única razón era la restricción médica o si tal vez Marulanda tenía desconfianza de la comida que nosotros le dábamos. Lo cierto es que los únicos alimentos que comía con tranquilidad eran aquellos que le preparaba Sandra, su compañera.

Durante el primer almuerzo no tocamos ningún tema de importancia. A eso de las 12 y 30, reiniciamos la conversación. Marulanda comenzó a hablar del desempleo y de los problemas sociales. Llegamos al tema de las obras públicas y él nos contó su historia de cuando había trabajado como inspector de carreteras en la Secretaría de Obras Públicas del Huila. Yo le hablé entonces sobre el programa que estábamos desarrollando desde el Ministerio de Transporte que habíamos denominado inicialmente "Pico y

Pala", y que luego se llamó "Manos a la Obra", cuya filosofía era contratar la mayor cantidad de mano de obra de las mismas regiones beneficiadas en aquellos proyectos que no necesitaran maquinaria pesada. A Marulanda, que siempre fue afecto al tema de las obras públicas, le gustó mucho este proyecto por el empleo que generaba en las zonas rurales.

Adicionalmente, le comenté sobre otros programas de carácter social en los cuales estaba comprometido mi gobierno, especialmente el que tenía que ver con la vivienda de interés social. Mientras hablábamos, percibí claramente que lo que ellos querían en la agenda era asumir un liderazgo en todos los temas sociales pues eso les generaría una opinión positiva en el pueblo colombiano, especialmente si intervenían en el tema del desempleo.

Después tocamos el tema del paramilitarismo en el que yo hice una defensa de todo lo que se había hecho durante mi gobierno. También les reclamé por el asesinato de los indigenistas norteamericanos, el ataque continuo a las poblaciones y las denuncias que se venían presentando sobre la comisión de delitos por parte de la guerrilla en la Zona de Distensión, diciéndoles que todos estos actos constituían graves violaciones de los acuerdos y le quitaban posibilidades al proceso de paz.

—Lo que están haciendo es poniéndome contra la pared y cerrándome todo el espacio político. Frente a mi generosidad y la del pueblo colombiano, ¡lo único que recibimos de parte de ustedes es violencia y más violencia!

A eso de las 2 y 30 de la tarde yo estaba muy preocupado porque el tiempo corría y no avanzábamos en la parte clave de nuestro objetivo, que era el descongelamiento del diálogo y el compromiso de iniciar negociaciones sobre una agenda consensuada. Me preocupé aún más cuando comencé a notar que el cielo se oscurecía, amenazando con una de esas terribles tormentas tropicales que suelen caer sobre los Llanos en esa época del año. En tal caso tendríamos que acabar la reunión sin resultados, para poder despegar sanos y salvos antes de que se desatara el aguacero. A mi lado estaba el Mono Jojoy y le pregunté: *"¿Cuánto cree usted que demora esa tormenta en llegar hasta acá?"*. Él me contestó que tal vez unas dos horas o dos horas y media, lo que nos daba un tiempo mínimo para concretar la discusión y lograr un acuerdo satisfactorio.

Decidí apretar el ritmo de la conversación y le dije a Marulanda:

—*Manuel, ya pasaron los 90 días que fijamos para establecer la Zona de Distensión, los 90 días para su verificación y para comenzar los diálogos, y ahora están terminando los últimos 90 días para ver si comenzamos la fase de negociación. La definición de la agenda, como nos lo han ratificado Reyes y Víctor G., está avanzada en un 90%. Yo creo que están dadas las circunstancias para continuar y lo único que nos resta es tomar la decisión de iniciar una negociación. Lo que nos toca ahora es pasar del diálogo a la negociación.*

Marulanda reaccionó con el discurso dilatador de siempre: que no se había hecho nada frente al paramilitarismo, que faltaba más compromiso

con los temas sociales, que faltaba definir una política contra el desempleo, y terminó repitiendo que ellos no alcanzaban a hacer un análisis de todos estos temas para el 7 de mayo, día que se vencía la prórroga, y que me solicitaban, por consiguiente, que ampliara ese término.

Yo no estaba dispuesto a ceder en eso, pues sabía que el tiempo era crucial para mantener la credibilidad del proceso.

—No, Manuel, yo no le puedo ampliar el plazo. El tiempo que nos fijamos se ha cumplido y ya vimos que las partes, a pesar de estar congelado el proceso por parte de ustedes, han avanzado. Si no decidimos iniciar la negociación hoy, para mí es prácticamente imposible ampliar la vigencia de la Zona. El pueblo colombiano no entendería que su presidente venga una vez más a Caquetania, sin seguridad, absolutamente solo, exponiendo su vida y la de quienes le acompañan, dando todas las muestras de confianza y de interés por sacar el proceso adelante, y vuelva sin un resultado concreto. Así yo le prorrogue la Zona, Manuel, si no decidimos iniciar la negociación, el proceso está muerto, y está muerto porque la gente perdería toda credibilidad en él.

Fue entonces cuando le planteé la necesidad de la presencia de la comunidad internacional en el proceso. Le insistí que el mejor garante de la paz era precisamente dicha presencia internacional. Es más, le dije que así como nosotros contábamos con asesores internacionales para la negociación sería bueno que ellos también pudieran tener ese tipo de ayuda.

—Usted tiene que quitarse de la cabeza la idea de que la comunidad internacional forma parte del grupo del Gobierno. Ellos son absolutamente independientes, ese es su deber y su obligación. Si usted viola los acuerdos o la Zona de Distensión ellos van a ser los primeros en denunciarlo, pero si yo o el Gobierno violamos los acuerdos, ellos también van a ser los primeros en denunciarnos. Así que piénselo muy bien.

Marulanda no cedía, por lo que decidí dar la estocada final, poniendo todas las cartas en juego:

—Mire, Manuel: no se equivoque. Si yo regreso a Bogotá con las manos vacías, el proceso está muerto. Si en estos meses de conversaciones no nos hemos puesto de acuerdo sobre la agenda, la diferencia no la van a hacer unos días más o unos días menos. Así que: o comenzamos la negociación o damos por terminado ya mismo este proceso. ¡Usted y yo lo iniciamos, y usted y yo lo terminamos!

Un silencio sepulcral siguió a mis palabras, en medio de una tensión que cortaba el aire. Todos aguantaban la respiración, pues no imaginaban que yo iba a plantearles una disyuntiva tan radical. Yo sabía, sin embargo, que con este viaje había arriesgado mucho y que tenía que jugarme hasta la última carta.

Pasados unos segundos, Víctor G. se decidió a hablar y le dijo a Marulanda que lo mejor era que buscáramos una alternativa para evitar el fin del pro-

ceso. Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez permanecían en el más absoluto silencio, hasta que Reyes anotó que era cierto que se había avanzado mucho en la agenda, aunque volvió a insistir en que necesitaban más tiempo para concluirla.

Retomé entonces la palabra para insistirle a Marulanda en dos temas: lo mucho que se estaba haciendo para combatir el paramilitarismo y el avance en la definición de la agenda, que nos permitía comenzar a negociar ya los temas sociales.

Recordando el término que le había ofrecido desde nuestra primera reunión del 9 de julio de 1998, volví a darles un ultimátum:

—Perfecto, Manuel. Ustedes saben que ya no hay tiempo. Así que, si quiere romper, hagamos ya mismo un comunicado diciendo que se acabó esto, que el diálogo que hemos sostenido no pudo llegar a una negociación y que damos por terminado el proceso de paz. Ustedes tienen 48 horas para salir de la Zona y, eso sí, lo único que les pido es que respeten a la población civil de los cinco municipios que son los que más han aportado a este proceso y que no tienen por qué pagar por una decisión tomada unilateralmente por ustedes.

Y continué:

—Yo me comprometí a iniciar este proceso y a seguir un cronograma que nos impusimos el 9 de julio, y he cumplido con cada parte de mi palabra. El Gobierno ha cumplido plenamente con lo que acordamos usted y yo. Incluso asumí todos los riesgos de ir el 7 de enero a San Vicente del Caguán a instalar la mesa de diálogos y de venir a reunirme con ustedes, confiando únicamente en la seguridad que ustedes mismos me brindan. Tanto confié en su palabra, Manuel, que llevé a mi hijo Santiago a la instalación de los diálogos, como un gesto de confianza, y fue usted el que falló y el que no se hizo presente.

Marulanda argumentó que no había asistido porque se había descubierto un plan para asesinarlos. A lo que le respondí:

—¡Si eso era verdad por qué no me lo hizo saber a mí! Si el atentado era para los dos, y si usted era el encargado de mi seguridad, lo mínimo que debió haber hecho era informármelo.

En tanto esta conversación tenía lugar, suave en la forma pero dura en el contenido, los demás participantes de la reunión se miraban preocupados y con gestos de sorpresa. Jamás se habían imaginado que mi posición pudiera ser tan tajante.

Marulanda pareció resignado:

—Pues si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Se acaba esto.

Le reiteré que él me tenía que dar su palabra de que nada le iba a suceder a la población civil, y él me respondió que no había ningún problema en eso y que se comprometía a respetar la vida de los civiles de la Zona.

El silencio volvió a reinar. Pensé en ese momento, mientras los segundos avanzaban pesadamente, que si el proceso se terminaba ese día yo estaría tranquilo con la decisión, pues sabía que el país no entendería que el presidente y el comisionado nos hubiéramos desplazado al Caguán y que, sin

lograr un avance en la negociación, prorrogáramos la vigencia de la Zona de Distensión. La verdad, fueron momentos muy tensos, pero serenos, porque era consciente de que no tenía otra alternativa.

Hoy, unos años después, haciendo memoria sobre esta reunión, no dejo de pensar que haber asumido una posición tan dura en ese momento, generando un enfrentamiento verbal entre el presidente de la República y el máximo líder de la guerrilla, en mitad de la selva y rodeado por anillos de seguridad que sumaban más de 2.000 de sus combatientes, fue un acto en extremo arriesgado, sobre todo porque yo estaba inerme e indefenso, completamente en sus manos, y no sabía cuál podía ser la reacción de ellos frente a mi decisión. Estaba en sus campamentos, dándoles un ultimátum sin más armas que mi convicción en la necesidad y la urgencia de la paz. Muy seguramente, nadie había encarado de una manera tan clara y directa a Marulanda en frente de sus propios hombres.

El viejo guerrillero se tomó su tiempo. En ese momento, sin que nadie más lo supiera en el país, se estaba rompiendo prematuramente el proceso de paz con las FARC. La decisión de continuarlo o no había quedado en su cancha. Finalmente dijo:

—Bueno, redactemos algo a ver si podemos llegar a la negociación.

—Muy bien —le dije, tomándole la palabra sin tardanza—. Entonces sigamos adelante, y pongamos en limpio lo que hemos hablado hasta ahora.

El alivio de los presentes fue evidente.

—Y entonces, ¿qué hacemos? —insistió Marulanda.

Víctor G. propuso que los dejáramos a él y a Raúl preparar un borrador de acuerdo, junto con Camilo, a quien yo había llevado especialmente porque él podía ayudar a redactar y, además, manejaba muy bien el computador y la impresora. Convinimos en esto, y los tres se levantaron de la mesa para comenzar este trabajo contra el tiempo, en tanto la tormenta cada vez se sentía más cercana.

No era cualquier comunicado el que iban a redactar, sino uno de carácter histórico. Sería la primera vez, en los múltiples intentos de aproximaciones con las FARC, en que este grupo guerrillero aceptaría iniciar un proceso de negociación con el Estado colombiano. Hasta ese momento los acercamientos se habían frustrado en la etapa de los diálogos y las discusiones procedimentales, sin llegar nunca a la discusión de puntos concretos de una agenda que condujera a la paz.

Recuerdo, como dato curioso, que durante la reunión, además de Marulanda, los únicos que hablaron fueron Raúl Reyes y el Mono Jojoy, que esporádicamente hacía algunos comentarios. Ni Fabián Ramírez ni Joaquín Gómez pronunciaron palabra. Como un gesto de respeto entre ellos, siempre que está presente su máximo líder, sólo él hace uso de la palabra. Los demás únicamente hablan en la medida en que Marulanda les solicite hacerlo.

Ya en la pequeña casa que estaba localizada cerca de la pista, donde se reunieron a preparar el comunicado, se puso en movimiento la ineludible Ley de Murphy: *"Si una situación es difícil, siempre es susceptible de empeorar"*. Cuando Camilo intentó instalar el computador y la impresora donde iban a escribir e imprimir el trascendental documento todo falló. Si prendía el computador, se dañaba la impresora; si funcionaba la impresora fallaba la tinta; además, el computador se quedó sin batería. En fin, una típica crisis de sistemas conjuró para que nada pudiera utilizarse. Finalmente, les tocó sentarse a escribir el borrador a mano.

DOS PAISANOS EN LA CARRETERA

Mientras avanzaban en el documento, yo me había quedado sentado a la mesa con Marulanda y el Mono Jojoy. No me sentía muy a gusto con este último, con quien apenas había cruzado palabra en las dos ocasiones en que nos habíamos visto, y consideré que era una ocasión propicia para dialogar más informalmente con Marulanda, así que le propuse que nos fuéramos a caminar mientras redactaban el acuerdo, a lo que él accedió.

Como periodista, pensé en la oportunidad que daba esto para que nos tomaran una foto mientras dábamos ese paseo: Tirofijo, con su vestido camuflado y su infaltable toalla colgada sobre su hombro, y el presidente de Colombia, caminando lado a lado en medio de la selva de Colombia el día en que se firmaba, por primera vez en la historia, un acuerdo de negociación con las FARC. Nosotros llevábamos el fotógrafo y el camarógrafo de la Presidencia y los guerrilleros también habían comenzado a filmar y tomar fotografías. Así que esta imagen de dos hombres, ubicados en las orillas opuestas de la historia, hablando y conciliando diferencias civilizadamente, terminó siendo el mejor resumen gráfico del trascendental encuentro.

Mientras avanzábamos tranquilamente, Marulanda y yo, por una carretera sin pavimentar que corre paralela a la pista de aterrizaje, vimos a la distancia que un carro se acercaba, algo más bien inusual en semejante paraje, en medio de la selva.

Cuando el vehículo —que era una camioneta blanca— estaba casi sobre nosotros Marulanda me dijo: *"Presidente, corrámonos, no vaya a ser que nos atropelle"*. Así que él y yo nos paramos al lado del camino mientras pasaba la camioneta, el uno al lado del otro, con las manos atrás. El conductor, mientras nos sobrepasaba, se quedó mirándonos con los ojos bien abiertos por el asombro, primero como pensando: *"¿Quiénes serán estos dos locos que caminan por estas soledades?"* y luego, me imagino, interiorizando la realidad de lo que acababa de ver: nada menos que al presidente del país y a Manuel Marulanda, Tirofijo, caminando y charlando por el sendero como dos parroquianos cualesquiera.

Me imagino que esa noche, cuando llegó a su casa y les contó a sus familiares a quiénes había encontrado en el camino, no le debieron haber creído, por lo menos hasta que las noticias confirmaron su versión. Y no los culpaba. De verdad, era algo difícil de creer, una historia de esas que sólo ocurren en la Colombia "macondiana" que inmortalizó Gabriel García Márquez en sus relatos. Esos dos personajes parados a la orilla del camino eran un cuadro del más puro realismo mágico.

Nosotros continuamos con nuestra caminata. Mientras andábamos le reiteré a Marulanda la importancia de que avanzáramos en la negociación, y le dije que de nosotros dependía que el proceso tuviera éxito por el bien de Colombia.

Aproveché también para hacerle algunas preguntas sobre sucesos históricos que me interesaban. Fue así como lo interrogué sobre su experiencia en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que fue una alianza temporal que tuvieron las FARC y el ELN a comienzos de la década del noventa. Él me confirmó que esta Coordinadora no existía desde hacía varios años y que su fin se debió a que el ELN, estando vinculado a la misma, ejecutaba muchas acciones sin consultarlas con las FARC, comprometiéndolas en situaciones en las que ellos no estaban de acuerdo. Según él, debido a la falta de seriedad del ELN, veía muy difícil o casi imposible que esta coordinadora o una alianza de este tipo se volviera a crear.

Marulanda observaba, como yo, en el horizonte que la tormenta estaba muy cerca y me propuso que regresáramos a la caseta donde el resto estaba trabajando, para ver si habían terminado el documento.

—Presidente —me dijo—, yo creo que ya va a tener que irse. Mire que viene la tormenta y luego no puede despegar. Si se demora mucho, se van a dar cuenta de que usted está aquí, piensan que nosotros nos quedamos con ustedes y eso nos puede traer complicaciones. Si quiere, váyase y nosotros le mandamos el papel.

—No —le respondí—. Yo no me puedo ir sin el documento. Yo no puedo volver a Bogotá con las manos vacías.

El que me impulsaba a irme era Marulanda, pero yo no me iba sin firmar. En ese momento vino Luis, el piloto, y me dijo:

—Presidente, tenemos cinco o diez minutos para salir. Donde la tormenta llegue aquí ya no podemos decolar. Además, está oscureciendo, las tormentas aquí duran mucho tiempo, la pista se empantana y el avión ya no podría volar.

Aceleramos el paso hacia la caseta pero yo estaba determinado a no irme sin un documento concreto. Había arriesgado demasiado, había conseguido mucho, nada menos que la iniciación de la etapa de negociación, y no me iba a volver sin terminar lo comenzado.

UN MANUSCRITO PARA LA HISTORIA

Lo que encontramos en la caseta era un verdadero caos. Camilo, papel y lápiz en la mano, escribía el documento. Víctor G. por un lado le dictaba una cosa y Reyes, sobre su hombro, otra, en tanto Jojoy insistía en que se pusiera la palabra "diálogo" y no "negociación", pues seguía reacio a utilizar un término que las FARC nunca habían aceptado. Uno le decía ponga, otro le decía quite; uno le tachaba y otro le agregaba. Camilo, finalmente, optó por no hacerle caso a nadie y estaba avanzando en la redacción con base en las ideas que se habían discutido en la mesa. La última discusión fuerte fue con el Mono Jojoy, que no aceptaba por ningún motivo el uso de la palabra "negociación" y tampoco quería que quedara plasmada la decisión de conformar una "comisión internacional de acompañamiento".

El debate continuó en este ambiente de urgencia hasta que salió el documento, lleno de tachones y correcciones, en el que Camilo dejó puesto todo lo que habíamos debatido. *"Esto fue lo que se discutió, esto es lo que queda"*. Apenas terminó, nos leyó el documento completo a Marulanda y a mí, que hicimos unas correcciones mínimas. Finalmente, firmamos el acuerdo en el mismo manuscrito, tal como estaba, con las enmendaduras. Recuerdo que firmé con un esfero que me había regalado mi buen amigo Jacobo Bibliowicz, que tenía la novedad de que usaba una especie de gel en lugar de tinta. Se lo di a Marulanda para que firmara, y él me comentó que le gustaba mucho la forma en que escribía, por lo que se lo regalé.

Fue así como quedó formalizado el primer documento rubricado por un presidente de la República y el jefe de las FARC en torno a una negociación de paz. En el mismo acordamos expresamente *"establecer a partir del próximo 6 de mayo la iniciación del periodo de negociación y diálogo en los puntos de la agenda común ya acordados"*, nos comprometimos a *"dar desarrollo al acuerdo suscrito el pasado 28 de abril entre los directores de las distintas fuerzas políticas del país, las directivas del Congreso de la República, las FARC-EP y el Gobierno Nacional"* y determinamos conformar, *"de común acuerdo, una comisión internacional de acompañamiento que permita servir de verificadora para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar"*.

El tiempo apremiaba. Tanto Marulanda como el piloto me insistieron en la urgencia de despegar, así que decidimos que Víctor G. y Camilo se quedaran un tiempo más en Caquetania para ver si podían imprimir el documento en el computador, utilizando una pequeña planta eléctrica que habían traído.

Hacia las 5 y 30 de la tarde, Marulanda me acompañó hasta la puerta del avión y se despidió afectuosamente. Yo le reiteré algo de lo que, además, estaba convencido:

—Manuel, hoy hemos dado uno de los pasos más importantes para la paz de Colombia.

No fue sino que la avioneta comenzara a carretear en la precaria pista para que se desatara una lluvia torrencial. Nos elevamos con cierta dificultad en el aire y quedamos en medio de una nube de tormenta, sacudidos inclementemente por el viento. Me acompañaban el mayor Chaves y el fotógrafo de la Presidencia, y, la verdad, en un momento dado llegamos a pensar que nos íbamos a caer. Por fortuna, el avión tomó altura y a los pocos minutos el cielo se despejó.

El resto del viaje estuve reflexionando sobre la trascendencia de lo logrado ese día. Sin duda, había sido una reunión muy difícil y una discusión ardua, pero habíamos alcanzado todo lo que nos habíamos propuesto: el descongelamiento del proceso, el compromiso de conformar una comisión internacional de acompañamiento y, lo más importante, el inicio de la etapa de negociación, algo nunca antes acordado en la historia del país. Sólo me quedaba esperar el documento final, en limpio, para hacer una rueda de prensa en Bogotá.

Entre tanto, Víctor G. y Camilo lograron prender la pequeña planta eléctrica para cargar la batería del computador. Camilo tecleó el documento, pero los problemas técnicos no terminaron allí. Al imprimirlo en la impresora portátil, la tinta negra se había acabado y sólo quedaba el cartucho de tinta de colores, curiosamente azul y roja. Después de varios intentos, se sacaron dos copias del acuerdo: una azul y otra roja. Como era natural, sobre todo después de tantas horas de tensión, comenzaron las bromas. Camilo les dijo a Raúl Reyes y Joaquín Gómez, que eran los dos guerrilleros que se habían quedado con ellos: "*La azul es la de ustedes y la roja es la nuestra*", a lo que siguió una carcajada general. Manuel Marulanda y el Mono Jojoy se habían marchado tan pronto despegué a un lugar cercano, seguramente a hacer un análisis de la reunión.

Víctor G. y Camilo tomaron la decisión de salir hacia San Vicente por tierra y para eso pidieron prestado un carro. El Mono Jojoy le dijo a Iván Ríos que les prestara su carro y así fue como comenzaron su recorrido nocturno en el jeep Suzuki, muy viejo, de Ríos, acompañados también por el camarógrafo de Palacio, que se había quedado con ellos, ya que la segunda avioneta permaneció estacionada en Caquetania. Salieron en medio de un pesado aguacero con destino a San Vicente del Caguán. Fueron como ocho horas de viaje. En la vía a San Vicente se encontraron con una caravana de la guerrilla, que los detuvo. Los saludaron, pero al darse cuenta de que estaban en el jeep de Ríos, le preguntaron al comisionado:

—¿Y ustedes por qué andan con ese carro?

A lo que él les contestó, en tono de broma:

—Lo que pasa es que nos robamos el carro de Iván.

—Sólo eso nos faltaba —apuntó uno de los guerrilleros—. ¡Ahora ustedes nos van a "tumbar" los carros de la guerrilla!

A mitad de camino, a través del teléfono satelital, Camilo me llamó para leerme el "comunicado final", de forma que yo pudiera contar en una rueda

de prensa en Bogotá los resultados de la reunión. Ellos mismos llegaron hacia las tres de la mañana a San Vicente, donde los estaban esperando todos los medios de comunicación.

El país respiró aliviado con las buenas noticias, y la esperanza de la paz, que estaba debilitada, volvió a nacer. Al día siguiente, hacia el mediodía, convoqué el Consejo de Ministros para analizar la situación con el Gabinete. Para entonces nadie se preguntaba en dónde estaba el documento original, hasta cuando Camilo, recién llegado de San Vicente, revisó sus bolsillos en el salón del Consejo y encontró, para su sorpresa, el papel arrugado y lleno de enmendaduras que habíamos firmado Marulanda y yo. Sin duda, era una pieza histórica.

CAPÍTULO XIX

Renuncias sobre la mesa

A pesar del congelamiento formal de los diálogos desde el 19 de enero, los Avoceros del Gobierno —María Emma Mejía, Nicanor Restrepo, Fabio Valencia y Rodolfo Espinosa— y los de las FARC —Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez—, junto con el alto comisionado, Víctor G. Ricardo, habían venido reuniéndose con cierta regularidad para adelantar las deliberaciones tendientes a definir una agenda de negociación. Los equipos habían intercambiado propuestas, las habían discutido ampliamente y, tal como nos lo habían manifestado Víctor G. y Raúl Reyes a Marulanda y a mí en la reunión del 2 de mayo, para ese momento ya tenían la agenda acordada en un 90%.

Destrabado ya el proceso, gracias a la reunión de Caquetania, los integrantes de la Mesa de Diálogo tenían apenas cuatro días para lograr un acuerdo antes de que se venciera la vigencia de la Zona. Era una meta difícil, pero no imposible. Fueron cuatro días de trabajo intenso y sin pausas, definiendo los puntos que faltaban, hasta que por fin, en el límite del tiempo, se llegó a un texto final que contaba con el consenso de las partes.

Fue así como, ante el positivo asombro de los colombianos, el 6 de mayo de 1999, un día antes del vencimiento de la Zona, el comisionado, los voceros del Gobierno y los de las FARC anunciaron, en un corregimiento dentro de la Zona denominado La Machaca, el acuerdo logrado sobre una agenda de negociación, a la que se denominó "Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia".

La Agenda consistía en un documento de 12 puntos que resumía los principales temas de fondo en los cuales se centrarían las negociaciones entre el Estado y la guerrilla, así:

1. Solución política negociada.
2. Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado.
3. Política agraria integral.
4. Explotación y conservación de los recursos naturales.
5. Estructura económica y social.

6. Reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
7. Reforma política para la ampliación de la democracia.
8. Reformas del Estado.
9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario.
10. Fuerzas Militares.
11. Relaciones Internacionales.
12. Formalización de los Acuerdos.

Cada uno de estos temas estaba a su vez subdividido en varios subtemas que delimitan los aspectos a discutir, conformando una amplia gama de asuntos sobre los cuales se buscarían acuerdos durante la etapa de negociación.

Esta Agenda tenía la virtud de haber sido pactada, no sólo entre el Gobierno y la guerrilla, sino con la participación activa de los voceros que representaban nada menos que a la principal fuerza política de oposición, al Congreso de la República, al sector privado y a las regiones. Por lo mismo, poseía —y aún posee— una legitimidad y una importancia indiscutibles.

Si bien las deliberaciones nunca lograron pasar del punto quinto, sobre la “estructura económica y social”, que fue el primero que se decidió abordar, y a pesar del rompimiento del proceso en febrero de 2002, siempre he pensado que esta amplia agenda consensuada es un patrimonio de Colombia que no se puede desestimar ni desperdiciar, sobre el cual debería seguir convocándose la discusión del país entero para promover las reformas que sean necesarias para lograr un desarrollo sostenible y una mayor justicia social.

¡Qué bueno sería que, aun sin la presencia de la guerrilla, las fuerzas vivas del país continuáramos el trabajo que tuvo comienzo en San Vicente del Caguán de reflexionar y ahondar sobre los profundos cambios que necesita Colombia! La Agenda Temática que se anunció en La Machaca es, sin duda, un paso adelante y un documento de reflexión importante que aún hoy puede ser de utilidad.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS

Anunciada la agenda, el 7 de mayo, exactamente a los nueve meses de haber comenzado mi período presidencial y el mismo día en que terminaba el último de los plazos del cronograma 90-90-90, que se cumplió en su totalidad, prorrogué la Zona de Distensión por un mes más para dar tiempo a que se constituyeran los nuevos grupos de negociación que continuarían el trabajo de aquellos que habían intervenido en la etapa de diálogo.

Por parte del Gobierno, entendiendo el normal agotamiento de los voceros, que tan desinteresada y dedicadamente habían trabajado para acordar la Agenda Temática, decidí refrescar el equipo para iniciar la nueva etapa de ne-

gociación que seguía a la del diálogo. Fue así como liberé de su encargo, con mi agradecimiento y el de la nación entera, a María Emma Mejía, Nicanor Restrepo y Rodolfo Espinosa; ratifiqué a Fabio Valencia Cossio, y designé cuatro nuevos representantes: Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero Delgadillo.

Pedro Gómez Barrero, abogado, ex diplomático y exitoso empresario de la construcción, personificaba de manera ideal, como lo hizo en su momento Nicanor Restrepo, el aporte del sector privado y los gremios de la economía.

Camilo Gómez, mi secretario privado, había probado en Caquetania tener un buen dominio de situaciones de tensión con la guerrilla y representaba, para mí, la garantía de tener una persona de mi máxima cercanía y confianza dentro del grupo de negociadores.

Juan Gabriel Uribe, senador y miembro activo, por parte del Partido Conservador, de la Alianza para el Cambio que apoyó mi candidatura, quien había dirigido el tradicional diario *El Siglo*, constituía un buen soporte político e ideológico para la negociación. Además, había participado en procesos de paz y en acercamientos con la guerrilla, desde su intervención, junto con Álvaro Leyva, para lograr la liberación del jefe conservador Álvaro Gómez, secuestrado por el M-19 en 1989.

Finalmente, con el nombramiento de un general retirado, como lo era Gonzalo Forero Delgadillo, quise hacer partícipes a las Fuerzas Armadas, y a su calificada experiencia en conflictos, de esta crucial etapa. Era consciente de que algunos militares miraban con recelo el proceso y el mantenimiento de la Zona, y consideré que el nombramiento dentro del grupo de negociadores de uno de ellos podría brindarles una mayor tranquilidad y proporcionar, de hecho, transparencia al proceso frente al país.

Las FARC, por su parte, mantuvieron los mismos tres voceros —Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez— y adicionalmente designaron como sus representantes en el Comité Temático Nacional, que se acordó constituir para implementar un mecanismo de audiencias públicas que recogiera la opinión de todos los sectores del país sobre los temas de la agenda, a Simón Trinidad, Alberto Martínez, Iván Ríos, Felipe Rincón, Marco León Calarcá, Jairo Martínez y Pedro Aldana.

Los equipos volvían a barajar y las cartas estaban otra vez sobre la mesa, sólo que en esta oportunidad, por primera vez en la historia del país, era una Mesa de Negociación.

LA RENUNCIA DE LLOREDA

Después del Consejo de Ministros que convoqué el lunes 3 de mayo para analizar las consecuencias de mi reunión con Marulanda, el siguiente que

celebré fue el miércoles 12 de mayo, aunque esta vez se trataba de un consejo ordinario para tratar diversos asuntos de gobierno.

Después de horas de tranquila deliberación, y cuando ya estábamos terminando, pregunté a los ministros si tenían otros temas de discusión. Tomó la palabra el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y en un tono de molestia, casi agresivo, manifestó que quería que se discutieran en el Consejo algunos aspectos del proceso de paz que le preocupaban. Le respondí que el tema del proceso de paz no era un tema del Consejo de Ministros sino del fuero presidencial, que yo llevaba al Consejo cuando lo considerara conveniente, como había ocurrido la última vez. Él insistió en que quería discutirlo frente a sus colegas, pero yo, notando su malestar, le dije que lo mejor era que lo habláramos en privado y que coordinara con Camilo Gómez, mi secretario privado, una audiencia para que discutiéramos el tema con profundidad.

Esta situación me causó sorpresa y molestia, no por la pregunta en sí, sino por el tono y la actitud del ministro, que permitían prever un mal desarrollo, como lo pude confirmar unos días después. Hoy tengo la certeza de que Lloreda ya tenía una decisión tomada frente a su permanencia en el Ministerio y nada lo hubiera hecho cambiar.

Terminado el Consejo, el ministro se dirigió a la oficina de Camilo y le expresó su inconformidad por la forma como se había manejado el tema en el Consejo de Ministros, a lo que Camilo le dijo que esa no era ni la manera, ni la oportunidad, ni el procedimiento para discutir el proceso de paz, y le reiteró que yo estaba dispuesto a recibirlo para discutir sus inquietudes y sus propuestas sobre el mismo, dedicándole el tiempo que fuera necesario, como siempre lo habíamos hecho. Rodrigo, que se encontraba en tratamientos por una penosa enfermedad y salía al otro día del país para hacerse unos exámenes médicos en Nueva York, no concretó la cita y salió, en cambio, muy molesto de la oficina del secretario, que inmediatamente fue a mi despacho a reportarme la situación.

—Yo sé que Rodrigo, por la forma en que actuó hoy, ya tiene una decisión tomada, pero esperemos a su regreso para hablar con él con calma. Hay que entender que vive un momento muy difícil con su enfermedad —le dije a Camilo y continué desarrollando la agenda del día, no sin cierto malestar, pues el ministro era, antes que nada, un amigo y no esperaba un comportamiento así de una persona tan cercana.

Lo cierto es que Lloreda venía mostrando inconformidad con el proceso de paz desde tiempo atrás. De hecho, era claro que existía un enfrentamiento continuo entre él y el comisionado para la Paz, que se acentuó con el incidente de los soldados del Batallón Cazadores y se fue reforzando día tras día.

Según Lloreda, Víctor G. no le informaba los desarrollos del proceso, en tanto Víctor G. manifestaba que le daba informaciones constantes al ministro. Es más, siguiendo instrucciones mías, Víctor G. promovió múltiples

reuniones con él, en varias de las cuales tuvieron enfrentamientos abiertos sobre la política de paz. A mí me consta que el Comisionado siempre buscó comunicarse y tener enterados al ministro y a los mandos militares sobre los aspectos principales del proceso, aunque no siempre era muy bien recibido por éstos.

Mi impresión es que a Lloreda los militares, que lo respetaban y lo querían mucho, le insistían continuamente para que representara sus inquietudes en el Gobierno y le daban muchas informaciones de inteligencia militar que parecían contradictorias con lo que Víctor G. le contaba, por lo que acababa creyendo que se le estaba ocultando información o no se le proporcionaba toda.

Las principales diferencias entre Lloreda y Víctor G. se daban en torno a la Zona de Distensión y a las prórrogas de su vigencia. Lloreda creía que Víctor G. era partidario de una prórroga indefinida, posición que no compartían en absoluto ni el ministro ni los altos mandos militares, pues consideraban que sería una ventaja estratégica para la guerrilla y que era mejor mantener la zona con prórrogas cortas para que las FARC no pudieran confiarse ni utilizarla para entrenamientos de largo plazo para sus miembros. Según ellos, una prórroga indefinida —una decisión que nunca se dio y sobre la cual yo mismo tenía serias objeciones— sería como una renuncia a la soberanía del Estado sobre la zona.

Cuando comencé a percibir los roces entre los dos altos funcionarios, le pedí al canciller Fernández de Soto que se convirtiera en una suerte de intermediario para ayudar a zanjar cualquier diferencia entre los dos, aprovechando que tenía excelentes relaciones de amistad con ambos. Guillermo había sido viceministro de Lloreda, cuando éste fue canciller en el gobierno de Belisario Betancur, y había trabajado, incluso, como jefe de debate de su campaña presidencial, en 1990. Con Víctor G. también tenía una amistad muy cercana de tiempo atrás.

Siguiendo mis instrucciones, Guillermo se reunió en múltiples ocasiones con Rodrigo, dándole tranquilidad sobre la forma en que estábamos manejando el proceso. De hecho, Lloreda, en lo que a mí concierne, y hasta su "destape" en el Consejo de Ministros, siempre había sido optimista sobre el proceso de paz, acompañándome permanentemente con su consejo. Yo lo mantenía al tanto de todas las situaciones para que él le informara a los militares, sin perjuicio de que yo muchas veces hablara directamente con ellos. Es más, todos los decretos expedidos para sacar adelante el proceso, incluida la creación de la Zona, llevaban su firma. Si yo sabía de sus desavenencias y reparos no era tanto por él mismo, sino por lo que me comentaban Víctor G. y Guillermo sobre sus reuniones.

Una vez Rodrigo regresó de su viaje, el martes 25 de mayo, se comunicó con Camilo Gómez para solicitar la audiencia que había quedado aplazada por su ausencia. Él llegó particularmente molesto pues había leído u oído

en un medio de comunicación que Víctor G. estaba hablando sobre una eventual "prórroga indefinida" de la Zona.

Infortunadamente, el momento no era el más apropiado. Yo estaba saliendo para Cartagena de Indias, donde serviría como anfitrión durante dos días del XI Consejo Presidencial Andino, evento en el que, además, celebraríamos los 30 años de suscripción del Acuerdo de Cartagena mediante el cual se constituyó el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina. Allí me reuniría con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Jamil Mahuad; de Bolivia, Hugo Bánzer, y con el representante personal del presidente Fujimori del Perú, Víctor Joy Way, además de los cancilleres de los cuatro países hermanos. También estarían, como observadores, el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares; el de Paraguay, Luis González Macchi, y el canciller de Haití.

Lloreda le dijo a Camilo que quería verme antes de que yo saliera para Cartagena, pero yo me encontraba en plena preparación de la Cumbre, discutiendo los temas que abordaría con los mandatarios de los países andinos, por lo que le pedí a Camilo que le transmitiera a Rodrigo mi interés en hablar con él con toda la calma, pero tan pronto regresara del evento en Cartagena, en cosa de tres días. Estaba seguro de que alguien como Lloreda, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, podría entender la importancia de la reunión internacional y aceptaría posponer nuestro encuentro hasta que ésta terminara. Sin embargo, el ministro volvió a llamar a Camilo para decirle que tenía urgencia de hablar conmigo.

—Si de verdad es urgente o algo de orden público que no dé espera —le repuso Camilo—, él lo recibe ya. Pero si de lo que se trata es de discutir sobre el proceso de paz, lo mejor es hacerlo cuando el presidente esté tranquilo, sin las preocupaciones de la reunión, y le pueda dedicar todo el tiempo posible.

—Pues si el presidente no me quiere recibir, yo no puedo hacer nada —contestó Lloreda molesto.

—No es que no lo quiera recibir. Usted sabe mejor que nadie que él tiene que atender la Cumbre, incluyendo la visita de cinco presidentes, y no puede dedicarle ahora el tiempo necesario. Usted lo conoce y sabe que a él le gusta analizar los temas con profundidad y no a la carrera. Esté tranquilo, ministro, que apenas termine la Cumbre hablan.

Ya en el avión, rumbo a Cartagena, Camilo me comentó, preocupado, su conversación con Lloreda y la insistencia de éste en reunirse conmigo antes de mi partida. Recordé que Guillermo Fernández de Soto me había contado de un almuerzo que tuvo con él antes de su viaje, en el que le había hecho algunos reparos sobre el proceso y dado nuevas quejas sobre su relación con Víctor G.

—Rodrigo está muy extraño desde el incidente del Consejo de Ministros y más ahora que regresó de su viaje —pensé en voz alta—. No me gusta nada la forma en que está reaccionando. Ojalá no cometa una locura.

Tristemente el tiempo confirmó mis temores. Esa misma noche, sin esperarse a hablar conmigo, Lloreda envió por fax a mi despacho su carta de renuncia al cargo de ministro de Defensa.

En la mañana del miércoles 26 de mayo, sin que nadie supiera todavía de la existencia del fax, Lloreda se reunió con el general Tapias como lo hacía usualmente para que éste le informara de todas las novedades de orden público. En esta ocasión, el ministro estaba acompañado por su hijo, y buen amigo mío, Francisco Lloreda, quien era entonces director del diario *El País*, de Cali. Para sorpresa del general, Lloreda le manifestó que había decidido renunciar al Ministerio porque tenía diferencias insalvables con el comisionado y estaba seguro de que el Gobierno iba a prorrogar indefinidamente la Zona de Distensión.

Tapias, conmovido por la noticia, le manifestó su solidaridad y le dijo que ellos eran un equipo y que, si Lloreda se iba, eso implicaba que todos debían irse, pues no quedaba bien que, frente a su renuncia, los demás se quedaran *"cuidando el puesto"*. El ministro le agradeció el gesto pero le insistió en que él y los altos mandos debían quedarse, pues se trataba de una desavenencia personal y no podían ponerse en riesgo las instituciones.

El general Tapias le pidió que hablara conmigo y aclarara la situación, pero Rodrigo le contestó que ya era una decisión tomada y que, además, él sí había tratado de hablar conmigo, aunque sin éxito, pues Camilo Gómez se lo había impedido diciéndole que yo estaba preparando la Cumbre Presidencial Andina. A pesar de que esto era totalmente cierto, lo triste es que el ministro tomó el diálogo con Camilo como una negativa mía a hablar con él, lo que afianzó su decisión de renunciar. Según él, simplemente yo *"no le pasaba al teléfono"*.

Mientras esto sucedía en Bogotá, yo estaba en Cartagena, minutos antes de iniciar la Cumbre, en la Sala del Centro de Convenciones, dándole las últimas puntadas a mi discurso de instalación con el canciller Fernández de Soto. Camilo se acercó, un poco azorado, y me informó que el ministro de Defensa había citado una rueda de prensa para esa misma mañana y que los rumores indicaban que iba a renunciar públicamente. ¡No podía creerlo! ¡Lloreda insistía en actuar por su cuenta sin esperar siquiera uno o dos días mientras yo cumplía con el compromiso internacional! Entonces le dije a Camilo:

—Comuníquese urgentemente con Rodrigo. Dígale que no vaya a cometer ese error, que cuando termine la Cumbre nos sentamos con toda tranquilidad a hacer un análisis de la situación. Explíquele que si no he hablado con él hasta ahora es porque le estoy dedicando todos los esfuerzos a la Cumbre Presidencial Andina, que él bien sabe que es fundamental para definir el futuro de la Comunidad.

Con esa preocupación, me dirigí a la mesa principal donde me esperaban los mandatarios invitados. El auditorio del Centro de Convenciones estaba

lleno y los periodistas y cámaras de los medios noticiosos de Colombia y el mundo, que habían venido a cubrir la Cumbre, se mantenían pendientes de cualquier movimiento. Estaba a segundos de iniciar mi intervención cuando Camilo regresó y me dijo al oído que el ministro ya estaba dando la rueda de prensa.

—¿Cómo?! —exclamé—. ¡Eso es una locura!

—No hay nada que hacer —concluyó Camilo—. Lloreda ya renunció.

¿RUIDO DE SABLES?

Yo estaba sentado en el centro de la mesa de honor y, sin duda, mi gesto de extrañeza y de molestia llamó la atención de los asistentes y de mis colegas latinoamericanos. Con esa espina clavada en el corazón, leí mi discurso inaugural ante el auditorio. Una vez terminé mi intervención, regresé a la sala del Centro de Convenciones con el canciller. El ministro de Cultura, Alberto Casas Santamaría, ya me estaba esperando allí. Lo primero que pensamos era que debíamos hacer algo, y muy pronto, para evitar la desinformación de los medios de comunicación. Llamé entonces a Juan Hernández, secretario general de la Presidencia, para que estuviera al tanto de los medios y me mantuviera informado.

El primero en llamarme fue el general Serrano, director de la Policía Nacional, quien me recomendó que regresara a Bogotá:

—Esto está muy grave, señor presidente. Hay movimientos en los cuarteles y se habla de la renuncia masiva de varios generales del Ejército.

Yo le comenté esto al canciller y él me dijo:

—Presidente, usted no se puede devolver a Bogotá. Aquí tiene a cinco presidentes de América Latina y ellos van a ser su mejor seguro.

Decidí quedarme y sortear la situación desde Cartagena, sin generar el desplante internacional de dejar a mis invitados sin anfitrión. Le pedí, entonces, al canciller que les comentara a sus colegas lo que estaba ocurriendo, para que ellos a su vez pusieran al tanto de la situación a sus presidentes. Yo tenía un almuerzo de trabajo con ellos pero lo cancelé y regresé a la Casa de Huéspedes, con el canciller y con Camilo, para afrontar la situación desde allí.

Ya en mi oficina, firmé una breve comunicación aceptando a Rodrigo Lloreda su renuncia y encargué al general Tapias del Ministerio. Para tal efecto, lo llamé y le notifiqué que, teniendo en cuenta la sorpresiva renuncia de Lloreda, había decidido dejarlo a él, como el oficial de mayor jerarquía en la estructura de mando, en cabeza del Ministerio hasta que se nombrara en propiedad el nuevo ministro. El general manifestó su conformidad pero me solicitó una audiencia lo más pronto posible con los miembros de la cúpula militar, para explicarme cuál era la situación que se vivía en el interior de las Fuerzas Militares y qué era lo que realmente estaba pasando.

—Le garantizo, señor presidente, que nadie en ningún momento ha pensado atentar contra las instituciones y que, por el contrario, los militares respetan y apoyan profundamente la institucionalidad que usted representa.

Él estaba muy preocupado por las versiones que circulaban en los medios de comunicación y por eso insistía en la urgencia de esta reunión. Los rumores habían sido desatados porque, una vez conocida la renuncia del ministro, se habían recibido en el Comando del Ejército las cartas de renuncia de algunos generales y coroneles, a las cuales no se les había dado trámite todavía.

Acepté la reunión y le pedí al general Tapias que convocara a los comandantes de todas las fuerzas para que se reunieran conmigo esa misma tarde en la Casa de Huéspedes en Cartagena. Tapias procedió a citarlos sin dilación y decidió invitar también al general Rosso José Serrano, director general de la Policía, quien no había asistido a la rueda de prensa en la que Lloreda anunció su renuncia. También pidió a los comandantes que se comunicaran con todas las unidades para evitar que falsos rumores siguieran propagándose, que les anunciaran que no había ningún cambio en la cúpula militar ni ningún procedimiento por fuera de lo ordinario, y que les contaran que los comandantes se iban a reunir conmigo en Cartagena para analizar la situación generada por la renuncia del ministro.

Un poco después del medio día, hacia la 1 o 2 de la tarde, salieron en el avión del Ministerio de Defensa los generales Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares.; Rafael Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto; Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército; Alfonso Ordóñez, segundo comandante de la Fuerza Aérea, que estaba encargado de la comandancia; Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, y el almirante Sergio García, comandante de la Armada Nacional.

Tiempo después, los generales me comentaron que durante el vuelo de Bogotá a Cartagena hablaron de forma muy franca y abierta sobre lo que me iban a decir y acordaron poner sobre la mesa su renuncia, dejando sus cargos a disposición mía, además de reiterar su completo desacuerdo a la posibilidad de decretar una prórroga indefinida a la Zona de Distensión. También se pusieron de acuerdo en manifestarme lo mucho que lamentaban la renuncia del ministro Lloreda, explicando que ese fue el sentimiento que llevó a algunos altos oficiales del Ejército a pasar sus cartas solidarias de renuncia.

Llegaron los generales antes de las 4 de la tarde a Cartagena y se trasladaron de forma inmediata a la Casa de Huéspedes. Di instrucciones para que los hicieran seguir a la sala principal pues me encontraba en mi despacho en compañía de Guillermo Fernández de Soto y de Camilo Gómez. Mientras les servían un refresco, le pedí al general Tapias que subiera al despacho para que me resumiera la situación. Él me saludó con su acostumbrada cordialidad y volvió a ratificarme que el mando militar no tenía la más mínima

intención de menoscabar la institucionalidad y que debía estar seguro de la lealtad de todos los oficiales y de su profesionalismo, enfatizándome que cualquier versión en contrario era absolutamente falsa. Me aclaró que había pedido la reunión únicamente para que escuchara a los comandantes y para que oyera de su propia voz sus inquietudes, particularmente sobre el proceso de paz y la Zona de Distensión.

Le agradecí sus palabras de respaldo y su franqueza conmigo y le reiteré la confianza que tenía en el mando militar y muy particularmente en él, como comandante de las Fuerzas. Le dije que era consciente de los debates que suscitaban el proceso y la Zona, y que estaba abierto a analizar estos temas con ellos, que siempre podrían estar tranquilos de que todo lo que estábamos haciendo para buscar la paz lo hacíamos dentro del más estricto apego a la Constitución y las leyes.

Entonces le pedí que hiciera subir a los demás generales e invité también al canciller y a Camilo para que me acompañaran en la reunión. No era una situación fácil ni sencilla, sobre todo por la percepción irresponsable que arrojaban los medios de comunicación, que jugaban con la hipótesis de un "ruido de sables" con ocasión de la renuncia de Lloreda. Eso sí, tenía muy claro que no me iba a dejar presionar por ninguno de los generales y estaba dispuesto, en caso de que fuera necesario, a aceptarles su renuncia a todos ellos si insistían en retirarse, así como la de los generales que la habían presentado desde la mañana. En mi fuero interior decidí: *"Si me toca gobernar con los coroneles, ¡así lo haré!"*.

Ya con todos los oficiales de la cúpula en mi despacho, comenzamos la reunión, en un ambiente tenso, aunque siempre respetuoso.

Lo primero que hice fue manifestarles mi total apertura a escuchar sus inquietudes y les pedí que hablaran con absoluta franqueza, porque de esa misma manera iba a hablar yo, sin disimular en lo más mínimo la gravedad del tema.

Comencé a darles la palabra en orden jerárquico. El primero en hablar fue el general Tapias, quien me reiteró su compromiso y lealtad con las instituciones, y su apoyo al proceso de paz a través de una solución política negociada.

El general tocó el tema recurrente de las difíciles relaciones con Víctor G., así como el rumor que había sobre una posible prórroga indefinida de la Zona de Distensión. Ellos tenían la impresión de que esa era una idea que estaba promoviendo el comisionado y, además, creían que él no hablaba lo suficiente con ellos, a pesar de que yo le había dado instrucciones de que lo hiciera semanalmente, cosa que efectivamente hacía. De igual manera, Tapias mencionó las noticias que se daban en los medios sobre presuntas irregularidades en la Zona de Distensión y afirmó que era importante buscar mecanismos y procedimientos para mejorar el control sobre ella.

—Presidente —me dijo—, a Víctor G. le ha faltado tacto para hablar con nosotros y para contarnos las cosas, por lo que tenemos informaciones encontradas.

Otro tema que planteó el general, que preocupaba mucho a todos los militares, era el de la situación que venían enfrentando con los continuos procesos que les abrían en la Procuraduría y la Fiscalía.

—Las tropas tienen la percepción de que las leyes están en contra del Ejército. Lo que pasa, presidente, es que la nuestra es una legislación para un país en paz y no para un país que está en guerra como el nuestro.

Finalmente, me reiteró que lamentaban mucho la renuncia del ministro Lloreda y culminó con estas palabras:

—Presidente, nosotros sólo queremos ayudarle a usted y ayudarle a Colombia. Por eso nos permitimos, con todo respeto, recomendarle que lo piense muy bien antes de ordenar una prórroga indefinida de la Zona de Distensión, pues consideramos que esta situación no sería buena para el país. Eso son ventajas, sólo ventajas que le daríamos a esa gente. El hecho de que la prórroga sea temporal es como una "espada de Damocles" sobre la cabeza de la guerrilla, y esa es una condición que no se puede perder. Por último, presidente, permítame decirle que cuenta siempre con la lealtad de las Fuerzas Militares de Colombia, y que pongo mi cargo a su disposición.

Le correspondió, entonces, el turno al general Rafael Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien, como dato anecdótico, era hijo del general Rafael Hernández Pardo, que fue ministro de Guerra en la presidencia de Alberto Lleras Camargo y había sido, además, mi padrino de confirmación y un gran amigo de mi familia. En una corta intervención, manifestó su inconformidad con el comisionado para la Paz, diciendo que sus posiciones muchas veces no eran claras o resultaban, incluso, contradictorias frente a las mías.

—Para nosotros no es fácil vender al interior de las Fuerzas Militares el tema de la paz, pero cuente con el respaldo de las mismas —concluyó.

A diferencia de los demás generales y del almirante, no terminó su discurso poniendo sobre la mesa su renuncia, seguramente por olvido, por lo que se ganó, al terminar la reunión, y cuando la tensión ya había bajado, las chanzas y tomadura de pelo de sus colegas militares, que sí tomaron ese riesgo.

Después le di la palabra al general Mora, comandante del Ejército, quien explicó la forma en que la guerra continuaba en medio del proceso de paz. Me confirmó que, de acuerdo con mis expresas instrucciones, el Ejército mantenía una continua presión militar sobre guerrilla y paramilitares como nunca antes en la historia.

—Presidente, parta de una base: el proceso de paz tiene una incidencia en el Ejército de Colombia. Este ejército es un ejército leal, es un ejército

civilista. Lo hemos acompañado en el proceso de paz y lo seguimos respaldando en él.

Mostró, sin embargo, su preocupación por las renunciadas presentadas por algunos generales y coroneles, todos del Ejército, pues esta situación no se había dado en las otras fuerzas. También reiteró su conformidad con el estilo y la poca comunicación hacia ellos de Víctor G., la sospecha sobre posibles violaciones dentro de la Zona y la necesidad de crear un mecanismo que devolviera la confianza en este aspecto. Como el general Tapias, manifestó la inconveniencia de prorrogar indefinidamente la vigencia de la Zona, *"pues le daríamos una ventaja estratégica a la guerrilla"*, y añadió que él percibía que los altos oficiales se sentían un poco relegados, por lo que sería bueno hacer una reunión con todos los generales y almirantes a fin de que ellos pudieran hablar conmigo y desahogarse de una forma directa y franca.

A renglón seguido, el almirante Sergio García, comandante de la Armada, se refirió al tema del Código Penal Militar y el inconformismo y malestar que se vivía en las Fuerzas Militares con los continuos fallos desfavorables por parte de la Procuraduría, tema sobre el cual también recalcó el general Ordóñez, comandante encargado de la Fuerza Aérea.

Ellos, como ya lo habían hecho los generales Tapias y Mora, pusieron sus cargos a mi disposición.

Finalmente habló el general Serrano, director de la Policía Nacional, quien fue directo al grano y dijo que lo primero que había que hacer era resolver el problema que se había creado con la renuncia de los generales del Ejército, concluyendo con estas palabras:

—Aquí, presidente, hay un respaldo a la democracia, un respaldo a la paz, un respaldo a usted como primer mandatario de la Nación, y mi respaldo como director de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas.

Serrano terminó sin poner a disposición su cargo, aunque su omisión no obedeció al olvido, como ocurrió en el caso del general Hernández, sino al hecho de que él y la Policía no habían participado en las manifestaciones de solidaridad por la renuncia del ministro Lloreda, y se habían mantenido, sin el menor resquicio de duda, a mi lado durante toda la crisis.

Escuchadas todas las intervenciones, procedí a hablarles con la mayor claridad y franqueza posibles.

—Así como yo comencé diciéndoles a ustedes que me hablaran de una forma muy abierta y sincera, de la misma manera lo voy a hacer yo esta tarde. Lo primero es decirles lo incómodo y alterado que me tiene la situación que generó la renuncia del ministro Lloreda, más aún porque viene de alguien a quien siempre quise y consideré como un amigo. En una democracia, cuando un ministro no está de acuerdo con las políticas del presidente lo lógico es que renuncie, eso no lo discuto, pero lo que no logro entender es la situación que se ha presentado con la renuncia de los generales. Dios no quiera que a ustedes alguna vez les ocurra lo mismo y,

cuando un coronel u otro oficial no coincide con sus órdenes, genere una sublevación, porque esto lo único que trae es caos y debilidad para las instituciones.

Pero fui más allá:

"Si alguno de ustedes no se siente bien en el Gobierno puede pedir su baja, pero lo que sí no aceptaría es que dijeran que el proceso de paz o la declaración de la Zona los tomó por sorpresa. Desde mi campaña como candidato y en los primeros días del Gobierno dije expresamente que iba a liderar un proceso de paz con las guerrillas y que estaba dispuesto a crear zonas de distensión por el tiempo que fuera necesario para facilitar los diálogos. Así que aquí no he engañado a nadie: ni a ustedes, ni a la comunidad internacional, ni al pueblo colombiano que apoyó mi propuesta con la más alta votación de la historia. Ustedes mejor que nadie saben de mi interés por mantenerlos permanentemente informados de todo lo que sucede en torno al proceso de paz, ya sea por mí directamente o a través del comisionado. Soy consciente de que no es fácil para muchos uniformados entender el proceso y por eso también es importante que ustedes tengan comunicación y contacto con sus subalternos, y les expliquen sus desarrollos.

"No se llamen a engaño, señores generales y almirante: desde cuando tomé posesión como presidente juré defender la Constitución y la ley y eso es todo lo que he hecho y lo que haré hasta el final de mi mandato. Los primeros interesados en que me salga de la legalidad son mis opositores y no les voy a dar ese gusto por ningún motivo. Ustedes son conscientes de mi compromiso con las Fuerzas Armadas y de que todo lo que les he pedido es que actúen con firmeza y efectividad, a la ofensiva, contra los grupos armados ilegales por fuera de la Zona, es decir, en prácticamente casi todo el territorio nacional salvo el que está destinado al diálogo. A ustedes les consta que jamás, ¡jamás!, les he ordenado cesar una operación militar y que, por el contrario, les he insistido en la necesidad de golpear a la guerrilla, pues eso mejora nuestra posición como gobierno en la mesa de negociación.

"Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas no he hecho otra cosa que defenderlas dentro y fuera del país. Ustedes han visto cómo he asumido su defensa en los Estados Unidos y en Europa cuando los han acusado injustamente de tener vínculos con los paramilitares. Gracias a esto, y a nuestro trabajo diplomático, hoy han vuelto a invitar a los oficiales colombianos a Europa y a Estados Unidos, después de varios años en que estuvieron prácticamente vetados, y hemos logrado un compromiso de los norteamericanos para ayudarnos en el entrenamiento, dotación y fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

"En cuanto a las presuntas violaciones de las farc en la Zona de Distensión quiero reiterarles lo que ustedes ya saben, en el sentido de que conseguí el pasado 2 de mayo un compromiso de la guerrilla para que se conforme una comisión internacional de acompañamiento que verifique esta situación. Así que, como ven, estamos avanzando. No es un tema sencillo, no existen, infelizmente,

te, manuales escritos sobre cómo hacer la paz, pero lo estamos intentando con todo cuidado, sin comprometer nuestra soberanía, y siempre bajo el manto de la Constitución y la ley. No podemos dejar ahora que cosas pequeñas, o el relevo de un ministro, entorpezcan el proceso. ¡Tenemos que mirar el bosque y no solamente el árbol!"

Hechas estas reflexiones, con la tranquilidad de haber expuesto cada uno, sin tapujos ni presiones, nuestros puntos de vista, sostuvimos un diálogo mucho más distensionado y hablamos de varios temas relacionados con el proceso de paz. Ya para finalizar el general Tapias me insistió en la idea que ya había manifestado Mora:

—Mire, presidente, a veces los generales no han tenido buena química con Víctor G., se sienten desplazados, sienten que no tienen contacto ni suficiente información, y en algunas ocasiones no sabemos qué decirles. Por eso le propongo esto: ¿Por qué no hacemos una reunión suya con todos los generales y almirantes del país para hablar, como acabamos de hacerlo, con toda franqueza y libertad, y permitirles que se desahoguen y le expongan sus opiniones y preocupaciones? Ellos están en buena tónica y agradecerían mucho esta oportunidad.

Estuve de acuerdo, y le pedí al general Tapias que organizara la reunión lo más rápido posible, la cual tuvo lugar dos días después, el 28 de mayo, en la base de Tolemaida en Melgar.

Paradójicamente, mientras nosotros hablábamos cordial y abiertamente en la Casa de Huéspedes, el país entero se debatía en la incertidumbre de lo que pasaba, con el ambiente caldeado por la irresponsabilidad de algunos medios que insinuaban la posibilidad de un golpe militar, que nunca siquiera estuvo en la mente de los oficiales. También mis colegas presidentes asistentes a la Cumbre estaban pendientes de la situación. Todos me manifestaron su apoyo y se mostraron listos a respaldar la institucionalidad colombiana en caso de que surgiera algún problema. Por fortuna, a pesar de lo que se ha querido vender después como un "ruido de sables" que puso en peligro mi presidencia, la institucionalidad nunca estuvo en peligro ese 26 de mayo.

No obstante, consciente del peso de los rumores, les propuse a los miembros de la cúpula que me acompañaran a una rueda de prensa, que saliera al aire antes de los noticieros de las 9 de la noche, para desvirtuar todas las especulaciones que se habían generado durante el día, en lo cual ellos estuvieron de acuerdo. Encargué a Guillermo Fernández de Soto que fuera preparando una declaración para leerla en el Centro de Convenciones, donde se realizaba la Cumbre Presidencial Andina. Para dirigirnos allá, tomamos una lancha en el muelle de la Casa de Huéspedes. En ella Guillermo y Camilo, bajo la luz de una linterna, fueron redactando a mano el comunicado que se iba a leer.

Ya en el Centro de Convenciones, los seis altos oficiales de la cúpula y yo asistimos a la rueda de prensa. Le di primero la palabra al general Tapias y él

ratificó ante los medios y el país el respaldo de las Fuerzas Militares a las decisiones del Gobierno y al proceso de paz, así como el respaldo institucional al jefe del Estado como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo, por mi parte, les agradecí dicho apoyo y agregué lo siguiente:

"Hoy más que nunca el Gobierno y sus Fuerzas Armadas están profundamente unidas e identificadas en el propósito nacional en la búsqueda por la paz. Quiero reiterar mi respaldo y mi confianza a la Cúpula Militar. Ellos continuarán prestando su patriótico servicio a la Nación".

Así retornó la calma al país. Respecto a los generales y coroneles del Ejército que habían enviado sus renunciaciones al Comando del Ejército, éstas simplemente no les fueron tramitadas, entendiendo que se habían presentado bajo el calor de un ambiente enrarecido por la desinformación.

Dos días después se dio la reunión de Tolemaida con todos los altos oficiales del país, la cual fue, al comienzo, un poco tensa, pero pronto se convirtió, como había sido el encuentro con la cúpula, en un interesante y provechoso ejercicio de desahogo, sobre todo respecto al proceso de paz y las decisiones de la Procuraduría, que siempre fueron un continuo motivo de queja por parte de los militares.

En cuanto a la pretendida prórroga permanente de la Zona, pronto los militares y el país tuvieron tranquilidad al respecto. El 4 de junio de 1999 prorrogué su vigencia por seis meses más y, en adelante, todas las extensiones de la misma respondieron a situaciones determinadas y nunca fueron de carácter indefinido.

Así culminó un incómodo episodio que jamás debió haber pasado a mayores y que nunca, por otra parte, representó un peligro para la democracia y la institucionalidad del país.

A Rodrigo Lloreda, cuya actitud y renuncia me dolieron en el alma, nunca más lo volví a ver.

Sin embargo, el canciller Fernández de Soto sí tuvo oportunidad de reunirse con él en Nueva York, pasado el tiempo, cuando los ánimos se habían calmado y él afrontaba con estoicismo los rigores de un pesado tratamiento.

Entonces, Lloreda le confió lo siguiente:

—Mire, Guillermo, a pesar de las discrepancias y las diferencias que pudimos tener en ese momento, yo sé que probablemente el momento de mi salida no fue el más oportuno. Lo que pasa es que yo estaba muy exasperado con los rumores sobre la Zona, pero hoy lo único que aspiro es a que el proceso salga bien, que salga adelante, porque es lo que el país necesita.

Y agregó:

—Yo sé que los metí en un lío muy grande, porque ustedes tenían allí a los presidentes ese día.

El 13 de enero de 2000, el ex ministro Lloreda falleció, víctima de la enfermedad que lo aquejaba, y recibió los honores que correspondían a su larga trayectoria pública.

El compromiso del gobierno Clinton

En 1998 habíamos conseguido por primera vez, en lo que se denominó "un presupuesto de emergencia", patrocinado por el representante Dennis Hastert, pasar de la ayuda típica que recibía el Gobierno colombiano de los Estados Unidos, que oscilaba alrededor de 70 millones de dólares, a una de 300 millones de dólares.

El año 1999 comenzó con una actitud de espera y de observación de los Estados Unidos frente a los avances del incipiente proceso de paz, con las dificultades ya comentadas, generadas, sobre todo, por el vil asesinato por parte de las FARC de los tres indigenistas de ese país. Hacia el segundo trimestre esa expectativa se había convertido en angustia pues el proceso no avanzaba al ritmo que se esperaba y en Washington había inquietud por la capacidad real del Estado colombiano para derrotar a la guerrilla y por el eventual fortalecimiento de ésta.

Por fortuna, le habíamos pedido a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, que pusiera a una persona de su mayor confianza y del más alto nivel a cargo de apoyar los esfuerzos del Plan Colombia, y la persona elegida fue nada menos que Thomas R. Pickering, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. El embajador Pickering, hombre inteligente y afable, era un diplomático con más de 40 años de experiencia al servicio del Departamento de Estado, que había asumido con éxito complejos encargos en su país, en Nigeria, en El Salvador, en Israel, en la India y en Rusia. Precisamente, en El Salvador había hecho importantes aportes a su proceso de paz. Así que contábamos con un excelente aliado para impulsar desde el Gobierno los recursos estadounidenses para el Plan Colombia.

"¡NO QUIERO REPETIR UNA LLAMADA COMO ÉSTA!"

La primera reunión de Pickering con Luis Alberto Moreno tuvo lugar en un almuerzo en la Embajada colombiana en Washington, en el mes de mayo del año 1999. El subsecretario le transmitió la preocupación del gobierno norteamericano sobre el proceso de paz y le dijo a Moreno que tenía instrucciones de la secretaria de Estado para dedicarle una parte importante de su tiempo

a lo que consideráramos más importante, y que deseaba venir a Colombia para reunirse conmigo y analizar la mejor manera en que podían contribuir. Finalmente se acordó que nos visitara en agosto de ese mismo año.

Entre tanto, en el Congreso estadounidense se comenzaba a ver con preocupación el aumento que habían tenido los cultivos de coca en los últimos años, y existía un consenso para actuar contra el problema de las drogas de forma rápida y contundente, coyuntura que aprovechamos para impulsar la idea de crear una brigada contra el narcotráfico, como un componente esencial de la cooperación militar que nos podían brindar.

Luis Alberto trabajó con Dennis Hastert, quien a la sazón ya era presidente de la Cámara de Representantes, y con Trent Lott, líder de la bancada republicana en el Senado, una carta que ellos le dirigieron al presidente Clinton. En ella le decían, después de analizar la situación, que había llegado el momento de hacer algo importante por Colombia. Esta comunicación coincidió con la llegada del embajador Pickering a Bogotá, la cual acompañó la secretaria de Estado, Madeleine Albright, con un sesudo artículo sobre la situación colombiana publicado en *The New York Times*, que concluyó con el siguiente párrafo:

"El pueblo colombiano está pasando por una crucial prueba de su democracia, una prueba que deben pasar ellos mismos. Pero deben saber que comprendemos muchas de las dimensiones, de los problemas a los que se enfrentan a largo plazo, y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles".

El artículo, que inicia haciendo referencia a la muerte de cinco estadounidenses y dos colombianos en un accidente de avión ocurrido en desarrollo de una misión antinarcóticos, posterior al asesinato de los indigenistas norteamericanos, cumplía también con el propósito de mostrarles a las FARC la firmeza del compromiso de los Estados Unidos con el pueblo colombiano y su disposición a fortalecer no sólo las instituciones en Colombia, sino también, y fundamentalmente, las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando vislumbramos la posibilidad de un apoyo más importante por parte de los Estados Unidos.

Nos reunimos con Pickering durante toda una mañana y almorzamos en el Palacio de Nariño, acompañados por los altos mandos militares y los principales ministros del gabinete. El subsecretario nos planteó, para nuestra grata sorpresa, la posibilidad de buscar un apoyo de los Estados Unidos no por un año, sino para los tres años que me quedaban de gobierno. Su propuesta coincidía perfectamente con esa especie de Plan Marshall al cual yo me había referido en mi campaña, que había sido la semilla del Plan Colombia y que estaba, además, incluido en el Plan de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz". De tal forma que ya teníamos una gran parte del trabajo adelantado. Lo que restaba hacer era reorganizar el Plan de tal manera que nos sirviera para convocar la importante ayuda norteamericana, así como la de otros países y organismos internacionales.

La responsabilidad de este trabajo quedó en cabeza de Jaime Ruiz, como alto consejero para Asuntos Políticos, en coordinación con Luis Alberto Moreno, en Washington, y con Mauricio Cárdenas, director de Planeación Nacional. Ellos dedicaron lo que quedaba del mes de agosto a la preparación y perfeccionamiento del Plan, tanto que Jaime Ruiz pasó prácticamente la mitad del mes en Washington avanzando sobre el mismo. Nuestro objetivo era tenerlo escrito para la primera semana de septiembre, pues la idea era presentarlo ante la comunidad internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada como siempre para dicho mes. Además, yo podría aprovechar para reunirme otra vez con el presidente Clinton en Nueva York y exponerle personalmente el Plan, no sin antes anunciarlo y presentarlo en Colombia, tal como lo hice en una alocución al país el 17 de septiembre, con las siguientes palabras:

"Desde hace un año impulsamos las estrategias que presentaremos a toda la comunidad mundial, las cuales recogen, desde nuestro punto de vista, el equilibrio y la alianza igualitaria que debe existir entre los diversos países afectados por el narcotráfico. Este conjunto de propuestas lo llamaremos Plan Colombia para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado.

"Se trata de un plan que enfrenta el desafío de la arremetida del narcotráfico y sus perversos efectos, y que debe tener como resultado el fortalecimiento de nuestro Estado, como un requisito primordial para el logro de la paz y el progreso. Y es que, además, para recibir la cooperación, eso es lo primero que debemos hacer: darle fuerza a nuestra democracia.

"Es un plan compuesto por cinco estrategias que toca temas fundamentales del país como el proceso de paz, la reactivación de nuestra economía y generación de empleo, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción, el mejoramiento de la justicia, el aumento de la participación social y la protección de los derechos humanos".

Por la premura del tiempo para presentar rápidamente el Plan ante la comunidad internacional y ante el Gobierno y el Congreso estadounidense, de forma que avanzáramos rápidamente en la consecución de recursos, el texto definitivo se elaboró primero en inglés y luego en español. Por este motivo se dijo durante meses que el Plan Colombia había sido hecho e impuesto por los Estados Unidos sin tener en cuenta la opinión de los colombianos, cuando se trataba exactamente de lo contrario: era un plan hecho por Colombia para los colombianos, pero con el objetivo clarísimo y deliberado de obtener cuantiosos y necesarios recursos internacionales en su apoyo.

En la reunión que sostuve con el presidente Clinton en Nueva York, en septiembre de 1999, pusimos a andar el proceso de respaldo al Plan Colombia. Sin embargo, a finales de octubre, el embajador Moreno me informó que los recursos para el Plan, que esperábamos que se aprobaran antes de culminar el año, tenían muchas dificultades para pasar en el Congreso norteamericano, pues había un duro enfrentamiento entre demócratas y re-

publicanos, en el que estos últimos cuestionaban la política presupuestal del gobierno Clinton, lo que dejaba las pretensiones de Colombia en la mitad del sándwich. Ante esta situación, comenzamos una intensa labor de *lobby*, y le di instrucciones al embajador Moreno de visitar a la mayor cantidad de congresistas posibles, en tanto yo ayudaba también a presionar, llamando o invitando al país a congresistas estadounidenses.

Un personaje que nos dio la mano en este esfuerzo, gracias a su credibilidad en los Estados Unidos, fue Javier Solana, a quien contacté en Europa y siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Solana —quien acababa de dejar su cargo como secretario general de la OTAN y estaba asumiendo el de Alto Responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y secretario general del Consejo de la Unión Europea— es muy amigo del presidente Clinton y nos brindó un respaldo significativo, enviando mensajes sobre lo que la comunidad internacional tenía que hacer por Colombia y sobre la urgencia de esta acción.

El embajador Moreno me pidió también que llamara a Janet Reno, procuradora de los Estados Unidos, a quien le comenté que ya habíamos presentado el Plan y le solicité que nos ayudara al interior del Gobierno. Aunque ella no era propiamente una funcionaria predilecta de Clinton, siempre era escuchada y reconocida por su franqueza y objetividad. Fue así como, en una de las reuniones de gabinete, cuestionó duramente la demora en respaldar el Plan Colombia, diciendo que los problemas de nuestro país no daban más espera. Con ella, y cuantas otras personas influyentes tuvimos acceso, pusimos a sonar continuamente el tema de Colombia en el interior del Gobierno norteamericano.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, Moreno me llamó en noviembre, apesadumbrado, para anunciarme que el presupuesto de apoyo al Plan Colombia no alcanzaba a salir antes de terminar 1999 por los problemas de la política interna estadounidense. Ésta era una noticia grave, más aún por la difícil situación económica que vivía el país, que sufrió en dicho año las consecuencias de los problemas económicos del pasado, cuya inercia nos llevó al peor comportamiento del PIB en mucho tiempo.

Para no perder el impulso, y dejar saber a los actores económicos que el Plan seguía adelante, el embajador Moreno consiguió que el presidente Clinton me llamara para reiterarme su respaldo. Esa llamada se produjo justamente después de la primera extradición de un colombiano a los Estados Unidos luego de diez años sin utilizar este mecanismo¹⁵. Además coincidió con el estallido de un carro bomba en Bogotá, que revivió el pánico de los colombianos, recordando los duros años del narcoterrorismo, y suscitó crí-

¹⁵ Durante mi gobierno autoricé 111 extradiciones, de las cuales 78 fueron a los Estados Unidos. Aparte de éstas, el 7 de agosto de 2002, al terminar mi período, quedaron 51 solicitudes de extradición bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

ticas sobre el insuficiente respaldo de los Estados Unidos frente a la lucha contra las drogas que librábamos en el país, a costa de vidas inocentes.

Cuando recibí la llamada del presidente Clinton, un día sábado, le expresé sin ambages que Colombia necesitaba más que nunca del compromiso norteamericano y de su apoyo; que la situación política y económica se estaba tornando cada vez más difícil, y que no era justo que cuando el Gobierno colombiano construía un puente para encauzar la ayuda norteamericana, como lo era el Plan Colombia, al final nos quedáramos apenas con nuestro lado construido, sin que las autoridades estadounidenses hicieran todo lo posible para levantar su parte. También le dije, con absoluta franqueza, que, mientras Colombia cumplía con compromisos internacionales reactivando el mecanismo de la extradición, lo que la opinión pública percibía era que Estados Unidos no estaba dando nada a cambio y nos estaba dejando solos con el Plan Colombia.

Una vez colgué, hablé con el embajador Moreno en Washington, que llamó inmediatamente a dos personas que él sabía que estaban en ese momento con Clinton. Ellos le refirieron que el presidente había colgado muy preocupado y que les había dicho que no quería volver a tener en su vida una llamada como ésta. Según sus palabras, se sentía mal al ver cómo todo un pueblo y su presidente hacían esfuerzos por la paz y contra el narcotráfico sin una adecuada reciprocidad y reconocimiento por parte de los Estados Unidos.

Después de esta llamada se terminó de consolidar en el Gobierno norteamericano —y particularmente en el presidente Clinton, con quien siempre tuve una buena relación— la idea de que algo importante y urgente había que hacer por Colombia.

El 10 de noviembre, el presidente estadounidense dio una extensa y significativa declaración en la Casa Blanca, que reafirmó su compromiso con nuestro país, con frases como las siguientes:

"[...] El presidente Pastrana ha presentado una completa agenda —Plan Colombia— para enfrentar los problemas más difíciles de la nación. Pero los obstáculos para un mejor futuro de Colombia no son despreciables [...]"

"Por lo tanto, estoy muy complacido de saber que el proyecto de ley de cooperación y ayuda internacional, el cual espero que sea aprobado por el Congreso, incluye los 78 millones de dólares solicitados para este programa, para ayudar al presidente Pastrana en la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia."

"[...] Mi presupuesto para el año 2000 financiará esfuerzos para ayudar en esta lucha tales como extinción de dominio y asistencia y entrenamiento militar, en monto superior a 70 millones de dólares. Al comenzar este otoño aprobamos 58 millones de dólares adicionales para combatir el narcotráfico en Colombia. Y anticipamos que daremos ayuda adicional, incluyendo la ayuda de la DEA, el desarrollo alternativo y mayor capacidad para donar equipos disponibles."

Aunque continuaremos apoyando el Plan Colombia con los recursos existentes, es necesario obtener más recursos si queremos tomar la delantera para ganar la batalla contra las drogas y ayudar a Colombia a consolidar una democracia estable [...]”.

Mientras tanto, en octubre del mismo año 1999, yo había comenzado a tener un acercamiento con el entonces gobernador del estado de Texas, George W. Bush, quien comenzaba a aparecer en las encuestas como firme postulante a candidato republicano para el siguiente período presidencial. Fue en desarrollo de un viaje a Houston, el corazón de la industria petrolera, a donde fui para dar una charla sobre nuestra nueva política y legislación que estimulaba la inversión y exploración en el sector petrolero, en el marco de un foro consular en el que Colombia era el invitado de honor. El mismo ex presidente George Bush —padre del futuro candidato y presidente— hizo mi presentación en el foro, con lo cual nos aseguramos un gran impacto, pues su sola presencia garantizaba la asistencia de los más grandes ejecutivos de la industria petrolera mundial.

Tuvimos un cordial desayuno con el ex presidente Bush en casa de uno de sus más cercanos amigos, y fuimos después a Austin, Texas, a entrevistarnos con su hijo, el gobernador George W. Bush. Fueron cerca de dos horas de conversación, en las que buscamos obtener su apoyo al Plan Colombia y a las políticas de respaldo a nuestro país, temas frente a los cuales se mostró muy interesado.

En su momento Horacio Serpa, mi antiguo contendiente en la campaña electoral, calificó esta visita como un acto de “lagartería internacional” y de falta de conocimiento de la política exterior, por ir a visitar a un líder de la oposición al gobierno Clinton, una afirmación que los hechos, como hoy resulta obvio, se encargaron de desvirtuar.

Esta reunión le dio la oportunidad al embajador Moreno de conocer a Joshua B. Bolten, quien sería luego la persona encargada de manejar el tema del presupuesto en el Gobierno estadounidense. Fue entonces, además, cuando comenzó a conocer y a hablar con quienes iban a convertirse en las principales figuras del gobierno del presidente George W. Bush a partir de enero de 2001, unas relaciones que han resultado de inmenso valor para Colombia tanto en los últimos meses de mi período como en el gobierno del presidente Uribe.

El año 1999 terminó, entonces, con la frustración de no haber conseguido los grandes recursos que necesitábamos para el Plan Colombia, tal como lo deseábamos, salvo los enumerados por el presidente Clinton en su declaración del 10 de noviembre, que resultaban insuficientes frente a las inmensas necesidades del país. Por otro lado, nos quedaba la tranquilidad de que habíamos sembrado, gracias a una continua gestión diplomática, la semilla de una ayuda mucho mayor que habría de germinar en el año 2000.

UN PLAN DE 7.500 MILLONES DE DÓLARES

Cuando comenzamos a elaborar el Plan hubo una gran discusión al interior del gobierno sobre cuál iba a ser el monto necesario para los próximos tres años. Jaime Ruiz indagó por todas las esquinas del presupuesto colombiano para determinar cuánto era realmente lo que Colombia se gastaba en la lucha contra el narcotráfico, no sólo por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, sino también por la Fiscalía y otras agencias del Estado colombiano, y después de sumar y sumar llegó a la cifra de 1.050 millones de dólares, a la tasa de cambio de esa época. Eso significaba que en tres años podríamos hablar de alrededor de 3.300 millones de dólares. Igualmente tuvimos en cuenta cerca de 800 millones de dólares recaudados con los bonos de paz, que estaban listos para ser invertidos en las zonas de mayor violencia en el país.

Aparte de esto, cuando recurrimos al Fondo Monetario Internacional y suscribimos un acuerdo a fines de 1999, habíamos logrado algo que nunca se había tenido con esta entidad, y es que se considerara factible aumentar el endeudamiento del país para la inversión social, es decir, para adelantar programas a favor de los más pobres de Colombia, sin que se contabilizara dicho endeudamiento en el déficit fiscal.

Gracias a esto, se contrataron créditos con entidades internacionales, particularmente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, por 900 millones de dólares para financiar programas de alto impacto social, con énfasis en las zonas de conflicto, en lo que llamamos la Red de Apoyo Social. Ésta incluía componentes tan importantes como "Familias en Acción", "Jóvenes en Acción" y "Empleo en Acción", todos destinados a generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

Estos proyectos bandera de mi política social permitieron que la mano del Estado llegara, con soluciones y apoyo efectivo, a quienes más la necesitaban. Con "Familias en Acción", por ejemplo, entregamos subsidios directos para alimentación y educación a los hogares de menores recursos, alcanzando, al finalizar mi mandato, una cobertura de subsidios a 236.000 familias de 631 municipios del país, con una proyección a dos años de 330.000 familias y más de un millón de niños beneficiados.

Con "Empleo en Acción" apoyamos más de 3.800 proyectos comunitarios, como la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de canchas deportivas, parques y nuevas viviendas de interés social, generando 180.000 empleos temporales por todo el país.

En cuanto al programa "Jóvenes en Acción", a través del cual buscamos capacitar a los jóvenes desempleados de bajos recursos, mejorando su inserción en el mercado laboral, dejamos entrenando a 50.000 jóvenes colombianos y destinamos recursos para la continuidad del programa hasta alcanzar a más de 100.000.

Es bueno poder decir que el gobierno del presidente Uribe ha dado continuidad a estos programas, que constituyen el corazón social del Plan Colombia, los cuales se financiaron, en un principio, con esos 900 millones de dólares que habíamos obtenido de la banca internacional.

Así pues, sumando el presupuesto comprometido en la lucha contra el narcotráfico (us\$3.300 millones), los recursos de los bonos para la paz (us\$800 millones) y los créditos para inversión social (us\$900 millones), teníamos prácticamente 5.000 millones de dólares destinados a la financiación de componentes del Plan Colombia.

¿Y cómo obtuvimos la cifra de 7.500 millones de dólares, que fue la que estimamos, finalmente, como valor total del Plan? Hubo muchas discusiones y propuestas, pero en esencia llegamos a la conclusión de que había que plantear a los Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional un paquete ambicioso, en el que, más que pedir una cifra cualquiera, se pudiera demostrar que por cada dólar entregado por la comunidad internacional Colombia estaba poniendo dos. Fue así como, después de un análisis ponderado, llegamos a la cifra de us\$7.500 millones, desagregados así: us\$5.000 millones de aporte nacional y us\$2.500 millones de aporte internacional.

Es importante aclarar que, en el tema de la ayuda internacional al Plan Colombia, si bien Estados Unidos fue el principal aportante, no fue el único. Acudimos también a entidades internacionales como las Naciones Unidas, a los países de la Unión Europea y a otros, como Canadá, Japón, Noruega y Suiza. Todos ellos comprometieron importantes recursos para apoyar el proceso de paz, ayudar a las víctimas del conflicto, promover programas de protección de los derechos humanos, proteger el medio ambiente y estimular la constitución de "laboratorios de paz" en zonas particularmente afectadas por la violencia.

Estos ofrecimientos, unidos a créditos blandos de los mismos países y de la banca internacional, fueron concretados a través de diversas reuniones de lo que se denominó el Grupo de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia o Mesa de Aportantes, y alcanzaron la nada despreciable suma de 1.300 millones de dólares. En el 2000 se realizaron una reunión preparatoria en Londres y dos reuniones ya formales en Madrid y en Bogotá, y en el 2001 se efectuó una nueva reunión en Bruselas, a través de las cuales se consolidó el panorama de la ayuda internacional al país.

Si bien los países europeos eran reacios a realizar aportes específicos para el Plan Colombia, así denominado, pues habían caído en la lamentable confusión —generada por los medios, la misma guerrilla y algunas ONG— de asimilarlo a un plan militarista, sus aportes iban destinados a nuestro Plan de Inversión Social y Fortalecimiento Institucional que, en el fondo, no era más que otra faceta del mismo Plan Colombia.

En esto debíamos ser pragmáticos y aplicar el conocido aforismo de Deng Xiaoping: *"Qué importa si el gato es blanco o negro. ¡Lo importante es que cace ratones!"*.

EL PRIMER "PAQUETE DE APOYO"

En diciembre de 1999, el embajador Moreno dedicó buena parte de sus vacaciones a trabajar con el subsecretario Pickering el tema de la inclusión de los recursos para el Plan Colombia en el presupuesto de ayuda estadounidense. Pickering se sentía muy frustrado de que no se hubiera avanzado todo lo rápido que queríamos y nos ayudó a negociar con la Oficina de Presupuesto cuál sería el monto final del presupuesto de emergencia que se presentaría en el año 2000.

Finalmente, para nuestro alivio, el gobierno del presidente Clinton decidió en los últimos días de 1999 solicitar 1.600 millones de dólares al Congreso norteamericano como apoyo excepcional al Plan Colombia, lo cual informó públicamente el presidente Clinton el 11 de enero de 2000:

"Hoy presento al Congreso un necesario paquete de apoyo para asistir a Colombia en los esfuerzos vitales realizados para mantener fuera de nuestras costas las drogas ilegales. Tal apoyo también ayudará a Colombia a promover la paz, la prosperidad y fortalecer la democracia. Como complemento a nuestros esfuerzos actuales, el paquete de ayuda durante este año y el próximo año será de 1.600 millones de dólares.

"[...] El presidente Pastrana ha actuado con una atrevida agenda: el Plan Colombia. La propuesta contiene una estrategia sólida y multifacética que Estados Unidos debe apoyar con suficiente ayuda. [...]"

"En el año fiscal 2000 una gran parte de nuestra ayuda estará enfocada hacia una única inyección de fondos que conviertan en más efectivas las capacidades de interdicción y erradicación, particularmente en el sur del país. El paquete de ayuda incluye también asistencia para el desarrollo económico, la protección de los derechos humanos y la reforma judicial.

"Nuestra ayuda bilateral a Colombia será complementada por agencias multilaterales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están considerando millones de dólares en préstamos a Colombia el próximo año. El FMI ha comprometido un fondo de 2.700 millones de dólares para reactivar la economía; continuaremos animando a nuestros aliados para que asistan a Colombia".

Puede imaginarse el tamaño de nuestra satisfacción. ¡Habíamos conseguido, finalmente, el compromiso del Gobierno estadounidense con el más grande paquete de ayuda no reembolsable jamás entregado a Colombia!

Ahora nos quedaba el trabajo, nada despreciable, de impulsar la aprobación final del mismo en las dos Cámaras del Congreso norteamericano.

CAPÍTULO XXI

El despertar de la Fuerza Pública

Durante el año que siguió a la fallida toma de Mitú, que cambió para siempre la ecuación de la guerra en Colombia, comenzó en firme el proceso de reestructuración y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que se adelantó y perfeccionó durante todo mi gobierno.

Hay que entender que éste es un proceso largo y dispendioso que no se puede dar de un día para otro, así se cuente con los recursos para hacerlo. Un proceso serio de cambio en un ejército implica, más allá de tener mejores equipos o reclutar más soldados, diseñar una nueva estrategia de logística, movilización y combate, y dar adecuado entrenamiento a la tropa que se va incorporando, para lo cual se requiere capacitar y promover nuevos cuadros de mando.

Todo esto lo hicimos progresiva y sostenidamente hasta alcanzar el profesionalismo y la fortaleza de la renovada Fuerza Pública que tuve la satisfacción de entregar al finalizar mi mandato.

No obstante, aún en los primeros meses de gobierno, en medio del proceso de entrenamiento y redefinición, las Fuerzas Militares no cejaron ni un segundo en su tarea ofensiva contra los grupos armados ilegales. Ya en 1999, afianzando una nueva y positiva moral que contrastaba con la actitud derrotista de mediados de 1998, se lograron operaciones militares tan exitosas como las de Puerto Rico (Caquetá), Puerto Lleras (Meta) y Hato Corozal (Casanare), que significaron estruendosas derrotas para las FARC. Se trataba, además, de municipios colindantes o cercanos a la Zona de Distensión, lo que demostró, sin lugar a dudas, que las Fuerzas Militares estaban operando en todo el territorio nacional, incluso en proximidades de la Zona, sin ninguna clase de cortapisas. No más en Hato Corozal, en una impactante operación aérea, se dio de baja a 45 guerrilleros, y en Puerto Rico y Puerto Lleras a 110.

Exactamente un año después de la batalla de Mitú, y después de sufrir estos y otros reveses en el campo de batalla, las FARC intentaron nuevamente, en noviembre de 1999, tomar una capital departamental en el medio de la selva, y acabaron asimilando la lección de que esta clase de objetivos habían quedado para siempre fuera de su alcance.

Esta vez el escenario fue Puerto Inírida, la capital del departamento de Guainía, otra pequeña población de la Orinoquia colombiana, también de un poco más de 6.000 habitantes, próxima a la frontera con Venezuela.

De nuevo, más de mil efectivos de las FARC se desplazaron hasta Inírida en el intento de tomarse la población, pero esta vez no contaron con la ventaja del factor sorpresa. Nuevos mecanismos de inteligencia y la recién puesta en marcha Brigada Fluvial de Infantería de Marina, que no se tenían tan sólo un año atrás, hicieron previsibles sus movimientos y permitieron repeler el ataque en una acción conjunta donde la Policía Nacional y la Infantería de Marina, a través de la nueva brigada, tuvieron destacado protagonismo, contando siempre con la profesional y certera ayuda de la FAC, con sus aviones y sus helicópteros "Arpía".

Después de este fallido intento, las FARC no tuvieron más remedio que replegarse aún más en sus objetivos de avance estratégico. Ya no sólo tuvieron que desistir de su pretendido salto a una guerra de dominio territorial, sino que también acabaron por abandonar la guerra de movimientos ante la imposibilidad de mover pequeños ejércitos sin ser detectados por la Fuerza Pública. Finalmente, regresaron a la antigua guerra de guerrillas, en una muestra de debilidad y vulnerabilidad, y, tristemente, terminaron derivando hacia funestas prácticas terroristas, con acciones perversas y cobardes contra la sociedad civil.

"¡A LA OFENSIVA, POR COLOMBIA!"

Aquí es importante hacer una reflexión, porque muchas veces se especuló respecto a que mi gobierno, en un afán por obtener resultados en el proceso de paz, contenía la ofensiva militar contra la guerrilla o suspendía o dilataba operativos militares. Nada más falso. Como lo pueden atestiguar todos los comandantes militares y de policía, empezando por los altos mandos, mi orden constante durante todo el período fue la de avanzar con decisión y contundencia frente a todos aquellos que usaran la violencia contra los colombianos. Mi instrucción expresa fue la de estar siempre y en todo momento a la ofensiva.

Por supuesto, teníamos una Zona de Distensión de 42.000 kilómetros cuadrados donde estábamos comprometidos a no realizar operaciones militares para darle una oportunidad a la solución negociada del conflicto, pero siempre les insistí a los comandantes en algo muy simple: Colombia tenía un millón cien mil kilómetros cuadrados por fuera de dicha Zona —¡más del 96% del territorio nacional!— y en todos y cada uno de ellos nuestra Fuerza Pública estaba en la obligación no sólo de hacer presencia sino de perseguir a los delincuentes y a los violentos con toda la eficacia y la contundencia necesarias para aplicarles el peso de la ley.

"¡A la ofensiva, por Colombia!" fue una frase que repetí muchas veces en mis discursos ante las distintas fuerzas, invitándolos a obrar en todo momento en desarrollo de su sagrada misión constitucional.

Como bien lo ha dicho el mismo general Tapias, él jamás recibió una orden para suspender o detener las operaciones en sectores distintos a la Zona de Distensión. Si alguna vez se suspendieron fue por lapsos de horas, en sitios determinados, para facilitar un intercambio humanitario o la devolución de secuestrados y, tan pronto se daba la liberación, se reanudaban inmediatamente.

Después del éxito militar en Mitú, algunos habían pensado, con explicable escepticismo, que se trataba de un caso aislado, o tal vez fortuito. No obstante, más pronto que tarde, nuestras Fuerzas Armadas, cada vez más profesionales y mejor dotadas, demostraron que el cambio de la ecuación de fuerzas no sólo era permanente sino, además, creciente.

Entre muchas operaciones exitosas realizadas entre 1999 y el primer semestre de 2002, aparte de las ya mencionadas de Puerto Rico, Puerto Lleras, Hato Corozal y la que evitó la toma de Puerto Inírida, recuerdo particularmente algunas que tuvieron especial significación por haber sido contundentes al golpear centros neurálgicos de los grupos armados ilegales, todas ellas llevadas a cabo con una coordinación conjunta de las diferentes fuerzas, como no se había visto nunca antes:

Con las operaciones "Berlín" en Santander (73 guerrilleros dados de baja y 139 capturados) y "Siete de Agosto" en los departamentos de Meta y Guaviare, ambas en el 2001, se dismantelaron prácticamente dos columnas móviles de las FARC, una que se dirigía hacia el noreste colombiano y otra de más de mil guerrilleros que pretendía recuperar el terreno perdido en el sureste, especialmente en los departamentos de Vichada y Guainía. En esta última se dio de baja, además, al comandante de la columna, alias Urías Cuéllar.

Precisamente, los dos citados antiguos territorios nacionales fueron también testigos de otra exitosa y reconocida operación militar, llevada a cabo por la novedosa Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), comandada por el general Carlos Alberto Fracica, con el apoyo de otras unidades del Ejército y de la Fuerza Aérea. Me refiero a la operación "Gato Negro", en marzo y abril de 2001 (14 bajas y 64 capturas), que dismanteló la infraestructura que tenían montada las FARC en las selvas colombianas para la producción y tráfico de cocaína y armas, y terminó con la captura y deportación al Brasil del más buscado narcotraficante brasileño, Fernandinho.

Con la operación "Bolívar", desarrollada en febrero de 2001, en la zona del Magdalena Medio, en especial en la región comprendida entre Yondó (Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar), se atacó a todos los grupos armados al margen de la ley que operaban en el área: FARC, ELN y paramilitares, al

tiempo que la Policía realizó una fuerte acción de fumigación de cultivos de coca. La operación dio como resultado la captura de varios hombres de las tres organizaciones criminales y el allanamiento y destrucción de sus campamentos, incluyendo una verdadera fortaleza que habían construido las autodefensas ilegales al norte del municipio de Santa Rosa.

De principal importancia fue la lucha por el control del corredor del Sumapaz, a pocos kilómetros de Bogotá, que las FARC venían utilizando por años como el siniestro corredor del secuestro y la extorsión, por donde llevaban y trafican a sus víctimas, aprovechando la posición estratégica y despoblada de esta área que colinda con los departamentos del Tolima, Huila, Caquetá y Meta. En combates que duraron meses, con difíciles pero sostenidos avances territoriales, se logró finalmente sacar a las FARC de este corredor, llegando al núcleo mismo de su Frente 53, abatiendo a 16 guerrilleros, entre ellos Miller Perdomo, hombre de confianza de Romañía y el Mono Jojoy, y consolidando luego la presencia del Ejército con la construcción y dotación de un batallón de alta montaña en el municipio de Cabrera, en el eje mismo del Sumapaz.

Resulta difícil de creer que por tantos años hubiera podido sostenerse esta dramática situación, con una guerrilla amenazante a sólo 90 kilómetros lineales de la capital del país, sin que se hubiera realizado una operación de semejante envergadura y urgencia. Felizmente, hoy se ha revertido esta ominosa presencia guerrillera y las FARC perdieron en el Sumapaz su más estratégica vía de comunicación y de acceso a Bogotá.

Otra operación de gran importancia fue la denominada "Tsunami", donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, combinando sus fuerzas, lograron dar un golpe contundente a la funesta sinergia que tenían en Nariño las guerrillas y los grupos de autodefensa con el negocio del narcotráfico.

También en Nariño y en el Cauca se desarrolló una de las más contundentes operaciones, esta vez en cabeza de la Fuerza Naval del Pacífico, con apoyo del Ejército, contra los grupos ilegales de autodefensa, logrando la captura de más de 70 delincuentes, muchos de los cuales habían participado en las crueles masacres de indígenas y campesinos en la región del Alto Naya.

Es indispensable reseñar la tarea profesional y efectiva que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas a partir de la medianoche del 20 de febrero de 2002, momento en que se cumplió el plazo dado a las FARC para abandonar la Zona de Distensión después de la ruptura de los diálogos, motivada por su obstinada insistencia en el terrorismo.

En una operación que había sido meticulosamente planeada, las primeras en hacer presencia fueron las aeronaves de la FAC, que bombardearon objetivos específicos, y luego, con una precisión y contundencia que envidiaría cualquier ejército del mundo, entraron las tropas terrestres, ocupando en pocos días los cerca de 42.000 kilómetros cuadrados de la zona, con un sal-

do de 75 guerrilleros abatidos y 103 capturados, llevando, además, un parte de tranquilidad y de seguridad a la población civil que, después de años de haber prestado su territorio a la esperanza de paz del país, aguardaba con explicable incertidumbre el retorno de las fuerzas legítimas del Estado. Fue una operación impecable, a partir de la cual se ha consolidado cada vez más la presencia de las autoridades en los cinco municipios que hicieron parte de la Zona.

La Policía Nacional, por su parte, mantuvo su lucha denodada contra los delincuentes comunes y el crimen organizado, contra las mafias del narcotráfico y contra el secuestro, colaborando con las Fuerzas Militares siempre que fue necesario. Operaciones cuidadosamente planificadas, como las llamadas "Milenio" y "Milenio 2", realizadas en cooperación con autoridades policiales de Ecuador, Estados Unidos y México, dieron como resultado la captura de decenas de narcotraficantes y la extradición de muchos de ellos.

Como se ve, más que casos aislados o fortuitos, lo que se vivió en el cuatrienio 1998-2002 en materia de éxitos operacionales fue el resultado de una transformación definitiva e irreversible en nuestra capacidad militar. Cada victoria, cada acto terrorista que se prevenía, fue consecuencia de la poderosa determinación que se tuvo para fortalecer nuestros cuerpos armados, de un compromiso indeclinable que devolvió la moral a nuestras tropas y la fe a nuestra nación, y de un conjunto de medidas logísticas y legales que nos permitieron, al fin, voltear la baraja a favor de la sociedad colombiana en esta guerra injusta que nos ha sido impuesta por los grupos armados ilegales.

La guerrilla terminó por comprender que ya no le era posible, como antes, desplazar pequeños ejércitos de 200 o 300 combatientes, mucho menos columnas de más de 1.000 hombres, sin ser detectados por los elementos de inteligencia del Estado y sin encontrar la férrea oposición de unas Fuerzas Militares motivadas y bien preparadas, y se vio abocada a replegarse y a retomar su antigua y obsoleta guerra de guerrillas.

Así resumió la situación el analista Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad & Democracia, en una columna periodística de agosto de 2001, a propósito de la "Operación Siete de Agosto":

"Se evidencia una vez más que por cuenta de sus progresos —los de las Fuerzas Militares—, las mayores dificultades que tiene la guerrilla las encuentra en las zonas donde ayer campeaba a voluntad [...]. Los avances de inteligencia técnica, la mayor movilidad, el incremento del poder de fuego aéreo y la mayor flexibilidad operacional de las Fuerzas Militares le han restado a la guerrilla mucha libertad de movimiento".

En suma: con acciones contundentes, como las de Puerto Lleras, Puerto Rico, Hato Corozal, Puerto Inírida y el Sumapaz, y operaciones victoriosas como "Berlín", "Siete de Agosto", "Gato Negro", "Bolívar", "Tsunami" y "Tánatos" (la de ocupación de la antigua Zona de Distensión), además de afectarse la moral de la guerrilla, que desde entonces ha rehuido combates

directos con el Ejército Nacional, se logró una revalidación de la moral militar. Comprendimos, no sólo los hombres en armas sino todo el país, que la guerrilla, con sus métodos sucios, con su reclutamiento forzado de menores y sus armas terroristas, no era en absoluto invencible y que el poder ofensivo, el poder de la iniciativa, estaba, al fin, de nuestro lado.

Debe quedar claro que no sólo fortalecimos nuestra Fuerza Pública sino que tuvimos, en todo momento, la decisión política de actuar contra los grupos armados ilegales con toda la contundencia. Tanto fue así, que el mismo presidente Uribe, al llegar al Gobierno, reconoció implícitamente este hecho al ascender a quien fuera el comandante del Ejército durante todo mi período, el general Jorge Enrique Mora, al cargo de comandante general de las Fuerzas Militares, y al ratificar en sus cargos a los comandantes de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, buscando una continuidad en el exitoso accionar militar.

¿Cómo se cambió el signo de la ecuación de la guerra para ponerlo a favor del Estado colombiano? Fue gracias a un proceso concienzudo, escalonado y arduo que desarrollamos de la mano con los ministros de Defensa y los comandantes, el cual, por su trascendencia y por los efectos positivos que aún estamos viviendo, merecerá más adelante su propio capítulo.

CAPÍTULO XXII

“Vamos a mostrarles cómo funciona el mundo”

Definida la Agenda Temática en mayo de 1999, los nuevos negociadores del Gobierno —Pedro Gómez, Juan Gabriel Uribe, el general (r) José Gonzalo Forero, Camilo Gómez y Fabio Valencia, que era el único que venía del grupo anterior— sostuvieron una serie de reuniones con la guerrilla, dentro de las cuales se discutió un posible reglamento de la Zona de Distensión y se abordó el tema de la comisión de acompañamiento internacional, lo cual, a pesar de que había quedado pactado en el documento de Caquetania, las FARC se negaban a aceptar.

Finalmente, el 24 de octubre, en un acto multitudinario que tuvo lugar en la Uribe, Meta, al que asistieron unos 250 invitados nacionales e internacionales, incluyendo altos dignatarios del Estado y representantes de todas las vertientes políticas, y unos 8.000 campesinos de la región, se instaló formalmente la Mesa de Negociación. Es de resaltar que la Uribe ya había sido, 16 años atrás, el escenario de los trascendentales acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, que dieron inicio a la más larga tregua que haya declarado este grupo y que sirvieron de base para el nacimiento de la Unión Patriótica.

En dicho acto, marcado por la esperanza de avanzar con paso firme hacia la paz, el alto comisionado, Víctor G. Ricardo, fue aún más allá en su discurso, con una frase que auguraba los mejores desarrollos: *“Tengo la seguridad de que vamos para el cese al fuego”*.

En los meses que siguieron a la instalación, los negociadores trabajaron continuamente, alcanzando importantes acuerdos de metodología de trabajo, la conformación del Comité Temático Nacional y de un sistema de audiencias públicas, y el sistema de divulgación sobre el proceso de paz, entre otros temas.

Algo muy importante: gracias a la continua presión del Gobierno, se logró que las FARC decretaran, para la época navideña y de vacaciones de final de año, una tregua unilateral entre el 20 de diciembre de 1999 y el 10 de enero de 2000. Fue una pausa de tranquilidad para el agobiado pueblo colombiano, por desgracia la única que permitieron las FARC en todo mi gobierno.

UNA ESTRATEGIA CONTRA EL AISLAMIENTO

No cabe duda de que uno de los grandes problemas de la guerrilla colombiana —y, en general, de los grupos que hoy por hoy continúan recurriendo a la violencia como medio de lucha— es su aislamiento de la realidad local e internacional y la falta de interlocución y debate que existe entre sus miembros y la sociedad a la que atacan y a la que definen, de una forma simplista, como su enemigo. Este aislamiento ha llevado a los grupos guerrilleros a aferrarse a doctrinas e ideologías hoy revaluadas en todos los rincones del planeta, sin contemplar alternativas mucho más modernas y democráticas, que existen y son posibles en el actual contexto internacional de globalización e interdependencia.

Para superar este vacío, en el desarrollo del proceso de paz con las FARC se realizaron toda clase de reuniones y debates entre personas y grupos que, de otra manera, nunca se hubieran sentado en una misma mesa debido a sus posiciones antagónicas. Dichas reuniones obedecían al desarrollo de una estrategia diseñada para que las FARC tuvieran contacto con diversos representantes del Gobierno, de la política, de la empresa privada y de la comunidad internacional, y de esta forma ampliaran su espectro de apreciaciones sobre la situación del país y del mundo, y dieran también a conocer su pensamiento y sus divergencias sobre los diferentes tópicos. Si se pretende llevar a cabo una negociación con éxito, la primera tarea consiste en conocer bien a la otra parte, saber en qué se concuerda y en qué se difiere, y entender su concepción del mundo, y eso fue lo que procuramos hacer durante los más de tres años que duró el proceso.

Tal como le dije en su momento a Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, cuando le propuse que visitara la Zona de Distensión y se entrevistara con los líderes de las FARC, teníamos que mostrarle a la guerrilla “cómo funciona el mundo” para que el diálogo prosperara sobre bases reales y no sobre posiciones anacrónicas.

En procura de este objetivo, adelantamos un inmenso esfuerzo, tal vez como nunca se ha dado en ningún otro proceso de paz. A la Zona viajaron e intercambiaron ideas con los voceros de las FARC los más disímiles e interesantes personajes: el mismo Grasso, los exitosos empresarios estadounidenses Jim Kimsey y Joe Robert, congresistas norteamericanos y colombianos, altos funcionarios de entidades internacionales, la reina Noor de Jordania, embajadores, ministros, directores de partidos políticos, dirigentes gremiales y presidentes de los mayores grupos económicos del país, entre otros.

Personajes que nunca hubieran imaginado estar sentados frente a frente con guerrilleros, salvo en la eventual pesadilla de un secuestro, tuvieron el valor civil de ir al Caguán a exponer sus puntos de vista, muchas veces opuestos a los de las FARC, defendiendo sus tesis con coraje y argumentos, y escuchando también, con paciencia, los planteamientos de la guerrilla.

Estos ejercicios de tolerancia contribuyeron a darle un ambiente diferente al proceso, a que hubiera un mayor compromiso sobre el mismo y, especialmente, a que se dieran pasos significativos hacia una política de Estado sobre la paz y la reconciliación.

EL PUEBLO EN EL PROCESO

Dentro del propósito de convocar la mayor cantidad de participación ciudadana, que hiciera del proceso un debate abierto donde todos —y no sólo el Gobierno y la guerrilla— expresaran libremente sus propuestas en el marco de la democracia, la Mesa de Negociación creó un nuevo mecanismo: el Comité Temático Nacional, integrado por miembros de las FARC y por sectores representativos del Estado y la sociedad, cuya tarea fue la organización de audiencias públicas donde se escucharan las propuestas de personas y organizaciones del país, para que las partes tomaran nota de ellas.

El Comité Temático fue integrado por 20 miembros, nombrados en forma paritaria por las partes. Las FARC nombraron diez delegados de su mismo grupo, en tanto el Gobierno decidió que los miembros que le correspondían fueran representativos de los más variados sectores de la sociedad. Fue así como designamos a un representante de las centrales obreras, al presidente del Consejo Gremial, al presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, a un representante del Consejo Nacional de Paz, a un representante de los medios de comunicación, a un representante de las gobernaciones y otro de las alcaldías, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, y al director del Departamento de Planeación Nacional, en nombre del Gobierno. El ministro del Interior actuaba como coordinador de todo el grupo.

Las centrales obreras no aceptaron integrar el Comité y los presidentes del Senado y la Cámara, aunque aceptaron al comienzo, posteriormente se retiraron.

Más adelante, las partes acordaron ampliar el número de miembros en cuatro personas, nombradas conjuntamente, en representación de la Iglesia católica, los artistas, los jóvenes y los campesinos. Difícil pedir más diversidad y representación.

Frente a este Comité, los ciudadanos del común y los representantes de los gremios y los grupos económicos del país, de las universidades, de las centrales obreras, del sector cooperativo, las organizaciones no gubernamentales, artistas y organizaciones de mujeres, jóvenes, afrocolombianos, indígenas y desplazados, entre otros, presentaron sus iniciativas a través de audiencias públicas que enriquecieron la labor de la Mesa en el estudio de la agenda.

Para garantizar y promover esa participación, el Gobierno construyó en Los Pozos, una inspección dentro de San Vicente del Caguán, las instalaciones necesarias para recibir a los participantes en las audiencias y, al mismo

tiempo, para facilitar las sesiones de la Mesa y del Comité Temático. Esa sede, denominada Villa Nueva Colombia, fue presentada ante la opinión nacional e internacional el 29 de enero de 2000, cuando se realizó un acto especial para ratificar la voluntad de las partes de seguir trabajando por la paz.

La importancia de tener, al fin, una sede con unas instalaciones y una logística adecuadas para el trabajo de negociación, era fundamental. La puesta en funcionamiento de Villa Nueva Colombia significó, al fin, un espacio de diálogo rodeado de condiciones de confianza para que los negociadores y los miembros del Comité Temático pudieran trabajar con las condiciones adecuadas, con elementos de papelería, computación y oficina, y las mínimas comodidades necesarias para una tarea de tanta envergadura.

Hasta la inauguración de la sede de Los Pozos, los voceros y negociadores del Gobierno debían desplazarse a los lugares más inhóspitos, en trayectos que muchas veces duraban más de cinco horas, por caminos en pésimo estado, para realizar las reuniones con la guerrilla. Semejantes desplazamientos mermaban, como es natural, sus condiciones físicas y limitaban el tiempo de trabajo.

Tener, ahora, un lugar confortable de reunión a sólo media hora de San Vicente era sin duda una buena novedad, que debería ayudar a agilizar el mismo proceso y que permitía, también, un más fácil acceso de los medios y los diversos miembros de la sociedad, gremios y organizaciones comunitarias que se hicieron presentes en las audiencias públicas.

En total, entre el año 2000 y el 2001, se efectuaron 38 audiencias públicas, en diversas modalidades. Las primeras 26 audiencias, celebradas entre abril y noviembre de 2000, se destinaron a escuchar las propuestas sobre el tema de "Generación de Empleo y Crecimiento Económico" y las últimas 12 audiencias, entre mayo y septiembre de 2001, trataron sobre "Distribución del Ingreso y Desarrollo Social".

Dichas audiencias alcanzaron una participación directa de cerca de 22.000 personas y fueron seguidas por todo el país a través de la señal nacional de televisión. Sin duda, se trató de un ejercicio de diálogo y participación como no se ha visto en ningún otro proceso.

Es interesante observar cómo, durante casi año y medio, se dio este espacio abierto a la tolerancia y el intercambio de ideas, amplificado a todo el país por la transmisión por televisión, donde representantes de la academia, de los gremios, de los trabajadores, de los estudiantes, de las minorías, de organizaciones sociales o comunitarias, y gente del común que se inscribía para participar, realizaba, con total libertad, propuestas y planteamientos, que eran escuchados, recogidos y analizados por el Comité Temático, compuesto por miembros del Estado, de la guerrilla y de la sociedad civil.

Así como muchas veces los expositores criticaban al Gobierno o a las instituciones, también en otras ocasiones hacían fuertes reclamos a las FARC, en un ambiente completamente democrático. De eso se trataba, precisamente.

De tener una "zona abierta" donde los colombianos expresaran, sin cortapisas, sus inquietudes y proposiciones para que fueran tenidos en cuenta en la discusión de la agenda temática. Si algo hizo incluyente y abierto el proceso de paz fue la participación masiva de la gente en estas audiencias.

Por otra parte, respondiendo al acuerdo político firmado el 28 de abril de 1999 en Caquetania, y con el fin de informar oportunamente a las fuerzas políticas sobre los desarrollos, avances y hechos del proceso de paz, la Mesa tomó otra importante decisión: integrar un grupo de apoyo con los directores o presidentes de cada uno de los movimientos y partidos políticos que lo suscribieron.

Con todos estos mecanismos estábamos construyendo un proceso abierto e incluyente, en tanto, infortunadamente, las FARC continuaban, por fuera de la Zona, su ofensiva de violencia y terror contra el pueblo colombiano, contrarrestada en todo momento por el profesionalismo y contundencia de nuestras renovadas Fuerzas Armadas.

UNA GIRA SIN PRECEDENTES

El 29 de enero de 2000, durante el acto de convocatoria a la participación ciudadana y la presentación de las instalaciones de Villa Nueva Colombia, los negociadores hicieron un trascendental anuncio:

"Muy pronto, para conseguir la paz, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación saldrá en búsqueda de experiencias de países amigos, de conocimientos, ideas y esquemas sobre modelos que han sido exitosos en el mundo".

Era, sin duda, otro paso audaz, tal vez el que más, en el camino de mostrarles a las FARC "cómo funciona el mundo" y de internacionalizar el proceso de paz. Se trataba nada menos que del viaje del comisionado, los negociadores del Gobierno, otros representantes del Estado y la sociedad colombiana, y siete miembros de las FARC, a Europa, donde visitarían siete países, estudiando y conociendo directamente sus modelos políticos y económicos.

Europa era, junto con Estados Unidos, otra prioridad en el esquema que queríamos desarrollar para lograr la presencia de la comunidad internacional en el proceso de paz. Precisamente por ello hice que la paz fuera el hilo conductor en todos mis pronunciamientos en los distintos escenarios internacionales, así como en los del canciller y el comisionado.

En uno de dichos escenarios se gestó la idea de este viaje. Fue en Río de Janeiro, al término de la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se cumplió en la última semana de junio de 1999. Allí tuve la oportunidad de dialogar con la canciller sueca Anna Lindh, una mujer excepcional, comprometida con la paz como pocos, a quien el mundo lloró con razón cuando fue cobardemente asesinada en septiembre del año 2003. Un crimen absurdo contra la inteligencia y la tolerancia representadas en una mujer.

Aprovechando su presencia en Suramérica, acordamos con la canciller Lindh reunirnos en Colombia el 30 de junio para intercambiar ideas sobre la forma en que su país podría contribuir al proceso de paz. Ella viajó conmigo en el avión presidencial desde Río hasta Bogotá, donde llegamos directamente al Palacio de Nariño.

Ya en mi despacho, el canciller, el comisionado y yo le expusimos a la ministra Lindh la estrategia de paz que estábamos adelantando, haciéndole antes un breve resumen de la historia del país, para ponerla en contexto. Ella expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos, la voluntad de su gobierno de contribuir en la resolución pacífica del conflicto colombiano y lanzó una idea que nos llamó de inmediato la atención: que delegados del Gobierno y de las FARC visitaran su país y exploraran su modelo político, social y económico. El gobierno sueco se encargaría, además, de hacer contactos con empresarios nórdicos para que participaran en una agenda de trabajo amplia y diversa.

La propuesta nos gustó y comenzamos de inmediato a trabajar sobre ella, aunque buscando la forma de ampliar el viaje a otras experiencias y modelos. Por eso, después de varias semanas de estudiar el tema, le propusimos a la ONU que nos ayudara a organizar un recorrido que incluyera otros países además de Suecia. La meta de este viaje sería, más que exponer la visión de una parte del conflicto, mostrar al mundo, y particularmente a Europa, el proceso de paz y su complejidad a través de la participación de las dos partes involucradas.

Una coyuntura y un personaje particulares facilitaron la participación y el apoyo de la ONU.

En una ocasión en que me reuní en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, le expresé lo importante que sería para el país contar con una persona de esta entidad internacional que nos ayudara a coordinar los esfuerzos internacionales de respaldo al proceso de paz en nuestro país. La idea tuvo buena acogida y el secretario general designó en 1999, como su asesor especial para la Asistencia Internacional a Colombia, al experto negociador internacional noruego Jan Egeland, quien sirvió desde entonces y hasta finales del año 2001 como canal entre el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas para todo lo relacionado con los esfuerzos de paz¹⁶. Se trató, sin duda, de una excelente elección del secretario general.

Yo había conocido a Egeland en Jordania a mediados de los noventa, cuando dirigí, en Ammán, la puesta en marcha de la Academia Internacional de Liderazgo de la Universidad de las Naciones Unidas. Él participó como

¹⁶ Jan Egeland se desempeña actualmente, y desde septiembre de 2003, como subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda en Emergencias de dicha entidad.

miembro del Consejo Directivo de dicha Academia y desde ese momento trabamos una amistad que ha continuado a través del tiempo.

Su amplia experiencia en negociaciones incluía nada menos que haber sido uno de los principales artífices de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, que han significado hasta ahora la mayor aproximación a una firma de paz entre estos pueblos. Además, tenía un especial cariño por Colombia, país al que conocía desde los 19 años de edad, cuando había venido a realizar trabajo voluntario como cooperante de una organización católica.

Sin duda, Egeland podría jugar un papel positivo en la preparación de la gira a Europa, y así lo hizo. Lo pusimos al tanto del proyecto que habíamos comenzado a manejar con la ministra Lindh y a él también le entusiasmó la idea, tanto que nos propuso que incluyéramos en el itinerario a su país, Noruega, cuyas condiciones políticas, económicas, sociales y de respeto a los derechos humanos podrían servir como punto de referencia y análisis. Es más, ofreció, a petición nuestra, que trabajaría para conseguir los recursos necesarios para que el Gobierno colombiano no tuviera que pagar ni un solo centavo de su presupuesto para este fin.

Ahora correspondía plantear la propuesta a la guerrilla. En los primeros días de septiembre, cuando el tema del momento era la instalación de la Mesa de Negociación, Víctor G. le expuso a Raúl Reyes, quien, además de ser un negociador de las FARC, era el encargado de las relaciones internacionales de la guerrilla, los objetivos del viaje de los negociadores a Europa, así como el respaldo que teníamos de la ONU y de los países que en primera instancia visitarían, Suecia y Noruega.

Reyes fue muy parco y, aunque le gustó la idea, se limitó a decir que debía consultar el tema con el Secretariado de las FARC. Unas semanas más tarde manifestó que dentro del Secretariado no había consenso sobre las verdaderas intenciones del recorrido por Europa. La principal inquietud que tenían era respecto a la seguridad de los miembros de las FARC que participarían en la gira, pues consideraban que existía el riesgo de que fueran detenidos o asesinados. En esa época, cuando el tema de la justicia penal internacional estaba comenzando a tomar auge, tenían la posibilidad, incluso, de que jueces de largos alcances, como Baltasar Garzón en España, intentaran acciones judiciales o capturas contra los guerrilleros en medio de la gira.

Víctor G. se reunió dos o tres veces más con Reyes hasta que éste le propuso que hablara directamente con los miembros del Secretariado para discutir sobre el viaje, reunión que se llevó a cabo unos días después en Caquetania con Manuel Marulanda, el Mono Jojoy y el mismo Reyes.

Fue una conversación larga en la que ellos, después de un largo y profundo debate, acabaron por aceptar la idea general del viaje, aunque siguieron insistiendo —sobre todo Marulanda y Jojoy— en su preocupación por la seguridad de su gente. Víctor G. les dio su palabra de que nada les iba a suceder y asumió la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para

garantizar la integridad de los guerrilleros desde el momento en que se iniciara el viaje hasta que terminara.

A partir de ese momento, el comisionado y la ONU comenzaron a trabajar en el viaje de manera reservada y coordinada, definiendo los países que se visitarían, las personas con que se reunirían y la agenda del viaje.

Además de Suecia y Noruega, se pensó en España, no sólo por las raíces o los lazos culturales, sino porque era un país que había superado la dictadura franquista para entrar a la democracia y que había hecho pacíficamente el tránsito de un régimen socialista, que había gobernado por más de diez años, a un gobierno de centro dirigido por el entonces presidente José María Aznar, un buen amigo mío y de Colombia. Considerando la importancia del tema, llamé al presidente Aznar y él dio de inmediato su visto bueno a la inclusión de España en la gira.

También se seleccionó a Francia, por su modelo político, económico y social, y a Suiza, especialmente por estar allí la sede principal de la Cruz Roja Internacional, entidad abanderada en el tema de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al final, se decidió incluir a Italia y al Estado Vaticano, éste último por la importante labor mediadora y facilitadora que siempre ha desarrollado la Iglesia católica en el conflicto interno colombiano.

Una vez establecidos los países, el Gobierno colombiano y la ONU comenzamos a hablar, de manera coordinada pero por separado, con cada uno de los gobiernos de los Estados que se visitarían, para explicarles el objetivo y la importancia del viaje, y definir la agenda por desarrollar. El objetivo del viaje era de doble vía: por una parte, mostrarle a la guerrilla el funcionamiento exitoso de sistemas democráticos y económicos, con alto grado de participación popular, que se han logrado en países de Europa a través de procesos políticos de concertación y no de revoluciones, y, por otro, mostrar a los europeos la verdadera realidad de Colombia y del proceso de paz.

Dentro de los preparativos para la gira, tanto el canciller como el comisionado viajaron a algunos de los países seleccionados para acordar el itinerario, las garantías de seguridad y las respectivas agendas. Incluso, el tema lo trató el ministro Fernández de Soto en varias de las reuniones que tuvo con los cancilleres europeos para impulsar la llamada Mesa de Aportantes al proceso de paz. Víctor G., por su parte, logró convencer al Secretariado de las FARC de hacer el viaje y de poner la vida de sus delegados en las manos del Gobierno. No era un acto de confianza excepcional si teníamos en cuenta que ya en tres oportunidades yo mismo había puesto mi vida y seguridad en manos de la guerrilla.

Egeland, entre tanto, se convirtió en el coordinador del viaje y en el organizador de reuniones trascendentales como las que se realizaron en Suiza sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario o sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas en el conflicto

colombiano. Ayudó, además, tal como se lo habíamos pedido, a conseguir la financiación del viaje, por parte de la misma ONU y de los países anfitriones, para que del presupuesto colombiano no salieran recursos para pagar los hoteles, tiquetes aéreos, alimentación y transportes de la delegación.

A comienzos de 2000, se realizó una reunión en el Caguán con todos los negociadores, tanto del Gobierno como de la guerrilla, para contarles los planes y destacar la importancia del viaje. Por parte del Gobierno irían el alto comisionado, Víctor G. Ricardo, y los negociadores Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Juan Gabriel Uribe y el general (r) Gonzalo Forero Delgadillo, si bien éste desistió posteriormente de participar en la gira. Por las FARC viajarían sus negociadores Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez; tres integrantes del Comité Temático, Iván Ríos, Felipe Rincón y Simón Trinidad, y Olga Lucía Marín, de la Comisión Internacional. Además, invité a que se unieran al grupo, dotándolo de mayor representatividad nacional, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes —Miguel Pinedo Vidal y Armando Pomarico—, a los vicepresidentes de esas corporaciones —Luis Norberto Guerra y Ciro Ramírez—, y al presidente de la Asociación Nacional de Industriales —ANDI—, Luis Carlos Villegas.

El 1º de febrero de 2000, finalmente, se puso en marcha el operativo de seguridad que llevaría a los seis miembros de las FARC de San Vicente del Caguán a Bogotá y luego a Europa, junto con el resto de los invitados. Olga Marín, que vivía en México, viajó por su cuenta y se unió al grupo en Estocolmo. Ese día se concretó lo que hasta entonces resultaba completamente impensable: un recorrido de representantes de mi gobierno y de las FARC, con altos dignatarios del órgano legislativo y el representante de la industria colombiana, por siete países de Europa, promoviendo, no la internacionalización de la guerra, sino la solución pacífica del conflicto colombiano.

Para las personas que viajaban esa noche en el vuelo de Iberia hacia Madrid no dejó de ser un espectáculo inusual ver a los guerrilleros, con cuyos rostros ya se habían familiarizado a través de los diversos actos transmitidos por televisión, vestidos con traje y corbata, y abordando el avión, como cualquier civil, en compañía del comisionado.

La visita a Europa ayudó a oxigenar el proceso de paz y, especialmente, a alimentarlo porque permitió llevar a la guerrilla de la selva al exterior con el fin de que enfrentara otras realidades, tan diferentes a las del monte. Los negociadores de las FARC, así como los del Gobierno, pudieron conocer otros procesos sociales y económicos, otros modelos de desarrollo, experiencias de integración, el fracaso de modelos comunistas y, sobre todo, el concepto supremo que existe en Europa sobre la defensa y protección de los derechos humanos.

Para el Gobierno fue clave que la guerrilla tomara conciencia de la percepción internacional que se tiene frente a sus continuos ataques a la población colombiana o frente al tema del secuestro, así como la preocupación

que existe por la presencia de narcotraficantes en las áreas más azotadas por el conflicto.

Fue la oportunidad para tratar de frente y sin presiones temas tan complejos como el secuestro, la violación de los derechos humanos o la influencia del narcotráfico en el conflicto colombiano. Si bien en el exterior no se lograron acuerdos sobre estos temas, se avanzó en discusiones que contribuirían a alcanzarlos más adelante. Estoy convencido, por ejemplo, de que si el tema del Derecho Internacional Humanitario no se hubiera tratado de manera tan cruda y sincera como se hizo en las reuniones de Ginebra, éste hubiera continuado siendo un tema tabú en Colombia o por lo menos hubiese tomado mucho más tiempo el poder afrontarlo directamente con los grupos armados ilegales.

Hay que destacar, además, que durante la gira hubo muy fuertes discusiones entre las partes sobre temas tan álgidos como el secuestro, teniendo como testigos a destacados representantes de la comunidad internacional. Pero de eso se trataba, precisamente: de confrontar opiniones y tesis en un nuevo y diferente contexto. Para sorpresa de los guerrilleros, los interlocutores europeos, incluyendo organizaciones y partidos de izquierda, desaprobaron sus métodos violentos y de intimidación, los cuestionaron e hicieron siempre énfasis en la necesidad de respetar los Derechos Humanos y el DIH.

Por encima de todo, el viaje fue la ocasión para presentar una visión más integral de Colombia y para que la comunidad internacional entendiera la complejidad del conflicto colombiano, el esfuerzo de un país por buscar la paz, la influencia del narcotráfico en el conflicto colombiano, su responsabilidad en la lucha contra ese delito transnacional y, por lo mismo, la urgencia de su compromiso con programas sociales y de sustitución de cultivos ilícitos en las áreas de conflicto, como los que conformaban el Plan Colombia.

Fue también una patente demostración de la credibilidad que tenía el proceso de paz en el exterior. No de otra manera se entiende que los Estados, a través de sus más altos funcionarios, hubieran legitimado los esfuerzos que hacíamos para alcanzar una paz negociada. Este voto de confianza hacia el Gobierno colombiano y su política de paz era, sin duda, otro resultado efectivo de la Diplomacia por la Paz que habíamos desplegado desde el primer día de mi mandato.

En suma: la gira fue la oportunidad para internacionalizar la situación del conflicto colombiano y para que en el exterior se comprendiera el esfuerzo que estábamos haciendo en el Gobierno para encontrar una solución negociada.

El viaje duró más de tres semanas, durante las cuales los delegados visitaron, en su orden, Suecia, Noruega, el Vaticano, Italia, Suiza, España y Francia, y se reunieron con miembros de los respectivos gobiernos, parlamentarios, empresarios, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, en una apretada agenda donde tuvieron oportunidad de plantear

sus posiciones y, sobre todo, de aprender sobre los sistemas políticos y económicos europeos, así como de concretar un mayor respaldo del Viejo Continente al proceso.

Tal vez el mejor resumen de este insólito viaje, único en la historia de los procesos de paz en el mundo, fue el que los mismos participantes hicieron a su regreso en un comunicado que produjeron el 2 de marzo desde San Vicente del Caguán:

"Esta experiencia se constituye en un hecho que deja una huella imborrable en la historia política de Colombia y demuestra claramente los avances de este proceso".

En el mismo comunicado los miembros de la guerrilla y del Estado colombiano coincidieron en señalar las siguientes lecciones que aprendieron gracias a la gira:

"LO QUE MUCHOS CREÍAN IMPOSIBLE, SÍ ES POSIBLE. Por primera vez en la historia de un proceso de paz, quienes hemos estado enfrentados por décadas viajamos al exterior para trabajar de la mano en la construcción de la paz. [...]"

"NO HAY TEMAS TABÚ. En Europa hablamos con franqueza, con respeto y sin prevenciones sobre temas que para muchos eran intocables e, incluso, 'aplazables'. [...]"

"HAY MÁS CONFIANZA Y MÁS RESPETO. Nunca, desde que iniciamos el proceso de paz, habíamos logrado tanta confianza entre las partes como la que alcanzamos en nuestra estadía las 24 horas de los 23 días del viaje. Es un avance que, sin duda, se verá reflejado en la Mesa y en la negociación. [...]"

"LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH. En Europa avanzamos significativamente en la discusión de un tema que preocupa a los colombianos y a la comunidad internacional, como es el del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. [...]"

"UNA VISIÓN MÁS AMPLIA. Abrirse al exterior para conocer otras experiencias amplía la visión y contribuye a dejar posiciones radicales. Hoy nadie duda de que la economía de todos los países debe estar enmarcada en el mundo globalizado. [...]"

"TENEMOS EL RESPALDO INTERNACIONAL. [...] Reconocemos la importancia que tiene para este proceso la participación de la comunidad internacional, respetando la libre autodeterminación de los pueblos."

"ÉSTE ES UN PROCESO PROPIO. [...] el conflicto colombiano es muy diferente y especial en relación con los otros en el mundo y debe ser resuelto por los colombianos y a la colombiana. Sin embargo, fueron valiosas las enseñanzas acerca de las metodologías de negociación que podemos utilizar en el proceso colombiano."

"REFORMAS SOCIALES. El viaje al exterior nos hizo más conscientes de la necesidad de realizar reformas que permitan una paz con justicia social en la gran responsabilidad de construir la nueva Colombia donde quepamos todos. [...]"

"LA CONCERTACIÓN ES LA VÍA. Uno de los factores predominantes en los diferentes modelos nos muestra que el progreso y el bienestar están ligados con la concertación, fortaleciendo así el sustento de las instituciones. [...]"

"Con este viaje ganamos todos, pero sobre todo ganó Colombia. [...]"

Como puede verse, por el tono y el fondo del comunicado, el ambiente que quedó después de la gira fue absolutamente positivo. Si se repasan muchas de las afirmaciones anteriores, suscritas por miembros directivos de las FARC, nos damos cuenta de lo mucho que se avanzó con la gira por Europa. En menos de un mes se derribaron muros de desconfianza y se logró un consenso con la guerrilla, por lo menos en teoría, sobre la necesidad de respetar los Derechos Humanos y el DIH, la importancia de la participación de la comunidad internacional y la fe en la concertación como el camino ideal para el progreso y el bienestar.

Sin duda, nuestros esfuerzos por "mostrarles cómo funciona el mundo" y romper su "autismo" frente a las realidades del siglo XXI que apenas iniciaba, comenzaban a dar resultados.

CAPÍTULO XXIII

El camino hacia el cese de fuegos

El 13 de abril de 2000 fue un día cargado de noticias para el proceso. Desde la mañana, los negociadores habían sostenido una reunión en Los Pozos en la que habían definido algunos temas de procedimiento relacionados con las audiencias públicas, y nombrado nuevos delegados al Comité Temático. Se encontraba también en marcha la organización de una audiencia internacional sobre cultivos ilícitos a la cual se invitarían representantes de diferentes naciones y organismos internacionales, especialmente aquellas que se habían visitado durante la gira por Europa, por lo que se definieron los participantes y los países que actuarían como facilitadores de la reunión internacional. La guerrilla, además, presentó oficialmente a tres de los nuevos negociadores que participarían en adelante como sus voceros: Simón Trinidad, Andrés París y Carlos Antonio Lozada serían, en adelante, nuevos miembros de la Mesa de Negociación.

Cuando ya el encuentro tocaba a su fin, después de estas deliberaciones, Manuel Marulanda, que ese día llevaba una camisa a cuadros azules, que poco a poco había ido desplazando de su indumentaria el antiguo uniforme camuflado, sacó del bolsillo de la misma varios documentos que se confundían con una peñilla verde. Con calma, y tomándose el tiempo necesario, buscó entre los papeles una hoja doblada en cuatro partes y les dijo a los negociadores:

—Antes de irme quiero leerles este documento para que lo pensemos.

Sin mayores aspavientos, y ante la sorpresa de los representantes del Gobierno, leyó una propuesta de cese de fuegos elaborada por las FARC, la cual, según Marulanda, había sido aprobada por el Secretariado y por el Estado Mayor de la organización.

El mismo Marulanda había dicho pública y reiteradamente que la posibilidad de un cese de fuegos sólo se daría cuando el 90% de la agenda estuviera acordada. Ésa era la posición inicial y oficial de las FARC y era la única mención que se había hecho al tema por parte de los guerrilleros. Sin embargo, dicha postura había venido cambiando paulatinamente y la guerrilla estaba comenzando a entender que la negociación en medio de la confrontación resultaba imposible, dado que la insistencia en la violencia

reñía con el objetivo supremo de la reconciliación y minaba la credibilidad del pueblo colombiano y la comunidad internacional en el proceso.

Un antecedente importante, en cuanto al cambio de percepción de las FARC sobre el tema, fue el viaje a Europa, pues allí todos los que se reunieron con los delegados de la guerrilla les insistieron sobre la necesidad de concretar acuerdos para hacer la negociación en medio de un ambiente de paz y no de guerra. En ese mismo viaje, los delegados del Gobierno también tocaron reiteradamente el tema con los guerrilleros, particularmente en una reunión preparada por Jan Egeland durante la estadía en Oslo, durante la cual el grupo discutió de manera abierta la necesidad de llegar a un cese de fuegos, sin que en ese momento se hablara de propuestas concretas.

Todo indicaba que el viaje a Europa y el inicio de las audiencias públicas habían generado al interior de las FARC una nueva dinámica, pues estaban presentando nuevas iniciativas, muchas veces planteadas por el propio Marulanda. En tan sólo dos reuniones, que por ese entonces eran quincenales, las FARC habían propuesto ampliar los miembros de la Mesa de Negociación y del Comité Temático, y crear el grupo de apoyo político a la mesa; habían aceptado la idea de vincular a la comunidad internacional mediante la invitación a una audiencia pública, y ahora nos sorprendían con la lectura por parte de su comandante de una propuesta concreta de cese de fuegos. Tanta iniciativa a favor del proceso resultaba difícil de creer, pero no se podía desaprovechar ninguna de las posibilidades que se presentaban.

El Gobierno, por su parte, siempre había insistido, desde el comienzo mismo de la etapa de negociación, en la necesidad de avanzar en la suspensión de los actos violentos. Incluso, el comisionado Víctor G. Ricardo había sido muy claro en su discurso del 24 de octubre de 1999, cuando se instaló la Mesa de Negociaciones en la Uribe, en que el siguiente paso tenía que ser el cese de fuegos. Por lo mismo, no dudamos en "montarnos" sobre las palabras de Marulanda.

Se redactó, entonces, un comunicado conjunto en el que se anunciaba la realización de una audiencia internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente, y se anunciaba también, para sorpresa de la opinión pública, que el tema del cese de fuegos y hostilidades había quedado sobre la mesa.

El anuncio produjo un compás de esperanza en el pueblo colombiano, que estaba agotado de soportar las inclemencias de la violencia guerrillera y veía en un acuerdo de cese de fuegos una posibilidad de paz y sosiego en su vida cotidiana. Unos pocos días después del comunicado que anunciaba las discusiones del cese de fuegos, las FARC hicieron pública su propuesta, con lo que generaron un debate en torno a sus implicaciones.

Las expectativas comenzaron a desinflarse cuando los guerrilleros aclararon que el secuestro no estaría incluido en su propuesta de cese de fuegos. Para nosotros, ese tema sería siempre uno de los más sensibles e importantes

a lo largo de todas las discusiones del proceso de paz. Sin el cese de los secuestros no es posible hablar de un verdadero cese de fuegos.

Por supuesto, la guerrilla no soltaba semejante "bomba" sin que hubiese de por medio más intenciones. Tan sólo doce días después, las FARC hicieron público un documento, al que denominaron "Ley 002", en el que formulaban una amenaza generalizada de extorsión a todos los que tuviesen un patrimonio superior a un millón de dólares. Pocos días después dieron a conocer su "Ley 003", que contenía una amenaza de hacer justicia con su propia mano en contra de quienes ellos consideraran corruptos.

Ambos pronunciamientos causaron un enorme malestar en toda la sociedad y fueron enérgicamente rechazados por el Gobierno. Era intolerable y absurdo que la guerrilla realizara semejantes amenazas de una forma tan descarada. A esto se sumaban una serie de declaraciones en las cuales diferentes jefes guerrilleros daban a entender que se estaban conformando como un Estado dentro del Estado. La posición de las FARC era absolutamente contradictoria: de una parte formulaban una propuesta concreta de cese de fuegos, pero por otra realizaban pronunciamientos que sólo tendían a atizar la guerra.

Además, la propuesta de cese de fuegos que presentaron resultaba inaceptable, pues involucraba más riesgos que beneficios. La estructura de su propuesta estaba basada en lo que denominamos un cese de fuegos de tipo "estatuas", en el que todos los involucrados en el conflicto se inmovilizan en el lugar en el que se encuentran, es decir, cada uno permanece en donde está y se abstiene de realizar operaciones ofensivas.

Sólo como hipótesis, si las FARC se quedaban donde estaban y el Ejército también, eso implicaba la inmovilización de las tropas militares y de policía con las consecuencias negativas que ello implicaría en la lucha contra los demás actores armados y el narcotráfico. Un cese de fuegos como el propuesto sólo tenía como intención darle ventajas estratégicas a la guerrilla y desventajas notorias a la Fuerza Pública.

Sé, y siempre lo dije, que lo ideal es hacer la paz en paz y no en medio de la confrontación, pero no se podía aceptar cualquier cese de fuegos a cualquier precio.

Lo cierto es que, para el Estado, un cese de fuegos mal pactado es peor que una situación de agravamiento del conflicto y puede, incluso, conducir a la terminación de un proceso de paz.

Una aproximación simplista al tema del cese de fuegos hace pensar que, en desarrollo de un acuerdo como éste, la guerrilla es la que asume todas las obligaciones, sin que se den compromisos por parte del Estado. Eso no es así. Las implicaciones militares y políticas que este tipo de acuerdos tiene para el Estado obligan a tratar el tema con el máximo cuidado, pensando más en la responsabilidad política que en la popularidad que pueda otorgar en un principio. Con una visión de mediano y largo plazo, un cese de fuegos y hostilidades debe llevar a la consolidación de la paz y no al rompimiento

de un proceso. Tampoco puede generar ninguna clase de ventajas militares a la guerrilla.

No se puede desconocer que una negociación que se realiza en el propio territorio, y en medio de la confrontación, se desgasta mucho más que si se cumple por fuera del país. Así puede constatarse si comparamos los procesos con las FARC y con el ELN. Mientras que el primero se adelantó en Colombia, el segundo se llevó a cabo en el exterior y tuvo, gracias a esto, mucho menos presiones y desgastes.

Desde otro punto de vista, sabía también que imponer el cese de fuegos y hostilidades como condición previa para la negociación no hubiera permitido el inicio del proceso. Esto hubiera sido imponer una condición casi imposible, que impediría que alguna vez nos sentáramos en la mesa de negociación. La historia de los procesos de paz así lo ha demostrado y, además, demandar un cese de fuegos como requisito para iniciar una negociación, en el momento en el que la guerrilla se sentía en su mejor momento militar, hubiera sido una pretensión ilusa o, cuando menos, irreal. Es necesario tener en cuenta que, para la guerrilla, en su concepción marxista, el cese de fuegos es también un instrumento de lucha que puede ser utilizado para su fortalecimiento.

Por el contrario, un cese de fuegos al que se llega como resultado de un proceso de negociación ya iniciado, con compromisos políticos de por medio, suele ser mucho más sólido. De hecho, en casi todos los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo, el cese de fuegos ha sido un resultado del mismo proceso y no su presupuesto.

Nunca perdimos de vista que el fin del proceso no era simplemente el cese de fuegos sino un verdadero acuerdo de paz, si bien aquél puede ser un instrumento valioso para llegar a éste.

Tampoco puede confundirse el hecho de haber aceptado el inicio de la negociación en medio del conflicto con una posición de debilidad. Lo que pretendimos siempre, y logramos, era sentar a la guerrilla en la mesa de negociaciones para, a partir de allí, buscar el fin del conflicto. El desarrollo lógico del proceso consistía en: primero, sentarlos a negociar; segundo, generar confianza, y tercero, avanzar en la disminución del conflicto para alcanzar el cese de fuegos, que permitiera llegar más rápidamente a un acuerdo definitivo de paz.

El gran enemigo de este esquema se encuentra en la ansiedad de la opinión pública por ver resultados inmediatos. El cansancio del país frente a los hechos violentos y las esperanzas e ilusiones que despertó el inicio del proceso llevaron a que la gente creyera que, con el solo hecho de la negociación, se daría una disminución inmediata de la violencia, lo cual no era realista. Por supuesto, el hecho de que no se cumpliera con estas expectativas fue aprovechado por la oposición política para generar una sensación de inutilidad del proceso.

En cuanto a la situación militar que encontré al inicio de mi gobierno, ésta era bastante precaria, como ya se analizó en capítulos anteriores, y un cese de fuegos pactado por anticipado podría haber generado serios impedimentos para adelantar los procesos de modernización y de equipamiento en que estábamos empeñados. Los acuerdos de cese de fuegos son bilaterales, y así siempre se han entendido, lo cual implica no sólo la suspensión de acciones violentas por parte de la guerrilla, sino también la suspensión de operaciones militares para las fuerzas del Estado en contra de ésta, lo que hubiera dificultado el avance en la reestructuración operativa y en la consecución de nuevos equipos para el combate.

En medio de un cese de fuegos resultaría casi imposible convencer a la comunidad internacional para que apoyara los planes de modernización de las Fuerzas Militares o lograr que nos vendieran equipos. De hecho, no era para nada improbable que una de las intenciones de la guerrilla al proponerlo fuese precisamente la de complicar el proceso de fortalecimiento militar y la ayuda internacional, especialmente de los Estados Unidos, que en ese momento empezaba a hacerse realidad.

Desde el punto de vista de la guerrilla, la aceptación de un cese de fuegos tiene interpretaciones diferentes. Suele, por una parte, convertirse en un mecanismo para adelantar sus estrategias y obtener resultados en la confrontación. En sus propios términos, se trataría más de una forma adicional de lucha que de un instrumento para alcanzar la paz. Uno de los mayores riesgos que supone el cese de fuegos radica en la posibilidad de que la guerrilla pueda continuar acumulando ingresos, provenientes del narcotráfico o de cualquier otra fuente, aprovechando que no incurre en gastos militares, dada la suspensión de operaciones. Eso sería una ventaja estratégica que, a la larga, la fortalecería.

¿Que pretendía, entonces, Marulanda al presentar esta propuesta? Creo que el buen momento político que percibían los llevó a tomar esa iniciativa que, como ellos en su momento la calificaron, se trataba de una propuesta de paz con la que querían hacer un aporte al proceso. Al presentar una opción como ésta, le transmitían al país confianza en el desarrollo del proceso, mejoraban su imagen ante la comunidad internacional y aumentaban las expectativas de la opinión. De otra parte, ponían al Gobierno frente a la opción indeseable de tener que rechazar una propuesta de cese de fuegos que, así en principio sonara muy popular, en los términos presentados resultaba imposible de aceptar.

Ahora bien: aunque se trataba de un planteamiento inadmisibile, ya era, al menos, una propuesta que estaba sobre la mesa, a partir de la cual debíamos tratar de construir un acuerdo útil. Así que comenzamos a trabajar, con toda diligencia y con la participación activa de los militares, en una contrapropuesta que ayudara a reducir la violencia sin generar indebidas ventajas estratégicas a la guerrilla.

CAMBIO DE GUARDIA

Los primeros meses del 2000 transcurrían, para el proceso de paz, en medio de múltiples desarrollos. La guerrilla sorprendía con su propuesta de cese de fuegos y, al tiempo, con sus "leyes" de intimidación y extorsión a la sociedad; las audiencias públicas y el Comité Temático estaban en pleno funcionamiento en la nueva sede de negociaciones, y se preparaba la realización de una audiencia pública internacional sobre medio ambiente y cultivos ilícitos, con la que se abría la puerta a la participación más cercana de la comunidad internacional en el proceso.

En medio de este contexto, a finales de abril acepté la renuncia que Víctor G. Ricardo me había manifestado desde hacía ya algunos meses al cargo de alto comisionado para la Paz. Víctor G. había adelantado una importante labor y consideraba que había cumplido las etapas que le correspondían. Había impulsado las acciones para iniciar el proceso, había generado confianza a la guerrilla frente a los desarrollos del mismo, había sacado adelante el inicio de la negociación y tenía también la satisfacción de haber logrado dar los primeros pasos hacia la internacionalización del proceso con el viaje que había realizado a Europa con los delegados de las FARC. Así mismo, había desarrollado la infraestructura necesaria para las negociaciones y promovido los primeros proyectos sociales en la Zona de Distensión.

Por otro lado, era innegable que existían serias dificultades en su relación con los militares, quienes muchas veces no entendían que su posición de interlocutor de la guerrilla no significaba que fuera un defensor de la misma, y que el comisionado sufría ya, frente a la opinión pública, del natural desgaste que ocasiona un cargo tan delicado y complejo como éste.

Víctor G. cumplió, sin duda, una labor trascendental para la puesta en marcha del proceso de paz, sufriendo muchas incomprensiones de parte de algunos sectores. Tomó riesgos y puso toda su voluntad y coraje al servicio del mayor anhelo de los colombianos. El país tendrá que reconocerle el esfuerzo que desarrolló en aras de la paz.

Pensando en sus capacidades y experiencia —pues había sido antes embajador en Argentina—, y también en su seguridad, decidí nombrarlo embajador ante el Reino Unido, donde siguió aportando con entusiasmo al país, esta vez desde el campo de las relaciones internacionales y el comercio exterior, sirviendo, además, de enlace para muchas tareas de apoyo al proceso de paz en Europa¹⁷.

En reemplazo de Víctor G. en el crucial cargo de alto comisionado para la Paz, designé a Camilo Gómez, quien hasta entonces se desempeñaba

¹⁷ Víctor G. Ricardo, después de un destacado desempeño como embajador ante el Reino Unido, fue designado por el presidente Uribe como embajador de Colombia ante Sudáfrica, cargo que ocupa actualmente.

como mi secretario privado. Si bien su nombre era desconocido para la gran mayoría de los colombianos, había estado cerca del proceso y reunía las condiciones necesarias para impulsarlo. De hecho, había jugado un papel destacado en la reunión del 2 de mayo de 1999 en que Marulanda y yo dimos paso a la etapa de negociación, y formaba parte desde junio de dicho año del equipo de negociadores, con la ventaja de que mantenía un buen nivel de comunicación con los militares y con diferentes sectores gremiales y sociales.

Camilo había trabajado conmigo desde la época en que fui alcalde de Bogotá, cuando ocupó la gerencia de la Empresa Distrital de Servicios Públicos —EDIS—, donde le correspondió administrar el tema de la privatización del servicio de recolección de basuras, uno de los más exitosos y recordados de mi gestión, y cuando fue también mi secretario privado. Posteriormente, se había desempeñado como secretario general del Ministerio de Desarrollo y superintendente de Sociedades.

Su temperamento calmado pero fuerte, su bajo perfil y su capacidad de trabajo fueron factores que me llevaron a considerarlo como el hombre adecuado para reemplazar a Víctor G. Como mi secretario privado, había desarrollado buenas y cercanas relaciones con todos los miembros del gabinete y con los militares, lo que le facilitaría el cumplimiento de su tarea. Adicionalmente, dentro del equipo de negociadores, se caracterizaba por sus posiciones directas frente a los guerrilleros, lo cual hacía falta en esta etapa del proceso.

El nuevo comisionado inició sus labores en los últimos días de abril de 2000, enfrentándose a las circunstancias que habían surgido por cuenta de la propuesta de cese de fuegos lanzada por las FARC y las dos proclamas de extorsión y chantaje denominadas por la guerrilla como "leyes" número 2 y 3. Al mismo tiempo, dentro de las aproximaciones con el ELN, se presentaban fuertes protestas ciudadanas en el sur del departamento de Bolívar ocasionadas por el anuncio sobre la posible constitución de una zona de encuentro en esa región para iniciar un proceso con este grupo, un tema al que me referiré en capítulos posteriores.

Desde un principio, las relaciones de Camilo con las FARC estuvieron marcadas por episodios que exigían posiciones fuertes por parte del Gobierno. Fue así como, en su primera reunión en el Caguán en su condición de alto comisionado, tuvo la misión de hablarle a Marulanda sobre la amenaza generalizada de extorsión.

Al finalizar una reunión rutinaria de la mesa de negociación en la que el tema se discutió en términos generales, el nuevo comisionado le pidió a Marulanda que se reunieran a solas. Con la presencia de Víctor G., Camilo hizo un fuerte reclamo al jefe guerrillero, en el que le hizo saber que lo que las FARC acababan de publicar no era lógico dentro de un proceso de paz y no tenía presentación alguna. Marulanda lo oyó calmadamente pero su cara

se fue transformando en la medida en que el nuevo comisionado endurecía su posición. Si bien de la reunión no se obtuvo un resultado concreto, desde ese día las FARC entendieron que la estrategia del Gobierno había pasado a una posición de negociación todavía más fuerte. El tercio había cambiado y los episodios de los días siguientes así lo ratificarían.

La Mesa de Negociación continuó en sus labores aceleradas para la preparación de la audiencia internacional, que se llevaría a cabo a finales del mes de mayo y a la cual se invitaría un grupo de países, bajo la coordinación de España y Noruega.

También se tomó la determinación de crear el llamado "Grupo de Apoyo Político a la Mesa de Negociación", que consistía en una invitación a que siguieran respaldando el proceso a los dirigentes de todos los movimientos y partidos políticos que el 28 de abril de 1999 habían firmado el Acuerdo de Caquetania. En este grupo participaron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento Sí Colombia, el Partido Comunista, la Alianza Democrática y otros líderes políticos independientes.

La creación de este grupo coincidió con el lanzamiento, el 29 de abril de 2000, del Movimiento Bolivariano por parte de la guerrilla. Se trataba de un movimiento político que, según la guerrilla, tenía el carácter de clandestino, si bien para su presentación las FARC realizaron una gran manifestación pública, con tarima, grandes equipos de sonido, invitación a los medios de comunicación, transporte de campesinos en buses y presencia de guerrilleros traídos de todas las regiones, al mejor estilo de cualquier político tradicional en campaña. Como muchas de las situaciones insólitas que suceden en Colombia creo que ésta ha sido la única vez en el mundo en que un movimiento "clandestino" inicia sus actividades con una gran manifestación pública.

Por otra parte, dentro de la ampliación acordada de los equipos de negociadores, el Gobierno también designó, a comienzos de septiembre del 2000, a tres nuevos miembros en su equipo. Siempre pensando en dar una adecuada representación a las fuerzas políticas de oposición en el proceso, nombré a dos connotados liberales: Alfonso López Caballero, ex ministro, miembro de la Dirección Liberal Nacional y congresista por dicho partido, y Luis Guillermo Giraldo, que venía de ser embajador en Venezuela y había sido también un destacado parlamentario liberal. El tercer negociador fue monseñor Alberto Giraldo, quien había cumplido una importante labor en la comisión de reconciliación nacional y en ese momento era presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Con los nuevos negociadores se reforzó el carácter plural del equipo del Gobierno, que quedó compuesto por un general en retiro, un alto jerarca de la Iglesia, dos conocidos políticos liberales, dos políticos conservadores y un representante del sector privado, que era inicialmente Pedro Gómez Barrero, pero que, ante su renuncia, había sido reemplazado a finales de ju-

lio por el industrial Ramón de la Torre. Este empresario del sector petrolero, que fue por varios años presidente de la multinacional Esso en Colombia y formaba parte de la Fundación Ideas para la Paz, acompañó, con total dedicación y compromiso, el desarrollo del proceso hasta sus últimos días, lo mismo que monseñor Giraldo.

La representación era amplia y completa. En este equipo estaban presentes los principales sectores políticos y sociales, teniendo en cuenta que el número de negociadores era limitado. En el llamado Comité Temático, encargado de las audiencias, se terminó de dar participación a otros sectores de la vida nacional, como las universidades, los jóvenes, los representantes de las minorías y los artistas, entre otros.

EL COLLAR BOMBA

La violencia, entre tanto, nunca dejó de entorpecer la buena marcha del proceso. En la mañana del 8 de mayo, las FARC atacaron en el Huila a un pequeño bus de transporte público en el que viajaban civiles. El grave hecho dejó seis personas muertas y varios heridos, y enturbió el buen ambiente que se estaba viviendo. Después del rechazo público a semejante barbaridad, la guerrilla aceptó que se había tratado de un grave error e incluso llegó a ofrecer posibles indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

El país aún no salía de su asombro cuando, una semana después, ocurrió uno de los hechos que dejaron más huella en el proceso y en la memoria colectiva de los colombianos.

El lunes 15 de mayo, en una vereda cerca de Chiquinquirá, una población de mediano tamaño en el centro del país, una humilde ama de casa, doña Elvia Cortés, fue asesinada mediante la colocación alrededor de su cuello de un collar cargado de explosivos. El artefacto, que fue inmediatamente conocido como "el collar-bomba", le había sido puesto en la mañana de ese fatídico día por unos hombres armados que le dejaron un casete con instrucciones para que pagara una extorsión, bajo la amenaza de hacerlo estallar si no lo hacía. Cuando los técnicos antiexplosivos de la Policía intentaron desactivarlo, en una delicada y arriesgada operación, el collar explotó y voló la cabeza de esta pobre mujer, causando también la muerte al subintendente Jairo López y graves heridas a cuatro policías más. La noticia le dio la vuelta al mundo. Todos los medios de comunicación transmitieron las aterradoras imágenes de doña Elvia con el collar asesino en su cuello, hablando con los expertos de la Policía minutos antes de la explosión. El asombro era general. El repudio era total.

De inmediato tomó fuerza la versión de que los autores de tan horrendo crimen eran guerrilleros de las FARC. ¿Quién más podía tener los recursos y la sevicia para cometer un acto como éste? Los medios de comunicación iniciaron la difusión de esta noticia y las reacciones en contra de la guerrilla

eran muy fuertes. Consciente de las consecuencias que tendría este acto sobre el proceso, le pedí al comisionado que investigara con los organismos de seguridad la fidelidad de las informaciones que estaban transmitiendo los medios. Todos los generales ratificaron la versión sobre la autoría de las FARC e incluso el Ministerio de Defensa expidió un comunicado en ese sentido. La propia Iglesia, a través del obispo de Chiquinquirá, también señaló a la guerrilla como autora de semejante crimen. La versión sobre la autoría de las FARC era generalizada. Sin embargo, algunos elementos, como el lugar de los hechos y la forma de la operación, no coincidían con dicha teoría.

Le insistí a Camilo en que verificara al máximo antes de que hiciéramos señalamientos oficiales, y así lo hizo, confrontando las informaciones que se tenían con el general Rosso José Serrano, director general de la Policía; el general Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares; el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y el director del DAS, coronel Germán Jaramillo. Todos los indicios indicaban que la sindicación de las FARC era verídica.

El alto comisionado se comunicó, entonces, con las FARC para decirles que las pruebas apuntaban hacia ellos y que el Gobierno exigía de inmediato un pronunciamiento sobre tal hecho. La reacción inmediata de la guerrilla fue la de negar su autoría, como acostumbraba hacerlo con cada uno de sus crímenes, por lo que nadie creyó en su palabra.

Sin embargo, nos llamó la atención en este caso la velocidad del desmentido, que resultaba inusual frente a los largos tiempos que siempre pedía la guerrilla para investigar. Las FARC produjeron un comunicado en el cual negaban tajantemente su participación en el crimen, diciendo que habían realizado una completa investigación al respecto. Aunque la credibilidad de la guerrilla era mínima, el comunicado de la guerrilla nos generó algunas dudas.

El 18 de mayo estaba prevista una reunión en la Zona con el fin de ultimar detalles de la audiencia internacional y discutir la presentación de las propuestas de cese de fuegos y hostilidades. Para las FARC éste era un evento de gran importancia política pues representantes de varios países se reunirían con ellos y tenían la idea de que ese era otro paso más hacia la obtención del estatus de beligerancia, así en la realidad la reunión no tuviese esos alcances.

Por nuestra parte, desde el Gobierno veíamos esta audiencia como una excelente oportunidad para acabar de convencer a la guerrilla sobre la importancia que tenía la vinculación de la comunidad internacional y para que ésta le pudiera hacer directamente a las FARC el reclamo por la violencia que empleaba continuamente contra la población civil y por la dolorosa práctica del secuestro.

Si los guerrilleros tenían la idea de demostrar a la comunidad internacional su capacidad política, nosotros teníamos que mostrarle a la guerrilla que el mundo los veía de una forma diferente y que nadie aceptaba la práctica del secuestro, ni la extorsión, ni los ataques a las poblaciones.

Sin embargo, la gravedad de lo ocurrido con el llamado collar bomba y el asesinato de los civiles que se transportaban en el microbús dinamitado por las FARC no podían pasarse de largo. Con toda la información en la mano, y después de haber hecho las verificaciones del caso, me reuní con el comisionado para definir las medidas que debíamos tomar. No se trataba de congelar unilateralmente el proceso pues esto equivaldría a caer en el mismo juego de la guerrilla. Tampoco resultaba lógico aplicar una medida inocua e insuficiente como la de protestar en la mesa por los hechos. Optamos, entonces, por suspender la audiencia internacional, en razón de los hechos violentos sucedidos. Con esta medida sabíamos que la guerrilla sentiría la importancia de la determinación. No llegaríamos al extremo de congelar el proceso justo cuando el tema del cese de fuegos acababa de ser presentado en la mesa, pero tampoco dejaríamos pasar los hechos sin que tuviesen una repercusión seria para las FARC.

Fue así como el 16 de mayo, en la celebración del aniversario de la Escuela Nacional de Policía General Santander, condené el asesinato de doña Elvia con los términos más duros: *“¡No hay palabras para repudiar esta acción de la que hasta las bestias se avergonzarían!”*.

Y rematé con la decisión final:

“No es posible que mientras el Gobierno demuestra permanentemente su voluntad de paz, las FARC cometan hechos tan atroces como el del día de ayer, o como la amenaza general de secuestro y extorsión, o como el ataque de la semana pasada a un microbús en el que se transportaban ciudadanos del común en Gigante, Huila, y en el cual murieron víctimas inocentes. ¡Así no se construye la paz! ¡Así no se ayuda al pueblo!”

“He dado claras instrucciones al alto comisionado para la Paz para que se traslade a la zona de los diálogos con las FARC para que se suspenda la audiencia pública internacional que estaba prevista realizarse a finales de mes sobre los temas de medio ambiente y cultivos ilícitos. Los pueblos del mundo no entenderían, a la luz de los últimos hechos, que se les invite a participar en el proceso de paz y que esa participación no incluya un apoyo para que se acaben los efectos perversos del conflicto sobre la sociedad civil y para que se dé el respeto pleno al Derecho Internacional Humanitario.

“La actitud de las FARC debe cambiar. Los 40 millones de colombianos que quieren la paz exigimos ese cambio. Demando de ese movimiento un cambio de actitud y hechos claros que demuestren ante los colombianos y ante la comunidad internacional su voluntad de paz”.

El 18 de mayo, Camilo Gómez, acompañado por los negociadores del Gobierno, se reunió con Manuel Marulanda y los negociadores de las FARC en la Zona de Distensión para comunicarles personalmente la decisión que ya ellos habían conocido a través de mi discurso. Fue un encuentro tenso y difícil que constituyó, sin duda, una prueba de fuego para el recién estrenado comisionado. El mismo Marulanda, que llevaba días vistiendo traje

de paisano, apareció con su uniforme camuflado, como una muestra de la dureza que iba a tener la reunión.

Camilo les notificó la decisión del Gobierno de suspender la audiencia internacional, generada no sólo por el episodio del collar bomba, sino también por el ataque al microbús, la publicación de las llamadas "ley 002" y "ley 003", y otras declaraciones de la guerrilla que minaban el ambiente del proceso. Marulanda le preguntó si yo había consultado a todos los negociadores antes de llegar a esa decisión, pues consideraba que había sido tomada *"con la cabeza caliente"* y sin tener en cuenta todas las informaciones al respecto, e insistió en que las FARC nada tenían que ver con el brutal asesinato de doña Elvia Cortés. En tono airado insistió en que era necesario realizar la audiencia pues de lo contrario lo entenderían como un incumplimiento del Gobierno y eso impediría tratar los demás temas, en especial el del cese de fuegos.

Todos los voceros de la guerrilla hablaron en la misma línea que su jefe, dejando ver la preocupación por la pérdida de la posibilidad de tener a la comunidad internacional sentada frente a ellos en el Caguán. El equipo del Gobierno también había preparado la reunión y de manera coherente fueron explicando y apoyando la posición presentada por el comisionado.

Después de un receso, Camilo le propuso a Marulanda que ese día firmaran un primer acuerdo para suspender las llamadas "pescas milagrosas" y otros ataques en las carreteras, como el realizado contra el microbús en el Huila. Esto despertó aún más la furia del jefe guerrillero, quien contestó que no aceptaba que, además de incumplir con lo acordado frente a la audiencia internacional, ahora el Gobierno le planteara exigencias de ese tipo. Indignado, se levantó de la mesa y dejó a los negociadores en la reunión, sin que se llegara a ningún acuerdo y sin que se fijara una nueva fecha para continuar con las discusiones.

Al regresar a Bogotá, el comisionado empezó a recibir informaciones diferentes por parte de la Unidad de Inteligencia de la Policía. Este organismo era el único que no había hecho una ratificación absoluta sobre la autoría de las FARC en el collar bomba y había continuado con las investigaciones. Un par de días después le comunicaron a Camilo que sus sospechas sobre los autores estaban tomando otro rumbo y que, a pesar de que los demás organismos militares y de policía insistían en la tesis de la autoría de las FARC, ellos estaban comenzando a manejar otras hipótesis. Finalmente, durante la semana, llegaron a una conclusión inesperada. Los autores del collar bomba habían sido delincuentes comunes y no las FARC.

Cuando Camilo me confirmó esta novedad, no tuve ninguna duda sobre lo que nos quedaba por hacer: habíamos cometido un error, basados en las certezas que nos comunicaron los diversos organismos de seguridad y teníamos que corregirlo. Siguiendo mis instrucciones, el siguiente fin de semana Camilo viajó al Caguán y allí, después de conversar informalmente con los

guerrilleros, dio algunas declaraciones a los periodistas pues el rumor de una suspensión indefinida del proceso estaba tomando fuerza.

Al final de la rueda de prensa, y después de haber inducido la pregunta, el comisionado dijo: *"Cada vez es más claro que las FARC no fueron las autoras del collar bomba"*, con lo cual el ambiente comenzó a despejarse de nuevo.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE CESE DE FUEGOS

Después de las declaraciones de Camilo, el proceso adquirió un buen ritmo. Marulanda se reunió con el comisionado para hablar del posible acuerdo humanitario para la liberación de los militares secuestrados por la guerrilla y presentó tres opciones diferentes. La mesa se reunió, a su vez, el 30 de mayo y se fijaron nuevas fechas para la celebración de la audiencia internacional, el 29 y 30 de junio, y una fecha para un intercambio oficial de propuestas de las partes sobre el cese de fuegos y hostilidades, el 3 de julio.

Al regreso del comisionado, sostuvimos una larga reunión para establecer los límites de nuestra propuesta, las alternativas que podíamos manejar y el contexto que debía dársele a la misma. Desde un principio se definió que un acuerdo de este tipo debía implicar el cese de todas las acciones de tipo militar que realiza la guerrilla. No solamente los ataques a la Fuerza Pública sino también todo lo relacionado con los ataques a la población civil y, de manera especial, el tema del secuestro, que siempre constituyó una prioridad.

Uno de los puntos de mayor controversia en esta discusión fue la distinción entre el cese de fuegos y el cese de hostilidades. En términos técnicos, la diferencia consiste en que en el cese de fuegos simplemente se suspende el uso de las armas por parte de las fuerzas combatientes, sin que involucre la suspensión de otro tipo de acciones hostiles en medio de la confrontación. En el cese de hostilidades, en cambio, se incluye la suspensión de otro tipo de acciones en contra de la población, diferentes a los ataques armados, como pueden ser el secuestro y la extorsión. También, cuando se habla de cese de fuegos, se entiende la suspensión de las acciones ofensivas entre los combatientes mientras que, cuando se habla de cese de hostilidades, se hace referencia, además, a las acciones que involucran a la población civil.

La diferencia en interpretación de los términos mencionados, según la óptica nuestra, frente a la interpretación que la guerrilla le daba a estos mismos términos, implicó una larga discusión pues la guerrilla quería incluir en el término "hostilidades" conceptos de diferente índole y ajenos muchos de ellos al conflicto armado. Por ejemplo, para la guerrilla las hostilidades involucraban temas económicos y sociales considerados por ellos como contrarios a la población, como las privatizaciones, la misma política económica o la fumigación de los cultivos ilícitos.

Lo que siempre tuvimos claro en el Gobierno es que la propuesta no podía referirse exclusivamente a la suspensión de las acciones bélicas sino que

debería involucrar el secuestro y la extorsión, los ataques a las poblaciones, los retenes en las carreteras, los hostigamientos y los combates contra la Fuerza Pública, cualquier clase de atentados en contra de la infraestructura eléctrica, vial y petrolera, y, en general, todas las acciones violentas que los grupos guerrilleros suelen utilizar en la confrontación. También debía involucrar algún nivel de controles a actividades de la guerrilla relacionadas con el narcotráfico pues allí estaba una importante fuente de financiación. En pocas palabras, nuestra propuesta abarcaba tanto la suspensión de actividades militares como la suspensión de cualquier acción violenta que pudiese afectar a la población civil e, incluso, involucraba la suspensión del reclutamiento por parte de la guerrilla.

En la elaboración de la propuesta también sería básico incluir la posibilidad de la verificación internacional, lo cual implicaba que se establecieran condiciones que fuesen verificables. Es lo que denominamos la "verificabilidad" del cese de fuegos. Este parámetro sería uno de los más difíciles de desarrollar pues requería la concentración de la guerrilla o, al menos, la cohabitación de los verificadores con la guerrilla, ya que ésta sería la única forma de constatar si las acciones militares estaban suspendidas realmente. La idea, como lo repitió muchas veces el comisionado en sus declaraciones, era pactar un cese de fuegos y hostilidades que no se rompiera con el simple "disparo de un borracho".

También se estableció que la propuesta debería ser muy precisa en cuanto a que las Fuerzas Armadas no podían quedar inmovilizadas ya que, si bien se suspenderían las operaciones militares en contra de las FARC, era necesario seguir luchando contra los demás grupos al margen de la ley, como el ELN, los grupos ilegales de autodefensa, el narcotráfico y la propia delincuencia común. Este elemento, que parece de elemental lógica, es también uno de los más complejos pues supone que se deben crear mecanismos para concretar y verificar la "separación de fuerzas", sin lo cual los riesgos del rompimiento del cese son muy grandes.

La llamada separación de fuerzas implicaba el diseño de esquemas operativos para que la guerrilla pudiese estar "ubicada" o al menos "ubicable", pues, de otra forma, las posibilidades de encuentros con las Fuerzas Militares o de Policía eran evidentes. Éste fue uno de los puntos que más controversia suscitó pues muchos pensaron que sólo se podía lograr mediante la creación de nuevas "zonas de distensión", lo cual generó de inmediato un gran rechazo. En realidad, ese no es el único mecanismo existente para lograr una efectiva separación de fuerzas pero no pudimos sacar de la cabeza de la opinión y de los medios de comunicación la convicción de que, si se llegaba al acuerdo, en el país habría nuevas zonas de distensión por todo el territorio nacional.

Fui muy claro con el comisionado respecto a que nuestra propuesta de cese de fuegos y hostilidades, por sus implicaciones y consecuencias, debía elaborarse en completa coordinación y acuerdo con las Fuerzas Militares

y de Policía, que serían las protagonistas de esta situación. Era necesario contar con la experiencia y los conocimientos militares para que nuestro planteamiento fuera realmente coherente. De otra parte, no tendría sentido presentar una propuesta que no fuera fruto de un consenso al interior del Gobierno, y me refiero a un consenso en lo político y en lo militar, pues este tipo de acuerdo involucra ambos escenarios.

Las relaciones entre los militares y el anterior comisionado habían terminado muy resquebrajadas y ésta era una muy buena oportunidad para poner en marcha un esquema de trabajo más cercano entre aquellos y el equipo del nuevo comisionado. No se trataba de imponer un criterio desde la Presidencia, ni de que los militares impusieran el suyo, sino de buscar un consenso y lograr un trabajo en equipo para que la propuesta fuese más sólida.

Otro de los parámetros de la propuesta consistía en definir que el objetivo del cese de fuegos sería adelantar la negociación política. Es decir, no se trataba del cese de fuegos como un fin último de la negociación sino de tomarlo como un mecanismo para fortalecer el proceso de negociación, quitándole la carga diaria que los hechos violentos le imponían. Este concepto implicaba también un mensaje importante para la guerrilla pues le indicaba que la negociación no llegaría sólo hasta el cese de fuegos sino que iría mucho más allá y que el hecho de alcanzar un acuerdo no suspendería la discusión de los puntos de la agenda sino que, por el contrario, la fortalecería.

También era importante oír las opiniones de sectores diferentes a los militares pues las reacciones frente al tema eran diferentes. En la práctica, se dieron varios aportes interesantes de sectores muy diversos que estaban interesados en la materia. El Consejo Nacional de Paz, algunas ONG dedicadas al tema de paz, el cuerpo de generales y almirantes en retiro, el Partido Comunista, algunos gremios económicos y representantes del sector académico hicieron comentarios y sugerencias, los cuales fueron tenidos en cuenta en la construcción de la propuesta.

Sobre estos lineamientos básicos, el comisionado conformó un equipo con asesores externos y con los mismos negociadores para redactar un primer borrador de la propuesta.

Ya con este borrador en la mano, el comisionado, el ministro de Defensa, los negociadores del Gobierno, todos los comandantes de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía iniciaron una serie de discusiones en las que cada uno realizaba aportes y presentaba sus opiniones en medio de un clima de buen entendimiento que me hizo concluir que las diferencias con los militares estaban siendo superadas. Fueron varias las reuniones que celebraron, ocupando mañanas enteras e incluso fines de semana, la mayoría de ellas en las instalaciones del Club de la Fuerza Aérea, dentro del más completo hermetismo.

Por su parte, el equipo de asesores del comisionado analizaba todas las experiencias anteriores en esta materia y preparaba los escenarios posibles, a

la vez que un equipo militar designado por el general Tapias hacía los análisis desde el punto de vista militar.

De allí surgió una propuesta final que conjugaba los elementos necesarios y que contaba con el consenso político y militar sobre su contenido. Se trataba de una propuesta sólida, con el equilibrio y la flexibilidad necesarios para poder sentarse a negociar con las FARC un tema tan importante como éste.

Uno de los puntos de mayor preocupación siempre fue el de la inadecuada generación de expectativas frente a las posibilidades de llegar pronto a un acuerdo. Sabíamos que la discusión sería muy larga y que éste era uno de los puntos neurálgicos de la negociación pero también teníamos claro que, para los colombianos, hastiados de la violencia, era el resultado más esperado y ansiado. Esto nos llevó a buscar que la discusión con la guerrilla fuera lo más discreta posible y a evitar un gran debate nacional sobre el tema.

En la mesa de negociaciones se decidió, entonces, que las propuestas fueran inicialmente privadas y que sólo se dieran a conocer al público después de avanzar en las discusiones. Se llegó también a la conclusión de que era necesario revisar las experiencias históricas al respecto. En especial, se definió analizar lo sucedido en las discusiones de Caracas y Tlaxcala durante el gobierno Gaviria y repasar a fondo la experiencia de cese de fuegos que se pactó en el proceso de paz adelantado durante el gobierno de Belisario Betancur.

El 3 de julio, según lo acordado, se intercambiarían las respectivas propuestas en sobres cerrados, para que cada parte procediera a analizarlas. A pesar de que Marulanda había afirmado, al comienzo del proceso, que el tema del cese de fuegos no sería discutido sino hasta cuando la agenda estuviera acordada en por lo menos un 90%, nos aprestábamos ahora a debatirlo. Quedaba comprobado que las posiciones iniciales de la guerrilla sí podían cambiarse.

CAPÍTULO XXIV

Avances y retrocesos

La presencia de la comunidad internacional en un proceso de paz no puede ser sino positiva. Su actuación y acompañamiento otorga al proceso seriedad, verificabilidad y compromiso frente al mundo. De hecho, son pocos los procesos de paz exitosos que no han contado, como un factor fundamental para su desarrollo, con la presencia amiga y facilitadora de actores internacionales.

No ha dejado de extrañarme, por eso, que algunos críticos demeriten el papel de la comunidad internacional en el empeño de paz de los colombianos, alegando que dicho acompañamiento implicaba una especie de reconocimiento internacional a la guerrilla y que podía acabar por fortalecerla.

¡Todo lo contrario! La presencia generosa y continua de la comunidad internacional en los dos procesos de paz que adelantamos no era un acto de desconocimiento del Estado o de reconocimiento de la guerrilla, sino una acción expresa de apoyo al Estado colombiano en su deber de buscar la paz para el país.

Cuando los embajadores visitaban, por ejemplo, la Zona de Distensión para asistir a eventos específicos o acompañar las negociaciones, lo hacían por invitación directa del Estado, del Gobierno colombiano, y mal puede interpretarse su presencia como una forma de legitimación de la guerrilla, y mucho menos sugerirse que esto la acercaba a un estado de beligerancia.

Pretender que la guerrilla manejaba o utilizaba para sus fines a los embajadores o altos funcionarios de los organismos internacionales es desconocer la verdadera dimensión de su acompañamiento, que siempre se dio con el Estado y por el Estado, como un gesto solidario e inequívoco de respaldo al pueblo colombiano y a su anhelo de paz.

LA AUDIENCIA INTERNACIONAL

Dentro de este contexto, antes del intercambio de propuestas se realizó, finalmente, el 29 y 30 de junio de 2000, la Audiencia Internacional sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente. En un acto de claro respaldo internacional al proceso de paz, asistieron los embajadores y delegados de 21

Estados, además de representantes de organizaciones internacionales y de la Unión Europea, quienes escucharon las posiciones del Gobierno y de la guerrilla sobre el tema.

Las FARC habían llevado a Los Pozos a sus jefes más importantes, encabezados por el propio Marulanda. Allí estaban Alfonso Cano, Iván Márquez, Raúl Reyes y los demás miembros del equipo de negociación de la guerrilla. También habían realizado un gran desplazamiento de hombres con el único objetivo de impresionar a los visitantes extranjeros haciendo una ostentosa demostración con la presencia de más de mil guerrilleros. Nunca se había visto tanto guerrillero junto y nunca se volvieron a ver en esa cantidad.

Incluso, cuando llegaron los diferentes invitados internacionales, tenían preparada una especie de calle de bienvenida, con honores militares, para recibirlos una vez se bajaran del avión. El comisionado y los negociadores del Gobierno, por supuesto, tan pronto vieron semejante despropósito, desviaron el rumbo y caminaron por detrás de la "calle de honor", dando a entender claramente que éstos no pueden aceptarse ni recibirse sino de verdaderas autoridades.

La reunión se dividió en dos partes: primero, los delegados internacionales se reunieron con los delegados del Gobierno y de la guerrilla en una sesión privada que tenía como objetivo presentar las consideraciones de cada parte sobre el proceso y también sobre el tema de la audiencia. En la segunda parte se oyeron públicamente los planteamientos de la guerrilla y del Gobierno así como de representantes de los campesinos cultivadores y de algunas ONG que habían sido invitadas a participar.

La primera parte de la reunión resultó ser, para nuestros efectos, la más importante, pues, al contrario de lo que la guerrilla esperaba, en lugar de obtener de los representantes internacionales un reconocimiento político, lo que recibieron fueron duros reclamos por sus actos de violencia e intimidación contra el pueblo colombiano.

El alto comisionado, Camilo Gómez, les había hecho saber previamente a los embajadores que, si querían expresar el rechazo de la comunidad internacional, contra dichos actos, éste era el escenario propicio, y así lo hicieron, con valentía y claridad.

Al inicio de la sesión, el comisionado hizo una breve presentación sobre los temas a tratar, en la que ratificó la posición del Gobierno en cuanto a la voluntad de encontrar una salida negociada al conflicto y planteó la urgencia de que se redujera la intensidad del conflicto para que el proceso presentara avances notorios al común de los ciudadanos. Por su parte, Marulanda leyó un discurso en el cual atacó el Plan Colombia y los programas de fumigación y les pidió a los europeos que desnarcotizaran el problema colombiano, sin referirse en ningún momento al tema de la violencia.

Marulanda, además, aprovechó la ocasión para señalar de manera enfática que las FARC no sembraban ni cultivaban ni comerciaban con cocaína.

na. Él sabía que allí tenía, por primera vez en la historia de la guerrilla, una oportunidad sin igual para demostrarle a la comunidad internacional la voluntad de avanzar en la paz y sus intenciones políticas, para lo cual la afirmación que estaba haciendo resultaba de gran importancia. Era la palabra del máximo dirigente de las FARC frente al tema del narcotráfico. Lamentablemente, varios hechos posteriores demostraron que las palabras pronunciadas por Marulanda no eran ciertas.

Después de las dos primeras intervenciones, cada uno de los embajadores tomó la palabra y, sin que se hubieran puesto de acuerdo, todos rechazaron enfáticamente las acciones violentas de la guerrilla, en especial el secuestro, el reclutamiento de menores y los daños a la población civil. Como nunca antes, los delegados hablaron en tono enérgico y directo a la guerrilla, exigiéndole que suspendiera las acciones violentas y que diera claras muestras de paz. Como era de esperarse, los miembros de las FARC apenas musitaban palabra y sus rostros de disgusto eran inocultables. Todos los delegados internacionales fueron contundentes, algunos más que otros, y a la guerrilla le quedó claro que, si bien la comunidad internacional apoyaba los esfuerzos de paz, a la vez exigía hechos concretos.

Al final, Reyes, a nombre de la guerrilla, retomó la palabra y trató de defender la posición de las FARC, diciendo que ellos también defendían los derechos humanos como postulado de su lucha, si bien reconoció que cobraban dinero para mantenerse, es decir, aceptó, como ya varias veces lo había hecho, que las FARC eran autoras de muchas extorsiones y secuestros. La intervención de Reyes fue complementada por Joaquín Gómez, quien admitió que lo que habían hecho con la llamada "ley 002" no era otra cosa que la "legalización" del cobro de las extorsiones y del secuestro. No fue poco el asombro de los asistentes frente a un reconocimiento tan tajante.

La primera parte de la reunión terminó con caras largas y no pocas expresiones de disgusto por parte de la guerrilla, que sentía que el Gobierno había introducido temas diferentes a los de la audiencia. Ya en la audiencia pública, que comenzó por la tarde y continuó al día siguiente, intervinieron, además de los voceros de las FARC y del Gobierno, cerca de 45 personas. Los delegados internacionales, con paciencia y estoicismo, oyeron todos los planteamientos y soportaron las inclemencias del calor que se ensañaba contra todos en el Caguán.

De la audiencia se obtuvieron dos resultados importantes: de una parte, la guerrilla constató en forma directa la gran preocupación que la comunidad internacional, de manera unificada, tenía por el tema de los derechos humanos y el DIH, en especial respecto al secuestro, la extorsión y los ataques a la población civil realizados por las FARC. Hasta entonces, ellos no creían que sus acciones fueran condenadas de forma tan generalizada. Por otra parte, se dio un primer paso para llegar al acuerdo de conformar el grupo de países

facilitadores del proceso de paz con las FARC, el cual no se crearía sino ocho meses después, en marzo de 2001, con la participación de diez países.

Hay que reconocer la labor y entrega de todos los embajadores y representantes de entidades internacionales, quienes atendieron con total compromiso su cita con la paz, y se quedaron, incluso, a dormir en la Zona. Descalificar su interés y acompañamiento, aduciendo que su presencia sólo favorecía a las FARC, es algo que, simplemente, no cabe en la cabeza ni corresponde a la realidad.

Por el contrario, a la guerrilla le quedó un sinsabor después de la finalización de la audiencia, pues no logró ninguno de sus ilusos objetivos de reconocimiento político y sí recibió, en cambio, el justo reclamo de la comunidad internacional.

Desde ese momento, y a pesar de que había sido el propio Marulanda el que había puesto el tema sobre la mesa, la guerrilla empezó a bajarle el ritmo a la discusión del cese de fuegos, alegando que era mejor seguir resolviendo puntos de la agenda de negociación antes de discutir ese punto trascendental.

No obstante, el Gobierno insistió en la importancia del tema y, tal como se había acordado, el 3 de julio de 2000, en una reunión especial, el Gobierno y las FARC intercambiaron en sobres cerrados las propuestas de cese de fuegos y hostilidades. No hubo mayores sorpresas en la que ellos presentaron pues se trataba del mismo documento que Marulanda había leído semanas atrás, algo muy simple, pero que servía de base para iniciar la discusión.

UN PASO ADELANTE Y DOS ATRÁS

La Mesa acordó un término de un mes para analizar ambos documentos y ratificó la idea de no dar a conocer a la luz pública las propuestas presentadas. Ese mes sería utilizado para que cada parte preparara las sustentaciones correspondientes y examinara cuidadosamente la propuesta de la otra.

Infelizmente, durante los tres meses siguientes a la presentación de las propuestas un sinnúmero de incidentes y de hechos políticos llevaron a un estancamiento en las negociaciones.

Acontecimientos que eran positivos para el país inquietaban a la guerrilla y le hacían enredar la discusión. En especial, la aprobación del Plan Colombia en los Estados Unidos y la anunciada visita del presidente Clinton a Colombia eran utilizadas continuamente como pretextos para complicar aún más las discusiones. Era evidente el temor que las FARC sentían por la modernización de las Fuerzas Militares y por el apoyo norteamericano en la lucha contra el narcotráfico. Las relaciones con los Estados Unidos pasaban por un momento excelente y en el imaginario de la guerrilla eso representaba la posibilidad cercana de una intervención militar norteamericana en el conflicto colombiano, algo que jamás pasó ni por mi cabeza ni por la

del presidente Clinton, si bien algunos "ilusos" promovían la idea como una supuesta solución al conflicto colombiano.

Como presidente, siempre dije que no aceptaría una intervención militar foránea en Colombia pues eso significaría la entrega de nuestra soberanía. Por su parte, el Gobierno norteamericano también descartaba de plano dicha posibilidad por innecesaria y absurda.

La situación de Colombia no es, por sí sola, un riesgo internacional ni tiene tampoco unas implicaciones que puedan hacer posible una intervención multinacional. El propio presidente Clinton lo aclaró en los días cercanos a su visita a Colombia y lo ratificó luego estando en Cartagena. La participación de tropas extranjeras en el conflicto colombiano no deja de ser una fantasía que nada resolvería y que, por otro lado, atentaría contra la soberanía nacional. Esto no significa que Colombia no pueda recibir ayuda y asistencia militar en la lucha contra las drogas o entrenamiento militar para la lucha contra la guerrilla. Pero de la ayuda militar y la cooperación a la intervención internacional hay una distancia enorme.

Además de estos acontecimientos internacionales, también al interior del proceso se presentaban problemas. Las denuncias sobre el secuestro de niños que eran llevados a la Zona de Distensión, denuncias de miembros de la Iglesia por violaciones a los acuerdos de la Zona de Distensión, ataques de la guerrilla en diferentes lugares, el descubrimiento de un enorme cargamento de armas para las FARC en el cual estaba involucrado Vladimiro Montesinos, y que vino a ser uno de los factores desencadenantes de la posterior renuncia del presidente Fujimori en el Perú, y el caso del aeropirata de las FARC, Arnubio Ramos, quien secuestró una aeronave en pleno vuelo para desviarla hacia San Vicente del Caguán y evadir a la justicia colombiana, fueron hechos que dilataron las discusiones sobre el cese de fuegos. Cada vez que el tema iba a ser debatido, algún problema del día a día del conflicto ensombrecía la discusión.

También se presentaron otros sucesos internos que tenían influencia, no necesariamente negativa, pero que implicaban el tratamiento de otros temas diferentes al cese de fuegos. Uno de los más importantes fue la reunión en Los Pozos, el 3 de agosto de 2000, de la Mesa de Negociación con diferentes fuerzas políticas.

Se trataba del llamado "Grupo de Apoyo Político", que por primera vez se reunía, el cual produjo un documento de apoyo total a la negociación. A esta reunión asistieron Horacio Serpa, por el Partido Liberal; Noemí Sanín, por el Movimiento Sí Colombia; Omar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador; Jaime Caicedo, por el Partido Comunista; Mario Uribe, como presidente del Senado, y Basilio Villamizar, como presidente de la Cámara de Representantes. Ellos representaban las principales fuerzas políticas del país y su presencia allí significaba de nuevo la apertura política que el Gobierno siempre quiso darle al proceso.

En esta reunión todos ratificaron su compromiso con la solución política negociada y una política de Estado para la paz. Reiteraron el respaldo a la lucha frontal contra el paramilitarismo y coincidieron en la importancia de alcanzar acuerdos concretos acerca de los temas que se encontraban en la mesa de negociación (crecimiento económico y empleo, y cese de fuegos y hostilidades). Manifestaron la importancia de avanzar en compromisos que permitieran el respeto por el DIH y los derechos humanos; respaldaron los distintos mecanismos de participación de la Mesa, y ratificaron el respaldo a los acuerdos que sobre los distintos temas se habían suscrito. También, como es natural, expresaron sus inquietudes y preocupaciones sobre el proceso.

UNA ENTREVISTA CON CASTAÑO

Uno de los hechos más destacados de esos días fue el secuestro de varios parlamentarios por parte de Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas. En el mes de octubre, y después de una intensa actividad de Castaño frente al proceso de paz mediante comunicados de diferente índole, éste secuestró a un grupo de congresistas, cuya liberación condicionó a que el Gobierno se reuniera con las Autodefensas, según él, para "oír" los planteamientos que éstas querían realizar.

Inicialmente, Castaño pretendía tener una discusión con el Gobierno y que el comisionado se reuniera con él en las montañas de Córdoba, situación que resultaba bastante compleja por todas las implicaciones que podía tener frente a la comunidad internacional y frente a los dos procesos de paz que adelantábamos. Además, suponía una especie de reconocimiento político a los paramilitares, el cual resultaba impensable.

Dada la gravedad de los hechos, decidí que el comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y el ministro del Interior, Humberto de la Calle, viajaran a Montería, la capital de Córdoba, a entrevistarse con el gobernador de dicho departamento, Ángel Villadiego; con Edmundo López Gómez, tío de Juan Manuel López, y con Francisco Jattin, padre de Zulema Jattin, parlamentarios que estaban secuestrados por los paramilitares. Además de ellos, estaban secuestrados otros cinco congresistas: Miguel Pinedo, Antonio Guerra, José Ignacio Mesa, Luis Felipe Villegas y Aníbal Monterrosa. Entonces se tenía la idea de que habría una rápida liberación, para enviar un mensaje al Gobierno con los políticos secuestrados. No obstante, pasados los días, se entendió que el secuestro iba para largo y que la situación de los rehenes era de alto riesgo.

En el Congreso, por supuesto, la situación adquirió altos niveles de tensión. Los congresistas —después del plagio de siete de sus colegas— sentían que su libertad y sus vidas corrían peligro, por lo que pidieron medidas adicionales de seguridad y exigieron del Gobierno que hiciera todo lo necesario para obtener la libertad inmediata de sus colegas.

Yo era consciente de que, cualquiera que fuese la actitud que adoptara, sería objeto de críticas. Sin embargo, puesto en la necesidad de escoger entre dos males, privilegié las razones humanitarias y opté por autorizar el encuentro con tal de salvar a los congresistas. Si la reunión no se daba, no habría liberación y la vida de los rehenes correría peligro.

Conocida la negativa rotunda del Gobierno de enviar al comisionado a reunirse con Castaño y su gente, éste modificó su posición y pasó a exigir la presencia del ministro del Interior, y sólo de él, como condición para la liberación de los congresistas.

Después de analizar esta nueva alternativa, evaluando una a una sus eventuales implicaciones, decidimos que cualquier contacto con Castaño por parte de cualquier alto funcionario del Gobierno debería tener dos características expresas: sería un acto humanitario para lograr la liberación de unos secuestrados y no implicaría un principio de reconocimiento político a las Autodefensas Unidas de Colombia. Así se le hizo saber a Castaño, quien aceptó estas condiciones para el encuentro.

Hacia las 7 de la noche del día 5 de noviembre tomé la decisión de enviar al ministro y, para prevenir cualquier mala interpretación sobre el contacto humanitario, determinamos buscar la compañía de un representante de la Iglesia católica y otro del cuerpo diplomático. Directamente hablé con monseñor Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá, quien accedió a recibir una llamada de Humberto de la Calle para discutir el asunto.

Aunque al principio pareció que el propio monseñor estaba dispuesto a viajar, luego me sugirió, en una nueva conversación telefónica, que asistiera monseñor Fernando Sabogal, obispo auxiliar de Bogotá, quien, finalmente, aceptó. En cuanto al cuerpo diplomático, ya entrada la noche, me comuniqué con el embajador de España, Yago Pico de Coaña, quien solicitó un breve tiempo para realizar consultas con su gobierno. Como consecuencia de ellas, y previa garantía explícita de mi parte en el sentido de que la reunión no encarnaba un principio de reconocimiento político de los paramilitares, también aceptó participar en la misión humanitaria.

Fue así como el 6 de noviembre, en la madrugada, viajaron, en uno de los aviones que estaban al servicio del alto comisionado, el ministro del Interior, Humberto de la Calle; monseñor Fernando Sabogal; el embajador de España, Yago Pico de Coaña, y su ministra consejera, Julia Alicia Olmo. Lo que a continuación relato me lo contó luego el ministro De la Calle.

Aunque la reunión se había programado en el municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, el avión tuvo que aterrizar primero en Barrancabermeja, Santander, para que los pasajeros abordaran otra avioneta o un helicóptero que pudiera operar en la pequeña pista de Santa Rosa. Cuando un periodista vio al ministro en el aeropuerto de Barrancabermeja lanzó la noticia, lo que hizo que Castaño temiera una celada, por lo que,

por intermedio de la defensora del Pueblo en Córdoba, Milene Andrade, mandó la razón de que la reunión sería cancelada con consecuencias imprevisibles.

El ministro, siempre por conducto de ella, explicó que todo se debía a una circunstancia fortuita y que su presencia en Barrancabermeja no tenía como propósito recoger efectivos del Ejército, como lo había supuesto Castaño, sino que se originaba en el problema de la pista de aterrizaje. Aclarada la cuestión, se dirigieron hacia Santa Rosa, a donde llegaron en helicóptero unos 40 minutos más tarde.

Momentos después de descender de la aeronave apareció una camioneta Toyota conducida por un joven oriundo de la costa atlántica, quien saludó con toda naturalidad y, sin mediar palabra o explicación alguna, los invitó a abordar el vehículo. Después de un recorrido de unas dos horas por caminos sin pavimentar, rodeados en gran parte por hombres armados que portaban brazaletes de las Autodefensas, llegaron finalmente a su destino.

Al lado de la carretera había un cobertizo en el que se encontraban unos cien hombres con armas largas y, al lado, en un tenderete improvisado, se hallaba Castaño; un comandante al que le decían Julián, que era el jefe de las Autodefensas del Sur de Bolívar, y dos o tres comandantes más, todos ellos vistiendo uniformes camuflados y portando pistolas. A su lado estaban dos de los senadores que habían sido secuestrados: Miguel Pinedo y Juan Manuel López.

Castaño se adelantó unos pasos para saludar al grupo con compostura y muestras de respeto. El senador Juan Manuel López saludó amablemente pero sin dejar traslucir mayor emoción. En cambio, Miguel Pinedo abrazó conmovido al ministro y le dijo:

—Gracias por venir. Mi ánimo está alterado no por miedo, ni por la aflicción que produce estar privado de la libertad, sino por rabia. Cuando hicieron contacto conmigo me dijeron que era para recibir a los secuestrados y todo resultó ser un engaño.

El ministro tomó inicialmente la palabra para puntualizar los dos principios acordados: que la reunión tenía un carácter exclusivamente humanitario, dirigido a obtener la libertad de los congresistas secuestrados, y que de ella no se derivaría ningún principio de reconocimiento político.

—Lo que quiero, señor ministro —le contestó Castaño—, es que la comitiva aquí presente escuche mis planteamientos.

La conversación se llevó a cabo en medio de la tensión propia de un encuentro de esta naturaleza. Castaño inició su exposición:

—El secuestro está ligado a las discusiones sobre una posible ley de canje entre militares secuestrados por las FARC y guerrilleros presos. Me opongo al canje. No sólo a la idea de cambiar un guerrillero por un soldado, sino incluso si las FARC agregaran una lista de civiles dentro del grupo de los liberados. El canje no puede hacerse ahora. Debe ser parte de una solución al

final de las negociaciones. Nosotros también tenemos presos en las cárceles del país y no estamos pidiendo el canje. Que los 680 combatientes míos y los 370 de las FARC se queden hasta el final. Es más, si hay canje con las FARC, yo no pido lo mismo. Los míos seguirán presos. Pero sí pido una cárcel especial, segura, en la cual puedan estar juntos.

Después el jefe de las Autodefensas anotó:

—Las Autodefensas somos una sublevación antisubversiva. No somos paramilitares, así nos llamen así, y tampoco somos paraestatales. Estamos con el Estado pero lo hacemos por la vía de la subversión. Lo que ocurre es que el régimen penal está desbalanceado. La rebelión es casi un delito leve. Como no existe el delito de antisubversión, entonces a nosotros nos persiguen con una legislación que se dictó contra la mafia. Las autodefensas empezaron como mafia, pero no lo son ahora. Primero fue la práctica que la teoría.

Como es lógico, esta posición resultaba inaceptable para el Estado, pero el ministro no entró en ninguna discusión con Castaño pues las instrucciones que tenía se referían exclusivamente al desarrollo de una acción humanitaria y no podía sostener una discusión política.

Castaño también mencionó el tema relacionado con el proceso del ELN y la posible Zona de Encuentro en el sur de Bolívar. Dijo sobre el tema:

—En cuanto a la propuesta de Zona para el ELN, ella es innecesaria. En el sur de Bolívar, las autodefensas tienen el 70 u 80% del territorio controlado. El ELN sólo puede hacer terrorismo. Entonces, ¿para qué el despeje? De todas maneras, la zona depende de la comunidad. Traté de frenar las movilizaciones del movimiento "No al Despeje" pero los dirigentes y la gente no dejaron. Asocipaz representa a la comunidad. Se hará lo que la comunidad quiera. Ahora bien, tampoco es que la comunidad quiera a las autodefensas por sí mismas. Lo que pasa es que la comunidad le debía 3.800 millones de pesos del producto de la coca al ELN y las autodefensas les condonaron esa deuda. ¡Por eso nos quieren! En todo caso, vale la pena considerar la exclusión de San Pablo dentro de la posible Zona de Encuentro y que todo el ELN se agrupe en un solo sitio.

El ministro De la Calle se limitó a escuchar, sin hacer comentarios de fondo. La conversación continuó en medio de un sencillito almuerzo y, al finalizar, Castaño le dijo al ministro que podía viajar ya con los dos senadores que estaban allí presentes y le prometió que al día siguiente liberaría a los demás en el parque principal de Tierralta y en Medellín.

Antes de partir, el ministro llamó aparte a Castaño y le transmitió el único mensaje que yo le había enviado: *"Dele una oportunidad a la paz"*.

Los demás miembros de la comisión que acompañaban al ministro estuvieron presentes en toda la reunión como testigos de lo que sucedía. Finalizada la reunión, los dos senadores liberados y la comitiva se pusieron en marcha hacia la pista donde habían aterrizado para retornar a Bogotá,

pero al llegar al aeropuerto encontraron que no todos cabían en la pequeña aeronave y resultaba imposible hacer dos viajes hacia Barrancabermeja.

En ese momento, en forma providencial, aterrizó una avioneta. El piloto contó que venía a recoger a una persona enferma para llevarla a Barranca. Después de esperar un rato y constatar que nadie más había hecho presencia en el aeropuerto, el ministro le explicó la urgencia que tenían y le pidió que llevara parte de la comisión a Barranca, donde esperaba el otro avión.

Ese fue todo el episodio, que culminó al día siguiente con las demás liberaciones, tal como Castaño había prometido. El viaje y la reunión del ministro del Interior con el líder paramilitar no había sido otra cosa que una clara labor humanitaria, pero las FARC, infortunadamente, no quisieron entenderlo en su real dimensión.

Fue así como el 14 de noviembre, cuando estaba previsto iniciar, al fin, la discusión de las propuestas de cese de fuegos, la guerrilla, en otro de sus típicos actos unilaterales, congeló de nuevo el proceso aduciendo que la entrevista del ministro De la Calle con Castaño contrariaba la lucha del Estado contra los paramilitares y dejaba traslucir una intención de darle a las autodefensas una clase de reconocimiento político, lo cual nunca fue así.

Las FARC enviaban de nuevo una señal equivocada a los colombianos y a la comunidad internacional, escudados como siempre en el tema del paramilitarismo y evitando avanzar en la discusión del cese de fuegos, que era lo que más ansiaba la gente del común. Otra vez permitían que su temor a la paz se impusiera sobre las esperanzas de los colombianos.

CAPÍTULO XXV

La más grande ayuda jamás recibida

El 14 de enero de 2000, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, vino a Cartagena para una visita de dos días con el fin de ratificar ante Colombia y el mundo la seriedad y el compromiso del gobierno Clinton frente al Plan Colombia. Entonces tuve la oportunidad de agradecerle, en nombre del pueblo colombiano, y de expresar mi complacencia por las nuevas facetas de la ayuda planteada, con las siguientes palabras:

"[...] Me siento complacido de que el paquete de ayuda de Estados Unidos también venga a apoyar el proceso de paz de Colombia, el desarrollo económico, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de un desarrollo alternativo. Estados Unidos comprende claramente lo que mi administración ha venido diciendo todo el tiempo: que para tener éxito, la lucha contra los narcóticos tiene que ir más allá de la erradicación y los arrestos, que existen unas dimensiones sociales y económicas en esta crisis que tienen que ser enfrentadas".

Terminada la visita de la secretaria Albright enfilamos todas nuestras baterías hacia el poder legislativo estadounidense, en cuyas manos quedaba la aprobación del inmenso paquete de ayuda.

El primer semestre del año 2000 trabajamos intensamente con los congresistas para lograr la aprobación de los recursos para el Plan Colombia. Muchos de ellos viajaron al país, estableciendo un contacto directo con nuestros problemas y necesidades, pero también con el sacrificio que estábamos haciendo para luchar contra el problema mundial de las drogas. En total, durante mi gobierno nos visitaron cerca de 120 congresistas norteamericanos, una cifra récord si se compara con cualquier otra nación, en especial porque los congresistas pocas veces vienen a Suramérica y menos a países como Colombia, estereotipados como violentos y peligrosos. Gracias a esta labor exhaustiva, pudimos consolidar un apoyo bipartidista en los Estados Unidos y una comprensión profunda sobre nuestra situación, como nunca antes se había tenido.

Como presidente de la República participé directamente en las labores de cabildeo para obtener los fondos para Colombia. Con ese fin visité dos veces Washington durante el primer semestre del año 2000, siguiendo una apretada agenda de reuniones destinada a lograr los más efectivos respaldos

encaminados a la aprobación de los fondos para el Plan Colombia. El 25 de enero me reuní de nuevo con el presidente Clinton, quien se comprometió a venir a Colombia tan pronto fuera aprobado el presupuesto de ayuda, en compañía de sus más altos funcionarios y de líderes parlamentarios de los dos partidos, para dejar claro que el Plan Colombia contaba con un respaldo bipartidista, que garantizaba su sostenimiento y permanencia.

Finalmente, después de los naturales debates y conciliaciones en el trámite de la ley en el Congreso estadounidense, a finales de junio fue aprobado por este órgano un aporte total de 1.300 millones de dólares para el Plan Colombia, representado en equipos militares, asesoría y capacitación para la lucha contra el narcotráfico, así como en fondos para apoyar programas de desarrollo alternativo, de alivio a los desplazados, de derechos humanos y de justicia. ¡La más grande ayuda jamás antes aprobada para el país!

El 13 de julio de 2000 el presidente Clinton, nuestro aliado indeclinable en este esfuerzo, sancionó la ley que contemplaba la ayuda a Colombia, con las siguientes palabras:

"El presidente Andrés Pastrana ha trabajado con expertos en su país y fuera de él para diseñar el Plan Colombia, un plan integral que busca la paz, combatir las drogas, fortalecer la economía y arraigar la democracia."

"La ley que he firmado hoy representa la contribución de los Estados Unidos a esta lucha. Incluye fondos diez veces superiores para la promoción del buen gobierno, las reformas judiciales, la protección de los derechos humanos y el desarrollo económico."

"Ésta aumentará los incentivos para una solución pacífica del conflicto interno al tiempo que ayudará al Gobierno colombiano a contener la llegada de drogas a nuestras costas."

"En la medida en que Colombia lucha por fortalecer su democracia y bloquear el narcotráfico, está luchando por todos nosotros. Si ellos están dispuestos a dar la batalla, nosotros también debemos estarlo para asumir algunos de los costos. Me enorgullece firmar una ley que nos compromete a ello."

Así fue como se aprobó el aporte inicial de Estados Unidos al Plan Colombia, un aporte que significaba un 17% de los 7.500 millones de dólares que comprendía todo el Plan. Del monto total de la ayuda norteamericana, el 68% se enmarcaba en asistencia para actividades militares y de policía, y el 32% se destinaba a programas sociales, de justicia, derechos humanos y desarrollo alternativo. ¡Un verdadero cambio en la ayuda de los Estados Unidos a Colombia!¹⁸

¹⁸ Casi un lustro después de su aprobación el representante republicano Dennis Hastert, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, escribió lo siguiente en una columna publicada en *El Tiempo* (15-06/05): *"El presidente Andrés Pastrana desarrolló el Plan Colombia para enfrentar los problemas de seguridad y defensa, así como el crecimiento social y económico de su país. Con el fuerte apoyo del liderazgo republicano en el Congreso, en julio de 2000 el presidente Bill Clinton sancionó la aprobación de 1.300 millones de dólares para el Plan Colombia."*

En efecto —y esto no se vio por el debate que generó el porcentaje de la ayuda militar—, se trataba de la primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales en que Estados Unidos entregaba millones de dólares al país para el desarrollo de proyectos de carácter social como la sustitución voluntaria de cultivos alternativos. La ayuda en equipamiento militar fue, también, fundamental —tal como el país hoy lo reconoce y agradece— para la modernización de nuestra Fuerza Pública, tema que trato con mayor extensión en el siguiente capítulo.

Infortunadamente, el hecho de que la mayor parte de la ayuda estadounidense estuviera destinada a las Fuerzas Armadas hizo desdibujar en la opinión pública nacional e internacional el verdadero carácter del Plan Colombia, al que tacharon injustamente como “guerrerrista” o militarista, cuando era un plan concebido, principalmente, para allanar el terreno de la paz.

Es cierto que la mayoría de la ayuda norteamericana tenía énfasis militar, pero dicha ayuda era apenas el 17% de la totalidad del Plan, en tanto la inmensa mayoría de los recursos nacionales, de los empréstitos internacionales y de la ayuda proporcionada por Europa, Japón, Canadá y América Latina, se destinó a programas de carácter social.

Al finalizar mi gobierno estábamos ejecutando 3.500 millones de dólares en programas de desarrollo social y fortalecimiento institucional que formaban parte del Plan Colombia. A través del Fondo de Inversiones para la Paz, 900 millones de dólares se invirtieron en programas de alto impacto social, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción, que han sido continuados por mi sucesor, y dejamos en proceso de ejecución 2.600 millones de dólares correspondientes a una estrategia de largo plazo que contenía proyectos de desarrollo alternativo, derechos humanos, atención humanitaria y obras de infraestructura física y social (a través de programas como Vías para la Paz, Obras para la Paz y Gestión Comunitaria).

El Plan Colombia, por otra parte, establecía una meta bastante realista frente a los cultivos de coca, como era la reducción de los mismos a la mitad en un término de cinco años. Esa meta se consiguió a finales de 2003, o sea dos años antes de lo previsto, gracias a la efectiva combinación de aspersión aérea contra los grandes cultivos y sustitución voluntaria para los pequeños campesinos, que prácticamente acabó con estos cultivos en zonas antes casi vedadas, como el Putumayo.

No más entre los años 2000 y 2002, el área cultivada con coca se redujo en 37,5% al pasar de 163.298 hectáreas a 102.071 hectáreas. La producción nacional de amapola también mostró una tendencia decreciente en dicho lapso, al bajar el área cultivada en un 41%, es decir, 2.672 hectáreas.

Cinco años más tarde, me da mucho orgullo saber que los nacionales de ambos países estamos viendo los beneficios del Plan Colombia”.

"MISTER PRESIDENT, ¿PUEDO SUBIR A SU AVIÓN?"

El primer semestre del año 2000 transcurrió, entonces, en las gestiones para conseguir la aprobación del apoyo estadounidense al Plan Colombia, en tanto en el segundo semestre nos dedicamos a consolidar su implementación y a estructurar y poner en marcha los diversos programas.

Semejante cantidad de recursos norteamericanos comprometidos con Colombia trajeron consigo incontables visitas de funcionarios norteamericanos de toda índole, para la coordinación y supervisión del buen uso de los mismos. Fue tal el cambio en el nivel de ayuda —que nos situó como el tercer país receptor de ayuda después de Israel y Egipto— que la propia embajada estadounidense en Bogotá se convirtió, a partir de la aprobación del Plan Colombia, en la embajada más grande de los Estados Unidos en el mundo.

En agosto se presentó un relevo en la dirección de la embajada, terminando sus funciones discretas y efectivas el embajador Curtis Kamman, cuyo nivel de compromiso con el país fue verdaderamente destacable y digno de gratitud, a quien reemplazó la dinámica e inteligente embajadora Anne Paterson, quien llegó con la difícil responsabilidad de implementar la ayuda de su país al Plan Colombia.

El 30 de dicho mes el presidente Bill Clinton cumplió la promesa que me había hecho y vino a Cartagena, junto con su hija Chelsea, acompañado, además, por el líder republicano —a la sazón presidente de la Cámara de Representantes— Dennis Hastert; el líder demócrata y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Joseph Biden, uno de los principales promotores de Colombia en el Congreso norteamericano; otros nueve congresistas de los dos partidos; la secretaria de Estado, Madeleine Albright; la procuradora general, Janet Reno; el zar antidrogas, general Barry McCaffrey; el consejero para la Seguridad Nacional, Sandy Berger, y el jefe de Gabinete, John Podesta. Con la presencia de los importantes congresistas de los dos partidos quedaba sellado el carácter bipartidista del apoyo estadounidense al Plan Colombia, gracias al cual se garantizó su continuidad.

Hacía más de diez años no venía a Colombia un presidente de los Estados Unidos. El último había sido George Bush, en febrero de 1990, bajo el gobierno del presidente Barco, y antes que él habían venido Franklin D. Roosevelt, en 1934; John F. Kennedy, en 1961, y Ronald Reagan, en 1982.

Fue una visita llena de momentos emotivos en la que nos reunimos en el bellísimo "corralito de piedra" los protagonistas colombianos y estadounidenses que habíamos liderado este inmenso esfuerzo de cooperación internacional para buscar la paz de Colombia, fortalecer nuestras instituciones, dar soluciones dignas a la población más abandonada y minar definitivamente el negocio del narcotráfico en nuestro país. Teníamos buenos motivos para celebrar.

En el curso de un solo día, el presidente Clinton vivió múltiples experiencias que lo "empaparon" de la realidad nacional y lo terminaron de convencer sobre la pertinencia de la ayuda que había sido aprobada para luchar contra la violencia y el narcotráfico en un país hermoso y pujante, como Colombia, que jamás renuncia a la esperanza ni a la alegría.

Como primera actividad de la agenda, lo acompañé durante un recorrido especialmente diseñado para mostrarle la forma en que la Policía Nacional y la Armada Nacional combatían a los narcotraficantes. En una de sus instalaciones, Clinton conoció a viudas de oficiales y suboficiales que habían dado su vida en la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas se abrazó a él y lloró contra su hombro, lo que lo conmovió muchísimo. Otra le regaló la medalla al honor que le habían otorgado a su esposo, algo que Clinton valoró especialmente, con sus ojos encharcados por las lágrimas. Él todavía guarda esta condecoración en su oficina de Nueva York como un recordatorio del valor de los colombianos que han sacrificado tanto en la lucha contra un flagelo que no es solo nuestro, sino del mundo entero.

En la Casa de Huéspedes tuvimos luego una reunión privada en la que dialogamos tranquilamente sobre todos los temas bilaterales, que incluían desde el orden público y el Plan Colombia hasta la necesidad de prorrogar y ampliar el acuerdo de preferencias arancelarias —ATPA— que beneficiaba el ingreso de productos colombianos a los Estados Unidos, como una forma de apoyar la economía legal del país. A pesar del afán que mostraban sus asesores, siempre presionados por el horario, Clinton estuvo completamente relajado y a gusto, por lo que no le importó retrasar su agenda ni su partida para compartir y disfrutar con mayor dedicación cada uno de los minutos que pasó en Cartagena.

Uno de los actos que tuvimos en la tarde fue la visita e inauguración de una Casa de Justicia construida con el apoyo de la USAID para acercar a los funcionarios judiciales y facilitar los trámites y las denuncias a los habitantes de las zonas más pobres de Cartagena. Había una humilde anciana que vivía al frente de la Casa de Justicia y a la que la Alcaldía le había arreglado la fachada de la casa para la visita del mandatario norteamericano, por lo que ella estaba muy agradecida y había colocado su foto en la pared, como si fuera la de un santo. La anécdota había llegado a la prensa extranjera y esa mañana una fotografía de la anciana y su casa había aparecido en *The New York Times*.

Cuando terminó la inauguración y salimos de la Casa de Justicia, yo le pregunté a Clinton si había visto la foto en el periódico y él me dijo que sí. Entonces le señalé la humilde vivienda y él me propuso que fuéramos, lo que generó una pequeña revolución en los hombres de su cuerpo de seguridad, que protestaban y hasta nos regañaban, porque ese desvío no estaba previsto, lo que desordenaba todas sus previsiones. Haciendo caso omiso de sus protestas, entramos ambos a la casita y la señora nos recibió atónita

y feliz al mismo tiempo, conmovida por la sorpresiva visita. Era una vivienda completamente humilde, con el piso de tierra, y Clinton le dijo a la señora unas palabras amables que yo le iba traduciendo, en medio de la semioscuridad que reinaba en el interior. Al otro día, cuando algún medio de comunicación entrevistó a la anciana y le preguntaron cómo le había ido con el presidente Clinton, ella respondió:

—Muy bien, muy bien, pero el más querido era el "mono" que le traía.

Después, ya finalizando el día, llevamos al presidente Clinton, a Chelsea y al resto de la comitiva al centro histórico de Cartagena, donde caminaron por algunas cuadras y aprovecharon para comprar unas artesanías, que a él le gustan mucho y que todavía conserva. Chelsea, que estuvo parte del día con mis hijos Santiago y Laura, y con otros invitados, dejó una magnífica impresión, no sólo por ser una persona muy cálida y sencilla, sino por su inteligencia y los profundos análisis que hizo de la política estadounidense e internacional.

Por supuesto, el viaje no hubiera estado completo sin que Clinton escuchara a los "Niños Vallenatos", por los que siente especial predilección desde cuando fueron invitados a una presentación en la Casa Blanca. También visitamos la catedral de San Pedro Claver y la tumba del santo, donde se observa su conservada calavera, y él me comentó que en el sur de su país, de donde proviene, hay también muchas iglesias dedicadas a este santo jesuita que vivió y murió en Cartagena, lo cual se explica porque él es considerado el patrono de los esclavos y en dicha zona abundan los descendientes de antiguos esclavos.

Finalmente, y con algunas horas de retraso, se dio por concluida la visita presidencial, que era, sobre todo, un espaldarazo bipartidista al Plan Colombia, y fuimos a despedir al presidente y su comitiva al aeropuerto, donde lo esperaba el imponente avión presidencial. Por esos días estaba de moda la película *"Air Force One"* con Harrison Ford y todos teníamos gran curiosidad por conocer el avión. Yo nunca me hubiera atrevido a pedirlo, pero Valentina, mi niña menor, con la inocencia y la tranquilidad de la infancia, se acercó a Clinton después de los honores militares y le dijo *"Mister President, ¿puedo subir a su avión?"*, a lo que él accedió inmediatamente. Aprovechando la espontánea pregunta de Valentina, subimos con Nohra y los hijos a conocer el avión, que resultó ser igual al de la película con la única diferencia, según me explicó Clinton, de que en él no hay armas.

Pocos días después de la visita, el 14 de septiembre, en una reunión anual con los líderes religiosos más importantes de su país, el presidente Clinton resumió así el sentido de esta ayuda:

"Fuimos criticados todos aquellos que apoyamos el Plan Colombia, los republicanos y demócratas juntos, porque la gente decía: 'Oh, Clinton va a hacer

allá otro Vietnam' o que estábamos interfiriendo en las políticas de Colombia o siendo un país imperialista.

"Le dije a todo el mundo que no quiero nada para Colombia salvo una vida decente para su gente, con un modo de vida en circunstancias honorables que no ponga drogas en los cuerpos de los jóvenes estadounidenses y en los jóvenes de Europa y Asia y de todo el mundo.

"[...] Acabo de llegar de un sorprendente viaje a Colombia. Fui a Cartagena con el presidente de la Cámara de Representantes y, en una asombrosa exhibición de bipartidismo, aprobamos algo llamado Plan Colombia que fue diseñado, principalmente, para ayudar a los colombianos y a todas las naciones vecinas a reducir las drogas, ofrecer a los campesinos modos alternativos de vida y desarrollar un incremento en la capacidad del Gobierno colombiano para pelear contra los narcotraficantes".

CAPÍTULO XXVI

Hombres, equipos y leyes

No cabe duda, hoy por hoy, de que el principal combustible que tiene el conflicto interno colombiano, que transformó su naturaleza y corrompió cualquier posible ideal revolucionario, es el narcotráfico. La violencia y el narcotráfico, dos fenómenos que se alimentan y degradan entre sí, son los grandes generadores de pobreza, de desempleo y de inseguridad para una gran parte de la población colombiana, que sólo quiere trabajar y progresar en paz y por medios lícitos.

Partiendo de esta premisa, que tuvimos muy clara durante mi gobierno, entendimos que, para desterrar la violencia del país, era necesario golpear de manera efectiva el fenómeno del narcotráfico, que se ha convertido en su principal fuente de financiación, tanto en el caso de la guerrilla como en el de los grupos ilegales de autodefensa.

Sin embargo, el flagelo de las drogas ilícitas es un problema mundial y, como tal, no nos correspondía enfrentarlo solos. Con esta conciencia acudí a la comunidad internacional, demandando que asumiera su parte de responsabilidad y que colaborara con nuestro país para adelantar una estrategia integral que, pasando por la lucha contra el narcotráfico, nos ayudara a conseguir una solución pacífica al conflicto armado, a generar alternativas lícitas para los campesinos cultivadores y a llevar la presencia institucional del Estado a las regiones más pobres y alejadas del país. Esa estrategia integral es el "Plan Colombia".

Obtuvimos —después de una ardua y decidida tarea de diplomacia por la paz— apoyo técnico y económico de países europeos, del Japón, de Canadá, de naciones latinoamericanas y de organismos internacionales, enfocado especialmente hacia los aspectos sociales e institucionales del Plan.

EL COMPONENTE MILITAR DEL PLAN COLOMBIA

Esto era muy importante, pero no suficiente. No podíamos olvidar que nuestro Estado, asolado por grupos guerrilleros y de autodefensa, financiados a su vez por los dineros del narcotráfico, estaba en la obligación de proteger a sus habitantes de la violencia y la intimidación, para lo cual debíamos

fortalecer y modernizar nuestra Fuerza Pública, de forma que pudiera hacer frente a este problema, recuperando el monopolio real de las armas, que es una condición básica de cualquier Estado moderno.

Para obtener ayuda frente a este desafío no podíamos acudir a países que no entendieran la dimensión de nuestro problema o que no estuvieran en capacidad o disposición de apoyarnos en el campo militar. Pero sí podíamos contar con una potencia que había esperado cuatro años para reanudar una amistad y una colaboración plena con nosotros: los Estados Unidos de América.

Fue esta nación —primero bajo el gobierno demócrata del presidente William J. Clinton, como ya lo he expuesto en diversos capítulos, y luego bajo la dirección republicana del presidente George W. Bush— la que más nos dio la mano en dotación, equipos y asesoría para lograr el objetivo de transformar nuestras Fuerzas Militares.

De los 7.500 millones de dólares en que estimamos la inversión requerida por el Plan Colombia, cerca de 4.500 millones correspondieron a recursos puestos por nuestro país y unos 3.000 millones a fondos donados o prestados en condiciones muy favorables por la comunidad internacional. A pesar de que fue tachado como un plan militarista, lo cierto es que el Plan Colombia destinó más del 75% de sus recursos a proyectos de corte social y de fortalecimiento institucional. El resto se dirigió a fortalecer nuestra Fuerza Pública, entendiendo que este fortalecimiento era indispensable para mantener nuestro Estado de Derecho y para posibilitar la viabilidad democrática de nuestra nación.

De la ayuda norteamericana, que inicialmente se planteó en unos 1.300 millones de dólares, cerca del 70% se destinó a apoyar las actividades tanto de los militares como de la Policía contra el narcotráfico, mediante la donación de helicópteros, equipos de radar y elementos de inteligencia; la dotación de la Brigada contra el Narcotráfico, y la prestación de asesoría y entrenamiento profesional para nuestros pilotos y técnicos. Como una novedad en nuestras relaciones bilaterales, por primera vez parte de la ayuda fue destinada a programas sociales, como la sustitución de cultivos, o institucionales, como las Casas de Justicia.

El apoyo norteamericano al fortalecimiento y modernización de nuestra Fuerza Pública era algo que realmente necesitábamos y que obtuvimos gracias a una exhaustiva labor diplomática y a la gran receptividad que encontramos inicialmente en el presidente Clinton, en su secretaria de Estado, Madeleine Albright, y en los más altos funcionarios de su gobierno, así como en las bancadas demócratas y republicanas del Congreso norteamericano, y, posteriormente, en el presidente Bush y su secretario de Estado, Colin Powell.

Las relaciones de confianza y credibilidad con los Estados Unidos, representadas en mis varias visitas a la Casa Blanca, en reuniones bilaterales en

diversos foros internacionales, en la visita del presidente Clinton a nuestro país y en un constante intercambio con altos funcionarios y congresistas que vinieron a Colombia, fueron el fruto de una deliberada estrategia de aproximación que, después de cuatro años de ostracismo, devolvió a nuestro país el protagonismo que merece frente a nuestro más importante socio comercial y político.

Junto con el canciller Guillermo Fernández de Soto, los sucesivos ministros de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, los directores de la Policía Nacional, los comandantes de fuerzas y el embajador Luis Alberto Moreno, nos dimos a la tarea de explicar directamente, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, a las decenas de congresistas y funcionarios que visitamos o nos visitaron, la realidad de nuestro conflicto y la necesidad que teníamos de un apoyo real para luchar contra la plaga del narcotráfico y sus consecuencias de violencia y miseria.

Nuestro objetivo se cumplió con creces. No sólo obtuvimos una importante ayuda en helicópteros, dotación y entrenamiento, sino que logramos hacer de ésta una verdadera política de Estado para el país del norte, sustentada por los dos partidos principales, gracias a lo cual tuvo perfecta continuidad cuando el presidente Clinton fue relevado por un mandatario del partido opositor.

Además, sin que se interrumpiera el flujo de apoyo hacia la Policía Nacional logramos, por primera vez, que se destinaran recursos y equipos específicos para nuestras Fuerzas Militares, tan comprometidas como la Policía en la lucha contra el narcotráfico. De unos militares que eran mirados con recelo, a quienes les negaban las visas o que no eran invitados a cursos, logramos transmitir una nueva imagen, más ajustada a la realidad de compromiso y de respeto a los derechos humanos. Tanto fue así que el general Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, terminó condecorado con una de las más altas distinciones que otorgan los Estados Unidos.

La ayuda norteamericana, inicialmente centrada en la lucha contra el narcotráfico, se destinó a la nueva Brigada contra el Narcotráfico, y a la dotación de sus respectivos batallones, sin que pudieran utilizarse los equipos en la lucha contra los grupos armados ilegales, lo cual resultaba un contrasentido, pues todos sabíamos que éstos se financiaban con el dinero de las drogas ilícitas. Sin embargo, esa fue la condición para obtenerla y a ella nos atuvimos, conscientes de la importancia de los equipos y de la asesoría prestada. Finalmente, tuve la satisfacción de conseguir —en parte por el cambio de mentalidad que generaron los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001— que el Congreso y el Gobierno norteamericanos autorizaran el uso de la ayuda militar para la lucha contra los grupos terroristas, como ya eran clasificadas las FARC y el ELN. Ésta es una herramienta fundamental que tuve la afortunada posibilidad de legarle al gobierno que me sucedió.

En total, los Estados Unidos entregaron al país, en desarrollo del Plan Colombia, 74 helicópteros —de los cuales 72 fueron para la aviación del Ejército y 2 para la Policía—, así: 16 Black Hawk UH-60, 33 UH-1H y 25 Huey II. También aportaron la construcción y adecuación de hangares y talleres en las bases de Tolimá y Llerama, la actualización y modificación de múltiples aviones de la Fuerza Aérea —incluyendo la entrega de cinco nuevas aeronaves Schweizer—, y la capacitación y entrenamiento de las tripulaciones. Gracias a estos equipos, instalaciones y entrenamiento se dieron contundentes golpes al narcotráfico, con la ventaja de que hoy se cuenta con estos mismos equipos y personal para perseguir con igual contundencia a los grupos armados ilegales.

También la Armada Nacional recibió los beneficios del Plan Colombia, representados en la entrega, por parte de los Estados Unidos, de cuatro buques patrulleros "Point Class" para el cuerpo de Guardacostas, así como en la compra de dos aviones para apoyo logístico en las Fuerzas Navales del Sur y del Pacífico, la dotación y activación de un avión de reconocimiento y la mejoría de los sistemas de aviónica de los helicópteros de la Armada.

Sin ninguna duda, la labor realizada para garantizar el apoyo bipartidista de los Estados Unidos hacia el Plan Colombia fue un gigantesco esfuerzo diplomático, que nos demandó gran cantidad de tiempo y energías, pero que valió la pena.

FORTALECIMIENTO MILITAR CON RECURSOS PROPIOS

Ahora bien: el apoyo norteamericano fue fundamental, pero es importante aclarar que el principal esfuerzo presupuestal para equipar y profesionalizar nuestra tropa fue realizado con fondos nacionales, es decir, con el aporte tributario de todos los colombianos. No más en el tema de los helicópteros y aeronaves, los doce helicópteros Black Hawk artillados, que se sumaron a los cuatro que ya tenía la Fuerza Aérea, fueron comprados y adecuados con recursos propios, así como otros siete helicópteros Black Hawk UH-60 y seis helicópteros rusos MI-17, que hoy son el sustento de la movilidad y rápida reacción de nuestros soldados. También en la FAC se adquirieron tres aviones fantasma y cuatro aviones "Gavilán" de carga.

Hoy podemos decir, sin temor a exagerar, que Colombia posee la Fuerza Aérea más operativa en América, después de la estadounidense.

De esta manera, con recursos nacionales e internacionales, cuadruplicamos el número de helicópteros pesados artillados, pasando de 4 a 16, e incrementamos en cerca de 100 los helicópteros destinados al transporte de tropas, lo cual generó una transformación profunda en la capacidad de reacción y movilización de nuestras Fuerzas Militares, cambiando para siempre el balance del conflicto armado y solucionando de raíz nuestro primer gran problema, que era la falta de movilidad. ¡Ahora sí comenzábamos a tener un ejército de campaña!

Para lograrlo, también necesitábamos salir de los cuarteles, donde los soldados estaban acantonados mientras la guerrilla se movía por todo el país. Fue así como creamos cuatro nuevas brigadas móviles, alcanzando un total de siete, con capacidad para llegar en pocos minutos a cualquier región, por apartada que sea. Así mismo, se creó la Fuerza de Despliegue Rápido, un magnífico cuerpo élite, compuesto por 5.000 hombres de combate, bien armados y bien dotados, destinado a llevar a cabo operaciones especiales contra los grupos armados ilegales, superando toda clase de obstáculos naturales, el cual ha probado su efectividad en operaciones tan contundentes como la "Gato Negro", entre muchas otras.

De especial importancia fue la activación de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina para el control de los más de 8.000 kilómetros de ríos navegables que surcan nuestro país, la cual dejamos con cinco batallones dotados con 130 botes pirañas y 21 botes de comando y control, además de la construcción de tres nuevos puestos fluviales avanzados en los ríos Inírida, Putumayo y Meta. Los buenos resultados de la Brigada Fluvial, protagonista principal en la acción que evitó la toma de Puerto Inírida, han sido tales que se ha convertido en el elemento clave de las más exitosas operaciones en el sureste del país y, posiblemente, en la fuerza fluvial de combate más importante del mundo. Así le dimos un nuevo sentido a la Infantería de Marina, que era un componente de gran potencial, pero absolutamente subutilizado.

También para la Armada Nacional, y su indispensable tarea de controlar los ríos, se adquirieron 20 botes de comando y control y 9 embarcaciones blindadas para transporte de tropas en operaciones fluviales. Además, con la creación de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, se reactivó la industria astillera y se recuperó la capacidad estratégica de diseñar, construir, reparar y mantener nuestra flota de guerra, muestra de lo cual fueron cinco buques nodrizas de apoyo fluvial construidos totalmente en nuestro país.

Adicionalmente, se creó en el Ejército —como ya lo mencioné— la Brigada contra el Narcotráfico, se instaló el primer batallón de alta montaña en la región del Sumapaz —que cortó el principal eje de comunicación de las FARC—, se dejó financiado el batallón de alta montaña para la zona de los Farallones en el Valle del Cauca y se planearon otros dos en la Sierra del Cocuy en Boyacá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales fueron construidos y puestos en marcha por el siguiente gobierno.

Con todos estos elementos —a los que habría que agregarles los esfuerzos hechos en materia de modernización de comunicaciones y de inteligencia, la cual dotamos de más plataformas y elementos técnicos y de una Central de Inteligencia Conjunta para compartir información entre las fuerzas— las Fuerzas Militares de Colombia se transformaron en el curso de cuatro años en un ejército exitoso y competente, capaz de actuar con rapidez y contun-

dencia frente a cualquier amenaza contra la vida o integridad de los colombianos.

MÁS Y MEJORES HOMBRES

Por supuesto, para conformar estas nuevas brigadas, fuerzas y batallones necesitábamos también generar un cambio cuantitativo y cualitativo en el personal armado que, como mencioné antes, estaba compuesto en 1998 por 34.000 soldados bachilleres sin entrenamiento ni capacidad de combate, por 60.000 soldados regulares y tan sólo unos 22.000 soldados profesionales.

Sin embargo, no era posible —así se tuviera el presupuesto para hacerlo— incrementar el número de soldados profesionales y regulares de un momento a otro, pues esto implicaba formar simultáneamente —con el tiempo que esto supone— los cuadros respectivos de oficiales y suboficiales para que los entrenen y dirijan, aparte de tener preparada toda una logística de ubicación y dotación del nuevo personal. Pensando en esto, diseñamos varios planes para ir incrementando y profesionalizando a nuestros soldados de manera escalonada pero sostenida. Con el Plan 10.000 comenzamos a reemplazar cada año 10.000 soldados bachilleres por soldados profesionales y con el Plan Fortaleza, que dejamos en funcionamiento, comenzamos a incrementar el número de soldados regulares también en 10.000 anuales.

De esta forma, pasamos de 82.000 soldados combatientes en agosto de 1998 a más de 132.000 en agosto de 2002, lo que implicó un incremento de más del 60% del pie de fuerza. Muy importante, además, fue el cambio de composición de la tropa, pues pasamos de 22.000 a 55.000 soldados profesionales (¡un aumento del 150%!) y redujimos los soldados bachilleres a una proporción mínima.

Gracias al Plan Fortaleza que se dejó andando, el nuevo gobierno continuó incrementando el pie de fuerza, el cual a fines del año 2003 estaba compuesto por unos 60.000 soldados e infantes profesionales, cerca de 100.000 regulares y unos 3.000 bachilleres, para un total de 160.000 soldados realmente combatientes, ¡cerca del doble de los que encontré al iniciar mi gobierno!

Dos aspectos adicionales me parecen especialmente destacables en este tema de los soldados: Por una parte, desde finales de 1999 sancioné una ley mediante la cual se prohibió la participación de menores de edad en las Fuerzas Militares, yendo incluso más allá de lo que prescribía la Convención de los Derechos del Niño, que establece una edad límite de 16 años. De esta manera, dimos un ejemplo concreto a la comunidad internacional de cumplimiento de los derechos humanos y sacamos a todos los menores de nuestras filas —así hubieran ingresado a ellas por su propia voluntad y con consentimiento de sus padres—, para que estén donde deben estar: en los colegios,

las universidades, las bibliotecas y los campos de deportes y no enfrentando la guerra absurda de los grupos ilegales.

Por otro lado, dentro de un conjunto de importantes medidas legales que preparamos para afianzar la reestructuración y profesionalización de la Fuerza Pública, expedimos el estatuto del soldado profesional y reglamentamos su situación laboral y de seguridad social. Parece increíble, pero un soldado profesional, un colombiano que se ha unido voluntariamente a las Fuerzas Militares para defender a sus compatriotas y que está dispuesto, incluso, a sacrificar su vida por su país, no tenía hasta entonces derecho a las mínimas prestaciones de cualquier otro trabajador, ni a una pensión justa para él o su familia en caso de invalidez o de muerte. Como un acto de elemental justicia, corregimos este absurdo y dotamos, con inmensa satisfacción, a estos soldados de un régimen de protección social digno de su esfuerzo y su sacrificio.

En este mismo paquete legislativo se dieron a las Fuerzas Militares y a la Policía normas más acordes a su nueva fortaleza y sus actuales desafíos. Se facilitaron mecanismos adecuados para premiar a quienes se destaquen por comportamientos heroicos en acciones de combate y para facilitar, por otro lado, el retiro de aquellos que no cumplan bien con su trabajo o que tengan conductas reprochables, permitiendo, en el caso de los militares —pues esta facultad ya existía en la Policía—, llamar a retiro discrecionalmente a quienes no sean idóneos, con lo cual se ayuda también a tener un mayor control sobre el acatamiento de las normas y principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Además, para mejorar la calidad de los cuadros, se abrió la puerta para la incorporación directa a la carrera de oficiales de los profesionales universitarios. Todo esto, entre muchas otras normas que establecieron los regímenes de ascensos, disciplinarios y de salud y que, en general, regularon toda la actividad profesional de los militares y los policías.

MILITARES COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS

En el campo de los derechos humanos también se lograron avances formidables, tanto en capacitación y concientización de los soldados, suboficiales y oficiales, como en materia de justicia penal militar, pues se expidió un nuevo Código Penal Militar que sacó del fuero militar y pasó a la justicia ordinaria delitos que atentan de manera grave contra los derechos humanos, como la tortura, el genocidio y la desaparición forzada.

La fuerza que no se basa en el Derecho deja de ser fuerza legítima y se convierte en violencia. Por eso hicimos énfasis en la adecuación de la conducta de nuestros soldados a las más estrictas normas de Derechos Humanos, y avanzamos en este aspecto trascendental, que forma parte de la legitimidad de nuestro Ejército. Es muy dicente ver cómo las quejas por violación de

los derechos humanos atribuibles a miembros de las Fuerzas Militares se redujeron a menos del 1% de las que recibe la Procuraduría y que el pueblo colombiano y la comunidad internacional cada día reconocen más la labor pulcra y justa de nuestros soldados.

De esta forma, con resultados operacionales exitosos y con un apego irrestricto a las normas y principios de los Derechos Humanos y el DIH, las Fuerzas Militares ganaron una legitimidad nacional e internacional, que ciertamente no poseían a mediados de 1998.

Hoy por hoy, la interlocución entre nuestros generales y los altos mandos militares y funcionarios de defensa de Europa, Estados Unidos y otros países latinoamericanos es constante y fluida.

A nivel nacional, ha sido tal la percepción de legitimidad y de corrección que tienen los ciudadanos de sus Fuerzas Militares, que en las encuestas sobre opinión favorable o desfavorable aparecen punteando en primer lugar, con más del 80% de opinión favorable, incluso por encima de la Iglesia católica, cuando en 1998 el porcentaje de favorabilidad era apenas del 38%. Por el contrario, los grupos guerrilleros apenas si alcanzan un 1% de opinión favorable entre la población, lo que demuestra a todas luces con quiénes está el corazón y la razón del pueblo colombiano, y cuál es la institución por la que se sienten más representados y protegidos.

"NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON LAS MANOS"

Siempre he considerado que el camino hacia la paz pasa por el fortalecimiento de la Fuerza Pública, como la fuerza legítima de la nación, la única con la probidad y responsabilidad necesarias para portar armas en defensa de los colombianos. En la medida en que construimos una Fuerza Pública poderosa, a la ofensiva, moderna y bien equipada, estoy seguro de que allanamos el camino hacia la paz, porque la paz sólo puede concebirse si el Estado tiene el monopolio de las armas y si éstas se les quitan a aquellos intolerantes que pretenden imponer sus ideas a través de la violencia.

Entre 1998 y el 2002, con una estrategia amplia y comprehensiva, que formaba parte integral del proceso de paz visto como un todo, logramos el objetivo esencial de fortalecer y modernizar la Fuerza Pública para devolverle su legitimidad y su capacidad operativa. Como la inmensa mayoría de los colombianos, que cada día recuperan un poco más su derecho a una vida tranquila, me siento más que orgulloso de sus éxitos.

No puedo terminar este apretado recuento sin hacer un homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía que pusieron todo de sí, incluso su salud y sus vidas, para hacer realidad la nueva Fuerza Pública que hoy tiene Colombia. Porque los equipos, el armamento, las nuevas brigadas o batallones no hubieran servido de nada sin el alma y el

coraje de los soldados, y si no se hubiera dado, simultáneamente, un cambio de actitud entre el personal armado.

Tal vez el mejor símbolo de este cambio, de esta decisión de comprometerse a fondo con la suerte del país, fue un pacto de honor que realizaron todos los comandantes militares al inicio de mi gobierno, por iniciativa del nuevo alto mando, encabezado por el general Fernando Tapias. Este pacto quedó plasmado en un documento, firmado por cada comandante y registrado en el mismo Comando de las Fuerzas Militares, donde se expresó el compromiso de honor de cada comandante de asumir su responsabilidad y de presentar su renuncia siempre que, por omisión, negligencia o cualquier otro factor que se le pudiera atribuir, generara o permitiera un descalabro militar o cualquier otro hecho que afectara el desempeño o la moral de las Fuerzas Militares. Todo esto independientemente de cualquier investigación administrativa, disciplinaria o penal que se realizara al respecto.

Sin duda, este compromiso moral, este pacto de honor suscrito por los hombres que tenían la responsabilidad de dirigir las acciones de las fuerzas legítimas de Colombia, fue el cimiento de los resultados que hoy tenemos y de la nueva actitud de una Fuerza Pública que hoy nos llena a todos de orgullo y de amor patrio.

Termino citando unas palabras que me dijo el general Tapias, durante una larga conversación que tuvimos, luego de culminado mi período presidencial. El hombre franco y sereno que me había advertido en agosto de 1998 sobre el peligro en que se encontraba la democracia colombiana ante la debilidad de nuestras fuerzas y la eventual arremetida de las FARC fue el mismo que me dijo cuatro años después:

"No reconocer los avances y la transformación de las Fuerzas Armadas sería como tapar el sol con las manos. Pasamos de un ejército territorial a un ejército de campaña. Yo creo que, después de la reforma militar emprendida en 1907 por Rafael Reyes, ésta ha sido la reforma más importante para las Fuerzas Armadas. Hoy el país no podría estar soportando los embates que soporta si no se hubiera dado este paso de reestructuración y modernización. Desconocer esto sería absolutamente irreal e irónico".

CAPÍTULO XXVII

Los secuestros masivos

Mientras el proceso con las FARC se desarrollaba en medio de adelantos y dificultades, en la orilla del ELN también seguíamos trabajando con la misma constancia. Siempre sucedió que el proceso con las FARC, por la espectacularidad que suponía la Zona de Distensión y la presencia continua de los medios en ella, contaba con mayores niveles de publicidad y difusión. Sin embargo, eso no significaba que en el proceso con el ELN no se hicieran esfuerzos similares e incluso mayores por avanzar.

Volvamos un poco en el tiempo. Después de la dolorosa tragedia de Machuca, el 18 de octubre de 1998, generada por la irresponsabilidad del ELN y su continua actividad en contra de la infraestructura energética del país, que dejó un saldo de 70 víctimas mortales en esa humilde población, las conversaciones entre dicha agrupación y el Gobierno habían quedado en una especie de punto muerto. Nicolás Rodríguez, *Gabino*, su líder, había dado unas declaraciones a un noticiero de televisión admitiendo que el incidente de Machuca había sido *"un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción"*, actitud que, aunque absolutamente insuficiente, permitía pensar en retomar las conversaciones.

Fue así como el 1º de diciembre de dicho año, Gonzalo de Francisco, quien apoyaba las tareas del alto comisionado para la Paz en el tema del ELN, se reunió con Francisco Galán y Felipe Torres, voceros de esta guerrilla reclusos en la cárcel de Itagüí, reanudando así el diálogo entre las partes. Para ese momento se venía discutiendo la posibilidad de realizar una Convención Nacional, que es el mecanismo que el ELN proponía —y aún lo hace— para desarrollar acuerdos que condujeran a la paz, con la participación del Gobierno y de la sociedad civil.

De hecho, el ELN, a diferencia de las FARC, ha planteado siempre un proceso de diálogo con intervención e interlocución directa de la sociedad civil. Tanto era así que estaba constituido un comité operativo preparatorio de la Convención Nacional, en el que participaban, además de los dos guerrilleros reclusos, importantes miembros de la sociedad colombiana.

Durante la conversación de Galán y Torres con De Francisco aquéllos plantearon, por primera vez, la solicitud de crear una "Zona de Encuentro"

en el territorio nacional para la realización de la mencionada convención, algo que sorprendió, cuando se enteraron, a los demás miembros del comité preparatorio, pues una zona como ésta nunca se había considerado en el seno del Comité.

En ese estado de cosas se llevó a cabo, en febrero de 1999, un encuentro entre miembros del ELN, encabezados por Antonio García, su segundo comandante, y el entonces alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, en Caracas, para convenir los mecanismos que permitieran avanzar en los diálogos y en la realización de la Convención.

En la reunión, facilitada por Venezuela a solicitud del Gobierno colombiano, el comisionado expuso alternativas para que la Convención Nacional pudiera efectuarse en condiciones de seguridad para todos los participantes y con amplia participación de la sociedad. A su vez, García insistió en la recién planteada idea de la Zona de Encuentro y propuso que ésta se llevara a cabo, con desmilitarización incluida, en cinco municipios del sur de Bolívar, a saber: Santa Rosa, San Pablo, Simití, Morales y Cantagallo, para que sirvieran de escenario a la Convención Nacional. Después de dos reuniones en Caracas, los contactos se interrumpieron sin llegar a ningún acuerdo.

Sabíamos que apenas estábamos iniciando una discusión que debíamos asumir con paciencia y serenidad, pero lo que no sabíamos era que el ELN, otra vez, iba a generar, con sus hechos de violencia e intimidación, nuevas heridas al país y un nuevo obstáculo al proceso que se adelantaba.

EL FOKKER, LA MARÍA Y LA CIÉNAGA DEL TORNO

El 12 de abril de 1999, un comando del ELN secuestró un avión Fokker de la aerolínea nacional Avianca, que volaba entre Bucaramanga y Bogotá; lo hizo aterrizar en una pista abandonada en mitad de la región del Magdalena Medio, y secuestró a sus 41 pasajeros, junto con los cinco miembros de la tripulación. Los secuestrados fueron obligados a abordar tres lanchas en el río Magdalena e internados, de inmediato, en la profundidad de las montañas de la Serranía de San Lucas.

El Gobierno condenó este secuestro como lo que era: un crimen de la mayor gravedad, que violaba las normas más elementales del Derecho Internacional Humanitario y tenía *"todas las características de un acto terrorista"*. Así mismo lo hicieron la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Alemana y varios gobiernos extranjeros, incluyendo los 16 embajadores de la Unión Europea y de los países asociados, acreditados en Colombia, que produjeron un comunicado contundente, que incluía el siguiente párrafo:

"Este hecho es un acto terrorista. Tiene las características abominables típicas de un crimen que infringe los principios elementales del Derecho Internacional Humanitario".

Cuando la opinión pública no salía aún de su asombro, otra vez el ELN decidió atentar contra la población civil, sin ningún tipo de consideraciones. El domingo 30 de mayo, un nutrido grupo de guerrilleros ingresó a la iglesia de La María, en Cali, y secuestró a 143 personas que se encontraban en misa. Ese mismo día, por dificultades logísticas, dejaron libres a 80 de ellas, pero las otras 63 sufrieron por meses los horrores del secuestro y el cautiverio, durmiendo en el suelo, a la intemperie y en condiciones humillantes.

Para completar la infamia, el 9 de junio el ELN secuestró a nueve pescadores en la Ciénaga del Torno, cerca de Barranquilla.

Nuevamente, las condenas no se hicieron esperar. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que el secuestro en la iglesia de La María representaba *"no sólo una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, atentando contra la libertad y la seguridad de personas indefensas, sino también una conducta que carece de los más mínimos valores humanos"*.

El Vaticano y la Conferencia Episcopal de Alemania expresaron también su repudio, e incluso el mismo papa Juan Pablo II, en una intervención del 2 de junio de 1999, dedicó estas palabras al tema:

"Continúan llegando tristes noticias de Colombia, donde el domingo pasado, en la iglesia de la Transfiguración de la ciudad de Cali, un grupo armado interrumpió de forma sacrilega la celebración de la Santa Misa y secuestró a numerosas personas, entre ellas al sacerdote."

"Ya en el pasado han tenido lugar actos semejantes, en zonas del interior del país, como en El Piñón (Magdalena) y asesinatos de personal religioso."

"Ante hechos de tal magnitud, renuevo mi urgente llamado a la pacificación, respetando los derechos de las personas y comprometiéndose en el diálogo que aporte la deseada solución a la grave crisis."

"Acompaño este deseo con recuerdos en mis oraciones para que Dios conceda la paz a Colombia."

En total, en sólo tres actos de secuestro masivo, el ELN había privado de la libertad a más de 200 personas, de las cuales unas 120 tuvieron que vivir un largo proceso de negociaciones y liberaciones a "cuentagotas". En el caso del avión Fokker, por ejemplo, un año después seguían secuestradas 14 personas y no fue sino hasta pasados 20 meses del secuestro cuando fue liberado el último de los pasajeros. Otro de ellos murió de paro cardíaco durante el cautiverio.

Es difícil concebir cómo un grupo guerrillero que participa en un proceso de paz puede castigar así a la sociedad que le abre las puertas del diálogo, sólo para demostrar su poder de destrucción de vidas y patrimonios, y para enriquecerse a costa del dolor de otros. Al principio, el ELN, que reconoció la autoría de los tres hechos, se resistió a admitir que el móvil de los secuestros fuera económico y de alguna manera dio a entender que se trataba de una forma de llamar la atención para que el Gobierno le diera más importancia a su proceso, un pretexto que luego habría de desmentirse.

Bajo estas circunstancias, dispuse las medidas para que se llevaran a cabo todas las gestiones humanitarias con miras a la entrega de los secuestrados, en coordinación con las familias de las víctimas, y nombré como representantes del Gobierno en una comisión humanitaria que trabajara en esta dirección al consejero de Asuntos Políticos, Juan Gabriel Uribe, y al arzobispo de Bucaramanga, monseñor Víctor Manuel López.

De esa comisión harían también parte el defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo, y, por petición expresa del ELN, el ex ministro y diputado alemán Bernard Schmidbauer.

La participación de Schmidbauer en los esfuerzos de liberación no era de mi agrado, particularmente por sus vínculos y cercanía con los esposos Werner e Ida Mauss, que habían estado presos en Colombia y cuyo involucramiento en diversas negociaciones con el ELN durante el gobierno anterior había enturbiado el ambiente. Sin embargo, la acepté para facilitar las liberaciones.

Los mismos esposos Mauss intentaron por diversos medios participar en el proceso con el ELN durante mi gobierno, sin éxito. Obtuvieron en noviembre de 1998 un mandato firmado por Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán para servir como facilitadores del proceso, y luego ofrecieron con insistencia sus "servicios" con ocasión de los secuestros masivos. Por supuesto, nunca accedimos a su poco confiable intermediación.

Con la intervención de la comisión se logró la liberación de 33 secuestrados de La María y 8 del avión de Avianca, pero pronto el ELN acabó por destapar sus verdaderas intenciones, y dejó saber, a través de unas declaraciones de Antonio García, que cobraría por la liberación de los demás secuestrados.

Como es natural, el proceso no podía seguir en esas condiciones, por lo que el 18 de junio de 1999 decidí retirar la participación de Juan Gabriel Uribe en la Comisión Humanitaria, además de suspender el proceso de paz con el ELN, así como el reconocimiento de su carácter político.

Con estas palabras, lo anuncié al país en una alocución:

"[...] el ELN nos engañó a todos los colombianos y a la comunidad internacional. Los secuestros que ellos denominaron inicialmente como políticos se han convertido en vulgares secuestros extorsivos. [...]"

"El país entero ha sido testigo atónito de las múltiples contradicciones del ELN. A pesar de la actitud transparente y clara de los representantes del Gobierno Nacional, el clamor de todos los colombianos y el rechazo de la comunidad internacional, esa agrupación ha incumplido de forma sistemática su palabra y las normas más elementales del derecho de gentes."

"Colombia entera repudia el secuestro y el terrorismo como mecanismos de presión con cualquier finalidad, especialmente cuando con él se ataca en forma directa y personal a la población indefensa."

"Quiero decirle al ELN que Colombia no se amedrenta ante estos hechos [...]"

NUEVOS CONTACTOS

A pesar de las dificultades, la sociedad nunca se rinde, ni puede hacerlo, en su empeño por obtener la paz y por lograr la libertad de los secuestrados. Fue así como el 30 de julio un grupo de personalidades —algunos de los cuales venían participando en el Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional—, formado por el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar; los ex candidatos presidenciales Noemí Sanín y Horacio Serpa; Francisco Santos, entonces presidente de la Fundación País Libre —y hoy vicepresidente de la República— y otro grupo de personas, que incluían periodistas, sindicalistas, académicos y políticos, enviaron una carta de buenos oficios al Gobierno y al ELN, ofreciendo su facilitación para que se restableciera el diálogo, la cual fue aceptada por ambas partes en agosto. Los firmantes de la carta quedaron constituidos, a partir de entonces, en lo que pasó a llamarse como "Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil".

Durante todo el mes de septiembre, el ELN mantuvo algunos delegados en Venezuela, quienes se reunieron con la Comisión Facilitadora y con representantes de gremios, partidos y de la Iglesia, que buscaban el reinicio de las conversaciones. Dichas reuniones contaron con el aval de mi gobierno y del gobierno venezolano que, desde entonces, facilitó su territorio en numerosas ocasiones para esta clase de encuentros para dialogar con el ELN.

Al mismo tiempo, el embajador Julio Londoño, que encabezaba nuestra representación diplomática en La Habana, propuso al canciller Fernández de Soto que se utilizara la isla de Cuba como punto de encuentro alternativo con los representantes del ELN, teniendo en cuenta la buena disposición del presidente Castro hacia un proceso de paz en Colombia y el hecho insoslayable de la tendencia pro-castrista que presidió los orígenes del ELN, lo cual podía jugar a favor de la paz. El canciller trató el tema conmigo y con Víctor G., y coincidimos todos en que Cuba, además de Venezuela, podía ser un buen lugar para llevar adelante aproximaciones con dicho grupo guerrillero.

Llamé, entonces, al presidente Castro y le solicité que facilitara un encuentro reservado y discreto entre representantes del Gobierno colombiano y del ELN. Castro estuvo de acuerdo, pero puso dos condiciones, que acepté sin problemas: la primera, que los contactos fueran con el Gobierno colombiano directamente —no la sociedad civil—, y la segunda, que Cuba, como Estado, no tuviera participación en las conversaciones. Se trataría simplemente de funciones de facilitación.

Para verificar la posibilidad de este encuentro, el gobierno cubano envió a Venezuela a Tony López, funcionario del Departamento América del Partido Comunista Cubano, para consultar con Pablo Beltrán, del ELN, si el grupo guerrillero estaba de acuerdo en retomar los contactos con el Gobierno colombiano en la isla. Beltrán respondió afirmativamente.

Así las cosas, el 19 de octubre se reunieron en La Habana el embajador Julio Londoño y el senador y negociador Juan Gabriel Uribe, por parte del Gobierno colombiano, y Pablo Beltrán, por parte del ELN, a quien luego se uniría Ramiro Vargas, procedente de Alemania.

Si bien se suponía que la reunión sería completamente reservada, la noticia se filtró a la prensa colombiana, lo que incomodó a los cubanos que nos servían de anfitriones y facilitadores de la misma.

En la reunión, en términos generales, el ELN confirmó como sus representantes en el diálogo a Beltrán y a Vargas, y pidió dejar "abiertas las puertas" de Alemania, España y de la sociedad civil, aunque ninguno de ellos participara directamente en el proceso.

Teniendo en cuenta que los contactos en Cuba serían únicamente con el Gobierno, se acordó que Pablo Beltrán permaneciera en Caracas para continuar los contactos con la sociedad civil, la cual siempre participó activamente en calidad de facilitadora.

Cuba quedó, entonces, acordada como sede para la parte inicial de la negociación. Además, se solicitó su intervención cuando fuera necesario superar malentendidos o diferencias entre las partes, un papel que el gobierno cubano se mostró dispuesto a jugar, con una única aclaración: el 15 y 16 de noviembre se celebraba en La Habana la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, por lo que preferían las conversaciones se suspendieran durante esos días y las fechas anteriores, en los que todo el gobierno cubano estaría preparando este importante evento internacional.

Se acordó también, entre los delegados del Gobierno y del ELN, que habría una agenda general que incluiría puntos tales como Derechos Humanos, narcotráfico, medio ambiente, situación del campo y preparación del país frente a los desafíos de la globalización. Según planteó el ELN, para efectos de la seguridad y facilidad de acceso a la Convención Nacional, ésta debería efectuarse dentro del territorio nacional durante un período aproximado de nueve meses, a lo que respondieron los delegados del Gobierno que un elemento fundamental para que se pudiera dar esta convención sería la liberación de todos los secuestrados, con el compromiso adicional de suspender el secuestro.

Sin llegar a más acuerdos concretos, pero con el importante avance de haber destrabado nuevamente los diálogos, Juan Gabriel regresó a Bogotá y me rindió un completo informe sobre lo debatido en La Habana.

Esta reunión sirvió de preámbulo para otra que se dio el 23 de diciembre, esta vez en territorio nacional, en zona rural del municipio de San Pablo, Bolívar, entre el comisionado, Víctor G. Ricardo, y el embajador Julio Londoño, y miembros del Comando Central del ELN, incluyendo a Pablo Beltrán. En ésta se volvió sobre el tema de la Zona de Encuentro en el

sur de Bolívar, que se convertiría en adelante en el tópico recurrente con el ELN, aunque sin llegar a conclusiones definitivas.

Desde la primera vez que se mencionaron los cinco municipios del sur de Bolívar como sede posible de la zona de encuentro, las comunidades de los mismos comenzaron a manifestarse en contra de esta posibilidad. Ellos reclamaban, sobre todo, que el ELN había asolado esta región y que, ahora que habían logrado desterrarlo de la misma, por obra de las Fuerzas Militares pero también, en parte, por la presencia en la zona de grupos ilegales de autodefensa (también conocidos como paramilitares), no iban a permitir que regresaran con sus políticas de violencia y extorsión.

Fue así como, en febrero de 2000, los pobladores protagonizaron una serie de bloqueos en la troncal del Atlántico y la vía entre Medellín y la costa caribe, que generaron graves traumatismos en el transporte de pasajeros y de carga, y por consiguiente en la economía nacional, los cuales se conjuraron gracias a la intervención del Gobierno, que habló con los campesinos y suscribió con ellos el Acuerdo de Aguas Claras, en el que se dejó constancia de su inconformidad con la declaración de una zona en sus territorios y se decidió crear mesas de trabajo para evaluar sus peticiones. Los manifestantes acabaron por crear una asociación denominada Asocipaz, que los aglutinó, junto con el Movimiento de No al Despeje, en torno al objetivo único de oponerse a la zona de encuentro.

Si bien el descontento popular de los habitantes del sur de Bolívar por la posible creación de dicha zona era innegable, también lo era que parte del mismo era fomentado por los grupos paramilitares que habían desplazado al ELN de ese territorio, y que controlaban ahora, como antes lo hacía la guerrilla, el negocio de la siembra de coca en la región.

Al mismo tiempo, entre febrero y marzo, las conversaciones entre el Gobierno y el ELN se seguían desarrollando alternativamente entre La Habana y Caracas, definiendo precisamente la creación de la Zona de Encuentro y sus características.

Con base en lo acordado, el 24 de abril anuncié al país que habíamos llegado a un "marco general de entendimiento" con el ELN para que se creara una Zona de Encuentro con los fines únicos de celebrar la Convención Nacional y de adelantar negociaciones de paz. Dicha zona, que tendría un término de nueve meses, se establecería en las cabeceras municipales de tres municipios: Yondó, en Antioquia, y San Pablo y Cantagallo, en Bolívar, sin incluir en ella ninguna porción del río Magdalena. En ella permanecerían las autoridades civiles en ejercicio de sus funciones, y contaría con sistemas de verificación nacional e internacional.

Es importante resaltar acá que el diseño de dicha Zona de Encuentro fue producto de un largo análisis en el que participaron también los mandos militares. De hecho, el embajador Julio Londoño trabajó con los militares

por lo menos cinco opciones posibles, llegando a la conclusión de que, si bien había dificultades por la presencia de los paramilitares y las FARC en los municipios escogidos, su creación era viable, siempre y cuando no se incluyera en ella el río Magdalena, principal arteria fluvial del país.

Infelizmente, el anuncio generó nuevamente el rechazo de los pobladores, quienes volvieron a acudir al recurso extremo de bloquear las vías, generando inconvenientes en diferentes tramos durante finales de abril y el mes de mayo. Nuevamente reunidos con los líderes de la zona, logramos el 1º de junio el levantamiento de las protestas bajo el compromiso del Gobierno de no decretar la Zona de Encuentro hasta tanto no se llevara a cabo un *"proceso de diálogo y participación con los representantes de las comunidades"*.

Sentadas estas claras condiciones con los habitantes de la zona y logrado un principio de acuerdo sobre la misma con el ELN, era viable pasar los diálogos de una condición informal a una oficial, y el 6 de junio declaré nuevamente la iniciación de un proceso de paz con el ELN, volviendo a reconocerles su carácter político.

PRESENCIA INTERNACIONAL

El proceso parecía tomar un nuevo aire. El 22 de junio, Camilo Gómez, quien ya ocupaba el cargo de alto comisionado para la Paz, y el embajador Londoño, se reunieron con representantes del ELN, incluyendo a Pablo Beltrán, en la Serranía de San Lucas y lograron un consenso para que, por primera vez en la historia de los procesos de paz en Colombia, se contara con una participación internacional concreta y definida. Fue así como se convocó a cinco países como amigos y facilitadores del proceso de paz con el ELN: Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza.

A estos países se les dio un mandato claro de acompañamiento y apoyo al proceso; conciliación, facilitación y verificación, y el encargo de que prestaran asistencia humanitaria, un avance importantísimo que estábamos todavía en mora de alcanzar con las FARC.

He dicho ya que tengo la absoluta convicción de la conveniencia de la presencia internacional como facilitadora, garante y verificadora de los procesos de paz. Dicha presencia genera una mayor seriedad a los diálogos, impulsa un mayor compromiso de las partes y, muchas veces, permite la más rápida solución de las diferencias. De ahí lo trascendental del acuerdo alcanzado.

Siguiendo el buen curso de los diálogos, entre el 23 y el 25 de julio se celebró en Ginebra, Suiza, un encuentro por el Consenso Nacional y por la Paz para Colombia, con la participación del alto comisionado, Camilo Gómez; de Antonio García, del ELN, y miembros de varios sectores de la sociedad civil. Por segunda vez, autoricé la salida de la cárcel de Francisco Galán y

Felipe Torres, quienes viajaron a Suiza y regresaron luego a la penitenciaría de Itagüí.

No dejaba de producirnos cierta aprehensión el permitir el viaje de los guerrilleros presos, pues pensábamos que era posible que intentaran pedir asilo. No obstante, contamos con un compromiso expreso y escrito de Gabino y el Comando Central respecto a que Galán y Torres regresarían, y nos atuvimos a él. En esta ocasión, como en las otras varias que los dos voceros salieron de la cárcel, éstos regresaron siempre, y sin problemas, a su lugar de reclusión.

También en julio, como un avance fundamental, el Gobierno envió al ELN la primera propuesta de reglamento de la eventual Zona de Encuentro.

En septiembre, el Grupo de Países Amigos y la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil analizaron los obstáculos que aún se presentaban para la creación de la Zona de Encuentro, y presentaron sus informes confidenciales a las partes. Lo hicieron por una petición conjunta del Gobierno y el ELN, para lo cual viajaron a la Zona y estudiaron sobre el terreno sus condiciones y la situación de la población.

Fue un trabajo arduo y muy valioso, dentro de muchos que la Comisión Facilitadora Civil y el Grupo de Países Amigos desarrollaron para ambientar el proceso con dicha organización. La abnegación y entrega que demostraron los miembros de la sociedad civil que participaban en la Comisión Facilitadora y los cinco embajadores merecen, sin duda, mi gratitud y la del pueblo colombiano.

Entonces, el 9 de septiembre, en un comunicado sorpresivo, Asocipaz y el Movimiento No al Despeje manifestaron su disposición para aceptar la creación de la Zona de Encuentro, pero la condicionaron a tres puntos ideales, pero irreales, para comenzar una negociación: que el ELN liberara a todos los secuestrados civiles y militares; que decretara un cese al fuego y las hostilidades, y que concentrara a todos sus militantes en el área que se conviniera.

Así las cosas, seguía corriendo el tiempo y las posiciones frente a la creación de la Zona se hacían cada vez más distantes.

CAPÍTULO XXVIII

Dramas humanitarios

No alcanzarían las páginas de un libro para narrar los atropellos y vejámenes que cometen día a día guerrilleros y paramilitares contra la población colombiana, especialmente a través del infame delito del secuestro. Muchos casos terribles se vivieron durante mi gobierno, cuyo doloroso recuerdo perdura aún en la memoria nacional. Sin embargo, por sus dramáticas condiciones y las circunstancias de su negociación, que todavía hoy son evaluadas con un sesgo de injusticia, creo que el drama del secuestro masivo cometido por el ELN en el kilómetro 18 de la vía al mar entre Cali y Buenaventura, vale la pena contarlo con un mayor detalle.

Todo empezó la tranquila tarde del domingo 17 de septiembre de 2000. Como muchos domingos, una gran cantidad de caleños había salido de paseo por la vía que conduce a la costa del Pacífico, sobre la cual se encuentran restaurantes típicos y pequeñas fincas de recreo, en lo que ha constituido siempre un plan tradicional de descanso para los habitantes de la capital del Valle del Cauca.

Ese día, un grupo de guerrilleros del ELN, armados hasta los dientes y dirigido por alias Caliche, secuestró a más de 60 personas que se encontraban en tres sitios diferentes: el restaurante La Cabaña, el restaurante Embajada de Ginebra, ambos sobre la carretera, y la hacienda Normandía. Se llevaron a todos los presentes, sin distinciones de edad, sexo o condición. Ancianos, mujeres, personas humildes, todos fueron secuestrados por este grupo.

Lo paradójico del hecho es que se presentara en un momento en que el proceso pasaba por un buen momento. En junio había declarado la reiniciación del proceso de paz con el ELN y se había acordado, además, la participación de cinco países como amigos y facilitadores del mismo. En julio se había realizado un encuentro internacional en Ginebra, Suiza, al que se permitió asistir a los guerrilleros presos Francisco Galán y Felipe Torres, y se venía avanzando, además, en las discusiones para concretar una Zona de Encuentro, sobre la cual el Gobierno había enviado ya al ELN una primera propuesta de reglamento.

Incluso después del secuestro, el 2 de octubre, se llevó a cabo una reunión en la Serranía de San Lucas en la que el alto comisionado, Camilo Gómez, y representantes del ELN llegaron a una fórmula de acuerdo frente al tema de la erradicación de los cultivos ilícitos en la eventual Zona de Encuentro. Dicho acuerdo pasó prácticamente inadvertido por el drama que se vivía en los Farallones de Cali, zona a donde los guerrilleros trasladaron a los secuestrados del kilómetro 18 de la carretera al mar.

Nuestra información indicaba que el secuestro había sido realizado por el frente José María Becerra del ELN, sin que hubiese una coordinación con el Comando Central, Coce. Ésta era una muestra más de las dificultades internas por las que atravesaba dicho grupo, si bien no se podía dejar de responsabilizar a la organización como tal por este nuevo secuestro masivo. Un hecho de esta magnitud ponía en máximo peligro las conversaciones que se estaban adelantando y el Coce debía asumir la responsabilidad por lo que estaba sucediendo.

Desde el momento mismo en el que se conoció la noticia del secuestro ordené a las Fuerzas Militares y de Policía iniciar la persecución de los secuestradores, utilizando todos los medios posibles. Ya conocíamos las formas de actuar del ELN en este tipo de secuestros masivos y la determinación era la de buscar la liberación de los secuestrados y la captura de los secuestradores, siempre protegiendo la vida de los secuestrados. La persecución se inició desde el mismo 17 de septiembre.

El Ejército desplazó a la Fuerza de Despliegue Rápido —Fudra—, a cargo del general Carlos Alberto Fracica, quien actuó de manera eficiente y en estrecha coordinación con el Comando General de las Fuerzas Militares. La opinión pública y los medios de comunicación siempre pensaron que quien tenía el mando de la operación de rescate era el general Jaime Ernesto Canal, comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali, debido a que fue él quien tuvo una mayor aparición en los medios, pero lo cierto es que fue Fracica quien lideró la acción desde el terreno.

La Fudra inició una acción valiente y una persecución que en términos estratégicos fue muy bien adelantada. En apoyo a esta operación, desplegamos la acción de la Policía sobre las estructuras urbanas del ELN en Cali para impedirles cualquier contacto con el grupo que había realizado el secuestro. Esta acción coordinada fue un factor determinante para lograr la liberación de los secuestrados.

Al día siguiente del secuestro, presidí un consejo de seguridad en Cali, con la presencia del gobernador del Valle del Cauca, Juan Fernando Bonilla, y del alcalde de la ciudad, Ricardo Cobo. Allí revisamos la situación y se impartieron las órdenes adicionales necesarias para continuar con el operativo militar. También ordené la creación de un grupo especial permanente dedicado a la lucha contra la guerrilla y los paramilitares en los Farallones de

Cali. Este grupo se convertiría en el antecedente del batallón de alta montaña que hoy opera en dicha región, cuya creación dejó financiada antes de terminar mi gobierno, el cual ha sido un factor clave para sacar a la guerrilla de tan neurálgica zona.

De manera simultánea, le ordené al comisionado para la Paz que buscara los contactos al más alto nivel con el ELN, pues la situación del proceso resultaba insostenible frente a un hecho de esta magnitud.

UN SECUESTRO ANUNCIADO

"El secuestro masivo registrado el pasado domingo ya estaba anunciado. Todos sabíamos que iba a haber un nuevo operativo de la guerrilla. Estábamos hartos de haberle informado eso a las Fuerzas Militares y ni eso sirvió para que tuviéramos una respuesta eficaz".

Estas declaraciones públicas del gobernador Bonilla pusieron en evidencia al general Canal, comandante de la Tercera Brigada, con jurisdicción en el área, quien, a pesar de recibir las alarmadas informaciones del gobernador, no había hecho lo necesario para evitar el secuestro. Paradójicamente, como se verá más adelante, el general Canal acabó asumiendo un papel de víctima y no de responsable.

Frente a la infatigable persecución de las Fuerzas Militares, el ELN comenzó a liberar a algunos de los secuestrados, en grupos pequeños, quedándose finalmente con 24 personas en su poder. Esta estrategia de liberar a pequeños grupos ya había sido utilizada en otros secuestros masivos y respondía a la doble intención de la guerrilla de agilizar sus desplazamientos y de presionar la suspensión de los operativos militares. Conociendo sus objetivos, y a pesar de la presión de los familiares que caían en la trampa tendida por la guerrilla, los operativos continuaron.

Las condiciones del desplazamiento de los guerrilleros y los secuestrados eran muy complicadas y la presión militar los obligaba a internarse cada vez más en los Farallones, siguiendo una ruta en medio de impresionantes riscos y de una impenetrable selva que los llevaba hacia la zona del Pacífico. Lamentablemente, a los pocos días del secuestro, el ELN se negó a liberar a uno de los secuestrados que estaba en muy malas condiciones de salud hasta cuando ya fue demasiado tarde. Menos de una semana después de ser rescatado, falleció.

Pocos colombianos se alcanzaban a imaginar el calvario que estaban sufriendo los secuestrados durante su cautiverio. La operación militar cada vez se acercaba más al grupo de secuestrados y secuestradores, y éstos, en su afán por escapar, obligaban a sus víctimas a avanzar en las más penosas circunstancias. Los alimentos y el agua empezaron a escasear y las condiciones del terreno selvático, con hondos precipicios y lluvias permanentes, aumentaban los riesgos para sus vidas.

Fueron muchos los relatos desgarradores que los secuestrados contaron luego sobre lo sucedido en las semanas que permanecieron en poder del ELN. El drama humano aumentaba cada día y se hacía patente en la escasez del más elemental de los recursos para un ser humano: el agua.

Si bien estaban en una de las zonas más lluviosas del país y en medio de muchas fuentes de agua, lo escarpado de la topografía impedía que los secuestrados tuvieran acceso a este líquido vital. Las quebradas pasaban por profundos cañones y el agua lluvia desaparecía rápidamente. Para calmar un poco la sed, durante las largas caminatas a las que eran sometidos, muchas veces les tocaba arrancar el musgo de las laderas y exprimirlo sobre sus manos.

Pero no sólo faltaba el agua, sino también los alimentos. Los secuestrados relatarían luego que, en una ocasión, después de más de un día sin comer y de una larguísima caminata huyendo de la operación militar, los guerrilleros llevaron a los secuestrados hasta un pequeño rancho en medio de la selva. Allí, tarde en la noche, con hambre y con sed, sólo encontraron un pequeño árbol de limones. Tal sería el hambre, que decidieron bajar los limones que pudieron y con ellos se alimentaron en la noche. Pero no se los comieron enteros. Con gran cuidado les quitaron la cáscara y consumieron sólo la pulpa, a manera de cena, sin importar qué tan ácidos estuvieran. Las cáscaras, amargas y difíciles de masticar, las guardaron para consumirlas al otro día como "desayuno".

En otra oportunidad, llegaron a la casa de un campesino, otra vez al borde de desfallecer de hambre. Allí no había nada que comer, pero el hombre tenía sembradas unas matas de maíz. Esa noche la cena para los secuestrados fue el maíz crudo y duro que el campesino tenía en su cultivo.

También se supo que a uno de los cautivos le tocó caminar descalzo durante varios días debido a que la guerrilla no tenía botas para la talla de sus pies. Sólo en ocasiones le dejaron utilizar unos zapatos "suecos" para bajar la montaña.

Escenas como éstas, cuya sola memoria lastima el corazón, se sucedían día tras día en la demencial carrera de los guerrilleros por continuar con el secuestro a pesar de las adversas circunstancias.

En medio de tanto dolor, el ELN sólo insistía en la necesidad de suspender los operativos militares para realizar liberaciones parciales y ganar tiempo para huir con el resto de los secuestrados. La respuesta del Gobierno era clara: todos los secuestrados debían ser liberados.

Mientras tanto, la operación militar comandada por el general Fracica avanzaba y la guerrilla perdía constantemente hombres y recursos, resguardada únicamente por la difícil topografía del terreno donde se encontraba y por la necesidad de preservar las vidas de los cautivos.

SALVAR A LOS SECUESTRADOS O CAPTURAR A LOS GUERRILLEROS

Durante todo el tiempo que duró el operativo militar hice un seguimiento diario a la situación. Aunque en varias oportunidades las Fuerzas Militares me informaron que estaban cerca de liberar a los secuestrados, lo cierto era que, cada día que pasaba, la solución militar se complicaba más y disminuían las posibilidades de rescatar a los secuestrados con vida.

No tengo duda de que el operativo estaba muy bien dirigido por el general Fracica, con la mayor eficiencia, pero las condiciones del terreno y el mismo clima de la zona, sumados a las dificultades de riesgo físico y de salud por las que atravesaban los secuestrados, hacían que el rescate militar no resultara viable o, al menos, no fuera posible sin exponer la vida de los mismos.

Camilo, por su parte, no había dejado de trabajar en el tema desde el momento mismo del secuestro. Se realizaron varias reuniones con los familiares y con las autoridades municipales y departamentales, estudiando todas las alternativas para enfrentar la situación. De especial apoyo fue la labor del gobernador Bonilla y su equipo en la Gobernación del Valle, quienes estuvieron siempre atentos y colaboraron eficazmente en todas las gestiones que fueron necesarias. Al mismo tiempo, el comisionado mantuvo continuos contactos con los jefes del ELN para procurar un acuerdo que permitiera la liberación de los secuestrados.

En todas estas acciones había una total coordinación entre el comisionado y el comandante general de las Fuerzas Militares y el resto de la cúpula. Sólo el general Canal obraba como una rueda suelta en este episodio. Tal vez su remordimiento por no haber impedido el secuestro del que tanto le había alertado el gobernador o sus ansias de protagonismo lo llevaron a actuar de manera aislada.

Infortunadamente, el 25 de octubre, unos días después de que el comisionado se hubiera reunido a tratar el tema con miembros del Comando Central del ELN en la Serranía de San Lucas, este grupo informó, mediante un correo electrónico enviado al mismo comisionado, que otro de los secuestrados había muerto. Este hecho agravaba aún más la situación, pues el rescate militar seguía sin producirse y el temor por la vida de los demás secuestrados aumentaba.

Una de las cosas que más nos indignó fue el cinismo con el que el ELN informó de este lamentable suceso. Recuerdo que el comisionado me llamó furioso y adolorido:

—¡Presidente, estos tipos mataron otro secuestrado y tienen el cinismo de decirme que fue una muerte por causas naturales!

En medio de la rabia que sentía, me leyó el mensaje que acababa de recibir, enviado por Pablo Beltrán. Además de anexar un comunicado sobre la situación, Beltrán le decía: *"Desde el Valle nos informaron que este fin de semana dejó de existir, de muerte natural, otro de los retenidos del kilómetro 18 [...]"*.

Dada la gravedad de la situación, di instrucciones al alto comisionado, Camilo Gómez, y al ministro del Interior, Humberto de la Calle, para que viajaran a Cali a reunirse con los familiares de los secuestrados.

En la reunión, que se llevó a cabo en la tarde del 26, estuvieron también presentes el gobernador Bonilla y el general Canal. Allí toda la tensión se descargó en el comisionado, pues los familiares exigían una acción más directa y más rápida de su parte, creyendo que él tenía una solución rápida en sus manos. Camilo intentó explicar que hasta ese momento todos los esfuerzos del Gobierno estaban centrados en el operativo militar y que, aunque se había insistido con vehemencia en la liberación de los secuestrados, no había ningún acuerdo al respecto. Canal, por su parte, dijo que el operativo militar avanzaba por muy buen camino y que consideraba que muy pronto se lograría la liberación de los secuestrados.

El comisionado, al escuchar este parte optimista pero irreal, sintió la obligación de dejar claro a los afligidos parientes que, si bien proseguía la persecución, la liberación de los secuestrados aún podía estar lejana. Por supuesto, esto supuso que el general capitalizara la popularidad en tanto Camilo tuvo que soportar un aluvión de críticas de los familiares y los medios de comunicación.

A partir de ese momento, los contactos del comisionado con la cúpula del ELN se intensificaron, buscando afanosamente una solución al secuestro. Después de varias reuniones con los familiares, con los militares en la zona y con las autoridades del departamento, se buscó una fórmula para evacuar el cadáver del secuestrado que había muerto y para recibir a otras dos personas que nos habían informado estaban muy enfermas. El ELN, mientras tanto, insistía en la suspensión de las operaciones militares y expedía comunicados en los que hablaba de las malas condiciones de salud de los secuestrados. Informaban que más de ocho secuestrados estaban gravemente enfermos, aumentando la presión para que se suspendieran las operaciones militares.

En la mañana del viernes 27 de octubre, después de reunirse con el gobernador y con las autoridades militares, el comisionado pactó, finalmente, una suspensión de las operaciones militares sin reubicar a las tropas, con el fin exclusivo de que ingresara una comisión humanitaria para retirar el cadáver y a las dos personas que tenían mayores complicaciones de salud. Se trataba de un plazo mínimo de unas cuantas horas para poder realizar la evacuación y para que el comisionado ingresara a la zona selvática para encontrarse con los jefes del grupo del ELN que tenía a los secuestrados y tratar de acordar una liberación global.

Este cese de operaciones se adelantó de pleno acuerdo con la cúpula militar, pero otra opinión tuvo el general Canal, quien trató de impedir que el helicóptero del comisionado despegara, exigiéndole que firmara antes un acta en la que se responsabilizaba por todo lo que sucediera y por las deter-

minaciones que se estaban tomando. Camilo, indignado, se comunicó conmigo y con el general Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, y nos dijo que no podía someterse a firmar tal documento. La orden de apoyo al comisionado fue perentoria. Canal estaba actuando por fuera de lo que el presidente y el Comando General de las Fuerzas Militares ordenábamos y el comisionado no hacía otra cosa que cumplir mis instrucciones y la estrategia que, junto con la cúpula militar, habíamos definido.

Superado el incidente, el comisionado, en compañía de Gustavo Villegas, leal y decidido colaborador en el proceso con el ELN, y del equipo de la Patrulla Aérea de Antioquia, que prestó, en éste y muchos otros casos, un invaluable servicio médico y humanitario, despegaron hacia el cañón del río Naya, en los Farallones de Cali, frente a la costa pacífica.

Las dificultades de comunicaciones con los guerrilleros habían impedido que, al iniciar el vuelo, se tuviera una ubicación exacta del sitio en donde aterrizarían para realizar la reunión. Sólo sabían que debían ubicar el río Naya, un caserío llamado La Playa y, más adelante, sobre el mismo río, la desembocadura de una quebrada que no aparecía en los mapas. Allí, sin aterrizar aún, debían intentar hacer contacto con los guerrilleros.

La demora que habían tenido para despegar les hizo afrontar unas condiciones climáticas muy complejas. Cuando llegaron al caserío de La Playa iniciaron los contactos con el grupo de secuestradores pero la comunicación por radio seguía siendo complicada. Durante más de dos horas intentaron encontrar el lugar para realizar la reunión, sin éxito. Ya pasadas las 6 de la tarde, y con muy poca luz, decidieron volver a Cali, pasando sobre las montañas de los Farallones sin instrumentos de vuelo nocturno, con los enormes riesgos que esto supone.

A primera hora del día siguiente, sábado 28 de octubre, la comisión humanitaria despegó de nuevo hacia la zona de La Playa. Allí, después de más de una hora de sobrevuelo, lograron ubicar el lugar donde estarían los guerrilleros esperándolos. Era el filo de una montaña, con árboles a lado y lado y sin un lugar plano para aterrizar, por lo que los avezados pilotos de la Patrulla Aérea de Antioquia decidieron que uno de ellos se descolgaría del helicóptero para cortar ramas y formar un pequeñísimo lugar para aterrizar.

Una vez realizada la maniobra, Camilo y Gustavo Villegas también brincaron desde el helicóptero para terminar de improvisar el lugar donde finalmente pararía el helicóptero. Hasta ese momento no había aparecido ningún guerrillero. Una vez el aparato apagó los motores, desde unos matorrales cercanos, como de la nada, surgieron algunos guerrilleros que los condujeron hasta el lugar donde se encontraban dos de los cabecillas del grupo que tenía a los secuestrados, conocidos bajo los alias de El Profe y El Viejo. Aunque estaban a unos pocos metros, era tal la densidad de la selva que resultaba imposible verlos desde el aire o desde el lugar donde aterrizaron.

Uno de los guerrilleros, después de saludar, le mostró a Camilo unas balas que guardaba en el bolsillo derecho:

—Cuéntelas, doctor. Son más de 20.

Luego le mostró las que tenía en el otro bolsillo:

—Ahora cuente éstas. Son más de 30. Como verá, de aquí no sale nadie vivo si el Ejército continúa con la operación.

Camilo le respondió con calma, pero con firmeza:

—La operación militar no para hasta que estén libres los secuestrados. ¡Todos los secuestrados!

Así empezó la primera conversación con los directos responsables de esta atrocidad. Después de un par de horas, y ante la insistencia por la liberación de todos los secuestrados, el guerrillero dijo que sólo los liberaría por una orden del Coce, lo que situaba la discusión en un nivel diferente. Acordaron también la entrega de tres de los secuestrados que se encontraban enfermos, los cuales serían recogidos en un paraje cercano, esa misma mañana, y de otros tres que serían entregados esa misma tarde, junto con dos cadáveres, pues otro secuestrado más había muerto por efectos de una gangrena en una de sus extremidades.

De inmediato partieron hacia el lugar donde recogerían a los primeros tres liberados. De nuevo aterrizaron en el filo de una montaña, cuya inclinación era tal que tuvieron que salir del helicóptero prácticamente acostados, mientras las aspas pasaban rozantes contra el cerro. Cerca de 100 metros más arriba estaban algunos guerrilleros y los tres secuestrados, todos en condiciones físicas y de salud muy lamentables. Las ropas que traían estaban rotas, los rostros demacrados, su ánimo derruido.

Poco a poco empezaron a descender hacia donde estaba el equipo. Dos de ellos, a pesar de sus problemas de salud, lo hicieron con prontitud, pero el tercero parecía tener serios problemas para moverse. Un guerrillero lo empujó sin contemplaciones hasta cerca del helicóptero, donde Camilo se lo arrebató y lo ayudó a llegar a la aeronave. Cuando el secuestrado sintió la mano del comisionado dejó de caminar, de forma que Camilo y Gustavo tuvieron que cargarlo la última parte del trayecto y subirlo al helicóptero.

En la cabina del aparato sólo cabían tres pasajeros y tuvieron que adaptarse al poco espacio disponible. Dejaron al más grave en una sola silla y los demás liberados, Camilo y Gustavo se acomodaron como pudieron. A su vez, los pilotos tuvieron que obrar con especial pericia para despegar, pues la máquina llevaba evidente sobrepeso. A ninguno le importaba el riesgo del vuelo en esas condiciones. Lo esencial era sacar pronto a los secuestrados de allí y darles urgente atención médica.

El drama sufrido por el tercer secuestrado, que se movía con dificultad, me impresionó hondamente. Este hombre había caído por un risco hasta el fondo de una quebrada, un día antes de su liberación. Allí había sido abandonado a su suerte por los secuestradores que huían de la persecución

militar. La caída había sido tan fuerte que había lesionado dos de sus vértebras y lo había dejado sin movilidad en sus piernas. Sin poder moverse del lugar donde había resbalado, tuvo que quedarse allí durante toda la noche, soportando las lluvias interminables de esa zona del Pacífico. A pesar de sus gritos de auxilio, ninguno de sus secuestradores se apiadó de su suerte. Allí, inmovilizado, sin fuerzas y al borde de la quebrada, vivió una de las noches más aterradoras que cualquier ser humano pueda experimentar.

Las lluvias hicieron que la quebrada creciera y el agua comenzó a cubrir el cuerpo de este hombre herido y prácticamente lisiado que luchaba valientemente por su vida. En medio de la oscuridad, y cuando la corriente amenazaba con llevárselo y ahogarlo, se quitó su cinturón y, como pudo, amarró sus manos a una roca y levantó su cabeza a la máxima altura posible. Así pasó gran parte de la noche, hasta cuando la selva le perdonó la vida y el agua comenzó a bajar.

En la mañana siguiente, lo encontró un guerrillero que regresó a ver si estaba vivo o muerto. El guerrillero bajó a la quebrada y a empujones lo sacó del lugar y lo llevó hasta el sitio donde Camilo lo encontró. Nadie sabe cómo hizo para caminar con la lesión que tenía. Sólo las ganas de vivir y de volver a la libertad pudieron darle la fuerza para dar los pasos que lo condujeron hasta el lugar de su liberación.

Después de estrechar la mano del comisionado y recuperar su libertad, dejó de caminar por varios meses, porque físicamente, con la lesión que tenía, le era imposible. Hoy, por fortuna, este hombre está recuperado de nuevo, caminando y disfrutando de su familia. Vive también con el imborrable recuerdo de esos días y con el orgullo de haber librado semejante batalla por su vida.

Al llegar a Cali, con los tres liberados ya en manos de sus familias, Camilo viajó a Medellín para reunirse con Galán y Torres en la cárcel de Itagüí y desde allí comunicarse con el Comando Central del ELN, pues ya se sabía que sólo ellos podrían dar la orden de la liberación de todos los secuestrados. Entre tanto, Gustavo Villegas regresó a la zona para traer a los otros secuestrados que supuestamente liberarían esa tarde y los dos cadáveres que debían ser evacuados.

Mientras esto ocurría, en Bogotá nos preparábamos para las elecciones de alcaldes, gobernadores y otras autoridades departamentales y municipales que se realizarían al día siguiente. Estaba recibiendo los reportes de orden público de todo el país y me reunía con los ministros relacionados con la jornada electoral y con la cúpula militar. Enterados de los hechos, decidimos prorrogar la suspensión de operaciones hasta las 8 de la noche para permitir la entrega de los otros tres secuestrados. Sin embargo, el ELN no cumplió con su palabra y no realizó la segunda entrega ni proporcionó los datos necesarios para recoger los dos cadáveres. Las operaciones militares, por consiguiente, se reanudaron esa misma noche.



El día del triunfo. Junio de 1998.



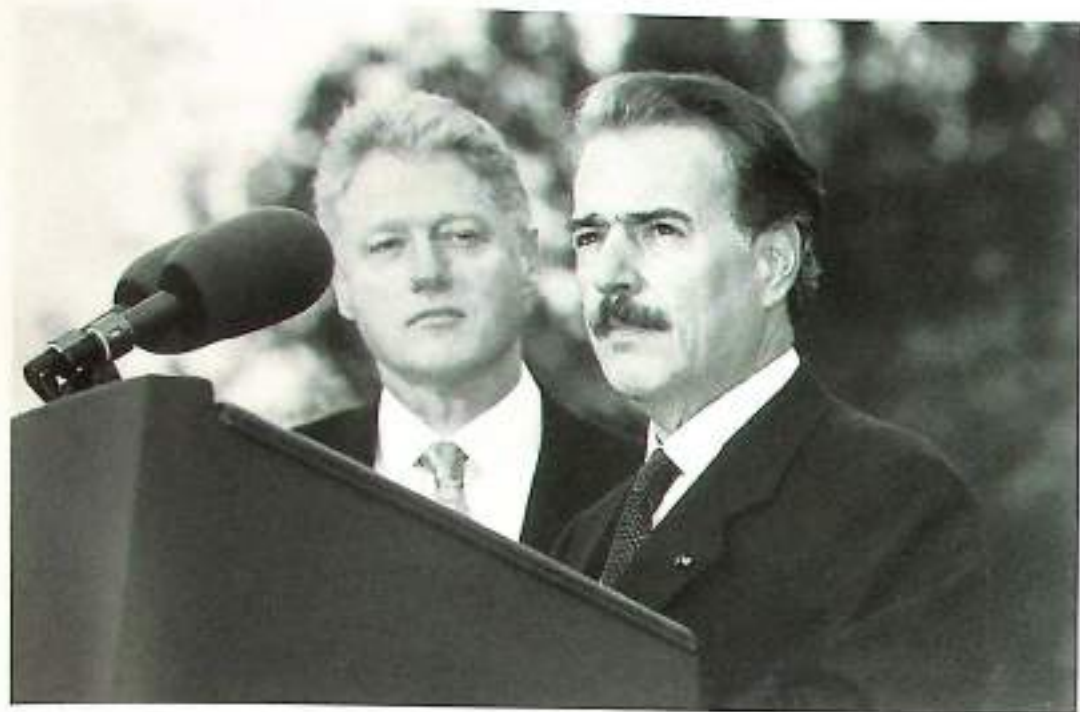
Primera reunión entre Víctor G. Ricardo, Manuel Marulanda *Tirofijo* y Jorge Briceño *Mono Jojoy*, en junio de 1998.



Visita a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el presidente José María Vértiz, el 13 de septiembre de 1998.



Los presidentes Vértiz y Pastrana el día de su investidura como miembros de la Cofradía del Oporto, durante la VIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Oporto, Portugal, el 17 de octubre de 1998.



Ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca. Washington, 28 de octubre de 1998.



Reunión privada en la Oficina Oval durante la visita oficial a Estados Unidos.
Washington, 28 de octubre de 1998.



El 5 de noviembre de 1998 el presidente de la República se dirige a la población de Muzo de la recuperación de esta capital por parte del Ejército Nacional.



Fumigación de un cultivo de amapola, en el departamento del Huila, el 19 de noviembre de 1998. De izquierda a derecha, el general Rosso José Serrano, el senador norteamericano Mike DeWine, el general Leonardo Gallego y el presidente Pastrana.



Santiago Pastrana acompaña a su padre a la iniciación de los diálogos con las FARC. San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999.



Con Fidel Castro y Gabriel García Márquez en La Habana, el 14 de enero de 1999.



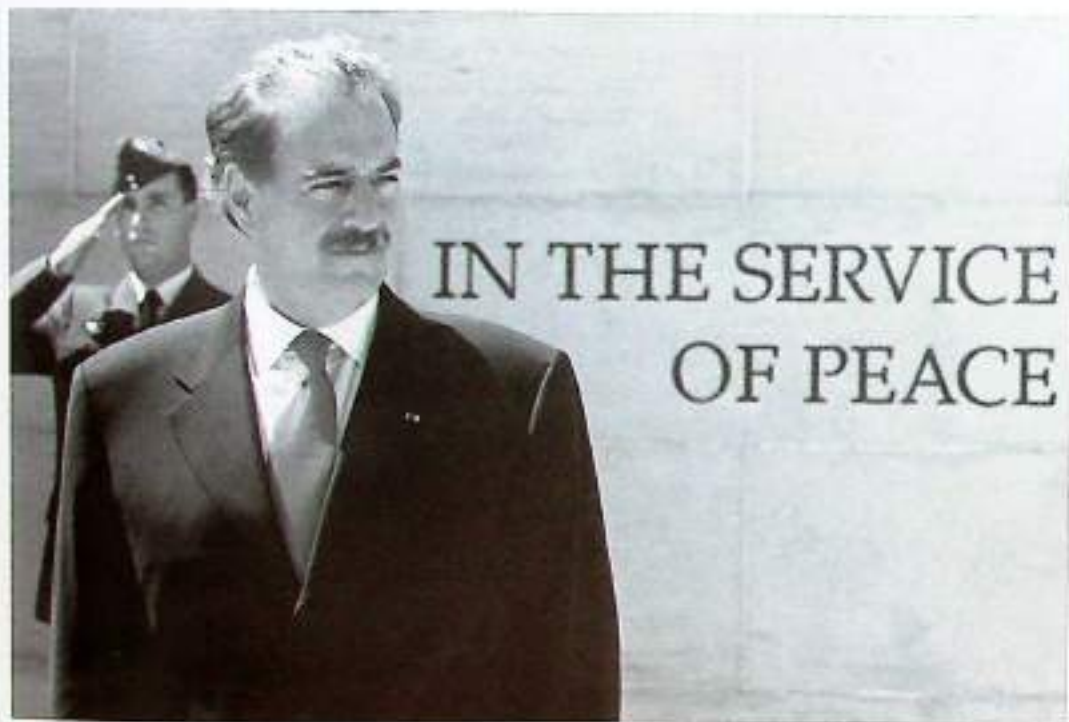
El presidente Pastrana brinda su solidaridad a una de las víctimas del terremoto del Eje del Oro.
Armenia, 26 de enero de 1999.



Visita de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, a los damnificados del terremoto de Armenia, el 3 de febrero de 1999.



Acompañando a las tropas en la primera línea de combate. Urabá, 23 de marzo de 1999.



Visita al Monumento de la Paz. Canadá, mayo de 1999.



Caquetania, 2 de mayo de 1999.



Manuel Marulanda recibe de manos del presidente la medalla pontificia, regalo de Su Santidad Juan Pablo II. Caquetania, 2 de mayo de 1999.



Encuentro con el presidente Hugo Chávez en Ureña, 4 de mayo de 1999.



Con los altos mandos militares en Cartagena, 26 de mayo de 1999. De izquierda a derecha, general Alfonso Ordóñez, comandante (e) de la FAC; general Rafael Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto; general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares; general Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército, almirante Sergio García, comandante de la Armada Nacional, y el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional.



Con un soldado profesional en Puerto Rico, Meta, 15 de julio de 1999.



Andrés Pastrana explica el Plan Colombia ante la plenaria del Parlamento Europeo, Estrasburgo, 26 de octubre de 1999.



Una de las mayores incautaciones de cocaína (cinco toneladas), producto de una operación conjunta de la Armada Nacional y el DAS, Cartagena de Indias, 17 de mayo de 2000.



Camilo Gómez, alto comisionado para la Paz, y Julio Londoño Paredes, embajador de Colombia en Cuba, reunidos con Nicolás Rodríguez Gabino, Pablo Beltrán y Óscar Santos, máximos dirigentes del ELN. Serranía de San Lucas, julio de 2000.



Primera reunión con el presidente George W. Bush. Washington, 27 de febrero de 2001.



Cortando la soga con que las FARC condujeron a los soldados y policías antes de su liberación, gracias al Acuerdo Humanitario, el 28 de junio de 2001.



Los embajadores del grupo de países amigos en el proceso con las FARC pendientes de la alocución del presidente Pastrana. San Vicente del Caguán, enero de 2002.



Ante las cámaras de televisión, exhibiendo una de las pruebas de las numerosas violaciones de las FARC a los acuerdos de la Zona de Distensión, 20 de febrero de 2002.



En la antigua zona de distensión, el 23 de febrero de 2002.



El procurador general de la Nación, Edgardo Maya, eleva la Cruz de Boyacá, concedida a Consuelo Araujonoguera, su esposa, poco después de haber sido asesinada por la guerrilla. Valledupar, Plaza Alfonso López, 26 de abril de 2002.



En la iglesia de Bojayá después del horrendo atentado cometido por las FARC contra la población de ese municipio, en mayo de 2002.



Audiencia con el papa Juan Pablo II, el 10 de junio de 2002.



En el Foro de Responsabilidad Social del Sector Privado, con el presidente electo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Cartagena de Indias, 29 de junio de 2002.



Celebrando un gol de la Selección Colombia con los soldados colombianos.

En Itagüí, después de muchas horas de discusión, Camilo dejó en manos del ELN una propuesta en la que este grupo se comprometía a liberar a todos los secuestrados que tenía en la zona y a no realizar más secuestros masivos. Muy temprano, a la mañana siguiente, y desde Bogotá, el comisionado reinició los contactos con el Coce para saber si su propuesta había sido aceptada. El ELN le manifestó su intención de realizar la liberación, pero exigía condiciones inaceptables. Al mismo tiempo, y para presionar a la opinión pública, esa misma mañana, mientras las elecciones transcurrían en calma, el grupo guerrillero anunció públicamente su determinación de liberar a los secuestrados, pero lo que no dijo en público fueron las condiciones que exigía para este efecto, entre las cuales estaba el repliegue total de la tropa que participaba en el operativo, sin otorgar garantía alguna para la liberación. Esto no lo podíamos aceptar.

Ese mismo domingo, mientras transcurría la jornada electoral, cité a una reunión en mi despacho a los ministros de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y del Interior, Humberto de la Calle; a la cúpula militar, y al comisionado para analizar la situación y tomar las medidas del caso. Una vez más les pregunté a los militares si el rescate militar era viable o no y en qué término se preveía que esto pudiera pasar. Luego de los análisis correspondientes, la conclusión de los altos oficiales fue clara: dadas las condiciones del terreno, del clima y las condiciones de la operación, el rescate con vida de los secuestrados no resultaba posible en un corto plazo y sus condiciones de salud tampoco permitían mayor espera.

Estudiamos las condiciones de un posible acuerdo que permitiera la liberación y todos coincidimos en que ésta era el único camino viable. Entonces decidí acelerar la negociación de dicho acuerdo, manteniendo la presión militar hasta que se lograra. Con base en esta determinación, Camilo acordó con los militares y el ministro de Defensa continuar la reunión para consultar con ellos cada paso de la negociación del acuerdo.

El comisionado mantuvo durante el resto de la tarde y el lunes siguiente comunicaciones frecuentes con el Coce y con Itagüí, en las cuales avanzaba en la negociación. Por las circunstancias militares de la operación, el comisionado y la cúpula trabajaron en equipo para lograr, hacia las 10 de la noche del lunes 30 de octubre, el acuerdo que permitiría la liberación de los secuestrados.

Todo el proceso de negociación se desarrolló con el conocimiento pleno de la cúpula militar, por lo que nunca dejó de sorprenderme la actitud del general Canal, hoy representante a la Cámara, quien sistemáticamente se oponía a cualquier posibilidad de acuerdo, alegando que la liberación por vía militar era inminente y segura, lo cual desmentían sus propios superiores.

En el acuerdo se estableció la liberación en un solo día de todos los secuestrados del kilómetro 18 de la vía al mar, sin que se realizara el repliegue de las tropas sino solamente una suspensión de las operaciones militares.

Una vez realizada la liberación total de los secuestrados, se pondría en marcha el repliegue de las tropas y de los guerrilleros. Este acuerdo sería verificado por el Grupo de Países Amigos que se había constituido el pasado mes de junio y por la Comisión Facilitadora Civil. Adicionalmente, se permitiría de inmediato el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y del equipo médico de la Patrulla Aérea de Antioquia para atender los problemas de salud de los secuestrados.

Ya en la mañana del martes 31 de octubre se inició el desplazamiento de los diferentes grupos hacia la zona de los Farallones, sobre el río Naya, y se estableció como base de operaciones el caserío La Playa, en medio de la selva.

Antes de salir hacia el lugar, el comisionado se reunió con los embajadores del grupo de países amigos en la sede de la Brigada en Cali, con la asistencia del general Canal, quien, para sorpresa de los diplomáticos y del propio comisionado, pronunció un discurso en el que expresó su desacuerdo con la labor de rescate y criticó la tarea que adelantaría ese grupo. Tal fue el talante de sus palabras, que los embajadores señalaron de inmediato que reconocían como única autoridad al presidente de Colombia y al comisionado para la Paz para los efectos del acompañamiento que estaban prestando y que, por lo tanto, harían caso omiso de las arengas pronunciadas por el general.

Superado este incidente, los embajadores partieron hacia el río Naya, junto con el comisionado; el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y otros de los miembros de la Comisión Facilitadora Civil. Allí ya estaban el equipo médico del Comité Internacional de la Cruz Roja, el equipo de la Patrulla Aérea de Antioquia, los miembros del equipo de la Oficina del Alto Comisionado, delegados de la Gobernación del Valle, dos psicólogos de apoyo para atender a los secuestrados y las tripulaciones de cuatro helicópteros que permanecerían en el lugar para evacuar a los secuestrados. En la misma base de operaciones, y formando un solo equipo, estaba también el general Fracica, quien comandaba la operación militar y quien, por instrucciones del Comando General, se quedaría con el comisionado, coordinando lo que fuera necesario.

Pero no todo estaba solucionado. Esa misma tarde, Gustavo Villegas y el procurador general se reunieron con uno de los jefes del grupo secuestrador, quien desconoció el acuerdo firmado por Galán y Torres el día anterior y decidió no liberar a los secuestrados, exigiendo nuevas condiciones que no estaban previstas en el acuerdo.

Desde la base de operaciones, donde se había montado un completo centro de comunicaciones con equipos de radiocomunicación y teléfonos satelitales, el comisionado se comunicó con el Coce y le informó de la situación. Los líderes del ELN intentaron iniciar una nueva discusión pero el comisionado cerró toda posibilidad de modificar lo ya negociado. Hacia las

7 de la noche, las comunicaciones con la guerrilla se interrumpieron y el acuerdo de liberación quedó en suspenso.

Fue una dura noche. Todos los miembros de los equipos se acomodaron en una vieja casa de madera en donde estaban operando. Por varias horas discutieron las alternativas para restaurar el acuerdo y perfeccionaron el diseño del operativo de evacuación. Allí durmieron en medio de un torrencial aguacero que duró casi toda la noche. La preocupación era general: sabían que la situación de salud de los secuestrados era muy grave y que su vida pendía de un hilo. Camilo entendía, además, que una decisión mal tomada podía significar la vida de los secuestrados o la realización de un acuerdo que pusiera en duda no sólo al Gobierno sino al Estado mismo. Yo le había dado todos los parámetros del caso pero las determinaciones las tenía que tomar allá, en el terreno, con cabeza fría.

Entre tanto, la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación era enorme. El episodio de la liberación de los secuestrados tenía a todo el país pendiente de lo que sucedía. Sus familias esperaban ansiosamente en Cali a sus seres queridos y crecía el temor de que más secuestrados murieran. Una parte de la opinión apoyaba la posible liberación por el acuerdo y otra parte insistía en un rescate militar.

Mientras el equipo humanitario pasaba la noche en medio de la selva, en Cali el general Canal estaba organizando un espectáculo público para la llegada de los secuestrados. De alguna manera, quería convertir la liberación en su triunfo, un "triunfo amargo", como él mismo lo calificó antes de pedir la baja.

De nuestra parte, teníamos un criterio claro: antes que usar la liberación de cualquier secuestrado como un instrumento para ganar el favor de la opinión, nuestra obligación era la de respetar y proteger la dignidad y la intimidad de las personas que se liberaran. En todos los episodios de liberación que logramos durante mi gobierno cuidamos al máximo este aspecto, evitando exponer a las víctimas a los medios sin que antes hubieran sido revisadas por los médicos de la Cruz Roja, se hubieran tranquilizado y cambiado de ropa, y hubieran comido, cuando menos. Así lo hicimos siempre y este caso no fue la excepción.

Apenas amaneció, el miércoles 1º de noviembre, la actividad en la base de operaciones de La Playa se reinició. Algo después de las 6 de la mañana, el comisionado estableció contacto con el ELN para intentar reactivar el acuerdo ya firmado. Sin embargo, los guerrilleros insistían en las modificaciones del acuerdo y buscaban abrir corredores de movilidad por los cuales pudieran escapar los guerrilleros llevándose a algunos de los secuestrados, lo cual resultaba inaceptable. Adicionalmente, pretendían establecer un sistema de verificación imposible de cumplir, a tal punto que los propios embajadores y los miembros de la comisión facilitadora así se lo hicieron saber al Coce.

Después de la primera hora de negociación, el acuerdo para la liberación estaba roto de nuevo. Ante la intransigencia de los guerrilleros, y frente al incumplimiento del acuerdo firmado, con un enorme dolor y con la rabia que esto generaba, Camilo decidió suspender la negociación y le pidió al general Fracica, tras consultarlo conmigo, que reiniciara las operaciones militares. La tristeza se apoderó de todos en la base de operaciones, en tanto las posibilidades de la liberación se alejaban.

En Cali las familias, desconocedoras de la situación, mantenían viva la ilusión de reencontrarse con sus seres queridos. Un poco después de las 10 de la mañana, el ELN contactó de nuevo a Camilo y le planteó la posibilidad de restaurar el acuerdo, transmitiéndole la petición del jefe guerrillero que tenía a los secuestrados de llevarles arroz, panela, café y otros víveres, lo que abriría un nuevo espacio a las esperanzas de libertad. Un poco más tarde, y luego de realizar las consultas del caso, autoricé el envío de los alimentos y las operaciones militares se suspendieron de nuevo.

Desde la Brigada en Cali se inició el despacho de algunos víveres de los solicitados por la guerrilla. Sin embargo, de nuevo el general Canal decidió entorpecer el asunto y determinó, por su propia cuenta, restringir el envío de los alimentos y registrar cada una de las cajas con comida. Esto ya no era tolerable y tan pronto me informaron del asunto di la orden perentoria de agilizar los envíos sin someterlos a innecesarios escrutinios.

Con la llegada de los primeros alimentos, se inició la operación de rescate. Primero se trasladaron Gustavo Villegas, un representante del Grupo de Países Amigos y el procurador general al lugar donde estaban los secuestrados. Allí comenzó el proceso de liberación, enviando un primer grupo de tres secuestrados y quedándose ellos como garantes. Una vez salió este primer grupo, los guerrilleros recibieron una pequeña parte de los alimentos pedidos. Esta operación se repitió en varias ocasiones durante buena parte de la tarde, hasta que todos los secuestrados, en un lamentable estado físico y anímico, fueron liberados.

En grupos de tres fueron llegando a la base de operaciones, en donde el comisionado y el general Fracica los recibían, y de inmediato eran atendidos por los médicos del CICR y por el grupo de psicólogos. Uno por uno, fueron recibiendo alimentos y ropa seca y limpia. Usando uno de los teléfonos satelitales, se estableció comunicación con cada una de las familias en Cali para informarles de la libertad que tanto anhelaban. Finalmente, fueron liberados los 19 secuestrados que restaban y otros dos que habían sido plagiados en acciones diferentes a las de la vía al mar. También se recuperaron los dos cadáveres.

La emoción que todos los participantes de la operación humanitaria que estaban en La Playa sentían con la llegada de cada liberado era indescriptible. Llantos, risas, nervios, tristeza, angustia, rabia, todos los sentimientos se mezclaban minuto a minuto. Cerca de las 4 de la tarde, todos los secues-

trados estaban libres y llegó la hora de regresar a Cali. Me contó Camilo que unos minutos antes de salir hacia el helicóptero que transportaría a todo el grupo, ya cuando todos los liberados y el equipo estaban juntos, se volteó a mirar la vieja casona y todos, sin excepción, tenían lágrimas de felicidad. Estaba por terminar uno de los episodios de secuestro más crueles que se haya vivido en Colombia.

Por las informaciones que recibíamos desde Cali, sabíamos que el general Canal había organizado un recibimiento en la Brigada en el cual presentaría a los secuestrados ante todos los medios de comunicación. Allí estaban las familias y un enorme grupo de periodistas. Enterado de esto, Camilo me consultó la posibilidad de cambiar el lugar de llegada pues consideraba que las condiciones de los secuestrados no eran las adecuadas para someterlos a este espectáculo. La dignidad, la salud y la intimidad de los secuestrados tenían que ser protegidas por encima de todo, una tesis que también compartían los funcionarios del CICR.

Autoricé, entonces, a Camilo para que cambiara el itinerario y llegaran a la Base Aérea Marco Fidel Suárez y no a la Tercera Brigada. De inmediato se organizó el desplazamiento de las ambulancias y de los otros medios de transporte, sin darle aviso al general Canal, que se quedó con su *show* montado.

Antes de que despegaran de la zona ocurrió un hecho inusual, digno de recordar. La movilización de los liberados y de buena parte del equipo se realizaría en un helicóptero de gran capacidad, con insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el cual, por convenios internacionales, no pueden transportarse personas armadas ni uniformadas. Sin embargo, todos querían que el general Fracica los acompañara en el viaje de regreso. Era justo y lógico que así fuera, ya que fue su decidida labor y la de sus hombres la que había generado la presión militar necesaria para lograr esta liberación. Pero las normas internacionales lo impedían. El general, entonces, respetuoso del emblema, dejó su arma con uno de sus oficiales y el CICR, a su vez, aceptó que el general viajara uniformado. Así, todos los liberados, el general, los embajadores, el procurador, los médicos y el comisionado iniciaron el regreso a Cali.

Al aterrizar en la base aérea estaban listas las ambulancias y el bus que llevaría a todo el grupo hasta la Clínica Valle del Lili, en donde los liberados serían sometidos a chequeos médicos y se reencontrarían con sus familias. La noticia del cambio de lugar para la llegada enfureció, por supuesto, al general Canal, quien afirmó que el Gobierno no quería mostrarle a la prensa el estado de los liberados. Nunca entendió lo que significaba el respeto de la intimidad y dignidad de los liberados. Los familiares, con la ansiedad que tenían por ver a sus seres queridos, también mostraron su inconformidad, pero de inmediato partieron hacia la clínica.

El recorrido de la caravana desde la base hasta la clínica fue emocionante. En cada cuadra los caleños salían con pañuelos blancos a saludar a los libera-

dos y se unían a la caravana, que se hacía cada vez más grande, con vehículos que pitaban tras el paso del bus. La emoción del regreso era general. Toda la ciudad estaba recibéndolos. Sin embargo, al llegar a la clínica, los ánimos estaban bastante alterados y el bus casi no puede entrar a la zona de urgencias. Antes de ingresar, el comisionado se bajó del bus para hablar con las personas que estaban agolpadas allí y con los medios de comunicación que esperaban en el lugar. Varias personas intentaron pegarle a Camilo y sólo la intervención de una de las periodistas presente, a punta de gritos, logró que el tumulto se abriera y diera paso a la entrada del vehículo.

Ya cuando los liberados estaban en manos de los médicos y se habían reencontrado con sus familias, el comisionado dio una rueda de prensa, en la que los medios le hicieron fuertes reclamos por el cambio del lugar de llegada. Por televisión noté la angustia y el cansancio que tenía.

A los pocos minutos hablamos y, dolorido, me dijo que lo que estaba pasando era muy injusto; que se había hecho todo lo posible por salvar la vida de los secuestrados pero que parecía que nadie entendía eso. Me contó que habían tratado de pegarle a la entrada de la clínica. No sólo estaba agotado por lo complejo del operativo, sino también muy golpeado por la actitud de la gente. Todo su equipo había hecho un esfuerzo sin precedentes, habían hasta arriesgado sus vidas, y ahora resultaban los malos del paseo. Incluso me dijo que no valía la pena continuar.

Entendí, por supuesto, que la carga emocional de este episodio lo tenía muy afectado y le expresé mi respaldo frente a la situación.

Camilo me contó luego que, al terminar de hablar conmigo, se había separado del tumulto para descansar un poco. Se retiró a uno de los pasillos de la clínica y, en una banca, se sentó, solo, a meditar lo sucedido. Allí, de pronto, apareció una monjita que, sin decirle nada, le dio la mano y le llevó un vaso de agua. Detrás de ella, al fondo del corredor, apareció un niño de unos ocho años. Estaba solo y muy despacio se acercó al comisionado. Ya a unos pocos pasos, con una sonrisa en su rostro, le preguntó:

—¿Usted es Camilo, el comisionado? ¿Le puedo pedir un favor?

Camilo, asombrado, le dijo que sí.

—Sólo quiero darle un abrazo y las gracias porque mi papá está vivo y de nuevo está conmigo.

Lo abrazó y salió corriendo. Camilo se quedó mirándolo y de inmediato me llamó:

—Presidente, sé que hace un rato le dije que esto no era justo, que la gente pensaba que no habíamos hecho un buen trabajo. Quiero decirle que no lo dude. Salvamos la vida de la mayoría de los secuestrados y hoy están con sus familias. Eso es lo único que importa. Si tuviera que volver a hacerlo, lo repetiría sin dudar. Ya salgo para Bogotá porque mañana hay que seguir trabajando en los demás acuerdos, sobre todo para que nunca vuelva a pasar esta tragedia.

Después de este durísimo episodio, que acarreó la muerte en cautiverio de tres de los secuestrados y un duro trauma para todos los demás, no volvieron a presentarse secuestros masivos por parte del ELN. Las conversaciones sobre la Zona de Encuentro continuaron y se abrió el espacio para llegar a los acuerdos sobre el reglamento de la misma en las rondas de negociación de La Habana. También surgió la idea del Batallón de Alta Montaña para la zona de los Farallones de Cali, el cual opera hoy en la región.

LA PRIMERA LIBERACIÓN DE SOLDADOS

Superado este infortunado y doloroso hecho, vimos la necesidad de avanzar con mayor decisión hacia la creación de la Zona de Encuentro. Con este propósito, en diciembre de 2000, se inició en La Habana una ronda de negociaciones entre las dos partes, que duró varias semanas, en las que el Gobierno, cuyo equipo presidía el comisionado, y el ELN, con el mismo Gabino a la cabeza, redactaron los reglamentos de la Zona de Encuentro y de la verificación, y acordaron sus posibles límites.

Dentro del mecanismo de verificación de la Zona se incluyó la designación de cinco países más —distintos a los conocidos como Grupo de Países Amigos y Facilitadores— para que apoyaran dicha labor, que se conocieron como los Países Verificadores. Ellos fueron: Alemania, Canadá, Japón, Portugal y Suecia. De esta manera, diez países de Europa, Asia y América llegaron a acompañar el proceso con el ELN, en una muestra de confianza y respaldo al esfuerzo de paz que veníamos adelantando.

Felizmente, las reuniones de diciembre en La Habana tuvieron un ingrediente adicional, que significó un inmenso alivio para 42 hombres: 39 soldados y policías y tres agentes del DAS que estaban secuestrados por el ELN, y que, seguramente, no soñaban con la posibilidad de pasar la Navidad con sus familias. Algunos llevaban más de tres años de inhumano cautiverio en poder de la guerrilla. Todos habían sido privados de la libertad en diferentes acciones, incluso cuando viajaban desprevenidamente en un bus, en calidad de pasajeros.

Su cautiverio en una montañosa zona del noreste del país era un verdadero calvario. La guerrilla los había capturado y no se vislumbraban mayores posibilidades de que retornaran pronto a la libertad. Tantos meses de su vida enterrados en las montañas del Catatumbo les habían hecho perder las ilusiones y dejarían para siempre la huella del terror y del secuestro en sus corazones.

Sin embargo, el tema de la libertad de los soldados nunca dejó de preocupar al Gobierno, que lo abordaba en cuantas ocasiones le era posible. Fue así como en La Habana, a pesar de que las largas negociaciones se centraban sobre la Zona de Encuentro y sus reglamentos, el comisionado insistió nuevamente sobre la necesidad de que se buscaran mecanismos para que se diera la liberación de nuestros hombres.

Desde tiempo atrás, y en diferentes conversaciones con Pablo Beltrán, el tema de los soldados y policías que se encontraban en su poder había surgido con cierta fuerza. El ELN no había planteado formalmente la opción de realizar un "canje", tal como lo pedían las FARC insistentemente. Sin embargo, se había hecho mención de la posibilidad de discutir la liberación de estos hombres a cambio de lo que llamaban "gestos" posibles del Gobierno con relación a guerrilleros de ese movimiento que se encontraban presos en las cárceles. En alguna ocasión habían llegado a mencionar la posibilidad de que Francisco Galán y Felipe Torres, máximos dirigentes de ese movimiento presos en la cárcel de Itagüí, fuesen liberados a cambio de los soldados, opción que, obviamente, había sido descartada por el Gobierno.

Si bien es cierto que la opinión pública tenía más presente el caso de los soldados y policías que se encontraban en poder de las FARC, este caso no era menos dramático. Las FARC siempre habían utilizado como arma política el secuestro de nuestros uniformados y el ELN lo hacía en mucha menor escala, pero el drama humano era el mismo.

En algunas discusiones realizadas en la Serranía de San Lucas, y frente a la insistencia del Gobierno para que liberaran a los soldados, el ELN se había negado a hacerlo pues consideraba que eso podía traerles problemas frente a las FARC. En alguna ocasión, el comisionado les planteó la importancia de realizar la liberación como un gesto que podría facilitar los avances de las conversaciones sobre la Zona de Encuentro, y Gabino le respondió:

—Eso es muy difícil. Sería como darle una patada en las espinillas a las FARC. Imagínese el precedente que eso significaría para ellos. Nosotros en el ELN no podemos hacerle eso a las FARC.

En realidad era claro que la intención del Gobierno al buscar —y lograr luego— la liberación sin contraprestaciones tenía también ese ingrediente. Si el ELN liberaba a los soldados y policías sin ninguna condición, eso resultaría un buen ejemplo frente a las FARC y necesariamente tendría influencia frente al proceso de negociación que se adelantaba con ellas. La posición del ELN parecía ser inmodificable, pero al final, y por fortuna para el país, cambió.

Las conversaciones de La Habana —que duraron casi diez días, entre el 13 y el 22 de diciembre— se desarrollaban en un ambiente tranquilo gracias a la colaboración del gobierno cubano. Los dos equipos de negociadores estaban ubicados en casas vecinas y en medio de ellas había un enorme jardín lleno de viejísimas palmeras. Ese jardín se convirtió en el sitio preferido para las reuniones.

En un momento dado, el comisionado tuvo que viajar a Bogotá para atender asuntos relacionados con las FARC y, a su regreso a La Habana, en una madrugada de domingo, encontró que las conversaciones habían entrado en un punto muerto, básicamente por cuenta de lo relacionado con la reglamentación de la seguridad en la posible Zona de Encuentro. De inme-

diato tomó contacto con Gabino, para indagar lo que estaba sucediendo, y acordaron reunirse hacia el medio día, una vez el equipo del ELN terminara algunas discusiones internas.

Gabino le pidió al comisionado que conversaran aparte pues tenía que comentarle algo especial. Allí, en un ambiente que amenazaba lluvia, el jefe guerrillero le expresó a Camilo la preocupación por el estancamiento de las conversaciones y le manifestó que el ELN estaría dispuesto a realizar una acción que permitiera agilizar las cosas y que le mostrara al país su buena disposición de avanzar. Este gesto sería alrededor de la liberación de los soldados y policías que se encontraban en su poder.

Como es natural, el comisionado le manifestó su interés en el tema, aunque con la salvedad de que esto no podía implicar en ningún momento que el Gobierno se saliera de los marcos legales y de la posición que ya había manifestado sobre la seguridad y las medidas que el Ejército tomaría alrededor de la posible Zona de Encuentro. La conversación entre ambos se prolongó por varias horas y, al final, la conclusión fue la de avanzar en la liberación de los hombres y, simultáneamente, retomar las discusiones sobre la Zona.

Ya en la noche, Camilo me informó la buena novedad y le di instrucciones para avanzar lo mejor posible en el tema bajo la condición de que no habría canje ni liberación de guerrilleros. Así mismo, le reiteré las instrucciones sobre las medidas de seguridad que se tomarían alrededor de la posible Zona de Encuentro. Con esta posibilidad abierta, las discusiones continuaron por varios días más, en un ambiente de expectativa muy fuerte y con la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.

En la madrugada del 21 de diciembre, después de varias dificultades, el prolongado encuentro culminó con el compromiso unilateral del ELN de poner en libertad el 23 de diciembre a los 39 soldados y policías y los 3 agentes del DAS que se encontraban en su poder y con un principio de acuerdo sobre el reglamento de la Zona de Encuentro, que sería concertado con los mismos pobladores, lo que representaba un importante avance.

Los buenos resultados de esta ronda de negociaciones en Cuba demostraban por sí solos las ventajas que implicaba negociar por fuera del país, sin las presiones de tener a la opinión pública nacional y a los medios pendientes de cada decisión y exigiendo una noticia cada día. Esto fue algo que, infortunadamente, nunca entendieron las FARC, por lo que con este grupo siempre tuvimos que negociar en Colombia.

A estas alturas, ni las familias de los secuestrados, ni los secuestrados mismos, se imaginaban que estarían de nuevo juntos para la Navidad.

El acuerdo de la liberación unilateral no implicaba ninguna contraprestación para el Gobierno. El ELN sólo había pedido que en la entrega estuviesen presentes Francisco Galán y Felipe Torres, quienes para este efecto deberían salir nuevamente de la cárcel, y solicitaron la presencia de dos periodistas.

Así mismo, se acordó la presencia de la comunidad internacional en cabeza del coordinador del Grupo de Países Amigos, que en ese momento era Francia. Por último, y para efectos del acompañamiento humanitario y de la atención médica, se definió que el Comité Internacional de la Cruz Roja estuviera en la operación de liberación.

En la madrugada del 22 de diciembre de 2000 el equipo del Gobierno inició su regreso hacia Colombia. Traían un buen acuerdo en la mano que incluía la liberación unilateral de los soldados y policías. Éste ya era un paso concreto.

Sin embargo, hasta llegar a la liberación de los soldados se tuvieron que superar primero varios obstáculos, en una verdadera carrera contrarreloj. El primero de ellos se presentó a la llegada del comisionado a Colombia. El avión en que viajaba fue desviado a Cali por dificultades meteorológicas en Bogotá, lo que podría significar graves retrasos pues ese mismo día tenía que desplazarse hacia una zona de la Serranía del Perijá, antes de las 4 de la tarde, en compañía de todos los que estarían presentes en la operación, incluyendo a los guerrilleros presos.

La organización de la liberación implicaba disponer de transporte para los 42 secuestrados, para los funcionarios del Gobierno y para los demás acompañantes. Es decir, cerca de 25 personas deberían desplazarse hacia una zona remota y montañosa y cerca de 70 debían regresar de allí, todo en un solo día. Era necesario prever la alimentación, la dormida, equipos médicos, etc., en un operativo complejo para el que sólo se contaba con escasos dos días.

Desde Cali, en la madrugada, el comisionado dio los últimos toques a la organización del operativo. En Palacio se prepararon las normas que permitirían que Francisco Galán y Felipe Torres salieran de la cárcel. Éste era un paso complicado en la medida en que se desplazarían a una zona montañosa y en medio de sus compañeros guerrilleros. El temor de que no regresaran era obvio pero otra vez tomé la decisión de aceptar el riesgo, pues estaba de por medio la libertad de esos 42 hombres. Como en las otras ocasiones, ellos cumplieron con su palabra y, después del operativo, regresaron a sus celdas.

El viaje del equipo se inició esa misma tarde. Desde Medellín, Gustavo Villegas, asesor del comisionado, se desplazó a la cárcel de Itagüí y recogió a los dos guerrilleros. De allí viajaron al aeropuerto de Medellín en donde un avión los esperaba para trasladarlos a Bucaramanga, donde se encontrarían con el alto comisionado y el embajador de Francia, Daniel Parfait, así como con los demás miembros de la comisión encargada del asunto.

En el aeropuerto de Bucaramanga se presentaron algunas dificultades que complicaron la movilización hacia el lugar pues el ELN, por intermedio de Antonio García, aseguraba que había helicópteros militares sobrevolando la zona, lo cual no resultó cierto. Como en todos los casos, el comisiona-

do había coordinado con el general Tapias todo lo relacionado a los movimientos militares con el fin de garantizar que no hubiera problemas con la entrega de los soldados y policías. No se trataba de despejar ninguna zona sino de evitar que durante el período de la entrega se realizaran operaciones militares. Parte de la demora ocurrió precisamente mientras el ministro de la Defensa y el general Tapias le informaban al comisionado que ya estaba verificada la suspensión de operaciones.

Durante la espera en Bucaramanga también se presentaron algunas tensiones pues la presencia de los dos guerrilleros y voceros del ELN implicaba riesgos de seguridad para todos los que estaban con ellos. Finalmente, el comisionado optó por llevarlos a la estación de Policía que estaba en el mismo aeropuerto y allí, con varios de los agentes que estaban de servicio y en las propias instalaciones de la Policía, los guerrilleros, el comisionado con su equipo, el embajador de Francia, los miembros del CICR y los demás acompañantes mataron la espera con una discusión en la que todos participaron. Una vez Antonio García verificó que las condiciones de seguridad estaban dadas, proporcionó las coordenadas correspondientes y se inició el viaje hacia el lugar indicado.

Allí, ya al atardecer, aterrizaron los dos helicópteros en los que viajaba la comitiva y en los cuales serían transportados nuestros hombres de regreso a la libertad. En el lugar los esperaban dos jefes del ELN y cerca de cien guerrilleros. Los secuestrados aún se encontraban lejos y sólo hasta el medio día del día siguiente llegarían al lugar de la liberación. Para pasar la noche, el CICR acomodó algunos toldillos y organizó unas pocas colchonetas en el piso de la pequeña escuela del lugar. Cerca de la medianoche, Camilo me informó sobre los avances del operativo y pude hablar con el embajador Parfait, quien tan sólo unos días antes había llegado a Colombia. A pesar de las dificultades e incomodidades, el embajador siempre estuvo con el mejor de los ánimos y en esa conversación le agradecí su esfuerzo por participar en la liberación.

El día de la libertad llegó finalmente. Muy temprano, hacia las 6 de la mañana del 23 de diciembre, recibí el primer informe del comisionado, quien se alistaba para ir en la búsqueda de los uniformados. Simultáneamente, la Policía y el Ejército organizaban el recibimiento de estos hombres en las instalaciones de la escuela de la Policía en Bucaramanga.

Después de recorrer una estrecha carretera por cerca de tres horas, el comisionado, el embajador y los guerrilleros llegaron a una pequeña casa a la que acababan de arribar los secuestrados, después de más de dos días de camino. Ellos no podían creer que alguien diferente a gente de la guerrilla los estuviera saludando, y no se atrevían a decir una palabra. Después de meses o años, eran las primeras personas que veían distintos a sus captores.

Según me contó Camilo, se respiraba un aire extraño, donde se mezclaban las ansias de libertad y el temor de que se tratara de una mala jugada de

la guerrilla. Finalmente, el grupo de secuestrados fue acercándose y rodeando al comisionado, hasta que uno de ellos lo saludó, primero tímidamente. Camilo le hizo algún chiste para tratar de bajar la tensión. Les preguntó si es que estaban tan callados porque querían quedarse y fue entonces cuando rompieron el silencio y la angustia para llenarse de abrazos, con la efusividad que causa estar en el camino de la libertad.

Pero aún faltaba trecho por recorrer. El comisionado apresuró el paso y les pidió que tomaran sus pocas pertenencias para volver a subir a los camiones y partir hacia el lugar en donde el ELN realizaría la entrega oficial en un breve acto. Allí también serían revisados preliminarmente por los médicos del CICR para asegurar que sus condiciones de salud fueran al menos aceptables.

Los secuestrados, el embajador, el comisionado, los guerrilleros, y hasta un perro que acompañó durante el cautiverio a los secuestrados, dejaron el lugar y reiniciaron la marcha hacia la escuelita donde estaba establecido el lugar para la entrega. La emoción de la libertad hizo que el camino de regreso fuera mucho más corto.

Yo, desde la Casa de Nariño, estaba ansioso por saber qué pasaba. Camilo no se había vuelto a comunicar y no había mayor información sobre lo que estaba pasando. Además de la preocupación por el operativo de liberación, también sentía cierta angustia por las posibilidades de que a Galán y a Torres se les ocurriera quedarse en el monte, generando un "canje" de hecho. Ese era un riesgo que habíamos considerado como posible pero sabíamos que había que tener la audacia de tomarlo.

Hacia la 1 de la tarde, el alto comisionado se comunicó de nuevo:

—Presidente, ya están conmigo todos nuestros hombres. Sólo falta el acto correspondiente y en menos de tres horas los muchachos están en Bucaramanga. Todos están en condiciones de salud que les permiten viajar. Ya pronto serán libres de nuevo.

Y agregó, para mi tranquilidad:

—No se preocupe que Galán y Torres también están conmigo.

Aunque faltaba un tramo por recorrer, ya la alegría de haber logrado la libertad para estos hombres era enorme. Podrían pasar Navidad con sus familias y Colombia tendría 42 secuestrados menos.

En Bucaramanga y en Cúcuta las familias esperaban ansiosas. Los medios de comunicación estaban transmitiendo algunas noticias sobre el tema pero no tenían imágenes ni sonido y tampoco estaban comunicados con los periodistas que, por solicitud de la guerrilla, se habían desplazado hasta allí. El recibimiento se haría en la finca que servía como centro de adiestramiento de carabineros de la Policía en Bucaramanga. Allí ya estaban listos los equipos médicos y se había preparado un centro de transmisión para que la prensa recibiera las imágenes del retorno a la libertad.

Hacia las 4 de la tarde aterrizó el helicóptero en el que venía el primer grupo de policías y soldados. Tan pronto descendieron de la aeronave, las escenas de alegría y llanto al abrazarse con sus familiares se multiplicaron por todos los rincones del improvisado helipuerto. Unos minutos después aterrizaría el segundo helicóptero con los restantes liberados. Los abrazos y las lágrimas se repitieron.

Yo, desde mi despacho, veía las imágenes de libertad con el corazón emocionado y revivía, de alguna manera, aquel momento, casi 13 años atrás, en el que recobré la mía, en medio de un operativo de la Policía, después de haber sido secuestrado por Los Extraditables. Es una sensación indescifrable la del hombre que recupera al fin el bien preciado de la libertad. Por suerte, en este caso, lo habíamos logrado.

Estos hombres pasarían la que podría ser la Navidad más feliz de sus vidas, y los colombianos veríamos también la Nochebuena iluminada por esta excelente noticia. Sin embargo, el drama del secuestro continuaba para muchos y, por ellos, por todos los secuestrados, teníamos que seguir trabajando sin descanso.

CAPÍTULO XXIX

Un acto de soberanía

El 14 de noviembre del año 2000, el día en que debían iniciarse las discusiones sobre el cese de fuegos, las FARC habían congelado los diálogos aduciendo la falta de interés por parte del Gobierno en la lucha contra los grupos paramilitares y, más exactamente, por causa de la labor humanitaria que el ministro De la Calle había realizado ante Carlos Castaño, líder de las Autodefensas, para lograr la liberación de los congresistas secuestrados por dicho grupo, un acto que la guerrilla quiso interpretar como una concesión hacia los paramilitares.

La situación era nuevamente difícil y se requería del concurso de toda la nación, no sólo del Gobierno, para conjurar la crisis. Durante todo el proceso siempre busqué que las diversas fuerzas políticas y sociales participaran del mismo, como una política de Estado, independientemente de las distancias que tuviéramos en otros temas, lo cual se había concretado en actos como la Declaración de Caquetania del 28 de abril de 1999, así como en la composición de los grupos de representantes del Gobierno en la Mesa de Diálogo, en la Mesa de Negociación y en el Comité Temático, y en el Grupo de Apoyo Político a la Mesa de Negociación que se había reunido en la Zona en agosto de 2000.

Dada la nueva y compleja coyuntura, decidí volver a convocarlas a través de un mecanismo consultivo de carácter permanente al que denominé Frente Común por la Paz y contra la Violencia, en el que estuvieron representados los líderes y voceros de los más importantes partidos y movimientos políticos del país, de todas las corrientes ideológicas.

Fue así como el 22 de noviembre, en el Palacio de Nariño, suscribí el Acta de Constitución de dicho Frente, junto con el presidente del Senado, Mario Uribe, además de Horacio Serpa, representante del Partido Liberal; Ciro Ramírez, del Partido Conservador; Luis Fernando Alarcón, del Movimiento Sí Colombia; Antonio Navarro Wolff, por los partidos y movimientos de izquierda, y Luis Guillermo Giraldo, liberal que había acompañado mi candidatura, todos representantes de las más diversas corrientes políticas del país.

En dicha acta, los firmantes ratificamos nuestra convicción en la solución política negociada del conflicto armado, condenamos el uso de la violencia como instrumento de lucha política e instamos a las FARC a reanudar inmediatamente las negociaciones, entre otras declaraciones que significaron, sobre todo, un respaldo unánime y decidido a los esfuerzos de paz.

El Frente Común se reunió, desde entonces, en muchas oportunidades, cuando las necesidades o las crisis del proceso lo demandaron, y siempre aprecié y valoré de manera especial sus consejos y criterios.

Así como en los diferentes equipos de negociadores del Gobierno había vinculado siempre a personas representativas de los dos principales partidos y del sector privado, tener ahora este cuerpo consultivo con tan alta y variada representación política significaba un paso más en mi propósito de hacer de la paz una verdadera política de Estado.

En adelante, las más cruciales decisiones que se tomaron durante las diferentes etapas del proceso de paz estuvieron siempre acompañadas por este Frente Común, que convoqué con regularidad y al que los jefes políticos acudieron con patriotismo e interés.

LA FOTO DE LA ÚLTIMA CENA

En esta ocasión, la congelación del proceso por las FARC nos había tomado por sorpresa, más que cualquier otra vez. Tal vez fue la única sorpresa grande que las FARC nos dieron durante todo el proceso de negociación, porque, en medio de los avances que se veían en las audiencias públicas, y después del intercambio de propuestas de cese de fuegos, no nos esperábamos que congelaran el proceso abruptamente.

A partir del mismo 14 de noviembre, los voceros de la guerrilla interrumpieron sus comunicaciones radiotelefónicas y se perdieron del panorama. Debido a esto, nos tocó utilizar lo que llamamos un "canal posterior" para tener acceso a ellos y enviarles el mensaje de que la congelación del proceso no tenía sentido y que debíamos seguir trabajando en la negociación de la agenda y avanzando en el tema del acuerdo humanitario para la liberación de los militares y policías en poder de las FARC.

Ese contacto lo conseguimos por intermedio del ministro de Trabajo —y hoy gobernador del Valle—, Angelino Garzón, y del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT —y hoy alcalde mayor de Bogotá—, Luis Eduardo Garzón, dos hombres que, desde sus posiciones de izquierda, siempre estuvieron dispuestos a colaborar en la búsqueda de la paz. El "canal" era un hombre al que Marulanda le tenía mucha confianza y al que nosotros nunca conocimos. Sus gestiones resultaron de gran utilidad, tanto que luego volvimos a recurrir a él en otras ocasiones especiales.

El 24 de noviembre, el alto comisionado, Camilo Gómez, estaba en Cartagena, en desarrollo de un encuentro con periodistas patrocinado por

la Embajada de Estados Unidos para evaluar el proceso de paz, cuando le entró una llamada a su celular desde el Caguán. Se trataba de Raúl Reyes, quien le dijo que Manuel Marulanda quería hablar urgentemente con él.

Ésta era una respuesta a lo que Angelino y Luis Eduardo habían logrado a través del "canal posterior", transmitiéndole la información que nosotros queríamos enviarle a las FARC. Dicho "canal" estaba, mientras tanto, en un taxi, dando vueltas por Cartagena por si era necesario complementar su tarea de intermediación. Reyes le dio a Camilo algunas indicaciones para que se pudiera realizar una primera reunión el domingo siguiente.

Después de una larga espera, dando vueltas por la ciudad, y de un sinnúmero de llamadas, el contacto secreto se comunicó con Camilo y le complementó la información que él ya había recibido.

Manuel Marulanda enviaba el mensaje de que estaba de acuerdo en sentarse a conversar de nuevo, pero aclarando que el tema principal de la conversación sería el del canje de los soldados secuestrados por guerrilleros presos, que él venía promoviendo, y que *"por ahí conversamos de otros temas"*, con lo que se entendía que abría una puerta al descongelamiento. Quedó entonces fijada una reunión secreta o, por lo menos discreta, para dos días después, entre Camilo y Marulanda. Nuestro objetivo era, obviamente, la reanudación de las conversaciones, aunque sabíamos que también sería necesario hablar del canje, que era una obsesión personal de Marulanda.

La reunión se realizó en Los Pozos, sede de las negociaciones. El día indicado, Marulanda llegó solo, sin ninguno de los demás jefes guerrilleros que solían acompañarlo. La conversación fue franca y tranquila y estuvo muy centrada en su interés de avanzar en el canje, que el Gobierno no veía posible sino en la forma de un acuerdo humanitario, aunque también se mencionó la necesidad de descongelar el proceso. Allí se acordó realizar una segunda reunión entre Raúl Reyes y el comisionado.

En este nuevo encuentro, se habló más concretamente del problema del congelamiento y de cómo superarlo, avanzando también en lo relacionado con el tema de los soldados secuestrados.

Se acordó, entonces, una tercera reunión, que tal vez fue la más impactante en el tema de la reactivación del proceso. En esta ocasión, Camilo se reunió con Marulanda y todos sus hombres en un paraje cercano a un lugar llamado La Ye, a tres o cuatro horas por carretera de San Vicente del Caguán, el cual se convirtió, desde entonces, en el sitio preferido para las reuniones entre el comisionado y Marulanda.

Ese día, Marulanda hizo una intervención muy fuerte, argumentando que el Gobierno no quería negociar ni liberar a sus soldados, y asumió una posición particularmente dura e intransigente en frente de sus hombres, contraria a la actitud conciliadora que había mostrado el domingo anterior, en el primer encuentro.

Después de sus palabras, Camilo decidió hablar tanto o más fuerte que Marulanda, y reclamó durante casi una hora por la crueldad del secuestro, los ataques con cilindros de gas a las poblaciones y el secuestro y mantenimiento de los soldados en condiciones inhumanas, tratando de contrarrestar la beligerancia que había mostrado Tirofijo. Si las FARC creían tener derecho a reclamar, lo cierto era que el Gobierno, en nombre de todos los colombianos, sí que tenía razones para exigirles que cesaran su violencia demencial en contra de sus compatriotas.

Al finalizar Camilo su intervención, nadie habló en la mesa de negociación. Se produjo un silencio largo e impactante. El jefe guerrillero se notaba muy alterado y molesto ante la arremetida del comisionado. Curiosamente, quien finalmente se decidió a hablar fue el Mono Jojoy, que se volteó y le dijo a Marulanda:

—Comandante, ¡ahora sí entiende por qué el presidente Pastrana nos envió a este gallito a negociar con nosotros!

El apunte sirvió para distensionar el ambiente y la negociación continuó sobre unas bases firmes. Las posiciones de las partes estaban claras y, sobre ellas, había camino para avanzar.

El resto de noviembre y durante buena parte de diciembre, aún en medio del congelamiento decretado por las FARC, se celebraron varias reuniones más en muy buena tónica, hasta que se presentaron tres hechos, de inmensa gravedad, que enturbiaron el ambiente y convocaron la reacción inmediata del Gobierno y la sociedad: El secuestro el 28 de noviembre, en Bogotá, de la joven estudiante universitaria Juliana Villegas, hija del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Luis Carlos Villegas, un hombre de excelentes calidades humanas que nunca dudó en acompañar y apoyar los esfuerzos de paz en el país; el secuestro el 4 de diciembre, en Cartagena, del ex ministro y viejo amigo mío, Fernando Araújo Perdomo, que había sido mi primer ministro de Desarrollo Económico, también un hombre de paz y un promotor constante de su región, y el asesinato el 29 de diciembre, en Caquetá, en cercanías de la Zona de Distensión, del representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Paz de dicho cuerpo legislativo, Diego Turbay Cote, su madre, su conductor y cuatro escoltas, hecho que rebotó la copa de la paciencia de los colombianos, que no podíamos entender cómo las FARC se ensañaban así contra el país y sus más destacados ciudadanos.

El comisionado citó, entonces, a Marulanda a una reunión el 4 de enero de 2001, a la que también asistió Luis Fernando Ciales, quien era entonces asesor del vicepresidente y a quien luego designé como comisionado adjunto para el proceso con las FARC. En dicho encuentro, que se extendió de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, un término relativamente breve si se compara con la duración de las otras reuniones que se venían sosteniendo, los representantes del Gobierno le exigieron a las FARC que confirmaran si eran

ellos o no los autores de la masacre de la familia Turbay, pero se negaron a hablar del tema.

Camilo, que sólo se limitó a esta exigencia durante la reunión, le dijo a Marulanda que, así las cosas, era muy difícil continuar con el proceso. Los guerrilleros se mostraron sorprendidos, pero Camilo insistió en que tenían que entender que el proceso también estaba sujeto a las actuaciones de ellos, y que el país no toleraba más sus atrocidades. Les advirtió que su actitud hacía inminente la posibilidad del rompimiento de las negociaciones de paz y, levantándose de la mesa, les dijo:

—Tomémonos la última foto, la foto de “la última cena”, porque no nos vamos a volver a ver. Regresaré a Bogotá a informarle al presidente Pastrana la posición de la guerrilla, que es absolutamente intransigente.

Joaquín Gómez, con el humor que siempre lo ha caracterizado, le respondió:

—Camilo, ésta no es la foto de la última cena, porque aquí no hay ningún Judas. Esto hay que arreglarlo de alguna manera.

Fue entonces cuando las FARC produjeron un comunicado negando la autoría del crimen de los Turbay, un comunicado infortunado e incoherente pues, al tiempo que se “lavaban las manos”, daban a entender que la muerte de los Turbay era merecida, lo que generó la lógica indignación del país. Aunque las FARC nunca lo admitieron expresamente, finalmente la justicia colombiana terminó por comprobar que sí fueron ellos los autores de este horrendo crimen. De hecho, el guerrillero que comandó el grupo autor de la masacre fue dado de baja unas semanas después en el Caquerá, en un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC.

UNA INVITACIÓN A LAS 7 DE LA MAÑANA

Vino entonces la discusión dentro del Gobierno sobre qué hacer respecto del proceso. A pesar de la insensatez de la guerrilla, del congelamiento unilateral y sus actos violentos, ¿había fórmulas para salvarlo y para seguir avanzando hacia resultados concretos?

El 7 de diciembre de 2000 había prorrogado la Zona de Distensión hasta el 31 de enero de 2001, tan sólo por 56 días. Ésta fue una de las prórrogas más cortas, dado que el proceso estaba congelado, y se dio únicamente para determinar en ese breve lapso si valía la pena continuar o no. Yo ya tenía una decisión tomada al respecto: o se arreglaba el proceso o se acababa al vencimiento de la prórroga.

Por supuesto, una prórroga tan corta tomó por sorpresa a las FARC que, a pesar del congelamiento, esperaban otra ampliación de seis meses, como era lo usual.

Pasaron los días. Se acercaba el 31 de enero de 2001, fin del nuevo plazo de vigencia de la Zona, y la guerrilla no reaccionaba ni descongelaba las

negociaciones. El 17 de enero, en un acto netamente social, las FARC habían hecho una despedida en el Caguán a Fabio Valencia Cossio, quien dejaba el equipo de negociadores y se marchaba a Roma, como nuevo embajador ante el Gobierno de Italia.

Aprovechando la reunión social, a la que no asistió el comisionado, Marulanda le envió a éste una comunicación, que el Gobierno contestó a la semana siguiente, sin que se produjeran reales avances en cuanto al descongelamiento.

En su carta, el jefe guerrillero, después de afirmar que trabajaba *"las 24 horas por la paz"*, ratificaba su decisión de mantener congelada la negociación *"mientras el Gobierno no muestre su estrategia y hechos reales en la lucha contra el paramilitarismo"*. Acusaba al Gobierno de ser el responsable de tres congelamientos que nunca existieron, decía que consideraba cerrada la posibilidad de continuar el diálogo sobre la liberación de los soldados y proponía una nueva *"gira internacional de esclarecimiento del proceso por ambas partes"*, entre otros varios temas.

Le di, entonces, instrucciones a Camilo para que buscara reunirse con Marulanda, con el fin de explorar alternativas, pero éste no aceptó, lo que me obligó a considerar acciones más radicales.

El 22 de enero, mientras yo comenzaba una visita oficial a Francia y Suecia, para impulsar su apoyo al proceso de paz y a los programas sociales y ambientales en el país, el Ejército comenzó a mover las tropas en los alrededores de San Vicente del Caguán y hacia Florencia, hecho que fue magnificado por los medios de comunicación. Si bien el movimiento de tropas podía ser usual, el mensaje que propagaron los medios era de zozobra y fatalismo.

Como era de esperarse, en el país empezó a hablarse del "rompimiento del proceso", lo que me obligó a redactar un comunicado con el canciller, que estaba en Bogotá ejerciendo como ministro delegatario, indicando que no había ninguna orden de dar por terminada la Zona de Distensión y que el proceso continuaba, comunicado que fue leído por el alto comisionado. Esta aclaración no gustó a algunos en el interior de la Fuerza Pública, porque era una demostración de mando por parte mía y un llamado de atención para quienes creían que, generando hechos cumplidos, podían sabotear el proceso.

El 30 de enero cité a una reunión en mi despacho al ministro del Interior, Humberto de la Calle; al ministro de Justicia, Rómulo González; al canciller, Guillermo Fernández de Soto, y al alto comisionado, Camilo Gómez, en la que hicimos una evaluación sobre el proceso y los últimos acercamientos, y llegamos a la conclusión de hacerle a Marulanda una propuesta pública para que los dos nos reuniéramos nuevamente con el fin de definir el futuro del proceso, trabajando, además, sobre unas propuestas concretas.

Comencé a preparar una alocución por radio y televisión que se transmitiría esa misma noche, un día antes del vencimiento de la prórroga, in-

vitando a Marulanda a reunirse conmigo y a que le diéramos una nueva oportunidad a la paz.

Estaba ya casi lista, cuando nos sorprendió la noticia, a finales de la tarde, de que un guerrillero de las FARC había secuestrado un avión en San Vicente del Caguán, con el fin de desertar de la organización guerrillera, alegando que lo *"trataban muy mal"*, caso que no se resolvió sino hasta la noche, cuando el avión aterrizó en Bogotá y el guerrillero se entregó finalmente a las autoridades.

Como todo el país estaba concentrado en el secuestro de la aeronave, tomé la decisión de aplazar mi alocución y hacerla mejor a las 7 de la mañana del día siguiente, 31 de enero, una hora completamente insólita, pero necesaria, debido a la urgencia de la situación.

En esa intervención, que los colombianos siguieron sorprendidos desde sus mesas de desayuno, me referí fundamentalmente a la responsabilidad que Marulanda y yo teníamos frente al proceso de paz y le hice la propuesta de reunión ante todo el país:

"Manuel Marulanda ha dicho estar dispuesto a trabajar 24 horas por la paz. Hoy, por lo tanto, le propongo que nos reunamos antes de finalizar la presente semana y decidamos de una vez por todas si vamos a continuar el proceso de paz que iniciamos."

"Los colombianos no quieren que se generen más expectativas, ni más incertidumbres, ni más frustraciones."

"[...]"

"He decidido prorrogar la Zona de Distensión hasta finalizar la presente semana, con el único propósito de realizar la reunión que le estoy proponiendo a Marulanda, que confío nos servirá para definir con claridad si continuamos con el diálogo y la negociación. Naturalmente, tengo fe en que la conclusión a la que llegaremos será la de continuar y avanzar en el proceso de paz, y así prorrogar la Zona de Distensión, de forma tal que nos permita seguir con tranquilidad el proceso".

Quedaba claro que la prórroga de la zona por el término mínimo de cuatro días tenía como único fin abrir una posibilidad para que Marulanda y yo, personalmente, salváramos el proceso o lo termináramos, un escenario similar al que habíamos vivido el 2 de mayo de 1999.

El 2 de febrero, Manuel Marulanda, en carta leída por Alfonso Cano, respondió a mi invitación y dijo que accedía a la reunión, aunque planteó que ésta se llevara a cabo el 8 de febrero, es decir, cuatro días después del plazo otorgado, un término razonable que podíamos manejar y que terminamos por aceptar.

Para confirmar la reunión, Camilo viajó ese mismo día al Caguán y se encontró, en los llanos del Yarí, con Marulanda, Reyes, el Mono Jojoy y un grupo nutrido de guerrilleros. Marulanda le dijo que había visto con mucho

interés mi alocución y que estaba de acuerdo con la reunión, pero le insistió en que necesitaban de un tiempo hasta el 8 de febrero porque *"no se podían preparar las cosas de afán y al presidente había que recibirlo como corresponde"*. Finalmente, Camilo, después de hablar conmigo, le informó el visto bueno del Gobierno para esta nueva fecha.

Recuerdo que cuando el comisionado me llamó por el teléfono satelital para informarme del resultado de la reunión y del plazo pactado para el 8 de febrero, aproveché para preguntarle qué había sabido del Mono Jojoy, pues un general de la República, de forma irresponsable, había salido esa mañana a los medios de comunicación a decir que, en un operativo de unos días atrás, al parecer se había dado de baja al temido jefe militar de las FARC. Camilo me respondió:

—Yo creo, presidente, que al Mono Jojoy no lo dieron de baja sino de alta porque lo tengo sentado aquí a mi derecha. Muerto sí está... ¡pero muerto de la risa con esa información!

EL NUEVO CHOFER DEL COMISIONADO

Mientras el proceso continuaba, en medio de las dificultades descritas, yo no perdía de vista que muchas personas en Colombia y en el mundo mantenían la creencia de que la Zona de Distensión era una región en la que no había presencia del Gobierno ni de las autoridades civiles, en la que se había cedido la soberanía del Estado, lo cual no correspondía en absoluto en la realidad. Es más, si alguna vez hubo inversión social y presencia del Estado en los cinco municipios que conformaban la Zona, fue en los cuatro años de mi gobierno.

Pensando en esto, el jueves 1º de febrero, cuando aún no conocía la respuesta de las FARC a mi alocución, le había dicho a Camilo, mientras almorzábamos en la casa privada de Palacio:

—Hay que hacer algo más que la reunión con Marulanda, algo que sea contundente y, de paso, desmienta el malentendido que hay en el país y en el mundo sobre la Zona de Distensión y el supuesto menoscabo a la soberanía del Estado.

En esa misma conversación se me ocurrió la idea de realizar un viaje relámpago a la Zona, antes del encuentro con Marulanda, sin comentarle nada a las FARC. Camilo estuvo de acuerdo en que era una iniciativa arriesgada pero audaz, que valía la pena llevar a cabo.

—¿Está disponible su avioneta? —le pregunté.

—Sí, claro, presidente.

—¿Y dónde podríamos aterrizar?

—Sólo hay pistas en la Uribe, La Macarena y San Vicente. En Vista Hermosa y Mesetas no hay forma de aterrizar.

Le dije a Camilo:

—Listo. Organice el viaje para pasado mañana, el sábado 3 de febrero, y vamos también con el canciller y con el ministro De la Calle.

Las razones para invitarlos eran diversas. El canciller tenía que enfrentar cotidianamente preguntas de diplomáticos y en diversos foros internacionales sobre la Zona de Distensión y la aparente "entrega" de soberanía del Estado que muchos creían que implicaba. ¿Qué mejor para él que poder responder a estas inquietudes afirmando que él mismo había estado recorriéndola, sin escoltas ni operativos de seguridad, y nada menos que con el presidente de la República?

En el caso del ministro del Interior, me parecía muy importante su presencia por su papel de interlocutor del Gobierno en asuntos políticos y también para enfrentar, en el terreno, la incomodidad que hacia él manifestaban las FARC por haber sido ministro de Gobierno del presidente Gaviria cuando el bombardeo sobre Casa Verde, en 1990, y por la tarea humanitaria que acababa de cumplir para lograr que los paramilitares liberaran a los congresistas secuestrados.

Me volví a reunir con el comisionado esa misma noche en la biblioteca de la casa privada y afinamos los detalles del viaje, que estaba llamado a causar un fuerte impacto, pues se salía completamente del esquema que tanto la guerrilla como la opinión pública tenían sobre la Zona.

Al otro día, cité a almorzar a los dos ministros. Como parte de la conversación, les comenté que tenía la idea de ir con Camilo a visitar, como presidente, y sin previo aviso, los municipios de la Zona, pero no les adelanté que la visita sería también con ellos. Discutimos el impacto nacional e internacional de la misma, que ellos coincidieron en verlo como positivo, y dimos por terminado el almuerzo. Luego, esa misma noche, les pedí que estuvieran listos porque al otro día, temprano en la mañana, los iba a invitar a una gira, pero tampoco esta vez les especificué de qué se trataba.

El comisionado había hecho los preparativos mínimos, y con la máxima discreción, pues no queríamos que las FARC se enteraran anticipadamente, ya que la idea era demostrarle al país y al mundo que cuando el presidente de Colombia quería hacer presencia en la Zona de Distensión podía hacerlo. Se trataba de realizar un acto de soberanía. Camilo verificó únicamente que estuvieran todos los alcaldes de los tres municipios que íbamos a visitar y que su avioneta estuviera lista.

Como siempre, teníamos que sortear el problema de los medios de comunicación que estaban pendientes de todo movimiento del presidente y del comisionado. Por eso Camilo citó a una rueda de prensa a las 7 y 30 de la mañana del sábado 3 de febrero, sin mayor contenido, pero con el objetivo de reunir a todos los periodistas en Palacio para que, una vez terminada la conferencia, nosotros pudiéramos salir sin llamar la atención por el garaje de la casa privada.

Así fue. La rueda de prensa tuvo lugar y de inmediato salimos, junto con los dos ministros, a quienes acababa de revelar el destino del viaje, rumbo al hangar de la Policía, en el aeropuerto Eldorado, y de allí a la Zona de Distensión, comenzando por el municipio de la Uribe. Los dos ministros se veían un poco preocupados, especialmente De la Calle, que sabía de la mala predisposición de las FARC hacia él. Aparte de ellos y el comisionado, viajaban también mi jefe de Seguridad, el recién ascendido teniente coronel Royne Chaves, y el equipo de prensa, encabezado por el secretario de Prensa de la Presidencia, Samuel Salazar.

Previendo cualquier problema con la Fuerza Pública, le conté del viaje esa misma mañana al ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y le pedí que permaneciera en Palacio atento a cualquier cosa —junto con el ministro de Justicia, Rómulo González—, y que les avisara de mi viaje a los militares a cierta hora, sólo cuando nuestra avioneta ya estuviera volando sobre la Zona de Distensión.

Cuando aterrizamos en la Uribe, después de varias aproximaciones para espantar un ganado que estaba apostado en la pista, el primero en bajar de la avioneta fue el comisionado. Lo salieron a recibir el alcalde y algunos miembros de su gabinete, sin sospechar de mi presencia ni la de los ministros, y Camilo le dijo:

—Alcalde, le cuento que le traigo unos invitados más, a ver si nos invita a tomarnos un café.

No acababa de decir esto, cuando nos bajamos los ministros y yo, para inmensa sorpresa del alcalde, que no daba crédito a sus ojos y nos recibió con gran cordialidad.

Caminamos hacia la Alcaldía. Allí nos tomamos un café y después salimos a recorrer el municipio, para conocer algunas de las obras que se habían hecho durante mi gobierno y enseñarme otras en las que el alcalde esperaba que pudiéramos colaborar.

El primer lugar que visitamos fue el hospital. Estábamos recorriéndolo cuando, de un momento a otro, me encontré de frente con dos jóvenes guerrilleros fuertemente armados. La verdad, alcancé a sentir miedo pues no sabía qué estaban haciendo allí, pero me tranquilicé cuando percibí que estaban más asustados que yo. Ellos me saludaron respetuosos:

—Presidente, ¿cómo está?

Yo les respondí con unas pocas palabras y les di la mano, sin entablar conversación. Seguí mi recorrido y nunca más los volví a ver.

Cuando estábamos terminando la visita al hospital, se me acercó una mujer de cierta edad que me saludó muy efusivamente y me dijo que era la madre de un coronel de la Policía Nacional, a quien yo conocía. Le advertí que era mejor que no mencionara que era madre de un oficial de la Policía para evitar cualquier riesgo personal y, después de unas breves y afectuosas frases, nos despedimos.

Seguimos recorriendo las calles del municipio, recibiendo los saludos y el cariño de la gente, y terminamos visitando, en la sede del Instituto de Bienestar Familiar, una de las ludotecas —espacios infantiles para la recreación—, que Nohra impulsaba a lo largo y ancho del país. De regreso a la Alcaldía, el alcalde me pidió que le firmara su “libro de oro” y yo le escribí una frase de Gandhi que resume en pocas palabras mi convicción de vida: *“No hay caminos para la paz; la paz es el camino”*.

Regresamos a la avioneta caminando, escoltados por buena parte de la población, sin ningún tipo de dispositivo de seguridad, como no ocurría en mis desplazamientos a cualquier otra parte del país. Esto parecía paradójico, pues me encontraba en un territorio al que muchos pensaban que un presidente no podía ir sin poner en riesgo su integridad personal.

Despegamos, entonces, con destino a La Macarena, considerada como la base de actividades del Mono Jojoy. Llegamos al aeropuerto, que es un poco más grande que el de la Uribe, pues a éste sí llegan regularmente vuelos comerciales. Al igual que en el primer municipio, el alcalde estuvo totalmente sorprendido y la gente se aglomeró ante la noticia insólita de que el presidente de la República y dos de sus ministros estaban visitando la población, algo que no había ocurrido en toda su historia.

Nos desplazamos hacia la Alcaldía, donde se desarrolló un foro comunal con la presencia del alcalde, algunos concejales y miembros de la comunidad, quienes muy abiertamente me expusieron sus problemas. Una de las denuncias que más me llamó la atención, por el valor de los que la formularon, fue la que hicieron varios participantes respecto a que las FARC les estaban impidiendo desarrollar proselitismo político a los partidos tradicionales y que estaban amenazando y persiguiendo a los candidatos a la Alcaldía.

Precisamente, las elecciones de funcionarios locales, que tenían un desfase respecto al calendario de las del resto del país, se llevarían a cabo en pocas semanas. Me comprometí con ellos a tratar este tema con Marulanda en nuestra próxima reunión, para que se corrigiera la situación, cosa que efectivamente hice. Después nos desplazamos al puerto sobre el río y de ahí seguimos al hospital. Nuestro recorrido terminó en un café de la plaza principal donde nos tomamos un refresco al aire libre, rodeados por buena parte de la población.

De La Macarena volamos a San Vicente del Caguán. Cuando llegamos, ya los medios de comunicación habían informado a la opinión pública de nuestra presencia en la Zona, y estaban los comunicadores esperándonos en la pista. Al bajarme de la avioneta, en un gesto que me emocionó profundamente, los periodistas, de manera espontánea, emocionados al ver al jefe del Estado en la Zona de Distensión, aplaudieron por largo rato y algunos de ellos gritaron “¡Viva Colombia!”. Allí se improvisó una rueda de prensa, les comenté sobre mi recorrido por la Zona, los diálogos que había tenido con

las comunidades y, por último, me referí a la reunión que sostendríamos con Marulanda, que ya estaba acordada para el 8 de febrero.

Cumplido este encuentro, nos dirigimos hacia el Batallón Cazadores, sede del Gobierno Nacional en San Vicente del Caguán. Le dije a Camilo que yo quería conducir la camioneta en ese trayecto, pues me gusta manejar y, como presidente, se me presentaban, obviamente, muy pocas oportunidades para hacerlo. En el trayecto entre el aeropuerto y el Batallón Cazadores había un retén de la guerrilla. Al pasar por él, les pité y les dije adiós con la mano, y ellos también me saludaron.

Desde el Batallón nos fuimos directamente a la Alcaldía de San Vicente a saludar al alcalde. Nos reunimos en el Concejo Municipal con él, con algunos concejales y algunos miembros de la comunidad que fueron llegando. En esta conversación aproveché para comentarles sobre las cuantiosas inversiones en programas sociales y de infraestructura que estábamos haciendo en la Zona, y para recibir sus comentarios al respecto.

De allí salimos, caminando por las calles del pueblo, a visitar a monseñor Francisco Javier Múnera, vicario apostólico de San Vicente del Caguán, quien me hizo una entrevista en la emisora Ecos del Caguán para que se oyera en toda la Zona. Monseñor Múnera fue un hombre fundamental durante todo el proceso. Equilibrado, inteligente, consagrado y dedicado a servir a los más pobres, se ganó no sólo nuestro respeto y el de la población, sino también el de la guerrilla. Terminada la entrevista, nos fuimos a almorzar al Batallón Cazadores y en las horas de la tarde regresamos a Bogotá con la satisfacción del deber cumplido.

Había quedado demostrado que la Zona de Distensión no era una "tierra de nadie" como algunos creían, sino parte integral del Estado, con sus autoridades civiles funcionando y ejerciendo sus cargos, adonde el presidente y el Gobierno podían ir con la misma tranquilidad que a cualquier otro rincón del territorio nacional.

Pocos días después, Marulanda le dijo a Camilo:

—No me vuelvan a hacer esto de ir a la Zona sin comentarme, que me preocupa mucho la seguridad del presidente.

También le contó, divertido, que, en los reportes que tenían diariamente con los distintos grupos, el encargado de San Vicente le había mencionado que esa tarde había llamado al guerrillero de guardia en el puesto de observación cercano al Batallón Cazadores y le había preguntado si se había presentado alguna novedad. El guerrillero, que obviamente no me conocía, rindió este desprevenido y "completísimo" informe:

—Por aquí llegó el alto comisionado en las horas de la tarde, y la única novedad es que el doctor Camilo traía un nuevo chofer.

CAPÍTULO XXX

El Acuerdo de Los Pozos

Concluida mi visita sorpresa a la Zona de Distensión, el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, se quedó en San Vicente para sostener una reunión al día siguiente con Marulanda y su gente con el fin de coordinar lo necesario para la cita del 8 febrero.

Camilo me comentó que Alfonso Cano, miembro del Secretariado de las FARC, quien usualmente no asistía, se hizo presente en esa oportunidad. Supusimos que era un refuerzo que ellos llevaban para la reunión, ya que Raúl Reyes no se encontraba en la Zona. Días antes, Reyes le había dicho al comisionado que tenía que asistir a un bautizo y que regresaba unos días después: *"Éste es uno de los bautizos más largos que he conocido"*, me diría luego Camilo, porque Raúl Reyes sólo regresó a la Zona tres meses después.

El lunes 5 di instrucciones a mi secretario privado, Jorge Mario Eastman, para que, en compañía de Luis Fernando Ciales, quien era asesor del despacho del vicepresidente y nos venía acompañando desde hacía un tiempo en el tema de las FARC, continuara trabajando la estrategia diseñada para la reunión, dado que Camilo estaba en San Vicente. Eastman le pidió a los negociadores Juan Gabriel Uribe y Ramón de la Torre que prepararan un libreto con todos los escenarios posibles y con la estrategia que se adelantaría en cada eventualidad, el cual discutiríamos luego con un grupo más amplio, que incluyera a Camilo —una vez regresara—, al vicepresidente Gustavo Bell, al ministro del Interior Humberto de la Calle y al canceller Guillermo Fernández de Soto.

Durante los dos días siguientes nos reunimos con regularidad para discutir la estrategia que se seguiría durante mi próximo encuentro con Marulanda. En estos debates analizamos las posibles posiciones que asumiría Marulanda y discutimos todas las alternativas de respuesta de mi parte. Éste es un ejercicio práctico muy provechoso que llevábamos a cabo cada vez que teníamos que preparar reuniones delicadas como ésta. Gracias a él, es posible ponerse en los zapatos del otro y analizar de antemano sus posibles reacciones a los planteamientos del Gobierno, para tener siempre disponible una respuesta adecuada y efectiva.

El documento se fue perfeccionando hasta convertirse en un libreto coherente y completo del cual no debía apartarme en la conversación con las FARC. En el texto final definimos los objetivos generales que queríamos alcanzar en la reunión así como los mínimos que podíamos aceptar. Los principios rectores eran: primero, saber si Marulanda tenía voluntad real de continuar con el proceso; segundo, definir la forma de concretar esa voluntad en hechos específicos de paz que facilitarían el proceso y en reglas que garantizaran la fluidez de la negociación, y tercero, buscar fórmulas que nos permitieran disminuir la intensidad del conflicto.

Como mínimo, teníamos que lograr la reactivación de la Mesa con la consiguiente descongelación del proceso y acordar mecanismos y procedimientos de trabajo, como comisiones y cronogramas, para continuar avanzando. En otras palabras, se trataba de redireccionar el proceso hacia resultados concretos.

Otro propósito que teníamos era el de lograr que la Mesa fuera asesorada por terceras personas, como podían ser las Naciones Unidas. La idea era que este organismo internacional pudiera presentar borradores de acuerdo a la Mesa, los cuales, al ser redactados por un tercero calificado, superarían la prevención lógica de cada una de las partes frente a las propuestas presentadas por la otra. De hecho, el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Asistencia Internacional a Colombia, Jan Egeland, ya había planteado esta posibilidad.

Durante los días previos al encuentro sostuve reuniones con distintos grupos de representantes de la sociedad, entre ellos las centrales obreras, los gremios empresariales, la Iglesia, algunos representantes de la comunidad internacional y los enviados especiales de las Naciones Unidas, para conocer sus opiniones e ideas respecto al proceso de paz. También contacté telefónicamente a algunas personalidades internacionales para informarles mis impresiones sobre lo que sucedería y, en especial, para evitar que se presentara una situación de incertidumbre que pudiera afectar la confianza en el país.

El día anterior a la cita, 7 de febrero, el comisionado viajó de nuevo al Caguán, en compañía de mi jefe de seguridad, el coronel Chaves, para dejar listos los últimos detalles logísticos junto con Marulanda y sus hombres. Su misión era revisar la agenda y el mecanismo que íbamos a utilizar para que la reunión fuera productiva, así como todos los aspectos relacionados con mi seguridad.

Si bien este tema estaba a cargo de la propia guerrilla, dado que era una zona desmilitarizada y cuidada por ellos, se decidió que yo viajara acompañado por 20 hombres de la Policía Nacional, uniformados y bien armados, pertenecientes a mi cuerpo personal de seguridad. Yo sabía que 20 hombres no eran nada al lado de más de 2.000 guerrilleros que estaban en la Zona encargados de la seguridad de la reunión, pero consideré necesario man-

tener el símbolo de la guardia del presidente, acompañándolo, como una demostración de dignidad y soberanía.

A SOLAS CON MARULANDA

Personalmente, me interesaba que las gestiones de la inminente reunión fueran lo más efectivas posibles. En ese sentido, era consciente de que todos los esfuerzos realizados podían fructificar o irse a pique dependiendo de la interlocución que tuviera con el jefe de las FARC. Pensando en esto, llamé a Camilo a mi despacho, antes de que saliera hacia el Caguán y le di la siguiente instrucción:

—Camilo, usted tiene que lograr que Marulanda se reúna a solas conmigo. Esto es muy importante porque así voy a poder quitar de en medio la interferencia que los demás guerrilleros puedan tener, y vamos a lograr que el diálogo sea mucho más fluido, más directo y más franco.

El comisionado me dijo que iba a hacer todo lo posible pero vi en su cara la preocupación por el encargo, pues sabía que la estrategia de la guerrilla sería la de llevar a varios de sus hombres a la mesa, incluyendo a Alfonso Cano y Joaquín Gómez, evitando al máximo que Marulanda hablara y se comprometiera con nosotros.

Yo estaba seguro de que una conversación directa entre las dos cabezas visibles del proceso sería mucho más eficaz y, por eso, le insistí a Camilo sobre mi interés de hablar a solas con Marulanda. Además, previendo los inconvenientes y demoras que podían presentarse, le dije que llevara una muda de ropa por si fuera necesario pernoctar allá, pues yo no quería que la presión del tiempo afectara nuestro esfuerzo por salvar el proceso.

—Para esta reunión no existe el reloj. Voy a dedicarle todo el tiempo que sea necesario. No sólo el proceso, sino la paz y el futuro del país son los que están en juego.

De cualquier manera, también estaba decidido —y así se lo manifesté al Comisionado— a terminar el proceso si no encontraba en la guerrilla una voluntad real para avanzar.

—Usted sabe —le reiteré— que si hay que hacerlo hoy mismo, no me tiembla el pulso para tomar esa decisión. Tenemos nuestra conciencia tranquila de que hemos hecho todo y dado todo por la paz de Colombia. Haremos lo que sea necesario para salvar el proceso, pero mantengamos siempre presente que también tenemos la posibilidad de terminarlo.

Hacia las 10 de la noche, una vez concluida su reunión con la guerrilla, el comisionado se comunicó conmigo desde el Caguán. Me informó que, en términos generales, las cosas se desarrollaban según lo planeado, y que tan sólo el mal tiempo lo preocupaba por las dificultades que podríamos tener en el vuelo del helicóptero entre San Vicente y Los Pozos, donde se llevaría a cabo el encuentro. Me dijo también que ya le había mencionado a

Marulanda mi interés en reunirme a solas con él. El jefe guerrillero, desconcertado por la petición, no había reaccionado de la mejor manera y le había dicho que no veía la necesidad de hacer esa reunión a solas.

Esa noche casi no dormí pensando en el día de definiciones que se aproximaba, en su trascendencia para el país y en la aciaga posibilidad de que esa reunión a solas no se pudiera realizar, ya que eso cambiaría mi estrategia para concretar los temas. También me imaginaba que una preocupación similar rondaría la cabeza de Manuel Marulanda, quien estaría pensando en cómo enfrentar esa situación. Muy temprano en la mañana del 8 de febrero, hacia las 6, volví a comunicarme con Camilo para insistirle sobre este punto. Él sabía que tenía que jugársela toda para que la estrategia que habíamos diseñado funcionara, y así lo hizo.

Antes de tomar el helicóptero presidencial para desplazarme al aeropuerto donde tomaría el avión hacia San Vicente, me reuní con Nohra y con Valentina, y rezamos frente a una representación del Niño Jesús de Praga que teníamos en nuestra habitación, una imagen que fue la antecesora de la del Divino Niño del 20 de Julio que se venera en Bogotá, de la cual hemos sido siempre muy devotos. Le pedí que me acompañara y me guiara, y que me diera las fuerzas y el discernimiento necesarios para que la reunión fuera todo un éxito.

Nuevamente, como lo había hecho en los dos años anteriores, una vez como presidente electo y otra como presidente en ejercicio, volvería a meterme "en la boca del lobo". A pesar del riesgo de la situación, al igual que en las dos ocasiones previas, no tuve duda alguna de que debía afrontar el peligro, incluso dormir en la Zona si era necesario, con tal de salvar un proceso que podría llevar la paz a Colombia.

A las 7 de la mañana despegamos del aeropuerto en Bogotá rumbo a San Vicente del Caguán. La expectativa del país y de la comunidad internacional era inmensa. Durante los días que precedieron a la reunión, los medios de comunicación de todo el mundo habían realizado una cobertura impresionante sobre lo que podría pasar. Al lugar de la reunión se habían desplazado periodistas de todos los medios de comunicación nacionales y una importante cantidad de extranjeros, incluyendo uno de la China. Tanto a la salida de Bogotá como en el aeropuerto de San Vicente del Caguán, los comunicadores estaban cubriendo lo que sucedía minuto a minuto, en un contraste absoluto con mis anteriores visitas, en las que había viajado en forma totalmente discreta, algunas veces clandestina.

Me acompañaban en el avión presidencial el secretario privado, Jorge Mario Eastman; el secretario de Prensa, Samuel Salazar, y un equipo médico con todos los elementos necesarios para montar una sala de cirugía y atenderme en forma inmediata, en caso de cualquier atentado. También viajaba el jefe de la Casa Militar, el coronel Jairo Uribe, y una parte del equipo de seguridad. En San Vicente me estaba esperando el comisionado, en compañía

de mi jefe de Seguridad y de unos diez agentes más de policía, que estaban en la Zona desde la noche anterior.

Mientras el avión volaba hacia la Zona, Nohra, con un nutrido grupo de funcionarios de Palacio, y bajo la orientación de monseñor Arturo Franco, capellán de Palacio, dirigió una oración que fue replicada en muchos hogares del país. *"A Manuel Marulanda le pido que abra su corazón y entre todos hagamos la paz para Colombia"*. Con estas palabras inició la plegaria, que fue seguida por la oración de la paz de San Francisco de Asís y una sencilla liturgia que presidió monseñor Franco. Al igual que ellos, muchas otras personas, desde todos los rincones del país, rezaron esa mañana por que la paz no se escapara de nuestras esperanzas.

Una vez en el aeropuerto de San Vicente, y después de haber recibido los honores militares por parte del grupo de agentes de la Policía que me acompañaban, fui recibido por los guerrilleros Andrés París y Carlos Antonio Lozada, quienes habían sido comisionados para esperarme, y nos dirigimos a la sede del Gobierno, ubicada en el antiguo Batallón Cazadores.

Una intensa lluvia caía en la región, así que mi vuelo en helicóptero hacia Los Pozos se demoró más de lo previsto, tanto que llegamos a considerar la posibilidad de realizar el trayecto por tierra. Era un recorrido de cerca de una hora por una carretera que no presentaba condiciones confiables de seguridad, pero era nuestra única alternativa si el clima no mejoraba. Aunque tenía claro que el reloj no podía ser un factor de presión, la atención y la expectativa del país y del mundo entero sobre la reunión eran muy altas y no quería demorar el inicio.

El comisionado, entre tanto, mantenía comunicación constante con los guerrilleros que se encontraban en la sede de las negociaciones. Por vía telefónica y mediante el radioteléfono indagaba por el estado del tiempo y los tenía al tanto sobre la demora que teníamos. Supimos que Marulanda ya había llegado, junto con Sandra, su compañera, y los demás jefes guerrilleros. En los alrededores de la sede de la negociación, cerca de 2.000 miembros de las FARC habían sido dispuestos para garantizar la seguridad.

Los medios de comunicación, a su vez, tanto de radio como de televisión, transmitían en directo lo que sucedía en Los Pozos y en el Batallón Cazadores, así como los comentarios de los diferentes analistas sobre los posibles resultados de la reunión. Mientras esperábamos a que mejoraran las condiciones climáticas, aproveché para volver a repasar el libreto de negociación que habíamos acordado y me comuniqué con Palacio en donde se encontraban el canciller, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y los asesores en temas de paz. Ellos iban a permanecer allí como grupo de apoyo y de reacción ante cualquier circunstancia que pudiera surgir.

El comandante de las Fuerzas Militares y los demás miembros de la cúpula, así como el director de la Policía, tenían instrucciones de notificar al

canciller y al ministro del Interior sobre cualquier información de inteligencia que tuvieran, relacionada con la reunión que íbamos a celebrar.

Cuando ya estábamos a punto de salir por vía terrestre, el clima mejoró y despegamos, finalmente, en el helicóptero presidencial, hacia Los Pozos. Durante el vuelo seguí concentrado en repasar uno a uno los puntos de la ayuda de memoria que habíamos diseñado. Sobrevolamos Los Pozos y desde lo alto vimos la multitud de periodistas y curiosos que habían llegado hasta allí para ser testigos de la reunión más importante del proceso de paz. También era notoria la presencia de una gran cantidad de guerrilleros.

Aterrizamos en un potrero vecino a las instalaciones, donde nos esperaba Manuel Marulanda con sus hombres. Al encontrarnos nos saludamos, como siempre, de una manera amable pero distante, guardando siempre mi dignidad como jefe de Estado. La lluvia, que había amainado durante el vuelo, volvió a arreciar, y nos dirigimos a la sede de las negociaciones, llamada Villa Nueva Colombia, bajo un intenso aguacero. La compañera de Marulanda, Sandra, se acercó corriendo hacia mí y me pasó una especie de poncho de plástico verde para que me cubriera durante el recorrido. El jefe guerrillero caminaba a mi lado y nos tocó abrirnos paso entre una nube de periodistas que intentaba obtener fotos y tomas para la televisión.

Como dato curioso, en medio de esa multitud, y entre empujones, golpeé con mis zapatos un objeto metálico que me llamó la atención. Bajé la mirada y descubrí una herradura tirada en el camino, en medio de la tierra mojada. Yo, que creo en los agüeros, pensé que era un símbolo que traería muy buena suerte en ese momento crucial, así que me agaché a recogerla y la guardé en mi bolsillo. Un rato después, ante la inquietud de Manuel Marulanda sobre qué era lo que había recogido yo del suelo, le expliqué que había encontrado una herradura, símbolo reconocido de buena suerte.

Una vez llegamos a las instalaciones, hicimos un recorrido por las mismas, con Camilo y Marulanda, para que yo las conociera, pues era la primera vez que iba a Los Pozos. Marulanda me sirvió de guía con visible entusiasmo, pues él mismo había participado con algunas sugerencias para su diseño y construcción. Luego nos dirigimos hacia el lugar donde habitualmente estaba dispuesta la mesa de negociación, y nos dispusimos alrededor de una mesa en las mismas sillas plásticas que utilizaban los equipos negociadores. La inclemencia de la lluvia había disminuido y la humedad y el calor propios de la selva se hacían sentir con toda su fuerza.

Junto a mí se sentaron el comisionado y mi secretario privado, en el lugar que habíamos previsto para que quedáramos juntos y pudiéramos intercambiar nuestras opiniones. A mi izquierda se sentó Manuel Marulanda y a continuación lo hicieron Alfonso Cano, Joaquín Gómez y el Mono Jojoy. La guerrilla había dispuesto en la mesa unos cuantos trozos de bocadillo con queso de la región. Dada la expectativa de los medios de comunicación, autorizamos el ingreso de los fotógrafos y camarógrafos para que hicieran la

toma inicial de la reunión. Después de esto, Marulanda se levantó a buscar algo en su vehículo y de inmediato el comisionado, que no había dejado de pensar en el delicado encargo que le había encomendado, se levantó también.

Aprovechando el lapso en el que el jefe guerrillero se dirigía de nuevo hacia la mesa, Camilo se le acercó y le dijo que, antes de comenzar la reunión, era importante que se reuniera a solas conmigo para conversar. Marulanda no tuvo cómo negarse y, acompañado del comisionado, se dirigió hacia una sala contigua a esperarme.

Cuando Alfonso Cano, que estaba conversando conmigo, vio regresar a Camilo, propuso que iniciáramos la reunión de inmediato, pero éste hizo caso omiso a sus palabras y rápidamente me llevó a la oficina donde me esperaba Marulanda, dejándome a solas con él y cerrando la puerta para que nadie nos interrumpiera. Volvió a la mesa y les dijo a los demás participantes que Marulanda y yo íbamos a conversar a solas y que nadie debía molestarnos. A renglón seguido, con la satisfacción de haber podido cumplir la misión que tanto le había encomendado, se sentó con los demás jefes guerrilleros y empezó a conversar con ellos sobre cualquier tema mientras nosotros dos iniciábamos una conversación que se prolongaría por más de dos horas.

Una vez a solas, y después de unos pocos minutos de conversación informal para distensionar el momento, mientras tomaba un café que me ofreció Marulanda y que nos trajo Sandra, le dije:

—Manuel, vengo sin afanes. Tenemos todo el tiempo que sea necesario para que hablemos con calma. Usted y yo comenzamos este proceso y quiero saber si vamos a continuar con él. Las cosas, tal como están, no están marchando bien y el congelamiento ha hecho mucho daño al proceso, que ha perdido credibilidad ante la opinión pública, tanto nacional como internacional. La gente siente que el Gobierno ha dado todo y que ustedes no han respondido más que con ataques, violencia y ningún gesto concreto de paz. Por eso quiero hacerle una pregunta muy concreta: ¿Qué debo hacer para lograr la paz con usted?

Tenía una libreta de páginas amarillas y arranqué una hoja en blanco y se la pasé, mirándolo fijamente:

—Manuel, escriba en esta hoja: ¿qué tengo yo que hacer, como presidente de Colombia, para alcanzar la paz con usted?

Marulanda nunca escribió ni una sola letra sobre la hoja en blanco que tenía enfrente, pero la pregunta dio pie para que comenzáramos un diálogo más fluido y franco.

Yo continué con el desarrollo del libreto que habíamos preparado. Le dije que los hechos violentos que constantemente cometían las FARC se estaban traduciendo en una radicalización de la opinión en contra del proceso y que eso estaba cerrando todos los espacios políticos para avanzar por parte

del Gobierno. Le insistí en que la comunidad internacional tenía cada día más críticas sobre la forma en que las FARC estaban abordando el proceso y que el mundo condenaba los hechos de guerra que afectaban a la población civil, como el secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera, eléctrica y vial, así como a las pequeñas poblaciones con cilindros de gas. Le dije que ya llevábamos casi dos años de proceso pero que, en realidad, por los congelamientos constantes de las FARC, la negociación no superaba los seis meses, lo cual estaba siendo interpretado como una señal de que ellos no querían negociar.

Fui muy enfático en decirle que, si queríamos continuar, las FARC tenían que producir hechos de paz y que era muy importante encontrar mecanismos para reducir la intensidad del conflicto. Especialmente le recalqué que el secuestro era el más grande enemigo de la negociación y que se imponía que llegáramos a acuerdos concretos frente a este tema, que condujeran al fin de esta práctica inhumana.

También fui cuidadoso en recordarle que había avances positivos que no podíamos perder. Teníamos una mesa de negociación y una agenda que incorporaba los distintos temas que nos deberían guiar hacia la paz, además del mecanismo de las audiencias públicas y el Comité Temático, que había funcionado bien el año anterior. Le propuse que debíamos relanzar el proceso con el apoyo de los distintos sectores sociales ya representados en el Frente Común por la Paz y contra la Violencia, el Consejo Nacional de Paz y la comunidad internacional.

Volví sobre el tema de la necesidad de la participación de la comunidad internacional, mostrándole cómo ella podría financiar la elaboración de propuestas para la mesa e, incluso, asesores que guiaran a la guerrilla en la preparación de las mismas y de la propia negociación. Le manifesté que estaba de acuerdo en agilizar las discusiones sobre un "Acuerdo Humanitario" que posibilitara la liberación de los soldados secuestrados pero que también teníamos que avanzar en la discusión del "Acuerdo de Cese de Fuegos y Hostilidades" que había quedado suspendida por cuenta del congelamiento que ellos habían decretado. Para evitar nuevos problemas como el que vivíamos, le planteé que creáramos un mecanismo que abordara los problemas que se generaran respecto a la Zona de Distensión, sin afectar la mesa de negociaciones.

Fui muy claro en decirle que una nueva prórroga de la Zona no sería posible en medio del congelamiento, pues nadie en el país ni fuera de él la entendería bajo las actuales circunstancias. Por eso, la oportunidad que nos estábamos dando en esa reunión podía ser la última.

También le sugerí la posibilidad de que, en las discusiones de la agenda, comenzáramos a tratar temas distintos al económico, en especial al problema del empleo, pues en ese aspecto era imposible obtener logros en el corto plazo. Por el bien del proceso era mejor que entráramos a discutir otros

temas como la reforma política o el problema agrario, donde podríamos obtener resultados más rápidos y visibles. Le propuse, sobre todo, que avanzáramos en los temas que estaban afectando a la población civil, como el secuestro y los ataques de la guerrilla a las pequeñas poblaciones.

Tal como lo teníamos previsto, el jefe guerrillero, después de escuchar mis planteamientos, centró todas sus respuestas en las dificultades que, según ellos, ocasionaba el tema del paramilitarismo, en el cual se habían basado para justificar el congelamiento. Le expliqué que yo mismo era el primer interesado en combatir a estos grupos al margen de la ley, no porque la guerrilla lo pidiera, sino por mis propias convicciones. Para probarlo, le hice un recuento de todas las medidas que durante mi gobierno se habían tomado para combatir este fenómeno y de los buenos resultados obtenidos. Pese a todo, Marulanda insistía en el obstáculo y evadía los otros temas que yo le había planteado, volviendo siempre al asunto de los paramilitares.

Insistí, entonces, en el tema del secuestro, recordándole que era un crimen contra la sociedad colombiana que no podía justificarse de ninguna manera y que era urgente que se produjera la liberación de todos los secuestrados en el país. Le mencioné, como los más recientes ejemplos, los aberrantes secuestros de mi ex ministro y buen amigo Fernando Araújo y de la joven Juliana Villegas, hija del dirigente gremial Luis Carlos Villegas, que era uno de los más acérrimos defensores del proceso de paz y había participado, incluso, en el periplo del Gobierno y la guerrilla por varios países europeos, como un miembro destacado de la sociedad civil.

— No entiendo —le dije— que ustedes estén secuestrando a quienes se la han jugado por la paz.

Marulanda me respondió que no tenía la suficiente información sobre esos dos casos y entonces, aprovechando el espacio que abrió sobre el tema, llamé a Camilo para que le contara los detalles que conocíamos. Él, por su parte, llamó al Mono Jojoy y lo encargó para que se reuniera con el comisionado para tratar estos dos temas puntuales. Ellos salieron del salón y se apartaron de los demás negociadores para conversar.

Resultaba necesario determinar si las FARC admitían o no la autoría del secuestro de Fernando Araújo, pues en el caso de Juliana ya la habían aceptado. Aunque no hubo en esa oportunidad una aceptación expresa de su autoría, el Mono Jojoy prácticamente lo reconoció ante Camilo al decir que, si tenían a Araújo, era en aplicación de la "ley 003", en la que ellos se auto-adjudicaban una especie de jurisdicción de hecho para combatir la corrupción. Con esto, hacía referencia a una injusta vinculación que se había hecho al ex ministro a una investigación por presuntas irregularidades en torno a un desarrollo inmobiliario en la zona de Chambacú, en Cartagena. La investigación concluyó años después con la exoneración de Fernando, quien infortunadamente, cuando escribo estas líneas, sigue en manos de la guerrilla, más de cuatro años después de su secuestro.

Por ninguno de los dos secuestrados se estaba exigiendo rescate económico, lo que hacía más incierta su situación.

Al igual que yo lo hice con Marulanda, el comisionado le planteó al Mono Jojoy no sólo lo relacionado con estos casos, sino que intercedió por todos los secuestrados en el país, haciendo un análisis de los graves problemas que el secuestro traía para el proceso y para la participación de la comunidad internacional, que condenaba este delito contra la humanidad.

Jojoy, haciendo caso omiso de estos argumentos, se limitó a remitir a Camilo al guerrillero Iván Márquez, de quien le dijo estaba a cargo del tema del ex ministro Araújo, y, sin hacer una promesa concreta, dejó abierta la posibilidad de una solución en el caso de Juliana.

Entre tanto, Marulanda y yo habíamos seguido hablando en el salón reservado. Finalmente, después de más de dos horas de diálogo franco y abierto, él propuso que nos sentáramos en la mesa donde estaban los demás, para que almorzáramos y diéramos luego paso a la reunión formal en la que podríamos avanzar sobre los temas que habíamos discutido.

Antes de pasar a comer, cada uno se reunió un rato con su equipo para enterarlos sobre nuestra conversación.

LAS YUCAS DE JOJOY Y LA "FINQUITA" DE TIROFIJO

El almuerzo sirvió para tener un rato distensionado sin entrar en ningún punto concreto de conversación, pues en la reunión mía con Marulanda y en la de Camilo con Jojoy ya habíamos abordado la gran mayoría de los temas que nos interesaba plantear.

Marulanda, desde el día en que se acordó la reunión, había dicho que era muy importante prepararle un almuerzo adecuado al presidente, por lo que había encargado de su elaboración a un pintoresco personaje proveniente del Perú, que tenía un pequeño restaurante en Los Pozos, al que la guerrilla consideraba como el gran chef de la región.

Como era normal en la zona, uno de los ingredientes del almuerzo fue la yuca. Al verla, recordé que alguna vez Camilo me había contado que el Mono Jojoy le había regalado unas yucas cultivadas por él, las cuales habían resultado de excelente calidad. Le pregunté, entonces, a Jojoy si era cierto que tenía cultivos de yuca y si sus productos eran tan buenos como me habían dicho, a lo que el Mono me confirmó que sí tenía una plantación de yuca y que, en efecto, estaba muy orgulloso de su calidad.

—Mande por unas yucas para que el presidente pruebe lo que usted está cultivando —le dijo Marulanda—. Eso sí, que sea recién cogida para que no se vuelva negra.

Con este tema sobre la mesa, aproveché y le pregunté al Mono Jojoy si era cierto que, además de yuca, tenía cultivos de cachamas, unos peces que prosperan sobre todo en las zonas selváticas, a lo que me respondió afirma-

tivamente. Le pregunté si también tenía algún ganado, y me dijo que tenía unas vacas y unos novillos, ya que le gustaba mucho la ganadería.

—¿A eso es a lo que yo llamo "Desarrollo Alternativo"! —concluí, una vez acabó de enumerar sus múltiples "actividades agropecuarias".

La carcajada de todos los que estaban allí, incluidos los jefes guerrilleros, fue general, pues Jojoy había caído en el juego de palabras y terminó por servir él mismo de ejemplo sobre cuáles eran las alternativas viables para sustituir los cultivos de coca en regiones como esa.

Después de este episodio, Marulanda comenzó a hablar de las posibilidades agrícolas en esa zona y, en especial, en los Llanos del Yarí, y me pidió que le enviáramos expertos agrónomos para que estudiaran los cultivos que se podrían desarrollar. Éste era un tema recurrente en el jefe guerrillero, que había planteado ya en la Audiencia Internacional sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente, en junio del año anterior.

Camilo tomó nota y, al regresar a Bogotá, hizo los contactos pertinentes con las distintas entidades nacionales. Inclusive les planteó el tema luego a miembros del grupo de países amigos del proceso para que éste fuera uno de los mecanismos de asesoramiento y de vinculación de la comunidad internacional.

Pero hubo otra anécdota en el almuerzo que nos sirvió luego para tomarle el pelo a mi secretario privado, Jorge Mario Eastman, por un buen tiempo. En uno de esos momentos en que todos se quedan callados y el silencio se puede cortar con cuchillo, Jorge Mario, para distensionar el ambiente, decidió plantear un tema "amable" y, dirigiéndose a Marulanda, le preguntó:

—¿Usted no ha vuelto por su tierra, a Marquetalia?

La respuesta del jefe guerrillero fue negativa, pero Jorge Mario insistió:

—¿Y nunca ha pensado en lo bueno que sería poder tener una finquita allá, de 10 o 20 hectáreas, donde vivir tranquilo y sin afanes? ¿Una finquita donde tener unas vaquitas y unas cuantas mulas, para sacar cada tanto unos cuantos bultos de café?

Marulanda lo miró con los ojos entrecerrados y finalmente explotó enfurecido, para asombro de quienes estábamos en la mesa:

—¡Sí, claro! ¡Claro que me gustaría tener una finquita! ¡Pero no de unas cuantas hectáreas sino de 10.000 o 20.000! Y no para tener unas vaquitas, sino hatos de 5.000 o 10.000 reses. Y no para tener unas mulitas que carguen bulticos de café, sino tractomulas que transporten toneladas de café y otros productos. ¡Eso es lo que quisiera!

Todos quedamos estupefactos por la desproporcionada reacción de Marulanda, que habrá pensado, tal vez, que Jorge Mario se burlaba de él. Lo cierto es que Eastman quedó curado de esas intervenciones y no volvió, en adelante, a arriesgarse a salvar los silencios incómodos con comentarios inocentes.

REENCUENTRO CON "RICHARD PALMER"

Al terminar el almuerzo, Marulanda propuso una pausa y cada uno se dirigió a las oficinas que estaban dispuestas para reuniones individuales. El calor, que se acercaba a los 40 grados de temperatura, unido a un alto porcentaje de humedad, nos tenía a todos bastante agotados.

De camino hacia la oficina me encontré con el guerrillero Simón Trinidad, que hacía parte del equipo negociador de las FARC, a quien yo conocía personalmente desde muchos años antes de que entrara a la guerrilla.

Este guerrillero "singular" —que años después sería capturado en Ecuador y luego extraditado a los Estados Unidos— había sido un miembro destacado de la sociedad de Valledupar, de donde era oriundo; se había graduado como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y había perfeccionado sus estudios en el exterior; ocupó importantes cargos en Valledupar hasta llegar a ser el gerente de un banco en dicha ciudad, y se había casado con otra exitosa profesional, con quien tuvo dos hijos. Nada hacía presagiar, ni siquiera sus ideas de izquierda, propias de muchas personas de su generación, que, en 1987, este banquero iba a abandonar su ciudad, su trabajo, su familia y su pasado, para lanzarse a la ilegalidad y unirse a las FARC, donde terminó escalando una importante posición.

El verdadero nombre de Simón Trinidad era Ricardo Palmera, y yo lo había conocido cuando era apenas un estudiante universitario y —paradoja del destino— compartía apartamento con otros estudiantes de la costa, incluyendo a mi buen amigo Fernando Araújo, quien terminaría secuestrado por las FARC.

En el grupo de amigos, que acostumbrábamos a salir en las noches a divertirnos o tomarnos unos tragos después de los exámenes, participaba el mismo Ricardo Palmera, a quien todos llamábamos, de forma afectuosa, además porque era muy bien plantado y siempre estaba con las mejores pintas, "Richard Palmer". Es más, Ricardo era, en esa época, el único del grupo que tenía tarjeta de crédito, así que, cuando íbamos a comer o a una discoteca, por lo general era él quien pagaba y luego los demás le reembolsábamos nuestra parte en efectivo. Así pues, en la juventud habíamos tenido una relación próxima, de carácter social, como compañero que era de mis amigos costeños que estaban adelantando sus estudios en Bogotá.

Con el paso del tiempo, desde cuando regresó a su tierra habíamos seguido preguntando el uno por el otro, interesándonos por nuestros respectivos progresos, hasta que se dio el insólito suceso de su ingreso a la guerrilla.

Desde ese entonces, ésta era la primera oportunidad en que lo volvía a ver, estando ambos en orillas opuestas de la vida, enfrentados como enemigos: yo como presidente de la República y él como uno de los voceros y negociadores de las FARC.

Aprovechando la ocasión, pedí que lo mandaran llamar, y nos sentamos a hablar solos en una oficina.

El diálogo que tuvimos fue franco y personal, pues no podíamos desconocer la relación que alguna vez nos había unido. Lo primero que hice fue manifestarle que lo veía mal de salud, pues lo notaba pálido y con muy mal semblante, a lo que él me comentó que el clima de la Zona lo tenía afectado, pues era muy húmedo y malsano, y que él estaba acostumbrado al clima más saludable de la costa atlántica.

Le pregunté por su esposa, de quien se había separado hacía mucho tiempo, y por sus hijos, y él me confesó, con un tono amargo, que sus hijos, que vivían en Miami, tenían una relación muy distante con él. Fue un momento íntimo en que Trinidad me dejó ver su aspecto más humano, como el amigo que alguna vez fue, y me confió su angustia y su zozobra por su situación familiar. Yo, por mi parte, le insistí en que teníamos que seguir trabajando por la paz e impulsar el proceso para que algún día pudiéramos volver a reunirnos en una Colombia en armonía y no desagrada por la violencia.

Fue un encuentro breve, pero emotivo, pues encontré otra vez, en la figura adusta y pálida del guerrillero, algunos vestigios del joven y descomplicado estudiante a quien todavía recordaba, no por su alias revolucionario de Simón Trinidad, sino por su mote de amistad de "Richard Palmer".

"YO ME QUEDO A DORMIR"

Terminada mi reunión con Trinidad, tuve todavía un tiempo para revisar con mi equipo el desarrollo de la conversación de la mañana y la estrategia por seguir tan pronto reiniciáramos la reunión. La gran preocupación era que el tiempo avanzaba —ya eran cerca de las 2 y 30 de la tarde— y aún no lográbamos descongelar el proceso.

De regreso a la mesa de negociaciones, planteé la necesidad de comenzar a concretar los puntos que habíamos hablado con Manuel Marulanda. Ellos, sin embargo, siguieron insistiendo de forma monotemática en el tema paramilitar. El más porfiado era Alfonso Cano, quien, como suponíamos, había sido encargado de llevar el liderazgo en las discusiones de la mesa.

Cano, que no había participado antes en forma directa en las negociaciones, se caracterizaba por sus discursos largos y sus posiciones extremas, lo que dificultaba mucho el avance. Tuve entonces la confirmación de que, si no me hubiera reunido antes a solas con Marulanda, hubiera sido imposible plantear en la mesa todos los asuntos que tocamos en la mañana.

Pasado un tiempo, logramos identificar dos temas en los cuales coincidíamos: la importancia de avanzar en el acuerdo humanitario y la necesidad de crear un mecanismo para que la Mesa no se entrabara por circunstancias del conflicto.

Del resto, nosotros manteníamos la posición invariable de concretar el descongelamiento del proceso y de llegar a acuerdos que posibilitaran la disminución de la intensidad del conflicto, especialmente en lo relacionado con los ataques a las poblaciones utilizando cilindros de gas, y el secuestro. Era una posición fuerte y categórica, pues se trataba de temas que dolían y afectaban particularmente a la población del país y que entorpecían el proceso.

Por su parte, la guerrilla mantenía su queja de siempre frente al paramilitarismo, asegurando que, a su manera de ver, era un fenómeno impulsado por el Estado mismo y que, por lo tanto, el Estado era el que tenía la responsabilidad de acabar con él. Nunca quisieron ver que, en realidad, el fenómeno de los grupos ilegales de autodefensa tiene unas características mucho más complejas y que, en buena parte, la responsabilidad por la existencia de este tipo de grupos al margen de la ley le correspondía a ellos mismos, una idea cuyo solo planteamiento los sacaba de quicio.

En este punto del largo debate, Alfonso Cano propuso que les diéramos una hora en televisión, en tiempo triple-A, para que las FARC presentaran sus denuncias respecto al paramilitarismo, como una condición para descongelar el proceso, lo cual rechacé tajantemente. Para mí era claro que no podía someter a los miembros de las Fuerzas Armadas, que defendían a la población de los ataques y amenazas de los grupos al margen de la ley, al señalamiento indiscriminado y arbitrario por parte de la guerrilla, que podía acudir al expediente de las falsas denuncias para minar impunemente a su enemigo más visible, que eran las Fuerzas Militares. No obstante, los guerrilleros siguieron insistiendo en esa propuesta como la única salida para descongelar el proceso.

Habían pasado casi tres horas de ardua discusión, sin llegar todavía a un acuerdo general, y se acercaba la hora límite para que el avión que teníamos en San Vicente pudiera despegar hacia Bogotá, pues el aeropuerto no tiene operación nocturna. Tomé, entonces, la decisión de quedarme a dormir, por primera vez desde su creación, en la Zona de Distensión. Yo sabía muy bien que la suerte del proceso de paz estaba en juego y que seguramente la guerrilla quería sacar provecho de la presión del tiempo, cosa que no iba a permitir.

Le dije, entonces, a los guerrilleros que teníamos que ser más creativos y flexibles, y encontrar alternativas de solución a las diferencias que estaban planteadas, pues la oportunidad que nos estábamos dando era la última que teníamos.

—Ustedes tienen que pensar en lo que les hemos dicho para que de esta reunión salgan hechos concretos de paz. Como ya es tarde, yo me quedo a dormir en la Zona y mañana regreso a Los Pozos a primera hora para que me digan si podemos avanzar o no. Yo estoy en total disposición de encontrar alternativas, pero ustedes no quieren salir de un solo tema: el paramili-

tarismo. Por ver el árbol no están viendo el bosque, y así no vamos a lograr nada. Piénsenlo, méditenlo y mañana continuamos temprano.

Manuel Marulanda fue el primer extrañado con mi decisión. Su cara de sorpresa, y la de los demás guerrilleros, dejaba traslucir que no había contemplado la posibilidad de que el presidente de Colombia se quedara a dormir en una zona ubicada en medio de la selva, vigilada únicamente por guerrilleros, que llevaban 40 años combatiendo el establecimiento que representaba.

Dormir en el corazón de la Zona, rodeado y custodiado por los mismos enemigos, era, sin duda, una decisión audaz y con altos riesgos. La misma guerrilla no entendía cómo, después de tantos años de lucha, podía terminar cuidando el sueño de quien los combatía.

Ante la sorpresa que mostraban, yo simplemente continué y le dije a Marulanda:

—Dígame a qué horas comenzamos mañana.

Él, sin salir de su asombro, sólo atinó a contestar:

—Presidente, comencemos a las 9 de la mañana, porque esta noche tenemos que trabajar y nuestros campamentos están muy lejos.

Entonces el Mono Jojoy se levantó y me dijo, antes de marcharse:

—Presidente, me puso a trabajar. Me voy porque tengo que dar las órdenes necesarias para que a usted no le pase nada esta noche.

Antes de anunciar públicamente la decisión de quedarme, yo había llamado a Palacio para informar de esta determinación al equipo de ministros y asesores que se mantenía reunido en la Presidencia. También llamé a Nohra y le dije que esa noche no llegaría a dormir a la casa, y que no se preocupara, pues me iba a quedar en la sede del Gobierno en el Batallón Cazadores.

Ya eran más de las 5 de la tarde y empezaba a oscurecer. Teníamos que regresar a San Vicente antes de las 6 de la tarde. Salí hacia donde estaban los periodistas y, con el objetivo de transmitir un mensaje de tranquilidad al país y al exterior, di algunas declaraciones, con un optimismo moderado, sin generar tampoco demasiadas expectativas. Les dije que la reunión había sido productiva y que habíamos avanzado en varios temas. Sin embargo, lo que causó mayor revuelo fue el anuncio de que dormiría esa noche en la Zona, para continuar la reunión al otro día. De inmediato, la noticia dio la vuelta al mundo y, tanto los medios nacionales como las agencias internacionales generaron cables extraordinarios.

Aterrizamos en el Batallón Cazadores y, aún con algo de luz, me senté con Camilo y Jorge Mario en un quiosco al aire libre, para hablar con calma y hacer un balance de la reunión. Allí comenzamos a analizar los puntos en los que habíamos avanzado y también aquellos en los que no lográbamos un acuerdo con la guerrilla. Sin duda —y eso teníamos claro— el tema del paramilitarismo había que resolverlo de alguna forma para que la guerrilla encontrara una salida que le permitiera descongelar el proceso.

Hablamos, entonces, con los miembros del equipo de apoyo que teníamos en Bogotá, bajo la dirección del canciller Fernández de Soto, y surgió, al fin, la fórmula precisa para destrabar la discusión. Consistía en la creación de una comisión, compuesta por personalidades internacionales ajenas a la mesa, que propusiera fórmulas para superar y avanzar en los temas más complejos, en tanto la Mesa continuaba con las negociaciones sin interrupciones. Sería una comisión que tratara el tema del paramilitarismo, pero que no se limitara a éste, sino que también propusiera fórmulas que condujeran a una disminución de la intensidad del conflicto, incluyendo el secuestro y los ataques a las poblaciones.

Mientras en Palacio se discutía esta idea, decidimos comer y nos reunimos con el resto de la comitiva. Manteníamos comunicación permanente con Bogotá mediante el teléfono satelital. Para mi sorpresa, en medio de la comida, me llamó el presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien había oído la noticia de que yo iba a pernoctar en la Zona de Distensión y se encontraba muy preocupado.

—¿Qué hace usted, Andrés, durmiendo en medio de la selva, rodeado de guerrilleros? —me preguntó asombrado, a lo que yo le respondí que estaba trabajando por salvar el proceso y le aseguré que, por la paz, había que hacer lo que fuera necesario.

Él resaltó, con admiración, el valor que implicaba la decisión de quedarme en la Zona, y me manifestó todo su apoyo. En un momento tan difícil, agradecí de corazón su llamada, que simbolizaba, de alguna manera, la preocupación y el respaldo de la comunidad internacional frente a nuestro esfuerzo por no dejar morir el proceso de paz.

Ya con la alternativa de la comisión en la mano, y cerca de la medianoche, nos retiramos a descansar, sabiendo que al día siguiente la jornada comenzaría muy temprano. Durante buena parte de la noche estuve pensando en cuál podía ser la reacción de la guerrilla a nuestra propuesta pues estaba seguro de que, si no llegábamos a un acuerdo, el proceso estaba terminado. No quedaba más tiempo y esa era mi decisión. No podía continuar el proceso si la guerrilla no aceptaba la nueva alternativa, ya que la suya, del programa de televisión, resultaba inaceptable desde cualquier punto de vista.

Yo ya había hecho todo lo posible, incluyendo dormir en medio de los enemigos. La suerte estaba echada y el día que estaba por comenzar sería el definitivo.

UN NUEVO AIRE PARA LA PAZ

A las 6 de la mañana nos levantamos para confirmar por radioteléfono la hora de la reunión y las condiciones climáticas. Desayunamos muy frugalmente, revisamos la prensa por Internet y nos alistamos para iniciar la reunión más importante dentro del proceso. Si bien le apostábamos a la

paz, sabíamos que ese día podían llegar a su fin los esfuerzos de más de dos años.

Con un auspicioso buen clima, despegamos a la hora prevista y a las 9 de la mañana estábamos de nuevo aterrizando en Los Pozos, cumpliendo con nuestra cita. Sin mayor dilación, nos dirigimos a la mesa de negociación e iniciamos las discusiones.

La reunión comenzó un poco más tensa que la del día anterior. Ellos sabían, al igual que nosotros, que ya no había mucho más que discutir y que, si no encontrábamos la fórmula para destrabar el proceso, éste terminaría ahí. Tal vez la guerrilla creyó alguna vez que para el Gobierno era indispensable mantener el proceso a toda costa pero a estas alturas ya sabían, por mi actitud resuelta en la última reunión, que yo estaba dispuesto a terminar el proceso en el momento en que lo juzgara necesario.

Antes que nada, como una estrategia de negociación, hice ante la mesa una recopilación de los puntos en los que teníamos coincidencias para demostrarle a las FARC que en buena parte de los temas planteados podíamos llegar muy fácilmente a un acuerdo. Los puntos en que discrepábamos se referían fundamentalmente a los paramilitares, por parte de ellos, y al secuestro y las acciones violentas contra la población civil, por la nuestra.

Partiendo de este diagnóstico, les presenté la fórmula en la que combinaba su interés con los nuestros. Les propuse que, en lugar de la intervención en televisión que ellos habían planteado, pidiéramos a un grupo de personajes internacionales que presentaran recomendaciones puntuales para superar los tres temas que más dificultaban el avance de las negociaciones: lucha contra el paramilitarismo, terminación del secuestro y disminución de la intensidad del conflicto armado. Esto nos permitiría destrabar el proceso y, además, vincular directamente a la comunidad internacional, generando hechos de paz concretos como los que exigía el pueblo colombiano.

En un principio, la fórmula les pareció aceptable pero objetaron el hecho de que la comisión la conformáramos con personalidades del exterior, lo cual era de esperarse, teniendo en cuenta su constante reticencia a vincular la comunidad internacional al proceso. Trajeron a cuento su eterno argumento de que las dificultades del país las resolvíamos entre los mismos colombianos. La discusión se centró en este aspecto, hasta que aceptamos que los miembros de la comisión no fueran de la comunidad internacional sino que pertenecieran al ámbito nacional, lo cual no afectaba para nada el fondo de la propuesta. Así nació, finalmente, la llamada "Comisión de los Notables", a la que le encargáramos la elaboración del documento que más tarde se convertiría en la hoja de ruta del proceso.

Se discutió también si el documento resultante de la comisión tendría un carácter obligatorio para la mesa o si serían tan sólo recomendaciones. La guerrilla, por precaución y en parte por temor, se opuso a que las conclu-

siones de la comisión fueran obligatorias, diciendo que el proceso se realizaba entre el Gobierno y la guerrilla y no con terceros. Finalmente, se acordó que las conclusiones, sobre los paramilitares, la disminución del conflicto y el secuestro se recibirían como recomendaciones.

Lo más importante fue que logramos, con esta fórmula, una salida para que la guerrilla descongelara el proceso y, sobre todo, que ésta aceptara tratar los temas de la disminución del conflicto y del secuestro, que siempre había estado reacia a tocar. En cuanto al fenómeno paramilitar, si bien se puso el tema por insistencia de la guerrilla, éste era un factor de violencia que mi gobierno venía combatiendo, por convicción, desde el primer día, por lo que teníamos la mejor disposición para recibir sugerencias y fórmulas para optimizar esta lucha.

Abordamos también en la reunión el tema de la sustitución de cultivos y la erradicación de cultivos ilícitos. Después de la broma que le había hecho al Mono Jojoy sobre el "desarrollo alternativo", el asunto había quedado planteado. De tiempo atrás se venía hablando de la posibilidad de avanzar conjuntamente en proyectos de erradicación de cultivos ilícitos en la Zona de Distensión, pero las FARC siempre insistían en desarrollar un proyecto piloto en Cartagena del Chairá, un municipio vecino a la Zona, algo que nunca aceptamos porque equivaldría, de alguna manera, a una ampliación territorial de la misma y, además, porque la confusión de nombres podría afectar el turismo hacia nuestra caribeña Cartagena de Indias. Por nuestra parte, habíamos hecho un proyecto piloto con Naciones Unidas en la vereda de La Cristalina y también habíamos realizado el año anterior la audiencia internacional sobre cultivos ilícitos.

Les insistí mucho en que, si pretendían desligarse de las acusaciones que recaían sobre ellos por su vinculación al narcotráfico, tenían que tomar una posición más activa en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo. Lamentablemente nunca lo hicieron. El narcotráfico, de hecho, ya estaba carcomiendo todas las estructuras de las FARC. En el acuerdo final, la guerrilla sólo aceptó mencionar que no se oponía a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos, aclarando que estos procesos debían hacerse de común acuerdo con las comunidades y preservando el medio ambiente.

Sin entrar a definir todos los detalles, y dado que ya avanzaba la mañana, le sugerí a Marulanda que le pidiéramos a Camilo Gómez y a Alfonso Cano que resumieran lo que habíamos discutido y lo pusieran en blanco y negro en un documento. En ese momento la guerrilla ya había aceptado la gran mayoría de los puntos que yo había planteado y solamente habían adicionado de su propia cosecha el tema del paramilitarismo.

Camilo y Cano se retiraron al salón principal de la sede, computador en mano, para comenzar la redacción de un acuerdo que llevaría al descongelamiento del proceso. Cano aceptó, aunque no de muy buena gana:

—Llevo tantos años combatiendo el sistema ¡y ahora acabo redactando comunicados defendiendo lo que tanto he combatido!

Mientras se preparaba el documento, permanecí en la mesa con Marulanda, y al rato se nos unió el Mono Jojoy. Por invitación del jefe guerrillero —y a pesar de que eran apenas las 11 de la mañana— nos trajeron bocadillo con queso ¡y un trago de vodka!

Ya no había temas de fondo que tratar y preferí preguntarle sobre los orígenes del movimiento guerrillero según su perspectiva y sobre los motivos que lo habían llevado a pasar de ser un jefe político liberal para convertirse en un jefe guerrillero. Él me contó que se había amnistiado, junto con otros miembros del llamado "bandolerismo" liberal, a finales de los años cincuenta, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, pero que el Congreso había revocado luego esa amnistía y los volvieron a perseguir, por lo que él y algunos compañeros no habían tenido otro remedio que "*echar p'al monte*". Ahí comenzó toda una historia de desconfianzas y suspicacias que ha alimentado, por décadas, el resentimiento de Marulanda y las FARC contra el establecimiento colombiano.

Yo tenía pendiente darle al jefe guerrillero un encargo que con seguridad no esperaba, y decidí entregárselo ahora que ya estábamos más relajados. Se trataba de una medalla que le enviaba el papa Juan Pablo II, la cual había hecho llegar a través de nuestro embajador en el Vaticano.

—Aquí le manda el Santo Padre esta medalla —le dije—. Él, que es un hombre de paz, también está rezando por la paz de Colombia.

Marulanda, con una emoción contenida, la agradeció, se puso las gafas y la examinó con mucho detenimiento.

Por mi parte, respiraba tranquilo pues sabía que el proceso se había salvado. Habíamos pasado una prueba importante y lo que faltaba era más un asunto de carpintería que una discusión de fondo. Habíamos logrado un acuerdo en el que la gran mayoría de los puntos propuestos por el Gobierno habían sido aceptados y, sobre todo, habíamos obtenido de la guerrilla un compromiso de avanzar en aspectos mucho más concretos del proceso, como lo eran la disminución del conflicto y el secuestro, a través de las recomendaciones que nos hiciera la Comisión que decidimos crear. Como un importante avance adicional, habíamos conseguido que la guerrilla aceptara una vinculación mayor de la comunidad internacional, gracias a lo cual acordamos la invitación a un grupo de países amigos y organismos internacionales para informarles sobre el proceso e incentivar su colaboración.

Mientras tanto, el trabajo que tuvo el comisionado para la redacción del documento final no resultó nada sencillo. A Camilo le correspondió capotear las teorías y objeciones de Cano para lograr, a pesar de ellas, un texto concreto y conforme a lo que habíamos hablado. Después de más de una hora, regresaron a la mesa con un borrador que discutimos y que, después de algunos cambios, se convirtió en el "Acuerdo de Los Pozos".

La mayoría de los puntos que yo había planteado en mi alocución por televisión del 31 de enero, cuando invité a Marulanda a encontrarnos personalmente, quedaron incluidos en el acuerdo. El proceso se descongelaba, y lo hacía bajo nuevos y positivos parámetros: la comunidad internacional se vincularía; los temas de la disminución del conflicto y la terminación del secuestro quedaban sobre la mesa; se conformaría una comisión de personalidades que hiciera recomendaciones a la Mesa sobre estos dos temas y sobre el fenómeno del paramilitarismo; continuaríamos avanzando en el tema del cese de fuegos y hostilidades, y también en la discusión de un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de soldados y policías secuestrados, y crearíamos mecanismos para que los problemas de la Zona de Distensión u otros que afectaran la marcha del proceso se discutieran por fuera de la mesa de negociación, sin interrumpirla.

La estrategia que inicialmente habíamos diseñado había tenido éxito y los principales objetivos que nos habíamos fijado estaban cumplidos. Se había salvado el proceso y entrábamos, al fin, a una etapa totalmente diferente que significaba un nuevo aire para la paz de Colombia.

Tan pronto estuvo listo y revisado el acuerdo, definimos firmarlo Marulanda y yo frente a los medios de comunicación que estaban a la expectativa de los resultados de la reunión.

Una gran cantidad de periodistas se encontraban agolpados en el auditorio de la sede de las negociaciones a la espera de nuestro pronunciamiento. Hacia allí nos dirigimos a hacer público el acuerdo y, sobre todo, a anunciarle al país y al mundo que el proceso de paz en Colombia tendría una nueva oportunidad y que habíamos trazado una nueva ruta para continuar.

La rueda de prensa fue larga y tanto Manuel Marulanda como yo fuimos "bombardeados" por una gran cantidad de preguntas sobre el acuerdo que se firmó y sobre el futuro del proceso. Muchas veces, incluso, el mismo Marulanda, enfrentado a complejas explicaciones, me pasaba la pregunta a mí para que yo la contestara o complementara.

Finalmente, llegó el momento de emprender el regreso a Bogotá, con la satisfacción de la misión cumplida. Me despedí de Marulanda y de los demás jefes guerrilleros con la tranquilidad de que el proceso continuaba y de que se habían logrado unos excelentes resultados que serían las bases para los futuros desarrollos en materia de paz.

Posiblemente, algunos colombianos esperaban que de esta reunión surgiera el fin de la guerra, pero la paz, infortunadamente, no se hace de un día para otro. Éste era un paso más, uno fundamental, en el camino hacia ella. Aquí comenzaba una nueva etapa que debía conducirnos hacia la disminución efectiva de la confrontación mediante una solución política negociada.

Al regreso a la Casa de Nariño, fuimos recibidos con entusiasmo por todo el equipo de apoyo que se encontraba reunido en la oficina del secreta-

rio general de la Presidencia. Esa noche, después de abrazar a Nohra y a mis hijos, cuando ya me disponía a descansar del largo día, me dirigí otra vez a la imagen del Niño Jesús, frente a la que me había arrodillado en la madrugada del día anterior, y recé una oración, agradecido por haberme permitido alcanzar una nueva oportunidad para la paz.

CAPÍTULO XXXI

Encuentros y desencuentros con el ELN

Volvamos a la orilla del ELN. En diciembre del 2000, como ya quedó visto, se había llegado al Acuerdo de La Habana en el cual se definió el reglamento para la posible Zona de Encuentro en el sur de Bolívar y se sentaron las bases para poder iniciar el proceso en firme. Este reglamento, muy completo en todos sus aspectos, contenía también una serie de elementos que debían ser desarrollados para lograr una adecuada implementación de la Zona.

Era necesario complementar el reglamento con unos acuerdos adicionales para que fuese operativo y, sobre todo, debíamos conciliarlo y difundirlo con las comunidades de la región, parte de las cuales siempre se habían opuesto a su establecimiento.

No era un secreto que buena parte de la oposición a la constitución de la Zona estaba impulsada por los grupos de paramilitares que operaban allí, los cuales se habían dedicado a promover movimientos para que la comunidad realizara toda suerte de manifestaciones en contra. Tampoco podíamos desconocer que una parte de las protestas tenía un asidero real, generado por los fundados temores de los pobladores, que no olvidaban los abusos que el ELN había cometido por años en la región.

También resultaba claro que en esa área el ELN no contaba con un apoyo popular importante y, muchísimo menos, con el dominio territorial o político que muchas veces argumentaban tener. De otra parte, la influencia y la presencia de los grupos de paramilitares —AUC— venía en aumento desde hacía algunos años. Esta presencia y la influencia de estos grupos ilegales estaban directamente vinculadas a los cultivos de coca que se incrementaban cada vez más en esta región, enclavada en el centro del país.

Las cifras sobre el crecimiento de los cultivos de coca eran impactantes y en el área prácticamente ya no se cultivaban productos diferentes a la hoja de coca. Esta actividad venía creciendo gracias a las acciones de las FARC en la zona sur de la Serranía de San Lucas, que se dedicaban a fomentar y proteger los cultivos, y por la acción de las AUC que, en la zona norte de la serranía y en los alrededores de una pequeña población llamada San Blas, también estimulaban los cultivos, llegando incluso a financiar a los campesinos que

la sembraban. Además, las AUC ejercían un fuerte control sobre los insumos y los laboratorios para su procesamiento. En el caso del ELN, este grupo tenía menos vinculación con el tema aunque, de todas formas, toleraba y protegía a quienes la cultivaban y a quienes procesaban la pasta de coca.

La región tenía una posición estratégicamente conveniente para el desarrollo de este tipo de actividades pues contaba con el río Magdalena como una de las principales vías para el ingreso de los insumos y la salida de la cocaína y, además, allí operaban los más grandes carteles que robaban gasolina del oleoducto principal, con lo que uno de los insumos básicos para la producción del alcaloide estaba prácticamente asegurado.

En los diferentes análisis que realizamos sobre el problema de la comunidad aparecía siempre el elemento de las autodefensas de por medio. Como hecho curioso, de manera insistente, varios líderes de las protestas muchas veces le dijeron al comisionado que la forma más rápida para llegar a una solución estaba en la realización de conversaciones con las AUC. Para nadie era un secreto que algunos de estos líderes mantenían contactos con los miembros de las AUC, que por su intermedio intentaban enviarle mensajes al Gobierno.

El año 2001 empezó, así, cargado de actividades en el proceso de acercamientos con el ELN. A partir del 5 de enero, una vez terminadas las rondas de negociación en La Habana y con el nuevo aire al proceso que dio la liberación de 42 soldados, policías y agentes el 23 de diciembre de 2000, el alto comisionado, Camilo Gómez; el ministro del Interior, Humberto de la Calle, y el viceministro del Interior, Mauricio González, a quienes había encomendado la misión de adelantar los contactos con las comunidades, sostuvieron varias reuniones con gremios de la región y con las comunidades de la zona para explicarles lo acordado en La Habana. Eran reuniones muy difíciles donde muchas veces la agresividad de algunos asistentes en contra de los funcionarios del Gobierno impedía que se escucharan los planteamientos de otros miembros de la sociedad y, por supuesto, del mismo Gobierno.

De manera simultánea, el comisionado continuaba sus contactos directos con el ELN y se reunía con Pablo Beltrán y Óscar Santos en las selvas de la Serranía de San Lucas. Una de estas reuniones tuvo lugar el 26 de enero, en compañía de los directores de los principales medios de comunicación, con la presencia de Gabino, el máximo comandante del ELN, que acababa de regresar de Cuba.

En este encuentro, ambas partes buscaron darle a conocer de manera directa a los medios de comunicación el trabajo realizado en La Habana unas semanas atrás. Se trataba de lograr un mayor nivel de sensibilización sobre el trabajo que se estaba desarrollando, pues muchas veces los bajos niveles de información, y algunos mayores de desinformación, generaban en la opinión pública percepciones equivocadas frente a la realidad del proceso. Allí se expusieron por primera vez el reglamento de la Zona y las características del proceso que habían sido acordados en La Habana.

La divulgación del posible reglamento de la Zona de Encuentro generó una fuerte reacción de los sectores que se oponían a la misma, quienes, de inmediato, iniciaron acciones tendientes a realizar bloqueos en las vías de la región. Incluso, los alcaldes de Cantagallo y San Pablo, los dos municipios que quedarían finalmente involucrados en la Zona (pues ya se había descartado el municipio antioqueño de Yondó), hicieron llamamientos a la población para que acudiera a las vías de hecho. El Gobierno había sido claro en que no decretaría la Zona hasta tanto no se diera un amplio diálogo con los pobladores de la misma pero esta llamada a las vías de hecho y la desobediencia civil implicaba un desconocimiento del acuerdo y un cambio radical en las circunstancias.

El 15 de febrero, algunos grupos de habitantes de la Zona que se oponían al despeje para el ELN, armados con palos y utilizando grupos de niños como escudos humanos, bloquearon las carreteras que comunican a Bogotá con la costa caribe y a Barrancabermeja con Bucaramanga. Esto generó un complejo problema de orden público y una fuerte presión económica, pues con los bloqueos se impedía el transporte de mercancías y alimentos provenientes de la costa y se obstaculizaba el transporte de combustible desde la refinería de Barrancabermeja.

Si bien es cierto que, en La Habana, el ELN insistió en que los textos acordados fueran firmados formalmente por las partes, el Gobierno siempre consideró que era necesario culminar antes el proceso de diálogo y participación iniciado con las comunidades del sur de Bolívar, cuya oposición a la Zona había quedado patente desde principios del año 2000. Siempre quisimos cumplir el compromiso del 1º de junio de dicho año de no decretar la creación de la Zona de Encuentro hasta tanto no se llevara a cabo un "proceso de diálogo y participación con los representantes de las comunidades". Sin embargo, dicha concertación se rompió por la decisión de las comunidades de acudir a las vías de hecho.

Mientras tanto, el ELN manifestaba públicamente que el proceso estaba dando frutos y que se encontraban a las puertas del inicio de un diálogo con la sociedad y con el Estado. Esto nos generaba un dilema complicado, pues de una parte teníamos los reclamos por los mecanismos para el inicio del proceso y, por la otra, se percibían con fuerza las posibilidades de avanzar de manera concreta con la guerrilla, en beneficio de todo el país.

El bloqueo de las vías seguía sin aparente solución. Finalmente, gracias al trabajo de inteligencia de la Policía y del Ejército, se logró comprobar que en medio de los manifestantes se encontraba una importante cantidad de hombres armados, muchos de ellos pertenecientes a grupos de paramilitares, lo cual denunciábamos apenas tuvimos certeza de ello.

Como era de esperarse, tan pronto se hizo pública la denuncia sobre la incidencia de las Autodefensas en los bloqueos, junto con la presencia de hombres armados en dichas marchas, que además usaban a niños y mujeres

como escudos para esconderse, los manifestantes empezaron a disminuir su presión y a los pocos días los bloqueos fueron levantados. No puedo desconocer que otra de las medidas que resultó de gran importancia para el levantamiento del bloqueo fue la decisión de fumigar los cultivos de coca en la zona norte de la región. Allí estaban los cultivos fomentados por los paramilitares y de allí había venido una buena parte de los manifestantes.

LA OPERACIÓN BOLÍVAR

Simultáneamente a estos hechos, habíamos iniciado el 5 de febrero una operación militar de gran envergadura en toda la zona del Magdalena Medio, en especial en la región comprendida entre Yondó y Santa Rosa. La Operación Bolívar, como se le denominó, fue diseñada para enfrentar la presencia paramilitar en la zona y buscaba atacar a todos los grupos armados al margen de la ley que operaban en el área, vale decir, a las FARC, el ELN y los paramilitares.

En el diseño de esta operación participó el mismo general Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, quien muchos años atrás había estado al mando de las tropas de la región y la conocía bastante bien. El general Martín Orlando Carreño, como comandante de las tropas en la zona, fue el encargado de comandar esta operación¹⁹. De manera paralela, la Policía inició una fuerte acción de fumigación de cultivos de coca, actividad que desde hacía mucho tiempo no se realizaba en dicha zona. El aeropuerto de Barrancabermeja se convirtió en un centro de operaciones militares y policiales de gran importancia, pues cientos de soldados fueron transportados a esta ciudad y desde allí desplazados al área de operaciones.

En la Operación Bolívar logramos combinar las acciones de la Policía en cuanto a la fumigación de cultivos, las acciones del Ejército en cuanto a los ataques a los grupos ilegales, y las acciones de la Armada y la Fuerza Aérea en apoyo de los dos. Los resultados no se hicieron esperar. En sólo unos pocos días, la Policía fumigó más de 10.000 hectáreas de plantaciones de coca y el Ejército avanzó en diferentes frentes de combate, ingresando a zonas donde usualmente estaban las FARC o los grupos de autodefensa.

El ELN decidió replegarse hacia la parte alta de la cordillera pues ellos mismos habían insistido en que era necesario realizar una operación en contra de los paramilitares. No dejaba de ser curioso que la misma guerrilla solicitara la realización de una operación militar en la región donde permanecía. Sin embargo, lo curioso tocó el límite de lo insólito cuando el ELN llegó al extremo de ofrecer su ayuda para realizar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas contra los paramilitares. Como resulta obvio, dicha

¹⁹ El general Martín Orlando Carreño fue luego designado comandante del Ejército por el presidente Uribe y ocupó este cargo entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004.

propuesta era absolutamente inaceptable y fue rechazada de plano por el comisionado.

La Operación Bolívar duró varios días, durante los cuales se destruyeron campamentos guerrilleros y se capturó a gran cantidad de hombres de ambos grupos. Tal como había ordenado, la operación se realizó en contra de todos los grupos guerrilleros y de paramilitares que operaban en la zona, sin distinción. Eso creó varios problemas entre ellos mismos, pues las FARC culparon al ELN de incitar la operación, y los campesinos cultivadores de coca se enfurecieron con los organizadores de las marchas al considerar que ellos habían sido la causa de las fumigaciones que los estaban afectando.

Aparte de los resultados usuales de una operación del tamaño de ésta, uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de unas impresionantes fortificaciones que las Autodefensas habían construido alrededor de un pequeño caserío llamado San Blas, ubicado al norte del municipio de Santa Rosa. En las pequeñas montañas que se encontraban a su alrededor, los paramilitares habían levantado torres de vigilancia con potentísimos reflectores para controlar cualquier movimiento nocturno en el área. También contaban con trincheras enormes en los alrededores, torres para disparar armas de largo alcance y dos potentes antenas para comunicaciones.

Cuando el Ejército ocupó estas instalaciones, consideradas como los principales cuarteles de las Autodefensas en toda la zona, decidí ir personalmente hasta el lugar. Allí no había estado jamás un presidente y quince días antes era impensable que una autoridad pudiera poner un pie. El 15 de febrero llegué a San Blas y lo primero que me impactó fue la pobreza en que se encontraba el pequeño caserío, en buena parte derivada del control paramilitar y los sembrados de coca. No vi matas de plátano ni árboles de frutas; no encontré una sola res ni una sola gallina; sólo se veían hojas de coca y pobreza.

En medio de un calor infernal, de más de 40 grados, recorrí con la cúpula militar y con el comisionado las polvorientas calles hasta un pequeño entejado en el que, con el comandante de la zona, revisamos los resultados que llevaba la operación hasta el momento en cuanto a combates, incautaciones de materiales de guerra o de insumos químicos y capturas de personas al margen de la ley. No dejaba de ser sorprendente y afortunado que, gracias a la Operación Bolívar, pudiera estar ahora sentado con las autoridades militares, en el que había sido el corazón mismo de los grupos de autodefensa en la zona. Habíamos ocupado su lugar estratégico y demostrábamos que la capacidad de nuestras Fuerzas Militares se empleaba en contra de todos los grupos al margen de la ley.

La reacción del ELN fue bastante particular. Alegando la existencia de la Operación Bolívar, precisamente cuando más fuerte golpeábamos la estructura paramilitar en la región, decidieron suspender las conversaciones

que estábamos sosteniendo. Desde luego, con un buen nivel de ingenuidad, pretendían que el Estado realizara una operación militar sin tocarlos a ellos, lo cual era moral y militarmente imposible.

El 8 de marzo Pablo Beltrán anunció la suspensión unilateral de contactos con el Gobierno por considerar que no había garantías para seguirse reuniendo, que se había dilatado la concreción de la Zona de Encuentro, que las operaciones militares que se desarrollaban en el sur de Bolívar no habían sido dirigidas en contra de las AUC sino contra ellos mismos, y que las fumigaciones habían sido impuestas en contra de las comunidades campesinas que se habían pronunciado a favor de la sustitución manual.

Mientras en el Gobierno obramos con la convicción de que con la Operación Bolívar estábamos creando mejores condiciones para la zona y, por lo tanto, para el proceso, el ELN la consideró como un ataque contra su organización y una violación a los acuerdos pactados.

La verdad es que, en primer lugar, la Operación Bolívar no era otra cosa que la manifestación de la voluntad del Gobierno de combatir a las AUC y los demás grupos ilegales de la región para poder avanzar con el proceso y, en segundo término, era claro que los acuerdos de sustitución de cultivos a los que el ELN hacía referencia empezarían a regir a partir de la creación de la Zona, y no antes.

REUNIONES FALLIDAS

A pesar de la suspensión decretada por el ELN, tomé la determinación de continuar con los mecanismos necesarios para la preparación de la Zona. Teníamos el compromiso de oír a las comunidades y le pedí al comisionado que continuara con ese proceso. En ese sentido, se organizaron una serie de audiencias con las comunidades de San Pablo y Cantagallo, los dos municipios a la orilla del río Magdalena que serían los únicos cobijados por la Zona de Encuentro.

En esa región, el ELN había tenido presencia desde muchos años atrás y eran notorios los efectos del maltrato a la población por parte de dicho grupo. Permanentemente se hablaba de todos los secuestros y las extorsiones que pobladores de la región habían tenido que sufrir. La guerrilla había abusado de la población y de ahí que tuviera el franco rechazo de la misma. Claro está que con los paramilitares y las FARC ocurría lo mismo. Durante años el Estado no había tenido presencia efectiva allí y cada grupo había hecho de las suyas en la región. Cuando no eran los unos eran los otros.

En muchos casos, pobladores que habían estado cerca de la guerrilla acababan cerca de las autodefensas. Por ejemplo, los mismos organizadores de los bloqueos de las vías que se realizaron en contra del proceso con el ELN reconocían que años atrás habían participado con ese mismo grupo guerrillero en protestas similares. Es más, con cierta sorna y mucho cinismo,

reconocían que las técnicas de las protestas que realizaban contra la Zona de Encuentro las habían aprendido de la misma guerrilla.

Tal vez como mejor se puede describir la situación de la región es con la frase que un campesino le dijo alguna vez al comisionado: *"Doctor, aquí todos hemos estado con los unos o con los otros porque aquí nos toca estar con el fusil que tengamos más cerca al cuello"*.

La Zona de Encuentro que se planteaba allí no sólo involucraba la posibilidad de realizar el proceso con el ELN sino que también implicaba un ambicioso plan de inversiones sociales y, sin duda, una presencia estatal como nunca antes había existido. No se trataba de entregarle una zona al ELN sino, por el contrario, de conseguir una zona ampliamente regulada, con permanencia de todas las autoridades civiles, de los jueces y del DAS. No se trataba de entregar la soberanía de un territorio, como muchos lo temían, sino de ejercerla con más fuerza que nunca.

A pesar de la oposición a la Zona, el Gobierno adelantó varios de los proyectos que se discutieron con la comunidad y fomentó allí el primer laboratorio de paz financiado con recursos de la Unión Europea y del Plan Colombia. Si bien al final, como ya veremos, no se pudo concretar la Zona de Encuentro, su planteamiento sirvió para que se realizaran inversiones que jamás antes se habían hecho en esa región.

Las audiencias públicas con las comunidades se llevaron a cabo el 15 y 16 de marzo en un ambiente de gran tensión y hostilidad. Por parte del gobierno, participaron el alto comisionado, Camilo Gómez; el recién posesionado ministro del Interior, Armando Estrada Villa, quien reemplazó en el cargo a Humberto de la Calle, a quien designé embajador ante la Organización de Estados Americanos; el comisionado adjunto para el ELN, Jorge Mario Eastman, quien había sido antes mi secretario privado, y el viceministro del Interior, Mauricio González, entre otros, incluyendo algunos miembros de la Comisión Facilitadora Civil. Las mismas condiciones de seguridad resultaban complejas pues se temía que las autodefensas o las FARC realizaran alguna acción para impedir o sabotear las audiencias.

Las reuniones se cumplieron, finalmente, a pesar de la agresividad de muchos de los participantes, que pusieron a prueba la paciencia y tolerancia de los representantes del Gobierno.

Los opositores al proceso con el ELN, y las autodefensas mismas, habían generado altos niveles de desinformación y, con ello, habían logrado que la población rechazara cualquier posición del equipo gubernamental. Finalmente, después de las intervenciones del comisionado, del ministro del Interior y de los miembros de la Comisión Facilitadora Civil, las cosas cambiaron, la población los acogió con mejor disposición e, inclusive, reconocieron el valor con que adelantaban su trabajo.

Una vez cumplido el ciclo de conversaciones con las comunidades, se convocó una misión técnica internacional para definir las condiciones bajo

las cuales se podría desarrollar una verificación en el terreno por parte de la comunidad internacional, de tal forma que fuese realmente efectiva. En desarrollo de esta decisión, nos visitaron algunos expertos internacionales financiados por las Naciones Unidas con el propósito de establecer parámetros técnicos bajo los cuales se desarrollaría este trabajo.

La misión la encabezó el general Luis Alejandro, por ese entonces jefe de la Región Militar Pirenaica en Cataluña, quien había sido miembro del Equipo Negociador del Proceso de Paz en Guatemala²⁰. Para muchos, incluidos varios militares colombianos y, por supuesto, los mismos guerrilleros, resultaba muy extraño que un oficial europeo de tan alto rango aceptara ir a la selva a examinar las condiciones del terreno para una misión de paz. Sin embargo, esta misión se encuadraba dentro del nuevo espíritu de los ejércitos modernos en los que las misiones por asuntos de paz son cada vez mayores. Además, la colaboración del gobierno español en el proceso siempre fue activa y estrecha. Esta era otra demostración más.

El general Alejandro demostró, no sólo un gran interés en el trabajo que le había sido encomendado, sino un especial cariño por nuestro país y por las posibilidades de paz. No tuvo ningún inconveniente en ponerse las botas de caucho e irse con Camilo a recorrer selvas y montañas para entender las dificultades y las posibilidades de la región para efectos de la verificación internacional. Un tiempo después de esta misión, también viajó a La Habana para participar en un foro dentro del mismo proceso con el ELN y, siempre que se lo pedimos, se reunió con militares colombianos para exponerles sus ideas acerca del papel de los ejércitos modernos en los procesos de paz.

Además del general, otros expertos en verificación, miembros del Foro para la Paz y la Prevención del Conflicto, visitaron el país y recomendaron a las partes un esquema de verificación adecuado para las características de la región. La misión de expertos estuvo en el país del 24 de marzo al 2 de abril y entregó su informe de recomendaciones la tercera semana de abril. Con base en éste, el Gobierno realizó algunos preparativos, entre ellos el diseño de un curso de capacitación para los auxiliares de verificación, la elaboración de planos para los lugares de alojamiento de los verificadores, el diseño de una campaña de comunicaciones dirigida a los pobladores de la Zona de Encuentro y los contactos iniciales con la Defensa Civil, la Empresa Colombiana de Petróleos y la Cruz Roja Colombiana para la selección del personal de verificación. Así el proceso estuviera congelado por el ELN, nosotros seguíamos avanzando para que la Zona fuese una realidad.

Mientras esto ocurría, el comisionado le propuso a Pablo Beltrán que se reunieran para evaluar la situación, y acordaron encontrarse el 1º de abril en

²⁰ El general Luis Alejandro fue luego jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra del Reino de España, entre enero de 2003 y junio de 2004.

un lejano paraje de la Serranía de San Lucas. Camilo y Jorge Mario Eastman viajaron a la reunión y fueron recibidos por un pequeño grupo de guerrilleros que cubrió el helicóptero con enormes ramas de palmas, a manera de camuflaje, y después los condujeron, a lomo de unas pequeñas mulas, a un lugar distante en el cual se realizaría la reunión.

Ya sentados a discutir, el Gobierno le manifestó nuevamente al ELN su decisión de avanzar en la creación de la Zona de Encuentro y la reiniciación del proceso, y propuso como fecha tentativa para su creación el 14 de abril, en un acto en el cual yo asistiría como presidente a una primera reunión con la cúpula de dicho grupo. El ELN, por su parte, debería descongelar el proceso y producir un hecho concreto de paz que ambientara su inicio formal.

Esta idea la habíamos discutido con el comisionado unos días antes y sería la medida adecuada para determinar hasta qué punto el ELN estaba en realidad dispuesto a jugársela por la paz. Ya el proceso de consultas con la comunidad había terminado y contábamos, además, con el informe de la misión técnica de Naciones Unidas. Teníamos los elementos necesarios, por lo que sólo faltaba que el ELN diera el paso. La idea fue bien recibida por Beltrán, aunque no con poco asombro. Mientras tanto, en Bogotá, el grupo de asuntos legales del alto comisionado avanzaba en todos los aspectos jurídicos para preparar el decreto de constitución de la Zona.

El ELN se quejaba de que yo les daba a ellos un trato inferior comparado con las FARC. En más de una oportunidad le habían dicho a Camilo: *"Fíjese que el presidente se ha reunido varias veces con las FARC y con nosotros no ha hablado ni una vez"*. La realidad era que ambos procesos tenían para el Gobierno la misma trascendencia. No se puede perder de vista que el proceso con el ELN se inició oficialmente antes que el de las FARC, que tuvo primero acompañamiento internacional y que se dieron enormes muestras de confianza, como la salida, en varias ocasiones, de sus voceros Galán y Torres de la cárcel de Itagüí.

De cualquier forma, sabiendo de sus continuas quejas al respecto, consideramos que la posibilidad de reunirse con el presidente sería bienvenida por el ELN y por eso decidimos proponerla como una forma de relanzar el proceso.

Al final de la reunión, la fecha fue acordada. Si todo funcionaba adecuadamente, el domingo de Resurrección del año 2001 me reuniría con toda la cúpula del ELN en algún paraje selvático en la Serranía de San Lucas para dar inicio formal al proceso de paz con este grupo. Ese mismo día se crearía la Zona de Encuentro y el ELN daría una muestra concreta de su interés en el proceso de paz.

Ante la inminencia de tal decisión, el ELN solicitó reunirse con el Grupo de Países Amigos, el Grupo de Países Verificadores y la Comisión Facilitadora. La reunión se planeó para el 5 de abril en uno de los lugares en donde usualmente la guerrilla y el comisionado solían reunirse. Todos los preparativos

se adelantaron sin contratiempo alguno y tanto los embajadores como los miembros de la Comisión Facilitadora y los delegados del Gobierno se prepararon para viajar.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Barrancabermeja, en donde por medio de una comunicación radial se reconfirmaban las coordenadas del lugar de la reunión en donde aterrizarían los helicópteros, el ELN informó un lugar cuyas coordenadas eran muy distantes de las habituales, donde la mayor influencia la tenían las FARC. Después de verificar de nuevo las coordenadas por medio de radioteléfono, Camilo y Jorge Mario sospecharon que algo no andaba bien. Podía tratarse de una trampa de las FARC o de los paramilitares. Además, si no fuera ese el caso, la situación también resultaba crítica pues resultaba imposible que Beltrán hubiese podido moverse hasta ese lugar en tan sólo cuatro días, más aún por ser época de lluvias. Decidieron verificar por tercera vez el lugar y pidieron una comunicación con Beltrán para descartar una suplantación. Sin mayores explicaciones, Beltrán les indicó que en efecto se había producido un cambio y que la reunión sería en el nuevo sitio.

Finalmente, despegaron en dos helicópteros hacia las nuevas coordenadas. Después de dar varias vueltas sobre las montañas, apareció un guerrillero que encendió una fogata para que el humo les indicara a los helicópteros el lugar de aterrizaje. Con mucha dificultad, los helicópteros aterrizaron y el grupo fue recibido por tres o cuatro guerrilleros cuyas condiciones no eran las mejores. Uno era un niño y otro estaba manco, los otros dos se veían agotados; todos llevaban los uniformes desgastados y los fusiles remendados con alambre. Los condujeron a una carretera que se encontraba a unos pocos metros de allí, donde, después de una larga espera, apareció un camión empolvado y viejo en el cual venía otro guerrillero que les indicó que debían subir.

Los embajadores y los miembros de la Comisión Facilitadora, junto con el comisionado y su equipo, subieron a la parte trasera del camión, en donde, agarrados de las maderas y varillas de la carrocería, viajaron por largo rato, en medio de las montañas y atravesando verdes cultivos de coca que no habían sido destruidos en las fumigaciones realizadas durante la Operación Bolívar.

Al cabo de más de una hora de recorrido, el camión se detuvo donde el camino se hacía más estrecho, y desde allí tuvieron que seguir a pie por un largo y empinado trecho. Después de la caminata, apareció un pequeño caserío en donde algunos pocos guerrilleros esperaban para iniciar la reunión. Entre ellos estaba Luis Carlos, un comandante costeño, de baja estatura y de antigua vinculación al ELN, a quien se le había encomendado la labor de recibir al grupo. Sentados en el único salón de la que parecía ser la escuela del caserío, todos esperaban a que llegaran los miembros del Comando Central (Coce) con quienes debía realizarse la reunión, pero Luis Carlos tomó la palabra y les dijo:

—Estamos aquí gracias a que los compañeros de las FARC nos permitieron hacer la reunión. Los demás comandantes no vendrán por razones de seguridad, así que podemos iniciar ya.

La sorpresa fue general. La cita se realizaba por petición del ELN pero sus comandantes no llegaron nunca. Además, la sorpresa la causó también la introducción que el guerrillero había hecho. Se trataba de dar los últimos detalles a la Zona de Encuentro, pero ellos mismos reconocían que en ese lugar habían tenido que pedirle permiso a las FARC para realizar la reunión. Ellos mismos estaban mostrándoles a los representantes de los Países Amigos, de los Países Verificadores y de la Comisión Facilitadora que no controlaban la zona.

En una absurda "lógica" guerrillera, los miembros del Coce no asistieron alegando problemas de seguridad, cuando el comisionado y su equipo, los embajadores y los miembros de la Comisión Facilitadora sí habían tomado el riesgo. Luis Carlos, el único jefe guerrillero que estaba allí, transmitió la intención del ELN de volver a suspender las conversaciones. De una manera insólita, cuando todo parecía estar listo para avanzar en forma consistente, se frustraba el inicio del proceso, así como la primera reunión que se realizaría entre un presidente y el Comando Central del ELN.

Finalmente, la suspensión indefinida por parte del ELN se concretó el 18 de abril mediante un comunicado de la guerrilla y una carta que dicho grupo, a través de su equipo negociador, integrado por Pablo Beltrán, Óscar Santos y Luis Carlos Guerrero, envió al comisionado, en la que formularon tres condiciones para que se reanudaran los diálogos: decretar de inmediato la Zona de Encuentro, confrontar a las AUC y reparar los daños producidos por las fumigaciones de la zona.

Una vez más las contradicciones del ELN se hacían evidentes. La suspensión de los acercamientos la realizaban precisamente cuando se iba a decretar la Zona y cuando acababa de terminar una de las operaciones militares más importantes en ella, que había ubicado y desmantelado el centro neurálgico de las AUC en la región. Además, hablar de las reparaciones por daños causados por la fumigación no tenía sentido pues se había planeado la realización de un ambicioso programa de sustitución de cultivos tan sólo cuando se decretara la Zona. En el fondo, todo llevaba a reiterar la imposibilidad del ELN de sostenerse en su propuesta de la Zona de Encuentro.

AVANZANDO DE NUEVO HACIA EL PROCESO

Durante los meses siguientes, tanto el Gobierno como el Grupo de Países Amigos y la Comisión Facilitadora llevaron a cabo numerosos esfuerzos por buscar alternativas que permitieran descongelar los diálogos. En este intento, el alto comisionado y el comisionado adjunto se reunieron con los dos voceros del ELN reclusos en la cárcel de Itagüí en repetidas ocasiones.

Igualmente, la Comisión Facilitadora Civil celebró encuentros exploratorios en Venezuela, y el Grupo de Países Amigos sostuvo reuniones conmigo y con el comisionado para seguir buscando opciones.

Jan Egeland, en su calidad de asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Asistencia Internacional a Colombia, también se entrevistó con Galán y Torres y con los miembros del Gobierno en busca de acercamientos. No se ahorró ningún esfuerzo para buscar una reactivación del proceso pues existía un consenso general acerca de las posibilidades de llegar a un acuerdo con este grupo.

Producto de estos esfuerzos y consultas, el Gobierno le propuso al ELN una nueva fórmula para iniciar el proceso, diseñada con los mismos militares, a la que denominamos "Esquema de la Gradualidad", la cual consistía en decretar legalmente la totalidad de la Zona, pero implementar su ejecución de manera gradual, en especial en lo que tenía que ver con el retiro de las Fuerzas Militares y de Policía. Esto permitía seguir combatiendo a las AUC y a las FARC en la Zona, en tanto el ELN se localizaría dentro de un área ya implementada de la misma. Además, facilitaría la puesta en marcha gradual de los mecanismos de verificación internacional y nacional. Sin embargo, el ELN rechazó esta nueva alternativa y mantuvo su posición de mantener suspendidos los diálogos.

Durante todo este ciclo de nuevos acercamientos, la reunión más importante para encauzar de nuevo el proceso ocurrió en Ginebra, Suiza. A mediados de junio, el ELN aceptó tener el primer encuentro directo con el Gobierno después de la incumplida cita del 5 de abril. El escenario fue el Encuentro sobre Desafío Humanitario celebrado en Ginebra, al que asistió el comisionado adjunto, Jorge Mario Eastman.

Allí, el Gobierno le presentó al ELN un cronograma detallado de las actividades que aún quedaban por hacer o resolver antes de que pudiera decretarse la Zona, y de las que tocaría emprender para su implementación, con el propósito de que el ELN entendiera que el decreto e implementación de la Zona requerían de un tiempo y que se comprometiera con la parte de las decisiones y actividades que le correspondían. Producto de este encuentro, las partes acordaron realizar una reunión que permitiera avanzar en la definición de los temas aún pendientes, la cual quedó programada para los últimos días de julio en Venezuela.

A solicitud del Gobierno colombiano, el Gobierno del vecino país accedió de inmediato a servir como anfitrión de las nuevas reuniones, con la aclaración nuestra de que queríamos que se llevaran a cabo de la manera más discreta, pues no teníamos interés en generar expectativas, evitando con esto complicar la situación del Magdalena Medio. Además, ya habíamos tenido muchas experiencias en las que el ELN, en el último minuto, se echaba para atrás y desistía de dar el paso final.

Se escogió como sede para las reuniones a Isla Margarita, en donde se contaría con la suficiente discreción y comodidad. El ELN, haciendo gala de su desconfianza, solicitó que a la reunión asistieran como testigos un miembro de la Comisión Facilitadora Civil y un representante del Grupo de Países Amigos, para que sirvieran como garantes de las conclusiones a las que se llegara. No dudamos en aceptar la idea de la guerrilla. Podríamos contar por primera vez con la presencia de testigos de alto nivel que constataran la voluntad del Gobierno y los problemas que tenía la guerrilla para avanzar.

Les di instrucciones al comisionado y a su adjunto para que prepararan una estrategia agresiva en cuanto a buscar que el proceso se iniciara formalmente lo más pronto posible. Era un momento para definiciones y no se podía dar más largas.

Entre el 24 y el 28 de julio de 2001, representantes del Gobierno y del ELN sostuvieron reuniones en Isla Margarita, en presencia de los testigos que habían viajado para tal efecto. Por parte del Gobierno estaban el comisionado, Camilo Gómez; el comisionado adjunto, Jorge Mario Eastman; el embajador en Cuba, Julio Londoño, quien desde el principio del proceso había participado como vocero del Gobierno, y Gustavo Villegas, quien de tiempo atrás actuaba como negociador y asesor para los temas del ELN. Por esta agrupación participaron en la reunión Óscar Santos, miembro del Comando Central, y Milton Hernández, quien hace parte de sus cuadros directivos y siempre ha sido considerado como un hombre cercano a Antonio García. Como testigos actuaron el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y el embajador de Noruega en Colombia, Arne Aasheim, quien coordinaba el Grupo de Países Amigos.

Para el Gobierno la idea de la reunión era muy precisa. La determinación de crear la Zona de Encuentro y de reiniciar el proceso con el ELN estaba tomada pero era necesario que el grupo guerrillero definiera dos elementos: qué hacer frente a la presencia de las FARC en la posible Zona de Encuentro y su capacidad real para mantener la zona, una vez decretada. Para la guerrilla, el punto de preocupación estaba en la presencia de los paramilitares y en la necesidad de fijar una fecha para el inicio de la Zona. De otra parte, el Gobierno seguía insistiendo en que no sólo se trataba de decretar la Zona de Encuentro sino que lo importante era iniciar en firme el proceso, pues la Zona sólo sería un instrumento para su desarrollo.

Después de acaloradas discusiones, y al cabo de cuatro días de reuniones, el Gobierno reiteró su decisión de concretar la Zona de Encuentro y mantuvo su compromiso de continuar en la lucha contra los paramilitares. En cuanto a la Zona, se llegó a la conclusión de que el ELN se encargaría de la seguridad interna de la misma y el Gobierno, de la seguridad en el perímetro externo. Se alcanzó también un principio de acuerdo según el

cual el ELN realizaría una serie de "gestos" humanitarios, como la suspensión de secuestros masivos y ataques contra la infraestructura petrolera, eléctrica y vial del país, con el fin de crear un ambiente político positivo frente al proceso.

Se definieron, además, algunos aspectos relacionados con la conformación de la comisión de verificación de la Zona, para lo cual se plantearon, incluso, los nombres de algunas altas personalidades que se encargarían de realizar esta coordinación. Entre ellas habría un delegado del Gobierno, uno del ELN y uno escogido de común acuerdo. En ese momento, el Gobierno estaba pensando en que, dado el caso, su delegado en la comisión sería un general en retiro. También se habló de la posibilidad de que el delegado escogido de común acuerdo fuese el procurador Jaime Bernal, quien conocía en detalle el proceso y, desde la Comisión Facilitadora Civil, había participado muy activamente en diferentes etapas del mismo.

Las discusiones en Isla Margarita concluyeron con el compromiso por parte del ELN de consultar lo relacionado con la suspensión de acciones violentas para ambientar el inicio de la Zona y, por parte del Gobierno, de avanzar en el análisis de los reglamentos relacionados con un cuerpo de policía cívica que se crearía para la seguridad interna y con el plan de inversión social que estaba definido en la agenda.

UNA NUEVA DESILUSIÓN

Según lo acordado, las partes volvieron a reunirse el 5 de agosto, cerca de Caracas. En esta ocasión el gobierno venezolano dispuso para la reunión de una hacienda a más de una hora de carretera del aeropuerto de Maiquetía. El equipo del Gobierno no pudo disimular su sorpresa frente al lugar escogido. Se trataba de la casa de una hacienda que contaba con todas las instalaciones del caso y que, al parecer, se encontraba abandonada por sus dueños originales. Según me comentaron luego, una sensación de misterio siempre rodeó el lugar y todo indicaba que los ocupantes originales de la casa no habían tenido mucho tiempo de recoger la mayoría de sus pertenencias.

Esta nueva cita había estado precedida por unas graves declaraciones de Antonio García, dos días antes de la reunión, en las cuales, entre otras cosas, afirmaba que con el actual gobierno no existía ninguna interlocución y contradecía los planteamientos que los propios voceros del ELN habían realizado en Isla Margarita. García, con sus declaraciones, estaba retrocediendo a los puntos que ya se habían discutido y superado en Margarita, lo que implicaba una total desautorización a los voceros de la guerrilla que habían estado en esa reunión.

Sus palabras textuales fueron:

"[...] Hay dilación. El Gobierno sigue con su política de dilatar, de volver a renegociar lo ya negociado y acordado [...]. Lo que hoy se manifiesta en estas

reuniones y el último año de gobierno Pastrana es que no tenía una política de paz y que lo que tenía era una política de dilación que permitiera manejarla como instrumento de publicidad [...]. Lo que creemos es que hay que buscar otro tipo de interlocutores [...]".

La reunión empezó, entonces, con un ambiente enrarecido por las declaraciones de García. Aunque no habían llegado aún los testigos que el ELN había solicitado, el comisionado decidió iniciarla, realizando un recuento de lo sucedido en Isla Margarita y haciendo caso omiso de la desautorización de Antonio García a los voceros que estaban allí, a los cuales se había sumado Ramiro Vargas, otro miembro del Coce.

Los voceros del ELN tomaron la palabra y cada uno de ellos ratificó la posición que García había expuesto ante los medios de comunicación, reiterando la exigencia de "sanear" la Zona como un requisito indispensable para poder iniciar el proceso, lo cual implicaba que, antes de comenzar el proceso, el Gobierno debía despejar el área completamente de cualquier presencia paramilitar o de las FARC, algo obviamente ideal, pero simplemente imposible en el corto plazo. De paso, aceptaron que no podían controlar internamente la Zona. Aunque ya era un punto conocido por todos, esta era la primera vez que el ELN reconocía expresamente el verdadero problema de fondo: no tenían capacidad de controlar la zona que habían pedido para los diálogos y tampoco estaban de acuerdo con la propuesta de mantener la Policía en los cascos urbanos. Como se dice popularmente, "ni rajaban ni prestaban el hacha".

Al ver el evidente retroceso, el comisionado decidió pedir que se esperara a los testigos para que, delante de ellos, quedara constancia de que el ELN había cambiado de nuevo su posición justo antes de dar el último paso. Tan pronto los testigos se sentaron en la mesa, el comisionado retomó la palabra y, con toda la precisión del caso, volvió a recapitular lo que se había acordado en la reunión anterior y les preguntó a los guerrilleros acerca de la posición de García, aclarando que el Gobierno la consideraba como una desautorización a quienes estaban allí sentados a nombre del ELN.

Después de una muy larga discusión, a las 11 de la noche se determinó suspender la reunión para continuarla al día siguiente, aunque estaba claro que ya todas las cartas estaban sobre la mesa y no resultaba factible que la situación se modificara. Al terminar la jornada, Camilo les pidió a los representantes del ELN que realizaran las consultas necesarias con los demás miembros del Coce para tratar de aclarar las cosas. Las esperanzas ya eran pocas y el panorama para el día siguiente se veía oscuro.

La reunión del 6 de agosto fue breve. Camilo preguntó si habían realizado las consultas correspondientes, a lo que los voceros respondieron que no habían logrado ninguna comunicación, lo cual era la típica disculpa que usaban cuando no querían modificar su posición. Frente a esto, el comisionado decidió recapitular las opciones que el día anterior había reiterado y les dijo:

—A lo largo de todo este tiempo les hemos formulado cinco posibilidades y todas han sido rechazadas por el ELN. Les hemos ofrecido volver al esquema de la gradualidad, o iniciar el proceso en una zona más pequeña donde el control del ELN sea viable, o escoger otra zona dentro de más de 20 opciones que a lo largo de casi dos años hemos explorado y que se consideran posibles, o realizar la convención por fuera del país, o, finalmente, decretar la Zona y darle cumplimiento a los acuerdos de La Habana, bajo el supuesto de que ustedes pudieran ejercer el control de la seguridad interna de la misma. Nada les ha servido y todo lo han desechado sin presentar a cambio opciones viables. Desde mi punto de vista, ya no hay nada más de qué hablar. Los testigos pueden dar fe de la voluntad del Gobierno pero también de la falta de decisión y coherencia por parte del ELN. Esto nos obliga a dejar aquí las discusiones y retornar a Bogotá para informarle al presidente sobre todo lo sucedido.

De esta forma terminó otro capítulo más en el zigzagueante proceso de acercamientos y diálogos con el ELN, que otra vez retrocedía en el último momento. Los representantes del Gobierno regresaron ese mismo día a Bogotá y me informaron en detalle sobre lo sucedido. Ante esta situación, el 7 de agosto de 2001, la fecha en que se cumplían los tres primeros años de mi período presidencial, anuncié, en un discurso que pronuncié con ocasión del Día del Ejército Nacional, mi decisión de suspender las conversaciones con el ELN.

No obstante, reiteré a renglón seguido mi convicción de que la negociación es la única vía para el logro de la paz. Por eso rematé con esta frase con la que resumí, al mismo tiempo, mi frustración por los esfuerzos fallidos y la exigencia de que cualquier nuevo intento de diálogo estuviera presidido por una actitud más decidida y coherente por parte del ELN:

"Durante mi mandato, hasta el último día, siempre estarán abiertas las puertas del diálogo. Pero el diálogo tiene un requisito previo que se llama voluntad".

Sólo hasta noviembre de ese año los diálogos se retomarían en La Habana. Sin embargo, nunca más se volvió a hablar de la Zona de Encuentro y el proceso tomó un rumbo diferente.

CAPÍTULO XXXII

Contactos discretos con las AUC

En el recuento que he venido haciendo sobre los esfuerzos de paz que se llevaron a cabo durante mi gobierno, tanto con las FARC como con el ELN, hay una tercera organización que ha aparecido en varias ocasiones, casi siempre torpedeando dichos procesos, tan ilegal y cruenta como las dos primeras, pero operando en el otro extremo del conflicto: supuestamente a favor del Estado y definitivamente en contra de las guerrillas. Me refiero a los llamados grupos paramilitares, agrupados desde 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia.—AUC.

Dichos grupos habían tenido sus orígenes en las estructuras armadas del narcotráfico y contaban con la complicidad y apoyo de algunos terratenientes que los veían, equivocadamente, como una solución frente a los ataques de la guerrilla. Se presentaban como adalides de la lucha contra la subversión pero lo cierto es que el poder corruptor del narcotráfico siempre estuvo presente en sus actividades y acabó por contagiar todas sus estructuras, que acogieron como sus comandantes a verdaderos capos de la droga. En su degradación, instituyeron las masacres como una forma de intimidar a la población, asesinando y desplazando a campesinos indefensos, bajo el pretexto de que eran auxiliares de la guerrilla, y se apropiaron ilegalmente de grandes extensiones de tierra.

Por supuesto, como era nuestro deber —y como hicimos también continuamente en el caso de las guerrillas—, el Gobierno y las Fuerzas Armadas perseguimos a los grupos paramilitares con todo el peso de la ley, como se debe perseguir a unos criminales que siembran muerte y dolor por todo el país.

Por tener un enemigo en común, a menudo se asociaba a los paramilitares, ilegales y criminales, con miembros de la Fuerza Pública, cuya función constitucional se cifie a las leyes y al respeto de los derechos humanos y el DIH. No se puede negar que algunos pocos militares o policías, descarriados del buen juicio, de forma individual y no institucional, colaboraron con dichos grupos o se hicieron los de la vista gorda frente a sus crímenes. Eran casos aislados que manchaban el buen nombre de las Fuerzas Armadas y que, siempre que se detectaron, terminaron sancionados y separados del servicio.

Mi mensaje a los militares fue reiterativo al decirles que las autodefensas eran tan enemigas del Estado y de los colombianos como las mismas guerrillas y que su accionar causaba todavía más daño a las instituciones, por pretender suplantarlas. *"Nadie puede alcanzar el cielo parado sobre los hombros del diablo"*, les repetí en numerosas oportunidades.

El mismo general Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, afirmó —siguiendo la postura del Gobierno— que las autodefensas eran un peligro para las instituciones, tanto o más peligroso que la guerrilla.

Para combatir a estos grupos ilegales adelantamos, por primera vez en la historia del país, un Plan Estratégico Nacional para la Lucha contra los Grupos Armados Privados, bajo responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Vicepresidencia de la República, ésta última en su componente de derechos humanos, que reunía varias estrategias:

Creamos un "Centro Nacional de Coordinación para la Lucha contra las Autodefensas Ilegales", en el cual, además, del Gobierno y la Fuerza Pública, participaban la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

Organizamos una Brigada Financiera de la que hacían parte la Fiscalía, la Superintendencia Bancaria, la Dirección de Impuestos y los organismos de inteligencia del Estado, para detectar y combatir los fondos provenientes de la actividad delictiva de las autodefensas, así como los pertenecientes a quienes financiaban a estos grupos ilegales.

En el plano militar, luchamos denodadamente contra estos grupos, realizando múltiples operaciones para neutralizar sus actividades, como la que terminó con la captura de más de 70 de ellos que habían participado en la masacre de indígenas en el Alto Naya, entre Cauca y Nariño, y la misma Operación Bolívar, en el sur de Bolívar, que desmanteló su cuartel principal en dicha zona. Más de 1.300 de sus integrantes salieron de combate —entre capturados, dados de baja y desertores— durante mi gobierno, superando los resultados que se tenían en años anteriores.

Además, en desarrollo de las reformas realizadas a las instituciones militares, y para acabar de controlar cualquier posible colaboración de militares con los grupos de autodefensa, se atribuyó al comandante general de las Fuerzas Militares la facultad discrecional de desvincular en forma inmediata de las filas, sin juicio previo, a los uniformados, cualquiera que fuera su rango, contra los que existieran sospechas fundadas de que violaban los derechos humanos o colaboraban con los grupos ilegales. Esta atribución fue ejercida con firmeza, y representó la separación de filas de cientos de miembros de las Fuerzas Militares, incluidos cerca de un centenar de oficiales.

Como otro avance en el mismo sentido, se reformaron la Justicia Penal Militar y las normas penales colombianas, limitando el fuero militar y tipificando en nuestra ley delitos como la desaparición forzada y la tortura.

Gracias a esto, se sustrajo de la competencia de la justicia militar el juzgamiento de delitos que, por la grave vulneración de la vida y la dignidad humanas, repugnan a la institución castrense, como la tortura, la desaparición forzada y el genocidio, los cuales quedaron sometidos a la justicia penal ordinaria. Esto constituyó un importante logro en materia de respeto y protección de los derechos humanos.

"NO PUEDE CONCEBIRSE LA PAZ SIN ACALLAR SUS ARMAS"

Ya en mi discurso del Hotel Tequendama, en junio de 1998, delineé claramente la que sería mi política frente al paramilitarismo. Entonces dije:

"Pienso que los llamados 'grupos paramilitares' son una de las más preocupantes expresiones de la degradación del conflicto: surgen al impulso de la falta de seguridad, que es una estricta obligación del Estado, y aunque quieran sustentarse en el principio de legítima defensa, inexorablemente devienen en grupos de justicia privada que terminan por ser grupos armados sin control alguno. El hecho de que actúen al margen de la ley y sobre la pretensión de apoyar la lucha contrainsurgente les desprovee jurídicamente de estatuto político. Estos grupos contradicen esencialmente el principio del monopolio de las armas en poder del Estado y son un factor gravísimo de la guerra. Por ello no puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo que tendrá que hacerse en un escenario distinto del de la negociación de la paz con la guerrilla y como una responsabilidad exclusiva del Estado".

De esta manera, esboqué una propuesta que anunciaba "mano dura" contra los paramilitares, que no contemplaba en ningún momento su reconocimiento político, pero que abría la puerta para que se buscara "acallar sus armas", siempre que se hiciera "en un escenario distinto del de la negociación de paz con la guerrilla".

Tenía muy claro que, además de su persecución militar, era también necesario buscar algún contacto con las autodefensas y procurar el cese de sus acciones violentas, sobre todo de las masacres, que eran el punto máximo de degradación del conflicto. Como presidente, no podía desconocer la existencia de un factor generador de violencia como los grupos de autodefensa ni dejar de utilizar todos los medios posibles, incluido el diálogo, para buscar el cese de sus crímenes.

Sin embargo, dichos contactos no podían darse en forma abierta y pública, pues harían explotar en mil pedazos los procesos de paz con los grupos guerrilleros, que eran enfáticos en no aceptar ninguna clase de diálogo con los paramilitares y que, por otra parte, como lo hicieron las FARC en varias ocasiones, utilizaban el pretexto de que el Estado no luchaba eficientemente contra los paramilitares para congelar los diálogos.

Fue así como, durante mi gobierno, se realizaron varias aproximaciones con los paramilitares, con la intermediación de importantes personajes na-

cionales e internacionales, dentro de un ámbito de máxima reserva y prudencia, las cuales constituyeron, sin duda, los primeros pasos —hasta ahora desconocidos— del proceso que hoy adelanta, bajo diferentes parámetros, el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Aunque no fuera posible avanzar los diálogos con las autodefensas de manera pública, sí debíamos intentarlo de forma cauta y reservada. La paz en el país requería de la participación y voluntad de desmovilización de todos los actores armados ilegales, fuera cual fuera su procedencia e ideología.

A contar los discretos esfuerzos de acercamiento con las AUC que se realizaron durante mi gobierno está destinado el presente capítulo.

PRIMERA APROXIMACIÓN

El motivo fundamental de cualquier contacto con personas que tuvieran cercanía con las autodefensas siempre fue humanitario y se centró, básicamente, en la terminación de las masacres que realizaban dichos grupos, objetivo que se logró parcialmente.

Nunca consideramos la posibilidad de establecer un diálogo directo, pues siempre tuvimos claro que cualquier interlocución que se tuviera con los paramilitares debía hacerse de tal manera que no diera lugar a un reconocimiento político de su organización. Salvo esta limitación, establecer contactos para disminuir sus agresiones contra el pueblo colombiano era algo que podíamos y debíamos hacer y que estaba, incluso, facultado por la ley.

En efecto, según prescribe el Artículo 11 de la Ley 417 de 1997, *“los representantes autorizados por el Gobierno podrán realizar actos tendientes a entablar contactos con las llamadas autodefensas y celebrar acuerdos con ellas, con el fin de lograr su sometimiento a la ley y su reincorporación a la vida civil”*.

La oportunidad para hacerlo surgió cuando, a comienzos del año 1999, en una ceremonia de posesión que tuvo lugar en la Casa de Nariño, se me acercó el parlamentario conservador Luis Carlos Ordosgoitia, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, y me comentó que había una persona allegada a su familia que era, a su vez, muy amiga de Carlos Castaño, máximo comandante de las AUC, a través de la cual podrían realizarse algunos contactos.

Se trataba de Rodrigo García Caicedo, un importante ganadero de Córdoba, ex presidente de la Federación de Ganaderos de dicho departamento, a quien yo había conocido en mis correrías durante la campaña política. Su pertinencia como interlocutor era indiscutible pues se trataba de una persona que gozaba de la total confianza de Castaño, quien se refería a él como su segundo padre y lo tenía en alta estima como consejero y asesor.

Me pareció adecuado el contacto, así que tuve un primer diálogo telefónico con García, quien me corroboró su disposición para facilitar los acercamientos, y luego me reuní con él y el representante Ordosgoitia en Palacio,

oportunidad que sirvió para intercambiar opiniones y en la que les insistí en mi mensaje a Castaño de que las masacres debían terminar de una vez por todas, como un primer aporte de las AUC hacia la paz.

En esa reunión determinamos la necesidad de mantener absoluta confidencialidad sobre las conversaciones y se planteó la conveniencia de vincular a las mismas, como facilitadores, a personalidades internacionales cuya neutralidad y liderazgo las dotaran de credibilidad.

Según me dijeron, Castaño creía en las buenas intenciones de mi gobierno, pero consideraba que el gran enemigo para llegar a una paz total, que los incluyera también a ellos, era el tiempo. También era consciente de que el Gobierno no podía reunirse directa ni abiertamente con ellos porque se dañaría sin remedio el proceso con las FARC.

En adelante, la persona que me sirvió de interlocutor directo fue el representante Ordosgoitia, quien mantenía contactos con Rodrigo García, con el mismo Castaño y con Mario H., un personaje que llegaría posteriormente al escenario, a quien luego me referiré.

LA VALIOSA AYUDA DE FELIPE GONZÁLEZ

En marzo de 1999, cuando apenas se estaban produciendo los primeros contactos, realicé un viaje oficial a España, por invitación del gobierno de dicho país, y, dentro de las varias reuniones que tuve en Madrid, me reuní en el Palacio del Pardo con Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, quien era el líder de la oposición al gobierno de mi amigo José María Aznar.

No era, por supuesto, una situación cómoda para mí, debido a las malas relaciones que tenían González y Aznar, pero me interesaba mucho llevar a cabo esta cita, primero por la indiscutible importancia y el peso internacional que mantenía Felipe González y, segundo, porque su pertenencia al socialismo le daba una mayor capacidad de convocatoria e interlocución frente a los grupos guerrilleros que pretendían defender ideologías de izquierda.

Como lo esperaba, fue una reunión muy fructífera en la que el ex presidente González se mostró en todo dispuesto a colaborar con los esfuerzos de paz en Colombia, particularmente en el proceso con el ELN. Lo que no imaginaba él, y sin duda le tomó por sorpresa, es que no sólo le pidiera su participación positiva en los procesos con la guerrilla, sino que también le propusiera que sirviera como facilitador de unos primeros diálogos con los paramilitares, en el extremo opuesto de las mismas.

La petición estaba enmarcada en una estrategia de buscar el apoyo de personalidades de reconocida trayectoria internacional para que, a través de ellas, pudiéramos realizar, sin riesgos, un acercamiento con los paramilitares; buscar una fórmula para que terminaran las masacres y disminuyera la intensidad del conflicto, y, eventualmente, llegar a un acuerdo de desmovilización.

Vincular a la comunidad internacional desde un principio nos permitiría contar con su indispensable respaldo posterior en caso de que se iniciara un proceso tendiente a la desmovilización de las AUC, el cual, dado el prontuario de narcotráfico y de crímenes contra la humanidad de esta organización, tendría necesariamente que estar avalado por un consenso internacional.

Era clave, finalmente, que la fórmula para iniciar un eventual diálogo con fines humanitarios no saliera del Gobierno, porque generaría el rompimiento de los procesos de paz con las guerrillas, sino que surgiera "espontáneamente" de una o varias personalidades ajenas al mismo, caso en el cual la propuesta no tendría por qué causar tales indeseados efectos.

Fue así como le pregunté a Felipe González si estaría dispuesto a recibir a unas personas cercanas a las AUC, escucharlas y discutir con ellas un compromiso que llevara a la terminación de las masacres, como un primer paso hacia más avanzadas negociaciones. Él estuvo de acuerdo y la reunión se llevó a cabo un tiempo después.

Viajaron a Madrid, a entrevistarse con él, Rodrigo García, su hijo Jaime García y Hernán Gómez, también de la confianza de las AUC. En la entrevista, tal como yo le había pedido, González se limitó a realizar una gestión humanitaria, manifestando la preocupación de la comunidad internacional por las masacres que venían cometiendo los paramilitares e intercediendo por su terminación, y ellos le expusieron los puntos de vista de las AUC, y particularmente de Carlos Castaño, sobre el proceso de paz, el conflicto y sus posibles soluciones.

Aprovechando, luego, que el canciller, Guillermo Fernández de Soto, tuvo que realizar un viaje a Europa, le pedí que se reuniera con el ex presidente González para que recibiera sus impresiones de primera mano. Guillermo fue a su oficina en Madrid y habló largamente con él, quien le resumió el contenido de la reunión. Según le comentó González al canciller —y luego le confirmó en una segunda cita que tuvieron en el Hotel Palace, en otra ocasión—, aparte del intercambio de opiniones, él les había pedido a los enviados de Castaño que hicieran una propuesta que permitiera terminar con las masacres y abandonar la violencia, a lo que ellos le respondieron que mejor él hiciera la propuesta. González no tenía más mandato que el de hacer una gestión humanitaria frente a sus interlocutores, por lo que me mandó razón con el canciller de que él se limitaría a proponer aquello que yo le indicara. Ahora bien, aunque el diálogo fue cordial, el ex presidente español percibió a sus interlocutores como personas demasiado radicales en sus posiciones.

Cuando Rodrigo García se enteró de sus comentarios, se preocupó mucho y me envió una carta, con Ordosgoitia, reiterando la voluntad de las AUC de seguir avanzando en los contactos y adjudicando la impresión de González a un posible malentendido o a que éste no los hubiera interpretado bien.

Posteriormente, en noviembre de 1999, el ex presidente español tuvo una nueva conversación con los mismos enviados en México, en la que simplemente le reiteraron su voluntad de diálogo, sin mayores compromisos. Hasta allí llegaron las gestiones de Felipe González, a quien siempre agradeceré su generosa disposición y buena voluntad de cooperar con el país.

Para mí, nunca dejó de ser compleja la situación de acudir a la facilitación de González, cuando, por otro lado, el presidente Aznar, en la orilla política opuesta, me ofrecía su colaboración a nivel oficial, la cual se concretó en múltiples formas. En una oportunidad, aprovechando nuestro encuentro con ocasión de una Cumbre Iberoamericana, le comenté mi dilema al rey Juan Carlos de Borbón:

—Majestad, Felipe me está ayudando en el proceso con los paramilitares y, si el presidente Aznar se entera, se va a armar un problema de tal magnitud que sólo usted puede resolverlo.

El rey se rió y me dijo que estuviera tranquilo y que, si algo llegara a ocurrir, él me ayudaría.

GABO ENTRA EN ESCENA

Mientras esto ocurría a nivel internacional, en Colombia también surgió una personalidad de alto nivel que manifestó su disposición para servir como interlocutor frente a las autodefensas: nada menos que nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez.

Aprovechando una visita de Gabo a Colombia, me reuní con él en su casa de Cartagena y, como siempre lo hacíamos cada vez que teníamos oportunidad, hablamos sobre los desarrollos de los procesos de paz y la situación del conflicto colombiano. Él siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, y muchas veces lo hizo, con la discreción y efectividad que lo caracterizan.

Le comenté sobre los diálogos que comenzaban a gestarse con las AUC y la participación de Felipe González, que es un gran amigo de Gabo, en los mismos. El escritor se interesó en el tema y a mí se me ocurrió proponerle que él también escuchara a estas personas e intercediera para que los paramilitares cesaran las masacres. Sin duda, su voz era respetada por todos los colombianos y tendría un peso fundamental para los paramilitares.

Él accedió gustoso y fue así como llegaron a servir de intermediarios en estos esfuerzos nada menos que dos hombres de gran reconocimiento internacional, con la característica común de profesar y defender ideas de izquierda: Felipe González y Gabriel García Márquez.

Su escogencia resultaba adecuada en muchos sentidos: primero, porque su reconocimiento nacional e internacional le daba seriedad al proceso, lo que reconoció complacido el mismo Castaño, quien comentó con admiración: *"¿Qué clase de personajes están llegando!"*. En segundo lugar, la discreción de

González y de Gabo nos aseguraba la confidencialidad de las conversaciones, y, por otro lado, nadie jamás dudaría de sus intenciones humanitarias ni podría suponer que dos hombres con sus antecedentes y convicciones políticas les estuviesen haciendo el juego a los paramilitares. Si dos personalidades como ellos estaban colaborando, era porque los contactos y sus objetivos merecían toda la credibilidad.

Con el visto bueno de Gabo, llamé a Ordosgoitia y le pedí que se comunicara con Rodrigo García para que éste fuera a la casa del Nobel al día siguiente. Así fue: García y su hijo Jaime se entrevistaron con el escritor en su casa de Cartagena, y hablaron largamente sobre la posición de las autodefensas y la necesidad de poner fin al desangre nacional. Gabo, incluso, los llamó parientes, pues compartían el mismo apellido, y les regaló un libro autografiado.

Posteriormente, el Nobel tuvo otras conversaciones telefónicas con Rodrigo García y volvieron a reunirse en Bogotá, siempre con los mismos objetivos humanitarios, contactos que después me refería en todos sus detalles.

No se avanzó más en la interlocución, pues las circunstancias no lo permitieron, pero lo cierto es que, después de estos primeros contactos con González y García Márquez, las masacres de las autodefensas disminuyeron sustancialmente y Carlos Castaño comenzó a dar declaraciones sobre la necesidad de abandonar la alianza con el narcotráfico y de buscar una salida política y pacífica al combate de las autodefensas.

Dentro de la nefasta lógica de la guerra y los negocios ilícitos, la posición más flexible y más política de Castaño determinó que éste, poco a poco, comenzara a perder el control de sus hombres y de los diversos frentes de las AUC, y lo ganaran, a su vez, aquellos jefes paramilitares que estaban más interesados en continuar trabajando con y para el narcotráfico.

En alguna ocasión en que Ordosgoitia habló con Castaño, antes de una reunión con otros jefes de las autodefensas, el parlamentario le comentó:

—Comandante, lo noto solo.

Y Castaño le respondió, apesadumbrado:

—Es que me estoy quedando solo. La mafia solamente se une cuando va a matar a uno de sus miembros²¹.

EL TERCER HOMBRE

En este estado de cosas, se conocieron algunas amenazas provenientes de los paramilitares contra el entonces alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo. Por otro lado, si bien las masacres habían disminuido, todavía se

²¹ En abril de 2004, Carlos Castaño desapareció. Aunque no existe certeza sobre su paradero, se dice que fue asesinado por hombres de su propia organización.

presentaban algunas, lo que ameritaba que continuáramos intentando algún tipo de acercamiento con Castaño y las AUC.

Apareció, entonces, en escena un nuevo interlocutor, también de toda la confianza de Castaño, quien residía en Lyon, Francia, y podía viajar sin problemas entre Europa y Colombia para hacer las coordinaciones y contactos que fueran necesarios. Lo conocimos siempre como Mario H. —y así me seguiré refiriendo a él en este capítulo—, si bien ése no era su verdadero nombre.

Según nos enteramos años después, Mario H., un ingeniero colombiano, alguna vez había contactado a Castaño por Internet, desde Rumania, para ofrecerle un negocio de armas y así había establecido relación con él. Luego se conoció personalmente con Castaño en Colombia, se ganó su confianza y consolidaron una firme amistad. De hecho, él, como también lo hizo en su momento Rodrigo García, le aconsejaba a Castaño realizar un cambio de norte en las AUC que las llevara a salir de la guerra y comenzar un camino político por fuera del narcotráfico. Además, por no formar parte de sus filas, le hablaba sin temor y con franqueza, lo que le permitió consolidar su ascendencia sobre él.

Por petición de Castaño, el representante Ordosgoitia me planteó la posibilidad de que alguien del Gobierno, de alto nivel, se reuniera con Mario H. para retomar los contactos que se habían iniciado con García. Decidí encomendar la misión al canciller Guillermo Fernández de Soto, por varias razones: la primera, lógica, por la amistad y cercanía que nos unen y que me garantizaban toda su discreción y lealtad; la segunda, por su probada prudencia y su buen tino para el manejo de situaciones delicadas, y, finalmente, por tratarse de un experto en temas internacionales, especialmente en el área de los Derechos Humanos y el DIH, conocedor de las implicaciones de la nueva Corte Penal Internacional, que resultaban cruciales en cualquier negociación con las autodefensas.

Guillermo aceptó el difícil encargo y quedó con la misión de transmitirle al vocero de las AUC nuestras preocupaciones en los temas humanitarios, insistir en la terminación definitiva de las masacres y hacerles caer en la cuenta de que, así hablaran o no con mi gobierno, cada masacre que cometieran les cerraría la puerta a cualquier negociación o salida política en un futuro, no sólo por la aplicación de la ley colombiana sino por la nueva jurisdicción internacional.

La primera reunión entre el canciller, el representante Ordosgoitia y Mario H. fue un desayuno en un reservado del Gun Club, en Bogotá. Guillermo quedó bastante sorprendido por la presencia y comportamiento de este interlocutor, quien resultó ser una persona con porte de empresario, muy culta e inteligente. El canciller transmitió todo el mensaje y requerimiento humanitario del Gobierno y, además, manifestó nuestra preocupación por las amenazas contra la vida de Víctor G. Ricardo.

Mario H. desmintió las amenazas y fue enfático al afirmar que las AUC no tenían nada contra el comisionado y que, por el contrario, respetaban a todo aquel que trabajara por la paz, pues entendían que había que darle una oportunidad a la paz. Días después, el mismo Castaño le envió una carta al comisionado negando tales amenazas contra él o contra cualquier miembro del Gobierno.

En la carta, el jefe paramilitar decía:

"Hemos conocido a través de los medios de comunicación la incorrecta información de un supuesto atentado que se estaría fraguando contra su integridad por parte de las AUC, y particularmente por mi persona.

"Nada más desacertado y dañino para el proceso de paz que usted de manera altruista ha sabido conducir hasta el lugar donde ha avanzado sin antecedentes en la historia de nuestro conflicto. Es de su conocimiento mi actitud de respeto y apoyo a sus gestiones de paz. De esto pueden dar fe el señor don Rodrigo García, el maestro Gabo y el doctor Felipe González.

"Sería verdaderamente torpe de nuestra parte concebir semejante locura [...]".

Luego del encuentro del Gun Club, el canciller se reunió con Mario H. y Ordosgoitia en otras oportunidades, generalmente en el apartamento del parlamentario cordobés, siempre girando su conversación sobre el tema humanitario y, además, sobre la oposición que las AUC estaban promoviendo en el sur de Bolívar a la eventual Zona de Encuentro con el ELN.

Las autodefensas creían que el Gobierno le iba a entregar una zona de despeje, sin ningún tipo de reglamentación, al ELN y le correspondió al canciller explicarles que dicha zona funcionaría bajo un estricto reglamento y con total respeto de la población civil. En esas conversaciones surgió el tema de la vinculación de los paramilitares con el narcotráfico y Mario H. reconoció que las finanzas de las AUC dependían en un 50% del narcotráfico, además de los aportes clandestinos de algunos ganaderos y empresarios.

Carlos Castaño, por su parte, comenzó a enviar mensajes en el sentido de que los paramilitares estaban dispuestos a erradicar los cultivos ilícitos del sur de Bolívar, con una verificación internacional, con tal de que no quedaran dichos cultivos en una zona donde iba a estar el ELN.

En enero del 2000 hubo una nueva y definitiva reunión entre el canciller, Ordosgoitia y Mario H. en el Hotel Santa Teresa de Cartagena, donde el canciller se alojaba con motivo de la reunión del *Millenium Board*, que congregaba cada año a empresarios e inversionistas internacionales para conocer la situación del país y plantear ayudas y soluciones.

En dicha ocasión volvió a plantearse la conveniencia de buscar una figura internacional que fuera capaz de armar un grupo o una comisión con figuras prestantes y de muy alto nivel, y que planteara la necesidad de establecer algún tipo de contacto o de conversación con las AUC, sin que se tratara formalmente de negociaciones.

Valga resaltar que, de todos estos contactos, por interpuesta persona, con los paramilitares, siempre estuvo enterado el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el subsecretario de Estado Thomas Pickering, quien nos apoyó en este tema, registró con complacencia la participación de figuras como Felipe González y Gabriel García Márquez y nos ayudó luego a buscar un nuevo interlocutor.

Volvió a pensarse en la figura del ex presidente González, quien incluso había manifestado su disposición de venir a Colombia y entrevistarse con Castaño, pero la tensión entre él y el presidente Aznar seguía siendo muy fuerte, y ya a estas alturas requeríamos un aval oficial de España. Hablé, entonces, telefónicamente con Aznar y le comenté que estábamos buscando un personaje que nos ayudara a comenzar un proceso internacional con las AUC, y llegamos al nombre de su excanciller, Abel Matutes.

Acordado lo anterior, Guillermo Fernández de Soto viajó a Madrid y se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Piqué, y con su antecesor, Abel Matutes, quien accedió al encargo de reunirse en un tercer país con Mario H., como vocero de Carlos Castaño. Se determinó realizar el encuentro en Cancún, México, aprovechando que Matutes iría a visitar un hotel de la cadena de su propiedad.

Al regreso del canciller a Colombia, se comenzó a organizar, con Ordosgoitia y Mario H., la reunión en México, de la cual se dio conocimiento, por supuesto, al gobierno de dicho país. El objetivo de la misma era que Matutes conociera al interlocutor y las propuestas de las AUC, para que determinara si valía la pena continuar y liderar la conformación de un grupo de personalidades que sugiriera acercamientos oficiales con los grupos de autodefensa.

La cita no se cumplió de inmediato, pues otros sucesos alteraron el orden de prioridades. En febrero del 2000 y luego en abril y mayo del mismo año, como ya se contó en otro capítulo, los pobladores del sur de Bolívar, en buena parte auspiciados y empujados por los paramilitares, realizaron paros y bloqueos de carreteras que impedían la comunicación normal entre Antioquia y la costa atlántica y causaban enormes perjuicios a la economía.

El paro de mayo fue particularmente largo y difícil, lo que nos llevó a encargarles a Ordosgoitia y Mario H. que le explicaran a Castaño la realidad de la Zona de Encuentro con el ELN que se estaba planteando en tres municipios de la región, bajo parámetros mucho más estrictos que los del Caguán, y que le pidieran, como muestra de voluntad de paz, que suspendiera los bloqueos. Castaño les dijo: *"Lo hago por el presidente"* y dio la orden de levantar el paro.

A finales de octubre del mismo año, como también se narró antes, Castaño secuestró a un grupo de parlamentarios y exigió, como condición para liberarlos, la visita de una comisión de altos funcionarios del Gobierno, presidida

por el comisionado para la Paz, para dar a conocer su posición frente a los procesos de paz con las FARC y el ELN. La situación se solucionó el 6 de noviembre, con el viaje a su campamento del ministro del Interior, Humberto de la Calle, junto con el embajador de España, en desarrollo de una misión exclusivamente humanitaria, la cual, sin embargo, fue tomada como pretexto por las FARC para decretar un nuevo congelamiento unilateral.

En medio de estos acontecimientos, Mario H. sugirió la posibilidad de un viaje de Carlos Castaño a España, por supuesto de forma clandestina, acompañado por él y por el representante Ordosgoitia, para que el jefe paramilitar tuviera allí un contacto directo con un representante del Gobierno colombiano. Incluso afirmó que para ello sería muy fácil la movilización. No era una idea viable en absoluto y el canciller los hizo desistir de la misma, mostrándoles los riesgos de semejante operación, mucho más en esos días, cuando el caso del general Pinochet, que había estado detenido más de 500 días en Londres por una orden judicial del juez Baltasar Garzón, estaba fresco en la memoria. Lo mejor —les indicó— era esperar a que se diera un primer contacto con Abel Matutes, y que éste se formara un criterio sobre la seriedad de sus intenciones.

Finalmente, la reunión entre Matutes y Mario H. se llevó a cabo hacia finales del año 2000, sin que se obtuvieran mayores resultados, aparte de un franco intercambio de opiniones.

Poco después, en enero de 2001, se produjo una fuerte arremetida de las autodefensas que contradecía todo lo que se había conversado y establecido como esencial para que se pudiera continuar con los acercamientos. Actos violentos como la matanza de Chengue, en el municipio de Ovejas, Sucre, el 17 de enero, dejaban sin respaldo las actuaciones de todas las personas que se habían involucrado en el proceso de conversaciones, a quienes no podíamos justificar abrir el diálogo con un grupo que insistía en la barbarie.

Debido a esto se suspendieron las conversaciones con estos grupos y con Mario H., como interlocutor, y los contactos entraron en un punto muerto.

En febrero de 2001, por otro lado, se adelantó la Operación Bolívar en el sur de Bolívar, que diezmó la capacidad de acción de los paramilitares en esa región y acabó con la fortaleza que tenían en San Blas.

Como remate de todo lo anterior, en marzo del mismo año, el canciller español Josep Piqué realizó una visita relámpago a Cartagena, donde almorzó con el canciller Fernández de Soto y conmigo y nos expresó que no había condiciones para que España continuara interviniendo en los contactos con los paramilitares, particularmente porque dicho Estado formaba también parte de los grupos de países facilitadores de los procesos con las FARC y el ELN, tarea que se podría ver perjudicada si se conocían sus gestiones frente a los representantes de las AUC. Por supuesto, coincidimos con él y dejamos las cosas como estaban.

"No respondo por las acciones de Mancuso"

Hacia mayo de 2001, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, que ya estaba en las últimas semanas de su período constitucional, nos hizo saber al comisionado, Camilo Gómez, y a mí que tenía pruebas e investigaciones que permitirían realizar una acción contundente contra las AUC en Montería, la capital de Córdoba, un departamento donde su presencia era generalizada, pero que temía que fracasara por cualquier infiltración o contacto de los paramilitares con miembros de la Fuerza Pública en dicha región.

Enterado de la situación, di la orden al comandante general de las Fuerzas Militares, el general Fernando Tapias, para que, en coordinación con el fiscal y con el comisionado, realizara un dispositivo de desplazamiento de tropas especiales desde Bogotá hasta Montería, para que apoyaran los allanamientos que la Fiscalía tenía previsto realizar allí, sin que se corriera el riesgo de una filtración.

Fue así como el 25 de mayo de 2001, con este refuerzo extraordinario llegado de la capital, la Fiscalía realizó en Montería múltiples allanamientos, recaudando valiosa información relacionada con las redes de financiación y de comunicaciones de los paramilitares. Inclusive allanaron y registraron la casa de Salvatore Mancuso, oriundo de dicha ciudad, a quien por entonces se consideraba como el segundo al mando y jefe militar de las AUC, operación en la que resultó muerto el conductor de su esposa.

Infortunadamente, y a pesar del apoyo prestado, las investigaciones que surgieron de dicha operación no tuvieron los contundentes resultados que prometían.

Supimos, después, que esta operación despertó la ira de Mancuso, quien se presentó enardecido ante Carlos Castaño, reclamándole por su falta de reacción frente a los operativos y le anunció que estaba preparando una buena cantidad de carros bomba para hacerlos estallar en Bogotá, generando una ola de muerte y terror, en retaliación por los allanamientos de la Fiscalía en Montería.

Castaño no estuvo de acuerdo y le respondió a Mancuso con esta frase:

—Yo no voy a ser el nuevo Pablo Escobar de Colombia. No le autorizo que ponga un solo carro bomba.

Finalmente, y a regañadientes, Mancuso accedió a renunciar a los ataques en Bogotá, pero le dijo luego a Castaño que, de cualquier manera, no se iba a quedar quieto ante esa afrenta en su propia casa y que esa misma noche iba a ordenar el asesinato del fiscal, de Camilo Gómez y de un parlamentario a quien le adjudicaban haber sido el instigador de la operación.

Por fortuna, sus intenciones nunca llegaron a concretarse. Sin embargo, esa diferencia sirvió como detonante para que Castaño anunciara públicamente: *"No respondo por las acciones de Mancuso"*, y luego se apartara de la jefatura política de las AUC.

En un comunicado que circuló por Internet el 30 de mayo, al tiempo que anunciaba su dimisión, Castaño dejó constancia de su posición, que contrariaba los deseos de Mancuso de responderle militarmente al Estado:

"Somos en las AUC amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable: respétenlo".

Sólo fue una constancia aislada que no encontró eco entre sus hombres. A partir de ese momento, con el cambio que generó la renuncia de Castaño en la cúpula de las AUC, se hizo claro que los paramilitares se desligaron de sus escasos ropajes "ideológicos" y viraron hacia una situación de total enfrentamiento con el Estado y de mayor involucramiento con el narcotráfico, abandonando el tinte político que, bajo equívocas premisas patrióticas, Castaño había querido imprimirles.

INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA

Pasados los meses, ya en el 2002, en las postrimerías de mi gobierno, se presentó una aproximación por otra vía. Gustavo Villegas, asesor del comisionado para la Paz para el proceso con el ELN, se encontraba en su oficina en Medellín cuando llegó a la misma un hombre que se identificó como El Águila, comandante de las autodefensas²², y le pidió que lo acompañara a una finca cercana porque necesitaba hablar con él. Como es natural, Gustavo imaginó que lo iban a secuestrar o algo peor, más aún por ser él parte del equipo negociador con el ELN.

Una vez en la finca, El Águila le dijo a Villegas que las AUC continuaban interesadas en abrir un espacio de diálogo con el Gobierno. Le manifestó que Carlos Castaño ya no era el jefe único de las autodefensas y que él, en cambio, sí tenía manejo y relaciones con todos los grupos y podía influir para mostrar un frente unido en las negociaciones.

Tan pronto Gustavo fue devuelto a Medellín, aliviado por haber salvado su vida y su libertad, le contó el contenido de la conversación a Manuel Santiago Mejía, empresario antioqueño y muy cercano amigo mío, quien me pidió una cita en Palacio y, frente al comisionado, Camilo Gómez, me transmitió el mensaje del Águila.

Pensando, como lo habíamos hecho en un principio, que la mejor opción para iniciar un contacto con los paramilitares siempre sería una propuesta que viniera de la comunidad internacional y no del Gobierno, y que no se podían establecer diálogos directos que sugirieran un reconocimiento políti-

²² Luis Eduardo Cifuentes, alias *El Águila*, se desmovilizó el 9 de diciembre de 2004, en calidad de jefe de las Autodefensas Unidas de Cundinamarca, y es hoy uno de los representantes de las AUC en los diálogos que mantiene el Gobierno con dicha organización en Santa Fe de Ralito (Córdoba).

co, consideré la posibilidad de pedir la intervención del Vaticano, iniciativa que fue aceptada por las AUC.

Fue así como, en un acto en Palacio, el canciller le comentó al nuncio apostólico, Beniamino Stella, sobre esta opción y él le respondió que la veía viable y que la iba a transmitir al Vaticano, pero que consideraba que el Vaticano, por respeto a la Iglesia colombiana, escogería a un colombiano para que lo representara en la facilitación de los diálogos. Guillermo le reiteró al nuncio que lo importante era que alguien de la Iglesia hablara con los representantes de las AUC para conocer de primera mano la seriedad de su propuesta y saber si ellas estaban, de verdad, dispuestas a negociar.

El nuncio, semanas después, nos hizo saber, a través del comisionado Camilo Gómez, que se entrevistaba semanalmente con él, que había hablado del tema con monseñor Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, y que la instrucción de la Santa Sede era que la Iglesia colombiana, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, designara a la persona o las personas para llevar a cabo esa interlocución.

Finalmente, fueron seleccionados el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, y otros dos obispos, para dicha tarea. Ellos viajaron a encontrarse con los comandantes de las AUC, incluyendo a Castaño y Mancuso, e iniciaron las primeras gestiones de aproximación humanitaria, de las que dieron cuenta al nuncio, quien a su vez las transmitió al comisionado.

Estos contactos quedaron apenas iniciados al terminar mi gobierno, pero sirvieron como germen de las negociaciones que adelantó y continúa adelantando, de manera directa, el gobierno de mi sucesor, tendientes a la desmovilización de los grupos de autodefensas. De hecho, monseñor Vidal sigue siendo una pieza fundamental en las conversaciones, pues reúne la confianza y credibilidad tanto de los líderes paramilitares como de los representantes del Estado.

Fue así como, de la forma más discreta posible, con la participación generosa y arriesgada de grandes personalidades, de gobiernos extranjeros e instituciones como la Iglesia, comenzaron en mi gobierno las aproximaciones con las AUC, las cuales tuvieron un sentido exclusivamente humanitario, sin que en ningún momento implicaran un reconocimiento político de dicho grupo.

Los efectos buscados se lograron en gran parte, pues la interlocución indirecta —siempre por interpuesta persona— que tuvimos con los paramilitares generó una disminución de las masacres y facilitó, incluso, el levantamiento de los bloqueos en el sur de Bolívar. Muchas vidas se salvaron y eso fue lo más importante.

Desarrollos del Acuerdo de Los Pozos

Después de mi reunión con Manuel Marulanda, los días 8 y 9 de febrero de 2001, en la Zona de Distensión, y de la firma del Acuerdo de Los Pozos, el proceso con las FARC tuvo un acelerado y concreto desarrollo, tanto que en los meses siguientes se cumplieron prácticamente todos los puntos establecidos en el citado acuerdo.

En febrero mismo se creó la Comisión Auxiliar de Casos Especiales, integrada por monseñor Alberto Giraldo, por parte del Gobierno, y por Andrés París, por parte de la guerrilla, encargada de estudiar las situaciones coyunturales que pudieran afectar la marcha del proceso; la mesa retomó el análisis del tema económico de la agenda y de las propuestas de cese de fuegos y hostilidades, y se reunieron en la Zona representantes de las distintas fuerzas políticas del país, que manifestaron su respaldo al Acuerdo de Los Pozos.

En marzo se concretó la vinculación formal de la comunidad internacional al proceso a través de una reunión en Los Pozos que contó con la asistencia de embajadores y representantes de 26 países y de la creación de la Comisión de Países Facilitadores, y en mayo se creó la Comisión de Personalidades para que formulara recomendaciones para disminuir el conflicto y acabar con el fenómeno del paramilitarismo.

Mientras se producían estos avances, de manera paralela, el alto comisionado negociaba con Marulanda un acuerdo humanitario que llevara a la liberación de nuestros soldados y policías en poder de las FARC.

En cuanto al equipo de trabajo del Gobierno, a los pocos días de mi regreso del Caguán decidí reforzar la labor de la Oficina del Alto Comisionado con la designación de dos comisionados adjuntos: Jorge Mario Eastman, quien hasta entonces se desempeñaba como mi secretario privado, como comisionado adjunto para el ELN, y Luis Fernando Criales, quien se desempeñaba como asesor de la Vicepresidencia, como comisionado adjunto para las FARC. De esta forma, el de por sí complejo y difícil trabajo de Camilo Gómez se vería respaldado por estos dos nuevos colaboradores.

NUEVO APOYO POLÍTICO A LA NEGOCIACIÓN

En el texto mismo del Acuerdo de Los Pozos se cursó una invitación para que las fuerzas políticas firmantes del Acuerdo de Caquetania se volvieran a reunir el 28 de febrero en la Zona de Distensión con el fin de dinamizar el proceso. Ésta sería la tercera ocasión en que los jefes políticos se reunieran con la guerrilla. El primer encuentro había sido precisamente el de Caquetania, el 28 de abril de 1999, y el segundo cuando, en agosto de 2000, se reunió el Grupo de Apoyo a la Mesa de Diálogos y Negociación.

Gracias a esta nueva invitación del Gobierno y las FARC, el 28 de febrero de 2001, según lo previsto, asistieron a la sede de las negociaciones, en Los Pozos, Horacio Serpa y Eduardo Verano, por el Partido Liberal; Noemí Sanín, por el Movimiento Sí Colombia; Antonio Navarro y Luis Eduardo Garzón, representando movimientos políticos independientes; Ciro Ramírez, presidente del Partido Conservador, y Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista.

Cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de expresar de manera directa a los guerrilleros sus opiniones y reflexiones acerca de lo que estaba sucediendo con el proceso de paz y frente a los hechos violentos que la guerrilla generaba. A su vez, los dirigentes políticos escucharon los planteamientos de los representantes de las FARC, encabezados por Manuel Marulanda y Alfonso Cano, sobre los acontecimientos políticos y la marcha del proceso.

Si bien la reunión se adelantó en un ambiente de armonía, el nivel de tensión fue mayor que el de los encuentros anteriores, debido a que se acercaba el inicio de las campañas presidenciales y eso hacía que las posiciones fueran más duras y controversiales. De hecho, los reclamos a las FARC por los actos de violencia que cometían marcaron una pauta importante de la reunión.

Los guerrilleros, como siempre, se limitaron a replicar que dichos actos eran consecuencia del conflicto, sin aceptar que afectaban negativamente el desarrollo del proceso. Además, manteniendo la línea tradicional de su posición, elevaron reclamos ante los dirigentes por el tema del paramilitarismo.

Al final de la reunión, los voceros del Gobierno, los dirigentes políticos y los guerrilleros firmaron un nuevo documento en el que se ratificó el respaldo al proceso de paz y a la búsqueda de una solución negociada y, muy especialmente, se dio un apoyo total al Acuerdo de Los Pozos.

Por mi parte, nunca consideré que los documentos que se producían al final de estas reuniones fueran simples comunicados formales sin consecuencias. A pesar de que su contenido era a menudo general, como ocurre siempre que se busca el consenso de diversas corrientes políticas o ideológicas, en estos actos quedaba claro el apoyo de los diferentes partidos y movimientos políticos del país a la política de paz. De esta manera, la búsqueda de la paz que liderábamos desde el Gobierno se consolidaba como una po-

lítica de Estado. Allí estaban representados la mayoría de los partidos y eso daba un crucial soporte político al proceso, demostrando a la guerrilla que, detrás de los esfuerzos de paz, no sólo estaban el presidente o el Gobierno, sino todo el país.

Un hecho curioso de esta reunión fue la asistencia, por primera vez, de Antonio Navarro y Luis Eduardo Garzón.

Navarro, que había sido un líder guerrillero, militante del M-19, y se había desmovilizado junto con sus compañeros más de diez años atrás, se había convertido en un respetado líder político. No sólo había llegado a ser ministro de Salud y alcalde de Pasto, sino que ahora defendía en el Congreso Nacional, dentro de los cauces de la democracia, las ideas que alguna vez apoyó con las armas. A pesar de que su ejemplo es uno de los casos más exitosos que se pueden mostrar de paso de la lucha guerrillera a la lucha política, las FARC no lo interpretaban así. Para ellos, los grupos guerrilleros que habían firmado acuerdos de paz en el pasado habían traicionado los "ideales de la revolución". Por eso mismo, el encuentro entre Navarro y los líderes de las FARC tenía especiales elementos de tensión.

En cuanto a Luis Eduardo Garzón, caracterizado líder sindicalista que estaba ahora actuando dentro de la política, defendiendo un proyecto de izquierda, las FARC tampoco lo veían con buenos ojos por cuanto consideraban, en el mismo sentido, que el paso de su militancia sindicalista a la política era una especie de claudicación frente a los ideales de la izquierda.

Por supuesto, esa postura radical de la guerrilla no tenía, para nosotros, ni para la inmensa mayoría de la opinión pública, lógica ni justificación, pues resultaba claro que ni Navarro ni Garzón habían dejado de lado sus ideas o reivindicaciones, sino que, por el contrario, habían tenido el coraje y la capacidad de entender que la vía de la democracia es la única opción real para lograr positivas transformaciones sociales.

Hoy Navarro, como congresista, y Garzón, como alcalde mayor de Bogotá, ambos elegidos por el voto popular, son prueba fehaciente de que los caminos de la democracia en Colombia están abiertos para todos y de que la fuerza de la razón es más valiosa y sensata que la de las armas o la confrontación.

EL MUNDO EN EL CAGUÁN

Otro avance fundamental en el proceso, sobre el que yo había insistido continuamente a Marulanda, fue la vinculación formal al mismo de la comunidad internacional con funciones de observación y facilitación.

Éste es un tema en el que siempre insistí porque soy un convencido de la pertinencia y conveniencia del acompañamiento internacional a los procesos de paz, como un factor de credibilidad y compromiso ante el país y el mundo.

Las FARC nunca habían aceptado esta vinculación pues creían que los representantes de los diferentes países sólo servían como mensajeros de las posiciones del Gobierno, particularmente por los reclamos que la comunidad internacional les hacía por sus continuas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Sólo muy tarde vinieron a comprender que la presencia de la comunidad internacional en el proceso también le generaba al Estado colombiano una serie de responsabilidades y de obligaciones frente al cumplimiento de los acuerdos y la seriedad de las negociaciones, lo cual era una garantía para ellos, como contraparte. Haber logrado, en este momento del proceso, que cambiara su posición al respecto, fue, sin duda, un importante resultado de la estrategia de negociación.

Una anécdota que ilustra la percepción que por mucho tiempo mantuvo la guerrilla respecto a la comunidad internacional le aconteció por esos días al comisionado. Estando reunido con Marulanda y algunos de sus hombres más cercanos, Camilo le mencionó al jefe guerrillero el interés del nuncio apostólico de su Santidad y de un grupo de embajadores de tener una conversación personal con él. Marulanda se mostró poco entusiasmado frente a la propuesta, lo cual extrañó al comisionado, quien le preguntó las razones por las que podría desatender una petición como ésta. Los guerrilleros le contestaron que la reunión resultaría inútil pues ellos ya sabían lo que les iban a decir y los reclamos que realizarían, ya que estaban convencidos de que serían los mismos que el comisionado les hacía continuamente.

—¿Para qué vienen hasta acá si nos van a decir lo mismo que usted nos dice? Nosotros sabemos que, antes de que ellos vengan aquí, usted les da instrucciones sobre lo que nos tienen que decir.

Camilo se rió y les contestó, no sin cierta sorna:

— Miren, yo les agradezco mucho su respuesta, porque cuando me dicen algo así mi ego se crece tanto que no cabe ni en la Zona de Distensión.

Los guerrilleros no entendieron ni la respuesta ni la actitud sonriente del comisionado, a quien le acababan de negar una solicitud.

—¿Por qué nos dice eso? —preguntó Marulanda.

Camilo, sin perder un instante la sonrisa, les contestó:

—Es que es imposible que mi ego no se crezca cuando ustedes me consideran el hombre más poderoso del planeta. Según parece, ustedes están convencidos de que yo, al llegar a Bogotá, levanto el teléfono y hablo con el santo padre y con los presidentes de los países que están apoyando el proceso, casi 30, y les doy instrucciones acerca de lo que sus representantes deben decir. Además les digo también al presidente Pastrana y a los militares qué deben declarar y, como en ocasiones me han reclamado ustedes, también llamo a los medios de comunicación y les doy instrucciones sobre lo que deben publicar. Si eso fuera cierto, ¡no habría nadie más poderoso que yo!

Camilo terminó con una carcajada que los guerrilleros recibieron con cautela mientras acababan de asimilar sus palabras. A los pocos días la reunión se celebró.

Felizmente, y gracias a nuestra continua insistencia sobre el tema, en el Acuerdo de Los Pozos logramos que la guerrilla aceptara invitar el siguiente 8 de marzo *"a un grupo de países amigos y organismos internacionales para informarles sobre el estado y evolución del proceso e incentivar su colaboración"*.

Para poder realizar esta reunión, en la que participarían 26 países, se decidió conformar un grupo más pequeño para que actuara como facilitador de la misma, el cual terminó por convertirse en un grupo permanente que serviría como mecanismo de enlace e información frente a los demás países amigos. Este pequeño grupo, al que se denominó Comisión Facilitadora Internacional o Grupo de Países Facilitadores, estuvo, en adelante, en contacto regular con la mesa de negociación, como una instancia más cercana y operativa del Grupo de Países Amigos.

Inicialmente, el Grupo de Países Facilitadores estuvo conformado por los representantes de Canadá, Cuba, España, Francia, México, Noruega, Suecia y Venezuela, buscando un equilibrio en su composición, en cuanto a la presencia de países europeos y americanos y en cuanto a las tendencias políticas de los diferentes gobiernos. A estos países se sumaron posteriormente Italia y Suiza, completando un total de diez miembros.

La Comisión Facilitadora Internacional, por acuerdo de la Mesa, centraría sus funciones en la facilitación del proceso y tendría la posibilidad de sostener reuniones con las partes por separado. Con el tiempo, la guerrilla fue tomando más confianza en la presencia internacional, lo que permitió que la labor de facilitación fuese un poco más allá de lo previsto inicialmente, llegando incluso a servir este grupo como un canal alternativo para transmitir mensajes entre ambas partes.

Sin duda, la participación de estos países demostraba la forma en que los mismos, y la comunidad internacional en general, consideraban el proceso de paz, como un esfuerzo valioso y serio que valía la pena impulsar y acompañar. Paradójicamente, mientras el mundo nos acompañaba en el proceso, muchos internamente le daban la espalda.

EL TRABAJO DEL VATICANO POR LA PAZ

Además del importante papel que las Naciones Unidas y los diferentes países tuvieron en el proceso, el nuncio apostólico de su Santidad, monseñor Beniamino Stella, cumplió también una labor muy especial y significativa. Su antecesor, monseñor Paolo Romeo, quien desempeñó su cargo en Colombia hasta febrero de 1999, alcanzó asimismo a apoyar el proceso y estuvo en San Vicente del Caguán, a donde luego iría tantas veces monse-

ñor Stella, siempre buscando, con prudencia e inteligencia, el acercamiento efectivo entre las partes.

La guerrilla, tanto las FARC como el ELN, ha tenido, tradicionalmente, un enorme respeto por la Iglesia católica, institución a la que le conceden la mayor credibilidad. Gracias a esto, han sido muchas las acciones humanitarias que se han podido adelantar y los contactos que se han podido lograr con la mediación o facilitación de la misma.

De hecho, en todo el desarrollo del proceso de paz contamos con la invaluable colaboración de la Iglesia colombiana y del mismo Vaticano, por intermedio del nuncio apostólico.

Cuando visité al santo padre en 1999, oportunidad en la que el país recibió su voz de aliento y de apoyo a las gestiones de paz, le planteé al Vaticano, por medio de su secretario de Estado, monseñor Angelo Sodano, la necesidad de contar con su ayuda en el proceso de paz, la cual se hizo efectiva en varias oportunidades.

Un paso muy importante se dio en la visita que los negociadores del Gobierno y de las FARC hicieron al Vaticano, dentro de la gira a Europa a comienzos del año 2000.

En esa ocasión se llevó a cabo una entrevista entre un delegado del Vaticano, monseñor Giorgio Lingua, y el grupo de negociadores. Allí Joaquín Gómez, a nombre de la guerrilla, le expresó al representante del Vaticano su respeto por la Iglesia en Colombia y habló de ella como la institución de mayor influencia en todo el país. Las palabras de Gómez no dejaron de sorprender a los representantes del Gobierno, que no podían creer que provinieran de un guerrillero que sigue una doctrina leninista como la que pregonan las FARC. En dicha reunión, la posición de todos los guerrilleros fue realmente respetuosa, casi devota, hacia la Iglesia.

Me contaron los que estuvieron presentes que monseñor Lingua, particularmente serio, escuchó las presentaciones de ambas partes sin realizar ningún gesto ni comentario especial y luego hizo una brevísima exposición, manifestando el interés del santo padre por que las conversaciones por la paz de Colombia llegaran a feliz término. Uno de los guerrilleros presentes, inquieto por la circunspección del representante del Vaticano, y con la chispa colombiana que nos caracteriza, pidió la palabra y le dijo:

—Monseñor, lo que yo no entiendo es cómo usted puede llamarse monseñor Lingua ("lengua" en italiano), porque ¡de "lingua" no tiene nada! ¡Lo que nos resultó es muy parco!

Ante el apunte, el prelado, que no había dejado ver prácticamente ninguna expresión emocional durante toda la cita, soltó una risotada que rompió la formalidad que había primado durante la reunión, lo que animó a los guerrilleros a pedirle que se fotografiara con ellos. Después de la foto, monseñor le entregó a cada uno de los visitantes un pequeño recuerdo de la visita al Vaticano consistente en un rosario y una medallita. De inmediato,

y sin pensarlo mucho, varios de ellos tomaron el rosario y se lo colgaron en su pecho. Algunos de forma disimulada y otros, como Joaquín Gómez, caracterizado por su espontaneidad, de frente a todos y sin tapujos. Todo esto, de alguna forma, hace parte de ese respeto y esa tradición católica que todos en Colombia, incluidos los guerrilleros, tenemos.

Después de esta visita, a mediados del año 2000, el alto comisionado, Camilo Gómez, se reunió privadamente con el cardenal Giovanni Battista Re, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, y solicitó su autorización y apoyo para que la Comunidad de San Egidio se vinculara al proceso. Esta comunidad está conformada por laicos y sacerdotes, y ha tenido discretísimas e importantes funciones de mediación y facilitación en diferentes conflictos, en especial en África.

Debido a que la intervención directa del Vaticano en procesos de paz resulta muy difícil de obtener y se da en muy pocos casos, éste apoya a menudo los esfuerzos de paz en determinados conflictos a través de la Comunidad de San Egidio. La respuesta inmediata fue positiva y la Comunidad empezó a trabajar con el comisionado acordando, inicialmente, realizar un entrenamiento para los negociadores del Gobierno.

Fue así como, empezando el otoño del mismo año, todos los miembros del equipo gubernamental, tanto los que actuaban en el proceso con el ELN como en el proceso con las FARC, se concentraron por más de una semana en Roma, en un antiquísimo convento de la Comunidad de San Egidio, y allí analizaron las experiencias de la comunidad en el campo de los procesos de paz. A esta reunión concurrieron también Jan Egeland, asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Asistencia Internacional a Colombia, y su asistente James Lemoyne, para articular su papel como interlocutores internacionales en el proceso. Además de este interesante ejercicio, la Comunidad sirvió, en algunos casos, como conductor discreto con la guerrilla. Todavía hoy sigue muy de cerca la situación de Colombia y mantiene su disposición para acompañar al país en su camino hacia la paz.

Pero la participación del Vaticano no sólo se quedó en esas acciones. El nuncio apostólico, monseñor Beniamino Stella, caracterizado por su discreción y prudencia, muchas veces se reunió con el comisionado; asistió a diferentes encuentros en la Zona, como la Audiencia Internacional, y realizó algunas reuniones con las FARC, durante los últimos meses del proceso. En sus varias visitas, siempre reclamó ante la guerrilla, con su característico tono pausado pero firme, por el derecho a la vida y la libertad de los colombianos, y fue muy directo al señalar a las FARC el enorme error que cometían al utilizar la fuerza y la violencia en sus actos. De manera especial, el nuncio jugó un papel importante en el desarrollo de los hechos previos al rompimiento del proceso.

MARULANDA Y LOS LLANOS DEL YARÍ

La primera reunión de las FARC con la Comisión de Países Facilitadores se realizó el 1º de marzo de 2001 con el objeto de planear la agenda sobre la que se desarrollaría, el 8 y 9 de marzo, la reunión con el grupo ampliado de los países amigos. Al finalizar el encuentro, Manuel Marulanda dio su habitual discurso sobre los orígenes del conflicto y planteó ante los embajadores la necesidad de generar hechos positivos frente al proceso, invitando a la comunidad internacional a contribuir en la realización de un estudio que determinara las posibilidades de utilizar la zona de los llanos del Yarí en actividades agrícolas y ganaderas, una inquietud que ya me había manifestado en nuestra reciente reunión de Los Pozos.

Los llanos del Yarí son un área de gran extensión, ubicada entre San Vicente del Caguán y La Macarena, siempre sobre el eje central del río Yarí, en la que las FARC han tenido presencia desde muchos años atrás. Allí fue donde Gonzalo Rodríguez Gacha, alias *El Mexicano*, quien fue uno de los más grandes y temidos capos del narcotráfico en el país, tuvo en la década del ochenta uno de sus mayores centros de actividades, basado en la finca El Recreo. Desde allí enviaba al exterior toneladas de cocaína, utilizando una enorme pista que aún existe y que tenía capacidad para que aterrizaran aviones de gran tamaño, incluso jets. Por esos días, en Colombia no había mayores cultivos de hoja de coca, por lo que la importaban desde Perú y Bolivia, en tanto los narcotraficantes del país se especializaban en el procesamiento y mercadeo de la droga.

También en los llanos del Yarí estaban localizados algunos de los más grandes laboratorios de procesamiento de cocaína que se hayan descubierto, como el famoso Tranquilandia. Cuentan que allí aterrizaban grandes aviones con hoja y pasta de coca proveniente de Perú y Bolivia, las cuales se procesaban en los laboratorios de la zona hasta convertirlas en cocaína de alta pureza que se despachaba a los centros de consumo en aviones de gran capacidad.

Por esa misma época se presentaron feroces enfrentamientos entre los hombres del narcotraficante y guerrilleros de las FARC. En alguna ocasión, en medio de alguna conversación informal con el comisionado, Marulanda comentó que esa finca la había conseguido la guerrilla después de gastar más de 10.000 cartuchos de munición en los combates con los hombres de Rodríguez Gacha.

Sin embargo, mucho antes de estos enfrentamientos, desde finales de los sesenta, las FARC han tenido una presencia importante en la región. Cerca de la misma se encuentra Caquetania, una antigua hacienda en donde existe una pista de aterrizaje utilizada comercialmente durante varios años, a donde llegué en mis dos primeros encuentros con Marulanda. Precisamente, la ruta que sale de los llanos del Yarí hacia Caquetania ha sido la que la gue-

rrilla tradicionalmente ha utilizado para dirigirse hacia la zona del Parque Natural de Chiribiquete, en donde empieza la selva amazónica.

En los llanos del Yari se llevó a cabo la Operación Destructor II, una de las operaciones militares más mencionadas durante el gobierno Samper, en la cual se utilizaron grandes recursos aéreos y terrestres para atacar algunos de los lugares por donde se mueve la guerrilla. Esta operación, de costo considerable, tuvo, infortunadamente, poco éxito, debido a las dificultades de movilidad que tenían entonces las Fuerzas Militares, lo que les impidió ir más allá del río Yari. El propio Marulanda se refería con frecuencia a esta operación en forma despectiva y solía invitar a quienes les contaba la historia a visitar dos enormes cráteres que habían dejado en la llanura las bombas utilizadas en la misma.

Durante el proceso de paz, los llanos del Yari, y específicamente la zona que correspondía a la finca que fue de Rodríguez Gacha, sirvieron de punto de encuentro para realizar varias de las reuniones entre los equipos de negociadores y para los encuentros directos con Marulanda, que tenía preferencia por esa región.

Al comienzo el comandante de las FARC sólo aceptaba reuniones en los alrededores de Caquetania, distante más de siete horas de San Vicente del Caguán, pero, en la medida en que el proceso fue avanzando, éstas comenzaron a realizarse en lugares cada vez menos remotos. De Caquetania se pasó a la zona de la Tunia, a cinco horas de San Vicente por pésima carretera. Posteriormente, los encuentros se realizaron en un lugar denominado Donde Robert, que era una pequeña fonda y hospedaje que servía de lugar de paso para quienes venían de las regiones más apartadas y descansaban allí de su jornada, para continuar al día siguiente hacia San Vicente. Otro sitio, frecuentemente utilizado, fue La Ye, ubicado en donde terminan las estribaciones de la cordillera y empieza la enorme planicie de los llanos del Yari, a cuatro horas de San Vicente.

Con el paso del tiempo, y después de la construcción de la sede de negociaciones en Los Pozos, Marulanda comenzó a asistir con frecuencia a la misma, a sólo 30 kilómetros de San Vicente del Caguán, lo que hizo menos duro el trabajo de los negociadores, que habían tenido que acostumbrarse a recorrer largas distancias por caminos estrechos y precarios para cumplir con su misión.

Con esta tradición de cercanía con los llanos del Yari, no era extraño que Marulanda presentara su idea de desarrollo agropecuario de dicha región a la comunidad internacional, lo que para el Gobierno era muy significativo, pues siempre le habíamos insistido acerca de la importancia de contar con el apoyo y financiación de la comunidad internacional en este tipo de proyectos.

La propuesta de Marulanda tuvo algunos desarrollos posteriores que incluyeron una visita a la zona de representantes de los países miembros de la

Comisión Facilitadora Internacional y varios estudios de análisis de suelos por parte de expertos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

Es una lástima que las dificultades que se presentaron más adelante hubieran impedido la concreción de este plan, pues hubiera sido, sin duda, un buen punto de apoyo para generar alternativas de trabajo en el campo a los guerrilleros que abandonaran las armas y se reincorporaran a la sociedad.

DOS NUEVOS ESCOLLOS

El 8 y 9 de marzo, según lo previsto, se llevó a cabo en Los Pozos la reunión de los negociadores del Gobierno y la guerrilla con los embajadores y representantes de 26 Estados, y, lo que fue muy importante, se determinó la constitución formal de la Comisión Facilitadora Internacional, como grupo de enlace e información con el resto de países amigos, constituida por los diez antes mencionados.

Al formalizar la creación del Grupo de Países Facilitadores, la Mesa también acordó invitarlos para que apoyaran proyectos de cooperación en temas de sustitución de cultivos y en lo relacionado con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Incluso, sobre estos dos temas, se planeó la realización de dos foros internacionales.

Sin embargo, dos graves hechos enturbiaron las relaciones entre los países amigos, las Naciones Unidas y las FARC.

En primera instancia el secuestro de Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta, quien fue plagiado por las FARC el 15 de julio, cuando se encontraba en el acto de inauguración de un puente en compañía de funcionarios de las Naciones Unidas. El secuestro de Jara, de por sí grave como todos los secuestros, tuvo además una connotación especial, pues el ex gobernador fue sacado de un vehículo con distintivos de las Naciones Unidas, estando, además, en compañía de funcionarios de dicho organismo, lo cual implicaba una clara violación de la inmunidad diplomática de la que goza esa entidad.

El secuestro de Jara generó fuertes reacciones internacionales. Diferentes gobiernos y organismos multilaterales condenaron el secuestro y la violación de la inmunidad de las Naciones Unidas, y el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, se pronunció enérgicamente contra el episodio. Como es natural, el Gobierno también reaccionó de inmediato, tanto de manera pública como en la Mesa de Negociación, no sólo por el hecho grave del secuestro, sino por las connotaciones internacionales que tenía.

Las FARC, sordas al mundo, no entendieron la gravedad de lo que habían hecho ni sus implicaciones en el campo de la cooperación internacional y, por el contrario, declararon a Jara como secuestrado político canjeable, por lo que todavía sigue secuestrado.

En medio de la delicada situación, se presentó una discusión que dejó ver hasta qué punto estaban alejadas las FARC de la realidad internacional. En una ocasión posterior al secuestro del ex gobernador Jara, después de que los negociadores del Gobierno le manifestaran a la guerrilla las graves implicaciones de este acto, Carlos Antonio Lozada y Simón Trinidad respondieron con un enrevesado análisis político del que sacaron la siguiente insólita conclusión: el secuestro de Jara era un incidente menor debido a que las Naciones Unidas era un organismo intrascendente que muy pronto desaparecería y sería reemplazado por un nuevo eje internacional conformado por China y Venezuela, cabezas de la revolución en el mundo. Los negociadores del Gobierno y el comisionado, asombrados ante esta afirmación, les preguntaron a los guerrilleros si hablaban en serio, a lo que Trinidad, con evidente molestia, les contestó que ellos no hacían bromas con sus planteamientos y reiteró que no les importaba, en absoluto, la opinión de las Naciones Unidas, pues ese organismo muy pronto desaparecería.

El otro hecho que agrietó las relaciones de las FARC con el grupo de países amigos fue el secuestro de tres cooperantes alemanes, miembros de la GTZ, acontecido el 18 de julio en el departamento del Cauca.

Los tres alemanes estaban adelantando un proyecto de cooperación con los indígenas de la zona cuando un grupo de guerrilleros, aparentemente bajo el mando de Alfonso Cano, los secuestró. Esto suscitó la reacción inmediata de los países europeos y de la propia Unión Europea, y llevó a que los países miembros de la Comisión Facilitadora Internacional se reunieran con las FARC y les plantearan la gravedad de esta situación, diciéndoles que ponía en peligro la participación de los europeos en el grupo, posición con la que se solidarizaron los demás países. Las FARC, con un poco más de sensatez, se comprometieron a darle una solución inmediata al tema, una vez se confirmara que el secuestro había sido realizado por miembros de esa organización.

Después de algunos días, la autoría de este grupo quedó confirmada y, de inmediato, el Grupo de Países Facilitadores reiteró la exigencia a las FARC para que liberaran a los tres alemanes. Marulanda y Reyes dijeron que ya habían dado la orden para hacerlo, pero siguieron pasando los días sin que se produjera la esperada liberación, lo que llevó a que dichos países cancelaran las reuniones que estaban previstas con la guerrilla. Todo indicaba que, en este caso, existían graves fisuras en la línea de mando de las FARC, pues, aunque la orden de liberar a los alemanes había sido dada por Marulanda en la Zona de Distensión, no había sido acatada por Cano o por los hombres bajo su mando.

La presión sobre las FARC era constante por parte de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y el Gobierno en la Mesa de Negociación, pero la guerrilla, argumentando que una organización revolucionara no se dejaba presionar, endurecía su posición y no avanzaba en la solución que sólo

estaba en sus manos. Además de la insistencia en la Mesa y de varias comunicaciones que el comisionado le envió a Marulanda, el Gobierno también tomó la determinación de cancelar una reunión internacional que se había programado para el mes de septiembre.

El 11 de agosto, entre tanto, gracias a una audaz y bien planeada operación de las fuerzas de seguridad del Estado, fueron capturados en el aeropuerto Eldorado de Bogotá tres ciudadanos irlandeses que venían de la Zona de Distensión y se disponían a abandonar el país. Según todas las pruebas disponibles, se trataba de miembros del Ejército Republicano Irlandés, IRA, que habían estado adiestrando a la guerrilla colombiana en la fabricación y manejo de explosivos con fines terroristas.

Por esos días, en una ocasión en que los voceros del Gobierno requerían a las FARC la liberación inmediata de los cooperantes y de Alan Jara, en medio de un clima de tensión y enfrentamiento, Joaquín Gómez, aburrido de la discusión, rompió el hielo con esta frase típica de su repentismo y su humor negro:

—No sé por qué el Gobierno insiste tanto en la liberación de los cooperantes alemanes. ¡Si a nosotros también nos capturaron unos "cooperantes" irlandeses y no hemos dicho nada!²³

Finalmente, uno de los tres cooperantes secuestrados se escapó de sus captores en los últimos días de septiembre y los otros dos fueron liberados por las FARC a comienzos de octubre, cuando la dinámica del proceso estaba afectada por otros hechos violentos a los que luego me referiré. Se trataba de un gesto que, como muchos otros de la guerrilla, llegaba demasiado tarde.

²³ James Monaghan, Niall Connolly y Martin McCaulley permanecieron en prisión hasta abril de 2004 cuando salieron en libertad condicional gracias a una sentencia de un juez especializado. En diciembre de 2004, dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, que los encontró culpables del delito de "entrenamiento para actividades ilícitas" y los sentenció a 17 años de prisión. Los tres irlandeses salieron clandestinamente de Colombia y hoy se encuentran en su país, con una orden de captura internacional pesando sobre sus cabezas. El presidente Uribe ha anunciado que buscará su extradición y el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, ha señalado que considerará esta petición.

Vientos de libertad

En enero de 1988, cuando era candidato a la Alcaldía de Bogotá, fui sacado de mi sede de campaña y secuestrado por el grupo de Los Extraditables que lideraba Pablo Escobar. Gracias a una extraña casualidad, la Policía me rescató una semana después, en desarrollo de un operativo que no estaba destinado a encontrarme sino a buscar al también secuestrado, y ese mismo día asesinado, procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Fueron siete días que parecieron una vida entera, por la zozobra que se vive en las condiciones infrahumanas del secuestro, cuando la vida y la libertad personal quedan a merced de unos delincuentes.

Todo aquel que ha vivido la terrible experiencia de un secuestro —infortunadamente muchas personas en nuestro país—, sea por unas horas, por meses o por años, sabe a qué me refiero. La indefensión y la falta de control sobre el propio destino, la preocupación por el dolor y la angustia de la familia, son sentimientos que no se pueden olvidar.

Sé lo que es un secuestro y, por fortuna, sé también lo que es regresar a la libertad, que no es otra cosa que “volver a vivir”, pues en el secuestro se permanece en una especie de “vida suspendida”. Mi propia experiencia personal me ayudó, por eso, a entender de manera más cercana el drama por el que pasan todos los secuestrados en Colombia y, muy particularmente, la tragedia que vivían los soldados y policías que por varios años habían estado en poder de la guerrilla.

Entendía y sentía la injusticia que se cometía con estos hombres que, luchando por defender la vida y libertad de sus compatriotas, estaban ahora privados de su propia vida y libertad. También comprendía el dolor inmenso de sus familias. Sabía lo que sus madres y padres estaban sufriendo pues mis padres también lo habían sufrido. Sabía la angustia que sus esposas o novias estaban sintiendo pues Nohra también la había padecido durante esos días terribles.

Están marcados en mi memoria, con tinta indeleble, los dos momentos cruciales de mi secuestro: el primero, cuando fui arrebatado a la fuerza de mi oficina en Bogotá, por un grupo comandado por John Jairo Velásquez, alias *Popeye*, principal lugarteniente de Pablo Escobar, con una pistola

apuntando a mi cabeza, esposado e introducido en el maletero de un auto hacia un destino incierto. El segundo, cuando vi la imagen anhelada de la libertad en los rostros de los policías que me rescataron y de las personas queridas que me recibieron con lágrimas de alegría. Por eso mismo, tampoco podré olvidar los gestos de felicidad que se dibujaron en los soldados cuya libertad pudimos conseguir a través de un acuerdo humanitario arduamente luchado.

A diario, en nuestro país, son rescatadas víctimas del secuestro, calculándose que, de cada 100 secuestrados, la Fuerza Pública rescata 18, en desarrollo de valientes y calculados operativos.

Resulta claro que es una obligación del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la liberación de todos los secuestrados. Sin embargo, antes que la misma liberación, su primer deber es proteger su vida.

Por eso, además de los cientos de colombianos que fueron liberados mediante operativos de rescate, también logramos en mi gobierno —cuando el rescate podía poner en peligro la vida de los secuestrados— el regreso a casa de más de 450 secuestrados, a través de la negociación política con los grupos guerrilleros. No son muchos los episodios en la vida nacional en los que se puede contar que se ha logrado, mediante la negociación, la libertad de tantas personas.

Los soldados, policías y agentes del DAS que tenía secuestrados el ELN; los ciudadanos secuestrados por este mismo grupo de forma masiva, como los pasajeros y tripulación de la aeronave de Avianca, los feligreses de la iglesia La María en Cali y los secuestrados en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, además de los soldados y policías que por tanto tiempo estuvieron secuestrados por las FARC, fueron los casos más impactantes en mi gobierno.

En cada uno de ellos logramos la libertad de la mayoría de los secuestrados, gracias a las discusiones que se dieron en torno al proceso de paz y a los acuerdos que firmamos. Sin duda, el de mayor impacto y con mayores repercusiones fue el llamado "Acuerdo Humanitario" que se firmó el 2 de junio de 2001 con las FARC y, el más dramático de todos, el episodio, que relaté unos capítulos atrás, del secuestro realizado por el ELN en el kilómetro 18 de la vía al mar. También se dieron liberaciones que marcaron una pauta fundamental, como la que se pactó con el ELN, sin contraprestación alguna por parte del Estado colombiano, en diciembre de 2000, gracias a la cual 39 soldados y policías y 3 agentes del DAS pudieron, después de años de cautiverio, pasar de nuevo la Navidad con sus familias.

Este último episodio demostró que sí era posible lograr las liberaciones masivas de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados y, de alguna manera, presionó a las FARC —así ellas nunca lo hayan reconocido— a avanzar con mayor realismo y apertura hacia un acuerdo humanitario.

Como jefe de Estado, siempre di instrucciones para que se procurara, por todos los medios posibles, la liberación de todos los secuestrados que había

en el país, y no dudé en utilizar el mecanismo del diálogo y la negociación como un instrumento más para que muchos alcanzaran la libertad. Hoy sigo convencido de que una negociación política es la mejor fórmula para acabar con el secuestro por parte de los grupos guerrilleros.

Eso sí, no se trataba de llegar a cualquier tipo de acuerdos. Era necesario lograr acuerdos que no sentaran precedentes inconvenientes para el Estado ni entregaran ventajas estratégicas a los grupos al margen de la ley, y, sobre todo, que estuvieran siempre dentro del marco de la legalidad.

Hoy, cuando este tema del acuerdo humanitario se ha convertido en una especie de mito inalcanzable, implorado por los familiares de los políticos, oficiales y suboficiales que aún continúan secuestrados, vale la pena repasar, con algún detalle, cómo fue el complejo, y al final exitoso, camino que nos llevó a la liberación de más de 320 soldados y policías secuestrados por las FARC, que hoy disfrutan, por fortuna, del derecho a una vida sin cadenas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO HUMANITARIO

—Presidente, ¡acabo de firmar el acuerdo humanitario! La libertad de gran parte de nuestros hombres es un hecho.

Con estas palabras emocionadas, el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, me confirmó el 2 de junio de 2001, desde la Zona de Distensión, una de las mejores noticias que tuvimos los colombianos en muchos años.

Para llegar a ese momento feliz habían transcurrido años de negociaciones, acercamientos y rupturas que empezaron desde el mismo inicio de mi gobierno. Se habían discutido toda clase de alternativas y mecanismos, desde reformas constitucionales hasta la apelación a la ayuda de terceros países, y habíamos logrado, finalmente, una fórmula que cumplía con la necesaria conjunción de un objetivo: la libertad, y un medio: la legalidad.

Con este acuerdo, que fue, sin lugar a dudas, un resultado claro del proceso de paz, se demostró que, gracias a una negociación firme y adecuada, es posible superar y vencer las pretensiones irreales o exageradas de la guerrilla para llegar a soluciones bien distintas, acordes con la ley y los intereses de todos los colombianos.

Esta larga historia comenzó con la captura por parte de las FARC de soldados y policías en diferentes ataques a poblaciones o a apartadas bases militares. La mayor parte de los secuestrados habían sido capturados entre 1996 y 1998, cuando las Fuerzas Militares adolecían de particulares dificultades de reacción y movilización, en dolorosos episodios cuyo recuerdo todavía lastima la memoria nacional. Puerres, El Billar, Patascoy, Miraflores, entre otros, fueron duros golpes para nuestra Fuerza Pública que minaron la moral de sus hombres y de todo el país, y dejaron cientos de uniformados secuestrados en poder de la guerrilla. Incluyendo algunos pocos que fueron

luego capturados durante mi gobierno, las FARC tenían en su poder a cerca de 370 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.

De hecho, desde 1997, las FARC, en el Pleno de su Estado Mayor, habían decidido utilizar estos secuestrados como botín para ser luego intercambiados en lo que ellos llamaban "canje de prisioneros de guerra". Desde el punto de vista de la guerrilla, que no corresponde, por supuesto, a la naturaleza de nuestro conflicto ni al enfoque del Gobierno ni de la sociedad en general, los soldados y policías que capturaban eran considerados "prisioneros de guerra", no rehenes o secuestrados, y los guerrilleros presos en las cárceles colombianas por diversos delitos eran considerados, a su vez, "prisioneros de guerra" tomados por el Estado colombiano.

Partiendo de esta interpretación, Manuel Marulanda propuso públicamente, en mayo de 1998, antes de iniciar mi gobierno, la idea del canje, según la cual, por cada soldado o policía que las FARC liberaran, el Estado tendría que entregar un guerrillero preso. Incluso, llegó a plantear que el canje debía hacerse de acuerdo con los rangos que cada uno tuviese. Esta idea resultaba inaceptable desde el punto de vista moral y no tenía ninguna posibilidad de tipo legal. Sin embargo, fue la que las FARC, y sobre todo Marulanda, quien lideró personalmente este tema, mantuvieron durante la mayor parte de las negociaciones.

En realidad, más allá de lograr la libertad de sus hombres, la guerrilla pretendía con su propuesta de canje obtener un tratamiento igual al del Estado, con lo cual consideraba que alcanzaría, a la luz de los convenios de Ginebra, el estatus de "fuerza beligerante", algo que siempre ha sido una obsesión para las FARC.

Cuando este grupo intentó infructuosamente apoderarse de Mitú, la capital del departamento de Vaupés, en noviembre de 1998, lo hizo precisamente para alcanzar uno de los requisitos de la beligerancia, como lo es el de la ocupación efectiva territorial. Con la propuesta del canje de "prisioneros de guerra", las FARC buscaban también el mismo objetivo, pues, desde su punto de vista, un canje implicaría el reconocimiento de un conflicto entre dos fuerzas equivalentes.

Lo que no contemplaban las FARC es que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra sobre aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en el cual fundan su reclamo de beligerancia, se aplica a todo conflicto interno armado y que el respeto al DIH obliga a todas las partes de dicho conflicto. Vale decir, las FARC están obligadas, entre otras cosas, a no practicar el secuestro y la extorsión; a no usar armas no convencionales, como las minas antipersonal y los cilindros cargados de explosivos; a respetar a la población civil y a no cometer actos de terrorismo. Irónicamente, reclaman beligerancia con base en el mencionado Protocolo, pero infringen continuamente las normas del DIH, con lo que quitan todo sustento a su posición.

Ahora bien, aunque la idea del canje no resultaba susceptible de realizar, tampoco parecía posible un rescate exitoso de los uniformados secuestrados a través de una operación militar. Los obstáculos geográficos y tácticos impedían cualquier intento de rescate pues resultaba claro que se pondría en grave peligro la vida e integridad de los secuestrados, a los que la guerrilla había dado orden de matar antes que permitir su liberación por la fuerza. Luego vinimos a saber, por los testimonios de los mismos secuestrados, que en algunas ocasiones la guerrilla había puesto explosivos en los sitios en los que se encontraban los soldados y policías, incluso debajo de sus mismos camastros, con la amenaza de explotarlos al primer intento de rescate o de fuga.

La influencia de los medios fue otro factor que tuvo importancia en este proceso, unas veces para bien, otras para mal. Por un lado, el drama humano de estos hombres fue conocido por los colombianos gracias a las imágenes dramáticas que difundieron, lo cual sensibilizó la conciencia del país. Por otra parte, muchas veces esas imágenes fueron proporcionadas o facilitadas por la misma guerrilla como una forma de presionar al Gobierno, a través del impacto emocional que generaban en la opinión pública, para que cediera ante sus pretensiones.

Es preciso reconocer el trabajo que realizaron las asociaciones de los familiares de los militares y policías secuestrados. Muchas de estas familias, humildes y de escasos recursos, se unieron y realizaron enormes esfuerzos para que la opinión pública conociera la tragedia que sufrían y para que el Gobierno avanzara hacia la búsqueda de alternativas para la liberación. Lograron que la guerrilla entregara las primeras pruebas de supervivencia y consiguieron que dos madres pudieran visitar a los secuestrados, llevándoles una voz de aliento en medio de su terrible situación.

Mujeres de un inmenso valor moral como Marleny Orjuela y Carmen Elisa Núñez fundaron la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos por Grupos Guerrilleros, Asfamipaz, y han adelantado, desde esta asociación, una labor continua y encomiable en procura de la libertad de sus seres queridos.

La guerrilla, por supuesto, manipulaba el dolor de los familiares logrando incluso convencerlos, así fuera de manera transitoria, de que el culpable de su drama era el Estado por no aceptar el canje que proponían, y no ellos como captores. La verdad es que, mientras para el Gobierno y el país entero la libertad de los secuestrados era un asunto humanitario, para la guerrilla no pasaba de ser una estrategia a través de la cual buscaba obtener resultados políticos.

Conscientes de todos estos elementos, entablamos las negociaciones para obtener la libertad de nuestros secuestrados. Si bien la idea del canje era inaceptable, era ya una propuesta. La obligación del Gobierno hacia los secuestrados y sus familias era la de lograr su liberación, buscando, con in-

genio y cuidado, y siempre dentro del marco de la ley, otras alternativas que nos llevarán a su liberación.

Desde los inicios del proceso de paz, el entonces alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, y Manuel Marulanda determinaron manejar el tema por fuera de la Mesa de diálogo y negociaciones, para no interrumpir con él las discusiones propias del proceso. Fue una decisión correcta, sin duda, pues evitó que las deliberaciones de la Mesa se empantanaran por cuenta de un asunto tan complejo como ese.

Por otra parte, mientras Marulanda delegaba el manejo de buena parte de los diálogos y las negociaciones con el Gobierno en el equipo de negociadores de las FARC, se reservó para sí las discusiones sobre el pretendido "canje", que derivaron, finalmente, en el acuerdo humanitario. Por lo mismo, el tema se trató, casi siempre, a través de negociaciones directas entre el líder guerrillero y el comisionado, el cual obraba en coordinación permanente con las diferentes instancias del Estado, no sólo del Gobierno.

No obstante, al comienzo de mi mandato, Marulanda buscó manejar su propuesta de canje directamente con el Congreso de la República. En efecto, en agosto de 1998 envió una carta al entonces presidente del Senado, Fabio Valencia Cossio, oficializando su propuesta de buscar una ley de canje permanente e invitando al Congreso a discutir el tema con la guerrilla.

El senador Valencia entendió que este asunto no podía ser tratado en forma independiente al proceso de paz que había comenzado mi gobierno y, en lugar de responderle, lo que hizo fue remitirme la carta de Marulanda, para que yo la considerara en mi condición de jefe de Estado. A las FARC, por supuesto, no les gustó la prudente actitud de Valencia, pues lo que buscaban, de alguna manera, era generar una división entre los poderes del Estado, consiguiendo con uno lo que podía ser difícil alcanzar con el otro.

Con este episodio se reafirmó que la dirección de la política de paz corresponde al presidente de la República quien, como jefe de Estado, obra con la debida coordinación con las demás ramas del poder público.

En septiembre de ese año, frustrado su intento de aproximación con el Congreso, Marulanda me hizo llegar una carta reiterando su propuesta de intercambio entre los soldados y policías que ellos tenían, y los guerrilleros presos en las cárceles, y anexando la lista de los militares y policías que las FARC reconocían tener en su poder.

El envío de la lista generó un problema adicional, pues en ella no aparecían algunos hombres que en los registros de las Fuerzas Armadas figuraban como desaparecidos o secuestrados en combates con la guerrilla, lo que nos obligó, en adelante, a indagar insistentemente por la suerte de quienes no figuraban. Algunos errores fueron corregidos, incorporándose nuevos nombres. Sin embargo, sobre algunos otros nunca fue posible lograr más información.

A su vez, le pedimos a Marulanda que concretara también cuáles eran los hombres de las FARC a los que él se refería en su propuesta de canje. La lista que nos enviaron, con 488 nombres, fue verificada por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, encontrándose, tan sólo con la primera verificación, que 71 de los supuestos guerrilleros no estaban en las cárceles. De los restantes presos, el 48% estaban condenados por algún delito y el 52% se encontraban sindicados, en etapa de investigación o de juicio.

Supimos, por entonces, que en las cárceles se comenzaron a realizar toda clase de transacciones entre presos con el fin de alcanzar un puesto en la lista de supuestos canjeables, sin importar si se trataba o no de miembros de las FARC. También fueron detectados casos de personas que habían sido incluidas en la lista enviada por las FARC, las cuales era evidente que no pertenecían a dicha organización. Tal fue el caso de Francisco Caraballo, líder guerrillero del EPL, que apareció incluido en dicha lista. Estas inconsistencias generaron nuevas dificultades para avanzar en el proceso, y nos ratificaron en la certeza de que el objetivo principal del canje propuesto por la guerrilla, más que la libertad de sus hombres, era de carácter político.

Al terminar los casi tres años de negociaciones que tomó alcanzar el acuerdo humanitario, los argumentos del Gobierno salieron airoso frente a las pretensiones iniciales de la guerrilla. No hubo una ley de canje, ni permanente ni transitoria; no hubo un reconocimiento de la existencia de los guerrilleros como prisioneros de guerra, ni se modificaron las condiciones o el estatus jurídico de las FARC. Por el contrario, el acuerdo final se basó en una aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, en conjunción con la legislación interna del país. Esto demuestra que, con una estrategia adecuada, siempre es posible llegar a acuerdos satisfactorios, así al inicio la posición de la guerrilla pareciera extremista o irrealizable. Lo importante es no cejar, obrando siempre con paciencia y buenas razones, y, sobre todo, con voluntad de llegar a un resultado.

Dentro del Gobierno constituí un equipo jurídico, integrado por el alto comisionado, Víctor G. Ricardo; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, y el secretario jurídico de la Presidencia, Jaime Arrubla, para revisar el aspecto legal de cualquier alternativa que pudiera llevarnos a la liberación negociada de los soldados y policías. Con base en sus recomendaciones, se presentó, antes del inicio formal de los diálogos el 7 de enero de 1999, un proyecto de reforma constitucional que daba facultades especiales al presidente de la República para avanzar en un acuerdo que culminara en la liberación de los secuestrados, así como en la eventual libertad de algunas personas sindicadas o condenadas por delitos políticos y conexos, vinculadas a un proceso de paz, reforma que, a la postre, se hundió en el Congreso de la República.

A fines de 1999, un grupo de parlamentarios presentó, después de varias reuniones con la guerrilla, otro proyecto de ley en el que se fijaban las

condiciones para que se realizara un acuerdo humanitario, incluyendo una modificación al Código de Procedimiento Penal para facilitar la libertad de los guerrilleros presos, proyecto que abría indebidamente la puerta para una especie de canje permanente y que, por fortuna, no prosperó.

A la hora de la verdad, cuando se concretó finalmente, en el 2001, el acuerdo humanitario, no fue necesaria más que la expedición de un decreto reglamentando la Ley 418 de 1997, que otorgaba, de por sí, facultades suficientes al presidente para ejecutar un acuerdo de estas características.

Ahora bien, mientras en el Gobierno no se abandonaba jamás el tema, tampoco los familiares de los soldados y policías secuestrados desfallecían en sus esfuerzos por obtener la libertad de sus seres queridos. Se reunían constantemente con congresistas y líderes de opinión, llegando incluso a ser escuchados en las sesiones del Congreso.

Finalmente, y después de muchos intentos fallidos, un grupo de madres de los soldados fue recibido, en diciembre de 1999, por Manuel Marulanda y el Mono Jojoy. La reunión fue emotiva, con momentos de llanto y de ilusión por parte de las angustiadas mujeres. Sin embargo, la solución que les dieron los guerrilleros no fue otra que la de pedirles que ayudaran a presionar al Gobierno para que promoviera y sacara adelante la Ley de Canje que ellos habían propuesto.

Lo único concreto que obtuvieron las madres de esa visita fue la promesa de que permitirían que algunas de ellas vieran a los soldados y policías secuestrados. Unos meses después, a fines de septiembre de 2000, Marleny Orjuela y Amparo Rico, en representación de las madres y familiares de los uniformados secuestrados, fueron llevadas por la guerrilla a un lejano paraje de la selva, donde tuvieron oportunidad de encontrarse con muchos de ellos, que las abrazaban y lloraban en sus brazos como si todos fueran sus hijos.

Ellas fueron las únicas personas diferentes a la guerrilla que lograron verlos durante sus años de cautiverio. Las escenas de este encuentro se conocieron después por los medios y conmovieron al país y al mundo, al constatarse las condiciones inhumanas en que se encontraban los secuestrados, hacinados y famélicos detrás de alambres de púas y en medio del barro de la selva. Era inevitable traer a la memoria las duras escenas de los campos de concentración en Europa y Asia, cuya nefasta existencia se creía superada por la humanidad.

DE LA "LEY DE CANJE" AL ACUERDO HUMANITARIO

Descartada de plano la posibilidad de una ley de canje como la que planteaban las FARC, el Gobierno continuó insistiendo en la posibilidad de buscar una salida que tuviese el carácter humanitario que la situación ameritaba. Las posiciones parecían, sin embargo, estar muy separadas pues, con

el hundimiento de la ley que se tramitaba en el Congreso, el tema había sufrido un nuevo enfriamiento.

A mediados de marzo del 2000, el alto comisionado, Víctor G. Ricardo; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, y el secretario jurídico de la Presidencia, Jaime Arrubla, se reunieron con Marulanda y sus hombres para reactivar el tema. El malestar de la guerrilla por el hundimiento del proyecto de la ley de canje era evidente. Marulanda les dijo a los delegados del Gobierno:

—Yo ya acudí a los tres poderes para lograr una solución, pero no se pudo. Ahora le tocará al jefe del Estado encontrarla.

En esa ocasión el jefe guerrillero llegó "armado" con un estudio legal que habían preparado algunos comunistas italianos, amigos de las FARC, sobre el tema, y presentó una nueva alternativa: que los soldados y policías en su poder y los guerrilleros que estaban en las cárceles colombianas fueran entregados a la Cruz Roja Internacional para que ésta los llevara a un tercer país donde permanecerían hasta que se llegara a un acuerdo o se solucionara el conflicto colombiano.

Si bien es cierto que la propuesta tenía la ventaja de ser una alternativa diferente al canje, tampoco resultaba aceptable porque no solucionaba el problema de fondo y, además, podía tener consecuencias internacionales similares a las que tendría el canje, ya que se daría a los guerrilleros el tratamiento de prisioneros de guerra, como si las FARC fueran una fuerza beligerante y, de alguna manera, equivalente al Estado colombiano.

Por su parte, el Gobierno insistió nuevamente en que la ley de canje no era viable bajo ninguna circunstancia y que resultaba indispensable encontrar una alternativa, enmarcada en los parámetros humanitarios, que incluyera no sólo a los militares y policías secuestrados sino también a los civiles que se encontraban en poder de las FARC.

Marulanda culminó la reunión con una sentencia lapidaria:

—Si no podemos llegar a un acuerdo en algo tan sencillo, será imposible, entonces, ponernos de acuerdo en los demás temas que son tan importantes para el país.

En mayo de 2000 se presentó un relevo en el cargo de alto comisionado para la Paz, y Camilo Gómez retomó las negociaciones tendientes a la liberación de los secuestrados en el difícil punto al que habían llegado. En la primera reunión que sostuvo con Marulanda sobre el tema, el jefe guerrillero hizo una recapitulación sobre lo que se había discutido hasta el momento y volvió a plantear las tres opciones que las FARC consideraban viables: una ley de canje de carácter permanente que permitiera el intercambio de los soldados y policías por igual número de guerrilleros; una ley de intercambio por una sola vez que tuviese el mismo efecto y, por último, internar a los soldados y policías, así como a los guerrilleros presos, en un tercer país hasta que se alcanzara un acuerdo final. En esa ocasión,

Marulanda hizo públicas las posibilidades, lo que generó un nuevo debate en el país.

La opinión pública, entre tanto, seguía estremeciéndose con las historias de los hombres que se encontraban en poder de la guerrilla y, en especial, con la divulgación de la dramática situación del teniente coronel Álvaro León Acosta, un oficial de la Policía que había sido apresado por las FARC después de que su helicóptero fuera derribado. Junto con él estaban tres hombres más que también habían sido capturados en esa misma oportunidad, en una zona montañosa al norte del Valle del Cauca.

La situación del coronel Acosta era dramática pues, a raíz del accidente, había quedado semiparalizado y no podía caminar. El país y la comunidad internacional, al enterarse de sus precarias condiciones de salud, vieron en él a un símbolo de la crueldad y de las condiciones inhumanas en que se encontraban todos los secuestrados.

El coronel Acosta, en su lucha por la vida, hizo llegar varias cartas, que sus compañeros de cautiverio escribían por él, en las que describía la terrible situación que vivía y le pedía al Gobierno que avanzara con rapidez en la realización de un acuerdo humanitario. Incluso su esposa logró realizar algunos contactos con los guerrilleros que lo tenían en su poder, los cuales estaban bajo el mando de Pablo Catatumbo. Se decía, entonces, que sus compañeros tenían que alimentarlo y llevarlo al baño y que el agravamiento de sus condiciones de salud lo tenía al borde de la muerte.

El país acababa de conocer una de estas comunicaciones del coronel Acosta cuando, el 8 de septiembre de 2000, ocurrió la fuga del guerrillero Arnubio Ramos, quien secuestró un avión de la aerolínea Aires y lo hizo desviar hacia la Zona de Distensión. Esta circunstancia fue aprovechada de inmediato por las FARC para proponer que se realizara un "canje" entre el secuestrador del avión, que ya estaba con ellos, y el coronel. Sin embargo, no podíamos aceptar esta propuesta pues sería la legitimación de hecho del concepto de canje, uno a uno, de guerrilleros por secuestrados.

La organización Human Rights Watch, que siempre se ha caracterizado por sus posiciones críticas frente al Estado, defendió, entonces, la posición del Gobierno diciendo: *"El que tiene la responsabilidad de la salud del coronel no es el Gobierno, ni la Policía, ni las Fuerzas Militares, sino que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el grupo irregular"*.

Entre tanto, pese a las dificultades, nuevas alternativas empezaban a abrirse paso. Me reuní con el comisionado y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, para discutir abiertamente sobre las diversas opciones que teníamos. Nunca descartábamos la del rescate militar, pero éramos conscientes de que presentaba un gran riesgo para nuestros hombres, aparte de que no teníamos ninguna certeza sobre su localización. Pensando en esto, en esa reunión dejé encomendadas dos tareas: el Comando General de las Fuerzas Militares elaboraría un documento

en el que se analizaran todas las alternativas, graduando su viabilidad y su conveniencia desde la óptica militar, y la Oficina del Alto Comisionado se encargaría de realizar los análisis de tipo legal y político en el marco de la negociación.

A fines de octubre de 2000, el comisionado se reunió con Manuel Marulanda y acordaron discutir una fórmula más concreta para empezar a poner en blanco y negro lo que sería el acuerdo. La alternativa que se comenzó a trabajar en ese momento era netamente humanitaria, y había surgido, de alguna manera, del debate generado por el drama del coronel Acosta: dar prioridad en la liberación a aquellos que se encontraran enfermos.

Ya empezando el mes de noviembre, el general Tapias me hizo entrega del estudio en el que los militares analizaban las diversas opciones para lograr la liberación de los secuestrados, catalogándolas según su viabilidad y conveniencia. La conclusión, después de estudiar cinco escenarios posibles, fue que un acuerdo o intercambio humanitario de guerrilleros presos por los militares y policías secuestrados era la alternativa que presentaba mayores ventajas. Eso sí, el Gobierno y los militares teníamos claro que una fórmula como ésta de ninguna manera podría beneficiar a guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad.

Este informe era de la mayor importancia pues implicaba una postura más flexible en las Fuerzas Armadas, en cuyo interior se había presentado, en un principio, una oposición a cualquier tipo de acuerdo de liberación. Algunos oficiales consideraban que un acuerdo de este tipo podría ser contraproducente para la moral de la tropa, que, ante la certeza de que su libertad sería luego pactada, podría optar por rendirse antes que combatir en condiciones adversas.

A partir del documento de los militares iniciamos, dentro del Gobierno, la estructuración de los mecanismos legales y prácticos para hacer realidad esta alternativa: vías legales para el acuerdo; posibles objeciones jurídicas y políticas; análisis de los presos de las FARC como posibles beneficiarios del acuerdo; mecanismos para establecer el estado de salud de los presos enfermos, etc.

El afán de las FARC era evidente y Marulanda presionaba cada vez más al Gobierno para obtener un pronto resultado. A pesar de ello, el 14 de noviembre, cuando debían iniciarse las discusiones de las propuestas de cese de fuegos, la guerrilla, sorpresivamente, volvió a congelar el proceso, bajo el pretexto de siempre de que no había suficiente compromiso del Estado en su lucha contra el paramilitarismo. El "florero de Llorente" en esta ocasión fueron las gestiones humanitarias que el entonces ministro del Interior, Humberto de la Calle, realizó ante Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas, para lograr la liberación de unos parlamentarios secuestrados. Para nosotros era claro que se trataba de otra disculpa más para no entrar en la discusión del cese de fuegos y hostilidades.

Sin embargo, las FARC fueron cuidadosas de no cerrar todas las puertas. Al comunicar la determinación del congelamiento, Marulanda afirmó también que la discusión del acuerdo humanitario no estaba congelada y que sobre ese tema estaría dispuesto a continuar conversando.

Tal como lo conté en otro capítulo, las conversaciones del comisionado con Marulanda se reanudaron a fines de noviembre, después de complejas gestiones que incluyeron el uso de un contacto secreto, que era una persona que generaba confianza en la guerrilla.

A partir de entonces, las reuniones fueron frecuentes. En más de diez ocasiones, durante el mes de diciembre, el comisionado y el jefe de las FARC discutieron las posibilidades del acuerdo.

La primera ronda se dio el primero de diciembre, cerca a un lugar conocido como La Ye, a unas cuatro horas de San Vicente. Ese día, Camilo, que estaba acompañado por Luis Fernando Ciales, le reiteró a Marulanda, quien estaba a su vez con el Mono Jojoy, Raúl Reyes y Joaquín Gómez, que el canje no era posible y que había sido descartado como una opción, y planteó la posibilidad de un acuerdo humanitario para la liberación de los soldados y policías que se encontraran enfermos, en el cual se contemplaba la liberación de algunos guerrilleros que se encontraran igualmente enfermos. Le explicó la necesidad de definir un procedimiento para identificar a los enfermos, elaborando una lista preliminar para examinar a los guerrilleros en las cárceles, y propuso la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR— para que se encargara de realizar los exámenes médicos, con lo cual se garantizaba la transparencia al procedimiento. El Gobierno basaba su propuesta en las normas del DIH que consideran a los enfermos como sujetos merecedores de una protección especial.

Las FARC reaccionaron con escepticismo frente a la propuesta e insistieron en el tema del canje. Sin embargo, no cerraron las puertas a esta alternativa y manifestaron una serie de inquietudes que respondimos unos días después. Al final de la reunión, el camino de la liberación de los enfermos había quedado planteado como una nueva vía para la libertad de nuestros hombres.

Durante los encuentros de diciembre se presentaron las listas de los que se consideraban como enfermos. La guerrilla entregó una lista de 38 soldados y policías y de cerca de 40 guerrilleros que, a su juicio y según la información que tenían, estaban enfermos. Ya se contaba con nombres concretos y el paso a seguir era acordar los procedimientos para evaluar el estado de salud, así como para realizar las liberaciones. El Gobierno insistió en que el CICR debería ingresar a los lugares en donde estaban los soldados y policías en poder de las FARC y a las cárceles donde estaban los guerrilleros presuntamente enfermos, para realizarles exámenes médicos, pero Marulanda se negó a permitir la visita de la Cruz Roja al lugar de cautiverio de los soldados. Según él, esta entidad no era de confianza y podía convertirse en un

instrumento de inteligencia militar o de los norteamericanos para descubrir los sitios en donde estaban los secuestrados.

El jefe guerrillero también estuvo reacio a la propuesta del comisionado para que la comunidad internacional participara en el proceso de liberaciones, cumpliendo una labor de acompañamiento y de verificación, y tampoco quería que el acuerdo quedara plasmado en un documento firmado. A la postre, después de muchas negociaciones, el acuerdo sí se plasmó en un documento, la comunidad internacional participó como garante y acompañante del proceso, y el CICR realizó los exámenes médicos a todos los guerrilleros que estaban presos. Lo que nunca fue posible era que aceptaran su ingreso al lugar donde tenían a los soldados y policías, así que este examen se pospuso hasta el momento mismo de la liberación.

Ya con las listas presentadas, el Gobierno continuó buscando fórmulas legales que permitieran la salida de los guerrilleros enfermos. No era fácil, ya que las normas del Código de Procedimiento Penal sólo permitían la salida de aquellos que tenían enfermedades graves, las cuales, según la jurisprudencia, debían ser verdaderamente extremas, como un cáncer terminal.

Se consideró, entonces, la opción de declarar el "estado de conmoción interior para la paz", consagrado en la ley estatutaria de los estados de excepción, una fórmula que resultaba ágil, pero que podía tener algunas dificultades de tipo político. En todo este análisis legal, el comisionado y su equipo realizaban consultas permanentes con el procurador y con el fiscal general, con el fin de que cualquier solución que se hallara fuera coordinada con las dos entidades que intervenían directamente en los procesos penales.

Paralelo a los estudios jurídicos, le ordené al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— y al Ministerio de Justicia que analizaran los expedientes de cada uno de los guerrilleros que habían sido incluidos en la lista de las FARC. Para sorpresa de todos, algunos de ellos ya habían salido de las cárceles por cumplimiento de pena u otros motivos, aunque la guerrilla los creía todavía presos. También comenzamos a avanzar en la realización de los exámenes médicos a aquellos que habían sido ubicados.

Durante diciembre, la Oficina del Alto Comisionado preparó el primer borrador escrito del acuerdo, que discutimos ampliamente dentro del Gobierno. El texto reflejaba la posición que el Gobierno siempre había tenido en la mesa de negociación y contenía también los instrumentos legales que hasta ese momento se habían desarrollado. Como era usual en estos temas, el comisionado mantenía permanentemente informados a los militares sobre los avances de las conversaciones, más aún en este caso, que tenía una especial sensibilidad para ellos.

El 27 de diciembre de 2000, en el mismo lejano paraje de la selva que ya se había hecho usual para estas conversaciones, las FARC recibieron de manos del Gobierno el texto del primer borrador. Por primera vez se veía "en blanco y negro", traducida en un papel, la esperanza de libertad para nuestros hombres.

La reunión fue tranquila y en ella el Gobierno reiteró la importancia de la participación de la comunidad internacional y la necesidad de realizar el proceso de la entrega de una manera muy discreta, pues ante todo se quería respetar la dignidad de los enfermos. Las FARC presentaron una nueva lista de 87 guerrilleros posiblemente enfermos y se quedaron con el documento, con el compromiso de analizarlo y de presentar sus observaciones unos dos días después.

De cualquier manera, para el Gobierno, el tema de los soldados y policías enfermos era apenas un primer paso, pues nuestra meta era lograr su liberación total. Por eso mismo, se le planteó a la guerrilla que aquellos que no estaban enfermos deberían ser liberados de manera unilateral, como parte del acuerdo. Por supuesto, la guerrilla al comienzo fue reticente ante la idea. Sin embargo, pocos días después, para nuestra complacencia y la de todo el país, anunció públicamente la intención de liberar un grupo adicional a los enfermos como consecuencia del acuerdo que se estaba discutiendo.

Todo parecía avanzar sin mayores tropiezos y en medio de un acelerado ritmo de trabajo, pero las dificultades aparecieron de nuevo. El 28 de diciembre, al día siguiente de que las FARC recibieran el borrador del acuerdo, cuando Raúl Reyes anunciaba desde la Zona la posibilidad de concretar el acuerdo humanitario antes de 15 días, en un paraje cercano a Florencia, Caquetá, las FARC asesinaron a Diego Turbay, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; a su madre, doña Inés Cote de Turbay, y a cinco personas más que viajaban con ellos. Este crimen atroz —que vino a sumarse a diversos ataques a poblaciones y a los secuestros de la joven Juliana Villegas, hija del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, y del ex ministro Fernando Araújo, cometidos en los últimos días— enturbió la negociación.

Comenzó, entonces, el año 2001 con estos graves sucesos sin resolver, y con el proceso congelado, situación ésta que no vino a remediarse sino hasta el 9 de febrero, a propósito de mi encuentro con Marulanda y la firma del trascendental Acuerdo de Los Pozos.

En dicho acuerdo, precisamente, dejamos establecido que *"se agilizaría la concreción del acuerdo humanitario que permita la próxima liberación de soldados, policías y guerrilleros"*.

Es así como, al final del mes de febrero se reiniciaron las discusiones al respecto, en el mismo punto en que se habían dejado. Manuel Marulanda presentó una serie de observaciones al borrador que el Gobierno le había entregado. Básicamente, insistía en que era innecesaria la presencia de la comunidad internacional como verificadora del cumplimiento del acuerdo y consideraba que existían condicionamientos que la guerrilla no podía aceptar, como el de aplicar el Derecho Internacional Humanitario y el compromiso de que los guerrilleros enfermos que fuesen liberados no volvieran a combatir. El comisionado, por su parte, defendió la posición del Gobierno sobre la importancia de la aplicación de las normas del DIH y de la participa-

ción de la comunidad internacional, y manifestó, además, que los guerrilleros serían entregados al Comité de la Cruz Roja en las cárceles.

En la siguiente reunión, ya empezando el mes de marzo, Manuel Marulanda llevó una contrapropuesta al documento del Gobierno, en la que se aceptaban la mayoría de los lineamientos planteados, con algunas diferencias, lo que nos hizo entender que las negociaciones, por fin, iban llegando a feliz término.

Con el documento en la mano, el comisionado se reunió con el ministro delegatario de Funciones Presidenciales, Rómulo González —ya que yo me encontraba en una visita oficial a la India y Malasia—, y con el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, para exponerles los avances alcanzados, buena parte de los cuales eran fruto de análisis y consensos previamente realizados dentro del Gobierno, con otras instancias del Estado y con los mismos militares.

Para asombro del ministro delegatario, dos días después el ministro de Defensa le envió un documento en el que hacía un extenso análisis del acuerdo, presentando observaciones y divergencias que ya se habían discutido y superado, lo que implicaba un grave retroceso en la discusión interna del acuerdo. El ministro González decidió devolver las observaciones al ministro de Defensa, indicándole que sería mejor que me las entregara directamente a mí, que regresaba al país ese mismo día. Luis Fernando, entonces, le envió el documento al comisionado, quien lo recibió con total sorpresa, pues su contenido desconocía todas las discusiones previas.

Lo peor de todo es que el documento interno con las observaciones del Ministerio de Defensa acabó siendo filtrado a los medios de comunicación, lo cual avivó la polémica pública al respecto y alertó a la guerrilla sobre estas discrepancias, de las que quisieron sacar provecho. Unos días después, y como reacción a esta situación, las FARC cambiaron por completo su posición y entregaron un nuevo borrador del acuerdo en el que se desdecían de los avances que se habían obtenido en la última reunión.

Para superar el *impasse*, cité a una reunión al ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez; al alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez; al ministro de Justicia, Rómulo González; al secretario general de la Presidencia, Eduardo Pizano, y al comandante general de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias. El objetivo era que entre todos discutiéramos las discrepancias internas y llegáramos a una conclusión. Después de un profundo debate, todos los asistentes estuvieron de acuerdo en el contenido de la propuesta gubernamental y el propio ministro de Defensa, así como el general Tapias, coincidieron en que se había alcanzado una fórmula adecuada.

Los encargados del análisis jurídico, por su parte, habían llegado, finalmente, a la conclusión de que, para realizar el acuerdo humanitario, no era necesario declarar el "estado de conmoción interior para la paz" y que sólo se requería expedir un decreto que reglamentara la Ley 418 de 1997, en don-

de estaban contenidas amplias facultades para que el presidente obrara en desarrollo de un proceso de paz. Se definió también el procedimiento mediante el cual, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se llevaría a cabo la liberación de los guerrilleros enfermos de acuerdo con el dictamen del Comité de la Cruz Roja.

El equipo del comisionado también analizó, en coordinación con las Fuerzas Militares, cada uno de los nombres contenidos en la lista presentada por la guerrilla, pues estaba claro que no podrían ser objeto del acuerdo aquellos guerrilleros acusados o condenados por secuestro o delitos atroces, ni tampoco aquellos que fueran considerados como jefes importantes. El resultado final fue una lista de apenas 15 guerrilleros enfermos que cumplieran con estas condiciones.

Con todos los instrumentos en la mano, el equipo negociador del Gobierno, acompañado por dos abogados asesores del comisionado, viajó el 25 de mayo a un nuevo encuentro con Manuel Marulanda, quien se había mostrado muy escéptico después de la situación creada por el documento del Ministerio de Defensa. El comisionado sabía que sería una reunión muy difícil pues la guerrilla tendría que volver a la posición que había abandonado y, además, tenía que aceptar que solamente 15 de los guerrilleros incluidos en la lista presentada por ellos podrían ser objeto del acuerdo. El ambiente estaba muy tenso y Marulanda ya había manifestado que no creía posible llegar a un entendimiento.

Al sentarse en la mesa, el comisionado comenzó pisando fuerte:

—Manuel, tengo plenas capacidades por parte del Estado para llegar hoy mismo a un acuerdo, pero no estoy muy seguro de que usted también las tenga de parte las FARC. Yo estoy dispuesto a no moverme de este sitio hasta que firmemos el documento y le pregunto si usted también lo está.

La estrategia del comisionado era evidente: si Marulanda se mostraba molesto con el tema, había que mostrarse aun más fuerte y agresivo. Después de esta introducción, el comisionado puso sobre la mesa el documento que había sido redactado y corregido por su equipo. Esa era la última versión que el Gobierno presentaría, y así se lo hizo saber a la guerrilla. El tono contundente los tomó por sorpresa, a tal punto que Marulanda de inmediato tomó el texto; pidió copias para Raúl Reyes, Joaquín Gómez y el Mono Jojoy, y procedieron, por un largo rato, a leerlo minuciosamente. En ese momento, resultó claro que el acuerdo humanitario era una realidad.

Al finalizar la reunión, después de varias horas de discusiones y de controversias, Marulanda y el comisionado habían llegado a un acuerdo. Sólo quedaron por definir algunos pocos aspectos prácticos y se dejaron anotadas algunas correcciones menores al texto que se firmaría seis días después. Antes de terminar la reunión, Camilo le preguntó a Marulanda si, con los ajustes menores que había que hacerle al documento, podían considerar que

el acuerdo ya era un hecho. El comisionado le dijo que con ese texto tenía la palabra del Gobierno y que quería saber si podría decirme, a su regreso a Bogotá, que tenía la palabra de Marulanda sobre la aceptación del mismo.

—Es un acuerdo. Tiene nuestra palabra —le contestó el jefe guerrillero.

En el texto quedó plasmada la libertad de 42 soldados y policías enfermos en manos de las FARC, cantidad que podía ser ampliada, y también quedó acordado que éstas se comprometían a liberar unilateralmente a por lo menos 100 soldados y policías sanos dentro de los 15 días siguientes a la entrega de los enfermos. Nuestro objetivo era que, finalmente, las FARC accedieran a liberar, mucho más que a 100, a todos los uniformados en su poder. También se determinó que, tan pronto se firmara el acuerdo, la primera persona a liberar, dado su grave estado de salud, sería el coronel Álvaro León Acosta y sus acompañantes.

En los siguientes días, la actividad del Gobierno se centró en la preparación de los procedimientos correspondientes y en la corrección del texto definitivo, que sería firmado el 2 de junio.

El comisionado, además, se reunió con los militares, con el fiscal, con el procurador, con el defensor, con los ministros relacionados con el asunto, y con los embajadores que asistirían en calidad de verificadores del acuerdo, para prepararlos e informarlos sobre la situación.

Muy temprano en la mañana del 2 de junio, el comisionado y su equipo iniciaron el viaje hacia La Macarena, desde donde viajaron por tierra unas tres horas más para encontrarse con Marulanda y sus hombres. El acuerdo final estaba redactado y la reunión no debería ser muy prolongada.

A pesar de esto, el comisionado me advirtió que veía venir un posible problema con Marulanda pues éste no había caído en la cuenta de que un punto del documento definía que la entrega de los guerrilleros se haría en la puerta de las cárceles a los funcionarios del CICR. Marulanda había pasado por alto este detalle, pero el comisionado sabía que, si se dejaba de esa forma, se iba a crear un posible obstáculo que podría frustrar las cosas en el último momento, ya que la guerrilla consideraba que la entrega sería en el mismo lugar y a la misma hora que la de los soldados, como si se tratara de un intercambio. Había sido un error de la guerrilla no advertir este hecho, pero eso podía significar la libertad de nuestros hombres.

Al iniciar la reunión, Camilo le pidió a Marulanda que revisara cada una de las correcciones que habían definido en el encuentro anterior. Las correcciones se habían hecho y así lo aceptó la guerrilla. El comisionado volvió a preguntarle si, entonces, ya era un hecho que se podía firmar el acuerdo, a lo que el jefe guerrillero asintió de inmediato. A pesar de esto, Camilo tomó el documento y le señaló a Marulanda el párrafo en el que había quedado establecido que la entrega de los guerrilleros se haría en las cárceles a los miembros de la Cruz Roja y no en el lugar en donde la guerrilla entregaría a los soldados y policías.

De inmediato, como nos habíamos imaginado, Marulanda rechazó este punto y dijo que no firmaría el documento. Camilo había medido la posible reacción de la guerrilla, e insistió en que ya había un acuerdo de palabra y que, si la guerrilla tenía palabra, tendría que firmar. Los guerrilleros, con Marulanda a la cabeza, entraron en cólera. El comisionado les contestó que estaba ahí para cumplir con la palabra empeñada y que era vergonzoso que la guerrilla no fuera capaz de cumplir con la suya. Marulanda, iracundo, se levantó de la mesa y afirmó que no había nada que hacer y que el acuerdo se había roto. Después de un largo silencio, el Mono Jojoy se atrevió a preguntar:

—Camilo, ¿por qué no ve si hay algo que hacer?

El comisionado ya tenía una fórmula lista, que consistía en realizar la entrega de los guerrilleros en la penitenciaría al CICR, que se encargaría de llevarlos a la Zona de Distensión, a un lugar distinto a aquel en el que se recibiera a los soldados y policías. Sin embargo, esperó un poco para proponerla y sugirió que almorzaran. Marulanda ordenó de inmediato servir el almuerzo, el cual transcurrió en un ambiente de tensión y pocas palabras.

Una vez terminó, el comisionado se retiró con Luis Fernando Ciales diciendo que necesitaba de unos minutos para analizar una opción que estaba pensando. Me llamó desde el teléfono satelital y me hizo un reporte de cómo estaba la situación; después esperó un poco más de una hora hasta cuando vio que los guerrilleros estaban comenzando a desesperarse, y sólo en ese momento presentó la fórmula que habíamos analizado en Bogotá y que era una posibilidad saludable para ambas partes. Las FARC aceptaron de inmediato y la fórmula propuesta fue incluida en el acuerdo.

Una vez redactado e impreso el documento final, Marulanda pidió que fuese firmado por el Mono Jojoy y Joaquín Gómez, de parte de las FARC, aduciendo que, si el presidente no lo firmaba, él tampoco debía hacerlo.

Fue así como, hacia las cuatro la tarde, y con el cielo a punto de estallar en lluvia, el acuerdo que significaba la libertad de cientos de hombres, después de años de inclemente cautiverio, fue firmado.

Las palabras que pronunció Marulanda después de la firma no pudieron ser más optimistas:

—Hemos logrado este primer acuerdo y pensamos que, conforme hemos llegado a este primer acuerdo, podemos llegar a un segundo acuerdo y a un tercer acuerdo hasta que logremos lo que estamos anhelando todos los colombianos, que es una salida política al conflicto social y armado, donde logremos que este país, por fin, descanse de tanta violencia.

Ese 2 de junio de 2001, en medio de la selva de La Macarena, se selló un hecho definitivo para el proceso y la vida nacional, y para los soldados y policías que en ese momento, hacinados detrás de las cercas de alambre, sometidos a condiciones infrahumanas, en un lugar remoto y desconocido de la geografía nacional, ignoraban que su libertad estaba por llegar.

CAPÍTULO XXXV

“¡Bienvenidos a la libertad, héroes de Colombia!”

Al llegar esa misma noche al Palacio de Nariño, en medio de un aguacero torrencial, después de vivir una verdadera odisea de dificultades y adversidades climáticas que casi no lo dejan salir de La Macarena y regresar a Bogotá, el alto comisionado, Camilo Gómez, tuvo un primer encuentro que le borró toda huella de cansancio.

Se trataba de un grupo de madres y familiares de los militares y policías secuestrados, encabezado por Marleny Orjuela, su vocera más visible, que lo esperaban ansiosas por confirmar la noticia del acuerdo humanitario.

Cuando el comisionado les ratificó la buena nueva de su suscripción, su júbilo y sentimiento fueron tan grandes como había sido su valor para luchar por sus seres queridos. Era indescriptible la alegría de estas sufridas y valientes mujeres que habían soportado por tanto tiempo la ausencia de sus hijos y que nunca habían cejado en sus esfuerzos por lograr su liberación. Las lágrimas fluían de sus ojos, pero esta vez, al fin, eran lágrimas de felicidad.

Fueron ellas, con toda justicia, las primeras en conocer el texto del acuerdo humanitario, que leyeron con Camilo en la sala de crisis de Palacio.

Posteriormente, ya avanzada la noche, el comisionado concedió una rueda de prensa en la que dio la noticia a todo el país: en breves días recuperarían su libertad el coronel Acosta y sus tres acompañantes, por lo menos 42 soldados y policías enfermos, y por lo menos 100 que no estuvieran enfermos. En nuestro fuero interno, esperábamos que todos fueran liberados.

Tres días después, el 5 de junio, comenzó a desarrollarse el acuerdo. El comisionado se desplazó, junto con el coordinador para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, George Comninos, y un equipo médico hacia las montañas del Tolima, donde le fueron entregados el coronel Acosta y el teniente, el intendente y el agente de la Policía que estaban secuestrados con él desde hacía cerca de catorce meses.

El encuentro con Acosta, que para entonces era ya un símbolo nacional sobre la crueldad e inhumanidad del secuestro, fue particularmente emo-

tivo. El coronel, en el límite de sus fuerzas, se abrazó a Camilo por varios minutos, bañado en lágrimas y agradecido de estar vivo y libre. Fue un momento conmovedor que marcó el final del durísimo cautiverio del oficial, que había seguido con preocupación y solidaridad el país entero. Concluido el largo abrazo con el comisionado, el coronel fue subido al helicóptero por personal especializado de la Cruz Roja, donde le comenzaron a suministrar los primeros auxilios médicos.

En los días que siguieron al acuerdo, di instrucciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que trasladara a los 15 guerrilleros enfermos que se beneficiarían del mismo a la Penitenciaría de Valledupar, donde fueron examinados por médicos de la Cruz Roja, quienes, no sólo certificaron sus enfermedades, sino que les preguntaron también si estaban dispuestos a ser acogidos por el acuerdo. Para nuestra sorpresa, uno de ellos, Hermes José González, se negó a recibir la libertad y volver a las filas de la guerrilla. "*No me voy a bir* [sic] " escribió de su puño y letra en el documento que le fue presentado por la Cruz Roja. Los otros 14 sí se acogieron al acuerdo y se dispusieron a partir.

El 16 de junio, once de estos guerrilleros fueron trasladados por el CICR a la Zona de Distensión, a la antigua finca de El Recreo, en los llanos del Yari, donde fueron recibidos por Manuel Marulanda y otros jefes guerrilleros. Los tres restantes fueron entregados menos de una semana después. Ninguno de ellos estaba condenado o investigado por delitos atroces o de lesa humanidad.

Ese mismo día, en Caquetania, el comisionado; el representante de la Cruz Roja Internacional; el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, y varios embajadores de los países facilitadores, se aprestaron a recibir al primer grupo de 29 soldados y policías enfermos que saldrían al fin de esos nefastos campos de concentración que tanto habían conmocionado a la opinión pública.

Inicialmente, Camilo, Comninos y algunos guerrilleros se internaron caminando selva adentro hasta encontrar a este grupo, aún custodiado por los guerrilleros. Los soldados, cuando vieron al comisionado y sus acompañantes, no daban crédito a sus ojos. Finalmente, cuando se convencieron de la realidad de su libertad, explotaron en expresiones de júbilo y se trenzaron en abrazos de felicidad entre ellos y con Camilo.

Mientras caminaban hacia el sitio donde tendría lugar la ceremonia oficial de entrega, todavía en medio de la selva, el comisionado me llamó desde su teléfono satelital para darme el parte emocionado de que ya estaba con los muchachos camino a la libertad. Le pedí que me pasara a alguno de ellos, y entonces escuché estas palabras que me conmovieron profundamente, más aún al constatar que, después de tantos años, estos jóvenes seguían siendo soldados y policías, con todo el honor y la dignidad que esto implica:

—Se presenta el subintendente Zambrano de la Policía Antinarcóticos. ¿Qué ordena, señor presidente?

A continuación, el joven policía me narró con voz entrecortada por la emoción cuántos compañeros estaban siendo liberados con él y cuál era su estado de salud, y me dijo que esperaba que nos viéramos pronto. Yo le dije que así sería y lo felicité por su valentía y su recién ganada libertad.

Pasó entonces al teléfono el soldado profesional Orlando Jaramillo, un poco más parco que Zambrano, quien me dijo:

—Señor presidente. Quiero verlo para darle un fuerte abrazo y, en nombre de todos los compañeros, darle las gracias por lo que han hecho por nosotros.

Yo sentí un nudo en la garganta y me despedí con el corazón desbordante de alegría. Esas palabras agradecidas, ese sentimiento de felicidad que inundaba a aquellos hombres que caminaban de regreso a sus hogares y sus familias, después de varios años de pesadilla, bien justificaban todos los esfuerzos y riesgos asumidos por sacar adelante el proceso de paz.

Cuando salieron, finalmente, de la selva y llegaron a un claro de luz, los soldados tuvieron que cubrirse los ojos por un buen tiempo, mientras se acostumbraban a la claridad, pues en su cautiverio ni siquiera se les permitía recibir los rayos del sol.

Al cabo de dos horas, los soldados y policías fueron trasladados a Florencia, Caquetá, donde se encontraron, en medio de risas, llanto y exclamaciones, con sus madres, padres y familiares más cercanos, que los abrazaban, los besaban y los tocaban, en una descarga de sentimientos imposible de describir.

Comenzó entonces un arduo pero feliz peregrinar del alto comisionado, junto con los embajadores de los países facilitadores y el personal de la Cruz Roja, para recibir al resto de soldados y policías enfermos en diversos rincones de la geografía nacional. El 17 de junio recibió a catorce en las montañas de Antioquia. El 18 de junio a cuatro en las montañas de Santander y cuatro más en la Serranía del Perijá.

En total, fueron 55 hombres de la Fuerza Pública —incluyendo al coronel Acosta y sus tres acompañantes— los que obtuvieron la libertad en esa primera etapa de cumplimiento del acuerdo. Las emotivas escenas de reencuentros familiares se sucedían por doquier y el país presenciaba aliviado, a través de los noticieros, el retorno anhelado de sus mejores hijos.

CORTANDO LA SOGA DE LA INFAMIA

Faltaba ahora el cumplimiento de la llamada entrega unilateral de militares y policías no enfermos por parte de las FARC, la cual había quedado pactada en el acuerdo humanitario en una cifra de por lo menos 100, si bien todos esperábamos que, en un gesto de buena voluntad, entregaran a la totalidad de los uniformados secuestrados.

El 28 de junio quedó acordado como el día para la entrega de cerca de 250 secuestrados, cifra que hacía pocos días había anticipado Raúl Reyes en un comunicado público. Supimos luego que las FARC pusieron en movimiento hacia la Zona de Distensión, no sólo a los soldados que posteriormente entregarían, sino también a los 47 oficiales y suboficiales que también tenían en su poder. Inexplicablemente, cuando ya estos hombres caminaban esperanzados hacia su ansiada libertad, fueron separados de los soldados y mantenidos en cautiverio, un cautiverio que hoy, tristemente, continúa. Nunca supimos qué hizo cambiar de opinión a las FARC y generar en los oficiales y suboficiales la tortura psicológica de ilusionarlos con una libertad que luego les negaron. Parece, sin embargo, que a última hora decidieron retenerlos para guardarse esa carta de presión entre la manga, una carta que hasta ahora no ha producido más que dolor a sus familias y el repudio del país y de la comunidad internacional.

Desde el 27, viajó el comisionado, con el representante de la Cruz Roja y funcionarios de esta entidad, al municipio de La Macarena, en la Zona de Distensión, donde se había acordado que se hiciera la liberación masiva. Se internaron en la selva, guiados por guerrilleros, para tener un primer contacto con los soldados y policías que al día siguiente serían liberados. Eran, en total, 242. La emoción de los muchachos fue impresionante. Rodeaban y abrazaban a Camilo y se reunían en corrillos para gritar "¡Libertad! ¡Libertad!" una y otra vez.

Mientras eran examinados por la Cruz Roja, el comisionado estuvo con ellos por unas cuatro horas y al final casi no lo dejan regresar, como si creyeran que con él se escapaba la esperanza del retorno a sus hogares. Mientras unos estaban eufóricos, otros, por el contrario, se quedaban sentados, inmóviles, con la mirada perdida, totalmente idos, impactados por la inminencia de una libertad que ya creían perdida. Todos tenían consigo alguna cosa que habían hecho, ya fuera un crucifijo, una talla de madera, un bastón, a la que se aferraban como su única pertenencia valiosa. Esa misma noche, les dieron la ropa con la que iban a salir al otro día a la libertad y los soldados quemaron en una hoguera los pantalones y las camisetas que habían usado durante el cautiverio, como si incineraran con ellos todo el sufrimiento que habían padecido durante los últimos años.

Esa misma noche los soldados le contaron a Camilo que los habían traído amarrados el uno al otro con una soga que les ataban al cuello, como animales. Uno de ellos la había guardado y se la entregó, sin saber que ese cordel de la infamia se iba a convertir en el símbolo, no sólo de su cautiverio, sino también de su libertad.

Al día siguiente, el 28, los soldados fueron llevados hasta La Macarena, donde la guerrilla los entregó formalmente en una ceremonia muy larga, acompañada siempre por la lluvia, con la presencia de embajadores, periodistas y gente de la zona. Los guerrilleros dieron varios discursos, con los

cuales pretendían reivindicar la entrega unilateral de los secuestrados como un gesto amplio y generoso de las FARC, algo que, por supuesto, muy pocos entendían así.

Yo viajé a la base militar de Tolemaida, en Melgar, donde me reuní con los altos mandos militares y de Policía, y las familias de los muchachos, en espera de su arribo desde La Macarena. Finalmente, con cierto retraso por la larga ceremonia de la guerrilla, aparecieron en el cielo los aviones que traían, no sólo a los soldados y policías liberados, sino también a los embajadores y demás personas que habían acompañado y verificado el acto de entrega.

La expectativa y la emoción eran inmensas. Imagínense la ilusión contenida de las madres y los familiares de esos muchachos que veían acercarse el momento anhelado del reencuentro. Yo mismo estaba pletórico de alegría. Los generales, que algunas veces manifestaron sus dudas sobre el proceso que llevó finalmente al acuerdo humanitario, tampoco disimulaban su felicidad. Al fin y al cabo, 242 de sus hombres, ¡nada menos!, regresaban sanos y salvos de una batalla desigual que habían librado varios años atrás.

Si los encuentros anteriores de los secuestrados liberados con sus familias habían sido emotivos, es de imaginarse el nivel de efusividad, de lágrimas, de emoción, que se vivió cuando estos cientos de jóvenes pudieron correr a reencontrarse en los abrazos y besos de sus seres queridos, muchas veces reconociéndose después del largo tiempo de ausencia.

Hacia el atardecer, presidí la ceremonia oficial de bienvenida y pronuncié un discurso que comenzó con estas emocionadas palabras:

“¡Bienvenidos a la libertad, héroes de Colombia! ¡Bienvenidos al seno de sus familias, al abrazo de sus compañeros, a la orientación de sus superiores, al cariño de todos sus compatriotas que los esperábamos desde hace tanto tiempo!”

Aproveché que Camilo me había entregado la sogá infame con que los guerrilleros los llevaban atados uno al otro y la utilicé como símbolo de la libertad recobrada, pero también de la inhumanidad del secuestro, cortándola públicamente con unas tijeras:

“Hoy, ante el mundo y ante nuestros hombres que han recuperado la libertad, quiero cortar esta cadena de la crueldad y de la infamia.

“De esta manera corto la sogá de la esclavitud que genera el secuestro. Yo sé que usted, Manuel Marulanda, nunca ha llevado esa sogá al cuello y no quiero que la lleve nunca. No quiero que ningún colombiano lleve nunca la sogá de la esclavitud del secuestro y sé que la fórmula está en nuestras manos: debemos llegar rápido a acuerdos en los puntos de la agenda y en la disminución del conflicto, en especial en el secuestro.

“[...]”

“Todos coincidimos en que esta entrega es un gesto importante, pero no es un gesto suficiente de paz. Por eso no vamos a descansar hasta que todos los secuestrados —civiles y de nuestras Fuerzas Armadas— regresen sanos y salvos a sus

familias y se acabe de una vez por todas este cruel delito de ponerle precio a la vida de las personas".

Después supimos que a las FARC les había disgustado mucho que yo cor-tara la sogá en público, pues ellos, que ese día querían presentarse al mundo como generosos liberadores, quedaron otra vez en evidencia por su conti-nuo desprecio del Derecho Internacional Humanitario.

Pasado el discurso, me fui con Camilo, el vicepresidente Bell, el general Tapias, el general Mora y el general Gilibert, a saludar a los muchachos, que nos rodearon con inmenso cariño, alegría y agradecimiento. Incluso, al final, terminaron levantándonos en hombros, como en un juego de compa-ñeros, y gritando al unísono ese coro feliz de "¡Libertad!", que saltaba alegre de sus gargantas y de sus corazones.

Fue, sin duda, el momento más grato de todo el proceso. En él habíamos tenido importantes satisfacciones y también muchos sinsabores, pero nunca un encuentro tan humano y tan regocijante como el de aquella tarde en que devolvimos a esta gran cantidad de jóvenes a sus familias.

Dos días después, el 30 de junio, en el corregimiento de Granada, Antioquia, las FARC entregaron un último grupo de 26 soldados y policías al comisionado y a una delegación de la Cruz Roja.

En total fueron dos oficiales (el coronel Acosta y el teniente que esta-ba con él) y 321 soldados y policías, para un total de 323 hombres de la Fuerza Pública liberados por las FARC gracias a la negociación y aplicación del acuerdo humanitario.

Si sumamos los 39 soldados y policías y los 3 agentes del DAS que liberó el ELN en diciembre de 2000, tenemos un total de 365 uniformados que lograron la libertad gracias a que el Gobierno nunca cejó en su intento por alcanzarla. Hubo dificultades, por supuesto. Desencuentros y desfalle-cimientos, claro. Pero siempre tuvimos como norte seguir adelante en este esfuerzo humanitario. Hoy, esos 365 liberados por las FARC y el ELN deben ser un ejemplo fehaciente que aliente al país y a sus gobernantes a seguir trabajando incesantemente por quienes todavía permanecen en cautiverio.

Los cerca de 50 oficiales y suboficiales que las FARC decidieron mante-ner secuestrados fueron una espina que se nos quedó en el corazón, pero tuvimos, al menos, 365 razones para celebrar en esos meses de diciembre de 2000 y de junio de 2001 en que los abrazos y las lágrimas de felicidad nos hicieron pensar a todos los colombianos que la paz y la reconciliación sí son posibles cuando se persiguen con voluntad y sin desmayo.

CAPÍTULO XXXVI

Un nuevo horizonte para la paz

Volvamos un mes atrás en el tiempo para situarnos en mayo de 2001. Para ese momento ya se habían cumplido la mayoría de los puntos del Acuerdo de Los Pozos (reunión con los partidos políticos, vinculación de la comunidad internacional, creación de una comisión de la mesa para estudiar las situaciones coyunturales que pudieran afectar el proceso) y sólo restaba constituir la llamada Comisión de Personalidades que habíamos pactado como una solución de compromiso para superar el congelamiento decretado por las FARC. Esta comisión tendría la importante tarea de presentar un documento con recomendaciones para el combate al paramilitarismo y para lograr la reducción de la intensidad del conflicto, incluyendo el cese de los secuestros.

Al comienzo, los negociadores de las FARC fueron un poco evasivos frente al tema, pero finalmente, gracias a la insistencia del Gobierno, se determinó la forma de integrarla. La Comisión estaría compuesta por cuatro personas escogidas, de común acuerdo, por la mesa de negociación, con dos miembros propuestos por la guerrilla y dos por el Gobierno.

El gobierno designó a Ana Mercedes Gómez y a Vladimiro Naranjo. Ana Mercedes Gómez se desempeñaba como directora del diario *El Colombiano* de Medellín, había estado vinculada a temas de paz desde tiempo atrás y era una estudiosa del conflicto colombiano, lo que le permitiría hacer importantes aportes en la Comisión. Vladimiro Naranjo, por su parte, era un reconocido abogado y tratadista de derecho constitucional, había sido magistrado de la Corte Constitucional y se desempeñaba como profesor en varias universidades. Su carácter académico y su amplia formación humanista terminaron por convertirlo en el eje de la Comisión, dentro de la cual ejerció un importante liderazgo. Además, su presencia en la misma garantizaba que se encauzaran las propuestas dentro del marco constitucional colombiano²⁴.

²⁴ El doctor Vladimiro Naranjo, a quien designé luego como embajador ante los Países Bajos, falleció en octubre de 2004.

Por su parte, las FARC presentaron a Carlos Lozano y Alberto Pinzón. El primero era el director del semanario *Voz*, órgano de divulgación del Partido Comunista Colombiano. Militante tradicional de la izquierda, ha sido reconocido en el país por sus posiciones a favor de una salida negociada. Es más, antes de su participación en la Comisión había colaborado con el comisionado en algunos aspectos específicos y, gracias a la confianza que Marulanda le tenía, había servido en varias oportunidades como canal discreto para superar dificultades y acercar a las partes. El otro miembro designado por las FARC fue Alberto Pinzón, un médico y antropólogo también militante del Partido Comunista, poco conocido en el país, pero con un buen nivel de confianza frente a la guerrilla.

Definidos los integrantes, la Comisión de Personalidades (que la opinión pública conoció como Comisión de los Notables) se creó el 11 de mayo de 2001, con un plazo de tres meses para que entregara a la mesa un documento con recomendaciones.

Su labor no sería fácil pero resultaba fundamental. La idea era que llegara a conclusiones y recomendaciones de consenso. Lo importante de este aspecto era que, al ser personas ajenas a la mesa de negociación pero designadas por las partes, sus recomendaciones tendrían un efecto mucho más vinculante. Sería muy difícil para la guerrilla y para el mismo Gobierno no aceptarlas si provenían de personas designadas y avaladas por ellos mismos.

La Comisión inició su trabajo con una reunión con los voceros de ambas partes y luego sostuvieron una reunión conmigo en la Casa de Nariño. Yo le concedí particular importancia a esta instancia del proceso e impulsé decididamente su trabajo, pues sabía que de sus recomendaciones se desprendería una "Hoja de Ruta" de gran utilidad para desempantanar las negociaciones y dotarlas de mayor celeridad y efectividad. Cuando me reuní con los cuatro integrantes, les planteé mis opiniones sobre la urgencia de llegar a una fórmula que evitara los actos violentos que la guerrilla realizaba y les expresé la urgencia de lograr una negociación sin confrontación, pues ya era claro que el esquema de la negociación en medio de la guerra se encontraba agotado. Les reiteré, asimismo, la indeclinable voluntad del Gobierno de buscar una salida negociada al conflicto y les manifesté nuestra disposición para facilitar su labor con la independencia necesaria.

Para nosotros era fundamental cambiar el esquema de la negociación en medio de la confrontación y pasar a una negociación sin confrontación. Durante las discusiones posteriores al Acuerdo de Los Pozos, los delegados del Gobierno habían insistido continuamente en este punto, buscando acelerar la discusión de las propuestas de cese de fuegos y hostilidades que se había suspendido durante el congelamiento decretado por las FARC. Desde el citado acuerdo, y aun mientras deliberaba la Comisión de Notables, se dedicaron varias reuniones en la mesa de negociaciones a este tema fundamental.

La Comisión abordó su trabajo con sigilo y discreción pero de frente al país. Entendió que, para llegar a formular recomendaciones sobre temas tan complejos como los que tenía encomendados, era necesario escuchar a los diferentes sectores y organizaciones de la vida nacional. Fue así como se reunieron con los militares, con los gremios, con organizaciones sociales y con organismos del Estado, y recibieron información e ideas que luego les servirían de apoyo en sus reflexiones.

Desde el Gobierno, el comisionado estuvo en contacto permanente con los cuatro integrantes de la Comisión y, en particular, sostuvo múltiples reuniones con los dos miembros propuestos por el Gobierno. Como es natural, el Gobierno tenía el máximo interés en que se lograra una propuesta sólida, que fuera, además, coherente con lo que se estaba discutiendo alrededor del tema del cese de fuegos.

Cuando se acercaba el vencimiento del plazo para que la Comisión entregara sus recomendaciones, todo indicaba que el trabajo estaba muy adelantado y que las recomendaciones serían, no sólo útiles y sensatas sino, sobre todo, admisibles para las dos partes. Si bien el documento le concedía más énfasis al tema de la disminución de la violencia que al de la lucha contra el paramilitarismo, lo que podría incomodar a las FARC, lo cierto es que en esta ocasión no tendrían disculpas para no aceptarlo, pues dos personas presentadas por ellos habían hecho parte de su redacción.

Cuando la propuesta estuvo prácticamente lista, me reuní con el comisionado y los cuatro miembros de la Comisión, quienes, aclarándome que todavía el documento estaba en proceso de perfeccionamiento y que se trataba por ahora de un borrador de trabajo, me expusieron las conclusiones principales a las que habían llegado. Todo indicaba que las distintas recomendaciones habían sido tomadas por consenso entre los cuatro miembros de la Comisión.

De pronto, sin embargo, Ana Mercedes Gómez, quien no había manifestado hasta entonces, en las reuniones previas conmigo o con el comisionado, ninguna objeción al texto que venían trabajando, tomó la palabra para expresar su oposición a parte del informe, concluyendo, con evidente molestia, que, si el documento no se modificaba, ella prefería renunciar a la Comisión. No sólo yo me sorprendí, sino también sus propios compañeros de Comisión. Básicamente, las reservas de Ana Mercedes se referían a la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo avalara con su voto las decisiones que se tomaran en la mesa de negociaciones. Ella sostenía, con acaloradas razones, que dicha convocatoria sólo podría producirse al final de las negociaciones y no en un punto intermedio de las mismas. Entendiendo que éste era un punto superable, le pedí a Ana Mercedes que reconsiderara su decisión, pues no resultaba lógico que renunciara por discrepancias con un informe que apenas era un borrador y que todavía podía perfeccionarse.

Siguiendo esta idea, los miembros de la Comisión volvieron a reunirse con ella y analizaron sus planteamientos, la mayoría de los cuales quedaron recogidos en el informe final, donde la eventual Asamblea Constituyente quedó planteada como un mecanismo para ratificar acuerdos al final del proceso. De hecho, yo mismo había propuesto esta posibilidad dentro de la estrategia de paz que lancé, como candidato, en mi discurso del Hotel Tequendama en junio de 1998.

Lamentablemente, a pesar de las nuevas deliberaciones dentro de la Comisión y de la inclusión de las sugerencias que ella misma realizara, Ana Mercedes presentó su renuncia irrevocable mediante una carta que le hizo llegar al comisionado para la Paz. Fue una decisión que respeté, pero cuyos motivos nunca, hasta la fecha, he podido entender.

Como era de esperarse, esta renuncia causó revuelo en los medios de comunicación y puso al Gobierno en dificultades, pues, en la recta final del informe, teníamos que decidir si nombrábamos un nuevo integrante para recuperar el equilibrio de la Comisión o si dejábamos únicamente a Vladimiro Naranjo como miembro designado por el Gobierno. Tomando en cuenta lo avanzado que estaba el trabajo, y para darle mayor agilidad, opté por no designar a nadie más, dejando la representación del Gobierno exclusivamente en cabeza del doctor Naranjo, en cuyas calidades morales e intelectuales tenía plena confianza, eso sí con un estrecho apoyo por parte del comisionado. Este tropiezo generó, además, la necesidad de prorrogar por unos días la presentación del informe final, aumentando la expectativa que la opinión pública tenía sobre él.

Finalmente, superado el incidente y cumplido el nuevo plazo acordado para la producción del informe final, la Comisión de Personalidades entregó a la Mesa de Negociaciones el documento con sus recomendaciones el día 25 de septiembre de 2001.

Se trataba de una carta de navegación para encauzar el proceso dentro del objetivo fundamental de lograr una negociación sin el asedio del conflicto. El documento, de entrada, reconocía la imposibilidad de continuar una negociación en medio de la confrontación y, bajo ese supuesto, desarrollaba una ruta con términos de duración y mecanismos para llegar a los acuerdos de paz.

Se proponía pactar, primero, una tregua o cese de fuegos por un período de seis meses, prorrogables por las partes, durante la cual el Estado no atacaría a las FARC y éstas se abstendrían, por su parte, de realizar ataques contra la Fuerza Pública o la población civil. De manera expresa, el documento definía que, dentro de las acciones que las FARC debían cesar, estaban incluidos el secuestro y la extorsión o cualquier otra acción que pudiese afectar a los civiles. También preveía que el hecho de suspender las acciones por parte de la Fuerza Pública no implicaba la suspensión de las acciones en contra de otros grupos al margen de la ley. Pedía que el Estado ratificara su acatamiento.

to a las normas y principios del DIH y le solicitaba a las FARC la aplicación integral de estas normas mínimas humanitarias.

Desde nuestro punto de vista, y para nuestro beneplácito, la propuesta de los Notables se acercaba bastante a la propuesta de cese de fuegos y hostilidades que había presentado el Gobierno nacional en julio de 2000, que se venía discutiendo, junto con la propuesta de las FARC, en la mesa de negociación. Sin embargo, el informe de la Comisión tenía una ventaja adicional: que en su redacción habían participado personas postuladas por las mismas FARC, lo que incrementaba su viabilidad.

El documento determinaba que, una vez pactada e implementada la tregua, el camino a seguir era el de continuar con las discusiones de la agenda para llegar, en esos seis meses, o en el tiempo en que se prorrogare, a los acuerdos de paz correspondientes, que podrían ser ratificados por el pueblo mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente o a un Referendo, en los términos que prevé la Constitución, como mecanismo para finalizar el proceso.

Para facilitar esta refrendación, los acuerdos a los que se llegara en la mesa de negociación deberían plasmarse en un conjunto de propuestas de reforma constitucional o legal. Esto tenía la ventaja de que concretaba aún más los términos de las discusiones, que hasta el momento habían versado sobre aspectos más generales.

Sugería también el documento que, en el caso de que se optara por convocar una Asamblea Constituyente, ésta debería ser elegida, en su mayoría, por voto popular, reservándose el Gobierno la potestad de definir una parte de sus componentes para garantizar la presencia de la guerrilla con la que se pactaba la paz. Infortunadamente, muchos creyeron o quisieron hacer creer, sin siquiera leer el documento, que el Gobierno aceptaría una composición mayoritaria de la guerrilla, lo cual nunca se planteó y resultaba completamente absurdo.

Uno de los puntos que consideré más importante del informe de los Notables se refería al compromiso que las partes debían hacer de aceptar las determinaciones que se tomaran en la Asamblea Constituyente o el Referendo. Éste era un elemento fundamental por el cual se garantizaba que el proceso sería irreversible.

El documento también proponía que todo este procedimiento estuviera sujeto a mecanismos de verificación que la Mesa de Negociación debería definir, y sugería, al respecto, la presencia de los países miembros de la Comisión Facilitadora y de las Naciones Unidas. Con esto, la propuesta cubría la mayoría de los flancos, si bien era claro que la Mesa tendría que desarrollar algunos de los puntos propuestos, pues la labor de la Comisión de Personalidades se limitaba a la presentación de recomendaciones puntuales, pero no planteaba su instrumentación, la cual correspondía a los negociadores.

En cuanto a las recomendaciones para combatir el paramilitarismo, los Notables propusieron una serie de alternativas, incluyendo, además del combate militar contra los grupos ilegales de autodefensa que veníamos llevando a cabo con convicción y determinación, la posibilidad de que se buscara un mecanismo para que estos grupos iniciaran un procedimiento de sometimiento a la justicia, tal como estaba previsto en la Ley 418 de 1997. También contenía sugerencias que ya se venían cumpliendo, como el fortalecimiento de las medidas de protección a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, jueces, periodistas y otras personas con riesgo; el sometimiento a la justicia ordinaria de los militares o civiles implicados en delitos comunes relacionados con el paramilitarismo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la recopilación de normas sobre la materia. Además, sugería implementar las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas y la OEA para la protección de los derechos humanos y la realización de algunos foros sobre el tema.

El documento planteaba, en suma, una alternativa concreta para seguir adelante con el proceso, lo que implicaba un importante avance frente a la posición inicial de la guerrilla de mantener la negociación en medio de la confrontación y sólo hablar de cese de fuegos cuando el 90% de la agenda se hubiese acordado. Esta "Hoja de Ruta" era el elemento final para pasar de la negociación en medio de la confrontación a la negociación en medio de una tregua con cese de hostilidades, con todas las ventajas y posibilidades que este cambio abría a la perspectiva de la paz.

CÓMO OBJETAR LO QUE NO SE CONOCE

El 27 de septiembre, la Mesa de Negociación tomó la determinación de hacer público el informe, tal como lo habían recomendado los mismos miembros de la Comisión. Como era de esperarse, el documento suscitó una gran polémica, lo cual era sano, sin duda, si bien ésta estuvo permeada por el pesimismo que había generado el desgaste mismo del proceso.

A pesar de la buena noticia de la liberación de los soldados y policías dos meses atrás, la expectativa de la opinión pública ante el proceso había decaído, en buena parte debido a los continuos actos violentos que perpetraba la guerrilla. Esto hizo que muchos comentaristas, influidos por ese estado de ánimo nacional, le encontraran poca utilidad al documento o no le concedieran la importancia que merecía. Hoy, cuando escribo estas líneas y repaso el informe de los Notables, me asiste la certeza de que en él está trazado lo que podría constituir un muy buen inicio para cualquier nuevo esfuerzo negociado de paz que se adelante en el país.

La controversia, sin embargo, tenía más de visceral que de racional. Un ejemplo de esto lo vivió el propio comisionado cuando se reunió con la cúpula militar para mostrarles el documento y explicarles el contenido y

los alcances que tenía. En la reunión también estaban presentes el ministro de Defensa, Gustavo Bell; el comisionado adjunto, Luis Fernando Ciales, y todo el equipo de negociadores del Gobierno. Camilo, desde antes de llegar a la reunión, ya sabía que en la cúpula existía malestar por este tema y el propio general Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, le había advertido que la reunión sería complicada porque el contenido del documento no era compartido por los militares.

La primera sorpresa del comisionado, sin embargo, no se debió a la oposición al informe, sino al hecho inexplicable de que los militares ya tenían el mismo en su poder, cuando apenas acababa de hacerse público en el Caguán y nadie diferente a los miembros del equipo negociador lo tenía.

Al iniciar la reunión, cada uno de los generales puso al frente suyo la copia del documento que poseían, sobre la cual habían hecho varias observaciones escritas a mano. Tomando nota de esto, Camilo hizo un resumen del informe, sin repartir todavía las copias que llevaba para entregarles a los militares. En su presentación, les explicó cómo había surgido la Comisión y cómo se había adelantado el trabajo. No gastó mucho tiempo, sin embargo, pues era notoria la poca atención que le prestaban, en medio de un ambiente de marcada tensión. Terminada la exposición del comisionado, el general Tapias le pidió a cada comandante que expusiera, con toda libertad, su opinión acerca del documento.

El primero en hablar fue el general Mora, comandante del Ejército, quien se refirió en tono despectivo al informe de los Notables, tónica que fue seguida por los demás generales, aunque resultaba obvio, para Camilo y los negociadores del Gobierno, que ellos estaban hablando sobre un documento que no conocían realmente. El penúltimo en hablar fue el general Ordóñez, jefe del Estado Mayor, quien de manera airada se paró y tiró el informe sobre la mesa, diciendo que un documento como ese ni siquiera merecía un comentario suyo. Por último habló el general Gilibert, director general de la Policía, quien, haciendo gala de prudencia y objetividad, fue el único que solicitó tiempo para analizar el informe pues entendía que sólo hasta ese momento había sido concluido y presentado.

El comisionado y su equipo escucharon con calma el duro discurso de los militares y entonces Camilo, con la paciencia colmada por la actitud grosera del general Ordóñez, les dijo:

—Generales, hay dos cosas que no entiendo en esta reunión. Primero, cómo es posible que ustedes puedan opinar sobre un documento que aún no conocen y, segundo, de dónde sacaron el borrador que tienen en sus manos. Lo que sí les recomiendo es que lean el documento final porque de lo contrario corren el riesgo de decir cosas equivocadas y absurdas como las que hoy he tenido que oír en esta mesa. No me parece serio, de ninguna manera, que la cúpula militar opine sobre borradores que tienen más de un

mes de antigüedad y que coinciden, extrañamente, con la salida de la doctora Ana Mercedes Gómez de la comisión.

El ministro Bell y el general Tapias, ante la tensa situación, mediaron para evitar que la discusión se saliera de control, y la reunión terminó con la conclusión de que era necesario que los militares revisaran el documento final con una óptica diferente, en el entendido de que existían diferencias importantes entre éste y el borrador que tenían en su poder.

A pesar de la franqueza de su respuesta, las relaciones del comisionado con el alto mando militar continuaron por buen camino, gracias a que él mismo trataba de cuidarlas, con el apoyo siempre constante del general Tapias, con quien tenía una especial cercanía.

La misma noche del 27 de septiembre, consciente de la importancia del documento presentado por la Comisión de Notables, decidí hacer una intervención televisada para presentarle al país las principales recomendaciones del documento y para invitar a todos los sectores a que participaran en su análisis.

En dicha alocución resumí las conclusiones del informe, aclarando que la ruta marcada por el mismo nos llevaría a unos acuerdos de paz que deberían ser ratificados por una Asamblea Constituyente o por un Referendo.

Recalqué, por otra parte, las órdenes que siempre le di a la Fuerza Pública para combatir a todos los grupos al margen de la ley, tanto a los grupos guerrilleros como a los grupos de autodefensa. Era necesario hacerlo porque, a pesar del innegable fortalecimiento militar y de los golpes que continuamente asestábamos a la guerrilla y los paramilitares, muchos seguían creyendo que el proceso de paz había ocasionado una disminución de las acciones militares en contra de la guerrilla, cuando en la realidad ocurría todo lo contrario. Como lo he dicho a lo largo de mi relato, durante mi gobierno no sólo se fortalecieron y modernizaron las Fuerzas Militares del país como nunca antes en la historia, sino que siempre impartí órdenes precisas, pública y privadamente, para que, mientras no se firmaran acuerdos de paz, la fuerza legítima del Estado combatiera con toda su capacidad ofensiva a quienes estuviesen por fuera de la ley.

"Invito a los diferentes sectores del país a que reflexionen sobre el texto completo de las recomendaciones, a que hagan sus aportes constructivos y, sobre todo, a que vean que la paz sí puede llegar y que alcanzar acuerdos que disminuyan la violencia si es posible. Hoy hay un nuevo horizonte para la paz".

Con estas palabras, que reflejaban la importancia que concedíamos en el Gobierno al informe de los Notables, terminé mi alocución al país. Infortunadamente, como casi siempre ocurría cuando lográbamos un avance importante, las FARC, con sus brutales acciones, estaban a punto de poner una dura carga de dinamita al proceso, que lo dejaría nuevamente herido de muerte.

CAPÍTULO XXXVII

El proceso y el 11 de septiembre

En julio de 2001, cuando ya se había cumplido el acuerdo humanitario, a través de la liberación de los soldados y policías secuestrados, y estaba todavía en proceso de elaboración el informe de la Comisión de Notables, consideré que era necesario hacer un nuevo ajuste al equipo de negociadores del Gobierno, involucrando la presencia de funcionarios más técnicos que políticos, sin perder, por otro lado, la valiosa experiencia del grupo que venía desempeñándose como tal.

El equipo del momento —conformado por monseñor Alberto Giraldo, el general en retiro José Gonzalo Forero Delgadillo, los políticos liberales Alfonso López Caballero y Luis Guillermo Giraldo, el político y periodista conservador Juan Gabriel Uribe y el industrial Ramón de la Torre— había cumplido, sin duda, al igual que el primer grupo de negociadores encargado de la definición de la Agenda Temática, un papel meritorio, marcado por su compromiso y dedicación con el proceso.

Un hombre como el general Forero, por ejemplo —que en su momento, como comandante de las Fuerzas Militares, combatió con firmeza a la guerrilla—, había tenido el valor patriótico para sentarse frente a ellos en la mesa de negociación, ganándose su respeto. Él y Juan Gabriel Uribe cumplían ya más de dos años como negociadores, en tanto que los otros cuatro llevaban cerca de un año desempeñando estas delicadas funciones. Todos ellos tuvieron un importante papel en el desarrollo del Acuerdo de Los Pozos y en el diseño y discusión de la propuesta de cese de fuegos y hostilidades.

Si los acuerdos de paz no llegaban, no era por falta de voluntad o dedicación de los negociadores. Todos ellos trabajaron sin remuneración, entregando horas y horas de esfuerzo, sacrificando valioso tiempo con sus familias o para sus actividades personales, únicamente pensando en el beneficio del país y del proceso. Muchas noches durmieron en el Caguán, varias veces a la semana tuvieron que recorrer polvorientos caminos para llegar a los lugares de reunión, incontables horas pasaron, bajo el perverso clima del trópico, gastando energías en las larguísimas discusiones que se trenzaban con la contraparte en la mesa de negociación.

Era un trabajo difícil y desagradecido, pero no dejaba de ser a la vez un reto apasionante. Creo que para muchos de ellos, si no todos, la participación en los equipos negociadores constituyó una de las experiencias más importantes de su vida.

Con María Emma Mejía, Fabio Valencia, Nicanor Restrepo, Rodolfo Espinosa, Pedro Gómez Barrero, Juan Gabriel Uribe, el general (r) José Gonzalo Forero Delgadillo, Ramón de la Torre, monseñor Alberto Giraldo, Alfonso López Caballero y Luis Guillermo Giraldo, así como con los nuevos negociadores que acompañaron la etapa final del proceso, a los que me referiré más adelante, Colombia tiene una inmensa deuda de respeto y agradecimiento, por su trabajo abnegado y desinteresado por el país.

Capítulo aparte, por supuesto, merecen Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, los dos altos comisionados de Paz de mi gobierno, quienes entregaron su vida, sus esfuerzos y su talento a la búsqueda de la esquiua paz, muchas veces en medio de incomprensiones e injusticias. No hubieran soportado tanta presión si no hubieran estado convencidos, como lo estaba yo, de que, con paso firme y una meta clara, era posible llegar al destino anhelado. No tengo que exaltar su trabajo y compromiso con adjetivos que se quedarían cortos. Este libro es, en gran parte, el testimonio de lo mucho que hicieron y aportaron, a costa incluso de su salud, para llevar adelante, con absoluta dedicación, el más grande proceso de paz jamás intentado en el país.

También hay que resaltar el trabajo de los dos comisionados adjuntos de Paz que acompañaron a Camilo Gómez en las más cruciales instancias de las discusiones con las FARC y el ELN, Luis Fernando Criales y Jorge Mario Eastman; de las personalidades y funcionarios que hicieron parte del Comité Temático Nacional y que participaron activamente en las audiencias públicas; de los integrantes del llamado Comité de los Notables, y de todo el equipo de apoyo de la Oficina del Alto Comisionado.

Todos ellos, junto con los ministros, el director de Planeación Nacional y tantos otros funcionarios del Gobierno conformaron un formidable equipo humano que, bajo mi dirección, se empeñó, como nunca antes, en lograr una solución negociada que le permitiera a Colombia alcanzar el sueño de una paz cierta y duradera.

EL NUEVO EQUIPO DE NEGOCIACIÓN

Pasados más de dos años y medio de proceso, la cada vez mayor concreción de los temas de la agenda generó la necesidad de realizar un ajuste en el equipo negociador, para dotarlo de un perfil más técnico y especializado. No obstante, no quería dejar perder la experiencia que el grupo anterior había adquirido durante meses de trabajo y, por medio del comisionado, les propuse que continuaran vinculados al proceso como un equipo especial de

asesores en la negociación. Juan Gabriel Uribe, Ramón de la Torre y monseñor Giraldo aceptaron continuar en esta labor. El general Forero, Alfonso López y Luis Guillermo Giraldo, por su parte, decidieron marginarse.

No se trataba tan sólo de un cambio de equipo sino también de una modificación al esquema de trabajo. La idea era involucrar de manera directa a los diferentes funcionarios del Gobierno que antes servían de apoyo de manera indirecta.

El nuevo equipo de negociadores quedó conformado, entonces, por Manuel Salazar, consejero de Política Social de la Presidencia; Reinaldo Botero, consejero presidencial para los Derechos Humanos; Ricardo Correa, secretario general de la Asociación Nacional de Industriales, gremio que había sido siempre muy activo en el tema de la paz, y el comisionado adjunto para las FARC, Luis Fernando Ciales. Este grupo obraría bajo la dirección del alto comisionado, Camilo Gómez, y con la asesoría permanente y especial de Juan Gabriel Uribe, Ramón de la Torre y monseñor Alberto Giraldo. Contaría, además, con el apoyo de delegados permanentes de cada uno de los ministerios, en cuyo interior se conformaron diversos equipos de trabajo para que analizaran las propuestas de la guerrilla y cooperaran con el Departamento Nacional de Planeación en los documentos técnicos de trabajo que esta entidad realizaba para el proceso.

La mayoría de los nuevos negociadores pertenecían al Gobierno y gozaban de toda mi confianza en cuanto a sus capacidades para actuar frente a la guerrilla y, sobre todo, en cuanto a sus conocimientos en cada una de las áreas de negociación. Es justo, también, hacerle un especial reconocimiento a este grupo, al cual le correspondió enfrentar las etapas más difíciles del proceso, incluyendo su rompimiento.

El cambio del equipo negociador generó en las FARC una reacción negativa. La guerrilla había adquirido ya una rutina y un conocimiento del anterior grupo y con el cambio se modificaba también su esquema de trabajo. Esta determinación llevaba consigo el mensaje de que ya había llegado la hora de concretar los acuerdos, lo cual en el fondo era la causa de su molestia. De alguna manera entendieron que el cambio del perfil negociador, de un plano de representatividad política a uno técnico, significaba que no estábamos dispuestos a seguir avanzando sólo en temas generales sino que queríamos llegar ya a acuerdos concretos en materia social, económica y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

RESPALDO POLÍTICO Y EMPRESARIAL AL PROCESO

En el tema de la paz mi objetivo fue siempre adelantar una política de Estado, para lo cual era necesario dejar de lado diferencias partidistas o de otra índole, buscando la colaboración y participación de los distintos sectores políticos o de opinión.

asesores en la negociación. Juan Gabriel Uribe, Ramón de la Torre y monseñor Giraldo aceptaron continuar en esta labor. El general Forero, Alfonso López y Luis Guillermo Giraldo, por su parte, decidieron marginarse.

No se trataba tan sólo de un cambio de equipo sino también de una modificación al esquema de trabajo. La idea era involucrar de manera directa a los diferentes funcionarios del Gobierno que antes servían de apoyo de manera indirecta.

El nuevo equipo de negociadores quedó conformado, entonces, por Manuel Salazar, consejero de Política Social de la Presidencia; Reinaldo Botero, consejero presidencial para los Derechos Humanos; Ricardo Correa, secretario general de la Asociación Nacional de Industriales, gremio que había sido siempre muy activo en el tema de la paz, y el comisionado adjunto para las FARC, Luis Fernando Ciales. Este grupo obraría bajo la dirección del alto comisionado, Camilo Gómez, y con la asesoría permanente y especial de Juan Gabriel Uribe, Ramón de la Torre y monseñor Alberto Giraldo. Contaría, además, con el apoyo de delegados permanentes de cada uno de los ministerios, en cuyo interior se conformaron diversos equipos de trabajo para que analizaran las propuestas de la guerrilla y cooperaran con el Departamento Nacional de Planeación en los documentos técnicos de trabajo que esta entidad realizaba para el proceso.

La mayoría de los nuevos negociadores pertenecían al Gobierno y gozaban de toda mi confianza en cuanto a sus capacidades para actuar frente a la guerrilla y, sobre todo, en cuanto a sus conocimientos en cada una de las áreas de negociación. Es justo, también, hacerle un especial reconocimiento a este grupo, al cual le correspondió enfrentar las etapas más difíciles del proceso, incluyendo su rompimiento.

El cambio del equipo negociador generó en las FARC una reacción negativa. La guerrilla había adquirido ya una rutina y un conocimiento del anterior grupo y con el cambio se modificaba también su esquema de trabajo. Esta determinación llevaba consigo el mensaje de que ya había llegado la hora de concretar los acuerdos, lo cual en el fondo era la causa de su molestia. De alguna manera entendieron que el cambio del perfil negociador, de un plano de representatividad política a uno técnico, significaba que no estábamos dispuestos a seguir avanzando sólo en temas generales sino que queríamos llegar ya a acuerdos concretos en materia social, económica y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

RESPALDO POLÍTICO Y EMPRESARIAL AL PROCESO

En el tema de la paz mi objetivo fue siempre adelantar una política de Estado, para lo cual era necesario dejar de lado diferencias partidistas o de otra índole, buscando la colaboración y participación de los distintos sectores políticos o de opinión.

Esto se tradujo no sólo en la composición de los dos primeros equipos negociadores —donde había representantes de los Partidos Liberal y Conservador, del sector privado, de la Iglesia y un destacado militar retirado—, sino también en la integración de otras instancias asesoras que fueron de particular importancia en los momentos más difíciles del proceso.

En lo político, como ya se narró en un capítulo anterior, constituí, en noviembre de 2000, el llamado Frente Común por la Paz y contra la Violencia, con representantes de las más diversas corrientes políticas, el cual se reunió en muchas oportunidades como un consejo asesor del presidente en materia de paz, y actuó prácticamente hasta el último momento del proceso.

Como un cuerpo de consulta más amplio y más representativo todavía, teníamos el Consejo Nacional de Paz, entidad de creación legal que significó, en varias ocasiones, un importante apoyo a la gestión de paz. Desde su creación en 1998 el Consejo se reunió en once ocasiones, siendo la última el 19 de febrero de 2002, un día antes del rompimiento del proceso con las FARC. Este Consejo está conformado por el mismo presidente de la República, el alto comisionado para la Paz, ministros del despacho, el procurador general de la Nación, el defensor del Pueblo, y, algo muy importante, un amplio espectro de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Iglesia católica, otras confesiones religiosas, las centrales obreras, los gremios empresariales, las universidades y organizaciones no gubernamentales representativas de minorías o grupos vulnerables. Con cierta periodicidad convoqué este Consejo, al que le presenté informes acerca de la marcha de los procesos con las FARC y el ELN, y donde discutimos de manera amplia y franca los problemas y expectativas de la negociación.

De otra parte, el sector empresarial también participó de manera particularmente activa en diferentes aspectos del proceso. Con regularidad, los gremios se reunían con el comisionado o conmigo para intercambiar ideas acerca de los desarrollos de ambos procesos.

Tal vez uno de los apoyos más significativos del sector privado consistió en la preparación y elaboración de un extenso documento en el cual los propios empresarios, de manera discreta y eficiente, nos entregaron una serie de propuestas que consideraban como posibles dentro de las discusiones de la agenda, las cuales complementaban los estudios técnicos que, desde el gobierno, producía el Departamento Nacional de Planeación.

Muchas veces se decía que el Gobierno no tenía preparadas alternativas de negociación sobre los puntos de la agenda, pero eso no fue cierto. Preparamos, junto con el sector privado, que colaboraba a través de la Fundación Ideas para la Paz, unas importantes propuestas para avanzar con seriedad en la discusión de la agenda. No obstante, las dificultades del proceso, las complicaciones en las discusiones de la Mesa y la prioridad que asignamos al cese de fuegos y hostilidades y a lograr una disminución efec-

tiva del conflicto llevaron a que las discusiones temáticas no avanzaran al ritmo deseado.

Lo cierto es que llegar a acuerdos concretos con la guerrilla no es nada fácil. Su visión del país resulta muy alejada de la realidad y la ideologización de todas las cifras les impide entender que el país que ellos imaginan no existe ya, pues en sus 40 años de actividad guerrillera —y a pesar de ella— Colombia no ha dejado de crecer y de progresar. No puede negarse que aún hay muchas injusticias y pobreza que combatir, viviendas que construir, empleos por generar, desafíos inaplazables en cuya solución trabajó mi gobierno, como lo han hecho, con más o menos aciertos, todos los mandatarios del país. Nadie, y menos la guerrilla, tiene fórmulas mágicas para salir de la pobreza y para lograr el pleno empleo. Lo único cierto es que la violencia, los secuestros, el terrorismo y la intimidación no van a ayudar en estos objetivos. Eso es lo que la guerrilla no ha entendido ni quiere todavía entender. Sólo por los cauces de la democracia y la civilidad puede llegarse al desarrollo y la justicia social.

Para concretar los temas de la agenda y proponer alternativas específicas, en forma de proyectos o de propuestas de reformas legales, o incluso constitucionales, como sugirieron los Notables, encargué al Departamento Nacional de Planeación —DNP— la elaboración del contenido mismo de la negociación. Allí se integró un equipo encabezado por Juan Carlos Echeverry, director del DNP, y coordinado por Camilo Leguizamó. A su vez, dentro de Planeación, cada dirección preparó las propuestas del Gobierno sobre cada uno de los sectores económicos. En especial, la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Estudios Macroeconómicos elaboraron las propuestas de empleo y del subsidio al desempleo, temas sobre los que la guerrilla mostraba un particular interés.

De esta forma, con el apoyo de las fuerzas políticas, del sector privado y de las instancias técnicas del Gobierno nos preparamos para avanzar con firmeza hacia la concreción de acuerdos, tanto temáticos como de cese de fuegos o tregua, como lo denominaron los Notables.

UNA NUEVA VISIÓN DEL TERRORISMO

Mientras estos desarrollos se presentaban a nivel interno, en el plano internacional un hecho sin precedentes habría de producir efectos inesperados en el proceso.

Los terribles sucesos acontecidos el 11 de septiembre de 2001 —cuando la acción terrorista más grande de los últimos tiempos culminó con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York e incrustó un avión en la propia sede del Pentágono en Washington— generaron, sin duda, cambios trascendentales en el escenario global y también en el nacional.

A partir de ese lamentable día, el mundo entero dejó atrás la visión ambigua y de tonos grises que durante tantos años se había mantenido frente al

terrorismo. En adelante sólo se hablaría en blanco y negro, acabando con la perversa y tácita distinción que existía entre terrorismo "malo" y terrorismo "bueno", como si fuera posible justificar alguna vez el sacrificio indiscriminado de vidas para perseguir cualquier fin. El mundo se volcó hacia una posición universal de "tolerancia cero" hacia el terrorismo, una corriente de la cual Colombia, tantos años afligida por las acciones terroristas de la guerrilla y los paramilitares, no podía estar ajena.

Precisamente, ese 11 de septiembre, a primera hora de la mañana, yo tenía una cita con la embajadora de los Estados Unidos, Anne Paterson, para revisar los últimos detalles de la visita que esa tarde realizaría al país el secretario de Estado, Colin Powell. Apenas se supo del primer impacto en una de las Torres Gemelas, el canciller Guillermo Fernández de Soto, que estaba en Lima asistiendo a una Asamblea Extraordinaria de la OEA, me llamó a la casa privada, donde me disponía a bajar a mi despacho para recibir a la embajadora, y me avisó del terrible incidente, que inmediatamente seguí por televisión. Luego, cuando llegó la embajadora, nos correspondió a ambos presenciar, con el corazón en un hilo, la colisión contra la segunda torre. Nuestro asombro y nuestro pesar fueron enormes. No podíamos creer, como no lo creían millones de personas en el mundo, lo que nuestros ojos nos mostraban.

Como era de esperarse, los efectos de la tragedia ocurrida en los Estados Unidos pronto llegaron al mismo proceso de paz colombiano. La comunidad internacional había apoyado generosamente el proceso, pero no había duda de que la nueva y más estricta visión sobre el terrorismo implicaba una observación más aguda y crítica sobre las acciones violentas de las FARC, el ELN y las Autodefensas, grupos todos que ejecutaban con frecuencia acciones terroristas como parte de su estrategia de lucha armada. De hecho, Colombia había sufrido largamente los estragos de la violencia guerrillera y paramilitar sin que la comunidad internacional censurara, con suficiente contundencia, dichos actos, considerándolos simplemente como hechos relacionados con el conflicto. A partir del 11 de septiembre esta interpretación dejó de ser posible.

A la guerrilla le había llegado el momento de definir si continuaba por la vía de la violencia indiscriminada, es decir, terrorista, o si optaba por buscar un verdadero posicionamiento político. Ni el país ni la comunidad internacional podían seguir utilizando matices grises para calificar sus actos: o eran terroristas o no, así de simple.

Las FARC entendieron que las circunstancias internacionales estaban cambiando y no tardaron en mostrar su preocupación frente al tema. En particular, les inquietaba la posibilidad de una acción armada en su contra por parte de los Estados Unidos, país que las había incluido desde hacía ya un buen tiempo en la lista de terroristas que atentaban contra los intereses americanos. Los guerrilleros fantaseaban con la insólita idea de que Estados

Unidos iba a realizar una operación militar a gran escala en Colombia para capturar a sus cabecillas, y esa posibilidad, más sacada de las películas de Hollywood que de la realidad, les quitaba el sueño.

Ahora bien, aunque ese temor era infundado, lo cierto es que la voladura de oleoductos, los secuestros, los ataques con cilindros y, en general, las acciones indiscriminadas en contra de la población o de la infraestructura ya no podían ser vistos simplemente como una consecuencia del conflicto interno. Además, muchas de las actividades de la guerrilla estaban financiadas por recursos del narcotráfico, provenientes de un negocio transnacional, como lo es el de las drogas ilícitas. Así que, si bien las acciones de la guerrilla colombiana no entraban en la categoría de terrorismo de alcance global, lo cierto es que sí afectaban intereses extranjeros y podían generar un efecto destabilizante en la región. No era terrorismo global, propiamente dicho, pero sí terrorismo con efectos más allá de nuestras fronteras.

Un día después de los atentados en Estados Unidos, el comisionado, Camilo Gómez, y el asesor Juan Gabriel Uribe tuvieron una reunión con Manuel Marulanda, que habían acordado con anticipación, para hacer un análisis de la situación del proceso y de las circunstancias políticas que lo afectaban.

Si bien el proceso estaba marchando de una forma relativamente normal, a las FARC se las notaba molestas porque no habían obtenido los réditos políticos y la buena publicidad que habían supuesto que cosecharían a raíz del Acuerdo Humanitario. Para nada les había gustado mi gesto de cortar públicamente la soga de la infamia con que ellos habían amarrado a los soldados, pues fue su crueldad, más que su pretendida "benevolencia", la que había salido a flote.

Juan Gabriel y Camilo viajaron más allá de un corregimiento llamado Las Delicias hasta llegar a una pequeña casa de madera situada al borde de la carretera, pintada de azul, lugar al que, a partir de ese momento, se denominó como "Casa Azul". Marulanda les dijo, en tono de broma, que la había hecho pintar de ese color para poder sentarse a hablar de política con los godos.

En la reunión estaban Marulanda, Joaquín Gómez, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Iván Ríos y algunos jefes intermedios que pocas veces se veían. Sin duda, Marulanda le concedía gran importancia a esta cita para hablar de política y quería que varios de sus hombres oyeran la conversación. La reunión se inició con un buen ambiente y desde un principio se orientó a analizar las circunstancias políticas que rodeaban el proceso.

Por supuesto, un tema obligado fue el de los atentados del día anterior, que los guerrilleros —para sorpresa de los representantes del Gobierno— condenaron con enérgicos términos. Estaban muy impresionados con lo sucedido y comentaban que el propio Marulanda no se había despegado del televisor, contemplando los informes sin musitar palabra, aterrado con lo que estaba sucediendo.

Uno de los guerrilleros especuló que un hecho de esas características no sucedería jamás en Colombia porque nadie en el país tenía vocación de kamikaze. Marulanda fue un poco más allá en sus apreciaciones y pronosticó que lo más probable era que los norteamericanos convirtieran un tema que era netamente de policía en una guerra militar internacional.

Pasados estos primeros comentarios, comenzó el debate político. La principal preocupación de los guerrilleros era que al proceso le faltaba el "aceite de la política". Camilo y Juan Gabriel concordaron en eso, pero les dijeron que no podían esperar otra cosa en tanto la guerrilla siguiera cometiendo actos de violencia, avanzando en contra de una opinión pública que cada día demandaba más hechos de paz. La única forma de generar ese "aceite político", insistieron, era disminuir la intensidad del conflicto, para lo cual el as bajo la manga sería la concreción del cese al fuego y de hostilidades.

Marulanda recibió las observaciones con buena tónica y afirmó que era necesario, entonces, "ir arreglando las cargas" y volver a las discusiones sobre el cese de fuegos. Lo que se planteaba en la reunión era un cambio positivo en la ecuación de la solución política negociada, en el sentido de buscar una menor actividad militar frente a una mayor actividad política.

Uno de los puntos que más le preocupaban a la guerrilla era el inicio de la campaña presidencial y para el Congreso. A Marulanda le inquietaba el hecho de que los candidatos arreciaban sus críticas frente al proceso y en especial frente a la Zona, con gran eco por parte de los medios de comunicación, lo que interpretaba como una campaña orquestada para evitar la continuación del proceso.

Precisamente por esos días, el candidato del Partido Liberal para las próximas elecciones presidenciales, Horacio Serpa, había anunciado que encabezaría una caravana de seguidores que ingresaría a la Zona de Distensión, donde él se encargaría de "cantarle la tabla" a las FARC. Los guerrilleros les mostraron a los dos voceros del Gobierno un documento que ya tenían preparado, anunciando que se oponían a que el candidato liberal fuera a hacer política en la Zona de Distensión. Camilo y Juan Gabriel reaccionaron ante tal despropósito y les dijeron que esta actitud sería contraproducente, pues interrumpir la marcha de un candidato, cualquiera que fuese, tendría graves consecuencias para el proceso.

Las FARC sostenían que el Partido Liberal quería que el proceso fracasara porque no podía aceptar que un presidente conservador hiciera la paz. No obstante, contrario a lo que ellos pensaban, Horacio Serpa y el Partido Liberal habían participado desde el principio en todos los acuerdos políticos de apoyo al proceso, habían firmado los documentos de Caquetania y Los Pozos, y participaban en el Frente Común por la Paz y contra la Violencia. Es más, miembros caracterizados de ese partido, como María Emma Mejía, Alfonso López Caballero y Luis Guillermo Giraldo, entre otros, habían formado parte de los equipos negociadores. Todo esto significaba que siempre

habíamos contado con el apoyo político del liberalismo, sin que por ese motivo dicho partido hubiese renunciado a formular las críticas que considerara necesarias, por demás sanas dentro de toda democracia.

Curiosamente, a Marulanda le preocupaba que el Partido Conservador no tuviera un candidato presidencial definido, pues decía que, a pesar de ser él comunista, siempre se había entendido mejor con los conservadores. Además, anotaba que no tenía buenas relaciones con los liberales porque desde tiempo atrás lo hablan dejado "colgado de la brocha".

Según le contó a Camilo en alguna ocasión, en sus tiempos de juventud había sido un activo miembro del liberalismo, considerado como un líder político en su pueblo. En 1950 había recibido la orden de su partido de impedir las elecciones en las que se presentaba Laureano Gómez como la única alternativa conservadora frente a la abstención decretada por los liberales. Marulanda —entonces llamado por su verdadero nombre de Pedro Antonio Marín— y sus copartidarios organizaron todo lo necesario para cumplir la orden y sabotear el proceso electoral en su pueblo. Reclutó gente para que le ayudara y dispuso de comida para sus cómplices. Tenía todo perfectamente preparado. Sin embargo, un día antes de los comicios, y para su sorpresa, recibió un telegrama con una contraorden.

—¿Qué podía hacer yo? —recordaba Marulanda—. ¡Me dejaron colgado de la brocha! Desde entonces me salí del Partido Liberal, que no era capaz ni de mantener sus propias órdenes, y decidí meterme de guerrillero.

El balance final de la reunión de aquel 12 de septiembre fue positivo. Las FARC abrieron un espacio para avanzar en el tema del cese de fuegos, se mostraron receptivas ante las conclusiones que saldrían del documento de los Notables y dejaron claro que querían darle un mayor manejo político al proceso.

Al finalizar el encuentro, Marulanda les entregó a los enviados del Gobierno una carta en la que hacía varias consideraciones relacionadas con lo conversado, en especial sobre el tema político, y formulaba una serie de propuestas que traducían su interés por mejorar las relaciones entre diferentes actores políticos y el proceso. Incluso contemplaba una reunión con mandos militares y de policía para iniciar la construcción de "confianza" con ellos. Las propuestas eran las siguientes:

1. *Sería bueno que la Mesa analizara la conveniencia de incluir a otras personalidades de partidos y movimientos interesadas en ayudar al proceso a buscar salidas políticas teniendo en cuenta la Agenda Común.*

2. *Es necesario materializar la propuesta de crear una comisión de la Mesa que se encargue de evaluar en las áreas de cultivos cuáles son cultivos industriales y cuáles cultivos de minifundio para acabar con las fumigaciones indiscriminadas que afectan los cultivos de pancoger de los campesinos.*

3. *Efectuar un encuentro nacional con representantes de los partidos tradicionales, nuevas fuerzas y movimientos independientes interesados en la campaña electoral y conocer de ellos sus programas y propuestas políticas para buscar la*

paz, soluciones económicas, sociales, educativas, ambientales y culturales, defensa de la soberanía, fumigaciones, extradición, paramilitarismo, canje de oficiales y suboficiales por guerrilleros y neoliberalismo.

"4. Realizar un encuentro con mandos militares y de policía en la zona del despeje con dirigentes de las FARC para hablar de la problemática nacional y la confrontación armada, buscando con ello mejorar el medio ambiente y crear confianza en ambas partes.

"5. Efectuar un encuentro nacional con dirigentes del movimiento alternativo para conocer de ellos su plataforma política y sus planteamientos frente a la paz y el paramilitarismo.

"6. La Mesa debe reglamentar estos encuentros utilizando los meses de noviembre y diciembre".

Al finalizar la reunión, el comisionado se comunicó conmigo a través de su teléfono satelital para informarme sobre lo acontecido. Aprovechando que Marulanda se acercó en ese momento, me sugirió que hablara con él y de inmediato lo puso en comunicación. Yo me valí de la ocasión para reiterarle la importancia de que avanzáramos hacia el cese de fuegos y hostilidades, y de que pusiéramos en práctica las recomendaciones que saldrían del documento de los Notables. A su vez, Marulanda me confirmó, con su peculiar modo de hablar por teléfono como si fuera un radioteléfono, lo que había dicho en la reunión. Al igual que mis delegados, quedé con la sensación de que las cosas marchaban por buen camino.

"CUIDADO, CARRO BOMBA"

En tanto avanzaban las discusiones en el Caguán, las campañas políticas comenzaban a generar distorsiones en el proceso. El candidato liberal, Horacio Serpa, insistía en realizar su marcha a la Zona de Distensión, la cual saldría de Bogotá y recorrería diferentes municipios, donde se unirían seguidores de todas partes del país, para llegar, finalmente, a San Vicente.

Horacio Serpa, como ya se dijo, había acompañando el proceso de paz, incluso en sus momentos más difíciles, poniendo al país por encima de las diferencias partidistas. El Partido Liberal lo había encargado de manejar los temas relacionados con el proceso de paz y, en desarrollo de esa función, Serpa formaba parte del Frente Común por la Paz y contra la Violencia y había firmado, con otros líderes políticos, los acuerdos de apoyo político de Caquetania y Los Pozos. En otras palabras, siempre había estado del lado de la solución negociada al conflicto colombiano, aunque por esos días había endurecido su posición frente al tema, tal vez con el propósito de mejorar su posición en las encuestas, en las que comenzaba a reflejarse el cansancio de la gente frente al proceso.

El 29 de septiembre, finalmente, y pese a las advertencias del Gobierno y las Fuerzas Militares sobre las implicaciones de seguridad que tenía un acto

masivo de tal naturaleza, el candidato Serpa llegó, encabezando una larga caravana de buses llenos de seguidores, a los límites de la Zona de Distensión, con un gran despliegue de los medios de comunicación. El Gobierno, por supuesto, estuvo pendiente de garantizar su seguridad durante todo el trayecto, pero, por la misma naturaleza de la Zona, no podíamos brindarle la protección de la Fuerza Pública dentro de ella.

La guerrilla, por su parte, había anunciado públicamente que no dejaría pasar al candidato, en un acto de gran torpeza política, pues no sólo le subió el perfil a la marcha sino que generó un mayor sentimiento de rechazo por parte de la población. Además, demostraba intolerancia e incapacidad para manejar situaciones de confrontación política. Por su parte, Serpa jugaba una carta de doble triunfo, pues, si llegaba a San Vicente, probaría su osadía al "cantarle la tabla" a las FARC en su propia cara y, si no lo dejaban pasar, quedaría como una víctima de la misma y, a pesar de haber acompañado el proceso, se podría mostrar como un contradictor de la guerrilla.

Cuando la caravana llegó al límite de la Zona se encontró con un contingente de guerrilleros que le obstruyó el paso, apoyado por barricadas con alambre de púas y pasacalles en los que se leía "Minas en la carretera" y "Cuidado, carro bomba", este último al lado de un vehículo supuestamente lleno de explosivos.

Los medios de comunicación registraron el difícil momento en el que los guerrilleros impidieron el paso de la marcha e, incluso, hicieron varios disparos al aire para amedrentar a los manifestantes. A pesar de los intentos de Serpa por convencerlos, los guerrilleros tenían órdenes perentorias de no dejarlos pasar y con actitud amenazante se enfrentaron al candidato y su comitiva. Sin duda, las imágenes resultaron impactantes y enervaron los ánimos de la opinión. Por fortuna, el candidato y la gente de su campaña manejaron la situación con cabeza fría y se devolvieron sin ocasionar una situación todavía más crítica.

Como es natural, esta acción de la guerrilla generó un problema político serio, al igual que frente al proceso. No podíamos permitir que la guerrilla definiera quién podía o no entrar a la Zona de Distensión. Como la misma Corte Constitucional había manifestado, la Zona se decretó como ejercicio de la soberanía y no como una cesión de territorio o de autoridad a la guerrilla, por lo que resultaba inaceptable que ésta impidiera el acceso a la misma de una manifestación política en medio de una campaña electoral.

Mientras Serpa regresaba a Bogotá, reuní de urgencia en mi despacho al ministro del Interior, Armando Estrada; al ministro de Justicia, Rómulo González; al ministro de Defensa, Gustavo Bell; al comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y a los asesores Juan Gabriel Uribe y Ramón de la Torre, para buscarle una salida a esta delicada situación. Allí surgió la idea de realizar una reunión del Frente Común por la Paz y contra la Violencia en la misma Zona, en el Batallón Cazadores, sede del Gobierno Nacional, con la

participación del propio Horacio Serpa y de los demás políticos miembros de este cuerpo asesor. De inmediato le di instrucciones a Camilo para que contactara personalmente a cada uno de los candidatos.

Ese mismo día, el comisionado habló con Horacio Serpa, Noemí Sanín, Antonio Navarro, Luis Eduardo Garzón, el presidente del Partido Conservador, los presidentes del Senado y de la Cámara, el secretario del Partido Comunista y los demás miembros del Frente para citar la reunión para el día siguiente. Todos accedieron. También, como siempre lo hicimos desde cuando oficializó su postulación a la Presidencia, se llamó a Álvaro Uribe Vélez, el candidato que se mostraba más crítico al proceso de paz, quien declinó la invitación.

Ya entrada la noche, habíamos obtenido una respuesta positiva por parte de todos los miembros del Frente Común por la Paz y teníamos lista la logística necesaria para trasladarnos al otro día a la Zona de Distensión. La intención era precisa. Estaríamos allí para dejar claro que a la Zona podía ir cualquiera de los candidatos y el mismo presidente de la República.

No obstante, hacia la medianoche, Horacio Serpa se comunicó con Camilo y le anunció que, después de debatir el tema con algunos de sus asesores, había cambiado de opinión y no creía conveniente asistir a la reunión. Esto llevó a que el viaje fuera cancelado, pues la presencia más importante en el Caguán era, precisamente, la del candidato al que le habían impedido el acceso. Finalmente, se citó la reunión del Frente Común para el lunes siguiente, en el Palacio de Nariño, para discutir el manejo político que la situación exigía.

No podíamos imaginar que lo más grave estaba todavía por suceder.

CAPÍTULO XXXVIII

“Yo tengo una herida muy honda que me duele”

Consuelo Araujonoguera, a quien sus amigos y Colombia entera conocían cariñosamente como *La Cacica*, era, ante todo, una mujer de su tierra. Amante y promotora de la música autóctona y regional, y en especial del vallenato de su querido Valle de Upar, se había ganado a pulso, como periodista, como escritora, como defensora de la cultura popular y líder de su región, el cariño de todo el país. Era imposible hablar de vallenatos o pensar en el tradicional Festival de la Leyenda Vallenata sin que la figura omnipresente de La Cacica llegara a la mente, como si fuera la “diosa coronada” de esos cantos populares que todos los colombianos albergamos en el alma.

Tuve el privilegio y la alegría de haberme contado entre sus amigos, a los que ella acogía por igual, y sin distingos políticos o regionales, en la casa grande y abierta de su corazón. Por eso mismo, porque conocía su calidad humana y su trayectoria de servicio, la designé en julio de 2000 como ministra de Cultura, cargo que desempeñó con la pasión y entrega que la caracterizaban. Renunció, sin embargo, en febrero de 2001, cuando su esposo, el jurista Edgardo Maya Villazón, fue elegido como procurador general de la Nación. Desde entonces había vuelto a sus labores como alma y nervio del Festival de la Leyenda Vallenata en su entrañable Valledupar.

Consuelo había sido, desde siempre, una convencida de la paz y había hecho aportes, en los tiempos del proceso adelantado por el presidente Betancur, a la reconciliación del país. Cuando fue creada la Unión Patriótica como una alternativa para facilitar la incorporación de las FARC a la actividad política, ella ayudó a que varios guerrilleros salieran del monte y llegaran ilesos a Barranquilla. En alguna ocasión me contó que en su casa se realizaron algunas reuniones secretas en las que se preparó la salida de combatientes de las FARC hacia la vida política. Nunca se hubiera imaginado que, años después de tenderle su mano a la paz, sería asesinada por el mismo grupo guerrillero que entonces auxilió y acogió en su casa.

Consuelo Araujonoguera fue secuestrada por las FARC el 24 de septiembre de 2001, junto con un grupo de personas, entre quienes se contaban su ami-

ga Cecilia Monsalvo y otras dos mujeres, familiares del famoso intérprete vallenato, Cocha Molina. Ellas regresaban a Valledupar desde el municipio de Patillal, donde habían asistido a la misa tradicional de la Virgen de las Mercedes y cayeron víctimas de un retén guerrillero.

Cuando me enteré del hecho, mi indignación y preocupación fueron inmensas, pero al tiempo pensé, tal vez con el deseo, que podía ser posible que la guerrilla la devolviera pronto, más aún por tratarse de alguien tan querido por el país, que además había trabajado siempre por la paz.

Por supuesto, como corresponde en estos casos, se puso en marcha de inmediato un operativo militar para seguir a los secuestradores y buscar la liberación de La Cacica, procurando en todo caso, como prioridad, la protección de su vida. Antes que lograr el rescate de un cadáver, la primera obligación de la Fuerza Pública es salvar la vida del secuestrado. Ésta es una norma aparentemente sencilla que, en la práctica, presenta muchas dificultades, sobre todo en los operativos de rescate rurales, por las difíciles condiciones de nuestra geografía.

El operativo se inició desde el mismo día del secuestro y pedí a los encargados que me mantuvieran informado. El procurador Edgardo Maya, esposo de La Cacica, insistió muchas veces sobre la necesidad de preservar su vida en caso de un operativo de rescate y estuvo en permanente comunicación con los altos mandos militares a cargo del mismo. Durante los días siguientes, el operativo se desarrolló dentro de los parámetros posibles, logrando cada vez más cercanía con el grupo de secuestradores y secuestrados que se movilizaba hacia las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta. La altura de las mismas estaba causando ya problemas de salud, y por consiguiente de movilización, a Consuelo.

El domingo 30 de septiembre fue uno de los días más aciagos y tristes de mi mandato. Hacia las 3 de la mañana recibí una llamada del general Gilibert, director general de la Policía, quien, con voz compungida, me informó que las tropas encargadas del operativo habían encontrado un cadáver que parecía ser el de La Cacica, casi irreconocible porque le habían disparado en la cabeza a quemarropa. Con un último hilo de esperanza, pedí que verificaran lo más pronto posible su identidad pues todavía guardaba la ilusión de que mi amiga no estuviese muerta.

La noticia me causó una tristeza enorme, volviendo a mi memoria, como un pesado fardo, el recuerdo de los años de buena amistad, de las anécdotas compartidas y de ese carácter alegre y frentero que tanto le admiraba. Pensé, con dolor, en su esposo, el procurador, en sus hijos y su familia; pensé en su región y en la música vallenata, que no serían las mismas sin ella. También consideré lo que esto significaría para el proceso con las FARC, pues la gravedad del hecho no le dejaba muchas posibilidades de supervivencia.

Unos minutos más tarde volvió a sonar el teléfono. Era el alto comisionado, Camilo Gómez, que se había enterado de la noticia y estaba igualmente impactado por lo sucedido.

—Presidente, si este crimen se confirma, creo que el proceso no va a soportarlo. Estamos en el momento más crítico y veo muy complicada una salida a este problema.

Acordamos una reunión a primera hora de la mañana y le pedí que contactara al canciller y a los ministros de la Defensa y del Interior para que todos recabaran la mayor información posible. Sumido en la tristeza, pasé despierto el resto de la noche hasta el amanecer. Durante esas horas de insomnio pensaba en lo absurdo que resultaba ese asesinato, más aún cuando ella había trabajado por la paz y era una convencida del diálogo como mecanismo para resolver el conflicto.

Mi sentimiento lo resumí unos pocos meses después, en la Plaza Alfonso López de Valledupar, cuando instalé el primer Festival Vallenato que se hacía sin su presencia, con estas palabras nacidas del corazón:

"Los terroristas, los que desprecian la vida y comercian con la libertad, no podían caer más bajo. Apuntar un arma contra Consuelo Araujonoguera fue como apuntar un arma contra el corazón de Colombia, contra la cultura de sus pueblos, contra lo más hermoso y digno de nuestro país. ¡Qué cobardes, qué viles, qué ignorantes son aquellos que utilizan una bala para matar una flor!"

También pensé, durante esa pesadosa vigilia, en lo contradictoria que resultaba esta situación. Siempre que teníamos un importante avance en el proceso, algún hecho violento de la guerrilla lo hacía retroceder. Esa noche volvía a pasar, pues tan sólo unos días atrás, con la entrega del documento de la Comisión de Personalidades, se habían abierto nuevas posibilidades para concretar los acuerdos en medio de una tregua. Sin embargo, aquí estaba, enfrentado de nuevo a la decisión de terminar el proceso. Habíamos puesto toda nuestra voluntad y todo el empeño posible, pero los hechos se ensañaban en contra de la batalla por la paz.

Antes de las 5 de la mañana el general Gilibert y el general Tapias me confirmaron el hecho, borrando así el tenue pabilo de la esperanza. El procurador, que se encontraba en Valledupar pendiente del operativo de rescate, había sido también notificado de la desgraciada noticia.

Hacia las 7 de la mañana nos reunimos en Palacio con el comisionado y los ministros que le pedí citar, y llamamos también a los asesores del proceso Juan Gabriel Uribe, Ramón de la Torre y Luis Fernando Ciales, además del consejero de Seguridad, Gonzalo de Francisco. Entre todos comenzamos a explorar las alternativas que nos dejaba este terrible hecho, tarea en la que se siguió trabajando durante todo el día.

Decidí, además, anticipar la reunión del Frente Común por la Paz y contra la Violencia que estaba convocada para el día siguiente, con el fin de consultar de primera mano las opiniones de los principales líderes políticos del país.

Hacia el mediodía de ese domingo se efectuó la reunión con el Frente Común, a la cual asistieron, consternados por la reciente noticia, todos los

dirigentes que lo conformaban. Allí se planteó un rechazo unánime frente al infame crimen y cada uno de ellos expresó sus opiniones acerca de los acontecimientos de los últimos días, incluyendo la obstrucción a la marcha política de Horacio Serpa, a quien todos le manifestaron su solidaridad por lo sucedido. La reunión del Frente resultó muy constructiva y entre todos discutimos cuál podría ser el futuro del proceso, bajo las nuevas y adversas circunstancias.

Yo sabía que estábamos frente a la posibilidad de romper el proceso, determinación que con seguridad resultaría más popular que mantenerlo, pero también sabía que era necesario agotar todas las posibilidades para mantener viva esa oportunidad para la paz. No podíamos desconocer, en todo caso, que la opinión pública había llegado a un estado de crispación y eran muchos los que exigían el rompimiento y el fin de la Zona de Distensión.

En medio de este complejo momento, todos los miembros del Frente Común no sólo le brindaron su apoyo unánime al Gobierno, sino que me exhortaron a buscar la continuidad del proceso, eso sí dándole un giro fundamental, como podría ser la aplicación inmediata de las recomendaciones contenidas en el informe de los Notables. En todo caso, expresaron su voluntad de respaldar plenamente la decisión que yo tomara como jefe de Estado, ya fuera para sostener o para terminar el proceso, si a ello me obligaban las circunstancias.

Escuchada la opinión de los integrantes del Frente Común y de otros líderes políticos y gremiales con quienes me comuniqué a lo largo del día, le di instrucciones a Camilo para que buscara una reunión a la mayor brevedad con Marulanda, la cual quedó acordada para el martes 2 de octubre.

Ese día llegaron a Los Pozos el comisionado y el asesor Juan Gabriel Uribe. Allí estaban esperándolos todos los negociadores de las FARC pero no Marulanda, con quien se había pactado el encuentro. Ante el incumplimiento de la cita por parte del jefe guerrillero, Camilo les manifestó:

—Díganle a Marulanda que aquí vine a cumplir la cita. Él inició este proceso y quiero saber si, frente a los hechos tan graves que han ocurrido, él está en disposición de sentarse conmigo para definir qué va a pasar y si esto tiene alguna solución para continuar bajo otras circunstancias. Tengo plenas facultades del presidente para tomar cualquier determinación, pero quiero verlo directamente a él. Espero que en la comunicación de esta tarde me informen si eso es posible o no. Mientras tanto, no tengo nada más que discutir con ustedes.

La reunión, que tuvo un altísimo nivel de tensión, terminó en ese instante y mis delegados regresaron a Bogotá para informarme sobre lo sucedido.

Ese mismo día, otra noticia luctuosa acabó de acrecentar el dolor y la indignación nacional, y la preocupación del Gobierno. El congresista liberal Octavio Sarmiento había sido asesinado en Arauca. Aunque el hecho parecía ser de autoría de los grupos paramilitares y no de la guerrilla, no dejaba de ensombrecer aún más el panorama de la paz.

En la tarde, convoqué al grupo que estaba encargado de analizar propuestas para superar la crisis y concluimos que quedaban tres escenarios posibles: primero, que Marulanda asistiera a una nueva reunión y se lograra un acuerdo que cambiara el rumbo del proceso; segundo, que de dicha reunión no se lograra ningún acuerdo significativo, lo que llevaría al rompimiento, y, tercero, que Marulanda no se presentara, lo que igualmente significaría el fin del proceso.

Las FARC no se comunicaron sino hasta el 3 de octubre, a las 7 de la mañana, cuando Raúl Reyes le informó por radioteléfono al comisionado que la reunión con Marulanda estaba, ahora sí, confirmada para el día siguiente en Casa Azul. Dos horas más tarde, el equipo de análisis estaba reunido, dando los últimos ajustes a los términos de lo que sería la redefinición del proceso.

De acuerdo con las recomendaciones del Frente Común, todos los esfuerzos se orientaron a buscar la aplicación inmediata del documento de los Notables para lograr un cese de fuegos o tregua. Se requería que la opinión pública, cansada de tanta violencia, percibiera un cambio tangible en el proceso. También determinamos que era necesario plantear a la guerrilla las quejas e inquietudes que se venían presentando sobre el uso de la Zona de Distensión, sobre la cual arreciaban últimamente las críticas. Precisamente, por esos días, el senador Germán Vargas Lleras había adelantado un fuerte debate en el Congreso sobre las presuntas irregularidades que las FARC venían cometiendo en la Zona.

Para evitar contratiempos, ese mismo día viajaron de nuevo Camilo y Juan Gabriel a San Vicente, con el fin de dormir allá y así poder llegar temprano a la reunión con Marulanda.

Por mi parte, consciente de la indignación que imperaba en el país por el crimen de La Cacica, decidí hacer esa noche una corta alocución televisada para informar a los colombianos sobre el estado de la situación y los criterios con que iba a actuar como gobernante, más aún porque la opinión estaba pendiente de lo que sucedería con la Zona de Distensión, cuya última prórroga vencía el 9 de octubre, en menos de una semana.

Sobre la determinación que tomaría al respecto, esto fue lo que aseguré a mis compatriotas:

"Tal decisión [...] he de asumirla con el pulso firme y la mira puesta en el bien común, pero ante todo con los oídos abiertos a las voces de la inmensa mayoría de compatriotas que expresan con una sola voz su inconformismo con la brutalidad, la insensibilidad y la violencia, porque lo que está en juego es el futuro del país".

Al otro día, mientras los delegados del Gobierno se dirigían a Casa Azul, en Palacio estaba ya reunido el equipo de soporte, atento a toda información que nos llegara desde la Zona. El momento era definitivo y teníamos listos todos los recursos para lograr una negociación exitosa o, en últimas, terminar con el proceso.

"LA TENTACIÓN EQUIVOCADA DE DELIBERAR"

Durante los días posteriores al asesinato de La Caca me reuní con los militares para discutir las acciones que fueran necesarias en caso de que se rompiera el proceso y para tenerlos al corriente sobre las decisiones que tomábamos en el Gobierno.

Ellos se mostraban preocupados por varias razones. Por una parte, porque algunos sectores de la opinión pública —cayendo en el juego absurdo de la guerrilla de culpar al operativo militar de la muerte de Consuelo— criticaban el accionar del Ejército en este absurdo crimen, cuando los uniformados no habían hecho otra cosa que cumplir con su deber constitucional, persiguiendo a los secuestradores y buscando la libertad de los secuestrados. Por otro lado, la relación con la cúpula atravesaba un momento de tensión debido a las versiones que circulaban respecto a que la información que había utilizado el senador Vargas Lleras en su debate contra la Zona de Distensión había sido suministrada por estamentos militares, lo que se sumaba al incidente que tuvieron con Camilo sobre el borrador del informe de los Notables.

Como presidente, no podía permitir que los propios militares filtraran información con la intención de hacerle daño al proceso y así se los hice saber a través del ministro de la Defensa. El general Tapias fue enfático en negar que él o cualquier otro alto oficial hubieran filtrado información privilegiada. Yo, por supuesto, creía en la palabra, la lealtad y la buena fe de Tapias, pero sabía que era posible que algún otro general, sin su conocimiento, hubiera intentado torpedear el proceso.

No sería la primera ocasión en que algún oficial filtrara información confidencial con ese objetivo. De hecho, unos meses atrás, en abril de 2001, en un discurso que pronuncié durante la celebración del quincuagésimo aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, había tratado este tema de manera franca y directa. Sé que en esa oportunidad mi discurso no generó simpatías en las Fuerzas Militares pero no se trataba de ganarlas sino de dejar sentada una posición inequívoca, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país.

Mi gobierno había realizado la mayor transformación de la historia en nuestra Fuerza Pública, dotándola de más y mejores hombres, más y mejores armas, mayor movilidad, mejores condiciones y una nueva estrategia. Eso me daba, precisamente, la autoridad moral para hablar sin ambages sobre las relaciones que debían existir entre los militares y el poder civil.

En aquel discurso, después de referirme a los avances logrados en la modernización de las Fuerzas Militares, dije:

"[...] esto, señores, implica también grandes compromisos por parte de las Fuerzas Militares, con su país y con su presidente."

"Como su comandante, espero ante todo la máxima lealtad con el país y con la democracia. El honor militar de las Fuerzas Armadas de Colombia contiene ante todo la obligación máxima de la lealtad con las políticas de Estado y con las directrices del presidente.

"La fuerza sin dirección política es simplemente violencia. La debida obediencia de las Fuerzas Militares nunca puede verse mancillada. Nadie, en el interior de nuestro Ejército o por fuera de él, puede poner en duda su total acatamiento a la voluntad de la democracia que ha sido depositada por los ciudadanos en cabeza del máximo comandante de las Fuerzas Militares, que es el presidente.

"La lealtad también está en evitar, con convicción plena, la tentación equivocada de deliberar. La vocación histórica de nuestro Ejército y su formación dentro del Estado de Derecho y la democracia así lo imponen. No faltarán los que impulsen a nuestros hombres a caer en esta tentación. La sabiduría del buen militar estará siempre en evitarla, conservando, eso sí, la capacidad de discernir con la confidencialidad que ella implica.

"La lealtad también es sinceridad y transparencia. Siempre he oído el consejo sincero de nuestros generales, no sólo formalmente sino en la realidad. Como su comandante, siempre espero contar con la franqueza y con la diaphanidad en cada una de las actuaciones de los soldados de Colombia. No entendería nunca que los miembros de las Fuerzas Militares no fuesen sinceros con su comandante así como ustedes nunca permitirían que sus soldados no lo fuesen con ustedes.

"Esa sinceridad que exijo implica ante todo discreción. Bien lo dijo nuestro Libertador en una famosa carta al general Santander: 'Me parece muy bien la carta de usted a Páez, pero diré, con franqueza, que escribir confidencialmente para publicar estos escritos no es muy propio de la amistad ni del decoro de un gobierno. Si Páez ha empezado con esta carrera indecente, nosotros no debemos seguirla. A mí me disgusta infinito esta conducta con respecto a mí, pues una confianza que se hace pública es una violación del secreto.'"

Esas fueron mis palabras en abril de 2001. Sin embargo, a comienzos de octubre del mismo año, parecía que debía volver a recordarlas.

A sabiendas de la incomodidad que se vivía en los altos mandos de las Fuerzas Militares a raíz de las críticas por el infortunado operativo de rescate de La Caca, y de las posibles filtraciones de información en los casos del borrador del informe de los Notables y del debate del senador Vargas Lleras, decidí enfrentar la situación personalmente. Cité, entonces, a la cúpula militar; al ministro de Defensa, Gustavo Bell, y al ministro del Interior, Armando Estrada, a una reunión en la base de Tolemaida para discutir abiertamente, como lo habíamos hecho en mayo de 1999 con los generales y almirantes del país a propósito de la renuncia del ministro Lloreda, éstas y cualesquiera otras inquietudes que pudieran tener.

La reunión coincidió con la cita de Camilo Gómez y Juan Gabriel Uribe con Manuel Marulanda en el Caguán, lo que generó las especulaciones de la prensa sobre la posibilidad de una grave crisis militar, la cual en realidad

nunca existió. En esta ocasión discutimos abiertamente todos los temas, especialmente los relacionados con el proceso de paz y la Zona de Distensión, cuya última prórroga vencía el 9 de octubre, con la franqueza que siempre lo habíamos hecho.

Durante todo el día escuché sus preocupaciones e intercambiamos opiniones y, al final del encuentro, el general Tapias hizo una declaración pública ante los medios de comunicación, manifestando que las Fuerzas Armadas acatarían y harían cumplir de inmediato cualquiera de las decisiones que el Gobierno tomara sobre la Zona de Distensión.

Cualquier duda al respecto había quedado despejada.

"PASTRANA NOS TIENE JODIDOS"

La cita del Caguán se inició sin preámbulos ni dilaciones, en un ambiente de alta tensión. Marulanda estaba acompañado por el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Carlos Antonio Lozada, Simón Trinidad, Iván Ríos, Joaquín Gómez y un inusual número de guerrilleros que mantenían la zona acordonada.

—Ustedes mataron a Consuelo e impidieron la marcha de Serpa y eso ha puesto todo el proceso en peligro. Aquí estamos y sólo queremos saber si ustedes están dispuestos a hacer algo por el proceso o si de una vez nos dicen que no quieren continuar, pero tengan claro que las cosas no pueden seguir como están. Tal como lo dije el martes, tengo todas las facultades necesarias para tomar la determinación que sea, aquí y ahora. De ustedes depende lo que pase —fue la dura introducción del comisionado.

Juan Gabriel Uribe no se quedó atrás, dirigiéndose directamente a Marulanda:

—Usted debe saber que, en adelante, cada vez que se oiga un vallenato en Colombia la gente se va a acordar de que ustedes mataron a La Cacaica.

Los guerrilleros guardaron silencio, con la preocupación reflejada en sus rostros. Sabían que esta vez el proceso podía llegar a su fin y que enfrente estaban sentados los delegados del Gobierno dispuestos a todo.

Comenzó así una ardua discusión en la que los delegados del Gobierno reclamaron a los guerrilleros por sus acciones y éstos argumentaron para librar su responsabilidad, manifestando, incluso, su pesar por la muerte de Consuelo. Cuando pretendieron culpar al Ejército por el asesinato, diciendo que el crimen había sido generado por la presión del operativo de rescate, Camilo y Juan Gabriel reaccionaron indignados y les pidieron a las FARC que tuvieran al menos el valor de reconocer sus errores y su responsabilidad.

Una vez agotada la discusión inicial, el comisionado tomó de nuevo la palabra y le dijo a Marulanda:

—Lo que necesitamos saber es si ustedes están dispuestos a hacer algo para sacar adelante el proceso o no. El resto de discusiones no tiene sentido.

Y agregó:

—Ustedes saben bien que, después del 11 de septiembre, las acciones terroristas son vistas de otra manera. Ustedes tienen que definir si quieren una salida política o si van a encasillarse en el tema del narcotráfico y el terrorismo. Sólo ustedes, con sus acciones, pueden definir esto. Pero deben ser conscientes de que ha llegado el momento de las definiciones.

Así siguieron las discusiones, hasta cuando, transcurridas cerca de tres horas de debate, Marulanda dio la primera señal positiva:

—Bueno, Camilo, recuérdeme cómo es eso que usted siempre ha dicho sobre los retenes en las carreteras, a ver si por ahí empezamos a encontrar una salida.

Esta frase dio pie para que comenzara a concretarse un acuerdo que incluyera la suspensión inmediata por la guerrilla de los secuestros en las carreteras, también conocidos en el país como "pescas milagrosas". Mis delegados plantearon, entonces, tres temas sobre los cuales se debía llegar a un compromiso: la disminución de acciones violentas y, en especial, del secuestro; la ratificación de las normas sobre la Zona de Distensión, y la inmediata discusión del cese de fuegos o tregua, dentro del marco de las recomendaciones de los Notables.

Durante todo el día se desarrollaron las conversaciones: el Gobierno enfatizando la necesidad de avanzar en la disminución de la violencia y la guerrilla procurando que la negociación siguiera únicamente sobre los puntos de la agenda. Finalmente, la posición de las FARC comenzó a hacerse más flexible, pues entendieron que resultaba urgente dar una señal concreta de que el proceso cambiaba, mejorando las condiciones de seguridad de los colombianos.

Ya entrada la tarde, se acordó elaborar un borrador para trabajarlo el día siguiente, cuando volverían a reunirse, esta vez cerca del sitio denominado "La Ye", a una hora del pequeño corregimiento de San Francisco de la Sombra, en la vía que conduce hacia los llanos del Yarí.

Al regresar a la sede del Gobierno en San Vicente, Camilo y Juan Gabriel se comunicaron con el grupo de soporte en Bogotá, y entre todos dieron cuerpo al borrador que se discutiría al otro día.

Muy temprano en la mañana del 5 de octubre, los delegados del Gobierno emprendieron un recorrido de más de tres horas hacia "La Ye", que era el mismo lugar donde se había negociado y firmado el Acuerdo Humanitario que significó la libertad de los soldados y policías secuestrados por las FARC.

La reunión se realizó en una nueva choza que la guerrilla había construido, en medio de un asfixiante bochorno, acrecentado por los vidrios que servían como rústicas ventanas. Marulanda se notaba más callado y cansado que de costumbre, de forma que esta vez el peso de la negociación recayó en Raúl Reyes, Carlos Antonio Lozada y Simón Trinidad. Después de dos horas de arduas discusiones, se decretó un receso para que cada parte revisara el documento.

En medio de ese receso, Camilo se sentó a conversar informalmente con el Mono Jojoy, encima de un viejo y grueso tronco caído. Entonces el jefe militar de las FARC, conocido y temido por su dureza, le soltó al comisionado una frase desconcertante:

—Camilo, ¡no entiendo por qué nos tienen tan jodidos!

—¡No diga pendejadas! —le respondió Camilo, extrañado—. Si los que están jodiendo al país son ustedes. Mire no más las "cagadas" que han cometido últimamente.

Jojoy, sin inmutarse, le respondió:

—Es que Pastrana nos resultó más berraco de lo que pensábamos. Lo lógico es que, después de todo lo que ha pasado, hubiera roto el proceso, pero se ha mantenido firme y nos tiene jodidos. Nos echó la comunidad internacional encima, convenció a los gringos de que le dieran plata y helicópteros para darnos duro, en el país ya todo el mundo nos detesta, nos están ganando políticamente, rearmaron al Ejército para que nos dieran plomo y, para rematar, nos tiene aquí sentados a los principales líderes de la guerrilla discutiendo con usted y sin que podamos hacer mayor cosa. Ahora, para completar, nos van a hacer firmar un acuerdo en el que les damos varias cosas y que nos va a dejar amarrados. ¿Le parece bobada?

Cuando Camilo me contó sobre las palabras de Jojoy, no pude menos que pensar en lo paradójico de su análisis. Mientras la mayor parte del país pensaba que el proceso que habíamos sostenido durante casi tres años había beneficiado más a la guerrilla que al Estado, los guerrilleros tenían la percepción contraria.

Sin duda, era difícil encontrar un resumen más ajustado a la realidad que el que había hecho el guerrillero: la Zona, más que una ventaja estratégica para la guerrilla, se había convertido en un peso, pues la negociación obligaba a los jefes guerrilleros a concentrarse allá, discutiendo documentos y puntos de la agenda delante de una opinión pública nacional e internacional que escrutaba en detalle cada una de sus acciones, impidiéndoles estar al frente de acciones militares o terroristas en otras partes del país.

También eran ciertos los otros puntos de su reclamo: la comunidad internacional los había conocido en su verdadera dimensión y ya no tragaba entero el cuento de una guerrilla libertaria y socialista; por el contrario, condenaba duramente su faceta terrorista y de vinculación con el narcotráfico. Las Fuerzas Militares se habían fortalecido más que nunca y les asestaban golpe tras golpe. Políticamente, ya casi nadie creía en el discurso trasnochado y anacrónico de las FARC, contaminado por la violencia que ejercían contra sus propios compatriotas, y el país entero se había unido en un solo sentimiento de rechazo hacia ellas.

EL ACUERDO DE SAN FRANCISCO

Las discusiones del acuerdo continuaron después del almuerzo. Durante este nuevo ciclo, Marulanda se mostró muy inquieto y con afán de irse. No obstante, siempre que intentaba levantarse de la mesa, el comisionado le insistía en que se quedara, pues su presencia era indispensable para la firma del acuerdo definitivo.

Hacia las 3 de la tarde el jefe guerrillero, impaciente, optó por agilizar la discusión y pidió una hoja en blanco para dejarla firmada, aduciendo que tenía que retirarse por razones de seguridad. La excusa no tenía sentido; más bien parecía que Tirofijo se encontraba agotado por la duración y la intensidad de las discusiones. Finalmente, ante la mirada desconfiada de los demás guerrilleros, le entregó a Camilo una hoja en blanco con su firma, para que la incorporaran al final del acuerdo, y se despidió apurado de los asistentes.

—Gracias, Manuel —le dijo Camilo, mientras Marulanda se retiraba—. Con esta firma en blanco yo también me voy ya y de una vez redacto el acuerdo de cese de fuegos.

El chiste no les cayó en gracia a los guerrilleros, que de inmediato pidieron la hoja firmada. Sin embargo, Camilo la conservó hasta que el acuerdo fue firmado por todos.

Hacia las 7 de la noche, después de dos días de agotadora negociación, el acuerdo se dio a conocer en una rueda de prensa que se realizó en Los Pozos. En él quedó plasmado el redireccionamiento del proceso que había pedido el Frente Común por la Paz y contra la Violencia, y se superaba la más grave crisis del proceso hasta el momento.

En resumen, este trascendental documento, que fue conocido como el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, traía las siguientes disposiciones:

- Partiendo del consenso respecto a que el proceso de paz requería de un ambiente propicio sin confrontación armada, se abocaría de inmediato el estudio integral del documento de recomendaciones presentado por la Comisión de Personalidades, incluyendo el tema de la tregua. Esto, sin detrimento de la discusión de la Agenda Común, que continuaría.

- Se invitó a los candidatos presidenciales, a los partidos y movimientos políticos, al Consejo Nacional de Paz y a distintos sectores de la vida nacional para que fueran a la Zona a intercambiar opiniones sobre el proceso de paz y el momento político del país.

- Se determinó que la Mesa establecería un cronograma para el análisis de los documentos mencionados y para llevar a cabo las reuniones, y que se haría mensualmente una evaluación sobre los resultados obtenidos, la cual se informaría a la opinión pública.

- Sobre la Zona de Distensión, se ratificó que la única autoridad sobre la misma la ejercían el Gobierno nacional, los alcaldes y los funcionarios municipales, que las FARC se comprometían a respetar; que las funciones de

policía estaban en manos de los alcaldes, la policía cívica y los inspectores de policía, y que los distintos candidatos podían realizar en la Zona actividades políticas y electorales. Además, se decidió promover reuniones abiertas, con observadores, para que los mismos habitantes de la Zona manifestaran sus inquietudes sobre la misma.

• Finalmente, algo muy importante: las FARC se comprometieron a cesar de inmediato la actividad de los secuestros en las carreteras, conocidos como "pescas milagrosas".

De esta manera, el Acuerdo de San Francisco —con su compromiso de avanzar seriamente hacia una tregua, con la ratificación de las condiciones que debían regir en la Zona, con su invitación a las diversas fuerzas políticas y de otra índole a expresar sus opiniones ante la mesa, y con el compromiso de la guerrilla de cesar la terrible práctica de las "pescas milagrosas"—, marcaba un importante cambio en el proceso. Este documento, junto con el informe de los Notables y la Agenda Temática, formaban un conjunto sólido que debía ser, en adelante, la carta de navegación para la paz de Colombia.

Unos años después, ya desde la tranquilidad de la distancia, conversando con especialistas de la Universidad de Harvard en el tema de la negociación de conflictos, ratifiqué la importancia de este acuerdo. Estos académicos, que conocían el documento, afirmaron:

—Es una hoja de ruta mucho más avanzada y mucho más completa que la que se diseñó para el proceso de paz entre Israel y Palestina.

Hoy no tengo la menor duda de esto. En el Acuerdo de San Francisco y en el Documento de los Notables quedó descrito el camino para llegar a la paz de Colombia.

El sacrificio de Consuelo no había sido en vano. Mi homenaje hacia ella, más que romper el proceso motivado por el dolor y el impulso de retaliación, fue seguir avanzando en el mismo, buscando hacer mejor la vida de los colombianos. Incluso desde su muerte, La Cacica siguió impulsando al país hacia la paz y la concordia por las que ella tanto trabajó.

Casi medio año después de su partida, frente a los acongojados habitantes de Valledupar, pronuncié el que pudo ser el discurso más emotivo de mi mandato, cuando instalé en su honor el trigésimo quinto Festival de la Leyenda Vallenata, el mismo que La Cacica había creado e impulsado, y recordé su legado, citando varios versos y cantos vallenatos que forman parte viva de nuestro patrimonio cultural.

Con el corazón estremecido por la ausencia de esta querida amiga y colombiana ejemplar, comencé mis palabras con la cita de un hermoso vallenato de Rafael Escalona, que era, además, el favorito de La Cacica. Mi voz casi se quiebra en llanto cuando dije estas frases, que todavía hoy acuden a mi memoria siempre que la recuerdo:

—¡Yo tengo una herida muy honda que me duele! ¡Yo tengo una herida muy grande que me mata!

CAPÍTULO XXXIX

El Plan Colombia y el gobierno Bush

En noviembre de 2000 hubo elecciones presidenciales en los Estados Unidos y resultó vencedor, después de largos y complejos escrutinios, el candidato republicano y hasta entonces gobernador de Texas, George W. Bush. Fue entonces cuando comenzaron a dar créditos los contactos efectuados en nuestra visita a dicho estado en octubre de 1999 y cuando se vio, igualmente, la importancia de haber conseguido un respaldo y una comprensión bipartidistas al Plan.

Posesionado Bush, buscamos la forma de ir muy rápidamente a Washington para contarle de primera mano la forma en que estábamos implementando el Plan Colombia, garantizando así su respaldo al mismo. Fui el cuarto jefe de Estado en reunirme con él, después de los mandatarios de México, Canadá y el Reino Unido, en una clara señal de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca seguiría trabajando de la mano con nuestro gobierno.

La tradición en los Estados Unidos es que el presidente recién posesionado se reúna primero con el primer ministro de Canadá y con el presidente de México, sus dos vecinos, y después con el primer ministro de Inglaterra, su principal aliado estratégico, para luego hacerlo con otros aliados cercanos en Europa y en Oriente. En mi caso, fui invitado para asistir a la Cumbre de Gobernadores de Estados Unidos, y ésta fue la ocasión propicia para solicitar la audiencia con Bush, antes de lo que cualquiera pudiera prever.

El 27 de febrero de 2001 me reuní con el presidente Bush y establecimos un diálogo amplio sobre la agenda bilateral, el desarrollo del Plan Colombia y los principales retos comerciales, dentro de los cuales el que más sobresalía era la necesidad de extender las preferencias arancelarias del APTA que venían a finales de dicho año.

Le planteé la conveniencia de celebrar una reunión con los mandatarios de los países beneficiarios del APTA —Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia— en Cartagena para preparar un posterior encuentro con Bush en la Cumbre de las Américas de Québec, idea que fue aceptada con entusiasmo por mi interlocutor y que efectivamente se llevó a cabo con buen éxito. Además, propuse incluir en el grupo de invitados a Venezuela, con la esperanza de

que dicho país, que era el único de la Comunidad Andina que no disfrutaba de las preferencias del ATPA, pudiera acceder a dichos beneficios.

En el encuentro estuvieron también presentes el secretario de Estado, Colin Powell; el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, y la consejera nacional de Seguridad, Condoleezza Rice²⁵.

Tuve igualmente la oportunidad de reunirme con el vicepresidente Richard Cheney; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz²⁶; el secretario del Tesoro, Paul O'Neil; el secretario de Comercio, Donald Evans, y con el responsable de los tratados de comercio, Robert Zoellick.

Además, sostuve encuentros con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Henry Hyde; los parlamentarios Patrick Leahy, Edward Kennedy, Trent Lott, Dennis Hastert, Richard Gephardt y Tom Daschle, y con Claudio Loser, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La primera impresión que me llevé de los denominados "Halcones" (Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz) fue la de que tenían una postura más escéptica que sus antecesores frente a la opción de buscar una paz negociada con las FARC y el ELN, y que eran partidarios, en cambio, de adelantar más acciones militares contra la guerrilla. No les preocupaba tanto el tema de la droga como el riesgo que significaban estas organizaciones terroristas para la sociedad colombiana y para la defensa de la democracia. Por supuesto, ésta es una posición que habría de enfatizarse mucho más después del trágico 11 de septiembre de 2001.

Por otra parte, encontré un ambiente de impaciencia entre los congresistas, quienes habían aprobado los importantes recursos que los Estados Unidos aportaron al desarrollo del Plan Colombia pero se preocupaban al no ver resultados inmediatos. De alguna manera, se imaginaban que con la sola aprobación de la ayuda se iban a acabar gran parte de los problemas colombianos, como si se tratara de un milagro, cuando lo cierto es que aquellos, incrementados por la nefasta influencia del narcotráfico, llevan décadas de maduración y no es tan fácil extinguirlos de un día para otro.

El primer semestre del año 2001 nos dedicamos, entonces, con el embajador Luis Alberto Moreno y el canciller Guillermo Fernández de Soto, a manejar expectativas, en tanto los funcionarios en Colombia apresuraban la puesta en marcha de los distintos programas y el proceso de modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública.

²⁵ Condoleezza Rice fue designada por el presidente Bush como secretaria de Estado, en reemplazo de Colin Powell, para su segundo período presidencial, cargo que ocupa a partir de enero de 2005.

²⁶ Paul Wolfowitz es, desde marzo de 2005, el nuevo presidente del Banco Mundial.

Para comenzar a dar resultados se hacía indispensable que Estados Unidos nos enviara pronto los primeros helicópteros. A comienzos del año llegaron 33 helicópteros UH-1H para la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, pero los 14 helicópteros Black Hawks para la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército no llegaron sino hasta los primeros días de 2002 y el paquete completo de 25 helicópteros Huey II o SuperHuey no se completó sino hasta finales de dicho año, más de dos años después de la aprobación del Plan en el congreso norteamericano.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los Estados Unidos rompieron la fila de entrega de helicópteros, entregando primero los que estaban comprometidos con el Plan Colombia que los que ellos mismos necesitaban para su operación en Afganistán contra el régimen talibán.

UN TRASCENDENTAL CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE LA AYUDA MILITAR

El 11 de septiembre de 2001 estaba prevista una visita del secretario de Estado, Colin Powell, a nuestro país, como una muestra más del respaldo del gobierno Bush al Plan Colombia y a nuestros esfuerzos legítimos por erradicar el flagelo de la droga de nuestro suelo. Sin embargo, las terribles circunstancias de los atentados perpetrados ese día lo obligaron a modificar su itinerario y regresar de inmediato desde Lima, donde se encontraba participando en la Asamblea Extraordinaria de la OEA, hacia su país.

La cancelación de la visita de Powell resultaba apenas obvia, frente a las dimensiones de la tragedia ocurrida en los Estados Unidos, y así lo entendí. Por eso mismo, me causó mucha impresión la superficialidad con que al día siguiente *El Tiempo*, el diario de mayor circulación en Colombia, trató el tema. En la sección editorial de "Cosas del Día" se afirmó que la no realización de la visita del secretario de Estado era una "evidencia" de que Colombia pasaría a un "segundo plano" en la agenda internacional de Estados Unidos.

Se trataba de un comentario doblemente absurdo: primero, porque las relaciones bilaterales estaban en su punto más alto en muchísimos años y, segundo, porque era obvio para cualquier persona con un mínimo de sentido común que, frente a circunstancias de tal gravedad, el secretario Powell no podía viajar ni a Colombia ni a ningún otro lugar distinto a su propia nación.

El denominado 09-11 cambió, sin duda, la historia moderna de la humanidad y, especialmente, de los Estados Unidos, que terminó embarcado en una guerra doméstica y global contra el terrorismo, una plaga con la que nuestro país venía lidiando desde hacía muchos años sin que nos lo reconociera la comunidad internacional.

Colombia ejerció un papel de liderazgo internacional en los diversos foros internacionales para condenar este acto y aunar esfuerzos contra el te-

rorismo. De hecho, el mismo 11 de septiembre, cuando se conocieron los ataques en Nueva York y Washington, fue Colombia el país que promovió, en el seno de la Asamblea General de la OEA que estaba reunida en Lima, una proposición de respaldo hemisférico a los Estados Unidos y de repudio al infame acto terrorista.

Para la época de los ataques, además, Colombia era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, posición que habíamos alcanzado después de una votación sin precedentes en el seno de la Asamblea General. Por supuesto, esta dignidad dotaba al país de una mayor influencia en las decisiones internacionales y de un peso estratégico en el mapa mundial.

Paradójicamente, mientras Colombia lideraba y apoyaba varias resoluciones tomadas en el Consejo de Seguridad para contrarrestar el terrorismo, la guerrilla insistía en cometer toda clase de atropellos contra la población civil, encasillándose ella misma en un rótulo de terrorista que terminaría por dinamitar el mismo proceso de paz.

Precisamente, un tema que surgió a partir del 11 de septiembre, y en especial después de la ruptura del proceso de paz, fue el de cómo luchar de manera global contra las organizaciones terroristas, entendidas como un riesgo no sólo para el país en el que se encuentran sino para la estabilidad mundial.

Finalmente, los Estados Unidos estaban abiertos a considerar a las FARC, el ELN y las AUC, organizaciones catalogadas como terroristas en las listas elaboradas por el Departamento de Estado, como lo que son: un peligro para la estabilidad hemisférica.

Comprendimos que era la oportunidad para retomar un tema en el que veníamos insistiendo desde tiempo atrás, como era la necesidad de terminar con la absurda limitación que nos impedía usar los equipos militares del Plan Colombia en operaciones contra los grupos armados ilegales, bajo el condicionamiento de que sólo podían destinarse a la lucha contra el narcotráfico. Y digo que era absurda porque todos sabíamos de la imbricación del narcotráfico con los grupos guerrilleros y las autodefensas ilegales.

Se habían producido situaciones tan insólitas como que la guerrilla atacara a poblaciones a media hora de vuelo de la base de operaciones anti-narcóticos de Larandia, donde estaban parqueados modernos helicópteros donados por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, y que no pudiéramos usarlos para auxiliar la labor de la Fuerza Pública, por tratarse de operaciones antisubversivas y no antinarcóticos.

Así pues, en el primer semestre del año 2002 buscamos la forma de incluir en un presupuesto de emergencia denominado "cambio de autorizaciones", o sea, cambio de uso de la ayuda militar, la autorización que necesitábamos del Legislativo norteamericano para utilizar todo el equipo militar donado para combatir conjuntamente el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Eso significaba fortalecer aún más a nuestras Fuerzas Armadas, multiplicando considerablemente el número de helicópteros y de aviones de inteligencia que se podían usar en operaciones contrainsurgentes.

El Congreso estadounidense votó finalmente el cambio de autorizaciones, que se hizo efectivo en julio de 2002, y que dejamos como uno de los más importantes legados al gobierno del presidente Uribe para que incrementara el accionar de la fuerza legítima del Estado contra los grupos narcoterroristas que asolan nuestro país.

Como lo resumió, entonces, el general Charles Wilhelm, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, con el logro de haber obtenido esta decisión se multiplicó por diez la capacidad ofensiva del Ejército. Gracias a esto, el presidente Uribe ha sido, hasta la fecha, el único en la historia del país que ha recibido un ejército modernizado y fortalecido, con una real capacidad de movilización y transporte para enfrentar a los violentos.

UN GRAN LOGRO COMERCIAL

Desde comienzos de 2001, por otra parte, ya con el Plan Colombia andando, destinamos gran parte de nuestros esfuerzos diplomáticos en los Estados Unidos al tema comercial, para lograr la prórroga y ampliación del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas —ATPA— que otorgaba tratamiento arancelario favorable a muchos productos colombianos y que vencía a fines de 2001. Pretendíamos, además, que se incluyeran rubros fundamentales para consolidar la reactivación de la economía y generar empleo, como los textiles, las confecciones, el calzado, los artículos de cuero y el atún enlatado, entre otros.

Tal como le había planteado al presidente Bush en febrero, se llevó a cabo una reunión en Québec, en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2001, entre los presidentes andinos y el mandatario norteamericano, en la cual mostramos un frente unificado, con claro liderazgo de nuestro país, obteniendo el compromiso de Bush de apoyar este tema desde el gobierno.

Finalmente, y después de otra intensa gestión de cabildeo con el Congreso estadounidense, se aprobó la prórroga y ampliación del ATPA en julio de 2002, con retroactividad a diciembre de 2001, y se convirtió en ley por la firma del presidente Bush el 6 de agosto de 2002, un día antes de la finalización de mi período presidencial.

Gracias a esta aprobación, que fue un importante logro de la diplomacia colombiana, dejamos garantizadas unas excelentes condiciones comerciales para el país en su comercio con Estados Unidos, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2006, en virtud de las cuales se ha dinamizado el comercio con dicho país y se han obtenido mayores recursos para la economía colombiana.

Más del 75% de los productos colombianos que componen nuestra oferta exportable a Estados Unidos han entrado desde entonces a este gigantesco mercado sin pagar aranceles, generando ingresos anuales por exportaciones superiores a los 3.000 millones de dólares y creando por lo menos 150.000 empleos en el sector manufacturero.

Precisamente, el último acto público de mi mandato se llevó a cabo en la Casa de Nariño, en la mañana del 7 de agosto de 2002, con la presencia del representante para el Comercio de los Estados Unidos, Robert Zoellick, para celebrar con el sector empresarial la sanción del nuevo ATPA —hoy conocido como ATPDEA—, con el cual cerrábamos con broche de oro una gestión internacional sin pausa a favor de los intereses del país²⁷.

Esa misma tarde, las FARC harían su propio cierre utilizando el lenguaje que infortunadamente escogieron para hablar al pueblo colombiano: *rockets*, destrucción y muerte.

LA CONTINUIDAD DEL PLAN COLOMBIA

Antes de mi gobierno, la ayuda norteamericana, concentrada específicamente en un apoyo a la Policía Nacional para la lucha antinarcóticos, era en promedio de 100 millones de dólares al año. Después del inmenso esfuerzo diplomático desplegado, del cual he hecho en varios apartes de este libro un somero repaso, la inversión de Estados Unidos en Colombia entre 1999 y 2003 alcanzó una cifra total cercana a los 3.200 millones de dólares, una ayuda sin antecedentes en nuestra historia, que nos convirtió en el tercer país receptor de ayuda norteamericana, después de Israel y Egipto.

Nada de esto se hubiera conseguido si no hubiéramos sembrado y cultivado cuidadosamente la semilla de unas buenas relaciones con los Estados Unidos que llevamos, sin duda, al lugar más alto en toda nuestra historia. Colombia se convirtió, por convicción y convergencia de propósitos, en uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Latinoamérica, y lo ha seguido siendo bajo el mandato del presidente Uribe.

En 1998 era casi imposible pensar en obtener lo que Colombia consiguió en cuatro años. Hoy ya no es noticia que los secretarios de Estado nos visiten o que vengan delegaciones del Congreso norteamericano. Incluso los encuentros entre los mandatarios de nuestras naciones se ven como algo normal, casi habitual. Lo cierto, sin embargo, es que, durante toda nuestra historia, los presidentes colombianos escasamente se encontraban una o dos veces durante su gobierno con el presidente de los Estados Unidos, y que la

²⁷ Entre el año 2002 y el 2004, las exportaciones colombianas a Estados Unidos se incrementaron en un 26%, pasando de us\$5.159 millones a us\$6.504 millones, de los cuales más de la mitad corresponden a productos cobijados por los beneficios del ATPDEA.

ayuda que daba esta poderosa nación era mínima frente a la inmensidad de nuestros problemas.

Hoy hay un nuevo horizonte, que es el producto de muchos días, semanas y meses de esfuerzos, y que sigue ampliándose en el tema de cooperación militar, comercial y social. El presidente Uribe ha entendido, por fortuna, la dimensión e importancia del Plan Colombia y ha continuado con entusiasmo su aplicación. Incluso, ha solicitado a los Estados Unidos la ampliación del aporte norteamericano al mismo por cuatro años más después del año 2005, fecha que se pensó inicialmente como término del Plan. Para ello, es fundamental que se siga trabajando para que dicho Plan nunca pierda su espíritu de respaldo bipartidista en los Estados Unidos, gracias al cual sobrevivió al cambio de administración en dicho país. Dicho respaldo es y será su garantía de continuidad y éxito²⁸.

Sus efectos positivos se han visto y se ven cada vez más en la medida en que el Estado recupera su presencia institucional en las regiones más apartadas del país, en que las hectáreas de cultivos ilícitos comienzan a desaparecer de nuestro suelo, en que la Fuerza Pública consolida su superioridad sobre los grupos terroristas y en que las familias más pobres reciben aportes para la educación y nutrición de sus hijos, y mayores oportunidades de empleo.

Quienes descalificaron el Plan Colombia como un plan "guerrerrista" o una imposición de los Estados Unidos han tenido que replantear su posición, ante la fuerza de las evidencias. No fue fácil su diseño, su aprobación, su explicación, su aplicación, pero no cabe duda de que nuestro país es otro, con muchas más posibilidades de superar sus problemas estructurales, gracias a esta estrategia integral en la que se conjugaron los esfuerzos de mi gobierno y la responsabilidad compartida asumida por la comunidad internacional, comenzando por los Estados Unidos.

²⁸ A comienzos de febrero de 2005 el presidente Bush solicitó al Congreso de Estados Unidos cerca de 700 millones de dólares en nueva asistencia para el país, para ser desembolsados en el 2006. No obstante, en cuanto al Plan Colombia mismo, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en su visita a Bogotá, el 27 de abril de 2005, aclaró lo siguiente: *"El Plan Colombia formal, ese plan de cinco años, está llegando a su fin pero nuestro compromiso con Colombia no está llegando a su fin, porque nosotros creemos que la combinación de la asistencia militar, de Policía y de justicia con la asistencia económica que hemos dado a Colombia ha hecho de éste un lugar que está en camino de lograr una mayor seguridad, en camino de enfrentar el problema del tráfico de drogas y en camino de enfrentar el narcoterrorismo en formas efectivas"*.

CAPÍTULO XL

Agonía del proceso

Una vez firmado el Acuerdo de San Francisco de la Sombra entre el Gobierno y las FARC, el 5 de octubre de 2001, el proceso estaba llamado a progresar. O, al menos, eso creíamos.

Habíamos redireccionado el proceso por completo y el tema del cese de fuegos ocupaba ahora el lugar más importante de la negociación, lo que resultaba un avance fundamental. Sin embargo, el péndulo de la opinión pública había cambiado y cada vez se mostraba más adverso al proceso. El absurdo crimen de La Cacica todavía laceraba el corazón y la conciencia del país.

Bajo estas circunstancias, en la noche del 7 de octubre, dos días antes del vencimiento de la última prórroga, anuncié a mis compatriotas, en una alocución televisada, mi decisión de prorrogar la vigencia de la Zona hasta el 20 de enero de 2002.

Pero fui más allá. Entendiendo el malestar de mis compatriotas por hechos como el adiestramiento de los guerrilleros dentro de la Zona por parte de los tres irlandeses miembros del Ejército Republicano Irlandés —IRA—, capturados en agosto, o la obstaculización por la guerrilla de la marcha política de Serpa, reiteré en dicha alocución las medidas de control que regían sobre la misma, la mayor parte de las cuales estaba cumpliéndose desde 1998.

Anuncié que se intensificarían e incrementarían los controles sobre las vías y corredores de entrada y salida de la Zona, bien fueran terrestres, aéreos o fluviales, los cuales había ordenado desde el inicio de la Zona de Distensión; que se fortalecería el anillo de seguridad exterior a la Zona y se aumentarían los retenes de control de bienes, vehículos, personas y materiales para impedir cualquier intento de tráfico de armas, insumos, drogas ilícitas y explosivos; que la Fuerza Aérea sería más estricta en el control del espacio aéreo sobre la Zona para evitar que ingresaran o salieran aviones no autorizados; que se controlarían todos los vuelos desde y hacia la Zona, con plena identificación de las personas que entraran o salieran, y, por último, que los extranjeros, para poder ingresar a la Zona, requerirían de un permiso previo del DAS y de la aprobación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por otra parte, repetí mi orden permanente a las Fuerzas Armadas para que continuaran e intensificaran sus operaciones contra todos los grupos armados al margen de la ley, por fuera de la Zona de Distensión.

Las FARC reaccionaron de inmediato ante los planteamientos de mi discurso y dijeron que, bajo esas circunstancias, ellos juzgaban que no tenían garantías de seguridad en la Zona y que no podían movilizarse libremente a las mesas de negociación.

Por supuesto, esto no era cierto. Los controles a que me referí en mi alocución no afectaban el funcionamiento interno de la Zona, sino el ingreso y salida de la misma, y la vigilancia de sus alrededores. Por otra parte, no eran otra cosa que la reiteración de las medidas y órdenes que había dictado al respecto desde octubre de 1998, cuando la decreté.

La única novedad era la restricción para el ingreso de extranjeros, pero ésta estaba más que justificada por el episodio de los tres instructores del IRA y por las denuncias que se recibían sobre la visita de extranjeros a la Zona para negociar el pago de rescates por secuestrados.

Las FARC alegaron que las medidas ratificadas constituían un incumplimiento a las normas iniciales de la Zona de Distensión e incluso acudieron a argumentos tan sorprendentes como decir que los controles atentaban contra la libertad de locomoción consagrada en la Constitución. ¡Ellos, que secuestraban en caminos y carreteras, que no habían dejado pasar a Serpa y sus seguidores, de pronto reivindicaban una libertad que siempre habían violado!

Tengo la percepción de que en el seno de las FARC, después de la firma del Acuerdo de San Francisco, se presentó un conflicto interno que a Manuel Marulanda le quedó difícil manejar. En dicho acuerdo la guerrilla se comprometió a avanzar en el tema del cese de fuegos y a suspender las llamadas "pescas milagrosas", algo que a otros líderes del Secretariado les pudo parecer una concesión exagerada. Seguramente por esto, al sentir que habían perdido la iniciativa en el proceso y que el Gobierno los tenía acorralados políticamente, decidieron reaccionar contra los controles de la Zona, aduciendo que, con ellos, no tenían garantías para negociar.

Por primera vez utilizaban una excusa distinta al tema del paramilitarismo para congelar el proceso. Esta vez se quejaban de "falta de garantías" y aducían, además, que, desde la fecha de mi discurso, se venían presentando casos de sobrevuelos rasantes sobre los campamentos guerrilleros cuyo fin era el de preparar ataques sorpresa.

Lo cierto es que la orden presidencial a la Fuerza Aérea era la de no realizar sobrevuelos por debajo de los 20.000 pies de altura. Por encima de este límite los sobrevuelos estaban autorizados, pues se trataba de un corredor aéreo importante, usado por aeronaves militares y civiles, no sólo nacionales sino también de rutas comerciales que venían del sur del continente. A pesar de esto, hay que reconocer que, en una ocasión, a fines de octubre y contra

las instrucciones impartidas, dos aviones Mirage de la Fuerza Aérea sobrevolaron la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, causando alarma en la población y, por supuesto, en la guerrilla.

Este episodio, que no fue ordenado ni tenía el objeto de provocar a la guerrilla o de preparar algún ataque, fue registrado por los medios de comunicación. Aunque la palabra del Estado sobre la restricción de sobrevuelos estaba comprometida y se cumplió siempre, el incidente aislado de los Mirages le dio, por supuesto, argumentos a las FARC para defender su posición.

Supimos que Marulanda, por esos días, comentó que una mañana, cuando iba en un vehículo con unos pocos escoltas, había sido perseguido por un avión militar con intenciones de atacarlo y se había visto obligado a esconderse en la selva. Nunca hubo, sin embargo, una queja de su parte ni mucho menos un informe oficial al respecto. Sabiendo de la paranoia del jefe guerrillero, que siempre se consideró objeto de cinematográficas persecuciones en su contra, incluso de parte de Estados Unidos, no me extrañaría que ésta hubiera sido una exageración más.

Entre octubre y noviembre el comisionado Camilo Gómez y el asesor Juan Gabriel Uribe tuvieron varias reuniones con Raúl Reyes y Joaquín Gómez para buscar destrabar el proceso. En ellas, los guerrilleros citaban a los negociadores en los más remotos lugares, en las montañas cerca de Balsillas, a más de cuatro horas por tierra desde Neiva, aduciendo motivos de seguridad, si bien luego se movilizaban tranquilamente por las carreteras de la región. Era evidente que los reclamos por seguridad eran más un pretexto que otra cosa, por lo que el Gobierno insistió en afirmar que las garantías de seguridad estaban dadas y que, por lo tanto, debía continuarse, sin más dilaciones, con el desarrollo del Acuerdo de San Francisco. Pero la guerrilla seguía inamovible.

Finalizando el mes de noviembre, Manuel Marulanda envió una carta proponiendo la realización de un gran encuentro nacional con distintos sectores políticos y de la sociedad con el fin de establecer los mecanismos de continuidad del proceso. La carta estaba dirigida no solamente a mí, como presidente, sino también a los presidentes del Senado, de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema y algunos gremios, así como a la Iglesia. En dicha comunicación Manuel Marulanda pedía a todos *"una amplia explicación clara y concreta"* sobre lo que resultaba negociable o no por parte del Estado. La carta desconocía por completo la agenda acordada, pues en ella ya estaban plasmados los temas que, en nombre del Estado, habíamos acordado negociar.

La misiva suscitó una controversia importante y una reacción aún más negativa frente a lo que sucedía en el proceso. Los destinatarios de la carta no entendían cómo un jefe guerrillero les exigía explicaciones por las actuaciones que personas del Estado o de la sociedad realizaban.

Respondimos a la carta de Marulanda, a sabiendas de que contenía planteamientos y procedimientos equivocados, pero reconociendo elementos de fondo que podrían permitirnos avanzar en el desbloqueo del proceso. La respuesta fue entregada a las FARC el 8 de diciembre y, desde entonces, se agilizaron las reuniones entre los dos delegados del Gobierno y los de la guerrilla, las cuales concluirían en una reunión con el jefe guerrillero unas semanas después.

EL CLAMOR DE ANDRÉS FELIPE

Durante este período ocurrió un hecho que tocó, por su drama humano, la fibra más íntima del país. Fue el caso de Andrés Felipe Pérez, un niño de doce años, que padecía de un cáncer terminal, cuyo padre, un cabo de la Policía, Norberto Pérez, estaba en poder que la guerrilla hacía más de tres años.

El único deseo de Andrés Felipe, sometido a durísimas sesiones de quimioterapia y con un pronóstico médico que indicaba que difícilmente sobreviviría al fin del año, era volver a ver a su padre y disfrutar de sus abrazos, de sus juegos y de su amor. Sólo esperaba morir a su lado.

El caso había impactado a la opinión pública y el comisionado, siguiendo mis instrucciones, inició desde agosto las gestiones para lograr la liberación del cabo Pérez, cuyo cautiverio no representaba ninguna ventaja estratégica para las FARC pero sí lo era todo para un niño al borde de la muerte. Camilo le planteó el tema directamente a Marulanda, quien se mostró dispuesto a analizar el caso y, unos días después, le hizo saber a través de Raúl Reyes que veía viable la liberación del padre de Andrés Felipe.

Desconociendo estos positivos avances, que se habían obtenido en medio de la mayor discreción, un medio de comunicación lanzó por esos días una fuerte campaña para buscar, mediante la presión pública, la liberación del cabo Pérez. Aunque se trataba de un gesto de elemental solidaridad, infortunadamente generó un efecto contraproducente. Cuando Marulanda se enteró de la misma, la interpretó como una campaña en contra de las FARC y se retractó de la posibilidad que había abierto para realizar una liberación unilateral. Es más, endureció su posición y la cambió por una exigencia de canje: sólo soltaría al cabo Pérez a cambio de la liberación de un guerrillero que se encontraba preso en la cárcel de Itagüí, con alto rango dentro de la guerrilla, acusado de múltiples crímenes y considerado como de alta peligrosidad.

La guerrilla buscaba aprovechar el profundo sentimiento que conmovía a la sociedad para presionar el canje que no había podido obtener en las negociaciones. Para ellos, como siempre, no era un asunto de humanidad sino de oportunidad.

El caso era muy impactante y teníamos que buscar otras alternativas para lograr la liberación del niño. Fue entonces cuando me reuní con Fidel

Castro, el 11 de diciembre de 2001, en Isla Margarita, Venezuela, donde estábamos citados a propósito de una cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, y le comenté sobre el dramático caso de Andrés Felipe.

Como ya lo referí en un capítulo anterior, Fidel se conmovió con la situación y de inmediato redactó de su puño y letra una carta que le entregó al embajador de Cuba en Colombia con el fin de que se la hiciese llegar personal y urgentemente a Marulanda.

—Nunca les he pedido un favor a las FARC —me dijo Fidel—, y ellos en cambio sí me han pedido muchos. Por eso les voy a escribir para que liberen al padre de ese niño antes de que se muera.

La guerrilla, sorda a los clamores del niño, del país y del mundo, le contestó a Castro que el problema no era sólo el niño Andrés Felipe sino las desigualdades sociales en el país y los niños que morían en la pobreza sin que la oligarquía hiciera nada por ellos. Esta respuesta de panfleto indignó al presidente Castro, quien no podía creer que las FARC le respondieran de semejante manera a la primera petición humanitaria que les hacía.

El clamor nacional por la liberación del padre seguía creciendo y los mecanismos para su liberación parecían agotados. Ni la intervención de Fidel Castro, ni la campaña adelantada por los medios, ni las gestiones del comisionado ante Marulanda lograron su objetivo. El niño continuó agravándose y, finalmente, murió el 18 de diciembre sin tener el consuelo de sentir a su padre a su lado.

Parecía que nada podía conmover a las FARC, ni siquiera el ruego de un niño moribundo. A diferencia de ellas, el país entero se estremeció con la muerte de Andrés Felipe, que se convirtió en otro símbolo de la crueldad de la guerrilla en medio de una Navidad que no presagiaba muchas esperanzas.

Al enterarse del fallecimiento del niño, Camilo se dirigió de inmediato a Palacio en donde, con una emoción que pocas veces dejaba traslucir, leyó, con voz entrecortada y un evidente nudo en la garganta, un fuerte y sentido comunicado:

—De nuestra parte hicimos todo lo posible, pero las FARC le fallaron a Andrés Felipe y le fallaron a Colombia. ¡Cada vez están más alejados de los sentimientos de todos los colombianos!

Tan sólo unos días después, como triste colofón de esta tragedia, se conoció que el cabo Norberto Pérez había sido asesinado por sus captores cuando, en medio de la desesperación por ver a su hijo, intentó huir del cautiverio. Al final, sólo en la muerte pudieron reunirse.

ITINERARIO DE UNA AGONÍA

En medio de este difícil episodio, las reuniones entre los delegados del Gobierno y los jefes de las FARC continuaron adelantándose. Ya habían que-

dado atrás las citas en el páramo y de nuevo se realizaban en la zona de Los Pozos o en La Macarena.

La guerrilla, que siempre ha utilizado símbolos para demostrar lo que a menudo no se atreve a decir de manera directa, había regresado a los mismos sitios en donde se efectuaban las reuniones de tiempo atrás. Aunque no aceptaba el reinicio del proceso de manera formal, los símbolos indicaban lo contrario. Pretendía ganar tiempo y estaba dispuesta a un nuevo pulso con el Estado, creyendo que la cuerda de la paciencia nacional podía estirarse indefinidamente. Nada más falso, porque al Gobierno se le comenzaba a agotar, a pasos acelerados, el espacio político para continuar.

Durante diciembre, mis delegados y los de las FARC se reunieron al menos en cuatro ocasiones para discutir la posibilidad de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de San Francisco. Mis instrucciones eran precisas: la guerrilla sólo debía decir si cumplía o no con lo pactado en dicho documento. Ya las mismas FARC, con su asistencia a las reuniones y su permanencia en la Zona, estaban demostrando que sí existían condiciones y garantías para negociar.

Finalmente, y después de algunos intentos fallidos, se acordó una reunión con Marulanda para el 24 de diciembre, fecha en que todos los colombianos estaban dedicados a la preparación de la Nochebuena. Tal vez la guerrilla esperaba que los negociadores, pensando en sus familias, pidieran un aplazamiento, pero éstos, sin dudarle y comprendiendo la importancia del evento, aceptaron la cita.

Antes de partir, le dije al comisionado que era urgente obtener resultados concretos de este encuentro y que si Marulanda no modificaba su posición podía dar por terminado el proceso en ese mismo instante.

El día anterior habíamos preparado la reunión y el mensaje era inequívoco: o se daba cumplimiento a lo acordado en octubre o el proceso terminaría esa Navidad. La guerrilla tenía que entender que no se trataba de una amenaza más ni de una estrategia de negociación. Era una determinación que habíamos tomado y no había alternativas distintas a las planteadas.

Raúl Reyes, encargado por las FARC de la coordinación del encuentro, por error —o tal vez no—, dio unas coordenadas equivocadas a mis delegados, Camilo Gómez y Juan Gabriel Uribe, quienes, al llegar al sitio, no encontraron a ningún guerrillero en los alrededores.

Sorprendidos por la situación y sin tener forma alguna para comunicarse con los guerrilleros, Camilo y Juan Gabriel decidieron continuar por el mismo camino para tratar de localizar a algún guerrillero que pudiera comunicarse con Reyes o con Marulanda para verificar el punto de encuentro. Después de tres horas de avance por un camino en pésimas condiciones, lograron encontrar un grupo de tres guerrilleros que les indicó que habían visto a sus jefes una hora más adelante por el mismo camino.

En medio de un premonitorio y torrencial aguacero, los delegados finalmente encontraron a Marulanda, resguardándose a la orilla del camino,

con sus principales hombres, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Allí mismo se celebró la reunión.

Al borde de la trocha, bajo una improvisada empalizada cubierta con un plástico, los delegados del Gobierno fueron directamente al grano y le preguntaron a Manuel Marulanda si el proceso continuaba o no, pues no existía ninguna justificación para que las FARC persistieran en su congelamiento.

Uno de los momentos más tensos de la reunión se produjo cuando Camilo, después de hacer un análisis de lo que implicaba la penetración del narcotráfico en la guerrilla, le preguntó a Marulanda de manera directa:

—Manuel, ¿a usted sus hombres le cuentan todo lo que sucede al interior de la guerrilla con relación al narcotráfico?

Por ese entonces ya era de público conocimiento que este movimiento guerrillero tenía una participación activa en el negocio del narcotráfico, en distintas etapas, y considerábamos que éste era uno de los factores que más comprometían la posición de las FARC. La pregunta causó sorpresa en los asistentes, particularmente entre los guerrilleros que acompañaban a Marulanda, pero se evadieron del tema con pocas palabras.

El jefe guerrillero insistió, sin embargo, en que su grupo no podía ser catalogado como narcotraficante o terrorista, a lo que Camilo le reiteró la posición del Gobierno sobre dicha alternativa: sólo ellos, con sus propias acciones, determinarían cómo serían llamados: si guerrilleros o narcoterroristas.

—Recuerden la frase de la Biblia —les dijo—. *“Por sus actos los conoceréis”*.

Tres horas después, la reunión concluyó con un acuerdo para que la mesa se reuniera de nuevo en la primera semana de enero. Entonces *“llegarían a las conclusiones necesarias para continuar el proceso”*, según dijo el mismo Marulanda. Ante esta declaración, mis delegados vieron que no sería necesario aplicar las facultades que tenían para el rompimiento. No estaban plenamente satisfechos, pero habían logrado el primer paso para el descongelamiento. Al finalizar la reunión, el ambiente estaba menos tenso e incluso se intercambiaron saludos de Navidad.

Estaba oscureciendo y los delegados del Gobierno por poco tuvieron que pasar la Nochebuena en La Macarena. Por fortuna, alcanzaron a retornar esa noche a Bogotá y me informaron en detalle de las dificultades de la reunión y de la percepción que tenían sobre la actuación real de la guerrilla.

Aunque las FARC persistían en su posición de que no había garantías para la negociación, habían aceptado volver a sentarse en la mesa. Se les notaba, en todo caso, una actitud reticente en cuanto a disminuir la intensidad del conflicto y llegar pronto a acuerdos sobre el cese de fuegos y hostilidades, en desarrollo de las recomendaciones de la Comisión de Notables.

El 3 de enero de 2002, tal como se había dejado acordado, se reunieron en Los Pozos los equipos de ambas partes, con la asistencia de Manuel

Marulanda. Lamentablemente, la guerrilla nuevamente retrocedió en su posición. Tras dos intensos días de discusiones, el encuentro terminó con la ratificación de las posiciones que cada parte había manifestado con anterioridad: el Gobierno dejaba claro que no modificaría ninguna de las medidas tomadas sobre la Zona de Distensión y la guerrilla insistía en reclamar las garantías que ya tenían, dando marcha atrás en lo manifestado el 24 de diciembre.

El segundo día de reuniones, por otra parte, el general Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, después de una reunión conmigo, dio unas declaraciones a los medios ratificando lo que el Gobierno siempre había dicho: que los controles sobre la Zona de Distensión no eran negociables. La guerrilla, al enterarse, produjo un comunicado muy fuerte en contra del general, el cual fue contestado públicamente, y en la misma sede de las negociaciones, por el comisionado, quien corroboró lo dicho por Tapias, que coincidía plenamente con la posición del Gobierno.

Ese mismo día, 4 de enero, en las horas de la tarde, me reuní con la cúpula militar para analizar el plan que días atrás había ordenado diseñar, orientado al restablecimiento de las unidades militares en la Zona de Distensión en caso de un rompimiento del proceso. Desde antes del 24 de diciembre, previendo las posibles consecuencias de la reunión de dicha fecha, había encargado al general Carlos Alberto Ospina, entonces jefe de Operaciones del Ejército²⁹, el diseño de un plan operativo para que la Fuerza Pública reingresara a la Zona de Distensión si esto fuese necesario. Todo estaba previsto si el proceso llegaba a su fin en esos días.

El 8 de enero, después de un aplazamiento, los equipos negociadores del Gobierno y de las FARC volvieron a reunirse en Los Pozos, en un clima de definiciones. Marulanda me envió una carta, respondiendo las apreciaciones de mi última comunicación, en la que insistía en la realización de una cumbre de poderes públicos; invocaba —clínicamente— la Constitución y el derecho a la libre movilización que ésta consagraba y afirmaba que la culpa de un eventual rompimiento de las conversaciones correspondería a *"quienes han arrinconado al presidente mediante presiones en la idea de imponer a las FARC condiciones no acordadas por las partes"*.

Además, las FARC enviaron una avalancha de comunicaciones a los trabajadores colombianos, a la Conferencia Episcopal Colombiana, al grupo de países amigos y facilitadores del proceso de paz, al delegado del secretario general de las Naciones Unidas, a los gremios, a las organizaciones campesinas y a las Fuerzas Militares y de Policía. Todas, firmadas por los miembros del equipo negociador de la guerrilla, eran prácticamente iguales, si bien a cada uno de los destinatarios se le mencionaban puntos específicos relacio-

²⁹ El general Ospina Ovalle fue designado comandante general de las Fuerzas Militares por el presidente Álvaro Uribe en noviembre de 2003, en reemplazo del general Jorge Enrique Mora Rangel.

nados con su sector. En resumen, insistían en solicitar las "garantías" que, sin duda, ya tenían, pues de otra forma no se explicaba su presencia en la sede de las negociaciones.

Hacia la tarde, el comisionado me informó telefónicamente que la guerrilla no cambiaba su posición y, sin más alternativa, le di instrucciones para que les comunicara la decisión del Gobierno de no continuar en el proceso, teniendo en cuenta la obstinación de la guerrilla en no seguir con las negociaciones establecidas en el Acuerdo de San Francisco.

Al final de la reunión, y cuando el comisionado estaba a punto de notificarle a la guerrilla la determinación de poner fin a las negociaciones, Manuel Marulanda se comunicó por radioteléfono con Raúl Reyes y le pidió que le planteara al equipo de gobierno la posibilidad de expedir al día siguiente un comunicado en el que se diera por terminado el incidente, se afirmara que las garantías estaban dadas y se iniciaran de nuevo las discusiones de fondo.

Con esta inesperada expectativa se suspendió la reunión hasta el día siguiente. Durante la noche, los negociadores del Gobierno trabajaron en la redacción de un comunicado que permitiera continuar con las negociaciones, en el que el Gobierno declaraba que las garantías estaban ya otorgadas y las FARC aceptaban la existencia de dichas garantías.

En la mañana del 9 enero, la reunión se inició muy temprano. El equipo gubernamental presentó a la Mesa el comunicado que contenía los puntos que Marulanda había mencionado en la razón enviada con Reyes.

Al analizar el documento del Gobierno, las FARC presentaron una contrapropuesta, retrocediendo de nuevo a su posición inicial. La indignación del equipo de gobierno fue notoria, si bien los guerrilleros la entendieron como una protesta más sin consecuencias y siguieron debatiendo las dos propuestas antagónicas sin llegar a ningún resultado.

Un poco más allá del medio día, el comisionado me comunicó que la guerrilla no modificaba su posición y que, por lo tanto, iba a notificarle que el Gobierno entendía que las FARC no continuaban en el proceso en las actuales condiciones y que empezaban a correr las 48 horas que yo había ofrecido al inicio del proceso para que salieran de la Zona en caso de un rompimiento.

—Usted ya sabe que cuenta con todo mi respaldo en esa determinación. Si ve que las cosas no cambian, no pierda más tiempo y notifíqueme la decisión a la guerrilla —fue mi respuesta.

Desde antes habíamos planteado cuál debía ser la fórmula que el comisionado utilizaría en el momento del rompimiento. Debía ser claro que la responsabilidad del final del proceso era de la guerrilla, obstinada en reclamar unas garantías que ya existían, y no del Gobierno.

La hora de la verdad había llegado. Los sentimientos eran encontrados pues allí quedaban tres años de esfuerzos y de batallas por la paz, aunque sabía en mi corazón y en mi razón que esto era lo que tenía que hacer.

Después de nuestra conversación, Camilo se encerró por unos minutos en su oficina de Los Pozos y allí, a solas, redactó en el computador las trascendentales frases que debería pronunciar minutos más tarde.

Un poco más allá de las 3 de la tarde, el comisionado le manifestó a la guerrilla:

—Ustedes no creen en la palabra del presidente, quien ha dicho reiteradamente que las garantías para que ustedes estén en la Zona siempre han existido. De hecho, la mejor prueba de ello es que aquí están ustedes y aquí siempre han estado.

Y en tono pausado agregó:

—Las FARC no quieren avanzar ni quieren cumplir con la palabra ni con lo que han firmado. Frente a esta posición, el Gobierno entiende que ese grupo no continúa en el proceso de paz y que, por lo tanto, ha solicitado las 48 horas que fueron acordadas desde el inicio de la Zona.

La sorpresa en los rostros de los guerrilleros y de los mismos negociadores del Gobierno, que no estaban al tanto de que Camilo haría semejante anuncio en ese momento, fue evidente.

La guerrilla no alcanzaba a creer que el comisionado estuviese poniendo el punto final no sólo a la discusión sino al proceso e intentó retomar la discusión de puntos que ya no tenían marcha atrás. Camilo no pronunció más palabras. Oyó lo que la guerrilla respondió en medio de su desconcierto y repitió la misma frase cerca de ocho veces hasta que dio por terminada la reunión.

Los guerrilleros, todavía incrédulos, se levantaron de la mesa y se despidieron de los delegados del Gobierno con el convencimiento de que al día siguiente continuaría las conversaciones. El primero en salir fue Reyes, quien tendría la misión de informarle a Marulanda lo sucedido. En la sede de las negociaciones permanecieron Andrés París, Simón Trinidad y Joaquín Gómez.

De inmediato, el comisionado me informó que la reunión ya había terminado y que iba a notificarle a los medios de comunicación la determinación a la que se había llegado en dicha reunión. Reyes, mientras tanto, le manifestó a la prensa que no se había llegado a ningún acuerdo y que las FARC insistían en solicitar las garantías para continuar, por lo que ninguno de los comunicadores que se encontraban allí alcanzó a sospechar la gravedad de la situación.

El comisionado y su equipo revisaron con rapidez un breve comunicado que fue transmitido a Palacio para su aprobación. Yo estaba reunido con el secretario general de la Presidencia, Gabriel Mesa; el canciller, Guillermo Fernández de Soto; el secretario privado, Julián Guerrero, y con los asesores especiales, Juan Gabriel Uribe y Ramón de la Torre. Una vez analizado el documento, le indiqué algunos cambios a Camilo y lo autoricé a hacerlo público en una rueda de prensa.

reacción de la guerrilla. Dispuse también que prepararan todo lo necesario para hacer una intervención en televisión, cité a un Consejo de Ministros para ponerlos al tanto de las circunstancias y convoqué a una reunión urgente con el Frente Común por la Paz y contra la Violencia.

A esta trascendental reunión no asistieron los candidatos Horacio Serpa y Noemí Sanín, lo que me causó gran extrañeza y no poco asombro frente a lo que consideré que podía ser para ellos una buena oportunidad política. La campaña por la Presidencia avanzaba y las posiciones sobre el proceso de paz estaban radicalizadas. El candidato Álvaro Uribe no había asistido a ninguna de las reuniones del Frente Común y siempre se había caracterizado como el más crítico del proceso de paz y de la Zona de Distensión. Por su parte, Serpa y Noemí habían participado en el Frente Común y mantenían contacto periódico con el alto comisionado, quien los visitaba para informarles sobre los desarrollos del proceso y para oír sus opiniones, sin que esto les hubiese impedido hacer críticas en algunos aspectos puntuales.

Con la posibilidad del rompimiento, la idea de convocar al Frente Común era también darles a quienes habían participado solidariamente en él la posibilidad de reivindicar políticamente no sólo lo que se había trabajado por la paz, sino también lo que estaba sucediendo frente al rompimiento. Con esto, ellos podrían contar con una herramienta política para enfrentar la posición del candidato Uribe, pues quedarían más legitimados para hablar de guerra en la medida en que habían apoyado primero los esfuerzos de paz. Los candidatos no lo entendieron así y creo que perdieron una valiosa oportunidad.

Es más: retirarse a última hora del Frente Común significaba, frente a la opinión pública, un cambio súbito de posición que los afectaba negativamente. Siempre he creído que el electorado es bastante más sensible a los cambios de posición de lo que los candidatos suelen imaginarse. Ese fue el momento en el que Uribe tomó una ventaja importante en las encuestas en tanto los demás se estabilizaron o empezaron a disminuir en la intención de voto.

Además de los miembros del Frente Común, llegaron también a Palacio los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Paz, a quienes puse al tanto de los acontecimientos, teniendo en cuenta que al Consejo, por su gran número de integrantes, era imposible citarlo con tan poca antelación.

A las 9 y 30 de la noche de ese 9 de enero de 2002 inicié mi alocución por televisión. En ella reiteré lo que el comisionado había declarado en la tarde. Sin embargo, no cerré la puerta totalmente. Le había dado instrucciones a Camilo para que en el comunicado no definiera a partir de qué momento empezaban a correr las 48 horas para que terminara la Zona de Distensión y yo tampoco lo hice. En la alocución realicé un recuento de los recientes acontecimientos que explicaban mi decisión, envié un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la Zona de Distensión, pedí serenidad frente a los

efectos económicos que podrían generarse por el rompimiento e hice un llamado a la unidad de la Nación.

Hacia el final, dejé abierta una posibilidad a la esperanza:

"Pero que quede claro: éste no es el final. Yo seguiré buscando la paz, de la mano de todos ustedes. Mantendré abiertas las puertas del diálogo y la negociación, porque sigo convencido de que ésta es la mejor salida para el conflicto interno que sufre nuestro país."

"Señores de las FARC: las garantías están dadas, la voluntad de negociación se mantiene. Sólo falta que ustedes cumplan su palabra. En ustedes está el futuro de la paz."

LABORES DE REANIMACIÓN

Como era de esperarse, la noticia generó un enorme revuelo tanto en lo nacional como en lo internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan; el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell; el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana; la Presidencia misma de la Unión Europea, a través del presidente del gobierno de España, José María Aznar, que entonces la detentaba, y varios otros gobiernos me manifestaron de inmediato su apoyo a la determinación tomada.

Las FARC, por su parte, emitieron un comunicado negando que ellos hubiesen dado por terminado el proceso e incluso aseguraron que el comisionado le había mentado al país al afirmar que el Gobierno entendía que las FARC pedían las 48 horas acordadas para salir de la Zona. En este comunicado insistían en esperar hasta el vencimiento de la última prórroga, que era el 20 de enero.

La mañana del jueves 10 de enero, y con las dudas en la opinión pública y en la guerrilla sobre el momento en el que empezarían a contarse las 48 horas, recibí, en compañía del comisionado, al asesor especial del secretario de las Naciones Unidas para la Asistencia a Colombia, el norteamericano James Lemoyne, quien había reemplazado en dicha posición al noruego Jan Egeland.

Lemoyne había captado el mensaje que estaba tácito en mi alocución de la noche anterior y, con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, solicitó, en nombre de esta entidad y de manera formal, al Gobierno colombiano la autorización para realizar una gestión de buenos oficios que permitiera restablecer el diálogo con la guerrilla.

Por supuesto, era una solicitud muy importante, que debíamos examinar con cautela, entendiendo que no podíamos negarle al país ni a la comunidad internacional la posibilidad de que la ONU acudiera en auxilio del proceso.

Después de realizar consultas durante la tarde sobre la forma en que Naciones Unidas podría desarrollar esta labor, me reuní de nuevo con

Lemoine para darle mi autorización a la gestión que proponía. Esta determinación implicaba realizar una nueva intervención de televisión para explicarle al país cuál sería el siguiente paso. Quería, ante todo, que en Colombia y en el exterior existiera mucha claridad sobre lo que estaba sucediendo, pues era evidente que el nivel de tensión en el país era muy alto.

Durante ese día, los medios de comunicación habían mostrado a las tropas desplazándose hacia la Zona y eran frecuentes las tomas de los helicópteros sobrevolando los municipios cercanos a los límites de la misma. Es muy conocida la respuesta que un soldado le dio, orgulloso, a un reportero que le preguntó si sabía a qué iba:

—¡Vamos por la toalla de Marulanda! —dijo el valiente muchacho, aludiendo a la prenda infaltable que el viejo guerrillero siempre llevaba sobre su hombro.

Resultaban impresionantes las imágenes de televisión en las que la gente salía al paso de los vehículos militares a brindarles su apoyo y aplauso, aunque simultáneamente se veían rostros de angustia y preocupación en habitantes de distintas ciudades del país. Nadie sabía qué pasaría al terminar las 48 horas y se vivía la tensión que precede a una gran guerra.

Esa misma noche tenía un compromiso con congresistas norteamericanos que visitaban a Colombia, quienes habían sido invitados a una cena en Palacio junto con algunos funcionarios del Gobierno. La hora del encuentro con los congresistas se acercaba y yo no terminaba de hacer los últimos ajustes a mi discurso. Fue necesario, entonces, encargar a uno de mis asesores para que les diera a los invitados un "tour lento" por Palacio, en tanto se culminaba la preparación y emisión de mis palabras al país.

A las 9 y 20 de la noche, después de hacer la última corrección al texto, decidí leer en directo la alocución ante el país, en la cual abría una posibilidad a la gestión del asesor especial James Lemoine, pero también dejaba claro cuándo comenzarían a correr las 48 horas.

Dije en ese discurso, que fue de apenas dos minutos:

"He aceptado esta solicitud [la de Lemoine] para que se realicen esos contactos en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas, es decir, desde este momento y hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche."

"Si al término de este plazo, es decir, el sábado a las 9:30 de la noche, las gestiones no producen un resultado satisfactorio y las FARC insisten en sus posiciones, el Gobierno asume que este grupo guerrillero no continúa en el proceso y, por lo tanto, el próximo sábado a las 9:30 de la noche comenzarían a correr las 48 horas a las que me comprometí con Manuel Marulanda, plazo éste que vencerá el día lunes 14 de enero a las 9:30 de la noche".

Señalé el reloj que llevaba puesto en mi muñeca para que a la guerrilla y al país no les quedara ninguna duda de que la decisión estaba en firme. El tiempo comenzaba a correr y la responsabilidad para salvar el proceso quedaba en cabeza de las FARC.

El país recibió el anuncio del viaje de Lemoyne con esperanza, aunque en el fondo yo sabía que su misión era muy difícil. Fui muy claro con él al decirle que solamente aceptaría de la guerrilla una declaración inequívoca de que aceptaba que todas las garantías para su permanencia en la Zona de Distensión estaban dadas y de que acometerían de inmediato el desarrollo del Acuerdo de San Francisco. Lemoyne no tenía ninguna otra facultad distinta a ésta y su actuación de buenos oficios sólo podía restringirse a estos dos puntos.

Al llegar a la Zona de Distensión, el delegado de Naciones Unidas fue recibido por voceros de la guerrilla y de inmediato se dirigieron a Los Pozos en donde sostuvieron una primera reunión. Lemoyne fue muy preciso al decir públicamente que la misión que adelantaba era a nombre del secretario general de las Naciones Unidas, quien apoyaba totalmente las gestiones de paz del Gobierno y la búsqueda de una solución por la vía negociada. El primer día de reunión terminó sin mayores novedades y la guerrilla emitió un comunicado en el que anunciaba que la reunión continuaría al día siguiente. Paradójicamente, allí estaban sentados los guerrilleros con el representante de la ONU en la Zona en la cual decían no tener garantías, dejando ver con los hechos que sí las tenían.

Hacia la una de la tarde del sábado 12 de enero, me reuní en Palacio con el canciller, el ministro de Justicia, el secretario general y el secretario privado, así como con el equipo encargado del tema de paz, y recibimos, finalmente, por fax, el documento que había surgido del trabajo de día y medio entre los negociadores de la guerrilla y James Lemoyne. Ordené que de inmediato fuera puesto en conocimiento del comisionado, que había tenido que viajar a La Habana, en tanto nosotros lo analizábamos en Palacio. Precisamente, ese día, en Cuba, dos miembros de la Comisión de Notables, acompañados de los embajadores del Grupo de Países Amigos, habían presentado al ELN, grupo con el que comenzaban a dinamizarse los diálogos, las conclusiones de dicha comisión.

Rápidamente, llegamos a la conclusión de que la propuesta tenía un problema de fondo. La guerrilla estaba intentando "negociar" con el delegado de las Naciones Unidas, quien no estaba facultado para ese efecto, posiciones que el Gobierno había dicho que eran inmodificables. Tuvimos, entonces, que llamar a Lemoyne para recalcarle que dicha negociación no era posible y que su única función era la de definir con la guerrilla si ésta aceptaba la existencia de las garantías en la Zona y daba paso inmediato a la negociación del acuerdo firmado tres meses atrás. Nada más que esto.

Encargué al canciller Guillermo Fernández de Soto para que se comunicara con Lemoyne y le informara que el Gobierno no aceptaba ni el documento enviado ni el procedimiento utilizado y le pedía que regresara de inmediato a Bogotá. Frente a esta circunstancia, la guerrilla redactó un nuevo comunicado en el que hizo pública la propuesta enviada y afirmó que quedaría a la espera de lo que decidiera el presidente.

LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

El plazo de Lemoyne vencía a las 9 y 30 de la noche. Antes de esa hora era necesario realizar una nueva intervención por televisión para anunciarle al país el fracaso de sus esfuerzos y el inicio puntual del plazo final de 48 horas para que la guerrilla abandonara la Zona. El comisionado, mientras tanto, viajaba de regreso de La Habana en compañía de algunos de los embajadores que formaban parte del Grupo de Países Amigos. Desde el avión se comunicó conmigo en un par de ocasiones para estar informado del desarrollo de la situación y para informarles también a los diplomáticos que lo acompañaban. Tenía la instrucción de que tan pronto llegara a Bogotá se dirigiera hacia Palacio para estar presente durante la alocución.

A la hora prevista, leí un breve discurso en el que dije al país que el Gobierno no encontraba satisfactorio el borrador de respuesta enviado desde el Caguán, pues sólo se remitía a temas ya pactados, sin aceptar que existían las garantías para continuar con la negociación ni comprometerse a llegar a acuerdos sobre la disminución del conflicto, como se había pactado en San Francisco de la Sombra.

En conclusión, comenzaban a correr, a las 9 y 30 de esa noche, las 48 horas para la salida de la guerrilla, que vencerían el lunes 14 de enero a la misma hora. Sólo la guerrilla, con una manifestación pública sobre la existencia de las garantías, podía detener el reloj.

Había sido una jornada agotadora. El cansancio ya dejaba sus rastros en todos los que durante estos días habíamos estado buscando alternativas que ya no aparecían. Después de despedir a los ministros que me acompañaban, hablé un rato a solas Camilo, quien resumió así la situación:

—Presidente, pase lo que pase, hemos hecho todo lo posible. Creo que en cualquier escenario, el de terminar el proceso o el de continuarlo, hemos definido el principio del fin de las FARC. Por la vía negociada o por la otra, las FARC han empezado su curva de descenso. Esto le parecerá extraño, pero creo que, desde hoy, la historia de la guerrilla comenzó a devolverse.

Un poco antes de la medianoche intenté ir a descansar pero me resultó imposible conciliar el sueño. Todos los esfuerzos y todas las esperanzas que habíamos puesto en el proceso estaban a 48 horas de terminar. Tenía mi conciencia tranquila pues había hecho hasta lo imposible para que el proceso avanzara, pero me invadían también la frustración y la tristeza que toda persona siente cuando los esfuerzos honestos por alcanzar una meta no llegan a feliz término.

Durante esa noche hubo muchos otros que tampoco durmieron. Los embajadores de Cuba, Luis Hernández, y de Francia, Daniel Parfait, especialmente, mantuvieron una serie de contactos telefónicos con miembros de las FARC buscando una última alternativa. También se comunicaron con James Lemoyne, quien había permanecido en la sede del Gobierno en San Vicente

del Caguán, pues no había logrado despegar hacia Bogotá. Alrededor de las 5 de la madrugada, el embajador cubano se comunicó con el comisionado para informarle de los contactos que durante la noche habían sostenido y para manifestarle el interés del Grupo de Países Facilitadores de reunirse conmigo esa misma mañana e intentar un último esfuerzo para salvar el proceso.

Hacia el mediodía me reuní con los diez embajadores y el nuncio apostólico de su Santidad en el salón del Consejo de Ministros. Allí los diplomáticos me solicitaron que los autorizara para viajar al Caguán y hacer ese último intento de reanimación del proceso. Se trataba de una petición de diez países que habían trabajado por la paz del país y no podía menos que analizar esta posibilidad.

En mi discurso de la noche anterior había dicho que la simple manifestación pública de la guerrilla aceptando que las garantías estaban dadas era suficiente para detener el reloj y los embajadores me solicitaron la autorización para transmitirle exactamente eso a la guerrilla. Acepté la solicitud bajo la condición de que esa misma tarde, antes de que los embajadores viajaran, se redactara el texto que llevarían a consideración de las FARC, el cual yo debía aprobar previamente. De inmediato, pedí que les trajeran un computador al salón del Consejo de Ministros y allí los dejé trabajando en la redacción del documento.

Unas horas después, volví a reunirme con ellos y analizamos la propuesta que habían preparado. Después de algunas correcciones, quedó listo el documento que los diplomáticos llevarían a la reunión con la guerrilla como último esfuerzo viable. Eso sí, con una advertencia perentoria de mi parte: no se le podía cambiar ni una coma a la declaración que yo había aprobado.

Ese día el grupo de embajadores no pudo viajar a San Vicente. El comisionado dispuso entonces todo lo necesario para que en la mañana del lunes, a primera hora, el grupo entero, incluyendo a monseñor Alberto Giraldo, asesor del proceso y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, se desplazara a San Vicente, y desde allí hacia Los Pozos, a cumplir la que podría ser su última reunión con la guerrilla.

A la cita llegaron algunos de los guerrilleros encargados de las discusiones, gracias a que, en la noche del domingo, Lemoyne había logrado encontrar a Joaquín Gómez y a su grupo, cuando preparaban la retirada de la Zona de Distensión. De otra forma hubiera sido imposible ubicarlos pues, desde mi intervención del sábado, las comunicaciones por radioteléfono se habían suspendido y la guerrilla no hacía presencia en ninguno de los sitios habituales.

La tensión llegaba a su clímax. Después de una larga discusión, y faltando poco más de cinco horas para que finalizara el último plazo, los embajadores de España, Yago Pico de Coaña, y de Francia, Daniel Parfait, se comuni-

caron conmigo para indicarme que la guerrilla aceptaba todo el texto salvo una palabra que debería ser cambiada. Por supuesto, se trataba de la palabra clave. Mientras el texto original contenía la frase "*las FARC manifiestan que las garantías están dadas*", la guerrilla pedía que se cambiara por "*las FARC manifiestan que las garantías se restablecen*", lo que resultaba inaceptable.

Muchos pensarían que el proceso dependía simplemente de una palabra, pero eso no era así. Siempre cumplí con mi palabra de mantener las garantías y declarar que éstas se restablecían significaba aceptar que en algún momento el Estado colombiano, con el presidente a la cabeza, había quitado las garantías, incumpliendo los acuerdos. No se trataba de discutir por una palabra: se trataba del cumplimiento de la palabra empeñada.

Les reiteré, entonces, a los embajadores que el texto era inmodificable y que el reloj seguía corriendo. Los diplomáticos, en la práctica y por su seguridad, debían salir de la Zona antes de las 6 de la tarde. Quedaba un poco menos de una hora y el nerviosismo crecía.

Mientras el embajador Parfait hablaba conmigo, el embajador español debatía con Raúl Reyes, quien a su vez estaba en comunicación constante con Marulanda. Yago le insistía en que una opción alternativa podía ser la frase: "*las FARC le han manifestado al Grupo de Países Facilitadores que aceptan las garantías para el desarrollo del diálogo y la negociación en la Zona de Distensión*", la cual cubriría las expectativas del Gobierno, y le insinuaba que para ellos ese término era aún más preciso que el que defendían. Raúl Reyes se convenció del argumento y, después de consultar con Marulanda, le informó a los embajadores que concordaban con esa redacción, que también era aceptable para nosotros. ¡Humo blanco!

Parecía increíble que la guerrilla hubiera demorado tanto tiempo, y obligado a tantos esfuerzos, para aceptar lo obvio: que siempre habían tenido y seguían teniendo garantías para movilizarse y negociar en la Zona de Distensión.

Ahora quedaba lo procedimental sobre cómo se produciría la declaración, pues yo había exigido que la misma fuera expresada directamente por la guerrilla, para contar con su palabra. Ellos no aceptaban esto porque significaba admitir de manera descarnada que lo que habían sostenido por más de tres meses no había sido cierto. Nuevamente, los embajadores propusieron una opción utilizada en diferentes escenarios internacionales, que consistía en que el embajador de Francia, como coordinador del Grupo de Países Facilitadores, leería un comunicado en el que la frase solicitada por el Gobierno era transcrita literalmente y la guerrilla, posteriormente, manifestaría su aceptación plena al contenido del mismo. Así se hizo finalmente.

En la rueda de prensa, el embajador Parfait leyó el texto del comunicado con las declaraciones que habíamos pedido; luego el delegado de Naciones Unidas, James Lemoyne, ratificó el contenido y, finalmente, Raúl Reyes, en nombre de las FARC, manifestó que aceptaba los términos del documento leído.

Así fue como la comunidad internacional, con una actuación oportuna y decidida, que el país reconoció en todo su valor, salvó el proceso de la muerte a tan sólo cuatro horas del cumplimiento del término para abandonar la Zona.

Durante el día el comisionado, acompañado de Juan Gabriel Uribe y alguno de sus asesores, había viajado a San Vicente para organizar la posible evacuación del personal que trabajaba en el Batallón y para hacer presencia en el pueblo, donde el nerviosismo de la gente era muy grande. Además, era conveniente que estuviera cerca en caso de que las gestiones de los diplomáticos tuvieran éxito, como en efecto sucedió.

Tan pronto el embajador francés me informó del desarrollo de la reunión y la aceptación del texto por parte de las FARC, me comuniqué con Camilo y le pedí que se dirigiera de inmediato a Los Pozos. Ya sobre las 6 de la tarde, el comisionado arribó a la sede de negociaciones para celebrar una reunión con los voceros de la guerrilla y con el Grupo de Países Facilitadores. Después de más de una hora de conversación, se acordó iniciar la nueva ronda de negociaciones dos días después. En los pocos días que restaban para el vencimiento de la última prórroga, los equipos negociadores tenían que preparar un cronograma estricto de discusiones para concretar lo pactado en el Acuerdo de San Francisco.

Mientras tanto, en Bogotá, preparábamos una nueva alocución para informarle al país lo sucedido. Tenía que notificar a los colombianos que el reloj se había detenido y que el proceso continuaría, una buena noticia sin duda. Pero no podía quedarme ahí. Mi obligación también era presionar a las FARC para que esta vez sí fueran serias con sus compromisos. Así que, en lugar de anunciar, como ellas esperaban, que prorrogaba la vigencia de la Zona por lo menos hasta el fin de mi mandato, dije que el plazo de la misma era todavía el 20 de enero y que en los seis días que quedaban debía definirse un cronograma preciso para llegar en el menor tiempo posible a los acuerdos destinados a disminuir la intensidad del conflicto y sacar la población civil del mismo. Sin dicho cronograma, sin resultados concretos, no habría prórroga.

Esto sorprendió, por supuesto, a la guerrilla y también a los embajadores, que vieron la alocución por televisión desde Los Pozos. Según me contaron luego, la "dureza" del discurso causó inquietudes en los que permanecían allí, pues llegaron a temer una reacción peligrosa por parte de las FARC. Sin embargo, los términos tenían que ser claros. El país no soportaba más dilaciones ni más frustraciones.

CAPÍTULO XLI

La más difícil decisión

Con el proceso aún en cuidados intensivos, reanudamos las conversaciones dos días después de la intervención de la comunidad internacional y la aceptación por las FARC de las garantías que tenían en la Zona. El tiempo era muy corto y no podíamos desperdiciar ni un solo minuto.

Las negociaciones se iniciaron pasado el mediodía del 16 de enero de 2002, contando todavía con el acompañamiento de algunos embajadores del Grupo de Países Facilitadores, el asesor especial del secretario general de Naciones Unidas y monseñor Alberto Giraldo, por parte de la Iglesia católica, acompañamiento que luego la Mesa institucionalizaría como permanente, por primera vez en un proceso con este grupo.

El ambiente, sin embargo, seguía siendo tenso. No sólo se había vivido y sufrido el duro enfrentamiento de las jornadas anteriores, en las que el Gobierno estuvo listo para terminar con la Zona y con el proceso y las FARC llegaron a tachar de mentiroso al comisionado, sino que se acusaba también la fatiga acumulada por tantos días y noches de incertidumbre.

A pesar de esto, las discusiones se trataron de llevar de la mejor manera posible, aunque, a nivel de estrategia, el equipo del Gobierno continuó generando la máxima presión posible. Bien es sabido que para la guerrilla el tiempo no corre a la misma velocidad que para el resto del país y ese factor había que vencerlo con presión en la negociación. El siguiente paso del equipo de gobierno fue la presentación de un cronograma que se extendía por cerca de tres meses y que debía culminar con la firma de un acuerdo de cese de fuegos y hostilidades.

"YA LLEGA EL 20 DE ENERO"

Quedaban apenas cuatro días para el vencimiento de la última prórroga de la Zona de Distensión y en ese lapso debería quedar listo el acuerdo de cronograma. La presencia de la comunidad internacional y de la Iglesia en las discusiones implicaba también una presión adicional. Tener testigos con voz sentados a la mesa de negociación era una experiencia interesante que obligaba a las partes a concretar mucho más sus posiciones.

El 18 de enero, dos días antes del vencimiento de la Zona, fueron convocados a la misma los diez embajadores de los Países Facilitadores y el nuncio apostólico, con el fin de informarles de los avances en las discusiones. Si bien es cierto que sólo se había trabajado por dos días, el apremio del tiempo urgía la producción de resultados.

En la reunión con los embajadores, la guerrilla inició una larga explicación que llevaba a concluir que no avanzarían más. En su exposición, los guerrilleros dijeron que no estaban dispuestos a trabajar bajo presión y que no se iban a dejar poner contra la pared por la fecha del 20 de enero, pues no aceptaban términos perentorios. El comisionado tomó la palabra, y poniéndole algo de humor, pero también de firmeza, le dijo a Joaquín Gómez, quien ese día llevaba la vocería de las FARC:

—Joaquín, sólo quiero recordarle lo que dice la conocida canción de la "Fiesta en Corralejas", que todos hemos bailado alguna vez: *"Ya llega el 20 de enero"* y, si no tenemos algo concreto, no hay nada que hacer.

Esa fue la primera y única vez que se vio a Joaquín Gómez salido de casillas. Con voz airada le respondió a Camilo diciéndole que no lo amenazara más con las fechas porque así no se podía hacer nada. Camilo se limitó a insistir en el punto.

Ya entrada la noche, la reunión terminó en medio de la tensión generada por el enfrentamiento que se había presentado y con la preocupación de que los avances aún no eran concretos. Algunos de los embajadores permanecerían en la Zona los siguientes dos días acompañando las discusiones.

La mañana del día siguiente se reiniciaron las negociaciones sobre el cronograma, sin que se dieran mayores avances, pues la guerrilla insistía en dilatar los acuerdos y en no someterse a fechas límites para alcanzarlos.

Sin embargo, ese día, ya entrada la tarde, ocurrió el primer avance, paradójicamente ocasionado por una infortunada intervención de James Lemoyne. El delegado de la ONU había pedido hablar por separado con los negociadores del Gobierno y de las FARC. En cada reunión, y por su propia iniciativa, Lemoyne transmitió mensajes encontrados y equívocos sobre la posición que cada uno tenía. Intentando servir de mediador, procuraba venderle a cada parte su propia idea de cronograma, tratando que cada una creyera que se trataba de una propuesta de la otra. Otra vez, como ocurrió el 12 de enero, Lemoyne confundía su función de facilitador con la de negociador y generaba más inconvenientes que soluciones. Fue tan obvia su actuación que, tanto el Gobierno como la guerrilla, notaron que algo extraño había pasado, pues, tras la intervención de Lemoyne, las pocas coincidencias que se habían logrado habían desaparecido.

Al ver que todo estaba retrocediendo, el comisionado llamó aparte a Raúl Reyes y le manifestó su preocupación por lo que Lemoyne le había transmitido. Reyes hizo lo mismo y ambos llegaron a la conclusión de que era conveniente reunirse por aparte para tratar de aclarar lo que estaba sucediendo.

Tras una hora de discusiones, varias de las discrepancias fueron superadas y el proyecto de cronograma comenzó a transitar por una vía mucho más fluida. Ya los puntos de desacuerdo estaban superados en su mayoría y así lo informaron a los embajadores. Entrada la noche, los negociadores acordaron continuar al día siguiente. No había aún un acuerdo pero el optimismo de lograrlo había retornado.

Los principales puntos del cronograma estaban centrados en las fechas precisas para la presentación de borradores de acuerdo sobre la disminución del conflicto y sobre el inicio del estudio del cese de fuegos a partir del 4 de febrero. Se fijaba también como fecha para la firma de los acuerdos el 7 de abril. Eran fechas ambiciosas pero las circunstancias así lo exigían. No había otra alternativa pues el esquema de negociación en medio del conflicto había quedado agotado.

Desde Palacio, me mantuve reunido con el equipo de soporte, analizando las informaciones que recibíamos de la Zona. También estábamos muy preocupados por la escalada terrorista que habían comenzado las FARC en el país, causando gran cantidad de víctimas y daños que cerraban aún más las posibilidades políticas para el proceso.

Nuestra interpretación era que estos hechos violentos era la forma como las FARC reaccionaban frente a la posibilidad de que el proceso se rompiera. En su lógica guerrillerista, consideraban que si la gente veía una escalada muy fuerte se convencería de que era necesario mantener el proceso, percepción que estaba totalmente alejada de la realidad del país.

¡Y llegó el 20 de enero! Ese día tenía que firmarse un acuerdo de cronograma lo suficientemente sólido para que la opinión pública empezara a recuperar la credibilidad en el proceso y para que viéramos, en un futuro cercano, la concreción de acuerdos de cese de fuegos y hostilidades y de disminución de la intensidad del conflicto.

La reunión empezó temprano. A Los Pozos llegaron los equipos de negociación y los delegados internacionales que asistirían como testigos. También estaban en camino los demás embajadores del Grupo de Países Facilitadores. La discusión fue larga. Por momentos los equipos se retiraban a consultas y en varias oportunidades se realizaron reuniones con los embajadores.

Ya en la tarde estaba listo un borrador casi definitivo del acuerdo, pero la guerrilla insistía en incorporar el tema del paramilitarismo como un punto especial en el desarrollo del mismo. Por parte del Gobierno, la insistencia estaba en incorporar el tema del secuestro como prioritario en las discusiones. Esos eran los dos puntos que nos separaban del acuerdo final.

Sin embargo, ya se había logrado consenso en otros puntos muy importantes. Estaba acordado abordar de inmediato el tema de la tregua y el cese de fuegos y hostilidades y se habían definido las fechas para llegar a los acuerdos. También había un compromiso de avanzar en el desarrollo del documento presentado meses atrás por la Comisión de Notables y se había

aceptado incorporar de manera permanente a la comunidad internacional como facilitadora en todas las reuniones de la mesa. Por último, se había aprobado la propuesta de invitar a los candidatos presidenciales a participar en una reunión con la guerrilla.

Este último punto resultaba de particular importancia para las FARC, pues ellos tenían una enorme preocupación sobre lo que sucedería con el cambio de gobierno y querían contar con la certeza de que el siguiente presidente respetaría los acuerdos que se alcanzaran bajo mi mandato.

Finalmente, la guerrilla presentó una fórmula en la que sugería incorporar el tema del paramilitarismo como un *"componente inseparable de la propuesta presentada por la comisión de Personalidades"*. Ésta era una alternativa admisible para el Gobierno pero le di instrucciones a los negociadores de que sólo fuera aceptada bajo la condición de que también fuera aplicada para el tema del secuestro. Cerca de las 6 de la tarde, el acuerdo fue redactado en su versión final, involucrando las dos posiciones.

Una hora después, y delante de los acompañantes internacionales, fue firmado el cronograma que sacaría adelante el proceso y permitiría entrar de inmediato a concretar el tema del cese de fuegos y hostilidades y, particularmente, del secuestro. Habíamos logrado nuestro objetivo de salvar el proceso y, a la vez, de establecer fechas para llegar a los acuerdos.

Esa misma noche informé al país, en una nueva alocución, los resultados de la reunión y, a la vez, anuncié la prórroga de la Zona de Distensión, pero no hasta el final de mi mandato, el 7 de agosto, sino sólo hasta tres días después de la fecha en que se debían firmar los primeros acuerdos, vale decir, hasta el 10 de abril de 2002. La estrategia seguía siendo la de presionar con las fechas y con la presencia de la comunidad internacional, que había probado su eficacia para acercar a las partes en un momento de crisis.

A UN PASO DEL CESE DE FUEGOS

Tras un par de días de trabajo interno, se reanudaron las discusiones. No podíamos aflojar el acelerador ni un solo minuto. Habíamos ganado toda la iniciativa y era necesario mantener el ritmo que llevábamos. El 23 de enero, ya con documentos en la mano, los dos equipos volvieron a reunirse para continuar con las discusiones.

Esta nueva etapa se inició con un estricto cumplimiento del cronograma acordado. El 2 de febrero ambas partes llevaron a la mesa los documentos para discutir la disminución de la intensidad del conflicto como un primer paso para llegar a la tregua o cese de hostilidades.

Como era de esperarse, el documento de la guerrilla contenía temas que nada tenían que ver con la confrontación armada ni con la disminución del conflicto. Ellos hablaban de disminuir la intensidad del conflicto mediante la suspensión de las extradiciones, el cambio de la política "neoliberal" o

la "doctrina de seguridad nacional". Éstos siempre eran los puntos recurrentes en los que se basaban para decir que el Estado arremetía contra la sociedad.

Por nuestra parte, presentamos una completa propuesta basada en las discusiones realizadas meses atrás con los militares, cuando se elaboró la propuesta de cese de fuegos y hostilidades, que contenía, además, los elementos principales recogidos en el documento de los Notables y en el Acuerdo de San Francisco. Sabíamos que las posiciones iniciales de las partes iban a ser muy distantes pero al menos eran una base para recomenzar la discusión.

El 7 de febrero, en un avance sin precedentes, se firmó el "Acuerdo sobre el Acompañamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación" en virtud del cual se estableció un acompañamiento permanente a la Mesa por parte del Grupo de Países Facilitadores, el asesor del secretario general de Naciones Unidas y la Iglesia católica, representada por monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Estos acompañantes del proceso tendrían una participación activa en la Mesa y estaban facultados para dar asesoría técnica, cuando las partes lo consideraran necesario. También tenían como función prestar sus buenos oficios para la superación de las dificultades que se presentaran en la Mesa.

Este nivel de injerencia de la comunidad internacional y de la Iglesia nunca se había alcanzado antes en un proceso de paz en Colombia y constituía un elemento de garantía y seriedad de las negociaciones, que en adelante se desarrollarían frente a estos testigos de excepción.

Paradójicamente, a pesar de que las discusiones en el Caguán avanzaban de buena manera y dando cumplimiento estricto al programa acordado, la situación de orden público empeoraba aún más. Las FARC continuaron empeñadas en su ofensiva terrorista contra el país. Dinamitaron puentes, torres de energía y el tubo del oleoducto; atacaron poblaciones y realizaron atentados contra estaciones de policía en Bogotá y otras ciudades. Todo esto conducía a la población a un explicable clima de incredulidad frente a lo que pudiera lograrse en la recién recuperada negociación.

La guerrilla, en su escalada terrorista, llegó al punto de dinamitar una de las válvulas principales del acueducto de Bogotá, alcanzando extremos jamás vistos en los peores conflictos del mundo: nada menos que intentar dejar a una ciudad sin agua, el líquido vital por excelencia. Por fortuna, el atentado no tuvo mayores repercusiones, aunque pudo ser nefasto. De haber afectado la presa en donde se acumula el agua, la catástrofe que hubieran generado las inundaciones en las pequeñas poblaciones de la cordillera, e incluso sobre la ciudad de Villavicencio, hubiera sido peor que la tragedia que vivió Armero en 1985, cuando fue borrada del mapa por una avalancha de lodo y piedras.

Alarmado por estos hechos violentos, llamé, por esos días, al comisionado a mi despacho, donde me encontraba reunido con el canciller Guillermo

Fernández de Soto. Les dije que esto no podía continuar y que un proceso así no tenía ningún sentido. La guerrilla no podía sentarse a hablar de la disminución de la guerra y a la vez escalar la confrontación de una manera tan brutal. El comisionado estaba listo para salir a una de las reuniones con la guerrilla y envió adelante a su equipo de negociación para que iniciaran la reunión mientras él llegaba. Sin embargo, la guerrilla no quiso hacerlo y decidieron esperar la llegada de Camilo.

La reunión con el canciller y con el comisionado no fue muy larga. Durante la noche previa había pasado horas meditando sobre lo que estaba sucediendo y no encontraba una salida distinta a la de ponerle fin al proceso. Era una decisión especialmente difícil, sobre todo después de haber superado obstáculos tan complejos como los de los días anteriores, pero la brutal insistencia de la guerrilla en el terrorismo cerraba todo espacio político a la negociación.

Le dije al comisionado:

—Esto no aguanta más. Las FARC no se dan cuenta de que están acabando con todas las posibilidades de continuar. Vaya y rompa el proceso. Hábleles con todas las energías del caso y haga que se levanten de la Mesa. Que sean ellos los que rompan el proceso porque de ellos es la responsabilidad de lo que está pasando. Usted solamente haga que se levanten de la mesa y no ahorre ningún recurso para que esto suceda. Yo tengo la misma tranquilidad que usted y sé que hicimos todo lo posible. Lo espero esta noche a su llegada con el rompimiento en la mano.

La sorpresa de Camilo no fue poca. Sabía que las cosas estaban muy delicadas pero no imaginaba que yo le fuera a dar unas instrucciones tan contundentes. Sin embargo, el comisionado, el canciller y yo tuvimos muy claro ese día que el obstinado terrorismo de las FARC no nos dejaba más alternativa.

Camilo salió meditando sobre la dura misión que le había encomendado. Su nerviosismo era patente. Tenía que plantarse en frente de los guerrilleros y lograr que ellos se levantaran de la Mesa. No era algo fácil, pues cualquier exageración de su parte podía generar reacciones impredecibles, incluso peligrosas, de parte de las FARC.

Hacia las 11 de la mañana el comisionado emprendió el que podía ser su viaje final al Caguán. Tuvo dificultades para llegar, pues la carretera entre San Vicente y Los Pozos se encontraba bloqueada por un accidente y se demoró cerca de cuatro horas en llegar hasta allí. Ese tiempo le sirvió para organizar las ideas del discurso que le "dispararía" a la guerrilla esa tarde. Adicionalmente a las demoras, el calor infernal de ese día había logrado esfumar la poca paciencia que le quedaba.

Al llegar a la Mesa, ninguno de los que participaban en su equipo sabían cuál era la misión que llevaba. El comisionado dio la instrucción a su equipo de que nadie más hablaba y tomó la palabra durante más de dos horas.

Le soltó a la guerrilla un discurso en el cual los trató como una banda de secuestradores, los comparó con los talibanes, les habló de su vinculación con el narcotráfico, les dijo que ni el peor terrorista era capaz de dinamitar acueductos y utilizó, incluso, el tono duro y sarcástico que más sacaba de quicio a los guerrilleros, mostrándoles el contrasentido de sus acciones. Eran temas y reclamos que ya había planteado, en varias ocasiones, a la guerrilla, pero nunca todos al mismo tiempo ni en una forma tan beligerante.

Hacia las 8 de la noche, visiblemente agotado, Camilo regresó a Palacio a rendirme cuentas de su gestión:

—Presidente, les dije hasta de qué se iban a morir y estos tipos no se levantaron de la Mesa. No se me quedó nada guardado ¡y ni siquiera se inmutaron! Aunque parezca increíble, y aunque estoy seguro de que nadie nunca les ha hablado de esa manera, se quedaron impertérritos, sin alterarse ni mucho menos levantarse.

La conclusión de esta experiencia era obvia: la guerrilla no estaba dispuesta a romper el proceso. Analizando la situación, decidimos aprovechar esta circunstancia para sacar ventajas en la discusión del cese de fuegos y hostilidades que comenzaría a negociarse en dos días.

Otro hecho de importancia durante este período fue la reunión que se realizó el 14 de febrero, en Los Pozos, con los distintos candidatos a la Presidencia. La idea era que los candidatos conocieran de primera mano lo que estaba sucediendo con la negociación y expusieran libremente sus posiciones. Para la guerrilla era importante saber qué pasaría con el nuevo presidente en caso de que firmara los acuerdos que estaban previstos en el cronograma.

A esta reunión asistieron Horacio Serpa, candidato del Partido Liberal; Ingrid Betancourt, candidata del Partido Verde Oxígeno, y Luis Eduardo Garzón, candidato de los movimientos de izquierda, y estuvieron naturalmente presentes el Gobierno y la guerrilla, que habló por medio de un representante del movimiento político clandestino que había creado meses atrás. La reunión fue transmitida en su totalidad por televisión y fue aprovechada, muy especialmente, por Serpa, al que poco más de cuatro meses atrás le habían impedido su entrada a la Zona, para asumir una posición fuerte en frente de la guerrilla.

Los demás candidatos no quisieron asistir a dicha reunión. Noemí Sanín había estado en la mayoría de las anteriores pero en este caso cambió su posición y prefirió hacer fuertes críticas desde Bogotá. El candidato independiente Álvaro Uribe siempre había sido crítico del proceso y especialmente de la Zona de Distensión, y tampoco aceptó participar ese día.

La reunión con los candidatos transcurrió en términos normales hasta que uno de los guerrilleros, en una actuación desmedida y retadora, sacó un fusil que habían obtenido en un combate y lo mostró como una señal de lo que para ellos significaba el Plan Colombia. Esto generó un rechazo abso-

luto por parte de quienes asistían al encuentro y de quienes veían el debate por televisión. La guerrilla, ni siquiera en un debate político y civilizado, se abstenía de amenazar con la violencia de las armas.

Finalmente, llegó la hora de la discusión de fondo. El 15 de febrero se iniciaba el debate sobre el cese de fuegos y hostilidades. El equipo negociador del Gobierno había diseñado una estrategia diferente para evitar caer en las discusiones etéreas y eternas de la guerrilla. Teniendo en cuenta que los principales puntos de diferencia se encontraban en la discusión del concepto de hostilidades, los negociadores buscarían encontrar las coincidencias entre lo que la guerrilla consideraba sólo "cese de fuegos" y lo que para el Gobierno era "cese de fuegos y hostilidades" como un concepto inseparable. En el fondo de ambos conceptos las similitudes eran grandes, pero para la guerrilla la idea de las hostilidades involucraba elementos económicos y sociales más allá del propio conflicto, los cuales estaban, en su mayoría, contenidos en la agenda común acordada en 1999.

La metodología bautizada como "preguntas descriptivas" consistiría en preguntarle a la guerrilla si los hechos que para el Gobierno significaban hostilidades, para ellos estaban comprendidos en su idea de cese de fuegos. El Gobierno, retomando la propuesta presentada en julio de 2001, elaboró una lista de los actos violentos que consideraba como hostilidades y le preguntó, uno por uno, a la guerrilla si éstos estaban comprendidos en lo que ellos denominaban cese de fuegos. Al final, las coincidencias eran mucho mayores de lo que se pensaba. Solamente había una discrepancia en lo que se refería a los temas del secuestro y el reclutamiento de menores. Todos los demás temas, que considerábamos como parte de las hostilidades, la guerrilla los incluía en su concepto de cese de fuegos. Esto significaba un grado de avance que no se había alcanzado nunca antes.

Ya con estas coincidencias, el Gobierno puso sobre la mesa el trascendental tema del secuestro. Mientras para el Gobierno el secuestro tenía que incluirse dentro de la suspensión de todo tipo de actividades militares por parte de la guerrilla, las FARC lo consideraban como una actividad de tipo económico, lo cual era a todas luces inaceptable. Después de realizar varias "preguntas descriptivas" y de analizar cómo la guerrilla realizaba una operación de secuestro, con el uso de armas, coacción y violencia, resultó evidente que este tema también debería quedar incluido en el concepto de "cese de fuegos" que manejaba la guerrilla. Habíamos logrado otro adelanto de fondo en la discusión de los conceptos.

Al mismo tiempo fueron quedando descartados los temas que la guerrilla incluía como hostilidades del Estado, como, por ejemplo, las fumigaciones de los cultivos ilícitos y las medidas de la política económica.

Cuando la guerrilla vio que la discusión avanzaba y sus argumentos no eran lo suficientemente fuertes, pidió suspender la reunión para hacer consultas al más alto nivel.

Para los delegados del Gobierno, gran parte del camino estaba ya recorrido y nos acercábamos, al fin, de manera tangible y evidente, a lo que podía ser el acuerdo de cese de fuegos y hostilidades que tanto esperaba el país.

Con esos avances en proceso, cité en el Palacio a una nueva reunión del Consejo Nacional de Paz para el 19 de febrero. Allí pronuncié, ante representantes de las fuerzas políticas, económicas, las regiones, las iglesias, la academia, los trabajadores y las minorías, un discurso en el que, con la prudencia necesaria, delineé el acuerdo al que nos estábamos aproximando e indiqué, además, que era necesario poner sobre el tapete la discusión procedimental sobre el tema de la separación de fuerzas sin la cual, técnicamente, era imposible realizar un cese de fuegos.

Esta referencia causó una gran polémica pues algunos analistas se imaginaban que la separación de fuerzas implicaba la creación de una serie de pequeñas zonas de distensión, e incluso llegaron a mencionar que el Gobierno estaría preparando cerca de 100 zonas de este tipo. Esto no era así. Junto con los militares teníamos establecido un grupo de trabajo, con participación de tres generales y tres coroneles designados por el general Fernando Tapias, comandante general de las Fuerzas Militares, y el equipo del comisionado, el cual había analizado, en diversas reuniones, los mecanismos logísticos y de ubicación para llevar a la práctica un cese de fuegos exitoso. La idea era, como lo repetía muchas veces el comisionado, que no se pactara un "cese de fuegos que se rompiera por el disparo de un borracho", sino uno serio y verificable.

Habíamos analizado antecedentes, como el de las discusiones en Caracas varios años atrás, cuando se había buscado un cese de fuegos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que entonces agrupaba a las FARC y el ELN. En esa ocasión, uno de los escenarios previstos, diseñado también por los propios militares —con la activa participación del luego general Jorge Enrique Mora, quien fuera comandante del Ejército durante mi mandato y el primer comandante general de las Fuerzas Militares en el gobierno de mi sucesor— indicaba que la separación de fuerzas debía hacerse en diferentes puntos de la geografía nacional. No obstante, estábamos estudiando escenarios diferentes pues las circunstancias del momento no eran las mismas.

Aunque apenas mencioné el tema en dos párrafos de mi discurso, al día siguiente, en los medios de comunicación, la polémica sobre la forma en que se llevaría a cabo la separación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las FARC, en caso de una tregua, apareció en primera línea.

EL DÍA FINAL

El miércoles 20 de febrero de 2002 estaba previsto que el equipo de negociadores continuara la reunión con la guerrilla sobre el acuerdo de cese de fuegos y hostilidades. Los avances logrados cinco días antes hacían presagiar

un buen resultado, tanto que ese mismo día podría quedar "cocinado", al fin, el contenido y el procedimiento para pactar una tregua efectiva entre las partes.

Sin embargo, ante el debate público que ocasionó mi discurso en el Consejo Nacional de Paz, le pedí al comisionado que no saliera hacia el Caguán sin antes hacer presencia en la mayor cantidad de medios posible, especialmente en la radio, para explicar los alcances del concepto de separación de fuerzas. También le encargué al ministro de Justicia, Rómulo González, que hiciera algunas declaraciones sobre este tema.

Cerca de las 8 y 30 de la mañana, el comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, llamó al secretario general de la Presidencia, Gabriel Mesa, y luego a mí, para informarnos sobre el reciente secuestro de un avión de pasajeros de la compañía Aires que había despegado de Neiva.

Todo indicaba que los autores del secuestro eran guerrilleros de las FARC, pues el avión había tomado rumbo hacia un área cercana a la Zona de Distensión. Quedé pendiente de mayor información y, entre tanto, le ordené al comisionado que, en lugar de volar hacia San Vicente, se dirigiera a Palacio, pues, de confirmarse el secuestro aéreo por parte de la guerrilla, la supervivencia del proceso se haría insostenible.

Una hora después, el general Tapias me confirmó que los autores del secuestro eran, en efecto, miembros de las FARC, más exactamente integrantes de la columna Teófilo Forero de esta organización. El hecho resultaba de la mayor gravedad, pues se trataba de un secuestro aéreo, catalogado internacionalmente como un delito de terrorismo. Era más que inconcebible que el día en que se iba a discutir el secuestro como parte del cese de fuegos, la guerrilla realizara, precisamente, el más grave de los secuestros.

En el avión se encontraba el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado. La guerrilla, que ya había secuestrado a algunos parlamentarios y políticos para seguir presionando un canje por guerrilleros presos, ahora retenía al senador Gechem a través del secuestro de un avión de pasajeros en pleno vuelo. Definitivamente, como dice el adagio popular, las FARC estaban cerrando la puerta del proceso con candado y botando la llave, justo en el momento en que más avanzábamos en la discusión del cese de fuegos. O tal vez por eso.

Cuando Camilo llegó apresuradamente a mi oficina, le dije:

—Si las FARC secuestraron el avión, el proceso terminó.

Le pedí que se reuniera con el general Tapias, quien estaba por llegar a la casa de Nariño, con el fin de que verificaran la información, pues una decisión tan grave no podía tomarse sobre supuestos equívocos.

A los negociadores y embajadores que ya iban rumbo hacia Los Pozos para continuar con las discusiones, los llamamos de inmediato y los alertamos para que se devolvieran al Batallón Cazadores y esperaran allá hasta cuando tuviéramos una mayor claridad sobre lo sucedido.

El general Tapias y el comisionado verificaron la información. Los secuestradores habían aterrizado el avión en una carretera del departamento del Huila, relativamente cerca de la Zona, y se habían llevado con ellos al senador Gechem. Incluso, el general se comunicó con uno de los pasajeros del avión, que era un militar retirado, quien le corroboró toda la información que los informes de inteligencia habían anticipado.

De inmediato, los dos entraron a mi despacho y me dijeron:

—Presidente, ya no hay dudas. Los autores del secuestro son guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las FARC.

Supe, entonces, con absoluta claridad, que todo había terminado. Las FARC, con este acto de terrorismo, catalogado como tal por el Derecho Internacional, habían echado por la borda todos los esfuerzos realizados por salvar el proceso y mantener viva la esperanza de una paz negociada.

Muchas veces, en los últimos meses, me habían pedido que definiera si los consideraba a ellos como terroristas o no, a lo que yo les había respondido que sólo sus actos los definirían. Y así ocurrió. Con 117 actos de terrorismo en el último mes, culminados con este secuestro en pleno vuelo, las FARC pusieron sobre su cabeza, ellas mismas, el título de "terroristas".

Pero las malas noticias no paraban. En la madrugada de ese mismo día, las FARC habían dinamitado un puente en Antioquia, hecho que generó el accidente de una ambulancia de la Cruz Roja que transportaba a una mujer en proceso de parto, su hermana y una enfermera. Las tres mujeres y, por supuesto, el bebé que estaba a punto de nacer, perdieron la vida, como otra infame consecuencia de la escalada terrorista de la guerrilla.

Hacia algunos meses le había pedido al general Tapias que preparara, utilizando todos los recursos humanos, técnicos y de inteligencia a nuestro alcance, un informe detallado sobre las actividades indebidas que las FARC pudieran estar llevando a cabo en la Zona de Distensión. En los últimos días, medios de comunicación, congresistas y algunos grupos ciudadanos venían denunciando este tipo de hechos, pero yo no podía tomar una decisión de tajo sin contar con suficientes y probados elementos de juicio. Se decía, por ejemplo, que la guerrilla estaba construyendo pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones, fortificaciones para su retaguardia y otro tipo de instalaciones que generaban inquietudes por tratarse de un aprovechamiento abusivo de la Zona.

Para hacer esta investigación, había autorizado el uso de aviones de inteligencia para tomar fotografías a este tipo de instalaciones y solicitado, incluso, el monitoreo satelital de la Zona, todo con el objetivo de acuñar las pruebas necesarias. El informe había tardado en su elaboración, pues no era una labor sencilla en absoluto, pero ya estaba prácticamente listo, mostrando que, en efecto, las FARC estaban usando la Zona para objetivos distintos a los creados. Entendiendo la gravedad de la decisión que estaba a punto de tomar, le solicité al general Tapias que me llevara el informe

a Palacio y que tuviera a punto el operativo militar para reingresar a la Zona.

Convoqué, al mismo tiempo, un Consejo Extraordinario de Seguridad con la asistencia de toda la cúpula militar, el director general de la Policía, los ministros de Justicia y del Interior, el director del DAS, el alto comisionado para la Paz, el secretario general y el secretario privado. En dicha reunión los militares reiteraron la responsabilidad de las FARC en el secuestro del senador Gechem y del avión, y yo señalé que los graves hechos ocurridos ese día —el secuestro de una aeronave y de un senador y la voladura de un puente, causando la muerte de civiles que venían en una ambulancia de la Cruz Roja— me obligaban a poner punto final al proceso de paz. Se trataba de actos terroristas, calificados como tales por la comunidad internacional, que hacían indefendible cualquier esfuerzo por continuar el proceso.

Les pedí a los militares, como ya le había anticipado a Tapias, que activaran el plan que desde enero tenían preparado para el retorno de las tropas a la Zona de Distensión, y les hice particular énfasis en lo importante que era la protección de la población civil en el desarrollo del operativo.

Finalizada la reunión, decidí hacer una serie de llamadas a distintos jefes de Estado para contarles la situación por la que estábamos atravesando. Una decisión como la que iba tomar respecto del proceso tenía necesariamente efectos internacionales y mi deber era controlarlos a través del contacto directo con los principales líderes del mundo. Llamé al embajador Luis Alberto Moreno para que informara de la inminente ruptura y de sus causas a las principales autoridades de los Estados Unidos; al presidente de España y de la Unión Europea, José María Aznar, y al presidente de México, Vicente Fox, entre otros mandatarios amigos, incluyendo ex presidentes del país. Todas las personas con quienes hablé me expresaron su total apoyo y comprensión.

Mientras hacía estas llamadas, le pedí a Camilo que elaborara un primer comunicado público señalando la gravedad del hecho y calificándolo como un acto terrorista, una valoración que utilizábamos por primera vez desde el Gobierno.

El comunicado lo leyó Camilo en una rueda de prensa convocada a las 11 de la mañana con el fin de que la noticia se conociera en los informativos del mediodía. Extrañamente, y a pesar de las duras calificaciones empleadas, los periodistas no sospecharon el verdadero alcance del comunicado, que no era otra cosa que el primer paso de nuestra parte hacia el rompimiento del proceso.

Entre tanto, en la Zona de Distensión, Juan Gabriel Uribe, los negociadores y embajadores esperaban instrucciones en el Batallón Cazadores. Juan Gabriel se había comunicado con Raúl Reyes, que los estaba esperando en Los Pozos para la reunión programada, y le había dicho que no viajarían hasta allá en tanto no se clarificara la situación presentada por el secuestro de

la aeronave. Reyes se mostró asombrado y le respondió que él no tenía ninguna idea de esta situación. Antes del mediodía, Camilo se comunicó con Juan Gabriel y le pidió que regresara a Bogotá, junto con los diplomáticos y el equipo negociador, pues el proceso se iba a romper ese mismo día.

La decisión estaba tomada. Ahora correspondía preparar una alocución clara y contundente para anunciarle al país, y a las mismas FARC, esta trascendental y definitiva determinación. Para el efecto hice llamar a mi despacho a Juan Carlos Torres, quien desde hacía más de dos años trabajaba conmigo en la redacción de los discursos, y le di instrucciones precisas para que comenzara a preparar la crucial intervención. Sólo debía dejar por incluir un párrafo con el anuncio concreto de la terminación de la Zona de Distensión y la hora desde la cual se haría efectiva, el cual agregaría Camilo al final de la tarde.

Mientras Juan Carlos iniciaba su trabajo a marchas forzadas, cité a almorzar en la Casa Privada al ministro de Justicia, Rómulo González; al comisionado, Camilo Gómez; al secretario general de la Presidencia, Gabriel Mesa, y al secretario privado, Juan Hernández. Ya teníamos claro que el proceso terminaba. Lo que faltaba discutir ahora era la aplicación o no del término de las 48 horas pactado para el evento del fin del proceso desde mi primera reunión con Marulanda. La opinión unánime fue la de no conceder este plazo, por tres razones principales: en primer lugar, ya lo había concedido y había corrido todo, entre el 12 y el 14 de enero; en segundo lugar, sería una injusta ventaja estratégica para una guerrilla que había dinamitado el proceso con su actitud terrorista, y, en tercer lugar, el incumplimiento de la guerrilla respecto al uso debido de la Zona, nos liberaba de dicho compromiso.

Después del almuerzo convoqué nuevamente a los militares para ratificarles la determinación de ponerle fin al proceso de paz. Volví a preguntarles:

—Generales, ¿cuánto tiempo necesitan para preparar las tropas y regresar a la Zona?

Ellos me contestaron que estaban listos para hacerlo tan pronto yo les diera la orden. Les transmití, entonces, la decisión que había tomado de no volver a conceder el plazo de las 48 horas y les advertí que estuvieran preparados porque podrían recibir la orden de ingresar en cualquier momento a partir de entonces. Les mencioné también que iba a hacer una intervención en televisión a las 9 de la noche. Los militares salieron presurosos a montar la sala de situación en el Ministerio de Defensa, desde donde dirigirían las operaciones correspondientes.

El resto de la tarde lo dediqué a afinar los detalles de mi alocución, pues sabía que era la más importante que haría durante mi gobierno y, tal vez, en mi vida. Hubiera querido que fuera un discurso para anunciar el arribo de la tan anhelada paz, o al menos de un acuerdo satisfactorio de cese de fuegos.

Infortunadamente, las acciones demenciales de la guerrilla me obligaban a notificar todo lo contrario.

Juan Carlos ya tenía listo un borrador, que discutimos con Camilo, los ministros y los asesores. Sin embargo, yo quería agregar un párrafo que fuera aún más personal, uno que hablara directamente de mi corazón al corazón de Manuel Marulanda, al hombre que había empeñado su palabra conmigo y la había incumplido. Llamé, entonces, a Juan Carlos, aparte de los demás, y le expliqué el sentimiento que quería transmitir en ese llamado personal. Más tarde bajé a su oficina para revisarlo y perfeccionarlo, y quedó redactado un impactante texto que nunca olvidarán los colombianos ni tampoco —eso espero— el viejo jefe guerrillero que permitió que el proceso se saliera de cauce:

"Manuel Marulanda:

"Yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no sólo a mí, sino a todos los colombianos. Desde el primer momento usted dejó vacía la silla del diálogo cuando yo estuve ahí, custodiado por sus propios hombres, listo para hablar. Decretamos una zona para sostener unas negociaciones, cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas, y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados. Yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de las 48 horas, pero usted, y su grupo, no han hecho otra cosa que burlarse del país.

"Por eso hoy son ustedes los que tendrán que responder ante Colombia y el mundo por su arrogancia y su mentira".

Al final de la tarde, el general Tapias me entregó el informe consolidado de las diferentes fuerzas sobre las actividades ilícitas que desarrollaban las FARC dentro de la Zona. Había aerofotografías que mostraban la construcción y ampliación de pistas de aterrizaje y de carreteras para fines ilícitos, aumento en los cultivos de coca y otras pruebas concluyentes que me reafirmaron aún más en que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que el pueblo colombiano, que estaba tan indignado como yo por la arrogancia y violencia de las FARC, tenía que conocer también estas pruebas y decidí incluirlas en mi alocución. Debía quedar claro ante el país y el mundo que eran ellos quienes habían incumplido su palabra, quienes habían violado los acuerdos y quienes estaban realizando actos terroristas y utilizando la Zona para su preparación.

Además, tomé la determinación de mostrar un breve video con las imágenes de los atentados terroristas que habían cometido las FARC durante los últimos 30 días. Eran tantos y tan graves que el resultado, editado por la Oficina de Prensa, resultaba impresionante. Después de lo acontecido ese mismo día, después de esa serie inconcebible de atentados, después de la comprobación del mal uso que estaban dando a la Zona, a nadie podía quedarle duda de que, si el proceso terminaba, se debía exclusivamente a

la decisión de las mismas FARC, expresada a través de sus hechos de violencia.

Revisé varias veces el discurso, palabra por palabra, consciente de la trascendencia del mismo, hasta que quedó a mi entera satisfacción. Sólo faltaba incorporar el párrafo con el que anunciaría el final del proceso y la hora a partir de la cual la Zona de Distensión se daba por terminada.

Pedí a los funcionarios que me acompañaban que me dejaran solo en la oficina y allí, con la calma necesaria, y también con el dolor que implicaba la determinación que estaba tomando, decidí que mi alocución sería a las 9 de la noche y que la Zona terminaría a las 12 en punto de la medianoche de ese mismo día 20 de febrero. Si bien no iba a volver a concederles las 48 horas para salir, tampoco quería iniciar un ataque a mansalva, por lo que consideré honorable el mínimo plazo de tres horas. Fue sin duda una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. Tenía una mezcla de sentimientos de ira, de desilusión, de frustración, pero a la vez la certeza de estar haciendo lo que tenía que hacer, con responsabilidad frente al futuro del país. Ese día terminaba el más grande esfuerzo jamás intentado en Colombia por alcanzar la paz.

Subí a cambiarme de vestido para la intervención y me senté con Nohra y mis hijos por unos minutos para comentarles la situación. Ellos, mejor que nadie, sabían todo lo que esto significaba para mí. Siempre tuve en mi familia el apoyo y respaldo para avanzar hacia la paz y también lo tuve en ese momento difícil.

Como lo había hecho siempre antes de acudir a la Zona a encontrarme con Manuel Marulanda, afrontando riesgos insospechados, me arrodillé ante la imagen del Niño Jesús que teníamos en nuestra habitación y le pedí que me iluminara en este momento crucial y que permitiera que el país entendiera el sentido de esta decisión. También me encomendé a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial contra el mal, para que protegiera al país en esa noche de incertidumbre.

Cerca de las 9 de la noche, el discurso estaba listo y todo preparado para grabar la intervención. Estábamos muy cerca de la hora límite que nos habíamos fijado y decidí leer el texto en directo, en lugar de pregrabarlo. En la sala de conferencias de Palacio me acompañaban algunos ministros y altos funcionarios que durante la tarde habían llegado. Realicé la alocución con la energía y la sobriedad que el momento ameritaba, pero sobre todo lo hice con el convencimiento de la razón y del corazón de que esa era la decisión adecuada para el país. No quedaban más alternativas. Le aposté con toda mi alma a un proceso para alcanzar la paz, pero las FARC, sordas y ciegas frente al dolor y el clamor de sus compatriotas, prefirieron apostarle a la guerra.

Como dijo el gran humanista español del siglo XVI Juan Luis Vives: *"La primera condición de la paz es la voluntad de lograrla"*. Mi gobierno y la in-

mensa mayoría de los colombianos tuvimos esa voluntad, pero la guerrilla, que alguna vez pareció tenerla, terminó demostrando con su cobarde apelación al terrorismo que esa voluntad está todavía muy lejos de su corazón.

Una frase, al final de mi discurso, dejó, sin embargo, un compás a la esperanza, porque lo único que no podemos perder jamás los colombianos es el horizonte de una paz que merecemos, como cualquier otro pueblo del planeta.

"El libro de la paz sigue abierto y sólo se cerrará el día en que la alcancemos".

De subversivos a terroristas

La noticia del fin del proceso de paz y el levantamiento de la Zona de Distensión, que anuncié al país en mi alocución del 20 de febrero, causó, por supuesto, un inmenso impacto.

Al igual que me ocurría a mí, en el corazón de la mayoría de los colombianos se confundían tres sentimientos: por una parte, la tristeza por ver alejarse la posibilidad de una paz cercana; por otra, la indignación por la forma en que las FARC, con su terrorismo, había determinado el fin del proceso y, finalmente, la tranquilidad de saber que se había hecho lo que tocaba hacer, lo que la guerrilla, en su demencial ofensiva contra el pueblo colombiano, nos había obligado a hacer.

Sin duda, el fin del proceso fue una consecuencia exclusiva de los abusos de las FARC contra el pueblo colombiano y toda la responsabilidad por el mismo recae en su insistencia en la violencia y el terrorismo.

Colombia esa noche se sintió más unida que nunca. Éramos más de 40 millones de colombianos de bien, creyentes en la democracia y la civilidad, preocupados únicamente de trabajar con honestidad y garantizar la felicidad de nuestras familias y nuestra patria, enfrentados a unos cuantos miles de violentos, alienados por ideologías trasnochadas, contaminados por el narcotráfico y ensoberbecidos en su afán de poder.

El proceso de paz los había sacado a la luz; nos había mostrado a todos sus caras, sus palabras y sus pobres argumentaciones. El proceso de paz les había concedido una oportunidad histórica de paz que ellos habían desechado. Con su actitud se habían incorporado al tenebroso círculo del terrorismo y habían perdido cualquier posibilidad de respaldo popular. El proceso de paz nos dejó un país unido contra la guerrilla y contra los paramilitares, cansado de su violencia insensata, y apoyando como un todo monolítico a sus instituciones democráticas y republicanas y a sus Fuerzas Armadas, más profesionales, mejor dotadas y más fuertes que nunca.

Apenas pronuncié la última palabra de mi discurso comenzaron las manifestaciones de respaldo a la decisión a lo largo y ancho del país. Los políticos y personajes de la vida nacional, de todos los partidos y tendencias, con mayor o menor énfasis, apoyaban al Gobierno y declaraban que el fin

del proceso había sido, sin duda, causado por las mismas FARC, que habían dejado al proceso y al Presidente sin espacio político para continuar los esfuerzos de paz. Una de las llamadas de respaldo que recibí fue la del entonces candidato Álvaro Uribe, quien se había caracterizado ante la opinión como un acérrimo crítico del proceso y de la Zona.

Sin duda, las FARC habían colmado la paciencia de todos los colombianos y esa noche se vivió una especie de metamorfosis en la que los mismos que en 1997 habían votado masivamente por una solución política al conflicto, los mismos que en 1998 me habían conferido su confianza para adelantar dicho proceso, pedían ahora mano dura contra una guerrilla que le falló a los sueños de paz de todo un país.

Subí de la sala de conferencias hasta el despacho del secretario general, donde se encontraban Nohra, ministros y altos funcionarios que habían venido a acompañarme en esa noche aciaga. A pesar de la desilusión, se vivía también un ambiente de tranquila expectativa. Teníamos la conciencia tranquila. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, e incluso más, por salvar el proceso, pero la guerrilla lo había vuelto insostenible.

Ahora correspondía liderar el retorno de la Fuerza Pública a la Zona; dar tranquilidad y seguridad a la población de la misma, que temía retaliaciones de los autodefensas o de los mismos guerrilleros, que, por suerte, nunca sucedieron; explicar serenamente la situación a la comunidad internacional y continuar sin descanso nuestra ofensiva militar contra todos los grupos armados ilegales, en el 100% del territorio nacional.

El ala guerrillerista de la guerrilla había primado sobre el ala política, privilegiando la recurrencia a la violencia sobre la opción del diálogo, y ahora nos correspondía a nosotros dar a conocer esta realidad al mundo entero.

El resto de la noche del 20 de febrero nos alcanzó todavía para realizar un informal Consejo de Ministros, en el que analizamos las consecuencias inmediatas del fin del proceso, y luego todos nos fuimos a descansar del que pudo ser, o fue, sin duda, el día más largo de mi mandato.

RETORNO A LA ZONA

A las 12 en punto de la noche los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, dotados de elementos adecuados para la operación nocturna, se adentraron en el espacio aéreo de la Zona y atacaron las construcciones, pistas aéreas y bases estratégicas de las FARC, que tenían ya identificadas por el trabajo de inteligencia que habían venido desarrollando durante meses.

El objetivo era minar su capacidad operativa e impedir que se llevaran cualquier elemento de importancia estratégica para ellas. Por supuesto, la instrucción más importante de todas era la de no afectar en los ataques a ningún miembro de la población civil. Es posible que esta decisión hubiera mermado la efectividad del ataque, pues algunos guerrilleros, en su huida,

se vistieron de civiles o se protegieron usando como escudo a personas de la región, pero no quisimos correr el menor riesgo de dañar a los pobladores de la Zona, colombianos de bien que no hicieron otra cosa que poner de su parte en un gran empeño nacional por la paz.

Después de casi dos días de ofensiva aérea, en la noche del viernes 22 aterrizaron los primeros helicópteros militares en el emblemático Batallón Cazadores, de donde habían salido los uniformados en diciembre de 1998. De esta manera se cumplía un ciclo importante para el país y se demostraba, además, que la Zona no había sido una cesión de soberanía sino un legítimo ejercicio de la misma para procurar la paz. Así como el presidente había obrado con toda su autoridad y sus poderes para decretarla, la podía levantar cuando las circunstancias así lo requirieran, ordenando el retorno de la Fuerza Pública, tal como ocurrió.

Ahora me correspondía, como jefe de Estado, viajar a San Vicente del Caguán para reafirmar la presencia permanente del Estado en lo que había sido la Zona y para dar tranquilidad a la población sobre su futuro, su seguridad y la continuidad de las importantes obras sociales y de infraestructura que estábamos adelantando en los cinco municipios.

Decidí viajar, con los altos mandos militares y de Policía, el sábado 23. Para entonces había recibido una serie de solicitudes de distintos candidatos presidenciales, como Horacio Serpa, Noemí Sanín e Ingrid Betancourt, para ir a San Vicente. Conversé el tema con el ministro de Defensa, Gustavo Bell, quien me dijo que no había todavía condiciones suficientes de seguridad para la visita de los candidatos. De hecho, estábamos apenas iniciando el operativo militar de retoma y era prematuro intentar cualquier clase de actividad proselitista, así se tratase de actos de solidaridad. Todos entendieron las prudentes razones menos Ingrid Betancourt, quien insistió en ir, aduciendo que tenía que visitar la población porque el alcalde, recientemente elegido, pertenecía a su movimiento. Yo fui muy claro en sostener que eso todavía no era posible y así se lo hicieron saber también los organismos de seguridad.

Salimos entonces hacia San Vicente, y aterrizamos en el aeropuerto de Florencia, Caquetá, desde donde seguiríamos en helicóptero hacia la Zona. Cuál no sería mi sorpresa al divisar en el aeropuerto a la candidata Ingrid, quien, a pesar de lo hablado, insistía en hablar conmigo para pedirme que la llevara en el helicóptero. Claramente, eso era algo a lo que no podía acceder. En plena época de campaña electoral, y después de haber negado las solicitudes de ingreso a los otros candidatos, ¿cómo podía yo ahora montar a Ingrid al helicóptero del presidente y llevarla a San Vicente? Como mínimo, me acusarían ante la Procuraduría por favorecimiento o indebida participación en política.

No hablé con ella, porque sabía que no podía ceder a su petición. Le mandé razón con los militares de que no era oportuno que fuera todavía a la

Zona y que podría hacerlo unos días después, cuando se estabilizaran las condiciones de seguridad. Ingrid, sin embargo, insistió en viajar, así fuera por tierra. Los militares, los policías y sus mismos guardaespaldas procuraron hacerla desistir de este intento suicida. Le advirtieron, con fundadas razones que, a pesar de la operación de retoma, se tenía conocimiento de que había presencia guerrillera en la carretera, a pocos kilómetros de Florencia. Ella, lamentablemente, hizo oídos sordos a las advertencias, se obstinó en viajar y se enfrentó voluntariamente a un riesgo que terminó por convertirse en ominosa realidad.

Un día antes de iniciar su viaje, la Policía Nacional y el DAS, por medio del coronel Carlos Julio Hernández, jefe de Protección, le habían informado del "alto riesgo" que corría al viajar por tierra hacia San Vicente del Caguán y le habían prestado todo el apoyo de seguridad solicitado por ella, no sólo con escoltas sino también con un vehículo. Al día siguiente, 23 de febrero, cuando Ingrid arribó a Florencia, el mayor Ómar Rubiano, subcomandante operativo del Caquetá, el capitán Jaime Alberto Herrera y el director seccional del DAS se reunieron con ella para reiterarle la recomendación de no viajar a San Vicente. Sin embargo, Ingrid insistió y decidió dejar a los escoltas asignados en Florencia.

Pero eso no fue todo. En el mismo aeropuerto, el comandante del Batallón Liborio Mejía también le hizo la misma advertencia. Pero Ingrid persistió y partió con sus acompañantes. Ya en el camino, al llegar a uno de los retenes militares, el comandante del mismo le pidió que no continuara pues había combates más adelante. A pesar de esto, Ingrid contestó: *"Yo sigo bajo mi propia responsabilidad y por mis propios medios"*. Nada ni nadie logró hacerla desistir de su propósito.

Cuando escribo estas líneas, Ingrid Betancourt y su jefe de campaña Clara Rojas llevan ya más de tres años secuestradas por las FARC, y se han convertido en un símbolo mundial del desprecio de la guerrilla por los derechos fundamentales de los seres humanos y en una fuerza aglutinante contra el infame delito del secuestro que afecta a tantos colombianos. Todos esperamos que pronto recuperen su libertad y sigan abonando con sus ideas el camino futuro de Colombia.

Tan cierto resultó, por otro lado, que las condiciones de seguridad eran todavía precarias, que el helicóptero Black Hawk, en el que viajamos con los generales Tapias y Mora, y el comisionado, desde Florencia hasta San Vicente, resultó impactado por balas durante el trayecto.

Ese día, en San Vicente, recorrí el pueblo, fui al Concejo y visité otra vez la casa de monseñor Francisco Javier Múnera, el vicario apostólico del municipio. Era sorprendente la efusividad y la alegría de los pobladores que encontré por el camino. Me rodeaban, me daban su mano y me expresaban su afecto, pidiendo siempre que no los dejáramos solos y que continuáramos haciendo presencia. También saludaban con cariño a los soldados

que volvían a pisar el suelo de San Vicente después de más de tres años de ausencia.

Almorzamos en el Batallón Cazadores, donde después, en una breve pero emotiva ceremonia, devolví simbólicamente esta sede histórica del Ejército colombiano a su comandante, quien me hizo, a su vez, entrega simbólica de la boina del Batallón. La emoción de los generales era inocultable.

Ahora sí estaba todo consumado. Quedaba, hacia el futuro, una larga tarea militar para combatir a la guerrilla, palmo a palmo, en los 42.000 kilómetros cuadrados de la Zona, y toda la decisión del Gobierno de continuar trabajando por el desarrollo económico y social de estas poblaciones.

FUERZA DIPLOMÁTICA CONTRA EL TERRORISMO

Después de los viles atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, cuando el mundo se alineó en un solo frente contra el terrorismo, las FARC me pidieron públicamente que definiera si las consideraba como grupos terroristas —o, peor, como narcoterroristas— o si las seguía reconociendo como una organización con carácter político.

Mi respuesta fue clara, y la enuncié en varios discursos: no sería yo quien definiera a las FARC como narcoterroristas o no. Sólo ellas mismas, con sus acciones, podían autodefinirse como tales. Si ejecutaban actos terroristas, serían tratadas por el país y por el mundo como terroristas. Si insistían en su involucramiento con el negocio del narcotráfico, serían tratadas por el país y por el mundo como narcotraficantes. Si, en cambio, optaban por el camino político del diálogo y la democracia, encontrarían abiertas las puertas de la reconciliación.

Finalmente, en esos 30 días que precedieron al rompimiento, las FARC firmaron, por lo menos 117 veces, su acta de autoincriminación y, con cada acto violento contra la población y la infraestructura, se colgaron al cuello el rótulo que más odian, pero el que hoy más se les aplica: el de terroristas.

Colombia, desde el 11 de septiembre, había asumido una posición de liderazgo internacional contra el terrorismo. Desde esa misma fecha terrible, lideró en el seno de la Organización de Estados Americanos la resolución conjunta que condenó los atentados en Estados Unidos. Luego, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acompañó y apoyó todas las resoluciones y medidas adoptadas por dicho organismo contra el terrorismo. Incluso propuso al Grupo de Río, a través de su entonces coordinador, el presidente Ricardo Lagos, de Chile, que se aplicara al terrorismo la misma tesis de la responsabilidad compartida que habíamos defendido con tanto éxito en el tema de la lucha contra las drogas ilícitas.

Ahora que el proceso estaba roto era necesario acudir de nuevo al mundo, explicar las razones de esta decisión y desenmascarar definitivamente a las guerrillas que asolaban el país en su verdadero carácter terrorista.

Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos había incorporado, desde hacía varios meses, a las FARC, el ELN y las AUC en su lista de grupos terroristas que atentan contra los intereses americanos.

La Unión Europea, por su parte, incluyó, a finales de abril de 2002, a las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— en su propio listado de organizaciones terroristas, con todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a la persecución policial, el bloqueo de sus cuentas financieras y la prohibición de realizar cualquier clase de labor propagandista o de otra índole en su suelo.

Esto era muy bueno, pues a nadie le cabía duda sobre el carácter terrorista de los paramilitares, que, so pretexto de perseguir a la guerrilla, masacraban y desplazaban a la población civil, en acciones de una crueldad inconcebible.

Lo que sí me extrañó es que no se hubiera incluido, en esa reciente ampliación de la lista europea de grupos terroristas, a las FARC y el ELN, que utilizaban continuamente la violencia contra el pueblo colombiano y su patrimonio.

No era secreto que estas organizaciones gozaban todavía de algunas simpatías en grupos de izquierda de algunos países europeos, a pesar de la intensa actividad diplomática que habíamos desplegado para revelar su verdadera naturaleza. Repetí una y mil veces en los escenarios europeos a que fui invitado: *"En Colombia no sufrimos una guerra civil, sino la guerra de unos pocos violentos contra la sociedad civil"*.

Comencé, entonces, una intensa ofensiva diplomática para lograr la inclusión de las guerrillas en la lista de terroristas de la Unión Europea.

Hay quienes pretenden encontrar una contradicción porque llevamos a Europa a voceros de las FARC en la gira de comienzos del año 2000 y luego pedimos su condena y caracterización como terroristas en el 2002. Puede parecer así a primera vista, pero cualquier observador objetivo podrá entender que unas eran las condiciones en febrero del 2000, con una Agenda Temática recién acordada, una Mesa de Negociación constituida y operante, y todas las posibilidades de avanzar hacia la paz, y otras muy distintas las de mayo de 2002, cuando la guerrilla se había empeñado en demostrar con violencia e intimidación que no tenía ya ninguna voluntad de concordia. La guerrilla del 2002 era una guerrilla que había traicionado los sueños de paz y la generosidad de todo un pueblo.

A los guerrilleros no se les había llevado a Europa para mejorarles su imagen. Se les llevó, en su condición de enemigos del Estado colombiano, en un experimento sin precedentes en ningún otro proceso de paz, para que abrieran los ojos a los modelos de desarrollo de otros países y a la importancia del Derecho Internacional Humanitario, y para que la comunidad internacional conociera sin sesgos y de primera mano la realidad del conflicto colombiano.

Partiendo de estas consideraciones, escribí el 2 de mayo de 2002 una carta al presidente José María Aznar, teniendo en cuenta que España ocupaba en ese semestre la presidencia rotativa de la Unión Europea, pidiendo que en la próxima revisión de la lista de terroristas se incluyera, cuando menos, a las FARC:

"Poner en duda la calidad de terroristas de las FARC, que día a día violentan y atemorizan con sus actos a la población colombiana; que tienen secuestradas a cientos de personas, incluida una candidata presidencial, un gobernador en ejercicio, un ex gobernador, 2 ex ministros, 5 congresistas y 12 miembros de una Asamblea Departamental; que han colocado carros bomba, bicicletas bomba, incluso cadáveres bomba para atentar contra la población; que dinamitan torres de energía, oleoductos y acueductos; que vuelan puentes fundamentales para la comunicación; que atacan y arrasan con pueblos enteros, sobre todo los más humildes; que han secuestrado un avión en pleno vuelo para llevarse a algunos de sus pasajeros; que extorsionan a empresarios y comerciantes; que siembran minas antipersonal que han causado la muerte o la pérdida de extremidades de niños y campesinos; que protegen y fomentan la actividad del narcotráfico, entre muchas otras viles acciones, constituye un mensaje muy doloroso, no sólo para mi gobierno, sino para todo el pueblo colombiano que sufre cada día las desastrosas consecuencias de sus acciones".

Debo decir que el presidente Aznar fue un aliado incondicional para Colombia en esta justa petición y la defendió con entusiasmo ante sus colegas europeos, la mayoría de los cuales estaban de acuerdo en la inclusión, salvo contadas excepciones, particularmente la de Bélgica, que no la consideraba conveniente.

Valga aquí la ocasión para hacer, en breve paréntesis, un reconocimiento al papel que jugó el Reino de España durante todo mi gobierno como vocero y defensor de los intereses de Colombia ante Europa y el mundo. Esto se debió, en gran parte, al apoyo y la amistad que siempre recibí de sus majestades, el rey Don Juan Carlos y la reina Doña Sofía; del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

En los cuatro años de mi mandato, los gestos de respaldo del rey Juan Carlos fueron incontables. Siempre que vivíamos momentos difíciles recibía una llamada de aliento suya, dejándome saber que contábamos con la simpatía y el respaldo, no sólo de su parte, sino también del pueblo español al que representaba.

Renglón aparte merece el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, quien ha visitado el país en cuatro ocasiones, tres de ellas durante mi gobierno. La cercanía e interés por Colombia de quien algún día ocupará el trono de España preludian buenos horizontes en nuestras relaciones.

En cuanto al presidente Aznar, es bien sabido que nos ha unido una cercana amistad desde hace varios años. Cuando asumí la Presidencia supuse,

desde un comienzo, que el presidente Aznar sería un aliado indeclinable de nuestro país, y así lo fue.

Por encima de algunas divergencias de enfoques sobre la forma de alcanzar la paz, Aznar respetó el proceso colombiano y, más que eso, lo respaldó con decisión. Es más: en su momento, puso a nuestra disposición su país en caso de que quisiéramos realizar allá los diálogos con la guerrilla. Él, con su equipo de relaciones exteriores, conformado por los cancilleres Abel Matutes y luego Josep Piqué, y por el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, siempre estuvo presto a ayudar a Colombia en su búsqueda de apoyos para la paz y el desarrollo.

Por fuera del gobierno español debo resaltar también la oportuna y generosa colaboración que en varias ocasiones recibimos del ex presidente Felipe González, con gran ascendencia sobre sectores de izquierda, y de Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, quien fue un soporte fundamental no sólo frente a Europa sino también con los Estados Unidos, donde es muy escuchado y respetado.

Definitivamente España, por donde se mire, estuvo siempre cercana a mi gobierno y al corazón de todos los colombianos.

"QUIEN DUDE DE QUE ESTO ES TERRORISMO, TENDRÁ QUE ENSEÑARNOS UNA NUEVA DEFINICIÓN"

El 2 de mayo, la misma fecha en que le remití la carta al presidente Aznar, las FARC cometieron el que pudo ser el acto más vil de su carrera criminal en los cuatro años de mi mandato, un hecho cuya triste memoria permanecerá para siempre en el adolorido corazón de Colombia.

Ese infausto día, una columna de las FARC arremetió contra la humilde población chocona de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, en el Chocó. Cerca de 300 habitantes, angustiados por el ataque, buscaron refugio en el templo de Nuestra Señora del Carmen, el único de su pueblo. Sobre todo, allí fueron llevados, para protegerlos, los ancianos, las mujeres y los niños del pueblo. No se imaginaron —¿quién podía imaginarlo?— que los guerrilleros, en su locura, fueran a disparar un cilindro cargado de dinamita contra la iglesia.

El resultado trágico fue de 119 muertos, casi la mitad niños, y más de un centenar de heridos y mutilados. Víctimas inocentes, pobres gentes que nunca entenderán que su desgracia fue causada por unos insensatos que pretenden "reivindicarlos de la pobreza".

Cuando visité la atormentada población, muy pocos días después de la tragedia, me fue imposible contener las lágrimas. A pesar de que la iglesia había quedado con los muros destruidos y, por consiguiente, al aire libre, el olor a carne humana quemada subsistía, como si se hubiera pegado para siempre en sus escombros. Todavía se descubrían entre las ruinas deditos,

pedazos de pies, de los niños que días antes estarían corriendo por las calles polvorientas.

Hay ocasiones en que las palabras se quedan cortas para describir el horror y la desolación. Así me siento al hablar de Bojayá, como me ocurre también cuando recuerdo la tragedia de Machuca, ocasionada en octubre de 1998 por el ELN, o el terremoto del Eje Cafetero, en enero de 1999. Son tres hechos en donde presencié directamente la devastación causada por el hombre o la naturaleza, y acompañé el dolor apabullante de las víctimas. Tres espinas, tres imágenes, que siempre llevaré clavadas en el alma.

Pero la crueldad de ese 2 de mayo pareció no conocer límites. Unas horas antes de la masacre de Bojayá, las FARC también horrorizaron al país con el asesinato de un jovencito cuyo cadáver fue luego envuelto en papel regalo con explosivos y enviado a una guarnición militar.

Con pruebas como éstas, ¿cómo podían los europeos demorar un solo día la calificación de terroristas a este grupo?

El 17 y 18 de mayo, en desarrollo de la II Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, que se celebró en Madrid, insistí con un discurso enérgico en la necesidad de que se produjera esta inclusión.

Refiriéndome a las recientes acciones de las FARC hice el siguiente reclamo a los líderes europeos:

"Quien dude de que esto es terrorismo, tendrá que enseñarnos una nueva definición. Porque, hoy por hoy, no hay peor terrorismo que el que se está utilizando por los grupos armados ilegales para masacrar a la población humilde de Colombia."

"La pasividad frente a estos hechos sólo trae desesperanza para mi país. Nos hace sentir solos. Pero espero equivocarme. No sería entendible que un país que, como Colombia, ha acompañado decididamente al resto de sus amigos en la lucha contra el terrorismo se viera hoy abandonado a su suerte".

Finalmente, el 17 de junio de 2002, el Consejo de la Unión Europea incluyó, junto con las AUC y otras 18 peligrosas organizaciones, a las FARC dentro de su lista de organizaciones catalogadas como terroristas.

Agradecí, por supuesto, esta medida necesaria, que cerraba cada vez más el campo de acción y publicidad internacional a las FARC, y reiteré, solamente, que debería considerarse también al ELN dentro de esa lista, pues sus atentados contra la infraestructura energética y su recurrencia al secuestro, entre otros actos de violencia e intimidación, revestían igual gravedad³⁰.

De esta forma, aquellas guerrillas que alguna vez aparentaron luchar por ideales sociales y políticos, defendiendo al pueblo de la opresión y la pobre-

³⁰ Menos de dos años después, en abril de 2004, y ya bajo el gobierno del presidente Uribe, también este grupo guerrillero quedó incluido en la mencionada lista.

za, acabaron convirtiéndose en piezas de un museo fatídico, compartiendo "honores" con grupos tan sanguinarios como Al Qaeda, ETA o IRA.

Ellos mismos, con sus acciones, se autodefinieron como terroristas y se ganaron ser tratados como tales. También ellos podrían, con hechos, no con palabras o simples declaraciones, corregir su rumbo, detener el insensato desangre nacional y apostar con seriedad y voluntad a una solución política.

A pesar de tanto dolor y tantas desilusiones, no he perdido —y espero no hacerlo nunca— la esperanza en la capacidad de evolución y de cambio del ser humano. En eso comparto las palabras que escribió el siempre lúcido Ernesto Sábato en su hermosa obra *La resistencia*:

"Todavía podemos aspirar a la grandeza. Nos pido ese coraje. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que —únicamente— los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana".

CAPÍTULO XLIII

Y el ELN, ¿qué?

El 7 de agosto de 2001, ante la inconsistencia de los líderes del ELN, y su continuo cambio de posiciones, evidenciado en la última reunión en Venezuela, suspendí el proceso de conversaciones con este grupo guerrillero, si bien nunca cerré la posibilidad de retomarlas, siempre que demostraran seriedad y voluntad de avanzar.

Pasaron más de tres meses de mutuas recriminaciones hasta que, en noviembre de dicho año, después de haber realizado algunos contactos en Venezuela, el ELN aceptó reiniciar los contactos en La Habana.

La Zona de Encuentro que había sido planteada, frente a la cual habíamos tenido que capotear la férrea oposición de los habitantes del sur de Bolívar, donde se constituiría, ya no sería objeto de los diálogos. Ahora debíamos explorar otras fórmulas que condujeran a una salida negociada viable, a pesar de las dificultades internas que no dejaban de evidenciarse en el mando de la organización guerrillera.

“¡SI NO BAJAMOS, NOS DISPARAN!”

Pero no fue fácil llegar a esta reanudación.

Después de la suspensión anunciada el 7 de agosto, desde el Gobierno no habíamos dejado de buscar la forma de avanzar hacia un proceso con el ELN, estudiando opciones distintas a las planteadas hasta entonces.

Analizando el tema con el comisionado para la Paz, Camilo Gómez, llegamos a la conclusión de que debíamos buscar un alto contacto que le transmitiera a Antonio García, segundo comandante y responsable militar del ELN, quien había sido el causante de la última ruptura, nuestro interés en volver a realizar contactos, siempre y cuando tuviéramos la seguridad de que los cinco miembros del Comando Central (Coce) estuviesen de acuerdo y en particular él, como jefe militar.

Decidimos entonces pedirle al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que en varias ocasiones nos había ofrecido sus buenos oficios, que le transmitiera a García y al ELN nuestra posición. Sabíamos que algunos de los

dirigentes del movimiento habían permanecido en Venezuela después de la suspensión del proceso y eso facilitaba aún más las cosas.

Llamé al presidente Chávez, quien se mostró dispuesto a colaborar, y quedamos con él en que Camilo se desplazaría discretamente a Venezuela para explicarle en detalle cuál era nuestra propuesta y qué era lo que esperábamos de parte de García. Decidimos, de mutuo acuerdo, que la reunión se realizara en forma secreta para no generar expectativas ni ruidos que pudieran entorpecer el reinicio de las conversaciones.

La cita se concretaría a mediados del mes de agosto, en la base militar de La Fría, en el fronterizo estado Táchira, Venezuela, donde Chávez esperaría a Camilo y se reunirían el tiempo que fuese necesario para echar a andar la facilitación.

El sábado 18 de agosto, cuando me encontraba reunido en la hacienda de Hatogrande con un grupo de altos funcionarios del Estado, incluyendo a los miembros de la cúpula militar, con ocasión de mi cumpleaños, que había tenido lugar el día anterior, Chávez se comunicó conmigo y me dio las indicaciones para que Camilo viajara al día siguiente al lugar de la reunión. Nadie más en el Gobierno sabía de este contacto.

Camilo ya tenía previsto para el día siguiente un viaje al Caguán con el fin de tratar con Raúl Reyes sobre el doloroso tema de Andrés Felipe, el niño enfermo de cáncer que clamaba por la liberación de su padre, un cabo de la Policía secuestrado por la guerrilla, entre otros asuntos del proceso. Decidimos que desde allí volara directamente a La Fría, de forma que pudiera reunirse con el presidente Chávez hacia el final de la tarde.

Lo que no imaginábamos era que ese viaje causaría uno de los más delicados incidentes con la Fuerza Aérea.

Ese mismo sábado en la noche, el comisionado le informó a la Aeronáutica Civil que viajaría el domingo en una ruta inusual, pues despegaría del Caguán hacia Venezuela, lo cual requería un permiso especial. El permiso fue tramitado y en la mañana siguiente, muy temprano, el comisionado salió a su reunión con Reyes. Después del mediodía, emprendió vuelo hacia Venezuela sin mayores novedades.

Todo iba bien hasta cuando el avión sobrevoló una zona cercana a Bogotá. El piloto le informó, entonces, a Camilo que acababa de recibir una orden de la Fuerza Aérea para aterrizar en una pista militar en la base aérea de Apiay, en Villavicencio. El comisionado le pidió a su piloto que verificara la orden pues este procedimiento resultaba bastante inusual. Los controladores aéreos volvieron a repetir la orden.

De inmediato, y ante la dificultad que esto significaba, el comisionado contactó directamente, por medio del sistema de comunicación del avión, a la Fuerza Aérea y pidió que le informaran cuál era el motivo de la orden. Los militares simplemente reiteraron, sin mayores explicaciones, que se trataba de una orden impartida por el Comando General de la Fuerza Aérea. Camilo

sabía que había cumplido con todos los procedimientos correspondientes, así que les notificó a los controladores de la base de la Fuerza Aérea que no acataría la orden y pidió que dejaran registrado que estaba cumpliendo una misión oficial encomendada por el presidente de la República.

Unos minutos más tarde se recibió una comunicación de la Fuerza Aérea, insistiendo en que la aeronave debía descender de la altura de vuelo, que en ese momento era de 33.000 pies, y aterrizar en la base de Apiay. De lo contrario, enviarían dos aviones de combate para obligarlos a aterrizar. De nuevo, el comisionado respondió que en ese avión viajaba él solo, con los dos pilotos al mando del mismo, en una misión oficial, y que la Fuerza Aérea no podía ordenarle descender y mucho menos aterrizar en una base militar.

A partir de ese momento, los militares iniciaron las maniobras correspondientes para la interceptación del avión del comisionado y ordenaron el despegue de dos aeronaves de combate. El comisionado consultó con el piloto y concluyeron que los aviones que habían enviado —Cessnas AT-37— no podían subir al techo de 33.000 pies en el que se encontraban, por lo que tomó la decisión de continuar con el viaje a esa altura.

Simultáneamente, se comunicó con los controladores aéreos de la Aeronáutica Civil y les pidió que dejaran constancia de la determinación que él tomaba y que grabaran todas las conversaciones que se estaban produciendo entre su aeronave, la Fuerza Aérea y los controladores civiles. También les pidió a sus interlocutores de la Fuerza Aérea que le informaran de la situación a su comandante, el general Héctor Fabio Velasco, para tener certeza de que la orden de interceptar su avión venía del más alto nivel. En la Fuerza Aérea le respondieron que la orden provenía del mismo general Velasco y que, si no iniciaba el descenso, se ordenaría el despegue de otros dos aviones, esta vez Mirage, para proceder a la interceptación de su aeronave.

La situación era crítica y, tanto los pilotos como el comisionado, temían lo peor. Con los nervios a flor de piel, Camilo mantuvo su posición de no modificar el rumbo que llevaba y así lo informó.

—¡Si no bajamos nos van a disparar! —protestó el piloto, alarmado—. Acuérdesse que primero derriban el avión y después explican. ¡Bajemos!

El comisionado era consciente del enorme riesgo que estaban corriendo, pero desestimó las protestas del piloto y le pidió que continuara. Estaba cumpliendo una misión conferida por el presidente de la República y tenía a un mandatario de un país extranjero esperándolo al otro lado de la frontera. Detenerse en la base de Apiay no tenía ninguna justificación, más aún cuando no estaba infringiendo ninguna norma y había avisado de su vuelo a la Aeronáutica Civil.

Decidió, entonces, comunicarse conmigo, utilizando su teléfono satelital. Era domingo y yo me había quedado en la hacienda presidencial, esperando las noticias de sus gestiones en el Caguán y de la reunión con Chávez.

Después de intentar por algunos minutos la comunicación, Camilo logró hablar con Palacio y pidió que me transfirieran la llamada a Hatogrande. Cuando pasé al teléfono, Camilo me informó, angustiado, que estaba en medio de una situación muy delicada y que su aeronave estaba a punto de ser derribada por aviones de la Fuerza Aérea.

Al principio no podía creer que una situación así estuviera sucediendo. Le pregunté de nuevo qué era lo que pasaba y desde dónde me estaba llamando, pues, según mis cálculos, debería estar volando y sabía que desde el avión no podía comunicarse telefónicamente conmigo. Camilo me insistió en que estaba en el avión enfrentando una situación muy crítica, con tan mala suerte que la comunicación se cortó. Quedé muy preocupado y pedí que intentaran volver a comunicarse con el teléfono satelital del comisionado, lo cual resultó imposible.

Entre tanto, el centro de control de la Fuerza Aérea le pidió a la Aeronáutica Civil que ordenara el despeje del espacio aéreo de la zona en donde se encontraba el avión del comisionado y también el de Bogotá, pues iniciarían maniobras para interceptarlo, utilizando dos aviones Mirage que ya estaban despegando desde la base de Palanquero. También le informaron al comisionado que el general Velasco había ratificado la orden de interceptar su avión si no aceptaba las órdenes de descender y aterrizar en Apiay. Camilo, decidido a llevar su misión hasta el final, repuso que él no aceptaba órdenes militares y que, por lo tanto, continuaría con su rumbo.

La situación era extremadamente tensa. Los militares, según parece, imaginaban que en el avión del comisionado viajaban también guerrilleros hacia Venezuela e, incluso, en el centro de control aéreo alcanzaron a decir que ya los tenían detectados. Camilo, por su parte, tenía la conciencia tranquila pues no llevaba a bordo a ningún guerrillero y sabía que estaba en una misión oficial ordenada desde la más alta instancia, con el máximo nivel de secreto.

Después de interminables minutos, Camilo logró restablecer la señal satelital y volvió a comunicarse conmigo a través del conmutador de Palacio:

—Presidente —me dijo—, esto está poniéndose peor. La Fuerza Aérea pretende que aterrice en Apiay y yo no acepto esa orden. Usted sabe para dónde voy y a qué voy. Ya tengo dos aviones de combate persiguiéndome y acaban de ordenar el despegue de dos Mirages más. ¡Por favor, hable urgentemente con Velasco o van a tumbar mi avión!

De inmediato me comuniqué con el comandante de la Fuerza Aérea y le ordené, en tono muy enérgico, que me explicara la grave situación y que suspendiera totalmente esa locura de operación. Estaba muy furioso, y con razón.

—¿Qué está pasando aquí, general? ¿A qué están jugando ustedes? ¿Cómo así que hay aviones de combate de la Fuerza Aérea persiguiendo el avión del alto comisionado para la Paz y amenazando con dispararle?

El general Velasco intentó explicar:

—No, presidente. Sólo se ordenó interceptar la aeronave, pero nunca disparar. Lo que pasa es que un avión no puede salir directamente de la Zona de Distensión a Venezuela sino tan sólo desde aeropuertos autorizados para esa clase de operación. No estábamos enterados de este vuelo y no sabemos por qué vuela del Caguán hacia Venezuela.

—Mire, general —le respondí airado—, ¿ese no es problema suyo! ¡Le exijo que dé la orden inmediata de detener ese operativo! ¡Si algo le pasa al comisionado usted será el único responsable!

Velasco ordenó de inmediato suspender el operativo y los cuatro aviones retornaron a sus bases. Sólo faltaron dos minutos para que los Mirages alcanzaran al comisionado. La situación había sido muy crítica y Camilo se había salvado gracias al teléfono satelital que siempre llevaba.

Pasado el incidente, Camilo continuó su viaje hacia La Fría, en donde se reunió finalmente con el presidente Chávez para acordar los términos en los que se realizarían los buenos oficios del presidente y los resultados que esperábamos obtener de su intermediación.

Por más de cuatro horas estuvieron a solas, conversando sobre lo que sucedía en Colombia. Chávez invitó a cenar a Camilo y juntos analizaron las opciones para contactar a Antonio García, así como las posibles reacciones que se podrían presentar. Cerca de la medianoche terminaron la reunión, con el compromiso del presidente venezolano de ayudarnos a reactivar el proceso con el ELN sobre unas mejores condiciones, y el comisionado regresó a Bogotá, a donde llegó casi a la madrugada.

Chávez no se enteró del incidente del avión sino semanas más tarde cuando, por una filtración de la Fuerza Aérea, los medios de comunicación publicaron el episodio.

Gracias a este contacto y a las gestiones discretas y efectivas que realizó el Gobierno venezolano, así como a la intervención siempre activa de la Comisión Facilitadora Civil y del Grupo de Países Amigos³¹, el ELN y el Gobierno reiniciaron los contactos en noviembre, en la capital de Cuba.

UN ACUERDO POR COLOMBIA

Por esos días, mientras el proceso con las FARC estaba congelado por el absurdo reclamo de este grupo de que no contaba con las garantías necesarias en la Zona, el del ELN renacía. Ésta fue una extraña constante durante todo el Gobierno: si el proceso de las FARC iba mal, el del ELN se reactivaba, y viceversa.

El 20 de noviembre, en La Habana, el Gobierno y el ELN expidieron un comunicado conjunto, dando por reiniciados los contactos.

³¹ Constituido desde junio de 2000 por Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza.

Después de una serie de reuniones, el 24 de noviembre dichos contactos fructificaron en una reanudación formal del proceso de diálogo a través de lo que se denominó una "agenda de transición" hasta la terminación de mi gobierno. En un documento que se conoció como el "Acuerdo por Colombia" —firmado por el alto comisionado, Camilo Gómez, y nuestro embajador en Cuba y asesor del proceso con el ELN, Julio Londoño, por parte del Gobierno, y por Ramiro Vargas, Óscar Santos y Milton Hernández, por parte de la guerrilla, con la presencia como testigos de los embajadores del Grupo de Países Amigos— se determinó realizar rondas de trabajo para discutir los temas del cese de fuegos y hostilidades; hacer foros temáticos en el exterior y convocar una Cumbre por la Paz con participación de delegados de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana para evaluar el proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional.

Ya en diciembre, con este primer acuerdo firmado, Camilo tuvo que repartir su tiempo entre el Caguán y La Habana. Después de más de ocho reuniones con los delegados del ELN, y gracias a la activa facilitación del Gobierno cubano, se estableció un cronograma de actividades en el que se definió la metodología que se utilizaría en adelante para las discusiones y los temas que se tratarían en cada una de las rondas de trabajo.

Dicho cronograma, denominado "Declaración de La Habana" y firmado el 15 de diciembre, dejó programados cinco foros temáticos en el exterior entre febrero y junio de 2002, un encuentro con la Comisión de los Notables que había obrado en el proceso con las FARC, rondas de trabajo entre el Gobierno y la guerrilla y la llamada Cumbre por la Paz, que se citó para los días 30 y 31 de enero en La Habana.

Como resultado de este buen ambiente, el ELN decretó unilateralmente una tregua en la confrontación militar entre el 18 de diciembre de 2001 y el 6 de enero de 2002, *"por respeto a las celebraciones navideñas"*.

Así las cosas, con un cronograma de actividades definido, con una tregua de casi tres semanas y con los temas de la disminución del conflicto y la discusión del cese de fuegos sobre la mesa, el panorama de las negociaciones con este grupo volvía a ser positivo.

"¡LO DEMÁS ES MIERDA!"

El año 2002 comenzaba, entonces, con buenas posibilidades en el proceso de negociación con el ELN y con un futuro más incierto en el caso de las FARC.

En la madrugada del 11 de enero, cuando el proceso con las FARC vivía uno de sus momentos más difíciles y el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas, James Lemoyne, comenzaba su labor facilitadora de 48 horas para intentar revivirlo, el comisionado viajó a La Habana para cumplir una cita que de tiempo atrás había sido acordada con los voceros del ELN.

Allí se reunieron con los representantes del Grupo de Países Amigos y se estudió el documento que la Comisión de Notables había presentado en el proceso de las FARC, bajo el supuesto de que podría ser una excelente base para iniciar las discusiones sobre cese de fuegos y hostilidades con el ELN.

Vladimiro Naranjo y Alberto Pinzón, que fueron miembros de dicha Comisión, viajaron a La Habana para explicar más a fondo sus recomendaciones al ELN. De esta manera, pretendíamos iniciar el camino hacia lo que denominamos la "confluencia de los procesos", que no era otra cosa que la forma de llegar de una manera simultánea, pero a través de negociaciones diferentes, al cese de fuegos y hostilidades con los dos grupos guerrilleros.

El siguiente paso sería la realización de la Cumbre por la Paz en La Habana, la cual tuvo lugar entre el 29 y el 31 de enero, con la presencia de más de 80 invitados nacionales e internacionales. A esta reunión asistieron los dos jefes guerrilleros que se encontraban presos en Itagüí, Francisco Galán y Felipe Torres, quienes salieron nuevamente de la cárcel, siempre acompañados por guardianes del Inpec.

El comisionado, junto con el equipo encargado de las discusiones con este grupo guerrillero, preparó una estrategia de acercamiento con todos los asistentes a la reunión con el fin de que se exigieran conclusiones concretas del encuentro, de forma que éste no quedara solamente en una estrategia propagandista y dilatante de la guerrilla. Los delegados invitados representaban a una amplia gama de sectores. Estaban presentes varias ONG interesadas en el tema de la paz, algunos alcaldes y gobernadores, empresarios y dirigentes gremiales, sindicalistas, familiares de secuestrados, la Iglesia, miembros de la Comisión Facilitadora Civil que desde tiempo atrás venía impulsando el proceso, los embajadores del Grupo de Países Amigos y representantes de las Naciones Unidas.

Si bien, para ese momento, las acciones del ELN en contra de la Fuerza Pública eran mínimas y los ataques a la estructura eléctrica y petrolera del país habían disminuido notoriamente, el problema del secuestro por parte de esta agrupación seguía siendo importante. De ahí que pensáramos que resultaba imperioso, al igual que con las FARC, alcanzar acuerdos que significaran una disminución real de la intensidad del conflicto.

También debíamos tener en cuenta las dificultades internas por las que estaba atravesando el ELN. En las discusiones que se habían realizado el año anterior en Caracas y en Isla Margarita había sido evidente que en su interior existían fracturas en el mando. Sabíamos, además, que la desertión de hombres de este movimiento hacia los grupos paramilitares y hacia las FARC estaba aumentando, y que pasaba por algunas dificultades económicas, pues, a diferencia de las FARC, su involucramiento con el narcotráfico era mínimo y derivaba la mayor parte de sus ingresos de la criminal industria del secuestro. Esta eventual "debilidad" del ELN no significaba, sin embargo, que pudiéramos tener una negociación fácil, pues

era claro que, si no se daba una salida "digna" a este grupo, no se llegaría a ningún acuerdo.

También teníamos que considerar que siempre existía la posibilidad de que el ELN, o parte de él, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio con el Gobierno, se uniera a las FARC, algo que, por supuesto, debíamos evitar a toda costa.

El presidente Castro asistió a la instalación de la Cumbre y estuvo conversando con los propios guerrilleros, con los empresarios y con otros invitados colombianos. Él, que siempre nos había ayudado en este empeño de paz, estaba también dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para que la reunión produjera hechos concretos de alivio a la sociedad civil.

La Cumbre por la Paz, después de muchas y muy largas ponencias y discusiones, concluyó con una declaración en la cual los convocantes y participantes determinaron que resultaba *"indispensable celebrar acuerdos humanitarios y sociales parciales de ejecución inmediata, de carácter bilateral, verificables por organismos nacionales e internacionales"*.

Los participantes le pedían a las partes negociadoras que entraran de inmediato en esos temas pues esa era la única forma para lograr los avances que la misma sociedad estaba esperando. Ésta era una forma de decirle al grupo guerrillero que la posición de buscar la disminución del conflicto y la tregua no era un simple capricho del Gobierno sino que se trataba de un reclamo general, de la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

Al finalizar la Cumbre, en la noche del 31 de enero, el presidente Castro se reunió con Camilo Gómez y con Julio Londoño, quienes le hicieron un análisis de lo que sucedía en Colombia y le insistieron en la conveniencia de sus buenos oficios para que nos ayudara a lograr un acuerdo sobre el cese de fuegos y hostilidades. Después de escuchar atentamente a mis delegados, y cerca de la medianoche, Castro mandó llamar a los líderes guerrilleros Francisco Galán, Felipe Torres y Ramiro Vargas para sostener una conversación con ambas partes. Entonces Fidel fue contundente. Sin rodeos, y sin dar lugar a más discusiones, les dijo a los miembros del ELN que era indispensable acordar un cese fuegos de inmediato.

—Aquí lo que tienen que hacer ustedes es un acuerdo con el Gobierno para que a la mayor brevedad posible se llegue a la tregua. ¡Lo demás es mierda!

Los guerrilleros lo escucharon asombrados. El mismo Fidel Castro, quien años atrás había apoyado las revoluciones en América Latina y a quien tanto habían admirado y emulado, les estaba diciendo ahora, abiertamente, que era el momento de parar la lucha armada.

Después de esto, Castro les pidió a Camilo y a Julio que lo dejaran conversar a solas con los guerrilleros pero les advirtió que estuvieran pendientes para continuar la reunión un poco más tarde y cenar. Ya a puerta cerrada, según se enteraron luego mis delegados, Fidel les reiteró enfáticamente a los

guerrilleros que la única salida en ese momento era alcanzar el acuerdo de cese de fuegos y que esperaba que lo hicieran en las reuniones que se darían en los próximos días. La reunión entre Castro y los voceros del ELN duró un poco más de dos horas, después de las cuales se volvieron a unir al grupo los representantes del Gobierno colombiano y algunos altos funcionarios cubanos.

Como anécdota curiosa de esa noche, Camilo estaba cumpliendo años y, naturalmente, no había tenido tiempo para celebrarlo. A eso de las 5 de la mañana, Fidel hizo una pausa en la conversación, llamó a su cocinero y le pidió que le trajera el "encargo". Nadie sabía de qué se trataba. A los pocos segundos, y ante la sorpresa de todos, entraron dos meseros cargando una torta con velas encendidas que el propio Fidel había pedido para celebrar el cumpleaños del alto comisionado. Todos, incluido Castro, cantaron el *Happy birthday* y le expresaron sus mejores deseos a Camilo.

La "cena" se prolongó hasta cerca de las 8 de la mañana. Cuando finalmente terminó, después de doce horas de reunión, los guerrilleros y los delegados del Gobierno salieron de la sede del Palacio de Gobierno cubano con la firme disposición de iniciar ese mismo día las conversaciones que condujeran a un cese de fuegos y hostilidades. Una vez más el presidente Castro le apostaba una carta muy fuerte a la paz de Colombia.

Esa tarde, y los días siguientes, los delegados del Gobierno y del ELN diseñaron un esquema de trabajo para discutir el tema de la tregua, el cual estaría enmarcado en lo que denominaron un "Acuerdo para la Construcción Progresiva de la Paz". El optimismo frente a las posibilidades de un acuerdo de este tipo era evidente.

CONVERSACIÓN CON GABINO

Con ese nuevo propósito, comenzamos en el Gobierno a preparar los términos de lo que sería un acuerdo con el ELN a través del cual se llegara a un cese de fuegos y hostilidades con dicha agrupación y, al mismo tiempo, se les diera la posibilidad para que, gradualmente, fueran iniciando acciones de tipo político. Se trataba de diseñar una fórmula progresiva que permitiera el paso de la confrontación armada a la confrontación democrática.

En esta tarea trabajaron el comisionado; el consejero económico de la Presidencia, Juan Ricardo Ortega; el embajador Julio Londoño; Gustavo Villegas, de la oficina del comisionado, y varios asesores más, junto con un equipo del Ministerio de Defensa compuesto por tres generales y tres coroneles, que estudió y presentó alternativas concretas para la operatividad del cese de fuegos.

Mientras avanzábamos en el diseño del acuerdo y en las conversaciones con el ELN al respecto, ocurrió, el 20 de febrero, el rompimiento del proceso con las FARC.

Como era natural, nos preocupaba que la terminación del proceso con las FARC afectara el proceso con el ELN, por lo que, tan pronto realicé la alocución en que anuncié la dura decisión a los colombianos, le pedí al comisionado que se comunicara con los jefes de este grupo para reiterarles nuestra voluntad de diálogo.

Fue así como esa misma noche, apenas una hora después de mi discurso, Camilo llamó a Francisco Galán, en la cárcel de Itagüí, y le aclaró que la terminación del proceso con las FARC no tenía por qué afectar las conversaciones con el ELN. Galán le manifestó su preocupación por lo sucedido, pero también fue claro en confirmar la disposición de su grupo de seguir avanzando en la discusión del acuerdo. Coincidieron, además, Camilo y Galán, en la conveniencia de que se produjera una comunicación directa entre el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, *Gabino*, y el presidente de la República, para confirmar, al más alto nivel, la continuación del proceso.

Al día siguiente, 21 de febrero, hacia el final de la mañana, el comisionado logró comunicarse con Gabino y ambos entablamos la que habría de ser nuestra primera y única conversación directa.

Tratamos, por supuesto, sobre el reciente rompimiento con las FARC, respecto al cual le comenté mis sentimientos encontrados de tristeza e indignación, aunque fui enfático en que esto no tenía por qué alterar el camino ya recorrido con el ELN. En dicho sentido, reiteramos, Gabino y yo, nuestra disposición para seguir avanzando en el acuerdo que se venía trabajando y concordamos en la conveniencia de que las conversaciones se siguieran surtiendo en La Habana.

Fue un diálogo franco y cordial, breve pero importante, que culminó con el compromiso mutuo de seguir recorriendo el camino de la paz. Siempre he pensado, y entonces lo confirmé una vez más, que el contacto personal y directo es un mecanismo ideal para dinamizar y dar impulso a los procesos.

¡US\$40 MILLONES EN EFECTIVO!

Durante los meses de febrero, marzo y abril se celebraron numerosas reuniones en La Habana, entre delegados del Gobierno y del ELN, para discutir el cese de fuegos.

Las dos primeras rondas, realizadas en la primera mitad de febrero, tuvieron como interlocutores, por parte del ELN, a Francisco Galán y Felipe Torres, junto con Ramiro Vargas, integrante del Comando Central del ELN —Coce—. Sin embargo, no podíamos tener a Galán y Torres por largo tiempo fuera de su lugar de reclusión en Itagüí, y determinamos, además, que era necesario que a las conversaciones se sumaran más miembros del Coce, de forma que las decisiones tomadas en La Habana estuvieran avaladas por los máximos dirigentes de la guerrilla.

Fue así como regresaron Galán y Torres y, en marzo, viajaron a Cuba Pablo Beltrán y Óscar Santos, miembros del Coce, quienes, junto con Ramiro Vargas y Milton Hernández, conformaron, en adelante, el grupo negociador de la guerrilla. Con Beltrán, Santos y Vargas ya estaban presentes tres de los cinco integrantes del Coce, lo que daba seriedad y credibilidad a los acuerdos que se lograran.

El equipo del Gobierno, compuesto por el comisionado, el embajador Londoño, Gustavo Villegas y Juan Ricardo Ortega llegó a La Habana con un completo borrador, el cual había sido discutido y acordado con los altos oficiales que participaron en las discusiones del mismo.

El borrador de acuerdo implicaba una doble gradualidad, tanto en la dejación de las acciones violentas por parte del ELN como en el incremento consecuente de su participación política.

Según el documento que se llevó para la discusión, el ELN debía comprometerse a suspender toda clase de acción militar o violenta, como el secuestro, la extorsión, los atentados contra la infraestructura energética y vial, los ataques a la población, el uso de minas antipersonal, el bloqueo de vías, el reclutamiento y los ataques contra la Fuerza Pública. Adicionalmente, se obligaba a liberar a todos los secuestrados en su poder.

Esto implicaba, por supuesto, el diseño de mecanismos de verificación del cese de fuegos y hostilidades, el cual se cumpliría bajo un esquema de separación de fuerzas que posibilitara la verificación del cese de fuegos y la continuidad de la acción de las Fuerzas Armadas contra los demás grupos armados ilegales.

En la medida en que esto se diera, el ELN podría comenzar a desarrollar una especie de actividad política, con un grupo inicial de 20 voceros que podrían realizar desplazamientos para eventos y reuniones de este carácter. Igualmente, se facilitaría su interlocución con los distintos sectores de la sociedad, como los gremios, la Iglesia y las organizaciones sociales, y su participación en distintos foros de discusión, tal como se había pactado en el Acuerdo por Colombia y en la Declaración de La Habana.

En suma, habría una suspensión total de la actividad militar del ELN y un inicio gradual de su actividad política, como primer paso hacia una paz definitiva.

Entre marzo y finales de abril se llevaron a cabo muchas reuniones, con horas de discusiones, en las que se llegó a acuerdos sobre casi todos los temas planteados, salvo dos: la ubicación de los guerrilleros durante el cese de fuegos, o separación de fuerzas, y la financiación del grupo durante este período.

El primer punto era de una importancia cardinal, pues si no se pactaba un esquema de ubicación de los hombres del ELN, se hacía simplemente imposible la verificación del cese de fuegos. En este tema los negociadores del Gobierno se basaron en el documento de análisis producido por los

militares, pero resultó imposible llegar a una aproximación sensata con la guerrilla.

El segundo punto, de la financiación, resultaba particularmente difícil, aunque no era nuevo en absoluto. Ya desde 1998, antes de comenzar mi gobierno, en las dos reuniones que tuvo el ELN con la sociedad civil en Alemania, se había planteado la necesidad de generar un esquema de sostenimiento de sus militantes en tanto se llegaba a la paz, habida cuenta que la mayor parte de sus ingresos vienen de las actividades del secuestro y la extorsión, las cuales, por supuesto, debían suspender en una eventual tregua.

El Gobierno, partiendo de un estimado, incluso exagerado, de miembros del ELN, entre 3.500 y 4.000, realizó unos cálculos basados en las pérdidas que significaban la guerra y los atentados para la economía nacional y el medio ambiente, las cuales dejarían de tenerse si se llegaba a un cese de fuegos, así como en los gastos básicos de manutención, salud e, incluso, capacitación de los guerrilleros, y concluyó que la financiación del grupo guerrillero durante la tregua podría alcanzar una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Las pretensiones de la guerrilla estaban, sin embargo, a distancia sideral. Después de varias discusiones, en las que el ELN no daba a conocer el monto exacto de su estimativo de financiación, Pablo Beltrán le pidió al comisionado que se reunieran privadamente para discutir con calma el tema. Camilo le propuso ir a almorzar a un pequeño restaurante, discreto, cercano al lugar donde se desarrollaban las negociaciones en La Habana, y allí llegaron, encontrando apenas a unos pocos comensales que ni los determinaron.

No fue poca la sorpresa de los dos sigilosos comensales cuando, en medio de su conversación, escucharon el alboroto de muchas voces y el restaurante se llenó hasta el tope con cerca de 40 personas que entraron a almorzar. Se trataba nada menos que de un alto dirigente de la cadena internacional de noticias CNN, quien venía acompañado por sus periodistas, muchos de los cuales eran corresponsales en países de América Latina y estaban al tanto de las conversaciones del Gobierno con el ELN en la isla. Por supuesto, el secreto de la reunión se fue al traste y al comisionado y a Beltrán no les quedó más remedio que continuar su diálogo bajo la siempre curiosa mirada de la prensa.

Ya entrando en detalles, Pablo Beltrán destapó al fin la cifra de sus aspiraciones para la financiación de sus hombres durante la tregua: ¡40 millones de dólares! Camilo casi se cae de su asiento. Mientras el Gobierno pensaba en cubrir necesidades como alimentación y salud, ellos pretendían que se les financiara hasta las propagandas y el proselitismo político. Obviamente, era algo impensable.

Es más: en posteriores discusiones, los voceros del ELN llegaron al absurdo de pedir que dicha cantidad se les entregara en dinero en efectivo. Se les

puso de presente lo irrazonable de su petición y la dificultad que tendría, como simple ejercicio teórico, el manejo y transporte de semejante cantidad de billetes. *"No importa"*, respondió Óscar Santos. *"El Gobierno nos la entrega y nosotros nos encargamos"*. Evidentemente, el ELN vivía, como las FARC, absolutamente alejado de la realidad, y propuestas como ésta hacían inviable cualquier acuerdo.

En estas circunstancias, a mediados de abril, a pesar de que se habían logrado importantes acuerdos en casi todos los temas, la distancia de las posiciones en cuanto a la ubicación de los guerrilleros y la verificación de la tregua, por una parte, y la financiación, por la otra, hicieron imposible seguir avanzando y se decidió terminar la ronda de negociaciones.

Por esos días se había planteado también, por parte del ELN, un interés por reunirse con representantes del Gobierno de Estados Unidos, para discutir los pasos que tendrían que dar para salir de la lista de terroristas elaborada por el Departamento de Estado. Siempre habíamos pensado que una participación más activa de Estados Unidos en los procesos de paz era conveniente, participación que se había frustrado con las FARC por el asesinato de los indigenistas norteamericanos, así que el comisionado procedió a informar de este interés al Gobierno norteamericano a través de la embajada estadounidense en Bogotá así como por medio de nuestro embajador en Washington.

La reunión parecía tener alguna viabilidad, ya que el ELN, a diferencia de las FARC, no había atentado, por lo menos recientemente, contra ciudadanos estadounidenses y tenía una participación sustancialmente menor en el negocio del narcotráfico. Fue así como el Gobierno de dicho país mostró cierta disposición para realizarla, siempre que fuera muy discreta y se limitara a explicarle al grupo guerrillero cuáles serían las condiciones indispensables para salir de su lista de terroristas. Aclaró, eso sí, que el enviado de Estados Unidos sería una persona que no estuviera vinculada al Departamento de Estado.

Con este visto bueno preliminar comenzó a planearse la reunión, con el conocimiento del Gobierno cubano y del Gobierno mexicano, que accedió a que la misma se diera en su suelo. No obstante, aunque las posibilidades de realizarla eran reales, dado el momento de dificultad por el que pasaban las conversaciones, el comisionado y yo consideramos que dicha reunión no era todavía pertinente, y la misma nunca llegó a llevarse a cabo.

UNA NUEVA FRUSTRACIÓN

De regreso a Colombia, la tercera semana de abril, el comisionado y Gustavo Villegas se reunieron en la Serranía de San Lucas con Pablo Beltrán y Óscar Santos y llegaron a la conclusión de que no había posibilidad de llegar al Acuerdo para la Construcción Progresiva de la Paz, por lo que no

se seguiría avanzando en las discusiones de un cese de fuegos y hostilidades total.

Sin embargo, en lugar de producir una ruptura total, determinaron discutir, en los siguientes días, un acuerdo parcial de disminución de la intensidad de la confrontación, que sirviera, además, como transición para que el nuevo gobierno retomara las conversaciones en un nivel más propicio y menos hostil.

Como dato curioso, estando en estas difíciles conversaciones, los negociadores del Gobierno y del ELN almorzaron con unos pescados preparados por la guerrilla, seguramente sacados de algún río de la Serranía. El comisionado encontró un gusano en el interior de su pescado, pero lo sacó y lo botó discretamente y terminó su plato sin mencionar el incidente.

Al día siguiente, ya en Bogotá, Camilo comenzó a sentirse muy mal y, recordando el gusano, empezó a especular sobre el estado del pescado que había comido. Temiendo una intoxicación, acudió al médico y éste, al realizarle los exámenes clínicos, determinó que su problema no era por algo que hubiera comido, sino que estaba desarrollando una meningitis bacteriana de difícil pronóstico, la cual comenzaron a tratar de inmediato. Un tiempo más de demora en la consulta y el resultado hubiera sido fatal. De alguna manera, el gusano le había salvado la vida.

Finalmente, el comisionado estuvo hospitalizado durante más de 20 días, en estado crítico, hasta que la meningitis estuvo controlada. Mientras tanto, el embajador Londoño siguió trabajando en Cuba con Ramiro Vargas del ELN para lograr el acuerdo parcial de disminución de la intensidad del conflicto.

Una semana antes de las elecciones presidenciales, programadas para el 26 de mayo de 2002, se llegó a un texto de consenso que incluía la suspensión, por parte del ELN, de sus atentados contra la infraestructura vial, eléctrica y petrolera; el cese de sus hostigamientos e interferencias sobre la vía Bogotá-Medellín y la continuación de los foros internacionales y con la sociedad civil que se habían programado desde finales del año anterior. Además, el ELN aceptaba discutir con la sociedad y el Gobierno el tema del secuestro.

Se trataba, sin duda, de un acuerdo que, si bien no representaba un cese de fuegos y hostilidades total, era un avance importante hacia la disminución del conflicto y la ambientación del proceso de paz con esta organización.

El borrador del acuerdo, elaborado por el embajador Londoño y Ramiro Vargas, fue conocido y avalado por el Gobierno cubano, y el mismo Fidel Castro recomendó su firma a la guerrilla. Quedó pendiente, únicamente, de una última revisión por parte mía y del comisionado, que lo aprobamos, y por parte de los demás integrantes del Coce. El objetivo era firmarlo apenas se cumplieran los comicios presidenciales del 26 de mayo, antes de terminar dicho mes.

El viernes 24 de mayo contábamos ya con la manifestación verbal del ELN de su disposición a firmar el acuerdo. Sin embargo, Ramiro Vargas, desde La Habana, se comunicó con Camilo y le dijo que estaba todavía pendiente de recibir un e-mail con una pequeña sugerencia del Coce y la autorización para la firma. Llegó el sábado y Vargas argumentó que el e-mail todavía no le había entrado a su computador y que, posiblemente, había algún problema con los sistemas. Por supuesto, entendimos que se trataba de otra maniobra de dilación del ELN mientras se realizaban las elecciones.

Con estas disculpas, llegamos al domingo 26 de mayo sin que el ELN terminara de comprometerse con la firma del acuerdo, y ese día los colombianos eligieron en primera vuelta, como nuevo presidente de la República, a Álvaro Uribe Vélez, el candidato que más crítico había sido frente a los procesos de paz, cuyo discurso de mano dura frente a la guerrilla había calado en la población.

Conocido el resultado electoral, el ELN cambió su posición y manifestó que no firmaría el acuerdo que estaba ya negociado y aprobado, y que esperaba la llegada del nuevo gobierno para determinar los pasos a seguir.

Era una historia conocida. Otra vez el ELN, presa de sus dificultades y contradicciones internas, le fallaba a la paz en el último momento. Quedaban apenas algo más de dos meses para terminar mi período presidencial y no había forma de destrabar el nudo gordiano en el que la guerrilla había convertido unas conversaciones que tenían todas las condiciones para el éxito.

Con el dolor del alma, pero con la misma tranquilidad que me asistió el 20 de febrero cuando terminó el proceso con las FARC, el 31 de mayo de 2002, en un discurso pronunciado en la Escuela Militar, le anuncié al país que este segundo gran esfuerzo por la paz llegaba a su fin, en lo que a mi mandato correspondía, no por falta de voluntad del Gobierno, sino por falta de claridad y coherencia por parte de la guerrilla.

Había llegado el momento de entregar el testigo en la carrera de la paz, y así lo hice, con estas palabras:

"Un proceso de paz sin resultados y sin la voluntad de una de las partes de llegar a acuerdos sobre los temas sustanciales de la agenda no es viable. Por esto, he tomado la decisión de suspender el proceso de paz con el ELN para que el próximo presidente de Colombia lo retome si lo considera pertinente".

CAPÍTULO XLIV

El país que dejé

Durante los tres últimos meses de mi período presidencial realicé ante todos los colombianos, por los canales de televisión y las emisoras oficiales de radio, en breves alocuciones semanales, una completa rendición de cuentas sobre mi gestión de gobierno. Fue, tal vez, la primera vez que un presidente expuso ante el país, en forma tan detallada y sistemática, cuáles habían sido los resultados de su trabajo y cómo había dado o intentado dar cumplimiento a cada una de las promesas que realizó durante la campaña electoral.

De esta manera, presenté un balance semanal sobre las diez grandes propuestas para el cambio que hice al país como candidato. Algunas se habían cumplido a cabalidad, e incluso con creces; otras estaban en un proceso más o menos avanzado de cumplimiento, y otras, como la reducción en algunos puntos del impuesto al valor agregado, IVA —que alcancé a implementar, pero no pudo sostenerse—, se había intentado cumplirlas, aunque sin éxito. No se trataba sólo de presentar resultados y cifras positivas, sino de responder por mi gestión y dar la cara —con lo bueno y lo malo— al país que me había elegido para liderar su destino por cuatro años.

También realicé un último balance ante el pleno del Congreso Nacional el 20 de julio de 2002. Fue la primera vez que, en tan tradicional escenario, un presidente, en lugar de dar el clásico discurso de instalación de la nueva legislatura, realizó una intervención informal, apoyada por la última tecnología, utilizando cuadros y gráficos de computador que se proyectaron sobre las paredes del hemiciclo.

De alguna manera, recordando una de las imágenes que utilicé durante mi mandato, yo había sido el gerente de la Empresa Colombia durante cuatro años, una empresa con más de cuarenta millones de accionistas, y mi intervención fue la presentación de un gerente, que mostró, con cifras objetivas e irrefutables, los resultados, buenos o regulares, de su gestión. Así concebí yo la naturaleza de la labor de los mandatarios en este nuevo siglo de la eficiencia y la modernidad. No tanto dando discursos para el estudio de los gramáticos, sino presentando resultados para el análisis de los técnicos.

Al concluir mi gobierno era imperioso preguntarse: ¿Cómo aportamos en estos cuatros años para avanzar hacia las metas compartidas por todos? ¿Cómo sentamos las bases de una nación viable, de un país posible, que enfrentara con más entereza, más certeza y más claridad su propio futuro?

Hoy, con la serenidad que da mirar atrás y contemplar las cosas sin apasionamientos ni veleidades coyunturales, sigo creyendo que realizamos ante todo un trabajo responsable, con sus más y sus menos, pero siempre signado por la decisión de hacer lo que fuera necesario más que lo que fuera popular.

Ejercí un gobierno austero al que le correspondió superar la peor crisis fiscal en 70 años y sentar los pilares del crecimiento económico. Desarrollé un plan social extraordinario, histórico, particularmente en las zonas más humildes y apartadas de Colombia. Intenté, como nunca antes, alcanzar la paz por la vía del diálogo y, como presidente, asumí los riesgos políticos de esta decisión. Trabajé para devolver la dignidad y el protagonismo internacional a nuestra patria.

Fue una tarea ardua y continua que ha sido valorada y aplaudida en algunos aspectos —como el internacional y el del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas—; desconocida en otros —como el económico y el social—, e incomprensida, básicamente, en lo que se refiere al proceso de paz y sus verdaderos alcances. Sin embargo, en todos y cada uno de estos campos se realizaron avances fundamentales que no pueden, ni deben, perderse de vista, porque es precisamente sobre ellos que Colombia hoy sigue construyendo su camino hacia un mejor mañana.

Conté siempre con un equipo humano de enormes calidades profesionales y personales sin el cual nada hubiera sido posible. Los ministros, los consejeros, los directores de institutos, los embajadores, todos los funcionarios del Gobierno que de manera honesta y dedicada trabajaron para sacar adelante las políticas que impulsamos, hicieron posible mover la enorme maquinaria del Estado en favor de los colombianos. Su labor fue invaluable y mi agradecimiento será perenne.

LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

Si recordamos el apretado resumen de la situación que encontré, realizado al comienzo de este libro, podremos valorar mucho mejor las dimensiones e importancia de los progresos alcanzados durante mi gobierno:

El desempleo se había duplicado entre 1994 y 1998, pasando del 7,6% a cerca del 16%. El índice de inflación en agosto de 1998 estaba cercano al 19%. Las tasas de interés superaban el 50% efectivo anual, haciendo imposible cualquier negocio e impagable toda deuda. El peso, artificialmente revaluado, hacía más atractiva la importación de bienes que la producción, compra y exportación de productos nacionales. El sistema de vivienda esta-

ba colapsado. Los sectores financiero y cooperativo estaban al borde de una crisis total, el sector agrario iba en franco retroceso, la exploración petrolera estaba en descenso y la credibilidad financiera internacional era mínima.

De haber continuado por el camino del gasto sin control, renunciando a tomar medidas indispensables, aunque impopulares, hubiéramos llegado, sin duda, a una situación semejante a la de otros países cuyos gobernantes no asumieron el desafío de realizar las reformas necesarias en el momento oportuno.

Mi reto, entonces, fue enfrentar la situación y obrar con responsabilidad.

Primero que todo, rompimos la tendencia creciente del desempleo que heredamos, el cual dejamos alrededor del 15% y con tendencia a la baja. Parece poco, pero es muy significativo frente al difícil entorno fiscal, las crisis internacionales y el empobrecimiento que implica el conflicto armado. Haber logrado revertir la tendencia y entregarla en franca recuperación fue un logro mayúsculo. No nos sentimos nunca satisfechos, sin embargo, pues nuestra meta era llegar al 12% al final del Gobierno.

En el año 2000 se generaron más de un millón de empleos, 923.000 en el 2001, y en los cuatro primeros meses de 2002, más de 200.000. En este contexto, hay que considerar que el incremento de la población en capacidad de ingresar al mercado laboral, particularmente de las mujeres y los jóvenes, hizo que los empleos generados por la economía no se vieran reflejados en una disminución más marcada del índice de desempleo.

Durante mi mandato, el incremento anual del costo de vida disminuyó de un 18,9%, en agosto de 1998, a una inflación de un solo dígito durante los últimos tres años, la cual dejé en un nivel cercano al 6%, la más baja, hasta entonces, en los últimos 30 años. Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que la inflación es, de alguna manera, el "impuesto" más costoso e injusto para los colombianos más pobres, ya que se ve reflejado de manera inmediata en su canasta familiar. Adicionalmente, resultó más que satisfactorio que la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras, con base en el salario mínimo, creciera siempre por encima del costo de vida.

En cuanto a las tasas de interés, logramos bajarlas en más de 30 puntos, con lo que se reactivó la actividad crediticia y se estimuló la inversión. Además, por la seriedad y la coherencia de la política cambiaria que se adelantó, se pudo liberar, sin sobresaltos, la tasa de cambio, la cual tuvo una devaluación real del 30% durante mi mandato, que aumentó la competitividad de nuestros productos en el exterior y nos ayudó a exportar más. Esto permitió a muchos productores nacionales recuperar el mercado interno, durante muchos años conquistado por las importaciones.

Con los mecanismos de ajuste fiscal que pusimos en práctica, el déficit consolidado del sector público, es decir, el exceso de gastos sobre ingresos, bajó del 5,6% en 1999 al 3,5% en el 2000 y hasta el 3,3% en el 2001.

Un hecho que refleja el espíritu que inspiró la estrategia fiscal es la política sobre el Impuesto al Valor Agregado, IVA, cuya disminución fue una bandera de mi campaña presidencial. Esta propuesta fue incluida en el primer paquete fiscal, en el cual bajamos la tarifa de este impuesto del 16% al 15%. No obstante, en la medida en que avanzó el Gobierno y la situación fiscal reveló que estos recursos eran necesarios para la estabilidad del Estado y de la economía nacional, tuve que reversar dicha iniciativa, tomando la opción que juzgué más responsable con el país.

En la reforma del Estado tuvimos la fortaleza para liquidar la Caja Agraria y reemplazarla por el Banco Agrario, transformando una entidad atrapada por fuerzas adversas que la habían hecho inviable y convirtiéndola en un banco sólido de vocación agrícola. Más de 19.000 cargos fueron suprimidos en el Gobierno Nacional, bien sea directamente o a través del no reemplazo de los empleados que se retiraban o jubilaban. Vendimos Carbocol en las mejores condiciones, y nos vimos obligados a intervenir instituciones como las Empresas Municipales de Cali, Emcali, entre otras, caracterizadas por años de discutibles manejos que reñían con buenas prácticas empresariales y de gobierno. Éstas fueron medidas difíciles, pero adoptadas con la mira en el mejor interés de largo plazo de la Nación y las regiones.

Por otra parte, con la aplicación de energías medidas de emergencia se evitó una dura crisis en el sector financiero colombiano, gracias a lo cual hoy sigue fuerte y consolidado, y recuperó su papel de intermediación de recursos para el sector real de la economía.

Se desembolsaron cerca de 1,5 billones³² de pesos para aliviar la situación de los deudores de la banca hipotecaria, 5,7 billones para el saneamiento y reestructuración de la banca pública y 1,4 billones en créditos a los accionistas de la banca privada para el saneamiento y capitalización de sus entidades. Esto quiere decir que invertimos el 4,2% del PIB para evitar una crisis financiera, una cantidad importante pero pequeña si la comparamos con el costo que esto ha tenido para otros países del mundo que han tenido que destinar entre un 10% y un 55% de su PIB en esta tarea.

Con una aclaración muy importante: rescatar el sector financiero fue mucho más que salvar la banca; fue salvar el ahorro de millones de colombianos y salvar la casa de cerca de 800.000 deudores de vivienda, avanzando, además, hacia una reactivación de la construcción de vivienda que hoy se ha convertido en el motor del crecimiento de la economía nacional.

En efecto, mientras en 1999 la construcción decreció en 30% y 8% en el 2000, en el 2001 creció en la importante cifra de 11%, y lo ha seguido haciendo consistentemente desde entonces. No cabe duda de que todos los instrumentos utilizados, incluyendo la nueva Ley de Vivienda, que creó

³² Un billón equivale a un millón de millones.

un sistema de financiación hipotecaria que reemplazó y mejoró al antiguo UPAC, sirvieron para hacer despegar este sector clave de nuestro desarrollo e importante generador de empleo.

También nos la jugamos toda contra el contrabando en defensa de la industria nacional y dentro de nuestra política contra la corrupción. Como resultado de este esfuerzo —realizado en colaboración con algunas empresas multinacionales—, el contrabando abierto disminuyó en más de mil millones de dólares, reduciendo el contrabando de cigarrillos, de electrodomésticos, de licores, de textiles y de autopartes a niveles mínimos nunca antes observados.

El sector agropecuario vivió, igualmente, un importante despegue, recuperándose del grave abandono en que se encontraba y llegando a crecer a tasas superiores al resto de la economía. Mientras en 1996 el agro tuvo un crecimiento negativo y en 1998 estuvo prácticamente paralizado, en el año 2000 ascendió un formidable 5,2%, y siguió creciendo durante el 2001 y el 2002. Esto se reflejó en un incremento del área cultivada en el país de 350.000 hectáreas y en un aumento en la producción de alimentos de cerca de 2,9 millones de toneladas.

Por supuesto, la reactivación del campo pasa por una adecuada distribución de la tierra, la cual avanzó especialmente, a través del Incora, adjudicándose más de 6,5 millones de hectáreas a más de 100.000 familias de campesinos, colonos, indígenas y comunidades afrocolombianas en diferentes regiones del país.

Con la participación del sector privado diseñamos la Política de Competitividad y un Plan Estratégico Exportador, proyectados a diez años, que sirven hoy y seguirán sirviendo, sin duda, como cartas de navegación para los próximos gobiernos, mucho más ahora que Colombia negocia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Si tenemos en cuenta la drástica caída de los ingresos por exportaciones de café, y que, a pesar de ello, las exportaciones totales crecieron en más de 13% entre 1998 y el 2001, podemos darnos cuenta de cuánto avanzamos en la meta fundamental de diversificar las exportaciones y hacer crecer las no tradicionales, sobre todo las agrícolas e industriales.

Por supuesto, el café siguió siendo de gran importancia para la economía nacional. Lo apoyamos de forma fundamental, con una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos, que llegó directamente a los cafeteros.

Los resultados del sector petrolero también fueron trascendentales, pues se revirtió la tendencia descendente de la actividad exploratoria. Con una revolucionaria política petrolera que pusimos en práctica desde 1999 logramos firmar, tan sólo en el 2000 y el 2001, 60 contratos para explorar áreas de alto y mediano potencial, alcanzando una cifra récord en las tres décadas de historia de contratos de asociación. El país había perdido el atractivo para las compañías de exploración y explotación de petróleo a raíz de sucesivas

modificaciones en las reglas sobre dichos contratos a lo largo de la década del noventa. Reconocimos que nuestra competitividad internacional estaba en juego en este frente, pasamos una ley y le devolvimos el atractivo a este crucial sector de la economía.

Con todo lo hecho, la economía nacional superó la dura recesión de 1999 —que algunos predecían para varios años— con un crecimiento de 2,8% para el 2000 y de 1,5% en el 2001 y 1,6% en el 2002, consolidando el proceso de reactivación que ha continuado desde entonces.

Aunque son crecimientos moderados, duplican y hasta triplican los alcanzados por la mayor parte de los países de América Latina e, incluso, por varios países desarrollados. A estos guarismos se los debe analizar en el contexto regional e internacional. Desde principios de los años noventa, Colombia está más abierta a los flujos de bienes, servicios y capitales. Esto hace que su crecimiento anual se haya acompasado con el de la región y, en particular, con lo que ocurra en Estados Unidos y Venezuela. Cuando se comparan los crecimientos de distintos períodos, se debe tener en cuenta siempre el comportamiento frente al resto de América Latina. Si se toma ese telón de fondo, se puede apreciar que nuestro desempeño fue sobresaliente, dado que enfrentamos circunstancias muy adversas en la región, como las crisis de Brasil, México, Ecuador, Argentina y Venezuela. A pesar de ellas, logramos crecimientos positivos, estabilización fiscal, reducción del desempleo y la inflación, reapertura de mercados y solución de las crisis del sistema financiero e hipotecario. Una evaluación reposada de estos hechos ilustra la magnitud y la seriedad de la labor realizada en el frente económico.

Con las políticas citadas y los ajustes estructurales realizados en conjunto con el Congreso de la República, como los presupuestos austeros, la creación del Fondo de Pensiones Territoriales, la Ley 550 para la salvación de empresas viables, la fundamental reforma al régimen de transferencias territoriales, la ley que reformó la educación y la salud, la ley de ajuste fiscal territorial, la reforma tributaria, la ley de juegos de suerte y azar, la creación de las zonas económicas especiales de exportación y la ley de Mipymes, entre muchas otras, Colombia consolidó, de nuevo, una importante credibilidad financiera internacional.

El sector productivo, particularmente, pudo tener un alivio en términos de competitividad y de recuperación de la estabilidad a raíz de la disminución en las tasas de interés, de la devaluación del tipo de cambio y de la expedición de la Ley 550.

Cientos de empresas y miles de puestos de trabajo han logrado sobrevivir a raíz de los acuerdos con los acreedores logrados en el marco de esta ley. La filosofía que la inspiró contemplaba que las firmas estaban arrojando transitoriamente resultados negativos a raíz de la recesión, pero que eran viables y podían demostrarlo a través de unos acuerdos entre todas las partes

interesadas. Ésta fue una concepción exitosa a la que le debemos la supervivencia de muchos esfuerzos empresariales³³.

Otra reforma que no ha sido suficientemente valorada y que tiene hondas repercusiones es el acto legislativo que modificó el sistema de transferencias territoriales. Desde la Constitución de 1991 se había creado un sistema para definir el situado fiscal y las participaciones a los municipios, el cual fijaba cada año un porcentaje de transferencias de recursos. Ante el problema fiscal de la Nación, era imperioso modificar dicho sistema, dado que para conseguir un peso de recursos tributarios adicionales era necesario pedir casi dos pesos a los contribuyentes. El segundo peso debía ser transferido automáticamente a departamentos y municipios.

El Congreso de la República, al igual que los gobernadores y alcaldes del país, entendió la urgencia de esta reforma. Su filosofía demandaba el concurso de todos para salvar a la Nación. Todo el mundo puso de su parte, y se produjo lo que considero el mayor acto de responsabilidad pública de la clase política colombiana. Con ello se dio viabilidad a un nuevo y más equitativo sistema de transferencias, creando el nuevo Sistema General de Participaciones, y se liberó a las reformas tributarias sucesivas de la obligación de transferir recursos. Esto ha sido fundamental para poder cubrir el pasivo pensional.

Adicional a las normas citadas, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda trabajó arduamente en el saneamiento financiero de los entes territoriales. Al iniciar mi gobierno, la crisis de los departamentos y municipios amenazaba a todo el Estado colombiano. Después de años de esfuerzo, hoy orgullosamente aparecen en los periódicos aquellos departamentos que mejoraron sus recaudos, bajaron sus gastos, pagaron sus deudas y contribuyen al desarrollo regional, así como la gran noticia de que los municipios del país, por primera vez en 20 años, salieron del déficit generalizado y registraron superávit. Éste es el resultado de un trabajo conjunto que pusimos en marcha entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, gracias al cual los departamentos y municipios presentaron en el 2004 un superávit histórico de 1 billón 841.000 millones de pesos.

Me quedó el sabor un tanto amargo de no haber alcanzado a dejar culminado el tema de la reforma pensional, tan importante para el futuro económico del país, si bien dejamos presentado, y aprobado en primer debate, un proyecto de ley al respecto y el gobierno de mi sucesor pudo, luego, avanzar

³³ Dados los probados resultados de la Ley 550/99 o de Reestructuración Económica, su vigencia, que terminaba el 31 de diciembre de 2004, fue prorrogada por dos años más, mediante la Ley 922/04. Durante sus primeros cinco años, 1.039 empresas se habían acogido a este trámite, de las cuales cerca del 75% habían firmado acuerdos de reestructuración que les habían permitido superar su situación, salvando más de 70.000 empleos.

en ese sentido. Tengo, eso sí, la tranquilidad de haber creado conciencia sobre este tema, que, si no se regula y controla adecuadamente, puede convertirse en una bomba de tiempo para la economía nacional.

Es cierto que no logramos reducir el déficit todo lo que hubiéramos querido. Sin embargo, cuando se critica que los gastos no cayeron más o que el endeudamiento no se redujo, los analistas olvidan que durante mi gobierno tuve que sortear crisis de grandes dimensiones, muchas de ellas generadas antes de mi llegada a la Presidencia.

No más el salvamento de la banca pública costó seis billones de pesos, la recuperación de los hospitales requirió 300.000 millones y la rehabilitación del sistema carcelario, para reducir el hacinamiento y recuperarlo de su atraso, costó otros 300.000 millones.

Un fallo de la Corte Constitucional determinó que se debían destinar dos billones de pesos para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, erogación no prevista en las cuentas originales de mi gobierno, y el Instituto de Seguros Sociales, en el tema de salud, demandó una inyección en el 2001 de 500.000 millones de pesos, sin la cual hubiera colapsado el sistema de salud.

Además, hubo otros dos gastos extraordinarios que tuvieron que financiarse con impuestos y deuda: la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto, con una inversión cercana a los 1,6 billones de pesos, y la Red de Apoyo Social, dentro del componente social del Plan Colombia, que destinamos a aliviar los efectos de la recesión en la familias más pobres y tuvo un costo de 1,1 billones.

Como se ve, el esfuerzo de saneamiento fiscal implicó realizar ajustes responsables y consistentes a lo largo del cuatrienio. Si este esfuerzo no reportó una reducción aún más acelerada del déficit, se debió a desafíos fiscales como los anteriormente mencionados, los cuales enfrentamos con reducciones del gasto público y con ingresos extraordinarios que recibimos gracias al buen desempeño del petróleo.

En medio de todo esto, lo importante es que la economía recuperó su senda de crecimiento, que la inflación bajó a cifras de un dígito nunca antes vistas, que las tasas de interés volvieron a niveles razonables, que sectores como la construcción y el agro despegaron, para convertirse en motores de la economía nacional y, sobre todo, que se creó confianza en el desempeño económico del país, elemento fundamental para cualquier proceso de reactivación.

LA PRIORIDAD SOCIAL

Siempre he creído que hay que obrar de manera responsable hacia el futuro pero que no se pueden olvidar, ni por un segundo, las exigencias del presente. Por esto, durante mi gobierno, planeé y apliqué una política que

conciliara el indispensable ajuste fiscal y macroeconómico con las políticas sociales, protegiendo el bienestar y la calidad de vida de los colombianos.

No pretendo hacer un extenuante y amplio recuento de todas las realizaciones en el campo social, pero sí podemos dibujar, grosso modo, cuáles fueron las principales realizaciones.

En el tema de la vivienda social superé mi compromiso de construir cuando menos 242.000 viviendas durante el cuatrienio. Fue así como, a través del Inurbe, el Banco Agrario, las Cajas de Compensación Familiar y la Caja Promotora de Vivienda Militar, adjudicamos recursos por más de 1,4 billones de pesos, para 246.000 subsidios.

Además, para el proceso de reconstrucción física y recuperación social del Eje Cafetero, adelantado por el Forec, entregamos 126.000 subsidios para viviendas nuevas, reconstrucciones, reparaciones locativas y la reubicación de arrendatarios.

Me referí en un capítulo anterior al angustioso y desafiante proceso que vivimos a raíz del terremoto del Eje Cafetero. Por fortuna, gracias al trabajo sobresaliente del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero —Forec— pudimos invertir 1,6 billones de pesos en la reconstrucción con eficacia, transparencia y excelentes resultados para los damnificados del sismo, y hoy tenemos un Eje Cafetero renovado, más fuerte y más hermoso que nunca, con un creciente turismo, nacional e internacional, que ha redescubierto sus maravillas.

En el tema de vías, con el programa Vías para la Paz, del Plan Colombia, dejamos asegurada una inversión superior a los 1,1 billones de pesos para la pavimentación y mejoramiento de más de 2.000 kilómetros de carreteras y para el mantenimiento de más de 23.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias que tienen alto impacto en el desarrollo de zonas afectadas por el conflicto armado. Ésta es una cifra sin precedentes en el país que supera, en sólo tres años, el total de inversiones en esta clase de vías durante las últimas dos décadas.

A estas obras del Plan Colombia se sumaron importantes realizaciones de infraestructura vial, entre las cuales se destacan la finalización y apertura al servicio de la vía Bogotá-Villavicencio y de la vía Altamira-Florencia, que conecta al departamento del Caquetá con el centro del país.

En relación con las concesiones viales, hay que resaltar el avance de obras trascendentales como la Malla Vial del Cauca, del Valle del Cauca y la Autopista del Café. Se construyeron, además, 329 kilómetros nuevos de carreteras principales y 259 kilómetros de carreteras municipales y veredales, así como se afirmaron 66 kilómetros de la trascendental carretera Mocoa-Pitalito, de los cuales se dejó pavimentado cerca del 40% del tramo, para un total de 654 kilómetros de carreteras nuevas.

También establecimos dos concesiones para recuperar el transporte ferroviario: la Red Férrea del Atlántico con 1.493 kilómetros en total, de los

cuales 258 kilómetros quedaron operables, y la Red Férrea del Pacífico, con 160 kilómetros en operación de un total de 499 kilómetros.

Respaldamos, por otro lado, con decisión los sistemas urbanos de transporte masivo, aportando la Nación el 66% de la inversión que requiere Transmilenio en Bogotá y más del 70% del proyecto del sistema de transporte masivo que está implementando Cali.

En la salud, se aumentó de forma importante la cobertura: mientras en 1998 había 20 millones 400.000 personas amparadas por el sistema de salud, para el 2002 teníamos cuatro millones más. Además, en el régimen subsidiado de salud, que es el que cobija a los colombianos más pobres, incrementamos la cobertura de 8,5 millones de personas amparadas en 1998 a 11,8 millones en el 2002.

También respaldamos a los hospitales públicos, aportando más de 850.000 millones de pesos para la recuperación y el mejoramiento de los que atravesaron por graves dificultades financieras, y para dejar un Seguro Social funcionando, más eficiente, ordenado y moderno.

Más que satisfactorio fue poder cumplir mi promesa de poner en marcha un gran programa de nutrición escolar. Al final de mi período, más de dos millones 300.000 niños quedaron recibiendo desayuno, refrigerio fortificado o almuerzo en sus respectivos colegios.

Nohra, a su vez, impulsó programas de impacto social como el de las ludotecas, que son espacios para el aprendizaje y la recreación infantil. También impulsó la institucionalización del Día del Niño para el mes de abril, el programa "Haz Paz" como política de Estado contra la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, y el Plan Padrino, que convocó la ayuda pública y privada nacional e internacional para la construcción y dotación de centros educativos en el Eje Cafetero y por todo el país. Con los programas "Colombia Camina", "Colombia Oye" y "Colombia Ve", igualmente, pudo entregar, con el apoyo de embajadas y de la empresa privada, diferentes elementos de apoyo que facilitaron la inclusión social de los discapacitados más pobres.

Dentro de los logros de estos programas, pueden citarse las 56 ludotecas que se dejaron funcionando en 29 departamentos del país, para las cuales se recogieron 1.600 millones de pesos de donantes privados, y 50 escuelas construidas o reconstruidas a través del Plan Padrino, gracias a donaciones por más de 8.600 millones de pesos, que beneficiaron a cerca de 10.000 pequeños colombianos.

Yo fui un testigo de excepción del compromiso de Nohra con Colombia y con los más necesitados del país, un compromiso que la llevó a trabajar sin descanso, las 24 horas del día, sólo para lograr una sonrisa, un alivio, una esperanza en los ojos de algún niño; sólo para conseguir una escuela más, una ludoteca más, una silla de ruedas, lo que fuera, para ayudar a quien lo merecía.

En el tema de la educación, gracias al programa de reorganización de los profesores, la cobertura pasó de un promedio de 22 estudiantes por profesor en 1998 a más de 26 en el año 2001, abriendo 707.000 nuevos cupos en las instituciones educativas oficiales. Además, entregamos 220.000 subsidios para que menores de 15 años de familias de escasos recursos permanecieran estudiando.

Se apostó por el fomento de la calidad y la evaluación como piedras angulares de la educación, y así dejamos un verdadero legado de futuro para las nuevas generaciones. Instrumentos como los estándares curriculares en primaria y secundaria, los estándares mínimos de calidad en las carreras de pregrado y los estudios de posgrado, y las evaluaciones a los estudiantes de últimos semestres, así como el nuevo Estatuto Docente, quedaron como la base de una revolución educativa que no sólo aspira a aumentar la cobertura, sino a que dicho incremento se dé también en la calidad de la educación.

Otro aspecto que me preocupó fue el de dotar de tecnología a los estudiantes de Colombia. Para ello entregamos 650 aulas de informática con beneficio para más de 400.000 estudiantes y recogimos más de 26.000 computadores a través del programa "Computadores para Educar", los cuales se reacondicionaron para asignarlos a escuelas públicas.

La Agenda de Conectividad, "El Salto a Internet", fue otra de las herramientas que dejamos a la Colombia del futuro, con un millón de usuarios conectados a la red, es decir, 66% más que en 1999, y todas las entidades estatales del orden nacional con presencia en la Internet para facilitar, entre otras cosas, las gestiones que los ciudadanos adelantan ante ellas y para asegurar la transparencia de sus acciones. La eficacia de este programa lo hizo acreedor al premio internacional "Digital Opportunity Excellence Award" otorgado por la World Information Technology and Services Alliance.

Por medio de Compartel, que también hizo parte de la Agenda de Conectividad, pusimos en funcionamiento 6.745 puntos de telefonía en los municipios y veredas más remotos del país y dotamos a 875 municipios de centros de acceso comunitario a la Internet.

Avanzamos, igualmente, en el propósito de facilitar el acceso de la población más marginada a los servicios públicos básicos, a través de la ampliación y mejora de la cobertura. Para ello, se invirtieron 2,3 billones de pesos para optimizar la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, aportando recursos económicos a 213 municipios, para beneficio de más de cinco millones de personas. Además, se destinaron más de 300.000 millones de pesos para invertir entre el 2001 y el 2007 en los programas para dotar de energía eléctrica a las zonas no interconectadas del país, en la región pacífica, la Amazonia y la Orinoquia.

En cuanto al medio ambiente y la cultura, dejamos lista la agenda para su desarrollo en los años venideros. El Proyecto Colectivo Ambiental y, dentro de él, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, son la carta de navegación

para seguir consolidando un desarrollo sostenible en nuestro país. El Plan Decenal de Cultura, por su parte, producto de un dinámico proceso de consulta y aportes de todos los sectores y todas las regiones, marcó también el camino para fomentar nuestros valores culturales y artísticos hasta el año 2010.

Se trabajó incansablemente para disminuir el grave problema del hacinamiento carcelario. Para hacerlo, construimos cuatro grandes penitenciarías de alta seguridad en Valledupar, Popayán, Acacías y Cóbbita, con capacidad para 1.600 reclusos en cada una, y dejamos contratadas las obras para las cárceles de Palogordo, en Santander, y de La Dorada, en Caldas. En total, con estas seis nuevas cárceles, construcción de nuevos pabellones y celdas, creamos más de 17.500 nuevos cupos, una cifra sin precedentes, que supera los cupos creados en la suma de los tres gobiernos anteriores. Así se disminuyó el hacinamiento de 35% en 1998 a sólo 3% al finalizar el 2002.

UNA REFORMA POLÍTICA EN EL TINTERO

Desde mi campaña presidencial hablé de la necesidad de cambiar y modernizar la política en Colombia, a través de una reforma de grandes proporciones. Como una de las primeras prioridades de mi gobierno, y después de haber alcanzado un consenso con las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, conocido como el "Acuerdo de Casa Medina", presenté a dicho órgano legislativo un completo proyecto de reforma constitucional, el cual, contra todo lo previsto, fue hundido por el mismo Congreso, ante la desidia de los mismos grupos que se habían comprometido a sacarlo adelante.

Pero no podía desfallecer en este esfuerzo fundamental. Por ello, en marzo de 2000, cuando acababan de salir a la luz graves hechos de corrupción en el manejo administrativo del Congreso de la República, anuncié en una alocución televisada que iba a retomar el tema de la reforma política, que nos asegurara el cambio de las costumbres políticas, los partidos y del propio Congreso, apelando esta vez a la decisión soberana de mis compatriotas mediante la convocatoria de un referendo.

Mi propuesta tuvo un inmenso eco popular y en el país comenzó a vivirse un clima positivo de cambio. Las encuestas mostraban un apoyo de casi 90% del pueblo colombiano a esta convocatoria.

El procedimiento de un referendo, sin embargo, por mandato constitucional, debe pasar primero por el Congreso, luego por la Corte Constitucional y sólo entonces, surtidas estas dos instancias, llega a la consulta popular.

Así que radiqué en el Legislativo un completo proyecto de reforma que incluía, entre otros temas, la reducción del tamaño del Congreso y de los concejos municipales, la supresión de las Asambleas departamentales, la ampliación de las inhabilidades y de las causales de pérdida de investidura por

temas de corrupción o fraudes electorales, la creación de un tribunal de ética pública, las listas únicas para corporaciones, la efectividad del voto en blanco, la separación de las funciones administrativas del Congreso, el voto nominal en dicha institución, la eliminación definitiva de las suplencias, la eliminación de privilegios salariales y prestacionales de los congresistas y la obligatoriedad de que el procurador y el contralor sean siempre de filiación política distinta al presidente, entre otras importantes medidas. Por supuesto, si íbamos a realizar este proceso de depuración de la política, queríamos hacerlo ya, por lo que propuse también una anticipación de las elecciones para el Congreso, de forma que se eligiera un nuevo cuerpo legislativo, bajo las nuevas normas de transparencia, que comenzara a operar el 1º de diciembre de 2000.

¡Y ahí fue Troya! Los políticos —encabezados por mi antiguo contendor en las elecciones por la Presidencia de la República, Horacio Serpa—, que habían anunciado de dientes para afuera que estaban de acuerdo con las medidas y el espíritu de la reforma política, se alarmaron ante la inminencia de una revocatoria de su período y la convocatoria de nuevas elecciones, la cual, entre otras, era muy bien vista por la opinión pública, y anunciaron que propondrían una pregunta adicional al referendo que incluyera la revocatoria del mandato del presidente.

Este anuncio generó una turbulencia en el ambiente político que pronto comenzó a afectar las expectativas sobre el país de los analistas internacionales y calificadoros de inversión. Una reforma política, como la planteada, tenía una buena percepción internacional, pero, si se le agregaba a la misma el factor desestabilizante de la posible interinidad del presidente que la convocaba, a costa de una clase política que se negaba a autorreformarse, la percepción era muy distinta.

Evalué la situación con cabeza fría y responsabilidad. El país vivía por entonces un incipiente y promisorio proceso de reactivación económica que no podía poner en riesgo, por loable que fuera la causa. Fue así como, ante la reacción negativa de los mercados internacionales, que comenzaron a acusar los estragos de la iniciativa de Serpa y sus aliados, no tuve más opción que retirar la propuesta de referendo, para no comprometer la recuperación de nuestra economía.

En una difícil alocución del día 26 de mayo comuniqué al país que el Gobierno retiraba la propuesta de anticipar las elecciones del Congreso. Posteriormente, ante la reticencia de los congresistas en adelantar el estudio de trascendentales reformas económicas, el proyecto de acto legislativo, como tal, fue retirado, diciendo adiós por segunda vez a este esfuerzo de austeridad y purificación de la política.

Finalmente, en abril de 2002, volví a presentar una reforma constitucional con similares propuestas a las incluidas en el frustrado referendo, con el objeto de dejar iniciado el camino para que el siguiente gobierno pudiera

avanzar sobre este tema indispensable. Otra vez el proyecto no corrió con suerte en el Congreso.

Llegué a la Presidencia con el compromiso de hacer lo posible por renovar y reformar la política y cumplí con intentarlo, no una, ¡sino tres veces! Infortunadamente, el Congreso hundió el proyecto de reforma cuantas veces intentamos pasarla.

Sin embargo, dejamos un resultado concreto, como fue la conciencia en casi todos los ámbitos de la vida nacional sobre la urgencia y conveniencia de una reforma política, la cual habrá de realizarse más pronto que tarde, con muchos de los temas y propuestas que planteamos³⁴.

Si alguna enseñanza quedó de estas experiencias es que es muy difícil lograr la renovación de la clase política si, para hacerlo, hay que pasar por el filtro de sus mismos miembros en su escenario natural, que es el Congreso. La clase política sigue debiéndole al país una actitud responsable que se refleje en unas normas que doten de mayor austeridad y transparencia sus acciones.

LO QUE DEJÓ EL PROCESO DE PAZ

La verdadera democracia tiene fe en el pueblo. El país creía en 1997, cuando se votó el mandato por la paz, y en 1998, cuando fui elegido por la votación más amplia en nuestra historia, que una paz negociada era posible y realizamos ingentes esfuerzos para alcanzarla.

Sabía que no era una tarea fácil, y efectivamente no lo fue. Mientras levantábamos, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la paz, los grupos guerrilleros insistían en sus actos violentos. En medio de situaciones complejas, que algunos criticaron con una óptica simplista, tuve muchas veces que tomar decisiones contrarias al sentimiento volátil de la opinión pública.

Al fin y al cabo, para eso fui elegido: no para tener la aprobación permanente de mis electores, sino para liderar una etapa difícil en la historia de nuestra Nación, en un tema al que nadie, por miedo a perder su capital político, le había puesto el pecho y enfrentado con total decisión.

Hoy debo reconocer que en este gigantesco empeño de paz me acompañó la gran mayoría de los colombianos y tuve la suerte de contar con el respaldo amigo de la comunidad internacional.

³⁴ Mi sucesor, el presidente Álvaro Uribe, presentó el primer día de su mandato su propia propuesta de referendo, con importantes coincidencias con la de mi gobierno, iniciativa que, por supuesto, respaldé. Esta vez el referendo sí llegó, en el año 2003, hasta la instancia final de la consulta popular, si bien bastante modificado por el Congreso y recortado por la Corte Constitucional. No obstante, y a pesar de que la pregunta que obtuvo menos votos fue apoyada por 5,7 millones de ciudadanos, el umbral exigido para la validez de las mismas resultó muy alto, y casi todas las preguntas quedaron sin aprobarse.

Era indispensable reunir este respaldo porque el conflicto interno colombiano, con casi medio siglo a cuestas, se ha convertido en los últimos años en un conflicto diferente, contaminado por la nefasta influencia del narcotráfico, cuyos dineros financian hoy la actividad de las guerrillas y de las autodefensas ilegales.

Yo me atrevería a decir que, sin esa alianza con el narcotráfico, el conflicto armado se habría acabado en Colombia con la caída del muro de Berlín, como acabaron tantas otras manifestaciones violentas en el mundo. O, por lo menos, no hubiera crecido en la forma en que lo hizo.

Por eso es que la búsqueda de la paz la concebí siempre como algo más que un proceso de negociaciones con la guerrilla. ¡La paz en nuestro país siempre fue mucho más que las conversaciones en el Caguán!

La búsqueda de la paz dentro de mi gobierno incluyó también una decidida acción internacional para convocar al mundo en torno a la lucha contra el problema de las drogas ilícitas y hacerlo aceptar su responsabilidad compartida frente a este tema. La paz implicaba, igualmente, devolver la presencia efectiva del Estado al amplio territorio nacional, con acción social y seguridad, es decir, con acción y presencia de las instituciones democráticas. La paz pasaba, además, por el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas.

Mi gobierno adelantó un proceso de negociación generoso, pero no ingenuo. Tenía que ser generoso, porque la paz no se construye con mezquindad. Por esta razón hicimos todo lo posible para mantener los diálogos aun en medio de las situaciones más difíciles, que muchas veces invitaban a seguir el camino más sencillo, y quizás más popular, del rompimiento. Pero para negociar se necesitan dos, y el proceso terminó por demostrarnos que no bastan la generosidad y el coraje que demostró el pueblo colombiano. A la guerrilla le faltó coherencia y compromiso, le faltó sentido humanitario, le faltó espíritu de patria y le sobró arrogancia.

Al final, dentro de las organizaciones guerrilleras primaron los guerrillistas, los que están más interesados en mantener sus actividades criminales y sus negocios de narcotráfico que en convertirse en una opción política dentro de la democracia. Se les ofreció una alternativa para abandonar el camino de las armas, pero prefirieron transitar el oscuro camino del terrorismo, en contra del anhelo de millones de colombianos que sólo queremos y necesitamos vivir y progresar en paz.

El proceso de paz ha sido calificado como un fracaso por algunos de sus críticos que se niegan a reconocer sus efectos positivos para el país. Sin embargo, hoy estoy seguro de que fueron muchas más las cosas positivas que las cosas negativas que dejó. Es cierto que no se llegó a la firma de la paz pero sin duda alguna este proceso marcó un cambio en la historia del conflicto y en el rumbo de la confrontación. Las enseñanzas y las oportunidades que generó, los errores y los aciertos que se dieron, las implicaciones

militares e internacionales que tuvo este período de la historia, cambiaron a Colombia.

Muchas veces me he preguntado qué hubiera sucedido si el proceso de paz no se hubiera realizado. Tengo la seguridad de que el momento por el que Colombia pasaba imponía la realización del proceso. Así como en los últimos tiempos resultaría políticamente muy complejo iniciar un proceso de negociación con la guerrilla, en ese momento resultaba muy difícil no hacerlo. Las condiciones políticas y la opinión pública lo exigían.

Si el proceso no se hubiese realizado, tampoco hubiéramos podido avanzar como lo hicimos en el fortalecimiento de la Fuerza Pública; hubiese sido mucho más complejo recuperar las relaciones internacionales, y los colombianos seguirían viendo el conflicto como un mal ajeno e inevitable, sin la conciencia que hoy se tiene.

Muy posiblemente, sin el esfuerzo de paz que hicimos, el Estado no tendría el apoyo y la legitimidad con que hoy cuenta para adelantar la lucha contra los grupos armados. Si no hubiésemos transformado a nuestras Fuerzas Armadas, hoy los avances militares de la guerrilla tendrían consecuencias irreparables y el equilibrio militar del conflicto estaría a favor de la guerrilla y no del Estado. Si no hubiésemos recuperado la legitimidad internacional y la presencia en todos los escenarios globales, hoy Colombia seguiría siendo vista como un problema y no como parte de una solución.

Con esto no quiero decir que durante este período no cometimos errores. Claro que los hubo, pero ha sido más la incomprensión de la opinión nacional que el entendimiento de lo que significaba un período de transición. Paradójicamente, creo que por fuera del país se entendió con mayor claridad lo que sucedió. En Colombia el día a día del conflicto no permitía ver lo que realmente se avanzaba en el campo de la paz.

La pregunta ahora es: ¿Sirvió de algo el proceso de paz que adelantamos con la guerrilla? ¿Tiene salida Colombia? Y mi respuesta a las dos preguntas es un contundente y definitivo Sí.

Los años de esfuerzos por la paz no corrieron en vano para nuestro país.

En primer lugar, tanto las FARC como el ELN se propinaron, ellos mismos, la más grande derrota política de su historia. Estos grupos despilfarraron la opción política que con generosidad le ofreció el pueblo colombiano y perdieron el poco respaldo popular que alguna vez creyeron tener, gracias a que sus acciones e intenciones quedaron desenmascaradas ante la opinión pública nacional e internacional.

No se trataba en un principio de derrotarlos en esta vía, pues en una negociación seria no se busca la derrota del adversario sino el acuerdo que satisfaga a ambas partes. Pero en este caso, cuando los dos grupos guerrilleros optaron por no dar el paso definitivo hacia la paz, su derrota política fue proporcional al tamaño de los esfuerzos, de la paciencia y de la generosidad con que se actuó. Nunca antes la guerrilla había quedado expuesta, en su

terquedad y anacronismo, como ocurrió en el proceso de paz. Aunque durante buena parte del proceso, y en desarrollo de la estructura militar que los caracteriza, intentaron demostrar su fortaleza militar, en lo político demostraron toda su debilidad.

¿Quiénes son hoy las FARC y el ELN, políticamente hablando, frente a los colombianos y frente al mundo? Definitivamente, no constituyen ya ninguna opción porque el proceso los obligó a mostrar su verdadero rostro y ellos escogieron, no el de las ideas, sino el de la violencia y el terrorismo.

Segundo: un gran avance fue el haber llegado con las FARC a una etapa de negociación propiamente dicha. Es posible que, para muchos, esto no tenga una significación especial pero en la realidad, en la historia del conflicto, éste es un paso al que nunca antes se había llegado y al que ni siquiera la guerrilla se había planteado llegar, pues su intención inicial estaba centrada en el diálogo simplemente, como una estrategia de su lucha armada, más que en discutir y acordar una agenda política.

En los diferentes intentos que antes se habían hecho, tanto con las FARC como con el ELN, el estado de las discusiones nunca había llegado a una etapa tan avanzada como a la que se llegó en este caso. La firma de la llamada Agenda Común, los acuerdos metodológicos, el Acuerdo de Los Pozos, el Acuerdo Humanitario, el documento de los Notables, las propuestas de cese de fuegos y hostilidades, la firma del Acuerdo de San Francisco y del cronograma de trabajo posterior con las FARC, así como los acuerdos sobre el reglamento de la Zona de Encuentro, el Acuerdo por Colombia, la Declaración de La Habana y las discusiones que se dieron con el ELN sobre el cese de fuegos, dejan un punto de partida y una referencia obligatoria para los procesos que se celebren en adelante. No hay que comenzar de cero; de ahí hay que partir.

Todos estos documentos muestran cómo, en la realidad, sí se dio un proceso continuo de avances hacia acuerdos específicos. Son, además, una base sólida sobre la cual podría construirse un nuevo proceso, pues contienen muchos elementos que ya la guerrilla ha aceptado y los cuales no tendría por qué desconocer en el futuro, siempre y cuando éste no sea tan lejano.

Tercero: se logró una total comprensión por parte de la comunidad internacional sobre el conflicto interno colombiano. Ahora el mundo sabe, a conciencia, que nuestro conflicto no es una guerra civil sino que es una guerra de unos pocos violentos contra la sociedad civil. Ahora el mundo entero sabe que los que verdaderamente trabajan por la gente estamos del lado de las instituciones y no del lado del terrorismo, y, por ello, cada vez recibimos más apoyo y respaldo internacional para nuestros esfuerzos por la paz y la democracia.

La guerrilla, y en especial las FARC, se negaba a aceptar la participación de extranjeros en el proceso, pero, al final, la comunidad internacional terminó plenamente involucrada en las negociaciones, en calidad de garantes,

acompañantes e incluso, a veces, con capacidad para conciliar las diferencias. En este punto, la ganancia se da para el Estado en la medida en que la comunidad internacional vio un esfuerzo serio y legítimo por alcanzar la paz y, a la vez, conoció de primera mano las actuaciones de la guerrilla.

Para la misma comunidad internacional significó la aparición de cambios importantes. Por primera vez Cuba se involucró en un proceso de paz de manera directa. Éste es un hecho que, con seguridad, tendrá repercusiones en el futuro de la política internacional frente a este país. Lo cierto es que Cuba y el propio Fidel Castro no ahorraron esfuerzos para apoyar los dos procesos de paz. Los cubanos, además de participar en los diferentes grupos de países amigos, facilitaron su territorio y nos brindaron toda la logística necesaria para poder adelantar negociaciones en la isla.

También la participación conjunta de los llamados países amigos, del Vaticano y las Naciones Unidas dejó una marca muy alta en cuanto a apoyo internacional y demostró la forma en que el mundo valoró los esfuerzos de paz y de lucha contra el narcotráfico.

Quedó claro, hacia el futuro, que todo proceso de paz que se realice en Colombia tendrá que contar necesariamente con la participación internacional, en el grado que se considere apropiado. No por nada el presidente Uribe insistió en la mediación de las Naciones Unidas, ha acudido a la Organización de Estados Americanos como verificadora de los pactos alcanzados con los grupos ilegales de autodefensa y ha aceptado la participación de México como mediador para reiniciar aproximaciones de paz con el ELN³⁵.

Cuarto: algo muy importante sobre lo cual se ha reflexionado poco. El proceso de paz nos dejó una importante agenda de trabajo que debería seguirse adelantando —con las FARC o sin ellas—, porque ella contiene los grandes temas que necesita debatir el país.

La Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, que se acordó en mayo de 1999, con la participación del sector privado, de los partidos políticos y de otros representantes de la sociedad civil, debe seguir siendo trabajada por los colombianos que queremos alcanzar la justicia social desde la democracia y por medios pacíficos. En ella se encuentra todo un catálogo de reformas y de propósitos que el país está en la obligación de asumir y de buscar, y sobre el cual mi gobierno comenzó a trabajar y a avanzar con paso firme.

Sumada a la Agenda, el documento de los Notables y el Acuerdo de San Francisco constituyen una hoja de ruta que incorpora trascendentales pun-

³⁵ El Gobierno mexicano suspendió el 17 de abril de 2005 su labor mediadora con el ELN, debido a la descalificación que hizo este grupo de su actuación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde votó, por segunda vez consecutiva, una resolución de condena al Gobierno cubano.

tos ya aceptados por la guerrilla. Cualquier proceso de paz que se intente en un futuro debe, necesariamente, partir de estos avances.

Quinto: logramos que la paz dejara de ser un tema exclusivo del Gobierno en el que la sociedad civil y el sector privado no se sentían involucrados. Los empresarios, los estudiantes, los trabajadores, las familias participaron en diversas reuniones y grupos de trabajo, hicieron foros de debate sobre la paz, promovieron marchas y otras manifestaciones contra la violencia e, incluso, las gentes en sus pueblos comenzaron a resistir con valor civil la intimidación de los terroristas. La participación de la sociedad no se restringió a los instrumentos formales y obligatorios, como el Consejo Nacional de Paz, sino que en cada proceso se desarrollaron mecanismos de participación propios, como las audiencias públicas con las FARC y los foros que se realizaron con el ELN. No más en el proceso de discusión de la agenda temática se celebraron 38 audiencias públicas con la participación de cerca de 30.000 colombianos.

No desconozco que, según el criterio de algunos, este tipo de mecanismos no resultan útiles y, por el contrario, son considerados como un factor de distracción y hasta de pérdida de tiempo. Yo sigo convencido de que, sin la participación activa de la sociedad, no es posible alcanzar una paz cierta y duradera. La consolidación de un proceso depende en buena parte del propósito colectivo de paz que exista en la sociedad, pues sin él los esfuerzos del Estado no son suficientes.

Se habló de la necesidad de contar con una política de Estado en materia de paz, entendida como aquella que está concebida en forma conjunta por los diversos partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, y que es apoyada por la mayoría de los sectores de la sociedad, y yo creo que en buena parte lo logramos.

Por un lado, todos los partidos políticos firmaron varios documentos con la propia guerrilla en los cuales se comprometían a apoyar una solución negociada al conflicto y a la creación de una política de Estado en materia de paz; por otra, desde el inicio de los procesos, los diferentes partidos y movimientos estuvieron enterados y apoyaron las medidas que el Gobierno tomó en materia de paz. La mayor expresión de este consenso se reflejó en la creación del Frente Común por la Paz y contra la Violencia, en el cual estaban representados todos los partidos políticos y donde todos expresaron sus opiniones y su respaldo a las determinaciones relacionadas con el proceso de paz. El Gobierno no actuaba solo en esta materia ni aplicaba exclusivamente el criterio del gobernante sino que acudió siempre al consejo y a las sugerencias de todos los sectores.

Por otro lado, y más allá del ámbito netamente político, mantuvimos siempre una estrecha colaboración con todos los poderes públicos. Como pocas veces en la historia del país, se vio una coordinación amplia, siempre con respeto por la independencia de los distintos poderes. Convoqué a sus

cabezas e integrantes para oír sus opiniones y sugerencias, y logramos la colaboración armónica de las tres ramas en asuntos tan concretos como el acuerdo humanitario.

No sobra aclarar que esto no sólo se presentó en el tema de la paz. En áreas como la lucha contra el narcotráfico y el manejo de las relaciones internacionales siempre busqué consensos más allá de la propia posición del Gobierno, pues tuve claro que en estas materias el interés del Estado predomina sobre los proyectos de un gobierno determinado. Soy un convencido de que buscar consensos no es manejar los asuntos con mano blanda sino con fortaleza democrática.

Ahora bien, en materia de paz el problema no está solamente en la generación de lo que se denominaría una política de Estado. El problema de fondo radica en la creación de un consenso social perdurable alrededor de la solución que debe tener el conflicto. Mientras la sociedad no logre este consenso, que además perdure en el tiempo, no habrá una política ni de Gobierno ni de Estado que logre imponerse.

La sociedad colombiana cambia pendularmente su criterio acerca de cómo solucionar el conflicto, y la guerrilla lo sabe y lo aprovecha. En 1998, prácticamente ningún candidato planteó una salida diferente a la negociación pues en ese momento la sociedad había manifestado su consenso alrededor de esta idea. Sin embargo, sólo cuatro años después, el péndulo había cambiado y ningún candidato propuso la posibilidad de recuperar el diálogo y la negociación pues la opinión estaba al otro extremo. Ejemplos como el de España, en donde la sociedad ha logrado un consenso perdurable en cuanto a la lucha contra el terrorismo, nos demuestran que sí es posible lograrlo, naturalmente con el liderazgo del gobierno de turno.

Sexto: gracias al proceso, la sociedad colombiana conoció, sintió, vio y palpó directamente lo que es nuestro conflicto y tomó conciencia de la urgencia de su resolución. Al ver, día a día, por todos los medios de comunicación, los rostros de los guerrilleros, al oír sus palabras y analizar sus gestos, muchos entendieron que el problema no era tan sólo una leyenda ajena a la mayoría sino que se trataba de algo real, cercano a todos. Antes del proceso, ¿cuántos colombianos le habían visto la cara y oído la voz a personajes como Marulanda, Gabino, Jojoy y tantos más? De alguna forma, su exposición ante los medios permitió desmitificar su imagen y conocerlos en su verdadera dimensión.

Ver a los guerrilleros sentados en la mesa de negociación con el Gobierno y luego enterarse de las acciones violentas que esos mismos grupos cometían implicaba una enorme contradicción para el ciudadano común, para quien se cruzaban las imágenes permanentes de horror con las imágenes de esperanza que salían de las mesas de negociación.

Lamentablemente, triunfaron las imágenes de la violencia en la medida en que su efecto es inmediato en tanto que las imágenes de la esperanza no

resultaban palpables en el corto plazo. En la práctica, el día a día del conflicto le ganó al mediano o largo plazo que requiere el proceso para generar resultados.

Esto me lleva a reconocer una de las fallas principales que tuvimos en el inicio del proceso, pues no logramos comunicarle al país cómo sería éste y qué resultados esperar de él en el corto plazo. No supimos aprovechar esa ola de esperanza que se presentó al inicio del mismo y, cuando lo intentamos, fue demasiado tarde. Hubiese sido necesaria una pedagogía inicial acerca de cómo se adelantarían las negociaciones, cuánto tiempo tardarían en verse los resultados y el porqué no se llegaba de inmediato al silencio de los fusiles. Si bien lo intentamos, no fuimos exitosos en esta tarea de comunicación.

A pesar de no haber logrado comunicar los tiempos y expectativas reales del proceso, lo cierto es que los ciudadanos sintieron que el conflicto sí tenía que ver con ellos y que la paz también. Eso creó una conciencia ciudadana que nunca antes había existido y el tema de la paz, más que el de la guerra, entró a hacer parte de la vida diaria de cada familia colombiana. Ese nivel de conciencia no existía antes y alcanzarlo genera enormes avances frente a nuevas posibilidades en el futuro.

Naturalmente, este factor también tuvo incidencias negativas, pues, al tener más conocimiento y más cercanía, también se aumentaba el nivel de expectativas y de ansiedad por resultados rápidos. Si los ciudadanos veían a los guerrilleros sentados a la mesa de negociación con todas las "facilidades" que el Gobierno les otorgaba, ninguno entendía por qué no se lograban pronto los acuerdos de paz para silenciar los fusiles, por qué no se terminaban los ataques a poblaciones y el infame secuestro. Al no producirse estos resultados de manera rápida, ese consenso colectivo que se dio en el mandato por la paz se perdió y el péndulo de la opinión empezó a cambiar de lado con prontitud.

Por otra parte, no tengo duda sobre el efecto positivo que dentro de las Fuerzas Militares tuvo el proceso de paz. Creo que hoy la idea que se tiene de un proceso de paz desde el punto de vista de los militares es bien diferente a la que existía antes. En primera instancia, los militares se dieron cuenta, a pesar de las muchas dificultades, y de no pocos radicales entre sus filas, de que un proceso de paz no es ni será nunca en contra de ellos. Así mismo, constataron que la paz no busca el debilitamiento de la Fuerza Pública sino que, por el contrario, exige su solidez y fortalecimiento. Y esto lo aprendieron no sólo de manera retórica sino en la realidad, pues durante el proceso de paz se fortalecieron como nunca antes lo habían hecho y así lo han reconocido los mismos militares.

Los avances que se dieron a nivel de conciencia al interior de las Fuerzas Armadas fueron muy grandes. Conté con su cooperación en los esfuerzos de paz aunque siempre lamentaré la falta de sinceridad de algunos pocos que soterradamente buscaron obstaculizar los procesos.

Sin embargo, la lección resultó ser mucho más positiva que negativa. La participación militar en los temas del proceso de paz siempre fue activa. Oí sus consejos y las sugerencias que hicieron, acepté las que resultaban convenientes y debatí las que no consideré apropiadas. Los militares también oyeron las posiciones que desde el Gobierno se exponían y siempre, con el mayor apego a la Constitución y a las tradiciones militares de Colombia, acataron sin reparo las determinaciones que como presidente tomé. Nunca la democracia estuvo en riesgo por cuenta de los militares y nunca la institucionalidad estuvo amenazada por ellos. Todo lo contrario, encontré en los soldados de Colombia a sus mejores guardianes.

Se dejó sembrada, entonces, en la conciencia de los colombianos la firme convicción de que sólo a través del diálogo puede conseguirse una paz que sea cierta y duradera. Sin renunciar a la defensa nacional contra el terrorismo, nunca debemos perder de vista que el diálogo es el camino para la convivencia. Esta fe en el diálogo también es resultado del proceso que adelantamos sustentado en esa misma certeza.

Si el actual gobierno o cualquier otro posterior quiere reanudar los diálogos de paz, encontrará un panorama muy distinto al que yo encontré, cuando hacía más de diez años no se intentaba un proceso de paz serio con la guerrilla y nos tocó partir prácticamente de cero. Alcanzar la paz es como armar un rompecabezas y, ciertamente, quien continúe esta tarea encontrará que ya hay muchas piezas en su lugar y que partirá desde una mejor posición que la que teníamos en 1998.

Aunque ya lo hice antes, es necesario volver a dejar testimonio aquí de la labor titánica y el abnegado esfuerzo que desplegaron los dos comisionados de Paz que me acompañaron en este empeño gigantesco por la reconciliación. Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, como ha quedado plasmado en las páginas de este libro, pusieron todo de sí en aras de la paz, sacrificando, incluso, familia y salud, y merecen mi mayor gratitud y reconocimiento, y los de todos los colombianos.

LOS FRUTOS DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Siempre tuve claro que únicamente mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas la paz que se ganara en la mesa de negociación podría ser permanente.

Con este propósito diseñamos y pusimos en marcha el Plan Colombia —sobre cuyos inicios y avances traté en varios de los capítulos anteriores—, que dejamos como el más grande legado de futuro para el país y para la siguiente administración. Éste, además de ser el plan social más grande en la historia de nuestra Nación, es, ante todo, un plan destinado a fortalecer, a lo largo y ancho de nuestra geografía, en las zonas más apartadas del territorio, la presencia efectiva del Estado y sus instituciones.

A nivel internacional, el Plan Colombia es la prueba efectiva del principio de responsabilidad compartida que promovimos con éxito. Muchos años esperó Colombia a que el mundo comprendiera que en esta historia del narcotráfico no somos los villanos, sino las víctimas, y que éste es un problema que nos incumbe a todos y que debemos solucionar entre todos.

Es apenas obvio —y así lo hicimos ver— que el problema mundial de las drogas no podría existir sin la enorme demanda por parte de los países más desarrollados, sin la producción y venta de insumos por los mismos y, sobre todo, sin el lavado de activos producto de este negocio que se realiza bajo la mirada a veces complaciente de países y banqueros del primer mundo. Colombia es tan sólo un eslabón en esa inmensa cadena de corrupción que hoy se ha convertido en la principal financiadora del terrorismo en el mundo entero y en nuestro país.

Por eso me comprometí a llamar la atención de la comunidad internacional para que cada nación no sólo nos ayudara, sino que asumiera su cuota de responsabilidad en la solución de este problema. Gracias a este trabajo persistente, los países del mundo y los organismos internacionales aceptaron el principio de responsabilidad compartida, es decir, entendieron que sin consumo no hay oferta y que la responsabilidad para enfrentar este tema es de todos. Por ello, nos dieron aportes vitales para combatir el narcotráfico y, sobre todo, para evitar sus tremendos efectos de violencia y miseria sobre la población.

Esa es la filosofía del Plan Colombia, a través del cual se comprometieron a favor de nuestro país, durante mi Gobierno, más de 3.600 millones de dólares en aportes y financiación, una cifra de cooperación internacional nunca antes vista, que es el producto de la diplomacia directa y personal que realizamos en los más importantes foros internacionales y ante las principales naciones del planeta. Y también otro de los inmensos logros del proceso de paz.

Lo que recibimos y seguimos recibiendo del mundo no es un regalo, ni es caridad. Lo que hemos exigido y obtenido es conciencia de responsabilidad compartida de parte del mundo hacia nuestro país.

Con los recursos recibidos, y otros del presupuesto nacional, combatimos con decisión el negocio de las drogas ilícitas y a los narcotraficantes, y realizamos programas de desarrollo social para que los campesinos e indígenas que siembran coca o amapola encuentren alternativas legales para dar sustento a sus familias y poder vivir con dignidad y sin miedo.

Tenemos que decirlo con palabras crudas pero reales. Colombia, hace cuatro años, era un país paria en el escenario internacional. Gracias a la Diplomacia por la Paz recuperamos un puesto protagónico y digno ante las naciones del mundo. Dejamos de ser peones y nos convertimos en socios en la lucha mundial contra el problema de las drogas y contra el terrorismo.

Cuando dejé la Presidencia, Colombia era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el más alto organismo inter-

nacional para la seguridad del mundo, el cual presidimos durante agosto de 2001; estábamos liderando la integración andina como presidente Pro-Témpore de la Comunidad Andina; teníamos un Grupo de los Tres fortalecido con Venezuela y México, y un Grupo de Río también más actuante, del cual fuimos especiales promotores al ocupar la Secretaría Pro-Témpore del mismo en el año 2000.

Y algo muy importante: se realizó una labor impecable para conseguir que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos prorrogaran los beneficios arancelarios a nuestro país y sus socios andinos. Se obtuvo la prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias por parte de la Unión Europea y la prórroga y ampliación a otros productos del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas —ATPA— por parte de los Estados Unidos, lo cual significó empleo para más de 150.000 familias colombianas.

Y así como obtuvimos respaldo para estimular la economía legal, también conseguimos apoyo contra el terrorismo. Fue un logro excepcional haber logrado que la Unión Europea desmitificara la guerrilla e incluyera a las FARC en su lista de organizaciones terroristas, gracias a lo cual hoy no pueden ejercer ni promover sus actividades ilícitas desde Europa, ni guardar sus ganancias para la muerte en los bancos europeos.

En este trabajo de recomposición de nuestras relaciones internacionales —reconocido por tirios y troyanos— tengo que dejar un especial testimonio de agradecimiento y admiración para el hombre que me acompañó en esta tarea, como canciller, durante los cuatro años de mi mandato: Guillermo Fernández de Soto. Él fue un trabajador infatigable por Colombia, un asesor leal y un gran amigo, cuyo excelente libro sobre la gestión internacional en dicho período, *La ilusión posible*, me excusa de ahondar aún más en explicar la tesonera labor que se cumplió para que nuestro país volviera a figurar, con la frente en alto, en los más importantes escenarios del acontecer mundial.

MÁS INVERSIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Valga resaltar que el Plan Colombia, además de formar una gran estrategia de lucha contra el problema mundial de las drogas, que es el factor que hoy alimenta la violencia y la corrupción en nuestro país, también busca el fortalecimiento institucional y, algo muy importante, promover la inversión social en las regiones más apartadas de Colombia y más afectadas por el conflicto.

El Plan Colombia, sin ninguna duda, ha sido el plan de acción social más grande en la historia del país. Lo dejamos operando, con importantes resultados hasta la fecha, y con recursos asegurados para que se siguiera implementando por lo menos hasta el año 2003.

Por fortuna, el presidente Uribe reconoció su importancia y ha basado la acción social de su gobierno en muchos de sus componentes, tales como

"Familias en Acción", que entrega subsidios directos para alimentación y educación a las familias del estrato más bajo de la clasificación socio-económica, en los municipios con población inferior a 100.000 habitantes, y "Jóvenes en Acción", un programa a través del cual se capacita a los jóvenes desempleados de bajos recursos, mejorando su posibilidad de inserción en el mercado laboral.

También ha continuado otros programas del Plan, como "Empleo en Acción", con el cual apoyamos más de 3.800 proyectos comunitarios, generando 180.000 empleos temporales por todo el país, y "Obras para la Paz -Gestión Comunitaria", cuyo objetivo fue construir, reconstruir y mejorar cerca de 1.600 obras de infraestructura social en los municipios afectados por la violencia, entregando centros comunitarios culturales y de salud, baterías sanitarias y canchas polideportivas³⁶.

EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Otro pilar del proceso de paz, visto de manera integral, fue el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de la Institucionalidad y de la Paz.

Muchos pensaron que, por buscar la paz a través del diálogo, íbamos a abandonar nuestra Fuerza Pública, pero se encontraron con una gran sorpresa, pues no sólo no la abandonamos, sino que hicimos por ella más que cualquier otro gobierno en la historia del país.

Sin duda, entre 1998 y 2002 nuestras Fuerzas Armadas se fortalecieron, modernizaron y profesionalizaron como nunca antes lo habían hecho en la historia nacional, un proceso que analicé con detalle en capítulos anteriores³⁷.

Las Fuerzas Armadas fortalecidas, modernas y profesionales que dejamos al país, y la suma de los logros del proceso de paz tanto en Colombia como en el ámbito internacional, le han proporcionado al gobierno de mi sucesor y, por supuesto, a los futuros, mejores y más positivas bases de trabajo, radicalmente diferentes a las que recibí.

Cabe, entonces, de nuevo la pregunta: ¿Sirvió a Colombia el proceso de paz, con todos sus componentes? Definitivamente, sí.

LOS RETOS FUTUROS

Desde el punto de vista económico entregué, al terminar mi mandato, una economía que podría resumir en una sola palabra: estable. A mediados

³⁶ Sobre el diseño y financiación del componente social del Plan Colombia, ver capítulos XII y XX.

³⁷ Ver capítulos VIII, IX, XXI y XXVI.

de 2002, así lo resumió una importante revista nacional: *"La situación es totalmente distinta de lo que era hace cuatro años, la última vez que se habló de recesión. En ese entonces todos los ajustes estaban por hacerse, el sector financiero iba en picada, las tasas de interés estaban disparadas y la devaluación era incontenible"*.

Hoy por hoy, con un escenario opuesto, es decir, sobre una base estable, con las variables macroeconómicas controladas y unas tendencias favorables, corresponde continuar, responsablemente, la tarea de hacer que la economía crezca más y produzca más y mejores empleos.

En el campo social, dejamos operando y financiado el Plan Colombia, llevando obras y esperanza a los rincones más alejados del país. Tengo la certeza de que invertir en el capital social es también invertir en la paz. Su continuidad por los gobiernos futuros será, sin duda, una garantía de progreso para las regiones más olvidadas del país.

Quedan también unas Fuerzas Armadas fortalecidas y con todo el respaldo de la Nación, las cuales seguirán siendo el baluarte de la legitimidad en Colombia y continuarán incrementando su presencia efectiva por todo el país.

Además, queda una gestión internacional destacada, la cual debe mantenerse con decisión, más ahora que vivimos en un mundo globalizado y totalmente interdependiente. El principio de responsabilidad compartida que promovimos con éxito durante mi gestión puede y debe seguir marcando el norte de nuestra diplomacia.

Por supuesto, todos estos logros y desafíos siguen requiriendo un componente fundamental, al que no podemos renunciar: ¡La paz!

Definitivamente, alcanzar la paz es todavía el gran objetivo nacional. Yo sigo creyendo que la paz, una paz cierta y duradera, sólo llegará por el camino del diálogo, el cual tarde o temprano tendrá que encontrar la vía para consolidarse.

Mientras nos sigan atacando con terrorismo, la sociedad tendrá que defenderse con todas sus armas y con todo su valor, pero no se puede olvidar jamás que el fin de toda lucha es alcanzar la convivencia. El esfuerzo realizado durante mi cuatrienio nos dejó muchas experiencias valiosas y un país unido en torno al tema de la paz, activos que hay que atesorar en los días que vienen.

La visión de la paz que guió la acción de mi gobierno no fue un simple capricho, ni el deseo de un presidente por pasar a la historia: intentar la paz por la vía del diálogo era una necesidad inaplazable, un esfuerzo al que alguien tenía que ponerle el pecho con todo el valor necesario. Y así lo hicimos.

Pero no olvidemos esto: la paz de Colombia no es una lucha individual, al alcance del poder del presidente de turno. La paz la conquistan los pueblos, no los gobiernos.

Tarde o temprano los violentos van a entender y van a darse cuenta —como bien dijo Molière— de que nunca, ¡jamás!, con la violencia, podrán entrar al corazón del pueblo. Mucho menos entrarán al corazón de un pueblo unido en torno a su democracia, a su gobierno y sus instituciones, como lo está hoy Colombia.

Cuando miro hacia atrás, casi más de tres años después de terminar mi gobierno, veo más luces que sombras y me siento satisfecho por el deber cumplido. Yo sé que quedan muchas cosas por hacer en un país que, como el nuestro, adolece de tantos problemas acumulados por años y por décadas. Pero no podrá decirse que no hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, que no avanzamos hacia la meta deseada y que no dejamos sentadas, con responsabilidad, las bases para seguir construyendo el edificio de una Colombia próspera, en paz y con justicia social.

CAPÍTULO XLV

La jornada final

Ésta es la última noche en que serviré como anfitrión en la Casa de Nariño. De hecho, es la última noche que pasaré como inquilino en este monumento nacional en el que nació hace más de 237 años el precursor de la Independencia de mi país.

Con estas palabras me dirigí a los invitados en la noche del 6 de agosto de 2002, la última de mi período de cuatro años como presidente de Colombia. Se trataba de la cena que ofrecía en honor de los jefes de Estado y las delegaciones acreditadas para la posesión del nuevo presidente, que tendría lugar el día siguiente.

"Mañana en la tarde el doctor Álvaro Uribe Vélez asumirá como presidente de Colombia y yo le entregaré, con la satisfacción del deber cumplido, la dirección de un país estable, que enfrenta decidido sus problemas con el coraje y el talento de más de 40 millones de habitantes que quieren la paz y el progreso", concluí antes de pasar al brindis.

Entre los invitados especiales que estaban presentes esa noche de despedida se encontraban el presidente del Ecuador, Gustavo Noboa; la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso; el presidente de Honduras, Ricardo Maduro, y el príncipe de Asturias, heredero de la corona de España, Felipe de Borbón. Otros mandatarios invitados a la posesión aún no habían llegado al país.

Fue una noche tranquila, de amena conversación y suave protocolo, en la que departí relajadamente con los invitados. De manera especial agradecí la presencia del príncipe de Asturias, hijo del rey Juan Carlos, quien visitaba el país por cuarta ocasión, ya que había estado en 1983, en lo que fue su primer viaje oficial a un país extranjero; en 1998, precisamente para mi posesión, y luego en 1999 para expresar la solidaridad del pueblo español frente al trágico terremoto del Eje Cafetero.

La cena acabó hacia la medianoche y entonces Nohra y yo subimos al último piso del palacio presidencial, donde quedan las dependencias privadas. Fue una extraña sensación enfrentarnos a una casa que ya casi no nos reconocía: recién pintada y arreglada para esperar a los nuevos huéspedes, con los estantes vacíos, las paredes desnudas y la fría sensación del adiós en cada caja que faltaba por recoger. Imaginamos, con razón, que el día siguiente

—feriado nacional— tendría muchos motivos para ser recordado. Pero no sabíamos hasta qué grado.

El 7 me levanté más temprano que siempre, consciente de que contaba con escasas horas para dejar en orden los últimos detalles de mi despacho. Además, había citado para las 7 de la mañana una reunión con los industriales y exportadores colombianos, a la que asistiría también el representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Zoellick, para analizar los beneficios del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas —ATPA—, cuya prórroga y ampliación había sancionado el presidente George W. Bush el día anterior, y para hablar sobre las estrategias para asumir en el año 2005 el inmenso desafío del Área de Libre Comercio para las Américas —ALCA—. El mismo representante Zoellick había querido venir en un gesto de reconocimiento a la labor conjunta que habíamos realizado para lograr la extensión de dicho acuerdo.

Era bueno terminar mi gestión con la grata constatación de haber recompuesto las relaciones con los Estados Unidos, llevándolas a su máximo nivel, y haber logrado la aprobación de la prórroga y ampliación a nuevos productos, como textiles y confecciones, de los beneficios arancelarios para el ingreso de los bienes colombianos al mercado norteamericano.

"Este es mi último discurso oficial como presidente de la República de Colombia" fue el abrebocas de mis palabras, en las cuales hice reminiscencia del atentado fatal que cobró la vida del candidato liberal Luis Carlos Galán en 1989, del secuestro que yo había sufrido un año antes a manos de Los Extraditables y de las gestiones internacionales que, como alcalde de Bogotá, realicé para llamar la atención sobre el tema de la responsabilidad compartida en la lucha contra el problema mundial de las drogas.

El discurso fue recibido con entusiasmo por el selecto grupo de empresarios, quienes reconocieron la gestión realizada por el Gobierno para alcanzar la prórroga y ampliación del ATPA, la cual daba un nuevo aire a la economía colombiana y al sector exportador.

"Este es mi último discurso y éstas son mis últimas palabras en un acto oficial como presidente: ¡Colombia tiene mucho futuro! ¡Vamos por él!", fue el emotivo cierre de mi intervención.

El resto de la mañana lo dediqué a la recepción de invitados especiales, como el príncipe de Asturias, y a ultimar algunos detalles en mi despacho, prácticamente desocupado, listo para recibir a su nuevo inquilino. También visité la tumba de mi padre, en la Capilla de San Ignacio, a pocas cuerdas del palacio presidencial, y recé una oración ante ella, sabiendo que no volvería a visitarla en un buen tiempo, pues en pocos días partiría del país.

A las 12 y 30 de la tarde tenía citados a los miembros del Gabinete, los altos mandos militares y de Policía, y mis asesores más cercanos, para un almuerzo de despedida en la misma Casa de Nariño.

Hacia el mediodía comenzaron a llegar los invitados con sus parejas, en medio de fuertes medidas de seguridad. No era fácil su desplazamiento pues

el centro histórico de Bogotá, ante la amenaza de atentados terroristas con ocasión de la posesión, se encontraba prácticamente cerrado en un área superior a los dos kilómetros cuadrados.

Podría decirse que se internaban en la boca del lobo, pues llegaban voluntariamente a un reconocido y previsto blanco terrorista. En efecto, todos sabían que la guerrilla de las FARC estaba enfurecida conmigo, que los había desenmascarado ante la opinión nacional e internacional y recientemente había puesto precio a sus cabezas —dos millones de dólares por la información que condujera a la captura de sus principales líderes—. También se sabía que Álvaro Uribe, el presidente entrante, no era, ni mucho menos, santo de su devoción, pues había sido elegido, por amplia mayoría, precisamente por su discurso de mano firme contra la subversión.

Contra los dos se habían detectado y neutralizado varios atentados en los últimos días. Uribe había salido ileso, gracias al blindaje de su vehículo, de una bomba puesta en el camino de su caravana en la ciudad de Barranquilla, e igualmente se habían desmantelado atentados en mi contra, que habían sido preparados en mis visitas a diversas ciudades del país. Era obvio, entonces, y así lo habían informado los organismos de inteligencia, que las FARC podrían estar fraguando importantes atentados para sabotear el acto de posesión.

A pesar de ello, todos los invitados —tanto al almuerzo de la Casa de Nariño como a la ceremonia de posesión, que se celebraría a las 3 de la tarde en el cercano Capitolio Nacional— cumplieron abnegadamente, y por encima de todos los riesgos, su cita con la democracia. Se pensaba que los dispositivos eran suficientes, pero muy pronto los hechos habrían de demostrar el error de este supuesto.

DESPEDIDA BAJO FUEGO

Desde hacía semanas se venían preparando las medidas de seguridad para evitar actos terroristas, las cuales se habían concentrado en la posibilidad de ataques con cilindros de gas cargados con dinamita, petardos, carros bombas, e incluso una incursión por aire. Tanta había sido la previsión, que el helicóptero presidencial, en el que habitualmente me desplazaba para dirigirme al aeropuerto o a localidades cercanas desde el helipuerto ubicado en el techo de la Casa de Nariño, se había dejado de utilizar desde hacía días por temor a ataques contra el mismo desde los cerros orientales de la ciudad.

También se había pensado en la eventualidad de morteros disparados desde esa posición de altura, y se tenía militarizada la zona montañosa. En total, más de 20.000 hombres, entre policías, soldados y miembros de organismos de inteligencia, vigilaban palmo a palmo la ciudad, con énfasis en la zona adyacente a los centros de poder, es decir, a la Plaza de Bolívar, el Capitolio

Nacional y la Casa de Nariño. Varios anillos de seguridad rodeaban el sector, comandos especializados antiterroristas reforzaban sus puntos vulnerables y francotiradores apostados en edificios y lugares claves completaban una seguridad que parecía inexpugnable.

Se determinó, además, la suspensión de operaciones aéreas desde y hacia el aeropuerto Eldorado durante las horas de la posesión presidencial y la clausura de actividades de los aeropuertos aledaños a la ciudad. Únicamente sobrevolaban la ciudad aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y un avión Orion P-3 del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, con radares y una plataforma de inteligencia de alta tecnología, facilitado por el gobierno de este país para interceptar desde el aire cualquier amenaza terrorista.

Sin embargo, como luego diría el general Héctor Darío Castro, entonces comandante del Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, *"es común que el ser humano se quede corto en sus previsiones frente al mal"*.

Contra todo lo anticipado, los primeros ataques no fueron contra el centro histórico ni se produjeron en la tarde. Eran las 11 y 30 de la mañana cuando las FARC iniciaron un ataque con granadas hechas de mortero hacia la Escuela Militar de Cadetes, ubicada en un sector alejado de la Casa de Nariño, al noroeste de la ciudad.

Los proyectiles fueron lanzados a una distancia superior a los dos kilómetros y medio desde el patio de una casa en un sector residencial, valiéndose de un ingenioso y artesanal sistema de rampas y tubos petroleros, cargados de pólvora negra y anfo, activado a distancia por medio de un radio de comunicaciones que enviaba una señal a una antena ubicada sobre la edificación.

De las más de cien granadas preparadas, alcanzaron a dispararse diez que, por su poca precisión, impactaron en varias cuadras a la redonda de la Escuela. Sólo dos cayeron en predios de la institución castrense, sin causar mayores daños; las demás afectaron viviendas del sector y dejaron más de una decena de civiles heridos, incluidos menores de edad.

Una patrulla de la policía que fue alertada de la situación ubicó rápidamente la casa desde donde se habían lanzado los proyectiles y, en un acto heroico, en medio de los gases producidos por los disparos recientes, retiraron las plataformas. Por suerte, el mecanismo se había trabado y quedaron cerca de 90 granadas sin lanzarse, evitando lo que hubiera sido una verdadera lluvia de bombas y muerte sobre sectores residenciales de la ciudad. Al momento de llegar, los patrulleros alcanzaron a ver una pareja que huía en una motocicleta de alto cilindraje, llevando un radio de transmisión, seguramente el que usaron para activar los morteros, pero no alcanzaron a detenerla.

Ante esta novedad, los ministros de Defensa saliente, Gustavo Bell, y entrante, Marta Lucía Ramírez; el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias; los comandantes de Fuerzas, y el director de la Policía

Nacional, que estaban de hecho convocados para el almuerzo en la Casa de Nariño, se reunieron conmigo en las dependencias privadas, pasada la 1 de la tarde, para realizar un Consejo de Seguridad extraordinario, donde analizamos las implicaciones de estos primeros atentados que, ciertamente, los tenían desconcertados.

Se había previsto la posibilidad de que los terroristas dispararan desde la posición privilegiada de los cerros orientales, a menos de un kilómetro de las sedes presidencial y legislativa, pero lanzamientos de granadas de mortero a casi tres kilómetros de distancia y desde la zona baja era una modalidad que nadie imaginaba y que se salía de cualquier esquema de protección.

El comandante de la XIII Brigada del Ejército, a cargo de la protección de la capital, general Reynaldo Castellanos³⁸, declaró que estaba convencido de que detrás de los ataques estaba la asesoría del Ejército Republicano Irlandés, IRA. Días después se hablaría también de una participación de la organización separatista vasca, ETA, en el entrenamiento de los terroristas colombianos.

Esa tarde, la advertencia de los generales fue más que alarmante: los ataques a la Escuela Militar habían sido sólo el comienzo. Según me dijeron los comandantes, los últimos informes de inteligencia, con apoyo de la plataforma tecnológica del avión de los Estados Unidos, dejaban prever un gran ataque hacia las 3 de la tarde. Se habían detectado conversaciones internas entre las FARC que así lo confirmaban. Una de ellas, captada desde Villavicencio, en la región de los Llanos Orientales, no dejaba lugar a dudas. En ella el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, ordenaba a los integrantes del bloque oriental de esta organización: *"Buena puntería contra Álvaro Uribe, generales y empresarios"*.

En suma: no se sabía desde dónde sería lanzado el ataque, aunque sí resultaba claro contra quiénes iba dirigido: el presidente saliente, el presidente entrante y cerca de 600 invitados especiales, dirigentes colombianos y extranjeros, que habían asistido a esta cita con la democracia.

Frente a los nuevos hechos, en el improvisado Consejo de Seguridad se decidió mantener e incrementar aún más la vigilancia y los dispositivos de seguridad en la zona del Palacio de Nariño y del Capitolio Nacional, ubicado a unos 200 metros del mismo, donde tendría lugar a las 3 de la tarde la ceremonia de posesión de Álvaro Uribe Vélez.

Lo encontraba difícil de creer. La guerrilla, con sus métodos violentos y terroristas, no me dejaba en paz ni en los últimos minutos de mi mandato. Les ofrecí, cumpliendo con la instrucción expresa de millones de colombianos, la más grande opción de diálogo de toda su historia, y la

³⁸ El general Castellanos fue designado por el presidente Uribe como comandante del Ejército Nacional en noviembre de 2004.

única respuesta que obteníamos de ella seguían siendo granadas, muerte y destrucción.

Marta Lucía Ramírez, quien asistió, por invitación mía, a su primer Consejo de Seguridad, aún sin haberse posesionado como ministra de Defensa del gobierno Uribe —la primera mujer en ocupar este cargo—, estaba muy nerviosa y preocupada por la información proporcionada por los generales. Terminado el Consejo, salió a reunirse con el nuevo mandatario en el almuerzo que le tenían preparado en las dependencias de la Cancillería, a quien le informó en detalle sobre las novedades de orden público y los graves riesgos que se avecinaban.

En un momento de la tarde se llegó a mencionar la posibilidad de cancelar el acto de posesión, a lo que me opuse rotundamente. A pesar de las amenazas y de los atentados de la mañana, ordené que no se suspendiera ningún acto. Era, literalmente, una prueba de fuego para la democracia colombiana, y estaba dispuesto a asumirla.

Entre tanto, los invitados al almuerzo, reunidos en un salón de protocolo, me esperaban impacientes e intrigados, sin saber lo que estaba sucediendo. Finalmente, hacia las 2 de la tarde, con más de una hora de retraso, ingresé junto con Nohra y mi hijo Santiago. Entraron también conmigo los oficiales de la cúpula con los que acababa de reunirme, incluido el general Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército, a quien muchos felicitaron por el nacimiento de su nieto el día anterior.

En un acto sencillo y emotivo condecoré con la Orden de Boyacá a los ministros; al jefe del Departamento Nacional de Planeación, Juan Carlos Echeverry, y al alto consejero para Asuntos de Gobierno, Ramiro Valencia. Pronuncié unas cortas palabras improvisadas que fueron cálidamente recibidas por los asistentes, y finalmente pasamos todos al Salón Bolívar donde estaban dispuestas las mesas para el almuerzo.

Otra sorpresa —esta vez agradable— me tenía preparada la ministra de Cultura, Araceli Morales. Apenas sentados a manteles, pasó al frente y, ante el regocijo de sus colegas, de los invitados y mío propio, leyó un decreto de "despedida y honores" en el que todo el gabinete me hacía, en clave de humor, un último homenaje.

Según el "decreto", que fue leído mientras los comensales disfrutaban de la entrada, cada uno de los 16 ministros me entregaba un regalo simbólico que representaba en forma jocosa algunas de las situaciones más características de su cartera. Sin embargo, no acababa de comenzar la lectura de los primeros regalos ministeriales cuando los generales me llamaron para un último informe de seguridad, el cual me rindieron en un extremo del salón. Fue un corto intercambio de información e instrucciones, después del cual pude regresar a mi puesto y escuchar la última parte del texto.

En medio de risas y aplausos, la ministra me entregó el decreto transcrito en un pergamino, y el almuerzo siguió su curso normal, terminando poco

antes de las 3 de la tarde. Minutos antes de finalizar, se levantaron los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el director de la Policía, que salieron para estar al frente de los operativos de seguridad y para asistir al acto de posesión que se cumpliría en pocos minutos en el recinto del Congreso Nacional.

A las 3 en punto de la tarde, los asistentes al almuerzo fueron invitados a tomar un café en un pasillo adjunto al Salón Bolívar. Por mi parte, consciente de que me quedaba apenas una hora para terminar mis tareas, me fui solo a mi despacho, donde me esperaban mis dos secretarías, Adela y Cecilia, con una buena cantidad de cartas listas para la firma. Nohra, mis tres hijos, los ministros, asesores y otros invitados especiales quedaron departiendo de pie, tranquilamente, mientras los meseros repartían el aromático tinto.

Fue entonces cuando —como ya lo narré en el primer capítulo— en la soledad de mi casi desocupado despacho, escuché y sentí el estremecimiento de una explosión cercana, que fue seguida pocos segundos después por otra, casi sobre nuestras cabezas.

A la misma hora en que cayeron las granadas, a pocos metros de distancia, ajeno a toda esta situación, el nuevo presidente caminaba por los pasillos del Capitolio Nacional, saludando a los congresistas, rumbo al estrado desde donde juraría como primer mandatario de Colombia. Mientras hacía el lento recorrido con su esposa se escucharon las explosiones en el cercano Palacio, pero no perturbaron el acto ni el paso de Uribe. Los que las oyeron pensaron que se trataba de cañonazos de salva con ocasión del evento. Sólo unos pocos entendieron que no eran salvas, sino el sonido de explosiones reales.

Nadie supo entonces en el Congreso —salvo los comandantes militares y de policía que fueron inmediatamente informados— que cerca de 100 granadas de mortero con capacidad para cruzar dos o tres kilómetros por aire habían estado apuntando hacia allá, ni mucho menos que alguna hubiera impactado el Palacio de Nariño o que otras hubieran causado más de una veintena de víctimas fatales y cerca de 70 heridos³⁹.

Hay que resaltar que en el Capitolio, aparte de Uribe, su vicepresidente, sus familias y los congresistas, estaban también los presidentes del Ecuador, Panamá y Honduras, y el príncipe de Asturias —que habían asistido a la cena de la noche anterior—, además del presidente de Venezuela, Hugo Chávez; el de Argentina, Eduardo Duhalde, y altos funcionarios de otros

³⁹ En marzo de 2005, el juez Sexto Especializado de Bogotá sentenció a seis personas, acusadas de pertenecer a las FARC y de participar en estos hechos, a condenas de 40 y 26 años de prisión. En su sentencia, el juez señaló que, de acuerdo con las pruebas, las explosiones "se suscitaron al detonarse el complejo sistema elaborado minuciosamente por manos criminales que no tenían otro propósito que el de causar la muerte no sólo del presidente de la República sino de grandes personalidades nacionales e internacionales que estaban presentes en dicha ceremonia, sin detenerse a prever que con ello causarían también daños físicos y materiales a la ciudadanía y en los inmuebles aledaños a sus objetivos".

Estados. Es difícil imaginar las consecuencias que hubiera tenido una tragedia que involucrara a todos estos personajes.

Paradójicamente, mientras la cadena internacional de noticias CNN transmitía en directo las imágenes de destrozos y muerte ocasionados por los morteros en la zona del Cartucho y del palacio presidencial, los colombianos que veían la posesión desde sus casas por los canales nacionales no se enteraron del hecho sino hasta más de una hora después de sucedido, cuando Uribe ya había jurado y había pronunciado su discurso de posesión.

Finalmente, calmados los ánimos y enterados de que se había frustrado el grueso del atentado, los ministros comenzaron a subir desde el teatro —a donde habían sido conducidos para su protección, junto con Nohra, mis hijos y los demás invitados— hasta las oficinas en el piso de mi despacho. Nohra había decidido suspender una reunión de despedida que los amigos nos tenían preparada para la noche en un restaurante de la Zona Rosa, pero, a petición de los mismos organizadores, terminó accediendo a que se siguiera el itinerario previsto sin mayores traumatismos.

Los ministros y yo, repartidos en distintas oficinas, vimos por televisión el discurso de posesión de Álvaro Uribe, en el que utilizó términos más conciliatorios que amenazantes frente a los grupos armados ilegales. Una vez concluyó, apretando el corazón para esquivar los ramalazos de la nostalgia, comenzamos el proceso final de despedida. Nohra se despidió de los operadores telefónicos, del personal que atendía la casa privada y los salones de Estado, en tanto yo recogí las últimas cosas del despacho, salí al pequeño salón donde estaban mis dos secretarías y me senté en el escritorio de una de ellas, frente a un pequeño televisor de 14 pulgadas.

Las imágenes mostraban a Uribe —todavía sin enterarse de los atentados— posesionando a su ministro del Interior y a su secretario general y presentando, como primer acto de gobierno, el proyecto de referendo para realizar la reforma política que en tres oportunidades los políticos hicieron fracasar durante mi gobierno. No lo sabía entonces, por supuesto, pero tampoco él, a pesar de su empeño, lograría sacar adelante esta iniciativa.

Valentina estaba un poco llorosa y Nohra la llevó conmigo, que la senté sobre mis piernas. Junto al pequeño escritorio de la secretaria donde veía la televisión estaban el canciller, Guillermo Fernández de Soto; el ministro de Educación, Francisco Lloreda; el ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr; el embajador ante los Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, y el secretario general, Gabriel Mesa. En un ambiente casi familiar, con algunas bromas aisladas para paliar la nostalgia, presenciábamos los primeros actos del nuevo mandatario.

Cuatro años antes, era yo el que llegaba entre honores y aplausos a reemplazar a Ernesto Samper, después de su polémica presidencia; ahora me correspondía a mí salir sin estridencias, en medio de unos cuantos colabo-

radores, a ocupar mi lugar de ciudadano y a esperar aquel que la historia le tenga destinado a mi mandato.

Cuando llegó la hora, poco antes de las 5 de la tarde, me levanté del improvisado escritorio, tomé a Valentina y a Nohra de la mano, y dije:

—Ahora sí, ¡vámonos!

No volví a mirar el despacho donde tuve que tomar las más difíciles decisiones en la historia reciente de Colombia. Di unos últimos abrazos a quienes se quedaban y bajé a la entrada principal, donde esperé, junto con los ahora ex ministros, al nuevo presidente que cruzaba a pie, con su esposa y sus dos hijos, a través de la Plaza de Armas, desde el Capitolio hasta su nuevo hogar.

A Uribe ya le habían comentado de la situación, y se llegó a considerar la posibilidad de cambiar el orden del día, suspender los honores militares al aire libre y cruzar en la misma camioneta blindada en que había llegado al Congreso los escasos metros que lo separaban del palacio presidencial. El general Tapias también le había informado sobre los primeros quince muertos contabilizados en El Cartucho. Sin embargo, el recién estrenado presidente tampoco quiso cambiar la agenda y decidió hacer el trayecto tal y como estaba previsto.

Cumplidos los honores militares, en un ambiente de nerviosismo ante la exposición temporal a cualquier nuevo artefacto explosivo, Uribe y yo nos encontramos en la puerta misma de la Casa de Nariño e intercambiamos un cordial saludo, en el que era inevitable sentir la tensión del difícil momento que se acaba de pasar.

Le comenté personalmente sobre los graves hechos y la información que poseía. Sus dos jóvenes hijos, Tomás y Jerónimo, hablaban con Santiago y Laura, de edades similares, en tanto Lina de Uribe se fundía en un cálido abrazo con Nohra y acariciaba la cabeza de Valentina. Parecía una agradable reunión de amigos o vecinos, sólo que presenciada por todo un país que sentía ese día, más que nunca, la realidad de una transición democrática en tiempos de conflicto.

Finalmente nos despedimos. El presidente Uribe quedó realizando su primer Consejo de Seguridad con los altos mandos militares en las propias escaleras del Palacio, en tanto Nohra, nuestros tres hijos y yo caminamos, por la misma Plaza de Armas en la que habíamos asistido a tantas ceremonias, hacia el portón de salida. Llegados a él, nos volvimos hacia la Casa de Nariño, levantamos las manos y dimos un último adiós a cuatro años que jamás olvidaríamos.

Adenda del corazón

No puedo terminar esta miscelánea de recuerdos, digresiones y anécdotas, sin hacer un efusivo reconocimiento, desde el fondo de mi corazón, a las personas que constituyeron mi mayor apoyo, mi bastión en los momentos de debilidad, mi certeza en los tiempos de incertidumbre y mi remanso en las duras batallas de la vida pública. Me refiero a mi esposa, Nohra, y a mis hijos, Santiago, Laura y Valentina.

A ellos acudía en los momentos más difíciles y siempre me brindaron el respaldo, el cariño y la comprensión que me permitían llegar, con entereza y buen ánimo, al otro lado de la orilla.

Nohra, la mujer en quien deposité para siempre mi confianza, mi amor y mi destino, fue, sin duda, una primera dama "de primera". Estuvo a mi lado en todo momento; representó al país con dignidad en diversos escenarios internacionales, y, sobre todo, se comprometió con absoluta dedicación al apoyo y sostenimiento de diversos programas de carácter social que no hubieran prosperado sin su constante estímulo.

Santiago y Laura, que estaban cursando el bachillerato, y Valentina, la pequeña, apenas en edad de jardín infantil, fueron siempre mi alegría y mayor estímulo, pues en ellos veía reflejados a los hijos de todos los colombianos, por quienes valía la pena realizar todos los esfuerzos por alcanzar la paz.

La familia es el centro de la vida y la razón de ser de casi todas nuestras luchas y emprendimientos. Hoy agradezco a Dios por el don que tuve al tener conmigo a cuatro personas excepcionales que nunca permitieron que se extinguiera en mí la llama de la esperanza y el deseo irrefrenable de trabajar por Colombia.

Apéndice 1

Acuerdo de Caquetania

(28 de abril de 1999)

Caquetania, Abril 28 de 1999

Los directores de las distintas
fuerzas políticas del país, las
directivas del Congreso de
la República, las FARE-EP y
el Alto Comisionado para la
paz,

Acuerdan:

1. Respaldo y comprometerse
en una política de Estado
para la paz, fundamentada
en la justicia social y basada
en la solución política del
conflicto.
2. Respaldo la política de Estado
en su lucha frontal contra el
Paramilitarismo.
3. Nos comprometemos a bu-
scar mecanismos que permi-
tan respuestas inmediatas

Firmado por los jefes de las fuerzas políticas y Manuel Marulanda.
Tomado del original, que se redactó a mano.

7 Concretas a las necesidades⁽²⁾ que sufre el pueblo colombiano, principalmente el empleo y oportunidad para acceder a la educación y la salud, entre otros.

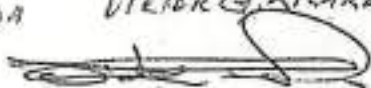
Además una atención especial al sector rural colombiano.

4. Trabajaremos para crear una pedagogía que tenga como finalidad el cumplir con todos los colombianos en el objetivo supremo de la paz.

FARE - EP COMISIÓN para la PAZ

MANUEL MARULANDA Víctor G. Ricardo

MARV



Partido Liberal
HORACIO SERRA

Horacio Serra

Partido Conservador⁶³
OMAR YEPES

Omar Yepes

SI Colombiano
NOENI PANIN
Noeni Panin

Partido Comunista
JAIME CAICEDO

Jaime Caicedo

PRESIDENTE SENADO
FABIO VALENZUELA

Fabio Valenzuela

Presidente CAMARA
EMILIO MARTINEZ
Liberalismo Renovado

Emilio Martinez

VOECROS FARE-EP

Raul Reyes Gailheys

Josquin Gomez: *Gomez*

Fabian Ramirez *Fabian Ramirez*

Apéndice 3

Acuerdo de La Habana (Diciembre de 2000)

ACTA DE LA HABANA

El Gobierno Nacional y el ELN han concluido las reuniones que se estaban desarrollando en la ciudad de la Habana en las que ratificaron la voluntad de adelantar con prontitud el desarrollo del proceso de paz.

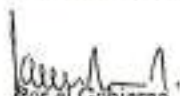
En estas reuniones se han alcanzado las bases de un acuerdo respecto del establecimiento de una zona de encuentro para efectos de adelantar el proceso de la Convención Nacional y la mesa de diálogos y negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN.

Del acuerdo hacen parte un preciso reglamento sobre el funcionamiento de la zona así como un reglamento sobre la verificación tanto Nacional como Internacional que se debe llevar a efecto durante la vigencia de la zona de encuentro.

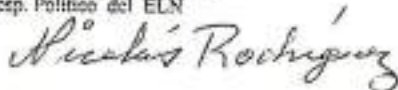
El Gobierno Nacional culminará el proceso de diálogos con la comunidad para efectos de definir la fecha de la formalización de la zona de encuentro. Así mismo quedan pendientes por definir los diferentes aspectos para su implementación.

El Gobierno Nacional y el ELN manifiestan su voluntad decidida de procurar un ambiente favorable para hacer posible la formalización del acuerdo atendiendo los intereses y preocupaciones de las gentes de la zona y de las regiones aledañas, así como de avanzar decididamente en el propósito fundamental del logro de la paz y la reconciliación a las que aspiran todos los Colombianos.

Las partes desean expresar sus agradecimientos al gobierno Cubano por la colaboración y facilidades prestadas en esta fase de la negociación.


Por el Gobierno
Camilo Gómez Alzate
Alto Comisionado de Paz

Por el ELN
Nicolás Rodríguez Bautista
Rep. Político del ELN



Apéndice 4

Acuerdo de Los Pozos (9 de febrero de 2001)

1

ACUERDO DE LOS POZOS

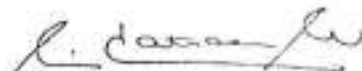
1. El Gobierno Nacional y las FARC-EP ratifican su voluntad de continuar el proceso de paz que busca la solución del conflicto por la vía del diálogo y de la negociación, en procura de construir una Colombia en desarrollo y con plena justicia social.
2. Tras una evaluación conjunta del proceso identificamos logros y debilidades, y coincidimos plenamente en que este ha generado bases sólidas sobre las cuales se debe continuar buscando la reconciliación nacional.
3. El Gobierno Nacional y las FARC-EP coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Para tal efecto, la Mesa de Diálogos y Negociación creará una comisión de personalidades nacionales que le formule recomendaciones en estas dos direcciones.
4. Las FARC-EP descongelan el funcionamiento de la Mesa de Diálogos.
5. Acordamos que la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación reinicie sus labores el 14 de febrero, retomando los temas sustantivos de la Agenda y entre a discutir el cese de fuegos y de las hostilidades.
6. Se agilizará la concreción del acuerdo humanitario que permita la próxima liberación de soldados, policías y guerrilleros enfermos.
7. Con el fin de que las negociaciones no se vean interrumpidas, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación creará de su seno una comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso. Esta Comisión se conformará a más tardar el 15 de Febrero.
8. La zona de distensión ha sido establecida exclusivamente para el desarrollo del proceso, con plenas garantías y seguridad para las partes. La Mesa Nacional de Diálogos y Negociación a más tardar el 15 de febrero, creará un mecanismo de su seno que periódicamente evalúe e informe a la opinión sobre el cumplimiento del propósito de la zona.
9. Entendiendo la importancia de la comunidad internacional para que el proceso de paz en Colombia tenga éxito, invitamos para el próximo 8 de Marzo a un grupo de países amigos y organismos internacionales para informarlos sobre el estado y la evolución del proceso e incentivar su colaboración. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación determinará la regularidad de estas reuniones.

Firmado por el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda. Con este acuerdo se cambió la dinámica del proceso.

10. Las FARC-EP no se oponen a los proyectos de erradicación manual y sustitución de cultivos ilícitos, pero reiteran que un proceso tal debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. Gobierno Nacional y FARC coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y recuperación del medio ambiente.
11. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a las fuerzas políticas firmantes del acuerdo de Caquetania el día 28 de Febrero a reunimos en Los Pozos para dinamizar el proceso. Reiteramos nuestra invitación a todas aquellas personalidades y organizaciones nacionales escépticas del mismo, a intercambiar sobre los aportes de todos los colombianos a la reconciliación nacional.
12. La Mesa de Diálogo y Negociación podrá ser ampliada de común acuerdo y sesionará por lo menos 3 veces a la semana.
13. Convocamos a todos los colombianos a rodear este esfuerzo común que pueda llevamos a la superación del conflicto que nos afecta.

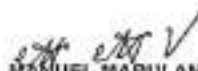
Firmado en Los Pozos, inspección de San Vicente del Caguán

Febrero 9 del año 2001



ANDRÉS PASTRANA ARANGO

Presidente de la República



MANUEL MARULANDA VÉLEZ

Comandante de las FARC-EP

Apéndice 5

Acuerdo para la liberación de los soldados y policías que estaban en poder de las FARC (2 de junio de 2001)

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP

Las partes del presente Acuerdo, representadas así: por el Gobierno Nacional, Camilo Gómez Alsate; y por las FARC-EP, Jorge Briceño y Joaquín Gómez, como miembro representante de las FARC EP,

CONSIDERANDO

Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado colombiano concibe la paz como "un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento";

Que de conformidad con la ley 434 de 1998, "la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil de tal manera que trascienda los periodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional";

Que el Estado colombiano cuenta con instrumentos legales para la búsqueda de la convivencia, tendientes a promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz;

Que en virtud de tales instrumentos, el Gobierno de Colombia puede realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con la Organización Armada FARC-EP al margen de la ley, a la cual el Gobierno Nacional le reconoció carácter político;

Que el artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a "obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo";

Que la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999 dispone: "El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a

Con este convenio recuperaron su libertad cerca de 350 colombianos. Éste es el primer acuerdo firmado por el Mono Jojoy.

todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social";

Que el Gobierno de Colombia ha decidido adelantar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con sus representantes de acuerdo a los logros que obtenga la Mesa de Negociación para ir creando las condiciones para la reincorporación a la vida civil de los miembros de esta organización que propende por un orden político, social y económico justo;

Que las FARC-EP han manifestado en reiteradas oportunidades que la suscripción del presente Acuerdo sirve para avanzar sustancialmente en el proceso de paz;

Que dentro del proceso en curso entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el Gobierno Nacional y las FARC-EP han expresado su interés en buscar, en esta etapa, una solución a la situación de los soldados y policías en poder de las FARC EP;

Que los enfermos y heridos son personas protegidas por el derecho internacional humanitario;

Conviene en celebrar el presente ACUERDO, que se registrá por las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES

El presente ACUERDO se suscribe por razones de carácter humanitario y por lo tanto, su alcance está circunscrito al contenido específico del mismo;

Ninguna de las disposiciones del presente ACUERDO menoscaba las obligaciones mínimas contenidas en el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo II adicional a ellos;

Las disposiciones contenidas en el presente ACUERDO no tienen ningún efecto sobre el estatuto jurídico de quienes lo suscriben a la luz de lo dispuesto por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra;

DISPOSICIONES INSTRUMENTALES

El Gobierno de Colombia ha verificado el lugar de reclusión y la situación jurídica actual de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que se encuentran enfermos, según la lista presentada por las FARC-EP;

Las FARC-EP han entregado al Gobierno Nacional la lista de los soldados y policías enfermos que se encuentran en poder de esa organización y se compromete a ubicarlos en lugares que permitan la fácil e inmediata verificación, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, lugares que determinarán el Gobierno Nacional y las FARC-EP;

Para llevar a cabo las medidas a que se refiere este ACUERDO, se requiere la autorización expresa de cada una de las personas privadas de la libertad que puedan resultar sujeto de ellas;

El Gobierno de Colombia ha realizado el examen médico correspondiente por parte de un grupo de médicos destacados por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por la entidad que el Gobierno ha determinado, a los miembros de las FARC a los que se refiere el presente ACUERDO;

Concluido el trámite anterior el Gobierno Nacional ha entregado la lista de 15 personas pertenecientes a esa organización que, a su juicio, son sujeto del presente ACUERDO y se compromete a adelantar los trámites correspondientes para que, respecto de estas personas, se ordene la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena;

Las FARC-EP ratifican que la lista de 42 soldados y policías enfermos entregada al Gobierno Nacional, corresponde a las personas que serán liberadas con base en el presente Acuerdo; este número de personas podrá ser ampliado.

Una vez firmado el presente Acuerdo, en razón a su estado de salud, las FARC-EP se comprometen a entregar en forma inmediata al Coronel ALVARO LEON ACOSTA,

En relación con los soldados y policías enfermos en poder de las FARC-EP, una vez verificado su estado de salud el Comité Internacional de la Cruz Roja, procederá a recibirlos en el lugar acordado por las partes, el mismo día en que sean entregados los miembros de las FARC-EP.

En relación con los miembros de las FARC-EP enfermos y respecto de quienes el Gobierno Nacional ha definido la procedencia de este ACUERDO, éstos serán entregados al CICR, en el lugar de reclusión en el que se encuentren, una vez se disponga la suspensión de la medida de

aseguramiento o de la pena. El CICR los entregará en el lugar y fecha acordado por las partes para tal efecto.

Asimismo, las FARC-EP se comprometen a liberar unilateralmente a los soldados y policías que, no estando enfermos se encuentren en su poder, en un número no inferior de 100 a los quince (15) días de la entrega de los enfermos;

Dada su condición de enfermos, los miembros de las FARC-EP sujetos del presente ACUERDO no participarán en el futuro en actos de hostilidad;

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Defensoría del Pueblo, serán invitadas a hacer presencia el día de la entrega de los enfermos;

Asimismo, para efectos del desarrollo y ejecución de este ACUERDO, habrá presencia internacional, para lo cual se designa al grupo de los 10 países amigos del proceso de paz y el Reino Unido;

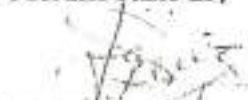
Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 días del mes de junio de 2001.

POR EL GOBIERNO NACIONAL,



CAMILO GÓMEZ ALZATE

POR LAS FARC-EP,



JORGE BRICEÑO



JOAQUÍN GÓMEZ

4 *ph*

Apéndice 6

Acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas para consolidar la política de paz como una política de Estado

ACUERDO NACIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UN "FRENTE COMÚN POR LA PAZ Y CONTRA LA VIOLENCIA"

Miércoles 22 de noviembre de 2000

Convocados por el Presidente de la República, en su condición constitucional de símbolo de la unidad nacional, los firmantes de este Acuerdo, luego de analizar con profundidad la situación de violencia que vive el país y la coyuntura actual del proceso de paz, hemos decidido conformar un "Frente Común por la Paz y contra la Violencia". Durante nuestros diálogos, hemos encontrado temas y visiones que nos identifican. Sobre ellos recaerá nuestro esfuerzo de trabajo conjunto, teniendo siempre como marco los más altos intereses de Colombia.

Para que este frente común le entregue su aporte eficaz a la paz en la parte operativa se mantendrá su actividad con reuniones periódicas, en las cuales se analizará el proceso. Nuestro compromiso no es solo con la paz en general, sino con lo que ella demande en concreto.

En ese orden de ideas, nos hemos puesto de acuerdo en lo siguiente:

- 1) Ratificamos nuestro compromiso con la solución política negociada del conflicto armado. El diálogo es el medio idóneo para tramitar las diferencias y resolver pacíficamente los conflictos sociales, mientras que la violencia y el conflicto armado constituyen el mayor obstáculo para el progreso nacional. Estamos dispuestos a trabajar y a participar en su logro, a fin de que la política de paz sea no sólo una política de Gobierno, sino una auténtica política de Estado, autónoma y nacional, donde estén representadas todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.
- 2) Condenamos el uso de la violencia como herramienta de la lucha política, que se ha vuelto obsoleta en el mundo. En cambio, reclamamos una cultura de paz basada en la seguridad democrática y ciudadana, que practica los principios de la tolerancia y los métodos pacíficos para la resolución de conflictos que inevitablemente ocurren dentro de la sociedad.

- 3) Coincidimos en que esta convocatoria debe ir más allá de las fuerzas políticas y por ello respaldamos una activa comunicación del Gobierno con el Consejo Nacional de Paz que, por decisión de la ley, está integrado por una amplia representación de la sociedad civil y que se reúna también con las distintas ramas del poder público, para consolidar una posición común de toda la nación colombiana.
- 4) Consideramos urgente un acuerdo de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que excluya a la sociedad civil de la confrontación armada. En este sentido condenamos los secuestros, las masacres, la desaparición forzada, la extorsión, los homicidios fuera de combate, los paros armados, el uso de armas proscritas universalmente y la destrucción de la riqueza pública y privada. La paz exige la defensa y la promoción de la libertad como derecho supremo de la dignidad humana. Condenamos toda acción que por fuera de la ley pretenda restringirla y es un deber de los ciudadanos exigir su respeto de manera solidaria.
- 5) Pensamos que ha llegado el momento de concretar la negociación con las FARC, para evitar "el diálogo perenne sin precisiones ni resultados", y para que la sociedad colombiana entienda que el proceso avanza, recuperándole confianza. En caso de ser necesaria la prórroga de la zona de distensión, debe asegurarse que cumpla los fines precisos para los que fue reglamentada por la ley, es decir, para que sin riesgo de las partes se pueda negociar en calma y tranquilidad. Por ello instamos a las FARC a reanudar de manera inmediata las negociaciones sobre las cuestiones sustantivas relacionadas con los mecanismos que aseguren la continuidad, seriedad y éxito del proceso y para llegar a acuerdos concretos sobre empleo y política económica; iniciar el diálogo sobre acuerdos políticos, y discutir igualmente las propuestas de cese al fuego y las hostilidades, la lucha contra el narcotráfico, la sustitución de cultivos, la liberación de los soldados y policías y la de todos los secuestrados.
- 6) Respaldamos el pronto inicio de conversaciones con el ELN y hacemos un llamado vehemente para superar las dificultades sobre el establecimiento de la zona de encuentro para su realización, con reglas claras y mecanismos de verificación.

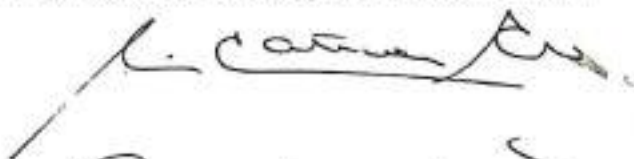
Celebramos la activa participación del Grupo de Países Amigos, modelo de lo que significa el apoyo internacional al proceso de paz, así como el compromiso inicial de contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos.

- 7) Ratificamos nuestra convicción en la lucha contra las autodefensas y rechazamos enfáticamente las acciones de estos grupos que contribuyen a degradar el conflicto armado. Ratificamos también los compromisos asumidos en los acuerdos firmados con las Farc en Caquetania y los Pozos e instamos al gobierno a fortalecer la lucha decidida que en contra de esta manifestación de violencia adelantan todas las instituciones del estado.
- 8) Creemos en la necesidad de fortalecer cada vez más las fuerzas armadas al servicio de la democracia, respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que ejerzan la autoridad de acuerdo con el mandato constitucional de defender la soberanía, la seguridad de los ciudadanos. Entendemos que ello es necesario para recuperar el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado. Creemos firmemente que tal monopolio será sólido y duradero solo mediante el logro de la paz.
- 9) Mantenemos la inalterable tradición colombiana de una política internacional de consenso, soberana, democrática, que esté de acuerdo sobre sus intereses fundamentales y en pie para defenderse de cualquier pretensión que vaya en contravía de la unidad nacional. Por esa razón, decimos a la comunidad de naciones que los problemas propios de la realidad nacional, deben ser resueltos por colombianos. Y al mismo tiempo solicitamos al unísono la solidaridad, el respeto y la cooperación que piden las circunstancias actuales.
- 10) Estamos comprometidos en la estrategia contra el problema mundial de las drogas. La incidencia del narcotráfico sobre la sociedad colombiana, lo convierte en uno de los principales estímulos de la violencia y de la corrupción. Dicha política debe librarse universalmente contra toda la cadena productiva lo cual exige de la comunidad internacional un compromiso equivalente contra los precursores químicos, el lavado de activos y el consumo. También debe llevarse a cabo la erradicación de los cultivos empresariales de manera forzosa, sin compensación y sin

afectar el ambiente, y sustituir los pequeños cultivos de manera concertada en el marco de la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo. Invitamos a la insurgencia a trabajar conjuntamente en los anteriores propósitos. Así mismo estamos convencidos de que la paz es el mecanismo más eficiente para lograr resultados en estas materias.

Sobre este punto Antonio Navarro expresó su opinión en el sentido de que debe suprimirse en forma definitiva la fumigación de los cultivos ilícitos.

- 11) El futuro sin miseria y sin violencia debe construirse entre todos, manteniendo firmemente los acuerdos, la unidad nacional, la democracia y el espíritu participativo de la Constitución Nacional.



DARÍO URIBE ESCOBAR
Presidente del Congreso



HORACIO BERFA URIBE



CIRO RAMÍREZ PINZÓN

LUIS FERNANDO ALARCÓN N.

ANTONIO NAVARRO WOLF

SAMUEL MORENO ROJAS

LUIS GUILLERMO GIRALDO H.

España

Av. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona (España)
Tel. (34) 93 492 80 36
Fax (34) 93 496 70 58
Mail: info@planetaint.com
www.planeta.es

Argentina

Av. Independencia, 1668
C1100 ABQ Buenos Aires
(Argentina)
Tel. (5411) 4382 40 43/45
Fax (5411) 4383 37 93
Mail: info@eplaneta.com.ar
www.editorialplaneta.com.ar

Brasil

Rua Ministro Rocha Azevedo, 346 -
8º andar
Bairro Cerqueira César
01410-000 São Paulo, SP (Brasil)
Tel. (5511) 3088 25 88
Fax (5511) 3898 20 39
Mail: info@editoraplaneta.com.br

Chile

Av. 11 de Septiembre, 2353, piso 16
Torre San Ramón, Providencia
Santiago (Chile)
Tel. Gerencia (562) 431 05 20
Fax (562) 431 05 14
Mail: info@planeta.cl
www.editorialplaneta.cl

Colombia

Calle 73, 7-60, pisos 7 al 11
Santafé de Bogotá, D.C.
(Colombia)
Tel. (571) 607 99 97
Fax (571) 607 99 76
Mail: info@planeta.com.co
www.editorialplaneta.com.co

Ecuador

Eduardo Whymper, N27-166
y Francisco de Orellana
Quito (Ecuador)
Tel. (5932) 290 89 99
Fax (5932) 250 72 34
Mail: planeta@access.net.ec
www.editorialplaneta.com.ec

Estados Unidos y Centroamérica

2057 NW 87th Avenue
33172 Miami, Florida (USA)
Tel. (1305) 470 0016
Fax (1305) 470 62 67
Mail: infosales@planetapublishing.com
www.planeta.es

México

Av. Insurgentes Sur, 1896, piso 11
Torre Siglum, Colonia Florida, CP-01030
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F. (México)
Tel. (52) 55 53 22 36 10
Fax (52) 55 53 22 36 36
Mail: info@planeta.com.mx
www.editorialplaneta.com.mx
www.planeta.com.mx

Perú

Grupo Editor
Jirón Talara, 223
Jesús María, Lima (Perú)
Tel. (511) 424 56 57
Fax (511) 424 51 49
www.editorialplaneta.com.co

Portugal

Publicações Dom Quixote
Rua Ivone Silva, 6, 2.º
1050-124 Lisboa (Portugal)
Tel. (351) 21 120 90 00
Fax (351) 21 120 90 39
Mail: editorial@dquixote.pt
www.dquixote.pt

Uruguay

Cuareim, 1847
11100 Montevideo (Uruguay)
Tel. (5982) 901 40 26
Fax (5982) 902 25 50
Mail: info@planeta.com.uy
www.editorialplaneta.com.uy

Venezuela

Calle Madrid, entre New York y Trinidad
Quinta Toscana
Las Mercedes, Caracas (Venezuela)
Tel. (58212) 991 33 38
Fax (58212) 991 37 92
Mail: info@planeta.com.ve
www.editorialplaneta.com.ve

Desde la óptica del gestor, protagonista y testigo de uno de los procesos políticos más dramáticos y controvertidos de la historia reciente de Colombia, el ex presidente Andrés Pastrana Arango entrega en este libro una apasionante crónica del cuatrienio 1998-2002.

El testimonio de las negociaciones con los grupos armados, la recuperación de la imagen internacional del país, la reestructuración y modernización de las Fuerzas Militares y el desarrollo del Plan Colombia se entretienen –por primera vez– con anécdotas y situaciones hasta ahora desconocidas por la opinión pública, que sin duda aportarán nuevas luces sobre esos años críticos de nuestra historia desde un ángulo singular, personal e íntimo.

Cómo se iniciaron los contactos con la guerrilla, qué condujo a la zona de distensión, qué papel desempeñaron Bill Clinton y Fidel Castro, por qué “la silla vacía”, de qué habló Pastrana con los líderes insurgentes, qué hacían los dirigentes de Wall Street con Marulanda, cómo cambió la estrategia militar, la verdad tras los contactos con el ELN y las autodefensas, por qué renunció el ministro Rodrigo Lloreda. La historia grande y la crónica menuda sobre la ruptura del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.